

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

Departamento de Derecho Internacional Público y Privado



TESIS DOCTORAL

**La codificación del Derecho internacional privado en
América Latina. (Ámbitos de producción jurídica y
orientaciones metodológicas)**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Diego P. Fernández Arroyo

Madrid, 2015



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5312297645

TE
1112

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO
Y DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO**

**LA CODIFICACION DEL
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
EN AMERICA LATINA
(AMBITOS DE PRODUCCION JURIDICA
Y ORIENTACIONES METODOLOGICAS)**

Tesis doctoral
presentada por

Diego P. FERNANDEZ ARROYO

dirigida por

Prof. Dr. José Carlos FERNANDEZ ROZAS

(Catedrático de Derecho internacional
privado. Universidad Complutense de Madrid)

MADRID, 1993

*A Petosa y Omar, por su amistad
y su entrega*

*A Jorge R. Albornoz, docente
ejemplar, amigo generoso*

*"Imaginarse que el Derecho debe
ser igual en todas partes es un modo
de concebir tan falso como el
someter todas las enfermedades al
mismo tratamiento"*

R. von Ihering

SUMARIO

Abreviaturas más utilizadas	12
-----------------------------------	----

Introducción

I. Encuadre metodológico

1. LAS LINEAS DE ACCION BASICAS	16
2. PRECISIONES TERMINOLOGICAS	24

II. El D.I.Pr. americano frente a los mecanismos de actuación del método comparativo

1. LA MODIFICACION DEL PARADIGMA COMPARATIVO ...	37
2. ALCANCE EN LA LLAMADA FAMILIA JURIDICA IBEROAMERICANA	42
3. LA SITUACION PARTICULAR DEL D.I.Pr.	48

III. Codificación internacional y codificación interna del D.I.Pr. en América

1. LAS PARTICULARIDADES DEL PROCESO CODIFICADOR AMERICANO COMO PUNTO DE PARTIDA	53
2. ARGUMENTOS PARA UNA EXPOSICION SISTEMATICA DE LA CODIFICACION INTERNACIONAL DEL D.I.Pr. AMERICANO	56

Capítulo 1

CODIFICACION INTERNACIONAL DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN AMERICA LATINA

I. Ideas centrales respecto a la codificación internacional del D.I.Pr.

1. MANIFESTACIONES DEL PENSAMIENTO INTERNACIONALISTA

A) *La búsqueda del D.I.Pr. uniforme* 63

B) *Los problemas suscitados* 69

2. PERFILES DE LA ANTINOMIA INTERNACIONALISMO- NACIONALISMO

A) *Caracterización de las actitudes* 73

B) *La evolución en la traducción positiva
de las construcciones teóricas* 79

II. Los esfuerzos precursores en América

1. LOS PRIMEROS CONGRESOS HISPANOAMERICANOS

A) *Génesis del proceso codificador* 86

B) *Significado de estos Congresos* 98

2. EL INTENTO FALLIDO DEL CONGRESO DE JURISCONSULTOS AMERICANOS

A) *Participantes, iniciadores
y protagonistas* 102

B) *El Tratado de Lima y sus efectos* 106

III. La realización de la iniciativa de los países del Plata: los Tratados de Montevideo

1. EL CONGRESO SUDAMERICANO DE 1888-1889

- A) *La situación del D.I.Pr. en 1888* 112
- B) *Los Tratados de 1889* 122
- C) *Las incorporaciones: los rechazos y sus causas* 131
- D) *La trascendencia del Primer Congreso Sudamericano* 140

2. LA HORA DE LA REVISION: MONTEVIDEO, 1939-1940

- A) *La nueva situación del D.I.Pr. americano a la luz de las Conferencias Panamericanas* 146
- B) *Los Tratados de 1939-1940* 148
- C) *La limitación regional en las incorporaciones y la cristalización del sistema montevideano* 152

IV. Los objetivos de las Conferencias Panamericanas y el Código Bustamante

1. LAS CONFERENCIAS Y LA NOCION DE PANAMERICANISMO

- A) *Orígenes y alcance del movimiento panamericano* 156
- B) *La codificación del Derecho internacional americano* 167

2. CONFERENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES ANTERIORES A LA SANCION DEL CODIGO BUSTAMANTE 175

3. EL CODIGO BUSTAMANTE -SEXTA CONFERENCIA (LA HABANA, 1928)-

- A) *La Conferencia* 188
- B) *El Código Americano de D.I.Pr.* 192

C) <i>El complejo cuadro de incorporaciones</i>	205
D) <i>Trascendencia teórica y práctica del Código</i>	215
 V. Las últimas Conferencias Panamericanas y el inicio de las actividades de la O.E.A.	
1. LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA CONFERENCIA DE LA HABANA	
A) <i>La insistencia en la codificación del D.I.Pr.</i>	221
B) <i>El canto del cisne: la Novena Conferencia (Bogotá, 1948) y la creación de la O.E.A.</i>	228
2. LA ILUSION DE LA SINTESIS DEL D.I.Pr. CONVENCIONAL AMERICANO	
	234

Capítulo 2

UNA NUEVA METODOLOGIA PARA UNA NUEVA REALIDAD: LA CIDIP COMO INTENTO DE RESPUESTA A LOS PROBLEMAS ACTUALES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO INTERAMERICANO

I. Origen y características del nuevo proceso codificador americano	
1. ORIGEN Y ELEMENTOS TECNICOS DE LA CIDIP	
A) <i>El nacimiento de la CIDIP</i>	246
B) <i>Las cuestiones técnicas para el funcionamiento de la Conferencia</i>	262
2. LAS CLAUSULAS TIPO EN LOS CONVENIOS DE LA CIDIP	
	269

II. Alcance de la CIDIP en el panorama mundial

1. LA MODIFICACION DE LAS COORDENADAS DE POLITICA LEGISLATIVA

- A) *El peso de la tradición* 285
- B) *Los límites de la CIDIP en cuanto
instancia superadora de la bipolaridad
Montevideo-Bustamante* 296
- C) *Los puntos de referencia externos:
la influencia decisiva de la labor
de la Conferencia de La Haya y la
necesidad de coordinación* 307

2. ELEMENTOS CONDICIONANTES DE LA CODIFICACION

- A) *Materias reguladas* 335
- B) *Los participantes y los intereses
en presencia* 351

III. La CIDIP frente a los problemas y las soluciones de los procesos de codificación internacional

1. LAS OPCIONES EN EL AMBITO INTERNACIONAL

- A) *Los elementos metodológicos* 370
- B) *La definición del ámbito espacial
de aplicación* 381

2. LIMITACIONES DE LA VIA CONVENCIONAL PARA LA REGULACION DEL TRAFICO PRIVADO EXTERNO

- A) *La codificación estatal frente a la
codificación internacional* 385
- B) *Elementos para la "coexistencia"
de ambas dimensiones* 394

IV. Los ensayos subregionales y las perspectivas de integración

1. LAS CODIFICACIONES SUBREGIONALES DE D.I.Pr.
 - A) *Los desarrollos centroamericano y "boliviano"* 401
 - B) *La integración jurídica bilateral: el caso del Río de la Plata* 408
2. LOS INTENTOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SUS ASPECTOS JURIDICOS
 - A) *Perspectiva general* 416
 - B) *El nuevo impulso de la integración* 426
 - C) *La CIDIP como cauce de reglamentación de los aspectos jurídicos de la integración* 429

Capítulo 3

EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO IBEROAMERICANO Y SUS RELACIONES CON ESPAÑA

Sección 1ª: Los sistemas estatales de D.I.Pr. iberoamericanos

I. Elementos característicos en la formación de los sistemas estatales de D.I.Pr. iberoamericano

1. LA CODIFICACION DEL DERECHO EN AMERICA COMO REALIDAD DIFERENCIADA
 - A) *Componentes esenciales de la codificación estatal* 442
 - B) *Las distintas experiencias frente al auge del positivismo* 450
 - C) *El origen particular del fenómeno en los Estados americanos* 458

2. CONFIGURACION DEL D.I.Pr. AMERICANO

- A) *Antecedentes* 470
- B) *Las influencias en la formación de los sistemas* 479

II. Tendencias del D.I.Pr. iberoamericano frente a los modelos y caracteres de la codificación estatal del D.I.Pr.

1. CONSECUENCIAS DE LA UTILIZACION PRIMORDIAL DE LOS CODIGOS CIVILES COMO CAUCE DE LA POSITIVACION DEL D.I.PR.

- A) *La difícil justificación de la autonomía del D.I.Pr.* 508
- B) *El problema de la Parte general* 518
- C) *Consecuencias sobre las relaciones intrasistemáticas del D.I.Pr.* 534

2. PROBLEMAS Y POSIBILIDADES ACTUALES DE LA CODIFICACION ESTATAL

- A) *¿Hacia el ocaso del ciclo histórico del Código civil?* 543
- B) *El modelo de codificación basado en una Ley especial* 552

2ª Sección: La reglamentación de las relaciones entre España y América

III. Avatares de las relaciones entre Iberoamérica y España en torno a la codificación del D.I.Pr.

1. EL DILEMA ESPAÑOL: ¿EUROPEISMO O AMERICANISMO?

- A) *Las actitudes y sus componentes* 560
- B) *Evolución de las relaciones desde finales del siglo XIX* 576

2. VARIANTES DE UN IBEROAMERICANISMO RELATIVO

- A) *Los Tratados de Paz y Amistad* 590
- B) *Los Convenios de doble nacionalidad* 595

IV. Perspectivas de la regulación de las relaciones de tráfico privado externo entre España y América

1. LA MODIFICACION DE LA REALIDAD DEL D.I.Pr. ESPAÑOL FRENTE A LAS VIAS DE VINCULACION CON AMERICA 600
 2. LAS VIAS PROPIAS DE REGULACION ENTRE ESPAÑA E IBEROAMERICA EN LA POLITICA CONVENCIONAL ESPAÑOLA
 - A) *Intensificación de los acuerdos bilaterales* 607
 - B) *La incorporación a los convenios de la CIDIP* 612
 - C) *Balance de las realizaciones en la vía propia* 620
 3. LA OPCION IBERICA Y AMERICANA PARA LA REGLAMENTACION DEL TRAFICO EXTERNO: LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA 627
 4. LA PARTICIPACION COMUN EN FOROS CODIFICADORES CON VOCACION UNIVERSAL COMO VIA IMPROPIA DE REGLAMENTACION 633
- CONCLUSIONES 642
- ESTADO DE INCORPORACIONES A LOS CONVENIOS MULTILATERALES AMERICANOS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 694
- BIBLIOGRAFIA 702

Abreviaturas más utilizadas

A.D.C.	Anuario de Derecho Civil
A.D.I.	Anuario de Derecho Internacional (Universidad de Navarra)
A.F.D.I.	Annuaire français de droit international
A.G.	Asamblea General
A.J.C.L.	American Journal of Comparative Law
A.J.I.L.	American Journal of International Law
A.L.A.D.I.	Asociación Latinoamericana de Integración
A.L.A.L.C.	Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
Anales Fac. Cs. Jur. Soc. ..	Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Univ. Nacional de La Plata)
An. Der. (Panamá)	Anuario de Derecho (Panamá)
An. Inst. Cs. Pol.	Anuario del Instituto de Ciencias Políticas (Univ. Nacional de Rosario)
An. Jur. Interam.	Anuario Jurídico Interamericano
An. urug. Der. int.	Anuario uruguayo de Derecho internacional
Ann. dir. int.	Annuario di diritto internazionale
Ann. suisse dr. int.	Annuaire suisse de droit international
Ann. UNIDROIT	Annuaire UNIDROIT
Anuario I.H.L.A.D.I.	Anuario del Instituto Hispano-Luso- Americano de Derecho internacional
A.P.D.V.	Actas Procesales del Derecho Vivo (Venezuela)
B.I.M.J.	Boletín de Información del Ministerio de Justicia
B.O.E.	Boletín Oficial del Estado
Bol. Fac. Der. Cs. Soc.	Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univ. de Córdoba (Argentina)
Bol. Inst. Centroam. de Der. Comp.	Boletín del Instituto Centroamericano de Derecho comparado de Tegucigalpa
Bol. Inst. Der. Comp. (Ecuador)	Boletín del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad Central de Ecuador
Bol. Mex. Der. Comp.	Boletín Mexicano de Derecho comparado
Bull. soc. lég. comp.	Bulletin de la société de législation comparé
B.Y.B.I.L.	British Year Book of International Law
California L. Rev.	California Law Review
California W.L. Rev.	California Western Law Review
C.C.	Código civil
C.D.I.	Comisión de Derecho Internacional
C.E.	Constitución Española

C.E.P.A.L.	Comisión Económica para América Latina de la O.N.U.
CIDIP	Conferencia Especializada Interamericana de Derecho internacional privado
C.I.E.C.	Comisión Internacional del Estado Civil
C.I.J.	Consejo Interamericano de Jurisconsultos
C.J.I.	Comité Jurídico Interamericano
<i>Columbia L. Rev.</i>	<i>Columbia Law Review</i>
<i>Comp. Jur. Rev.</i>	<i>Comparative Juridical Review</i>
<i>Cuad. de D.I.Pr.</i>	<i>Cuadernos de Derecho internacional privado (Montevideo)</i>
D.I.P.	Derecho internacional público
D.I.Pr.	Derecho internacional privado
<i>Der. Integr.</i>	<i>Derecho de la Integración</i>
<i>Dir. int.</i>	<i>Diritto internazionale</i>
<i>Doc. Jur.</i>	<i>Documentación Jurídica</i>
<i>El Derecho</i>	<i>El Derecho (Argentina)</i>
<i>Foro It.</i>	<i>Il Foro Italiano</i>
<i>Gaceta.</i>	<i>Gaceta de Madrid</i>
<i>Harvard Int. L.J.</i>	<i>Harvard International Law Journal</i>
<i>Harvard L. Rev.</i>	<i>Harvard Law Review</i>
<i>I.C.L.Q.</i>	<i>International and Comparative Law Quaterly</i>
<i>I.D.I.</i>	<i>Institut de Droit International</i>
<i>I.H.L.A.D.I.</i>	<i>Instituto Hispano Luso Americano de Derecho internacional</i>
<i>I.L.A.</i>	<i>Iniciativa por las Américas</i>
<i>I.L.A. Rep.</i>	<i>Report of the Conference, International Law Association</i>
<i>I.L.M.</i>	<i>International Legal Materials</i>
<i>Inf. Jur.</i>	<i>Información Jurídica</i>
<i>Int. Enc. Comp. L.</i>	<i>International Encyclopedie of Comparative Law</i>
<i>Inter-Am. L. Rev.</i>	<i>Inter-American Law Review</i>
<i>Int. Lat.</i>	<i>Integración Latinoamericana</i>
<i>Investigación y docencia</i> ...	<i>Investigación y docencia (Fundación para las investigaciones jurídicas. Facultad de Derecho. Univ. Nacional de Rosario)</i>
<i>IPR</i>	<i>Internationales Privatrecht</i>
<i>IPRax</i>	<i>Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts</i>
<i>J.-Cl. dr. int.</i>	<i>Jurisclasseur de droit international</i>
<i>Journ. dr. int.</i>	<i>Journal du droit international privé</i>
<i>Jurisp. Argentina</i>	<i>Jurisprudencia Argentina</i>
<i>L.</i>	<i>Ley</i>
<i>La Ley</i>	<i>Revista Jurídica Española, La Ley</i>
<i>La Ley (Argentina)</i>	<i>Revista La Ley (Argentina)</i>
<i>Law. Am.</i>	<i>Lawyer of the Americas. A partir del vol. 16, 1984: Univeristy of Miami Inter-American Law Review</i>
<i>L.E.C.</i>	<i>Ley de Enjuiciamiento Civil</i>
<i>L.N.T.S.</i>	<i>League of Nations Treaty Series</i>
<i>L.O.P.J.</i>	<i>Ley Orgánica del Poder Judicial</i>
<i>Mich. L. Rev.</i>	<i>Michigan Law Review</i>
<i>Modern L. Rev.</i>	<i>Modern Law Review</i>

N.I.L.R. (N.T.I.R.).	Netherlands International Law Review
O.E.A.	Organización de los Estados Americanos
O.N.U.	Organización de las Naciones Unidas
P.J.	Poder Judicial
RabelsZ	Zeitschrift für ausländisches und internationalen Privatrecht
R.D.E.A.	Revista de Derecho Español y Americano
R. des C.	Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye
R.D.I. y Cs. Dip. (Rosario).	Revista de Derecho internacional y ciencias diplomáticas (Univ. Nacional de Rosario)
R.D.I.L.C.	Revue de droit international et de législation comparée
R.D.J.	Revista de Derecho judicial
R.D.P.	Revista de Derecho privado
R.D.Proc.	Revista de Derecho procesal
R.E.D.I.	Revista española de Derecho internacional
Res.	Resolución
Rev. arb.	Revue de l'arbitrage
Rev. belge dr. int.	Revue belge de droit international
Rev. Col. Abog. Buenos Aires	Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires
Rev. crit. dr. int. pr.	Revue critique de droit international privé et de droit penal international
Rev. Ch. Der.	Revista Chilena de Derecho (Pontificia Univ. Católica de Chile)
Rev. del Foro	Revista del Foro (Col. de Abogados de Lima)
Rev. Der. (Bolivia)	Revista de Derecho de la Univ. Mayor de San Andrés (La Paz)
Rev. Der. (Chile)	Revista de Derecho (Concepción-Chile)
Rev. Der. (Ecuador)	Revista de Derecho (Quito)
Rev. der. com. ob.	Revista del Derecho comercial y de las obligaciones
Rev. Der. Int. (La Habana)..	Revista de Derecho internacional (La Habana)
Rev. Der. Jur.	Revista de Derecho, Jurisprudencia y Ciencias Sociales (Santiago-Chile) -antes Revista de Derecho y Jurisprudencia-
Rev. Der. Priv. (Venezuela).	Revista de Derecho Privado (Venezuela)
Rev. Der. Priv. (México) ...	Revista de Derecho Privado (México)
Rev. Der. Proc.	Revista de Derecho Procesal
Rev. Der. Púb. y Priv.	Revista de Derecho Público y Privado (Montevideo)
Rev. Der. y C. Pol. (Lima) .	Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Univ. Mayor San Marcos de Lima
Rev. dr. fam.	Revue de droit familial
Rev. dr. int. dr. comp.	Revue de droit international et de droit comparé
Rev. dr. uniforme	Revue de droit uniforme
Rev. Fac. Der. Cs. Soc. (Montevideo)	Revista de la Facultad de Derecho y

	Ciencias Sociales (Univ. de la República, Montevideo)
Rev. Fac. Der. U.N.A.M.	Revista de la Facultad de Derecho de la Univ. Autónoma de México
Rev. Fac. Der. Univ. Cat.	
A. Bello	Revista de la Facultad de Derecho de la Univ. Católica Andrés Bello (Caracas)
Rev. Fac. Der. Univ. Central de Venezuela	Revista de la Facultad de Derecho (Univ. Central de Venezuela)
Rev. Fac. Dir. Univ. Saõ Paulo	Revista da Faculdade de Direito (Univ. de Saõ Paulo)
Rev. hellén. dr. int.	Revue hellénique de droit international
Rev. Inf. Leg. (Brasilia) ..	Revista de Informação Legislativa
Rev. int. dr. comp.	Revue internationale de droit comparé
Rev. Jca. (Cuba)	Revista Jurídica de Cuba
Rev. Per. Der. Int.	Revista Peruana de Derecho internacional
Rev. trim. dr. civ.	Revue trimestrielle de droit civil
Rev. trim. dr. fam.	Revue trimestrielle de droit familial
Rev. Univ. San Francisco Xavier	Revista de la Universidad San Francisco Xavier (Bolivia)
Rev. Urug. Der. Fam.	Revista Uruguay de Derecho de Familia
Rev. Urug. Der. Proc.	Revista Uruguay de Derecho Procesal
R.F.D.U.C.M.	Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
R.G.D.	Revista General del Derecho
R.G.D.I.P.	Revue générale de droit international public
R.G.L.J.	Revista General de Legislación y Jurisprudencia
Riv. dir. civ.	Rivista di diritto civile
Riv. dir. int.	Rivista di diritto internazionale
Riv. dir. int. pr. proc. ...	Rivista di diritto internazionale privato e processuale
Riv. dir. pr.	Rivista di diritto privato
S/Sent.	Sentencia
StAZ.	Das Standesamt
The Int. Lawyer	The International Lawyer
T.I.J.	Tribunal Internacional de Justicia
Tít. Prel.	Título Preliminar
Travaux Com. fr. dr.int.pr.	Travaux du Comité français de droit international privé
T.S.	Tribunal Supremo
Tul. L. Rev.	Tulane Law Review
Univ.	Universidad
Universitas	Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Javiera (Bogotá)
Univ. of Pennsylvania	
L. Rev.	University of Pennsylvania Law Review
U.N.T.S.	United Nations Treaty Series
Z.f. Rvgl.	Zeitschrift für Rechtsvergleichung

I N T R O D U C C I O N

I. Encuadre metodológico

1. LAS LINEAS DE ACCION BASICAS

1. Introducirse con buen pie por la senda propuesta en el presente trabajo, exige la realización de algunas consideraciones básicas de orden metodológico y de ciertas precisiones en la terminología utilizada. En este sentido, una primera aproximación consiste en situar el análisis en el sector que corresponde dentro del amplio espectro de posibilidades que puede llegar a sugerir un título como el que aquí se utiliza. No es difícil constatar que la referencia al "D.I.Pr. latinoamericano" o a otras fórmulas equivalentes es un lugar común en muchos estudios desarrollados en la segunda mitad del siglo XX, generalmente dedicados a la codificación de la disciplina en el continente americano¹. La propia

1. Sólo en el marco de la Academia de Derecho internacional de La Haya, cabe mencionar los siguientes trabajos específicos de alcance general: H. Valladão, "Le droit international privé des Etats américains", R. des C., t. 81 (1952-II), pp. 5-115, M.A. Vieira, "Le droit international privé dans le développement de l'integration latino-américaine", R. des C., t. 130 (1970-II), pp. 350-453, G. Parra-Aranguren, "Recent Developments of Conflict of Laws Conventions in Latin America", R. des C., t. 164 (1979-III), pp. 55-170, T.B. de Maekelt, "General Rules of Private International Law in the Americas. New Approach", R. des C., t. 177 (1982-

persistencia con que son utilizados, sugiere la presencia de una idea según la cual dichos términos aluden a una realidad diferenciada dentro de una tipología de sistemas de D.I.Pr.. En cierto modo recuerda a aquella cuestión que originó célebres y bizantinos debates entre los internacionalistas americanos de principios de siglo, quienes discutían apasionadamente en torno a la configuración de un "Derecho internacional americano" estructurado sobre principios característicos de la región².

IV), pp. 193-379, L. Pereznieta Castro, "La tradition territorialiste en droit international privé dans les pays d'Amérique latine", *R. des C.*, t. 190 (1985-I), pp. 271-400 y A. Boggiano, "The Contribution of the Hague Conference to the Development of Private International Law in Latin America. Universality and *Genius Loci*" (en prensa). Fuera de este ámbito cabe citar, entre otros, W. Goldschmidt, "Droit international privé latino-américain", *Journ. dr. int.*, 1973, pp. 65-93, D. Opertti Badán, "Unification of Laws in the Western Hemisphere. The Contribution of the Organization of American States", *Rev. dr. uniforme*, 1981-I, pp. 60-67, J. Samtleben, *Derecho internacional privado en América Latina. Teoría y práctica del Código Bustamante*, trad., Buenos Aires, 1983, A.M. Villela, "L'unification du droit international privé en Amérique Latine", *Rev. cr. dr. int. pr.*, 1984, pp. 233-265 y E. Briceño Berrú, "Reflexiones sobre la codificación del Derecho internacional privado en América Latina", *Studi in memoria di Mario Giuliano*, Padua, 1989, pp. 157-192.

2. La noción contribuyó en gran medida a la génesis y posterior desarrollo de las Conferencias Panamericanas y, aunque se refería en concreto al D.I.P., tuvo algún reflejo en el ámbito del D.I.Pr..

A partir de esa constatación podría plantearse una línea de acción previa, consistente en entrar a dilucidar los elementos técnicos que permitan elaborar un excursus acerca de la existencia o no de una familia jurídica iberoamericana con ciertos rasgos de autonomía y, eventualmente, del alcance que puede dársele a esa expresión. Un análisis así encaminado podría cooperar, entre otros extremos, a dar un sentido cabal y concreto a la afirmación según la cual la pertenencia a una misma familia jurídica se erige en una *conditio sine qua non* para la unificación del Derecho o, al menos, la facilita³.

3. Vid., con carácter general, las afirmaciones de R. David, en "The International Unification of Private Law", *Int. Enc. Comp. L.*, vol. II, cap. 5, pp. 17 ss., y P. Vallindas, en "Droit uniforme international et droit comparé", *Ius et lex. Festgabe für Max Gutzwiller*, Basilea, 1959, p. 190. En la misma línea, respecto de Iberoamérica, vid. J.Mª. Castán Vázquez, "El sistema de Derecho privado iberoamericano", *Estudios de Derecho civil en honor del Prof. Castán Tobeñas*, vol. VI, Pamplona, 1969, p. 183. Diversos aspectos de esta idea vienen siendo puestos en tela de juicio desde hace algún tiempo. Vid., por ejemplo, S. Strömholm, "Rechtsvergleichung und Rechtsangleichung. Theoretische Möglichkeiten und praktische Grenzen in der Gegenwart", *RabelsZ*, vol. 56, 1992, pp. 611-622. Incluso se ha dicho que referirse a la "armonización" del Derecho en el seno de una familia jurídica, implica en cierto modo una tautología, ya que "*families of law constitute systems which include a harmonization component by definition*". Vid. M. Boodman, "The Myth of Harmonization of Laws", *A.J.C.L.*, vol. 39, 1991, p. 704.

Estas y no otras son las cuestiones atinentes a la aplicación del método comparativo a la ciencia jurídica que juzgamos importante plantear aquí. No debe olvidarse que a principios del siglo veinte, época dorada del Derecho comparado, el fin supremo de éste giraba en torno a la idea de una "Ciencia universal del Derecho"⁴. En este contexto, la unificación internacional del Derecho pasaba a ser el objetivo principal, cuando no el único, de los estudios comparativos, del mismo modo que con anterioridad habían servido esencialmente para realizar la unificación en el interior de cada Estado⁵. Sin dejar de adelantar la inevitable matización de estos planteamientos, cabe indicar que la búsqueda del horizonte señalado debía basarse en la coordinación de las tres actividades que ya desde la época indicada se mencionaban como los componentes elementales del Derecho comparado: la descripción de los ordenamientos jurídicos, la confrontación en miras a obtener sus méritos

4. Vid. A.J. Van Der Helm y V.M. Meyer, *Comparer en droit. Essai Méthodologique*, Estrasburgo, 1991, pp. 15-17.

5. R. David, *Tratado elemental de Derecho civil comparado*, trad., Madrid, 1953, pp. 137-138 y, más detalladamente, J. Limpens, "Les constantes de l'unification du droit privé", *Rev. int. dr. comp.*, 1958, pp. 277-297. Caso por caso, puede consultarse *id.*, *L'unification interne du droit privé*, París, 1954.

respectivos y el estudio de la evolución de los mismos en su interrelación⁶.

2. La segunda línea de acción pasa por definir el ámbito dentro del cual debe ser utilizado el método comparativo. Entre las dos opciones habitualmente señaladas, la micro y la macrocomparación, es preciso situar este estudio, más allá de las inevitables consideraciones contextuales generales, en nuestro centro de interés. Cuando se emprende un estudio comparativo, el objeto del mismo puede concentrarse en algún sector

6. Dichas actividades fueron denominadas gráficamente por J. H. Wigmore, como *Comparative Nomoscopy*, *Comparative Nomothetics* y *Comparative Nomogenetics*, respectivamente. Vid. "A new way of teaching comparative law", *Journal of the Society of Public Teachers of Law*, 1926, p. 6, cit. por H.C. Gutteridge, *Droit comparé*, trad., París, 1953, p. 21. De ellos, la confrontación ha sido para muchos autores la que con mayor propiedad define al Derecho comparado. Vid., por ejemplo, K. Zweigert, "Méthodologie du droit comparé", *Mélanges offerts à J. Maury*, t. I, París, 1960, p. 580 y M. Ancel, *Utilité et méthodes du droit comparé. Eléments d'introduction générale à l'étude comparative des droits*, Neuchatel, 1971, pp. 57 ss.. Para la relación "inseparable" entre descripción y confrontación, cf. J.H. Merryman, "Modernización de la ciencia jurídica comparada", *Bol. Mex. Der. Comp.*, núm. 46, 1983, pp. 67-69. A su vez, A.T. von Mehren, presenta a la *Comparative Nomogenetics* como la dimensión sintetizadora que tiene por objeto reflexionar sobre las razones y el significado de las diferencias y similitudes obtenidas con la confrontación ("The role of comparative law in the practice of international law", *Festschrift für Karl H. Neumayer zum 65.Geburtstag*, Baden-Baden, 1985, pp. 479-486).

(institución, regla) delimitado, dejando al margen -en principio- la consideración global de los ordenamientos implicados; esto es lo que se ha dado en llamar microcomparación. Contrariamente, si el examen abarca la totalidad de dichos ordenamientos o al menos se centra en sus elementos fundamentales, estaríamos en presencia de una macrocomparación, la cual habitualmente tendría por finalidad el agrupamiento de aquéllos en familias⁷.

Es indudable que el recurso a la macrocomparación aparece como un imperativo insoslayable, cualquiera sea la subestructura de los ordenamientos en cuestión que motive la comparación, ya que la aprehensión global de éstos es el parámetro a través del cual sus respectivas partes cobran su exacta significación⁸. Las normas en que

7. Sobre la utilización de esta terminología *vid.*, por todos, L.-J. Constantinesco, *Tratado de Derecho comparado*, t. I, trad., Madrid, 1981, pp. 313-314 y 383⁰; *id.*, *Traité de droit comparé*, t. III, París, pp. 85-87, y a todo lo largo del t. II. En las páginas citadas del t. III puede consultarse una comprensión distinta de los términos citados, introducida por R. David en la primera edición de *Les grands systèmes de droits contemporaines* (París, 1964) y excluida después -pero mantenida en la Introducción al vol. II, cap. 2 de la *Int. Enc. Comp. L.* y en su trad. francesa publicada en *Le droit comparé. Droits d'hier, droits de demain*, París, 1982, pp. 110-112- que habla de micro o macrocomparación según que los ordenamientos comparados pertenezcan o no a una misma familia.

8. *Vid.* también P. Stanzione, "Considérations au sujet des méthodes du droit comparé", *Rev. int. dr. comp.*, 1973, p. 884, y B. Blagojevic, "La méthode

se traducen los objetivos de política legislativa dentro de cada orden jurídico pueden adoptar estructuras similares, incluso esos objetivos pueden ser coincidentes, y sin embargo la configuración misma de los distintos órdenes y, en consecuencia, las respuestas materiales que brindan pueden diferir profundamente⁹.

Es con este convencimiento que antes de llegar al ámbito propio al que hacíamos referencia, creemos necesario dirigir una mirada muy general a los aspectos macrocomparativos que supone la existencia en sí de una familia jurídica iberoamericana, para desembocar después en un plano intermedio entre la micro y la macrocomparación. Se trata de la actividad metodológica que se ha definido como mesocomparación, consistente en tomar como objeto del estudio una determinada rama de la ciencia jurídica¹⁰; en nuestro caso, referida al D.I.Pr..

comparative juridique", en M. Rotondi (dir.), *Inchieste di diritto comparato*, Milán-Nueva York, 1973, p. 31.

9. F. Rigaux, "Science comparative et droit positif", *Festschrift für Karl H. Neumayer...*, op. cit., p. 515. También viceversa, como ha señalado K. Zweigert, "Des solutions identiques par des voies différentes. Quelques observations en matière de droit comparé", *Rev. int. dr. comp.*, 1966, pp. 5-18. Precisamente, T. Ascarelli habla de "fungibilidad funcional de instituciones estructuralmente diversas (o viceversa)", en "Función del Derecho comparado en la interpretación del Derecho y metodología del Derecho comparado", *Rev. Inst. Der. Comp.*, núm. 1, 1953, p. 26.

Tal actividad tiene *a priori* mayor importancia, a fuer de proximidad, con este trabajo. Mas la nota de relatividad y las inevitables matizaciones también se hacen presentes en este punto, puesto que, al influjo de la línea antes descrita, algunas materias unificadas o unificables quedan fuera del contenido de la disciplinal¹¹.

2. PRECISIONES TERMINOLOGICAS

3. Los términos que se utilizan a lo largo de este trabajo para designar el ámbito espacial abarcado por los diferentes procesos de codificación internacional desarrollados en América, requieren una primera aclaración¹². Ya la referencia a América -que usamos con cierta falta de rigurosidad como sinónimo de "continente"

10. F.C. Schroeder introdujo el término *Meso-Vergleichung* en su artículo "Das Strafrecht der DDR und der Sowjetunion", *Z. Strafrechtswissenschaft*, núm. 91, 1979, pp. 1066 ss., esp. 1069. Cf. L.-J. Constantinesco, *Traité...*, op. cit., t. III, pp. 87-88.

11. Vid. A. Marín López, "La función del Derecho comparado y del Derecho uniforme en Derecho internacional privado", *Anuario I.H.L.A.D.I.*, núm. 2, 1963, pp. 166-167.

12. Evidentemente, la comprensión dada a dichos términos no pretende una validez general, sino que busca establecer unas reglas mínimas para poder alcanzar los fines perseguidos evitando cualquier confusión.

americano- es susceptible de provocar alguna duda. Para disiparla es ineludible indicar que alude al conjunto de todos los Estados -continentales e insulares- de la región que globalmente considerada limita al Este con el Océano Atlántico y al Oeste con el Pacífico. Esto significa que la codificación "americana" incluye a todos los procedimientos de producción jurídica de esta región.

Sobre la base de tal estipulación, pueden concretarse las demás. El adjetivo "latinoamericano" aparece en la segunda mitad del siglo XIX con marcadas connotaciones políticas para distinguir los dos Estados poderosos del Norte, y más específicamente los Estados Unidos, de los demás Estados de la región¹³. Con el tiempo ha logrado ser prácticamente la única denominación reconocida en América para describir dicha realidad en el ámbito de las ciencias sociales, opción que en un principio sólo era habitual en los autores ingleses, franceses y norteamericanos¹⁴. En España se prefiere, sin

13. Sin embargo, parece que en un principio la distinción hacía más que nada referencia al idioma. Cf. A. Ardao, *Genésis de la idea y el nombre de América Latina*, Caracas, 1980, *passim*.

14. Incluso, cuando se habla de "(los países de) América Latina y el Caribe" se busca reforzar la distinción dándole mayor rigor. Queda claro que dicha terminología, muy usada por las organizaciones internacionales, sólo tiene sentido dentro del lenguaje político; a otros fines -como sucede en nuestro caso-

embargo, la expresión "iberoamericano", a sabiendas de que no se corresponde exactamente con la anterior¹⁵, para resaltar la presencia predominante de los países de la península ibérica¹⁶. Ahora bien, este término no deja de ser ambiguo pues algunas veces se utiliza aludiendo sólo a los Estados americanos comprendidos y otras incorporando a España y Portugal.

También se habla de "panamericano", que podría entenderse en principio como sinónimo de "americano", pero que en el contexto de nuestro estudio tiene una significación política bastante concreta referida a un movimiento liderado por Estados Unidos que se inicia a fines del siglo XIX con claros objetivos hegemónicos¹⁷.

conlleva una notoria imprecisión. Vid. H. Godoy Urzúa, "La integración cultural de América Latina", *Integ. Latinoam.*, núms. 149-150, pp. 13-35, esp. 13-14.

15. La diferencia se refiere a Haití y a los pocos territorios franceses de ultramar en América. A pesar de ella, generalmente son utilizados en forma indistinta y así lo hacemos también nosotros. De allí que expresiones tales como "Latinoamérica -deben aprenderlo los iberoamericanos- es término que nos repugna en España" (F. Puy, "Por una jurisprudencia iberoamericana", *A.F.D.*, t. V, 1988, pp. 475-487, concr. 480), no merezcan mayores comentarios.

16. Por su parte "hispanoamericano" a caído algo en desuso, no tanto por la exclusión del Estado más extenso y más poblado de América Latina que implica (lógica si se quiere hacer referencia solamente a los países de habla española), como por el talante imperial y la idea asimilacionista que en él se descubren.

"Interamericano", por último, encarna una relativa evolución de "panamericano" consistente en el reconocimiento de la existencia de -por lo menos- dos Américas¹⁸, que se consolida mediante el multifacético accionar de la O.E.A.

4. Dentro del terreno jurídico es menester también realizar brevemente una precisión, referida concretamente a la extensión dada al contenido del D.I.Pr. en el presente trabajo. Se trata de una aclaración importante, toda vez que en algunas partes del trabajo se mencionan realizaciones convencionales que afectan a las más variadas materias, lo cual podría dar lugar a cierta confusión. Para eliminar ésta, basta decir que el contenido aludido normalmente es el que responde a un objeto construido sobre la base de la noción de "situación privada internacional", entendida como la

17. *Vid.* la referencia de M. Straznicky, "Les Conférences de droit international privé depuis la fin de la guerre mondiale", *R. des C.*, t. 44 (1933-II), p. 487.

18. *Vid.* Z. Drnas de Clement, "América latina y los procesos de integración", *Bol. Fac. Der. Cs. Soc.*, t. XLVI-XLVII, 1982-1983, p. 129. Con esa inteligencia "interamericano" sí podría ser sinónimo de "americano". No obstante hay países americanos que no participan actualmente del Sistema Interamericano (es decir, de la O.E.A.), como Cuba y Guyana, mientras que otros se han incorporado recientemente, como algunos Estados anglófonos del Caribe y Canadá.

relación jurídica privada que presenta elementos vinculados de forma relevante con dos o más ordenamientos jurídicos. Una definición de este tipo implica descartar en principio del contenido, materias de acusado carácter público¹⁹.

La importancia relativa de la parcela ocupada por el D.I.Pr. así considerado dentro de la realidad de la reglamentación de las relaciones de tráfico jurídico externo, es lo que motiva las menciones que se realizan de dichas materias. Si bien se mira, algo similar ocurre con las reflexiones que se vierten respecto a los esfuerzos unificadores que no utilizan técnicas de D.I.Pr., sino que buscan la uniformidad del Derecho material implicado. En este caso también, las referencias a ellos no tienen otro norte que poner de relieve las distintas opciones metodológicas y las relaciones entre ellas.

En un trabajo dedicado a la codificación internacional del D.I.Pr. en determinado ámbito geográfico, difícilmente podría dejar de hacerse mención a todos los elementos que rodean el sector de la realidad analizado, so pena de dar una visión sesgada del

19. Vid. por todos, J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *Curso de Derecho internacional privado*, Madrid, 1991, pp. 43-50.

fenómeno. Así, cuando se nombran los numerosos textos alumbrados por las Conferencias Panamericanas (cap. 1), se hacen ver las materias que son o han sido objeto de intentos de unificación sustancial en Iberoamérica (cap. 2) o se llama la atención sobre las distintas áreas cubiertas en la historia de la cooperación jurídica entre España y los países americanos (cap. 3), no debe pensarse que se trata de una contradicción con la concepción del contenido adoptada en este trabajo. Por el contrario, en ningún momento se aleja nuestro planteamiento de una visión tripartita del D.I.Pr., configurada por los sectores de la competencia judicial internacional, el Derecho aplicable y el reconocimiento y ejecución de actos, documentos y decisiones extranjeras²⁰. Eso no impide que sólo con fines explicativos se "ensanche" el contenido de la disciplina, para apreciar con más fidelidad cómo se desenvuelve la producción jurídica internacional americana.

5. También son de estricto contenido jurídico dos cuestiones que pueden plantearse a raíz de la utilización de ciertas expresiones a lo largo de este trabajo: la aplicación que tiene en nuestro ámbito la distinción

20. *Ibid.*, pp. 87-88.

entre codificación y desarrollo progresivo y la elección de un término apropiado para referirnos al proceso de elaboración de normas convencionales de D.I.Pr.. La primera podría tal vez obviarse, de no aparecer concretamente señalada en el texto original de la Carta de la O.E.A. (base legal de la codificación internacional americana desde 1948), cuyo art. 67 señalaba entre las funciones del Consejo Interamericano de Jurisconsultos (C.I.J.) la de llevar a cabo "el desarrollo y la codificación" del Derecho internacional público y privado.

Ya el art. 13.12.a) de la Carta de las O.N.U. colocaba dentro de las atribuciones de la Asamblea General la de "impulsar el desarrollo progresivo del Derecho internacional y su codificación"²¹. La distinción fue precisada en el art. 15 del Estatuto de la Comisión de Derecho internacional, reservando la primera expresión para la preparación de proyectos de convenios en materias desprovistas de regulación o de una práctica suficientemente desarrollada y la segunda para la

21. El texto actual de la Carta de la O.E.A. recoge en su art. 104 la formulación más general del mencionado art. 13.12.a) de la Carta de la O.N.U., al otorgar al Comité Jurídico Interamericano (C.J.I.) las tareas atinentes al "desarrollo progresivo y la codificación del Derecho internacional", borrando la alusión al D.I.Pr.

formulación y la sistematización de las normas en materias en las que ya existe una amplia práctica de los Estados, precedentes y doctrinas²². Sin embargo, tal distinción se hizo inoperante en la labor de la Comisión y no alcanzó gran predicamento en la doctrina²³. Similar constatación realizó el C.J.I., sosteniendo la imposibilidad o la intrascendencia práctica de marcar diferencias entre ambos términos²⁴.

En realidad, en el ámbito del D.I.Pr. americano, se habla desde hace bastante tiempo de "codificación parcial y progresiva"²⁵, para referirse al proceso llevado a cabo

22. Res. 174 (III) de la A.G. de la O.N.U.

23. Vid. H. Lauterpacht, "Codification and Development of International Law", *A.J.I.L.*, vol. 49, 1955, pp. 29-31, R. Ago, "La codification du droit international et les problèmes de sa réalisation", *Recueil d'études de droit international en hommage à Paul Guggenheim*, Ginebra, 1968, pp. 98-100 y nota 7, R.P. Dhokalia, *The Codification of Public International Law*, Manchester, 1970, pp. 148-160 y 201-216 y J.D. González Campos, L.I. Sánchez Rodríguez y M^aP. Andrés Sáenz de Santamaría, *Curso de Derecho internacional público*, 5ª ed., Madrid, 1992, pp. 59-61.

24. Cf. *Informe sobre el plan para el desarrollo y la codificación del Derecho internacional público y del Derecho internacional privado*, preparado por el Comité Jurídico Interamericano y sometido a la primera reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, Washington, D.C., 1949 (Doc. CIJ-3). También en *An. Jur. Interam.*, 1949, pp. 301-319. Vid. además, G. Parra-Aranguren, "La revisión del Código Bustamante", *Codificación del Derecho internacional privado en América*, Caracas, 1982, pp. 240-241.

en el seno de la O.E.A. con las sucesivas reuniones de la CIDIP. Desde este punto de vista, se plantea una oposición con el proceso de "codificación global" encarnado por los textos que regulan la totalidad del D.I.Pr. La codificación en la hora actual es progresiva porque se va realizando materia por materia y porque se va adecuando a las exigencias cambiantes de la realidad²⁶.

Dicho esto, ¿cuál será el término más apropiado para designar los procedimientos de producción jurídica de carácter internacional en el D.I.Pr.? Gran parte de la doctrina se ha decantado por "unificación internacional" o simplemente "unificación", reservando "codificación" para las realizaciones de carácter estatal²⁷. No

25. Vid. por todos T.B. de Maekelt, *Normas generales de Derecho internacional privado en América*, Caracas, 1984, p. 44. En el Estatuto de la Conferencia de La Haya de D.I.Pr. se habla de "unificación progresiva".

26. En la Conferencia de La Haya podría agregarse a las dimensiones *ratione materiae* y *ratione temporis* de la codificación progresiva, otra *ratione loci* referida al paso de una codificación regional a una codificación más universal. Vid. J.H.A. van Loon, "Quelques réflexions sur l'unification progressive du droit international privé dans le cadre de la Conférence de La Haye", *Liber Memorialis François Laurent*, Bruselas, 1989, p. 1140.

27. H.U. Jessurun d'Oliveira, "Codification et unification du droit international privé. Problèmes de coexistence", *Unification. Liber amicorum Jean Georges Sauveplanne*, Deventer, 1984, p. 120. Según J.H.A. van Loon, *loc. cit.*, p. 1141, la elección de "unificación" en el Estatuto de la Conferencia de La Haya, se basa en la

obstante, ambos términos parecen válidos en el ámbito internacional, del mismo modo que resultan aplicables a distintas cuestiones de orden interno. El primero, porque mediante este proceso los Estados alcanzan una reglamentación común de determinada materia; el segundo, porque la actividad de los Estados se concreta en la elaboración de normas convencionales adecuadas a las necesidades del momento. Pero aunque esto sea aceptado, en el presente trabajo se utiliza normalmente "codificación" acompañado por los adjetivos internacional o estatal según sea el caso. La elección se basa en que dicho vocablo es mucho más usado en América en el campo del D.I.Pr., mientras que unificación se deja en general para los trabajos relativos al Derecho material.

6. A la luz de algunas de las consideraciones precedentes, la discusión acerca de la existencia de una familia jurídica iberoamericana se va colocando dentro de unos límites bien definidos, ya que sólo nos resulta interesante si se limita a aportar unos elementos metodológicos introductorios que creemos importantes. De este modo, nuestro trabajo se organiza básicamente de una

búsqueda de un término propio que se diferencie de los manejados por la C.D.I., ya que en la Conferencia de lo que se trata es de unificar normas heterogéneas.

manera no cronológica sino estructural atendiendo a las distintas dimensiones sugeridas. Pero mientras en los dos primeros capítulos la exposición discurre siempre en el ámbito de los esfuerzos en pos de una unificación del D.I.Pr. entre los Estados de la región, la necesaria explicación de la configuración de sus sistemas estatales de D.I.Pr. se lleva a cabo en el tercero, antes de tratar las relaciones y realizaciones entre España y América.

Considerada en sí misma, la tendencia hacia la codificación internacional del D.I.Pr. experimentada en América prácticamente desde la existencia de normas positivas organizadas de esta disciplina²⁸, puede observarse sobre esas dimensiones. La primera de ellas es la que traza los confines de la empresa codificadora en las fronteras de los países americanos cuyos ordenamientos jurídicos se inscriben en la familia del Derecho romano-germánico, es decir los países latinoamericanos. Esta delimitación se realiza con las dos grandes codificaciones globales (Tratados de

28. J.E. Briceño Berrú, "Reflexiones ..." *cit.*, pp. 161-167, enumera unos "factores propulsores de la codificación (internacional) latinoamericana", bastante discutibles y cuya relatividad se pone de manifiesto en estas páginas. Entre ellos menciona: un cierto espíritu de solidaridad regional, la necesidad de Latinoamérica de asegurar su independencia y desarrollo, una tendencia instintiva a la organización internacional y "el uso de métodos y mecanismos maleables y expeditivos".

Montevideo y Código Bustamante), aunque sólo en el primer caso es deliberada. La segunda es la que cobra relieve con la obra de la CIDIP, aunque ya había sido transitada -sin mucho éxito- en las Conferencias Panamericanas, e incorpora a todos los Estados americanos miembros de la O.E.A.. Desde un punto de vista práctico se concreta con la incorporación de Estados Unidos a convenios de la CIDIP.

No hay que perder de vista que cuando se habla de la nueva etapa acometida en América para la codificación internacional del D.I.Pr. uno de los datos más relevantes es precisamente el carácter interamericano de esta empresa. Es cierto que el impulso principal y el grueso de las incorporaciones a los convenios producidos en este foro provienen especialmente de los Estados iberoamericanos, más precisamente, de algunos de ellos; pero la participación creciente de países adscritos al círculo de la *common law* o con una conformación jurídica mixta como Canadá²⁹, ponen en evidencia desde el inicio

29. Otros Estados de América -como Guyana, Suriname, Belize y ciertos países del Caribe- tienen también una conformación jurídica mixta, donde el "sistema dominante" cohabita con el "sistema auxiliar" consuetudinario. Vid. F. Reyntjens, "Note sur l'utilité d'introduire un système juridique 'pluraliste' dans la macro-comparaison des droits", *R.D.I.D.C.*, 1991-1, pp. 41-50.

que los resultados del presente análisis han de estar también teñidos de una nota de relatividad.

Al lado de estas dos primeras opciones, se alza claramente una tercera: la dimensión iberoamericana, comprendida en su sentido más amplio, ibérica y americana³⁰. Las dos codificaciones globales vigentes en América eran potencialmente extendibles a este ámbito más amplio, y en ambos casos se planteó respecto de España la posibilidad de verificar esta extensión. El fracaso de las iniciativas en ese sentido no podía, y no lo ha hecho por cierto, establecer el bloqueo de esta opción codificadora. El peso de la historia y el parentesco cercano de los ordenamientos jurídicos implicados, se han traducido en diversas vías de regulación de las relaciones de tráfico privado externo con elementos americanos e ibéricos (señaladamente, españoles), aunque está claro que la producción no alcanzado hasta el momento un grado aceptable y coherente con el volumen de relaciones existentes en esta esfera.

30. F. Castejón, se refiere a esta realidad como la "esfera interiberoamericana", en *Unificación legislativa iberoamericana*, Madrid, 1950, p. 94.

II. El D.I.Pr. americano frente a los mecanismos de actuación del método comparativo

1. LA MODIFICACION DEL PARADIGMA COMPARATIVO

7. Se advierte la existencia de casi tantas clasificaciones de órdenes jurídicos en familias como comparativistas han existido. Sin embargo sería factible destacar sólo algunas de ellas haciendo referencia a los criterios tenidos en cuenta para su elaboración, obviando el tedioso y probablemente inútil trámite de confeccionar un catálogo exhaustivo y sin ajustarse necesariamente a una secuencia cronológica. Esto significa que podrían señalarse unas pocas clasificaciones, suficientemente representativas, sobre la base de los distintos argumentos escogidos por sus autores para determinar la adscripción de cada ordenamiento a tal o cual familia jurídica.

Básicamente se distinguen dos corrientes generales según el carácter de los elementos que se utilizan y la aptitud para captar la globalidad del ordenamiento jurídico de cada Estado³¹. Tradicionalmente, las

31. Vid., por todos, A. Malmström, "The System of Legal Systems. Notes on a Problem of Classification in

clasificaciones se edificaban a partir de criterios aislados, jurídicos o extrajurídicos, que podríamos considerar estáticos, por mor de su rigidez y su falta de aprehensión de la totalidad del fenómeno que se pretende abarcar. Así, se encuentran clasificaciones cimentadas sobre parámetros tales como la raza, el pasado común, la ideología dominante, la religión, el carácter predominante de una fuente del Derecho o el grado de influencia del Derecho romano u otras construcciones jurídicas³².

8. El carácter incompleto y algunas veces inexacto que se desprende de las formulaciones así concebidas desbroza el camino por el cual se desarrollan ideas que exploran la necesidad y la forma de pergeñar una modificación del paradigma generalmente aceptado en la actuación del método comparativo. Ni que decir tiene que

Comparative Law", *Scandinavian Studies in Law*, vol. 13, 1969, pp. 127-149.

32. La presencia del elemento común subrayado no impide ver diferencias en la caracterización de los mismos. En este sentido, se han clasificado los criterios de clasificación (valga la redundancia) en: naturales-etnológicos, culturales, legislativos y jurídico-genéticos. Cf. E. Martínez Paz, *Introducción al Derecho civil comparado*, reimp., Buenos Aires, 1960, p. 152. A su turno, L.-J. Constantinesco, *Traité...*, op. cit., t. III, pp. 93 ss., se limita a hablar de criterios genéticos y tipológicos.

el cambio así operado reviste una importancia singular, aunque tal vez sea un poco exagerado hablar de una revolución científica³³. Aquí no se asiste a un supuesto de modificación vertiginosa, mucho menos sorpresiva, de la situación anterior, ni se descartan los instrumentos que en el pasado servían para realizar esta concreta actividad. En efecto: no puede haber sorpresa cuando ya en el siglo XIX se ponía de relieve la necesidad de apreciar la complejidad ofrecida por todos los elementos que se relacionan con el Derecho en su interacción social³⁴; y no se produce una ruptura histórica con los criterios tenidos en cuenta en otras épocas sino que, en lugar de considerarlos individualmente, se combinan, se aplican dinámicamente y se pone el acento en los caracteres activos, en los que mejor determinan el perfil de cualquier ordenamiento, sistema, institución o fenómeno jurídico.

33. En contra, J.H. Merryman, "Modernización..." *cit.*, esp. 71-72 y 84. Un adelanto parcial de las ideas aquí expuestas se observa en *id.*, "Fines, objeto y método del Derecho comparado", *Bol. mex. der. comp.*, núms. 25-26, 1976, pp. 65-92.

34. La aportación pionera de R. von Jhering a la configuración de un método comparativo crítico, no dogmático y realista, es analizada con maestría en K. Zweigert y K. Siehr, "Jhering's Influence on the Development of Comparative Legal Method", *A.J.C.L.*, vol. 19, 1971, pp. 215-231.

El término "funcional" aplicado al método comparativo, entonces, se comprende aquí como una actividad plural, multiforme, basada en el análisis de todos cuantos elementos se revelan como indicadores distintivos del Derecho. Pero esta tarea no recae exclusivamente sobre la traducción positiva de éste, sino que se realiza observando también su eficacia social, esto es, sin perder de vista el verdadero impacto que las normas jurídicas ejercen sobre las soluciones concretas³⁵. Más que de una reacción contra las actitudes excesivamente formalistas o positivistas cabe hablar de una evolución a partir de éstas. El paso del análisis estructural del Derecho a una actividad tendente a desentrañar el rol que desempeña en la sociedad ha sido una constante en los trabajos de los principales teóricos del Derecho especialmente a partir de la década del

35. Es lo que M. Ancel llama "realidad operacional" de un ordenamiento, en un contexto en el cual acentúa la importancia de la función social de cualquier institución sobre su definición o caracterización jurídica. Vid. "Le problème de la comparabilité et la méthode fonctionnelle en droit comparé", *Mélanges en l'honneur d'Imre Zajtay*, Tubinga, 1982, pp. 1-6. La comprensión del término "funcional" es importante a fin de despegarlo de su relativa ambigüedad. Vid. también K. Neumayer, "Freundes Recht aus Bürcchen, fremde Rechtswirklichkeit und die funktionelle Dimension in den Methoden der Rechtsvergleichung", *RabelsZ*, vol. 34, 1970, pp. 411-426, quien brinda elementos para la necesaria apreciación del Derecho en acción (*Rechtstatsachen*).

cincuenta, y en ningún caso supone un abandono del primero³⁶. Antes bien, la evolución señalada se va plasmando mediante la configuración dinámica de un permanente camino de ida y vuelta entre estructura y función, que permite la aprehensión global y realista del Derecho que indicáramos. Exactamente lo mismo se produce en el ámbito concreto del empleo del método comparativo³⁷. El denominador común de las teorías elaboradas desde esta perspectiva³⁸ estriba precisamente en la búsqueda de una apreciación a la vez general y profunda de los ordenamientos examinados, atendiendo a

36. Vid. la autorizada opinión de N. Bobbio en el Prólogo a la edición castellana de su *Teoría general del Derecho*, trad., Madrid, 1991, pp. 9-10 y, con más amplitud, en "El análisis funcional del Derecho: tendencias y problemas", *Contribución a la teoría del Derecho*, trad., Valencia, 1980.

37. Vid. S. Rozmaryn, "Les grandes controverses du droit comparé", en M. Rotondi (dir.), *Inchieste...*, op. cit., pp. 580-582.

38. Cabe mencionar la *Stil-Doktrin* (teoría del estilo) propuesta por K. Zweigert en "Zur Lehre von den Rechtskreisen", *XXth Century Comparative and Conflicts Law. Legal Essays in honor of Hessel R. Yntema*, Leyden, 1961, pp. 42-55 y adoptada con alguna variación en id. y H. Kötz, *Introduction to Comparative Law*, vol. I (*The Framework*), 2ª ed. rev., trad., Oxford, 1987, la teoría de los elementos determinantes de L.-J. Constantinesco, *Traité...*, op. cit., t. III, pp. 164 ss., esp. 227-235, y la explicada por J.H. Merryman en "Modernización...", loc. cit. A diferencia de las dos primeras, ésta no se plantea con el objetivo de plasmar una clasificación de familias jurídicas y ha alcanzado matizadas aplicaciones prácticas.

los elementos jurídicos y extrajurídicos que caracterizan tanto su "en sí" cuanto su "para sí"³⁹.

2. ALCANCE EN LA LLAMADA FAMILIA JURIDICA LATINOAMERICANA

9. Las medulares diferencias observadas entre las dos corrientes generales de actuación del método comparativo no presentan gran relevancia respecto a la identificación de un "Derecho latinoamericano", ya que la gran mayoría de las clasificaciones obtenidas por una u otra vía no pasan de considerar a éste como un sector de la familia romano-germánica, continental, del Derecho civil o, con mayor amplitud, occidental, según las distintas concepciones. Son pocos los estudios que le reconocen cierta "originalidad". Esto no implica, evidentemente, negar la adscripción al tronco común romano-germánico, sino que intenta, con diferentes alcances, demostrar los perfiles propios que ha ido adquiriendo aquél en su evolución (*nomogenetics*), distinguiéndose así de la rama latina o francesa.

39. Lo que F. Schmidt denomina método "multi-axial", en "The Need for a Multi-Axial Method in Comparative Law", *Festschrift für Konrad Zweigert*, Tübinga, 1981, pp. 525-536.

En buena parte de los casos, la idea se ha limitado a agrupar los ordenamientos de la región, sobre todo desde una perspectiva latinoamericana⁴⁰. Sin embargo, en algunas construcciones desarrolladas en España⁴¹, la comprensión de dicha familia abarca al ordenamiento de este país, haciéndola así ibérica y americana. Tal extremo no puede sorprender si se tienen en cuenta los lazos históricos y la importancia que se le han otorgado desde los campos más variados. Resulta de particular relevancia el efecto que han causado los trabajos españoles sobre no pocos estudiosos de otros países

40. Las tesis más conocidas se encuentran en C. Bevilaqua, *Resumo das lições de legislação comparada sobre o direito privado*, 2ª ed., Bahía, 1897, pp. 73 ss. y E. Martínez Paz, *op. cit.*, pp. 154 ss.

41. Con el antecedente de las parcas referencias de F. de Solá Cañizares y J. Castán Tobeñas, la más rigurosa y la que cuenta con mayor proyección es la realizada, en sucesivos trabajos, por J.Mª Castán Vázquez. Vid. especialmente, además de la obra citada, *La influencia de la literatura jurídica española en las codificaciones americanas*, Madrid, 1984. Cf. la repercusión de aquellas ideas en H. Eichler, "Codificación de Derecho Civil y Teoría de los Sistemas de Derecho (Algunas consideraciones acerca de un futuro sistema del Derecho Civil)", *Rev. Fac. Der. Univ. São Paulo*, vol. 68-2, 1973, pp. 229-256, *id.*, "Privatrecht in Lateinamerika", *Osterreichs Rechtsleben in Geschichte und Gegenwart*, Berlín, 1981, pp. 481-507, J.L. de los Mozos, "Algunos aspectos de la influencia hispánica en el Código civil de Andrés Bello", *R.G.L.J.*, 1978, pp. 437-467, L. Moisset de Espanés, "La codificación española y su influencia en el Código civil argentino", *A.D.C.*, t. XLIII, 1990, p. 724 y J. Baró Pazos, *La codificación del Derecho civil en España (1808-1889)*, Santander, 1993, pp. 151-161.

europeos -en particular, de Italia- que han realizado importantes trabajos de investigación sobre el Derecho de los países latinoamericanos. En todos ellos, sin embargo, el reconocimiento de una cierta sustantividad a éste, se opera sobre la base de demostrar la pervivencia del Derecho romano y la relativa impermeabilidad a las influencias de otras concepciones jurídicas⁴².

Inevitablemente, el centro de atracción de gran parte de las distintas teorías esbozadas en torno a este punto, está constituido por los Códigos civiles, que comenzaron a promulgarse en América latina a mediados del siglo XIX⁴³, con algún antecedente más o menos aislado.

42. Vid. P. Catalano, "Sistemas jurídicos. Sistema jurídico latino-americano y Derecho romano", *R.G.L.J.*, t. CXXXI, 1982, pp. 173 ss. -para un breve "anticipo" de sus ideas, cf. *id.*, "Derecho romano y países latinoamericanos", *R.G.L.J.*, t. CXXVIII, 1979, pp. 637-640-, y S. Schipani, "Nota introduttiva", y "Dal diritto romano alle codificazioni latinoamericane: l'opera di A. Teixeira de Freitas", *Studi Sassaresi*, vol. V (Diritto romano, codificazioni e unità del sistema giuridico latinoamericano), Milán, 1981, pp. VII-XXXV y 589-607, respectivamente, y las demás obras contenidas en este volumen. La influencia del Derecho romano sobre las codificaciones latinoamericanas es un tema recurrente. Vid., recientemente, R. Iglesias y M. Morineau, "La influencia del Derecho romano en el Derecho civil mexicano: los códigos civiles de 1870, 1884 y 1928", *Rev. Der. Priv. (México)*, núm. 7, 1992, pp. 51-63.

43. Vid. J.L. de los Mozos, "Perspectivas y método para la comparación jurídica en relación con el Derecho privado iberoamericano", *R.D.P.*, t. LX, 1976, pp. 773-782, esp. 775 ss. A su vez, C. Fernández Sessarego basa toda su argumentación sólo en el análisis de los orígenes

La trascendencia que alcanzaron los Códigos en el continente americano, donde aún hoy pueden visualizarse como el núcleo del monosistema al que aludiera N. Irti⁴⁴, justifica en cierto sentido esta tendencia. No obstante, no dejamos de reconocer que la sola atención a los mismos -especialmente en trabajos no suficientemente documentados- puede llevar a una falta de correspondencia entre el análisis y la realidad jurídica de nuestros días.

10. No deja de ser sorprendente que, sin escapar totalmente de los criterios estáticos, se hayan brindado varios y buenos argumentos al hecho diferencial del Derecho latinoamericano en un trabajo destinado a demostrar la indisolubilidad del vínculo existente entre éste y el Derecho europeo, en especial el francés⁴⁵. El

de algunos códigos latinoamericanos. Vid. "Comparación jurídica y unidades del sistema jurídico latinoamericano", *Rev. de Der. y C. Pol.*, vol. 42, 1978, pp. 43-50. También R. Segal, M. Pinto y C.E. Colautti, "Aperçu sur les systèmes juridiques de l'Amérique du Sud", *R.D.I.D.C.*, 1988, pp. 105-133, parten de los códigos, aunque en un trabajo que incorpora elementos de Derecho público.

44. Vid. "Leggi speciali (dal mono-sistema al poli-sistema)", *L'età della decodificazione*, 3ª ed., Milán, 1989, pp. 117-137.

45. Se trata, por supuesto, del trabajo de R. David, "L'originalité des droits de l'Amérique latine", *Le droit comparé...*, op. cit.. Compárese la conclusión fundamental

dato sorprendente estriba en que después de una completa argumentación acerca de los datos originales de aquél, se concluye con la tesis que se había fijado *a priori*, la unidad del Derecho romano-germánico incluyendo a los ordenamientos latinoamericanos, reduciendo todo a una justificación basada en "las condiciones diferentes de desarrollo y de existencia de los países de Europa y de América"⁴⁶. La falta de precisión de algunos elementos tomados en consideración, no resta méritos a un estudio que presenta, aunque tímidamente, dos cualidades sumamente positivas: la utilización algo desordenada de un germinal método comparativo funcional y la aproximación "mesocomparativa" (referida a una rama del ordenamiento y no a su totalidad o a determinadas instituciones) en el análisis.

Algunas formulaciones imbuídas de un cierto aura funcional que se ocupan concretamente de la cuestión tratada nos llegan desde Latinoamérica⁴⁷. De ellas,

del mismo (p. 172) con los argumentos antes expuestos. No se nos escapa que este artículo fue escrito en 1953 y que puede pensarse en alguna variación posterior en el pensamiento de su autor. Sin embargo, él mismo desvanece esta objeción en el *Preface* a la misma obra, p. 8.

46. *Ibid.*, p. 171.

47. También parece seguir esta tendencia el trabajo de J.L. de los Mozos, "Perspectivas...", *op. cit.*, que reclama una atención prioritaria del "sistema interno" como objeto del método comparativo.

merecen tenerse en cuenta una que aplica la teoría de los elementos determinantes⁴⁸ y otra que sigue el derrotero metodológico de la teoría del estilo⁴⁹. Ambas tienen en común la aplicación formal de uno de los métodos descritos a la justificación de la existencia autónoma de una rama latinoamericana dentro de la familia jurídica romano-germánica; pero mientras la primera busca negar la originalidad, las características específicas, que permitan obtener una argumentación en tal sentido, la segunda lleva un sentido diametralmente opuesto, invocando elementos que descubren una cierta diferencia de estilo en la rama indicada. En realidad, sólo se limita a mencionar un criterio distintivo como "ejemplo típico": el rechazo de la nacionalidad como factor de conexión personal en el D.I.Pr. latinoamericano. Este elemento se coge como rasgo diferencial entre la familia latinoamericana y la constituida por los ordenamientos europeos de marcada influencia en América Latina (España, Portugal, Italia y Francia), arribándose a una clasificación donde conviven junto a las familias

48. A.M. Villela, "Direito romano e sistema jurídico latino-americano", *Rev. Inf. Leg. (Brasília)*, núm. 70, 1981, pp. 119 ss.

49. T.B. de Maekelt, "Reflexiones sobre Derecho comparado", *Libro homenaje a la memoria de Joaquín Sánchez Covisa*, Caracas, 1975, pp. 227-228.

consideradas, la germano-escandinava, la del *common law* y la socialista.

3. LA SITUACION PARTICULAR DEL D.I.Pr.

11. Todo lo hasta ahora señalalado permite afirmar sin ambages que el esquema de análisis clásico del Derecho comparado, aún con sus correctivos funcionales, no resulta aplicable al D.I.Pr.. La idea central de la gran mayoría de los desarrollos teóricos comparativos, que pasaba por la reducción de los ordenamientos jurídicos a determinados tipos (familias jurídicas), choca contra los elementos particulares que presentan las distintas ramas del Derecho⁵⁰. Con alcance general cabe aceptar que cada rama puede responder a diferentes principios e influencias y que, por lo tanto, podrían alcanzar mayor rigurosidad y utilidad práctica las clasificaciones basadas en estudios mesocomparativos.

Sin embargo, cualquier intento de aplicación del método comparativo cuya finalidad única o principal fuera

50. Es ya la idea de K. Zweigert, "Zur Lehre...", *loc. cit.*, p. 45, cuando dice que la teoría de las familias jurídicas está sometida al "*Grundsatz der materiebezogenen Relativität*". Vid. también A. Malmström, *loc. cit.*, pp. 139 ss..

establecer una clasificación de los sistemas de D.I.Pr. no sería satisfactorio. La relativa universalidad de sus conceptos jurídicos propios⁵¹ restaría sentido a los estudios desarrollados desde una perspectiva sustancial, quedando sólo la posibilidad de obtener alguna ordenación basada en elementos parciales como la preeminencia de determinado punto de conexión, el grado de amplitud reconocido a ciertos principios, la presencia de criterios territorialistas o personalistas, etc.. Incluso esta posibilidad resulta limitada ya que elementos como los mencionados suelen aparecer combinados de distinta manera en cada sistema considerado. El razonamiento es válido en el concreto ámbito espacial de América Latina, donde la existencia de algunos rasgos de "originalidad" jurídica tiene escasa importancia en el D.I.Pr.. Tanto en los sistemas autónomos cuanto en los grandes textos convencionales, se constata la influencia desigual de las concepciones doctrinarias clásicas, pintando un panorama donde coexisten varios modelos cargados de matices⁵².

Más allá de considerar que ningún intento clasificador puede escapar a los defectos y las

51. B. Audit, *Droit international privé*, París, 1991, pp. 25-26.

52. Vid. H. Valladao, *op. cit.*, pp. 5-92.

contradicciones, cabe afirmar que la clasificación que se agota en sí misma carece de sentido práctico. La afirmación tradicional según la cual la unificación del Derecho sólo es factible en el marco de una misma familia jurídica, una de las justificaciones habitualmente empleada para elaborar las clasificaciones, cae ante la fuerza de la realidad. En efecto, superadas las ideas que abogaban por una unificación total del Derecho en sentido espacial y material⁵³, queda claro que las posibilidades de unificación dependen de cada materia escogida a tal fin. Una observación imparcial de los convenios reguladores del tráfico privado externo vigentes en el mundo, demuestra que sistemas pertenecientes a diferentes familias jurídicas según cualquier formulación conocida, aparecen vinculados entre sí. Esto significa que en la elaboración de cualquier proyecto de convenio sobre D.I.Pr. (comprendido ahora en su concepción más amplia), así como en los estudios acerca de convenios vigentes, el centro de atención debe situarse en la materia concreta, en los principios que la

53. Cf. A.J. Van Der Helm y V.M. Meyer, *op. cit.*, p. 23.

informan y en los intereses y valores afectados en los sistemas implicados en la tarea codificadora⁵⁴.

Nótese que en principio todas las materias abarcadas por la CIDIP son susceptibles de recibir una regulación en otros foros. De hecho, podrá comprobarse la influencia que los textos emanados de éstos ejercen en general sobre la obra de la instancia americana. Si a este argumento y al anterior se le agregan algunos datos ya conocidos - como la incorporación creciente de Estados miembros de la O.E.A. a convenios elaborados en los otros ámbitos indicados, la preocupación por la regulación de la compatibilidad entre convenios relativos a la misma

54. La pregunta, planteada desde otro ángulo, sería: ¿existen materias susceptibles de codificación universal, inter familias, diferentes de otras que sólo pueden codificarse en el seno de una misma familia jurídica? Y aún más: ¿hasta qué punto la materia impone una determinada metodología para cada unificación? Se trata en consecuencia de indagar de qué forma la materia a unificar se erige en un condicionante objetivo para esta tarea y hasta qué punto esto no resulta contradictorio o paradójico. Ya J. Limpens en varios trabajos dejaba entrever parcialmente esta idea, referida a la unificación del Derecho material. Cf., sobre todo, sus *rapports*, a los V y VI Congresos internacionales de Derecho comparado: "L'étude du droit comparé envisagée comme moyen de rechercher les matières susceptibles d'unification sur le plan international", *Rev. dr. int. dr. comp.*, 1958, pp. 88-98 y (con J. Van Der Gucht) "Inventaire critique des matières qui ont fait l'object de tentatives d'unification du droit dans les pays de Benelux", *ibid.*, 1962, pp. 81-103. Con anterioridad, similar preocupación se constata en el famoso trabajo de A.F. Schnitzer, *De la diversité et de l'unification du droit. Aspects juridiques et sociologiques*, Basilea, 1946, esp. 43 ss..

materia y la abstención de proceder a una codificación regional en determinados núcleos temáticos-, es factible apreciar una barrera que impide parcialmente el desarrollo lógico de un trabajo mesocomparativo. Ello se desprende de la constatación objetiva que demuestra que las posibilidades que le asisten a cada intento codificador en el ámbito internacional dependen en gran medida de la materia a la cual se refiere. Por esta razón decimos que el esquema de realización puntual de la unificación del Derecho se basa -lógicamente- en datos microcomparativos.

Pero si se trata de desarrollar un planteamiento general sobre los ámbitos de producción jurídica y las variaciones metodológicas de la codificación internacional del D.I.Pr. en una región determinada, la situación varía. En dichos casos la comparación funcional deberá concentrarse sobre todo en un análisis de política legislativa respecto de los distintos foros, de las posturas adoptadas en relación con las incorporaciones y, evidentemente, del interés que puede tener la región en llevar a cabo una regulación propia de dichas materias.

Todo parece indicar que la unificación regional responde -y nos parece razonable- más a la identificación de determinados intereses que a la pertenencia a una

familia o a una rama familiar concreta. Incluso, desde otra óptica, no sería nada disparatado pensar que la comunidad de intereses puede ser uno de los elementos más significativos para la definición de una familia jurídica encaminada al fin propuesto. Una cuestión bien distinta es que el razonamiento esbozado para justificar la presencia de intereses regionales llegue a ser satisfactorio en todos los supuestos en que es ensayado.

III. Codificación internacional y codificación interna del D.I.Pr. en América

1. LAS PARTICULARIDADES DEL PROCESO CODIFICADOR AMERICANO COMO PUNTO DE PARTIDA

12. Las puntuales referencias realizadas a lo largo de este trabajo al impacto que tuvieron en el continente americano el desarrollo de la ciencia del D.I.Pr. y el impulso codificador, pueden servir de justificación al conjunto de ideas a partir de las cuales se organiza la exposición. En primer lugar debe apuntarse que, como tendremos ocasión de analizar, el Derecho privado fue tempranamente codificado en la mayoría de los países

latinoamericanos, así como en algunos Estados norteamericanos. Con la exclusión de unos pocos casos en los cuales se produjo un fenómeno de recepción deliberada (prácticamente meras copias) del C.c. francés, puede decirse que las obras de los grandes codificadores de América fueron al menos tan originales como cualquiera de las elaborados posteriormente en Europa⁵⁵.

Ahora bien, la obviedad de esta afirmación no hace perder de vista que los presupuestos y circunstancias originarias de la codificación, no se perciben con la misma claridad al oeste del Océano Atlántico. De manera principal, los elementos de carácter económico que estuvieron en la base del surgimiento del moderno fenómeno de codificación en Europa, difícilmente podían configurarse del mismo modo en países que presentaban unos sistemas económicos y unas relaciones de producción precapitalistas⁵⁶. En los procesos de codificación interna llevados a cabo por los jóvenes Estados de América se aprecia, por el contrario, la acción vigorosa de dos factores que en realidad responden a un sólo hecho generador.

55. Especialmente nos referimos a las obras de A. Bello, A. Teixeira de Freitas y D. Vélez Sársfield.

56. E. Zuleta Puceiro, "Razón y codificación", A.D.C., 1977, p. 587.

En efecto, la necesidad de construir un orden jurídico nuevo que completara en este aspecto a la emancipación política, halló un cauce inmejorable para su realización en la existencia de juristas conocedores por igual de la doctrina científica y del Derecho positivo habido desde el Imperio romano hasta sus días. La inquebrantable decisión de las élites políticas por romper con los viejos esquemas, se canalizó en gran medida a través de una producción jurídica muchas veces distante o incompatible con el medio social al que iba dirigido⁵⁷. Con sus virtudes y defectos, con sus éxitos y fracasos, se trató en general de un esfuerzo encomiable por incorporar a los Estados americanos los valores progresistas y humanistas de las concepciones liberales.

13. A diferencia de lo que sucedería en el ámbito de la producción jurídica convencional, el D.I.Pr. estatal americano no alcanzó un desarrollo sobresaliente. Esto es lógico si se tiene en cuenta que las obras principales - que sirvieron de modelo en el resto de América- se produjeron en el segundo tercio del siglo XIX. Así y todo, la excepcional preparación de los juristas mencionados permitió obtener en algunos casos normas de

57. *Ibid.*

D.I.Pr. divorciadas de las construcciones estatutarias, con estructura perfectamente bilateral, donde la influencia de F.K. von Savigny es clara. Sin embargo, el grueso de los esfuerzos se dedicó -en un impulso que es una característica de los Estados americanos desde su existencia como tales- a la codificación internacional. El crecimiento y la evolución de esta concreta dimensión del D.I.Pr. ahogó en cierta manera el paralelo desarrollo de los sistemas internos. Es preciso dilucidar entonces cada una de las situaciones en las cuales esta particularidad se ha ido produciendo, sin dejar de lado la consideración de las interacciones entre ambos procesos.

2. ARGUMENTOS PARA UNA EXPOSICION SISTEMATICA DE LA CODIFICACION INTERNACIONAL DEL D.I.Pr. AMERICANO

14. En diferentes contextos aunque con criterios generalmente similares, se han realizado distintos intentos de dividir la historia de la codificación internacional del D.I.Pr. americano en etapas más o menos signadas por algunos elementos comunes. Así, encontramos la realizada por M.A. Vieira que establecía, en 1970,

cuatro períodos que comenzaban con el Congreso celebrado en Lima en 1877-1878, caracterizados de la siguiente manera: 1. Hasta 1889, los primeros resultados; 2. De 1889 hasta 1928, la obra del panamericanismo; 3. De 1928 a 1960, la decadencia; 4. A partir de 1960, influencia del proceso de integración latinoamericana en el D.I.Pr.⁵⁸. Cuatro etapas también señala J.L. Siqueiros⁵⁹, coincidiendo en las dos primeras con la clasificación anterior, alargando la duración de la tercera hasta la celebración de la primera Conferencia Especializada Interamericana sobre D.I.Pr. (CIDIP I) en 1975, momento en que da inicio la cuarta. Dentro de la misma línea, L. Pereznieto Castro⁶⁰ sitúa el inicio de la cuarta y última etapa en 1948, año en que se produce la creación de la O.E.A., considerando que es allí donde comienza un proceso institucionalizado para la codificación continental. Otras clasificaciones, en fin, sitúan el

58. "Le droit...", *loc. cit.*. Esta clasificación es repetida, dos décadas más tarde, por S. Biocca y otros, *Lecciones de Derecho internacional privado*, Buenos Aires, 1990, pp. 78-81.

59. Cf. "La codificación del D.I.Pr. en el continente americano", *Jurídica (México)*, núm. 14, 1982, México, pp. 236-237.

60. Cf. "Some Aspects Concerning the Movement for Development of Private International Law in the Americas Through Multilateral Conventions", *N.I.L.R.*, vol. XXXIX, 1992, pp. 243-266.

origen en el Congreso de Panamá de 1826 y repiten, con algunos cambios, los esquemas antes propuestos⁶¹.

Con un criterio más general, se ha dividido este proceso en dos grandes fases: la primera, contiene los intentos por llevar a cabo una codificación global del D.I.Pr., y la segunda, describe la nueva etapa abierta con la labor de las CIDIP, la de la codificación gradual y progresiva. En este punto, no está de más apuntar que una de las reservas realizadas por la delegación argentina al Código Bustamante se refería precisamente a la necesidad de llevar a cabo una codificación del D.I.Pr. "gradual y progresiva"⁶², y que la controversia planteada sobre este objeto se repetiría a lo largo de todo el proceso de intentos fallidos de revisar el Código.

Nosotros preferimos no utilizar ningún criterio de clasificación porque, existiendo esfuerzos paralelos en

61. Es el caso de la ensayada por J.E. Briceño Berrú en "Los tratados latinoamericanos de derecho internacional civil y procesal civil. Su valor y vigencia actuales", *Riv. dir. int. pr. proc.*, 1980, pp. 535-553, quien realiza una división en seis períodos.

62. *Acta final (1928)*, p. 79. La discusión que tuvo lugar en la tercera sesión de la Comisión Tercera de la Sexta Conferencia Panamericana, es reproducida en A.S. de Bustamante y Sirvén, *El Código de Derecho internacional privado y la Sexta Conferencia Panamericana*, La Habana, 1929, pp. 80-85.

distintos ámbitos, resulta muy difícil lograr una clasificación rigurosa, en la cual no queden etapas superpuestas. De tener que inclinarnos por ello, consideramos como válida la última opción descrita⁶³, aunque no dejemos de observar el desequilibrio que entraña. Pero el dato principal estriba en que cualquiera de esas formas de plantear la codificación internacional en América deja de lado la dimensión estrictamente iberoamericana.

15. Con un esquema así concebido, saliendo de la evolución lineal, es difícil encontrar el sitio lógico donde hacer referencia a los aspectos jurídicos de los otros esfuerzos desplegados en pos de la integración regional o subregional. Los textos convencionales vigentes han sido pergeñados al margen de un proceso integrador de carácter global y, de otro lado, los ensayos integradores no han conseguido un andamiaje jurídico sólido, arraigado en el espacio al cual se han dirigido. En otras palabras, integración y Derecho han

63. Así lo hemos expresado en otras oportunidades. Vid. nuestro trabajo "Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 15 de julio de 1989, *Rev. Inf. Leg. (Brasília)*, núm. 111, 1991, pp. 140-142.

recorrido caminos divergentes en América y, sin duda alguna, el del segundo ha sido más afortunado.

No obstante, la presencia de proyectos de nuevo cuño, nacidos o naciendo en un marco de referencia internacional muy diferente al existente en épocas pasadas, fuerza un tratamiento de esta realidad. Y precisamente son estos proyectos los que llevan a situar las cuestiones que plantean en el capítulo 2, dedicado al estudio de la codificación en el ámbito de la CIDIP. Existen al menos dos razones significativas para obrar de este modo. Todos los esfuerzos dirigidos en este sentido en los últimos años incluyendo a los de carácter subregional, tienen un marco de referencia interamericano. Las actitudes más recientes de Estados Unidos y Canadá confirman esta realidad, al igual que los intentos de la O.E.A. por protagonizar la búsqueda del camino que lleve a la remoción de los obstáculos jurídicos que impiden el avance de la integración regional. Pero además, en el propio trabajo que está llevando a cabo dicha Organización se ha plantado el debate sobre las posibilidades que le asisten a la CIDIP para erigirse en cauce de reglamentación de la estructura jurídica de un proceso integrador. Es en suma la eventualidad de hacer converger al menos parcialmente la

integración con las tareas de unificación del D.I.Pr., lo que nos lleva a realizar el tratamiento de esta realidad en el lugar indicado.

Capítulo 1

**CODIFICACION INTERNACIONAL
DEL DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO EN
AMERICA LATINA**

I. Ideas centrales respecto a la codificación internacional del D.I.Pr.

1. MANIFESTACIONES DEL PENSAMIENTO INTERNACIONALISTA

A) *La búsqueda del D.I.Pr. uniforme*

1. Los esfuerzos dirigidos a teorizar y a poner en práctica la codificación del Derecho -y del D.I.Pr. en particular- dentro de cada Estado, encontraron un campo propicio para su desenvolvimiento en la esfera internacional. Fue a partir del último tercio del siglo XIX cuando los impulsos en este sentido comenzaron a producirse con intensidad. La idea de lograr una reglamentación del D.I.Pr. válida para todos los países era pensada como una posibilidad nada remota, sobre todo comparada con la mucho más pretensiosa intención de alcanzar una unificación universal del Derecho en su conjunto. En realidad, aquella idea se extendía por igual al D.I.P., partiendo de una concepción internacionalista -y en algunos casos ciertamente universalista- de la naturaleza del D.I.Pr., que ya estaba presente en la obra

de F.K. von Savigny¹. Con mayor exactitud, debe hablarse no de una extensión al D.I.P. sino de una consideración del D.I.Pr. en tanto sector concreto del primero, que se refleja en el desarrollo de la doctrina de la codificación².

Lo dicho no significa que el fenómeno de la codificación internacional del D.I.Pr. irrumpió de un modo sorpresivo en la época indicada ni que se construyó sobre un terreno baldío. Por el contrario, existían ya entonces no sólo ciertos desarrollos doctrinales de esa idea ("codificación científica"), sino también algunos

1. G. van Hecke ("Universalisme et particularisme des règles de conflit au XXe siècle", *Miscellanea Georges van Hecke*, Amberes, 1985, p. 205) destaca cómo la "conception nettement universaliste de la 'völkerrechtliche Gemeinschaft der miteinander verkehrenden Nationen'", dominaba entonces el pensamiento de los juristas europeos. Cf. la idea de F.K. von Savigny en *Sistema de Derecho romano actual*, trad., t. VI (VIII del original), 2ª ed., Madrid, 1879, pp. 134-138. Vid. asimismo A. Nussbaum, "Rise and Decline of the Law-of-Nations Doctrine in the Conflict of Laws", *Columbia L. Rev.*, vol. XLII, 1942, esp. 191-194 y M. Keller y K. Siehr, *Allgemeine Lehren des internationalen Privatrechts*, Zurich, 1986, p. 178.

2. Vid. D. Anzilotti, "La codificazione del diritto internazionale privato", *Opere di Dionisio Anzilotti*, t. III, Padua, 1960, pp. 17-18 y J.D. González Campos, "La revolución de 1868 y la codificación internacional del D.I.Pr. en Europa", *R.F.D.U.C.M.*, vol. XIII, 1969, pp. 97-98. Sobre la relación entre D.I.Pr. y D.I.P. vid. esp. M. Aguilar Navarro, "Droit international public et droit international privé", *Mélanges Maury*, t. I, París, 1960, pp. 21-25 y M. Keller y K. Siehr, *op. cit.*, pp. 176-193.

convenios internacionales ("codificación positiva convencional") de antigua data. Pero el hecho decisivo, el que caracteriza indudablemente el movimiento que ahora consideramos, se produce a partir de tal momento.

Nos referimos al desplazamiento del eje de la codificación desde el terreno puramente especulativo de las mentes jurídicas hacia el más práctico de la acción política de los Estados, con una vocación internacional de alcance amplio. No debe verse ninguna contradicción entre esta constatación y la existencia previa de tratados sobre materias pertenecientes al D.I.Pr., pues, como ha demostrado certeramente J.D. González Campos, éstos responden a la técnica del acuerdo bilateral, y esta cuestión no encarna sólo un problema de técnica legislativa sino que llega a "la esencia misma del fenómeno de la codificación internacional"³.

En ello reside que el citado autor haya destacado la actuación en este sentido de los hombres del gobierno español surgido de la Revolución de 1868. Concretamente, fue M. Silvela quien llevó a cabo la tarea de abogar por una codificación internacional del D.I.Pr. ante el Gobierno imperial francés, esfuerzo que se distingue por

3. J.D. González Campos, "La revolución ...", *loc. cit.*, pp. 102-103.

las razones apuntadas, de los emprendidos por Holanda e Italia más o menos contemporáneamente con similar finalidad aunque utilizando concepciones diversas⁴. Resulta, sin embargo, un lugar común mencionar como el hito que marca el punto de partida de este movimiento de vasto alcance, el renombrado discurso de Mancini en el I.D.I. - aún reconociendo manifestaciones previas- y la propia Resolución emitida por éste reconociendo la utilidad y, para ciertas materias, la necesidad de celebrar tratados de D.I.Pr.⁵. Esto se debe, básicamente, a que fue la impronta de P.S. Mancini la que suscitó un estado de discusión doctrinal y de convencimiento político que

4. *Ibid.*, esp. 98-102. En la medular descripción de estos intentos, realizada abarcando el punto de vista de los intereses en presencia, el autor va mucho más allá del declarado empeño de valorar el pionerismo español en la empresa codificadora.

5. P.S. Mancini, "De l'utilité de rendre obligatoires pour tous les Etats, sous la forme d'un ou de plusieurs traités internationaux, un certain nombre de règles générales du droit international privé, pour assurer la décision uniforme des conflits entre les différentes législations civiles et criminelles", *Journ. dr. int.*, t. I, 1874, pp. 221-239 y 285-304. *Vid.*, entre los escritos de la época, P.J.L. Pradier-Fodéré, "Des progrès du droit international privé & public", *ibid*, pp. 112-120, D. Anzilotti, *op. cit.*, pp. 20 ss. y F. Laurent, *Droit civil international*, t. I, 1880, Bruselas, pp. 652-665, esp. 662. Asimismo, cf. B. Nolde, "La codification du droit international privé", *R. des C.*, t. 55 (1936), pp. 351-352.

habría de desembocar en la obtención de resultados tangibles a ambos lados del Océano Atlántico.

En Europa, las ideas de P.S. Mancini, tanto en sus aspectos más generales cuanto en la concreta visión respecto ley rectora del estatuto personal, dominaron desde el inicio las realizaciones de la Conferencia de La Haya de D.I.Pr., reunida por primera vez a instancias del Gobierno holandés en 1893⁶. Previamente, el fracasado Congreso de Jurisconsultos realizado en Lima en 1878, había plasmado un Tratado conteniendo normas de D.I.Pr., y el Congreso Sudamericano celebrado en Montevideo entre 1888 y 1889 había alcanzado por vez primera una reglamentación convencional amplia -por el número de Estados participantes y por la generalidad del ámbito material de los Tratados allí elaborados- de D.I.Pr. dotada de vigencia efectiva, situación que se mantiene en la actualidad. Mientras que en el primero la huella de la Escuela italiana es clara, la reunión de Montevideo y los Tratados allí elaborados han sido vistos como una

6. Vid. M. Gutzwiller, "Das Internationalprivatrecht der Haager Konferenzen. Vergangenheit und Zukunft", *Ann. suisse dr. int.*, vol. II, 1945, pp. 33-35, J. Offerhaus, "La Conférence de La Haye de droit international privé. Expériences et perspectives", *Ann. suisse dr. int.*, vol. XVI, 1959, pp. 28-29 y G.A.L. Droz y A. Dyer, "International Conventions viewed in Terms of the Work Accomplished by The Hague Conference on Private International Law", *An. Jur. Interam.*, 1984, p. 225.

reacción contra aquél y, más concretamente, contra la doctrina consagrada en el mismo⁷.

Si es relativamente accesible y, de otro lado, enriquecedor, llegar a establecer la autoría de determinadas propuestas y la influencia de unas sobre otras, no está de más llamar la atención sobre el exceso que puede entrañar la atribución a una o varias personas de todos o gran parte de los resultados que se obtuvieron en este campo. Los fenómenos complejos como el que analizamos, difícilmente pueden simplificarse hasta un punto tal que permita plantear las cosas linealmente en un esquema de causa-efecto. Del mismo modo, cuando se afirma que la Conferencia de La Haya adoptó los postulados elaborados o sintetizados por P.S. Mancini, no debe pasarse por alto que de los elementos que hemos mencionado como nucleares en su construcción, unos tuvieron mejor y más fiel acogida que otros, acogida siempre consensuada o mayoritaria pero nunca unánime.

Las variaciones en la actitud de la doctrina y de los órganos encargados de la codificación internacional en lo que refiere a la predisposición para aceptar,

7. Más adelante veremos las razones que permiten la producción del curioso dato según el cual las ideas surgidas en Europa hallaron un campo más propicio en América para hacerse realidad.

rechazar o matizar algunos aspectos de los postulados *mancinianos*, no hacen sino convalidar los argumentos anteriores⁸. Si no obstante estas consideraciones, se hacen manifestaciones como la mencionada sin detenerse en un análisis profundo, es porque se persigue el siguiente objetivo: se trata de realizar una situación general previa en la cual se identifiquen los problemas de fondo y metodológicos que presenta la codificación a través de los tiempos, para poder llegar a un correcto diagnóstico de la situación particular del continente americano y, en una búsqueda tal vez demasiado ambiciosa, determinar la existencia o no de una adecuada correspondencia entre un procedimiento de reglamentación típicamente decimonónico y la realidad socio jurídica de nuestros días.

B) *Los problemas suscitados*

2. En el sentido indicado, la primera operación a realizar estriba en la delimitación de diferentes tipos de problemas que, si bien pueden encontrarse y explicarse

8. *Vid.* M. Aguilar Navarro, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 288-289.

ordenados de diversas maneras, es preciso no confundir⁹. Básicamente, la codificación internacional conlleva en primer lugar cuestiones que se refieren fundamentalmente al concepto de D.I.Pr. que se maneja en la empresa codificadora. Así, los componentes internacionalistas o particularistas que dan basamento al concepto, han determinado durante mucho tiempo diversas actitudes hacia la codificación, no limitadas ni al D.I.Pr. ni a la codificación internacional. En segundo lugar aparecen cuestiones atinentes a la definición de una metodología adecuada para llevar a cabo la tarea unificadora y que pueden sintetizarse en las que refieren a la "cantidad" de D.I.Pr. a unificar y las que tratan de determinar cuáles son los instrumentos adecuados para su realización y el ámbito espacial que debe abarcarse.

El color que tiñe en cada caso la actitud citada en primer término, condiciona en gran medida el planteamiento y la elección de la metodología. Existe una relación lógica que no siempre se produce deliberadamente, sino que proviene muchas veces de un

9. Es aplicable aquí lo expresado en el párrafo anterior. Concientes de que cada uno de los problemas que se mencionan podría constituir en principio el objeto de una tesis, nos detendremos en ellos en función de dos parámetros: el desarrollo doctrinal de los mismos y, especialmente, su trascendencia en relación con el objeto de nuestro trabajo.

comportamiento más o menos espontáneo, a menudo movido por una cierta inercia. Ahora bien, las posibilidades de difusión, el alcance real de cada intento codificador, en definitiva, su éxito o su fracaso, dependen considerablemente del cuidado que se tenga en la administración de los datos mencionados.

Debe quedar claro que éstos atienden esencialmente a las primeras etapas del fenómeno de la codificación internacional, es decir -genéricamente-, las que se refieren a la elección de la materia a regular y a la concreta elaboración de las normas internacionales¹⁰. En los sucesivos pasos de incorporación y aplicación¹¹, se

10. En un trabajo dirigido especialmente al D.I.P., pero pleno de elementos útiles para nuestro estudio, R. Ago señala que estas dos etapas del "*iter de la codification du droit international*" comprenden: la primera, además de la determinación del tema, la preparación de informes, su discusión y la redacción de proyectos; la segunda, la convocatoria de una conferencia donde se discutan los proyectos presentados y se adopte un texto según el procedimiento establecido. *Vid.* "La codification...", *loc. cit.*, esp. pp. 102 ss. y "Nouvelles réflexions sur la codification du droit international", *R.G.D.I.P.*, t. 92, 1988, pp. 551 ss..

11. R. Ago ("*La codification...*", *loc. cit.*, pp. 112 ss. y "*Nouvelles...*", *loc. cit.*, pp. 558 ss.) termina el *iter* con la etapa de las incorporaciones, dividida en dos pasos: uno "mínimo", consistente en el consentimiento de los Estados necesarios para lograr la entrada en vigor del texto adoptado, y otro tendente a alcanzar una "verdadera codificación" dotada de una "autoridad" que está en directa relación con el número de Estados parte. Sin embargo, no es sino hasta la aplicación efectiva de dicho texto que el proceso de codificación se completa y demuestra cabalmente su trascendencia. Podrá pensarse que

encontrarán otros elementos de carácter técnico, estrechamente unidos a los intereses de política de producción jurídica de los organismos internacionales codificadores y de los Estados implicados. Ellos, además de determinar parcialmente los resultados de cada esfuerzo, se erigen en parámetros indispensables para evaluar la procedencia misma de la codificación internacional a la luz de los obstáculos que se le oponen. Al ser comparativamente los que menos atención han recibido, sobre todo en el específico ámbito geográfico de nuestro estudio, se convierten en prioritarios centros de atención.

la cuarta etapa entra ya en la órbita estatal, dejando entonces el ámbito puramente internacional. Pero lo mismo sucede parcialmente con las incorporaciones y, además, la objeción no valdría en aquellos casos en que la aplicación o un cierto control de la misma es concedido a un órgano internacional.

2. PERFILES DE LA ANTINOMIA INTERNACIONALISMO-NACIONALISMO

A) Caracterización de las actitudes

3. Siempre que se ha pretendido definir las doctrinas que conforman la base sobre la que se ha venido construyendo tanto la teoría del D.I.Pr. cuanto el D.I.Pr. positivo, se ha arribado a resultados poco satisfactorios. Las posibilidades de delimitación entre unas y otras no está siempre clara y la adscripción de los autores a una u otra suele no ser terminante. Además, en cada uno de esos intentos se ponen de relieve elementos diferentes, de manera tal que aquellos que son característicos en algunas construcciones, en otras no son siquiera tenidos en cuenta¹². Sobre lo que no cabe duda es que el clima de internacionalismo imperante en el último tercio del siglo XIX y en los primeros del XX, era

12. Interesantes reflexiones al respecto, se encuentran en M. Aguilar Navarro, *Derecho...*, op. cit., pp. 295 ss., esp. 300-304. Al respecto, basta señalar el tratamiento que realiza (desde una perspectiva española) de las distintas acepciones de "internacionalismo", J.A. Carrillo Salcedo, en "Nacionalismo e internacionalismo en Derecho internacional privado español: algunas reflexiones", *Estudios de Derecho internacional público y privado. Homenaje al Profesor Luis Sela Sampil*, t. II, Oviedo, 1970, pp. 811-822.

el más indicado para permitir un relativamente rápido desarrollo del movimiento hacia la codificación internacional. Dicho ambiente excede ampliamente el ámbito del Derecho, configurándose como una situación general que afecta claramente a lo social y se traduce en una necesidad de llevar al campo internacional la búsqueda de respuestas a los problemas de esa índole¹³.

Dentro del mundo jurídico, concretamente, dicho estado "espiritual" se expresaba mediante la idea según la cual la unificación del Derecho era posible desde un punto de vista de técnica jurídica y deseable políticamente. Pero ambos aspectos no se presentaban así delimitados sino confundidos, y en esa confusión el segundo devoraba al primero, mediatizando muchas veces cuestiones metodológicas y de fondo¹⁴. En este orden de ideas, las producciones doctrinales y en general las manifestaciones de los juristas de la época, rebosaban

13. Cf. J.D. González Campos, "La revolución ...", *loc. cit.*, p. 84.

14. R. David, *Tratado...*, *op. cit.*, pp. 138-139, resalta este extremo señalando que la unificación "se ha emprendido a menudo dentro de un puro impulso de universalismo o internacionalización, y se ha querido llegar al punto de destino antes de recorrer el camino necesario para llegar a él".

una "confianza optimista y juvenil"¹⁵, que hacía perder de vista las aristas problemáticas de la codificación internacional.

El idealismo internacionalista proveniente del liberalismo ideológico y político entonces en boga, provocaba una postura en cierta medida "ingenua" frente a los obstáculos a salvar y frente a las divergencias observables en los ordenamientos jurídicos¹⁶. Dicha ingenuidad no parece predicable en cambio de las motivaciones que guían los intentos de unificación. En este campo queda claro, sobre todo en determinadas materias, que existen intereses económicos que aconsejan un movimiento en este sentido, liderado por los representantes de las burguesías nacionales en el poder¹⁷. El hecho de que los juristas se muevan en general por otros carriles no modifica este dato.

En el D.I.Pr. la situación descrita adquirió ribetes peculiares, al influjo de la exaltación de un internacionalismo que admite matizaciones importantes.

15. Así se refiere B. Nolde, "La codification ...", *loc. cit.*, p. 352, al texto surgido de la segunda sesión del I.D.I. (La Haya, 1875).

16. Vid. J.D. González Campos, "La revolución ...", *loc. cit.*, p. 111.

17. Cf. H.C. Gutteridge, *op. cit.*, p. 197.

Sintéticamente, se hace referencia a la distinción, dentro de esta vasta concepción internacionalista, entre doctrinas llamadas asimismo internacionalistas y doctrinas universalistas. No obstante las dificultades apuntadas al comienzo de este epígrafe y el riesgo que la falta de un análisis pormenorizado entraña, procede subrayar al menos^{*} algunas observaciones que se desprenden de esta ecuación.

En primer lugar, vale la pena insistir en el dato conocido que diferencia la subordinación del D.I.Pr. al D.I.P. en las doctrinas internacionalistas, de los intentos de coordinación entre ambas disciplinas característicos de las universalistas. En aquéllas el decisivo sustrato político provocaba una natural inclinación hacia lo público; el contenido de las segundas, en cambio, era más estrictamente jurídico y se dirigía especialmente a la esfera privada, centrando la atención en las relaciones jurídicas y no en la delimitación del poder legislativo y jurisdiccional de los Estados¹⁸. De estos y otros elementos correspondientes a la primera observación surgirían

18. Para todas estas cuestiones de "matices" entre las doctrinas referidas, *vid.* M. Aguilar Navarro, *Derecho...., op. cit.*, pp. 306-309.

distintos modos de perfilar las normas de D.I.Pr. de fuente convencional.

En segundo término, más allá de las matizaciones apuntadas, es evidente que el D.I.Pr. aparecía como un terreno especialmente apto para desplegar las inquietudes provenientes de la euforia unificadora¹⁹. Incluso es lógico hablar no sólo de una situación propicia, sino también de una "exigencia" de adecuar la reglamentación de las relaciones de tráfico privado externo a la realidad de las mismas, en consonancia con los intereses de la ideología dominante²⁰. En líneas generales, puede afirmarse que si el internacionalismo suponía una actitud favorable hacia el incremento y la diversificación de los intercambios, resultaba casi forzoso crear un marco jurídico nuevo para su regulación que permitiera superar

19. R. David, *Tratado...*, op. cit., pp. 174-177, subraya esta especial proclividad del D.I.Pr., junto al Derecho mercantil y al Derecho del trabajo.

20. A. Nussbaum, op. cit., p. 196, subraya esta idea con un ingrediente importante al decir que "it is evident that the Law-of-Nations doctrine of Private International Law responds to the need of business for greater uniformity and security in international relations. But the "materialistic" interpretation does not tell the whole story. The Law-of-Nations theory express hyperbolically the desire to gain a world-wide background for the science of Private International Law, wich otherwise would be doomed to imperfection and provincialism". A su vez, J.D. González Campos, "La revolución...", loc. cit., p. 71, destaca la existencia de este interés en la actitud española de 1869.

los inconvenientes causados por las divergencias entre los sistemas estatales de D.I.Pr.²¹.

El excesivo internacionalismo de las doctrinas mencionadas encontraría a partir del filo mismo del cambio de siglo, un contrapeso contundente: el particularismo. He aquí la tercera observación que cabe en este apretado contexto, la que hace hincapié en la reacción que habría de buscar los fundamentos de las normas de D.I.Pr. en los ordenamientos internos²². Según esta concepción, son los criterios imperantes en el foro los que adquieren mayor relevancia a la hora de buscar las soluciones que exige el tráfico jurídico externo. Las consecuencias de esta actitud se resumen, de un lado, en el cuestionamiento del idílico principio de igualdad entre todos los ordenamientos²³ y, de otro, en la

21. Distintas posturas acerca del alcance y las posibilidades de esta modificación pueden apreciarse en D. Anzilotti, *op. cit.*, pp. 27 ss. y en T.M.C. Asser, "Droit international privé et droit uniforme", *R.D.I.L.C.*, t. XII, 1880, pp. 5-22.

22. Los exponentes más notables en el origen de este movimiento fueron F. Kahn (*Vid.* especialmente "Gesetzeskollisionen. Ein Beitrag zur Lehre des internationalen Privatrechts", *Iherings Jahrbücher*, vol. 30, 1891, pp. 1-143), E. Bartin ("De l'impossibilité d'arriver à la suppression définitive des conflits de lois", *Journ. dr. int.*, t. 24, 1897, pp. 225-255 y 466-495) y D. Anzilotti (*op. cit.*).

23. Elemento esencial de cualquier doctrina internacionalista. *Vid.* A.E. von Overbeck, "Divers aspects de l'unification du droit international privé,

atención preferente por los problemas generales que presenta el funcionamiento de la norma de conflicto: calificación, orden público y aplicación del Derecho extranjero²⁴.

B) *La evolución en la traducción positiva
de las construcciones teóricas*

4. Así planteada la configuración de las doctrinas iusprivatistas internacionales a comienzo del siglo XX, debe mencionarse también la evolución de las mismas o, dicho con mayor precisión, el desarrollo alcanzado por la codificación internacional más allá de las discusiones científicas. Con el correr de los años, el entusiasmo llegó a transformarse en escepticismo, actitud que tuvo su cenit en el período de entreguerras²⁵. La crisis del internacionalismo -casi podríamos decir el "desengaño" respecto de él- significó un notable impacto sobre el movimiento unificador. En la medida en que una visión más

spécialement en matière de successions", R. des C., t. 104 (1961-III), pp. 535-536.

24. M. Aguilar Navarro, "Droit...", *op. cit.*

25. Las vicisitudes de este proceso pueden verse en A.E. von Overbeck, *op. cit.*, p. 537 ss.

realista respecto de la naturaleza del D.I.Pr. y sus mecanismos de producción jurídica fue ganando adeptos, todo lo que se sostenía sobre una base ideal comenzó a ponerse en duda. Correlativamente, tanto el liberalismo económico cuanto la situación de relativa armonía internacional en el plano político habían sufrido un retroceso tan significativo, que los planteamientos científicos basados en esa realidad dejaron de verse como dogmas inmodificables.

Del mismo modo, los principios que sirvieron de fundamento durante los primeros años de los trabajos de codificación internacional del D.I.Pr., fueron perdiendo su autoridad. Así, actitudes generalizadas -con excepciones, por supuesto- tales como la aceptación de la nacionalidad en tanto criterio fundamental rector de las relaciones personales internacionales o el abierto rechazo de la figura del reenvío de retorno, empezaron a perder ese carácter²⁶. Los cambios operados ejercieron una paralela incidencia sobre la obra de los órganos de codificación.

26. *Vid.* A. Nussbaum, *op. cit.*, esp. pp. 203-205 y el duro alegato contra las repercusiones jurídicas del "romanticismo" que efectúa R.D. Kollewijn, "Degenerazione del principio di nazionalità nel diritto internazionale privato moderno", trad., *Dir. int.*, vol. XIII, 1959, pp. 508-525.

En Europa, dentro del período señalado, sólo cabe rescatar algunos esfuerzos como el que representan los convenios ginebrinos de los años treinta. Los resultados de la Conferencia de La Haya, pobres en sus comienzos, desaparecieron prácticamente por un lapso de cincuenta años²⁷. Mientras tanto la obra más ambiciosa del continente americano -el Código Bustamante- vio la luz en esta época marcado por un acusado eclecticismo y la insatisfactoria revisión de los Tratados de Montevideo realizada entre 1939 y 1940 significaría el comienzo de una larga etapa carente de realizaciones y el fin del liderazgo iberoamericano en la tarea codificadora. No obstante ello, muchos y renombrados autores siguieron manteniendo un reflexivo optimismo en la codificación internacional que cristalizaría más tarde²⁸.

5. Las ideas internacionalistas ya no fueron las mismas y el auge del que gozaron no volvería, pero a partir de la segunda mitad del siglo la tendencia hacia

27. Cf. J. Offerhaus, *op. cit.*, pp. 29-31.

28. Vid. especialmente un resumen de las ideas de J. Maury a este respecto, en "Règles générales des conflits de lois", *R. des C.*, t. 57 (1936-III), pp. 450-457.

la unificación cobró nuevos bríos²⁹. Las bases de este resurgir deben buscarse especialmente en la influencia de la *dritte Schule*, que llevó a cabo una especie de síntesis entre las posturas ciertamente antagónicas mencionadas más arriba, a la luz de la impronta de E. Rabel³⁰. El postulado central de esta doctrina se sitúa en el recurso al D.I.Pr. comparado, en la inteligencia de que la constatación de las diferencias que presentan los sistemas estatales de D.I.Pr. entre sí no debe obstaculizar los intentos por encontrar una coordinación basada en la inducción de caracteres comunes³¹.

29. R. de Nova, "Recenti sviluppi in diritto internazionale privato", *Dir. int.*, vol. XXII, 1968, pp. 20-65, esp. 20-21.

30. La concepción de este autor, explicada en "Das Problem der Qualifikation", *RabelsZ*, vol. 5, 1931, pp. 241-288, se desarrolla cabalmente a lo largo de los cuatro volúmenes de *The Conflict of Laws. A Comparative Study*, 2ª ed., Michigan, 1958. Cf. G. van Hecke, *op. cit.*, pp. 205-206, J.A. Carrillo Salcedo, "Le renouveau du particularisme en droit international privé", *R. des C.*, t. 160 (1978-II), pp. 190-191, F. Rigaux, "Science comparative et droit positif", *Festschrift für Karl H. Neumayer...*, *op. cit.*, p. 514-515 y B. Grossfeld, *The Strength and Weakness of Comparative Law*, trad., Oxford, 1990, p. 21.

31. Para la comprensión de los elementos característicos de esta doctrina, *vid.* K. Zweigert, "Die dritte Schule im internationalen Privatrecht", *Festschrift für Leo Raape*, Hamburgo, 1948, pp. 35-52. No debe perderse de vista, sin embargo, que ya F. Kahn decía que el Derecho comparado sería la tercera doctrina que vencería en la estéril disputa entre internacionalismo y nacionalismo, aclarando la antigüedad del recurso al Derecho comparado ("no es una innovación"). *Vid.* "Rôle,

El manejo del método comparativo implica, de un lado, el conocimiento de "todas" las regulaciones de D.I.Pr. e incluso de las legislaciones materiales y, de otro, se erige en mecanismo ineludible respecto a la unificación. Codificación internacional (del D.I.Pr.) y Derecho comparado aparecen así como dos elementos inseparables. Es obvio que éste desborda aquélla, es decir, que la actuación del método comparativo incluso cuando se encamina hacia el mismo fin de atenuar las diferencias entre sistemas, puede hacerse también desde un exclusivo ángulo estatal. Mas los resultados que pueden esperarse de esta segunda vía son lógicamente más limitados³². Puede decirse, de este modo, que la

fonction et méthode du droit comparé dans le domaine du droit international privé", *Bull. soc. lég. comp.*, t. 29, 1900, pp. 406-416.

32. Vid. A.E. von Overbeck, *op. cit.*, pp. 538-548, quien afirma: "la conception internationaliste et la méthode comparative, appliquées aux règles nationales, ne suffisent pas à elles seules pour vaincre les discordances des systèmes particuliers de droit international privé. Des règles supranationales devront être construites à partir de données positives des législations internes et des règles de conflits nationales". El recurso al Derecho comparado desde una actitud nacionalista puede verse en E. Balogh, "Le rôle du droit comparé dans le droit international privé", *R. des C.*, t. 57 (1936-III), pp. 578-582 y 704-705. Dirigido hacia las dificultades para la elaboración de un "sistema interamericano" de D.I.Pr., H.E. Yntema, "Comparative Research and Unification of Law", *Mich. L. Rev.*, vol. 41, 1942, pp. 261-268.

tendencia internacionalista, la construcción de un D.I.Pr. de fuente internacional con bases sólidas, no parte ya del rechazo a las realidades particulares sino que opera con ellas³³.

Los términos otrora antagónicos han dado lugar a una situación donde la preocupación por contemplar al máximo los intereses particulares del Estado coexiste con una producción internacional creciente³⁴. No puede decirse que la actitud estatal frente a la codificación del D.I.Pr. se mantiene en el espíritu del imperativo categórico de I. Kant presente en el "Proyecto Benelux"³⁵. Sin embargo, resulta claro que las manifestaciones "particularistas" que han tomado carta de

33. Vid. H. Batiffol, "Réflexions sur la coordination des systèmes nationaux", *Choix d'articles*, París, 1976, pp. 199-212, esp. 201-202.

34. Señala con agudeza E. Pecourt García, en el Prólogo a C. Esplugues Mota (Dir.), *Código de Derecho internacional privado español*, Madrid, 1989, pp. 15-18, que es la propia consideración del D.I.Pr. como Derecho estatal *internacionalmente relevante* lo que genera la necesidad de abandonar los "viejos enfrentamientos sobre la naturaleza" del D.I.Pr. y de pensar el D.I.Pr. "a partir de la realización por parte de éste de los valores jurídicos permanentes -justicia y seguridad-". Dicha necesidad se profundiza con la progresiva matización del carácter "estatal".

35. Sobre el alcance de este espíritu, vid. G.S. Maridakis, "Considerations sur l'activité de l'Etat concernant l'énoncé de règles de droit international privé", *Ius et lex. Festschrift Gutzwiller...*, loc. cit., pp. 253-261.

ciudadanía en el D.I.Pr. no impiden el citado crecimiento³⁶.

Por el contrario, en los últimos veinte años se ha producido una verdadera explosión convencional³⁷ que ha coincidido con la elaboración de los nuevos sistemas nacionales. Sobre las definiciones metodológicas de la codificación internacional los organismos codificadores han adquirido una considerable experiencia. El problema principal ahora parece haberse trasladado al ámbito técnico, especialmente a las cuestiones de incorporación y aplicación³⁸. En la búsqueda de soluciones válidas para éstas, no obstante, debe tenerse en cuenta su dependencia respecto de los problemas de fondo y de método. Pero eso no es suficiente; no debe olvidarse que existe una

36. Vid. J.A. Carrillo Salcedo, *Le renouveau...*, op. cit., esp. pp. 192-198 y 247-251. Las tres manifestaciones señaladas son: las normas materiales imperativas, las normas materiales especiales de fuente interna y la tendencia a la aplicación generalizada de la *lex fori*.

37. En parte producto de un nuevo entendimiento de la idea de "cooperación internacional" en este campo. Vid. J.H.A. van Loon, "The Increasing Significance of International Co-operation for the Unification of Private International Law", *Forty Years on: The Evolution of Postwar Private International Law in Europe*, Deventer, 1990, pp. 101-122.

38. Cf. los juicios críticos de H. Kötz, en "Rechtsvereinheitlichung - Nutzen, Kosten, Methoden, Ziele", *RabelsZ*, vol. 50, 1986, pp. 3-13.

estrecha relación entre los elementos que informan tanto la situación política internacional cuanto la particular de cada Estado actual o eventualmente implicado en un proceso de codificación y la actitud asumida por éstos frente a la puesta en práctica de dicho proceso.

II. Los esfuerzos precursores en América

1. LOS PRIMEROS CONGRESOS HISPANOAMERICANOS

A) Génesis del proceso codificador

6. Al hablar de los primeros pasos es inevitable referirse a aquellos que se dieron prácticamente en el vacío, sin ningún tipo de apoyo doctrinal, y con un objetivo muy diferente al que se trazaría más tarde. Y es así como aparece la figura de Simón Bolívar³⁹, con una

39. Destacamos esta figura no por constituir un lugar común, sino porque su iniciativa fue la primera que cristalizó en un texto concreto de Derecho internacional para los Estados americanos. *Vid.*, entre otros, D. Colombo Inaz de Puig y J.C. Puig, "El fracaso de la iniciativa latinoamericana en el panamericanismo. Ensayo de interpretación socio-política", *An. Inst. Cs. Pol.*, t. II, 1969/70, pp. 43-47, R. Gallardo, *Las Constituciones de la República Federal de Centro-América*, Madrid, 1958 y C. García Bauer, *Universalismo y panamericanismo*, Guatemala, 1968, pp. 38-39.

idea que superaba con creces la de la codificación del Derecho internacional. Con más exactitud, podríamos decir que ésta se presentaba como un mero instrumento del imperativo político que marcaba el paso siguiente de la independencia: la construcción de la "Patria Grande" americana. Para ello era menester establecer una alianza política entre todos los países centro y sudamericanos.

Estados Unidos también era tenido en cuenta para esta empresa, y así lo demuestra el hecho de que su gobierno haya sido invitado a la mayoría de los congresos que se realizaron⁴⁰. No obstante, la política exterior norteamericana era muy cuidadosa de fomentar la constitución de lazos jurídicos que pudieran trazar obstáculos a su accionar independiente. Sus demostraciones de simpatía y apoyo al proceso de emancipación de las naciones latinoamericanas deben

40. Sobre el particular es menester apreciar el dato que ofrece S. Matos Ochoa, en *El Panamericanismo a luz del Derecho internacional*, Caracas, 1980, pp. 37-38 y 52, según el cual Bolívar se vió sorprendido, durante su permanencia en Perú, por la invitación que el vicepresidente de Nueva Granada, F. Santander, había cursado al gobierno de los Estados Unidos para participar en el Congreso de 1826, participación que aquél rechazaba. En efecto, en una carta dirigida a Santander, puede leerse la opinión de Bolívar: "Yo considero que los americanos no deben ser aceptados en el Congreso de Panamá" (S. Bolívar, *Obras Escogidas*, vol. II, Nueva York, 1951, p. 543). Vid., en el mismo sentido, I. Liévano Aguirre, *Bolívar*, Caracas, 1988, p. 444.

entenderse, en este sentido, como parte de una estrategia - de la que también participaba Gran Bretaña - destinada a forzar el aislamiento entre España y sus antiguas colonias⁴¹. Sólo así puede comprenderse el interés de los Estados Unidos por reconocer rápidamente, el 19 de marzo de 1822, las primeras independencias de aquellas naciones⁴². En el mismo sentido se inscribe el pronunciamiento de la célebre "Doctrina Monroe", el 2 de diciembre de 1823, que se resumiría con la frase "América para los americanos"⁴³.

41. Queda claro que España alimentaba objetivamente esta política mediante su indisumalada nostalgia del antiguo Imperio. Vid. C. Barcia Trelles, "La doctrine de Monroe dans son développement historique, particulièrement en ce qui concerne les relations interaméricaines", *R. des C.*, t. 32 (1930-II), esp. pp. 408-425.

42. Vid. A.P. Whitaker, *The United States and the independence of Latin America. 1800-1830*, Baltimore, 1941, cit. en D. Colombo Imaz de Puig y J.C. Puig, "El movimiento por la unidad interamericana. Ensayo de sistematización en base al método estructural", *R.D.I. y Cs. Dip. (Rosario)*, núm. 37/3, 1970, p. 25. Desde otra óptica, para un conocimiento de las relaciones en este período entre Estados Unidos y los Estados de América Latina, escrito en términos altamente laudatorios para aquéllos, vid. F.J. Urrutia, "La codification du droit international en Amérique", *R. des C.*, t. 22 (1928-II), pp. 95-105.

43. Sobre el cambio de sentido operado por la "Doctrina Monroe", pueden consultarse S. Planas Suárez, "L'extension de la doctrine de Monroe", *R. des C.*, t. 5 (1924-IV), pp. 271-365, J.M. Yepes, "La contribution de l'Amérique Latine au développement du droit international public et privé", *R. des C.*, t. 32 (1930-II), pp. 736-737

7. Es en ese contexto en el cual se produce el Congreso de Panamá de 1826⁴⁴, en virtud de una convocatoria hecha por Bolívar dos años antes⁴⁵. Esta se apoyaba en tres pilares fundamentales: el establecimiento de una liga de las naciones americanas, basada en una ley común internacional; la instauración de una autoridad arbitral; y la constitución de una alianza militar defensiva. Concurrieron a Panamá, delegados de Colombia (que abarcaba también las actuales Repúblicas de Ecuador, Panamá y Venezuela), la entonces República Mayor de

y C. Barcia Trelles, *op. cit.*. También resulta ilustrativo J. López, "La Doctrina Monroe y el Congreso de Panamá", *La Reforma Social*, La Habana, 1916, pp. 359-384.

44. Actas del Congreso y texto del Tratado en *Der. Integr.*, núm. 14, 1973, pp. 268 ss. ("Integración latinoamericana: Documentos históricos", pp. 268-308). Vid. A.J. Uribe, *La unión interparlamentaria y los progresos del Derecho internacional. El Centenario del Primer Congreso Panamericano*, Bogotá, 1926, Ch.G. Fenwick, *The Organization of American States*, Washington, 1963, pp. 14-19 y J.J. Caicedo Castilla, *El Derecho internacional en el Sistema Interamericano*, Madrid, 1970, esp. pp. 15-30.

45. En realidad, esta idea venía siendo esbozada por Bolívar al menos desde 1815, año en el que ya formulara, en Kingston (Jamaica), su intención de reunir un congreso en Panamá para "tratar y discutir sobre los intereses de la paz y de la guerra...". Vid. S. Bolívar, *Obras Completas*, Compilación y notas de V. Lecuna, t. I, La Habana, 1947, pp. 159 ss. y A. Barriga Ledesma, *Bolívar y el Derecho internacional americano*, Quito, 1983.

Centroamérica⁴⁶, México y Perú. Los gobiernos de Chile, Estados Unidos⁴⁷ y Brasil, habían aceptado la invitación, pero los representantes de los dos primeros llegaron tarde, y el último prefirió finalmente no enviarlos⁴⁸. Por su parte, desde el Río de la Plata, llegó una tajante negativa vinculada, en parte, al protagonismo que venía desempeñando Colombia⁴⁹. Como dato significativo, merece destacarse la invitación cursada a Gran Bretaña, a fin de que participe como observadora⁵⁰, hecho que demuestra la

46. Vid. los documentos reunidos en J. Rodríguez Cerna, *Centroamérica en el Congreso de Bolívar*, 2ª ed., Guatemala, 1956.

47. Las idas y venidas que precedieron a la aceptación norteamericana, son relatadas en S. Matos Ochoa, *op. cit.*, pp. 39-51. Asimismo, las interesantes instrucciones del gobierno de los Estados Unidos a sus representantes, se pueden consultar en R.A. Martínez, *De Bolívar a Dulles*, México, 1959, pp 206-215. Vid. también la preocupación de este país por el futuro de Cuba y Puerto Rico y el tema la esclavitud en los documentos consultados por R.F. Seijas, *El Derecho internacional hispano-americano (público y privado)*, Caracas, 1884, pp. 24-29.

48. S. Matos Ochoa, *op. cit.*, pp. 51-52. Según R.A. Martínez, Brasil era visto por Bolívar como una potencial quintacolumna de las potencias europeas (*op. cit.*, p. 45).

49. R.A. Martínez, *op. cit.*, p. 61 e I. Liévano Aguirre, *op. cit.*, pp. 443-445. En realidad, Bolívar tampoco parecía muy convencido de invitar a Argentina. Cf. J.J. Caicedo Castilla, *loc. cit.*

50. Según I. González Niño, la idea de Bolívar era que este país se constituyese en "árbitro de los destinos de Suramérica" (*Simón Bolívar, Precursor del Derecho Internacional Americano*, Bogotá, 1985, pp. 85-86),

simpatía -acaso estratégica- con que se veía a este Estado desde América.

Puede apreciarse que la agenda de la reunión estaba dominada por apremiantes temas relativos a las relaciones internacionales, aunque una incipiente idea codificadora del Derecho internacional público se hizo presente en las sesiones del Congreso, mediante la moción del delegado peruano Pando en la cual se solicitaba la pronta iniciación de los trabajos de codificación del "Derecho de gentes" en el continente americano, que no fue aprobada⁵¹. El Congreso adoptó no obstante, el 15 de julio de 1826, un Tratado de Unión, Liga y Confederación, en el cual se establecía claramente la validez territorial de las leyes de cada uno de los Estados parte y, en una disposición adicional, se planteaba la necesidad de codificar el Derecho internacional⁵². Por su

opinión que no debiera causar sorpresa alguna. Cf. G. Masur, *Simón Bolívar*, Caracas, 1987, pp. 489-491 y, esp., D. Colombo Imaz de Puig y J.C. Puig, "El fracaso...", *loc. cit.*, pp. 66-74.

51. Cf., entre otros, J. Constantinoff, *La codification du droit international et l'unification législative*, París, pp. 26-27. T.B. de Maekelt, *Conferencia Especializada de D.I.Pr. (CIDIP-I)*, Caracas, 1979, p. 12.

52. Vid. *Der. integr.*, núm. 14, 1973, p. 275 ("Integración ...", *loc. cit.*). Cf. J. Samtleben, *op. cit.*, p. 8 y J.M. Yepes, *Del Congreso de Panamá a la Conferencia de Caracas 1826-1954*, t. I, Caracas, 1955, pp. 109 ss.

parte, los arts. 24 y 25 del Tratado contemplaban cuestiones relativas a nacionalidad y extranjería consagrando la llamada ciudadanía continental⁵³.

Dicho Tratado ha sido visto después como el primer antecedente de posteriores pactos constitutivos de organizaciones internacionales de carácter universal o regional⁵⁴. A nuestro entender, si cabe algún parentesco con el mismo, sólo puede referirse -y muy lejanamente, por cierto- al controvertido Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en 1947 en el marco de la Conferencia Interamericana para el mantenimiento de la

53. Cf. D. Uribe Vargas, *Panamericanismo Democrático. Bases para una transformación del Sistema Continental*, Bogotá, 1958, pp. 152-153. Texto en: *Sistema interamericano a través de tratados, convenciones y otros documentos* (compilación anotada por F.V. García-Amador), vol. I, Washington, D.C., 1981, pp. 8-18.

54. Vid. J.M. Yepes, "La contribution...", *loc. cit.*, pp. 702-706, donde este autor realiza un análisis comparativo del Tratado de Panamá y el Pacto constitutivo de la Sociedad de las Naciones, celebrado casi cien años después, destacando el carácter precedente de aquél. Otros, prefieren caracterizar al mencionado Tratado y al pensamiento de su iniciador, como el origen de la actual O.E.A. (M.A. Vieira, "Le droit ...", *loc. cit.*, p. 394). I. González Niño va más allá, caracterizando a Bolívar como "el Precursor" de la ONU, la ALALC, el Parlamento Andino, el Pacto Andino y la Integración Latinoamericana (*op. cit.*, p. 87). Vid., para una opinión contraria, aunque carente de argumentos, E. Fraga Iribarne, "Bolívar y la idea federal", *Cultura Hispánica*, núm. 18, 1950. Para H.E. Yntema, *op. cit.* pp. 261-268, lo que se demuestra es un pionerismo respecto de la unificación del Derecho.

paz y la seguridad del continente, celebrada en Río de Janeiro. Finalmente, cabe mencionar que una segunda sesión del Congreso de Panamá debía reunirse, según lo habían acordado los delegados allí presentes, en 1827 en Tacubaya (México). No obstante la presencia en este lugar de representantes del país anfitrión, Centroamérica, Nueva Granada y Estados Unidos, no se llegaron a realizar ni siquiera las sesiones preparatorias⁵⁵.

8. La idea de alcanzar una codificación sobre determinados temas de Derecho internacional, estuvo presente en las numerosas propuestas y reuniones que se sucedieron en diversos países americanos a lo largo del siglo XIX. Así, se pueden mencionar las cinco invitaciones realizadas por México entre 1831 y 1842, y la efectuada por Colombia en este último año, todas con el objetivo de realizar un congreso con tal fin⁵⁶. En el mismo sentido deben señalarse los Congresos realizados en

55. Sobre las causas del fracaso, *vid.* I. Liévano Aguirre, *op. cit.*, pp. 453-456. Cf. S. Matos Ochoa, *op. cit.*, p. 54.

56. *Ibid.*, p. 56. Cf. A. Alvarez, *La codification du droit international. Ses tendances - ses bases*, París, 1912, p. 238, D. Colombo Imaz de Puig y J.C. Puig, "El fracaso ...", *loc. cit.*, pp. 74-76 y J. Samtleben, *loc. cit.*.

Lima en 1847-1848 (con la participación de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) y en 1864-1865 (al que asistieron delegados de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y Venezuela), como así también los infructuosos intentos realizados por Colombia y Perú en 1867, para reunir nuevamente el Congreso de Plenipotenciarios en esa ciudad⁵⁷; el Congreso Continental que tuvo lugar en Santiago de Chile en 1856 (con el concurso de Chile, Ecuador y Perú); y el que se llevó a cabo en Washington⁵⁸ en el mismo año (del cual tomaron parte Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Venezuela). Se inscribe en igual línea el proyecto de codificación del Derecho internacional público de los Estados americanos presentado por el presidente de Venezuela J.G. Monagas⁵⁹.

57. Los documentos de esta nueva iniciativa pueden consultarse en *Congresos americanos de Lima*, Recopilación con prólogo de A. Ulloa, t. I, Lima, 1938, pp. 565-575. A juzgar por el contenido de las cartas, las intenciones eran mucho más pretensiosas que los resultados obtenidos (*vid. infra*).

58. En realidad, los dos congresos producidos en 1856 fueron encuentros de los embajadores latinoamericanos acreditados en Santiago y Washington, respectivamente, y no reuniones extraordinarias. Cf. *Congresos americanos de Lima...*, *op. cit.*, p. LXXXV.

59. *Vid.* F.J. Urrutia, *op. cit.*, p. 155.

En las reuniones citadas se celebraron varios tratados⁶⁰, en la mayoría de los cuales se halla siempre presente la exaltación de los ideales de soberanía e independencia, tan caros a los países americanos. Incluso el objetivo buscado en algunos de ellos, como es el caso del Tratado Continental de 1856, era una suerte de unión política, que era rechazada más o menos explícitamente por algunos Estados⁶¹. Precisamente, el origen de todas esas iniciativas y congresos, se halla frecuentemente ligado a la inminencia de una agresión extranjera⁶².

60. Los textos de los tratados celebrados en Lima (1848), Santiago y Washington (1856), y Lima (1865), se encuentran, respectivamente, en: *Congresos americanos de Lima...*, op. cit., pp. 301-333, 613-620, 632-635 y 547-561.

61. Tal era la postura del gobierno argentino frente a cualquier tentativa de este signo. Vid. el intercambio epistolar entre el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país y el Embajador peruano acreditado en Buenos Aires en *Congresos americanos de Lima...*, cit., t. I, pp. 641-681. Allí pueden leerse estas palabras del primero: "La América independiente es una entidad política, que no existe, ni es posible constituir (...). La naturaleza y los hechos la han dividido, y los esfuerzos de la diplomacia son estériles para contrariar la existencia de esas nacionalidades con todas las consecuencias forzosas que se derivan de ellas" (p. 644).

62. "El concepto de peligro común, fue ayer, como lo es hoy, el más poderoso incentivo para la unificación" (discurso de F. Schwalb en "Conmemoración del Congreso Americano de 1864", *Rev. Per. Der. Int.*, núm. 66, t. 25, 1965-1966, pp. 3-41). Es sumamente gráfico al respecto el relato que, sobre las motivaciones que condujeron al Congreso de Lima de 1847, realiza A. Ulloa en *Congresos americanos de Lima...*, op. cit., pp. V-LI.

Otros tratados se refieren a cuestiones tales como correos, relaciones consulares o comercio y navegación, donde puede observarse una tendencia a reglamentar la libre circulación de mercancías y de personas, así como la armonización de tarifas y franquicias⁶³, pero incluso en éstos aparecen normas relativas al Derecho de la guerra⁶⁴. Ninguno de los instrumentos surgidos de estas reuniones alcanzó a entrar en vigor. Desde el punto de vista del D.I.Pr. debe destacarse, sin embargo, que en los mismos se incluían de un modo un poco aislado algunas disposiciones que forman parte del contenido de esta disciplina, como las relativas a reconocimiento mutuo de documentos y decisiones judiciales⁶⁵.

63. Muchas de estas normas guardan cierta similitud, si bien de un modo algo rudimentario, con las que contienen algunos textos legales de la C.E.E.. Por ejemplo: Tratado de Comercio y Navegación, hecho en Lima de 8 de febrero de 1848: arts. 4 (aranceles), 5 (origen), 7 (libre circulación de documentos y sentencias), etc. - *Congresos americanos de Lima...*, cit., pp. 324-233-; Tratado Continental, hecho en Lima de 15 de septiembre de 1856: arts. 1 (ciudadanía americana), 2 y 3 (igualdad de trato comercial), 5 (libre circulación de documentos y sentencias), etc. - *id.*, pp. 613-620-; Tratado de Comercio y Navegación, hecho en Lima el 12 de marzo de 1865: arts. 6, 7 y 8 (moneda única), 9 (libre circulación de personas), etc. - *id.*, pp. 554-561-.

64. *Vid.*, por ejemplo, arts. 9 a 11 del citado Tratado de 1848.

65. El art. 7 del mismo Tratado de Comercio y Navegación, ordena que: "Los contratos celebrados y los documentos otorgados en una de las Repúblicas

La primera vez que aparecen en este ámbito normas de D.I.Pr. más o menos sistematizadas es en el art. VII del proyecto elaborado en 1867, a raíz de las conversaciones que el cuerpo diplomático acreditado en Lima venía realizando desde hacía largo tiempo⁶⁶. Se dispone allí la aplicación de la ley del domicilio del dueño para los bienes muebles, reservándose la *lex rei sitae* para regir las acciones dirigidas contra aquél, y los bienes inmuebles en general. También existen en el proyecto normas sobre competencia judicial internacional y sobre reconocimiento de documentos y decisiones judiciales. Como nota curiosa, cabe indicar que el mismo art. VII

Confederadas tendrán, en cualquiera de las otras, la misma fuerza y el mismo valor que en el país en que hubieren sido celebrados ú otorgados; y las autoridades, jueces y tribunales los harán cumplir, bien sean los contratantes naturales del mismo país, o bien lo sean de otro cualquiera, siempre que el demandado resida en el territorio de la jurisdicción de la autoridad, juez ó tribunal ante quien se le demande". El art. 5 del Tratado Continental de 1856, confiere plena validez en los territorios de los Estados Parte, a los documentos otorgados, a las pruebas actuadas y a las sentencias pronunciadas en el territorio de cualquiera de ellos, con el alcance que den a tales instrumentos las leyes locales. Una disposición similar contiene el Tratado de Washington de 1856. Cf. J. Samtleben, *loc. cit.*, p. 9 y nota 28.

66. El proyecto fue firmado por Bolivia, Chile y Ecuador - junto a una Convención Consular -, el 16 de mayo de 1867; poco después, el 3 de octubre de 1867, fue firmado con leves modificaciones por Bolivia, Chile y Perú. Texto en *An. Ecuat. de D.I.*, vol. VI, núms. 8, 9 y 10, 1976-1980, pp. 714-725.

contiene una norma de cierre, en la cual se dispone que en los demás casos regirá "lo que previene el D.I.Pr. moderno de los Estados Unidos de América y de las naciones cristianas de Europa"⁶⁷.

B) *Significado de estos Congresos*

9. Que los móviles subyacentes en todas estas reuniones eran más políticos que jurídicos, y que las mismas tendían a la formación de una alianza entre las naciones americanas que les permitiera un desarrollo relativamente autónomo respecto a las grandes potencias, es fácilmente constatable. Sin embargo, los elevados ideales perseguidos durante toda esta época chocaban frecuentemente contra la misma realidad política que se intentaba modificar y que excedía, con mucho, el ámbito de los acuerdos internacionales⁶⁸. La vida independiente

67. Esta norma deja ver una concepción "ingenua" de las soluciones de D.I.Pr., toda vez que las supone adecuadas y válidas con independencia del ámbito espacial para el que son creadas, y representa muy bien el espíritu de la época; por un lado, se luchaba contra la hegemonía intelectual de los Estados Unidos y de Europa, mientras que por otro se le rendía tributo.

68. Vid. G. Kutzner, *Die Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS)*, Hamburgo, 1970, pp. 28-30.

acababa de empezar en la mayoría de los países de la región -no en todos- y reinaba una triple situación de precariedad: de un lado, la amenaza de una contraofensiva española en América fue un fantasma al que se le temió durante largo tiempo; de otro, la delimitación de las fronteras entre los nuevos Estados no era precisamente pacífica en muchos casos; en tercer término, en la mayoría de éstos, se vivían difíciles situaciones internas, que llegaban en algunos a constituir verdaderas guerras civiles, como en Argentina.

Si a este panorama se suma el escaso desarrollo científico del Derecho internacional, no es difícil inferir que la situación no era la más propicia para un avance en la codificación de esta disciplina. Las enormes distancias de la geografía americana, que impedían un buen conocimiento entre los países del continente, han sido señaladas también como un obstáculo material al progreso de este ideal⁶⁹. Por último, no debe olvidarse el dato ya comentado de la ambigüedad existente en las relaciones entre Latinoamérica y los Estados Unidos, ni

69. Así lo destaca F.J. Urrutia, *op. cit.*, p. 106, para quien "sauf au point vue de leur défense mutuelle, il n'y avait pas, à vrai dire, entre eux (los países americanos), de communauté d'intérêts matériels".

tampoco las situaciones particulares que ofrecían algunos países, como Brasil, Cuba o los Estados del Plata⁷⁰.

10. De la conjunción de todos estos factores, puede obtenerse una idea bastante aproximada de las condiciones en que irrumpió en el escenario americano, ya en el último cuarto del siglo XIX, la primera obra integral de D.I.Pr., la que pasaría a la historia con el nombre de Tratado de Lima. Si bien es cierto que por todas las razones apuntadas no se habían dado hasta esta época resultados concretos en el ámbito iusprivatista, no lo es menos que la proliferación de estas reuniones vino a

70. Brasil, a partir de su independencia en 1822, era gobernado por un emperador perteneciente a la familia real de Portugal; Cuba seguía bajo el dominio español; los Estados del Plata se mantenían ajenos a la realización de los Congresos (Cf. J.M. Yepes, *Del Congreso...*, op. cit., t. I, pp. 44 ss. y 66 ss.), debiendo destacarse que la presencia del representante argentino, D.F. Sarmiento, en la reunión de Lima de 1864-1865 se produjo espontáneamente, sin autorización de su gobierno (Vid. *Congresos americanos de Lima...*, op. cit., pp. CXII-CXVIII, y R. Zuccherino, *Los Tratados de Montevideo. Análisis histórico, comparativo y crítico*, Buenos Aires, 1973, p. 15). No obstante, es entendible la ausencia de Argentina y Uruguay en 1847, debido a la difícil situación política interna y externa, esta última marcada por la presencia agresiva de barcos franceses e ingleses en los ríos de la Plata y Paraná. A los datos mencionados, D. Colombo Imaz de Puig y J.C. Puig, "El fracaso...", loc. cit., pp. 77-79, agregan como principal causa del escaso éxito de estas reuniones, un especial interés en tal sentido de parte de Gran Bretaña y un correspondiente "europeísmo" de algunos Estados como Brasil y Argentina.

consolidar, con matices, un cierto sentimiento solidario -que no debe ser exagerado- en la América hispana, a la vez que había dejado germinar en su seno una llamativa inquietud codificadora. Una vez que se consideró que la amenaza exterior ya no era tal, el ideal bolivariano de la confederación fue abandonado, pero el relativo sentimiento de solidaridad fue canalizado hacia la codificación⁷¹. Aquí reside el valor que contienen estos primeros pasos que precedieron al Congreso de Jurisconsultos de Lima y que hicieron que éste, pese a su escasa trascendencia práctica, despertara el intelecto de quienes estarían llamados a emprender la precursora tarea de legislar un sistema acabado de D.I.Pr., con la esperanza de que llegaría a ser válido para todo el continente⁷².

71. Cf. A. Alvarez, *Le droit international américain*, París, 1910, pp. 103-104, y O. Tenorio, *Direito internacional privado*, vol. I, 7ª ed., Río de Janeiro - San Pablo, 1962, p. 124.

72. Incluso al margen de la voluntad de los gobernantes o de los graves condicionamientos de orden social, económico y político. Vid. J.E. Briceño Berrú, "Reflexiones...", loc. cit., pp. 161-165.

2. EL CONGRESO DE JURISCONSULTOS AMERICANOS

A) *Participantes, iniciadores y protagonistas*

11. El 9 de diciembre de 1877 se reunieron en Lima, por invitación del gobierno del Perú, representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador y del país anfitrión. El hecho de que fuera aquél país el iniciador de esta nueva reunión, no causa sorpresa alguna ya que hasta esa fecha se había manifestado con insistencia como principal motor del movimiento americanista que se venía produciendo. El gobierno de los Estados Unidos no aceptó la invitación, presentando como excusa el mismo argumento que emplearía luego en muchísimas oportunidades, y que hace referencia a la organización federal de ese país, con ausencia de un D.I.Pr. unificado, y a la consecuente falta de poder para concluir acuerdos internacionales relativos a esta materia. De otro lado, la dificultad para adoptar un texto legal que fuera aceptable para países pertenecientes a distintas familias jurídicas, era una cuestión prácticamente insalvable en esa época, y sigue generando diversas opiniones y actitudes aún en la actualidad⁷³. Tampoco Brasil mandó representantes al

Congreso, mostrándose a favor de una iniciativa más amplia, con carácter universal, como la adoptada por el I.D.I. en las sesiones de 1874 y 1875 en Ginebra y La Haya⁷⁴. La presencia de Cuba, por su parte, constituía un importante dato político ya que, como se ha dicho, este país no había conquistado aun su independencia⁷⁵. Más tarde, se sumaron delegados de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Uruguay y Venezuela.

La circular peruana de 11 de diciembre de 1875, proponía a los países invitados a la reunión de Lima, la unificación del Derecho privado, presentándose la codificación de las normas de D.I.Pr. como un objetivo de mínima⁷⁶. La invitación buscaba, expresamente, "procurar la uniformidad de la Legislación privada en cuanto lo

73. K.H. Nadelmann, "Ignored State Interests...", *loc. cit.*

74. *Congresos americanos de Lima...*, cit., t. II, pp. 123-124. Para conocer el origen de esta actitud, vid. R. Octavio, *A codificação do direito internacional privado*, Porto-Río de Janeiro, 1910, p. 88, e *id.*, *Le droit international privé dans la Législation Brésilienne*, París, 1915, p. 233. Cf. J. Samtleben, *op. cit.*, pp. 11-12 y nota 41.

75. Vid. J.M. Yepes, *Del Congreso...*, *op. cit.*, t. I, pp. 187 ss. También, *Congresos americanos de Lima...*, *op. cit.*, t. II, pp. 156-159, donde se relata la intervención del delegado argentino, contraria a la presencia cubana en el Congreso.

76. A diferencia de los propósitos que guiaron más tarde al Congreso Sudamericano de Montevideo de 1888-1889.

permitan las circunstancias especiales de cada país y fijar en los respectivos Códigos, relativamente a los puntos en que esa uniformidad no sea posible, las disposiciones conforme a las cuales deban resolverse los conflictos que ocurran en la aplicación de esas leyes"⁷⁷.

En realidad, esta iniciativa no hacía más que reproducir los pareceres adoptados unos días antes por la redacción de la *Gaceta Judicial*, aprobando una propuesta de su Secretario, Manuel A. Fuentes, de 3 de agosto de 1874. Allí se llamaba la atención sobre las iniciativas encaradas en Europa en materia de unificación legislativa, la fundación del I.D.I., y la necesidad de que los Estados americanos no permanecieran inactivos frente a este proceso científico⁷⁸. Sobre la base constituida por estos datos, a tal autor y no a otro debe adjudicarse el mérito de impulsar la realización de un Congreso de Jurisconsultos.

77. *Congresos americanos de Lima...*, op. cit., t. II, pp. 120.

78. *Ibid.*, t. II, pp. 107-118, y el comentario de A. Ulloa, en *ibid.*, t. I, pp. CLXXII-CLXXIII, refiriéndose a Fuentes como el "Murciélagos". "Uno de los más notables escritores satíricos de su tiempo", dice M. García Calderón K., en "El Congreso Americano de Jurisconsultos de Lima de 1877", *Rev. Per. Der. Int.*, núms. 72-73, t. 31, 1976/1979, pp. 32-48.

No obstante, resulta prácticamente un lugar común señalar como iniciador, y aún, como organizador⁷⁹ del mismo al profesor francés Paul Pradier-Fodéré, que ocupaba por ese entonces el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de San Marcos de Lima. Algunas de sus obras, netamente influenciadas por la doctrina de Mancini y Fiore, habían sido traducidas al español, precisamente por M.A. Fuentes⁸⁰, y a través de ellas las ideas de la Escuela italiana habían encontrado una gran difusión en Perú⁸¹. Pero fue el mismo Pradier-Fodéré quien en diversas oportunidades se desligó de las responsabilidades que algunos se empeñan en adjudicarle,

79. Vid. E. Zeballos, *Justicia Internacional Positiva*, Valencia - Madrid, 1911, pp. 208 ss.; C. Báez, *Curso de D.I.Pr. Americano*, Asunción, 1926, p. 40; y T.B. de Maekelt, *Conferencia Especializada...*, op. cit., p. 12. Cf. Q. Alfonsín, *Teoría del Derecho Privado Internacional*, Montevideo, 1982, p. 277 y nota 10.

80. Nos referimos a *Principios generales de derecho, de política y de legislación*, Lima, 1875, y a *Curso de Derecho internacional privado*, Lima, 1877.

81. Vid. al respecto J. Samtleben, "Der Territorialitätsgrundsatz im Internationalen Privatrecht Lateinamerikas", *RabelsZ*, 1971, pp. 72-106. Por su parte, A.M. Villela, "L'unification du droit international privé en Amérique Latine", *Rev. crit. dr. int. pr.*, 1984, p. 240, señala: "on ne peut refuser à Mancini, le véritable rôle moteur qu'il a eu dans la codification du droit international privé en Amérique Latine". Vid. también F. Mosconi, "La legge regolatrice...", loc. cit., pp. 187-225.

sobre todo en su carta de 14 de marzo de 1878⁸². Para presidir el Congreso fue elegido otro peruano, Antonio Arenas, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de su país, quien se convirtió ágilmente en protagonista principal del mismo. A él se debe el proyecto base del tratado de D.I.Pr. que sería adoptado una vez abandonada la idea de unificar el Derecho civil, y la marcada huella de la doctrina italiana que presenta⁸³.

B) *El Tratado de Lima y sus efectos*

12. El Tratado para establecer reglas uniformes en materia de D.I.Pr., conocido con el nombre de Tratado de

82. Publicada con el título "Le Congrès de Droit International Sud-américain et les traités de Montevideo", R.D.I.L.C., t. 21, 1889, p. 220. Vid. también "Des progrès ... cit. y "Notice sur les premières conférences du Congrès des Juristes Américains, tenu à Lima", Bull. Soc. Lég. Comp., núm. 7, 1878, pp. 524-533. Esta solvente demostración se encuentra ya en H. Valladão, *Direito internacional privado*, 2ª ed., Río de Janeiro-San Pablo, 1970, p. 191. Asimismo, vid. J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., p. 11 y notas 36-37.

83. Vid. K. Nadelmann, "Multilateral Conventions in the Conflicts Field...", loc. cit., 115-118; M. García Calderón K., op. cit. y M.S. Núñez Valdivia, "Centenario del tratado de D.I.Pr.", *Rev. Jurídica del Perú*, 1978, pp. 114-125 y 210-219.

Lima⁸⁴, fue concluido el 9 de noviembre de 1878. Consta de sesenta artículos y está dividido en ocho títulos que se refieren, respectivamente, a: estado y capacidad de las personas, bienes existentes en la República, y contratos celebrados en el extranjero; matrimonios celebrados en el extranjero y celebrados por extranjeros en la República; sucesiones; competencia judicial civil; jurisdicción penal; ejecución de sentencias y otros actos de jurisdicción; legalizaciones; y disposiciones comunes a los capítulos precedentes.

Las sesiones estuvieron dominadas por la discusión entre una orientación personalista impulsada por Arenas, blandiendo las ideas de Fiore y las reglas del Código italiano y el pensamiento de Savigny recogido en el C.c. argentino, y una orientación territorialista defendida por el delegado boliviano Z. Flores, quien también se apoyaba en este cuerpo legal, pero en tanto reflejaba la doctrina de Story, y en el C.c. chileno⁸⁵. La

84. La versión oficial del texto, junto a un informe del presidente del Congreso, A. Arenas, al gobierno del Perú, fue publicado por éste en Lima, 1878. También se encuentra en: *Congresos americanos de Lima...*, op. cit., t. II, pp. 308-342 (exposición de motivos) y 343-351 (texto). Vid., asimismo, la detallada explicación que realiza R.F. Seijas, op. cit., pp. 218-269.

85. Cf. H. Valladão, op. cit., p. 193, y "Le droit international privé des Etats américains", R. des C., t. 81 (1952-II), pp. 93-98, esp. 95.

consagración del principio de nacionalidad con alcance amplio (rige el estado y la capacidad de las personas y, con excepciones, los impedimentos matrimoniales y las sucesiones), sería a la vez rasgo distintivo del Tratado y su principal motivo de rechazo generalizado.

El Tratado fue firmado en la fecha citada por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Guatemala y Uruguay darían su adhesión por separado, en un Protocolo firmado el 5 de diciembre del mismo año. Mas las ratificaciones escasearon. Sólo Perú⁸⁶ y Costa Rica⁸⁷ dieron este paso, razón por la cual el ámbito de vigencia espacial del convenio es harto limitada, comparada con sus ambiciones. Debe notarse que la "opinión tradicional"⁸⁸ de los autores desconoce incluso este dato, afirmando que la única ratificación fue la efectuada por Perú⁸⁹. Según relata Samtleben⁹⁰, en

86. *Congresos americanos de Lima...*, op. cit., t. II, pp. 283 y 353-365.

87. *Ibid.*, p. 305.

88. Es una expresión de J. Samtleben, en *Derecho...*, cit., p. 13⁴⁹, utilizada para llamar la atención sobre este error de la doctrina.

89. T.B. de Maekelt, en *Conferencia Especializada...*, op. cit., p. 13, afirma que ningún país llegó a ratificar el Tratado (al igual que E. Zeballos, loc. cit., y O. Tenorio, loc. cit.), pero más tarde (en *Normas generales...*, cit., p. 37), admite la ratificación peruana. En este último sentido se pronuncian, entre

Ecuador el Tratado fue aprobado por el Poder Legislativo en 1880, aunque parece que nunca se depositó el instrumento de ratificación⁹¹.

Los restantes Estados se mostraron refractarios a la idea de incorporarse a esta obra. Chile había tratado de imponer su C.c. de 1855, como modelo para la unificación del Derecho civil que se pretendía⁹²; no obstante, como ha quedado dicho, el Congreso sancionó una obra sobre conflictos de leyes, apartándose del objetivo buscado en un principio. Curiosamente, el presidente argentino, N. Avellaneda, remitió sorpresivamente el Tratado al Congreso de la Nación para su aprobación, mas esta no fue considerada⁹³. El Tratado de Lima fue reproducido más

otros, H. Valladao, *loc. cit.*; R. Octavio, "L'Amérique et la codification du droit international", *Rev. crit. dr. int. pr.*, núm 25, 1930, p. 531; M.A. Vieira, *op. cit.*, p. 397.; A.M. Villela, "L'unification...", *loc. cit.*, p. 242; y la práctica totalidad de la doctrina.

90. *Loc. cit.*, nota 50.

91. El Tratado aparece publicado, sin embargo, entre los textos vigentes en el Ecuador, en *An. Ecuat. D.I.*, *cit.*, pp. 726-734.

92. En la carta dirigida por el ministro de Relaciones Exteriores chileno a su homólogo del Perú, aquél, luego de llamar la atención sobre la esterilidad de similares esfuerzos anteriores, señala "la conveniencia inequívoca" de alcanzar una legislación uniforme. *Vid. Congresos americanos de Lima...*, *op. cit.*, t. II, pp. 129-131.

93. Esta actitud del presidente y la actuación del delegado argentino en el Congreso de Lima, J.E. Uriburu,

tarde, en forma casi textual, en el convenio de D.I.Pr. celebrado el 18 de junio de 1903 por los gobiernos de Ecuador y Colombia, llamado Tratado de Quito⁹⁴. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto el carácter accidental de la adopción de estas reglas, como así también la inadecuación de las mismas al resto de la legislación de esos países, datos que provocan la falta de trascendencia práctica del Tratado de Quito⁹⁵. Esta consecuencia parece haber marcado a fuego la obra de Lima y sus posibles efectos.

13. En el haber del Congreso de Lima debe anotarse que por primera vez se rompe el carácter eminentemente político que reinaba en los anteriores Congresos Hispanoamericanos y se acomete una obra de raigambre jurídica. Pese a las buenas intenciones de los protagonistas, la empresa era de difícil realización. En

son criticadas por E. Zeballos, en *Justicia...*, op. cit., loc. cit., con palabras tan elocuentes como: "El plenipotenciario argentino fué inducido a suscribir cláusulas contrarias a la Constitución, a las leyes, a los intereses políticos fundamentales de su patria. Aun olvidó que en 1870 había sido promulgado el Código Civil argentino, en el cual se había establecido el sistema del domicilio...". Vid., también, G. Ramírez, op. cit..

94. Texto en: *An. Ecuat. D.I.*, cit., pp. 740-748.

95. Cf. J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., p. 14 y notas 56-57.

la sesión de inauguración, el delegado Arenas demostró ser conciente de la envergadura de la misma al manifestar:

"Para una obra de legislación no bastan las tareas puramente especulativas, ni el amor á las innovaciones que seducen por un momento. No basta levantar un edificio brillante, pero sin bases sólidas, para que se derrumbe antes de su conclusión, dejando tan solo la memoria de las ilusiones perdidas"⁹⁶.

La realidad se volvería contra estas palabras. Del costado jurídico, la vida del Tratado no habría de caracterizarse por su aplicación práctica ni por su influencia en obras posteriores⁹⁷. Del político, la situación no sería mejor, si se tiene en cuenta que entre tres de las naciones participantes del Congreso (Bolivia, Chile y Perú) estalló poco después un conflicto bélico que habría de traer profundas consecuencias que aún perduran. Las palabras y los deseos de los juristas americanos parecían caminar por otro sendero que el que recorría el devenir histórico de sus naciones.

96. El discurso de A. Arenas se halla en *Congresos americanos de Lima...*, op. cit., t. II, pp. 163-165.

97. "El resultado fue, en particular, un informe erudito", según R. Rey Ríos, "Los Tratados de Montevideo 1889-1939", *Rev. Univ. San Francisco Xavier*, 1949 (Separata), p. 8.

III. La realización de la iniciativa de los países del Plata: los Tratados de Montevideo

1. EL CONGRESO SUDAMERICANO DE 1888-1889⁹⁸

A) La situación del D.I.Pr. en 1888

14. Con el antecedente del Tratado de Lima y como una reacción contra el principio de nacionalidad allí

98. Los documentos relativos a este Congreso se hallan publicados en: *Actas de las sesiones del Congreso Sudamericano de D.I.Pr.*, Buenos Aires, 1894 (en adelante: *Actas -1894-*); *Tratados sobre D.I.Pr. celebrados por el Congreso Sudamericano de Montevideo y sancionados por la Honorable Asamblea General Legislativa de la República Oriental del Uruguay*, Montevideo, 1892; *Actas y tratados celebrados por el Congreso Internacional Sudamericano de Montevideo*, Montevideo, 1911 (en adelante: *Actas y Tratados -1911-*); y *Actas y Tratados del Congreso Sudamericano de D.I.Pr. (Montevideo 1888-1889)*, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina (compilación encargada a E. Restelli), Buenos Aires, 1928 (en adelante: *Actas y Tratados - 1928*). También en las publicaciones de la O.E.A., C.J.I.-14 y C.J.I.-14 (A) (incluyendo también los documentos relativos al Congreso Sudamericano de 1939-1940) tituladas, respectivamente: *Textos de los Tratados de Montevideo sobre D.I.Pr. (1889, 1939 y 1940)*, Sec. Gral de la O.E.A., Washington, D.C., 1973, y *Congresos Sudamericanos de D.I.Pr. (Montevideo, 1888-1889 y 1939-1940)*, *Actas y documentos seleccionados*, Sec. Gral de la O.E.A., Washington, D.C., 1974 (en adelante: *Actas O.E.A.*).

consagrado⁹⁹, los gobiernos de Uruguay y Argentina emprendieron una iniciativa conjunta para convocar a un Congreso Sudamericano que se encargaría de unificar el D.I.Pr. de los países de la región. Con este objetivo, los Ministros de Relaciones Exteriores de aquéllos firmaron un protocolo el 14 de febrero de 1888¹⁰⁰, que fue la culminación de las iniciativas que, en tal sentido, había emprendido en 1887¹⁰¹, el entonces Ministro uruguayo ante el gobierno argentino, G. Ramírez¹⁰².

99. Así lo expresan A.S. de Bustamante y Sirvén (*El Código de D.I.Pr. y la Sexta Conferencia Panamericana*, La Habana, 1929, p. 10), al decir "por él y contra él (el Tratado de Lima) tomaron los Gobiernos de la Argentina y del Uruguay la iniciativa de un nuevo Congreso para el mismo fin", R. Octavio, "L'Amérique et la codification du droit international privé", *Rev. dr. int. pr.*, núm. 25, 1930, pp. 633-665, esp. 637 y H. Batiffol, "L'expérience du Code Bustamante et des Traités de Montevideo en Amérique latine", *Bull. soc. lég. comp.*, t. 71, 1947-48, p. 863. En idéntico sentido, J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., p. 16. Vid. también la opinión crítica, respecto al Tratado de Lima, de E. Zeballos, en *Justicia...*, op. cit., p. 208.

100. *Actas -1894-*, p. 9, y G. Ramírez, *Proyecto de Código de D.I.Pr. y su comentario*, Buenos Aires, 1888, p. 18.

101. Vid. la nota de 18 de junio de ese año, dirigida por G. Ramírez al gobierno de su país, en *ibid.*, p. 3.

102. Vid. E. Couture y Q. Alfonsín, "L'expérience des Traités de Montevideo", *Bull. soc. lég. comp.*, t. 71, 1947/48, p. 697 y M.A. Vieira, "Los Tratados de

La discusión planteada en torno a los principios de nacionalidad y domicilio como conexiones de base para regular los aspectos personales de un sistema de D.I.Pr. americano, aparece como una constante en todo el proceso de codificación. En efecto, si se repasa la bibliografía referida a este sector en la literatura jurídica americana, se constatará que la cuestión ha ocupado un lugar central en la preocupación de los juristas¹⁰³. Sin

Montevideo. Sus antecedentes y consecuencias", *Décimoquinto Curso C.J.I. -1988-*, esp. pp. 277-284

103. Especialmente referidos al ámbito americano, encontramos: A.S. de Bustamante y Sirvén, *La nacionalidad y el domicilio*, La Habana, 1927 ; T. B. de Maekelt, "Nacionalidad y Domicilio en el D.I.Pr.", *Rev. Fac. de Der. Univ. Central de Venezuela*, núm. 23, 1962, pp. 439 ss.; J. de Galíndez, *Principales conflictos de leyes en la América actual*, Buenos Aires, 1945, pp. 27-30, 80-82 y 171-178; R. Gallardo, "La ley del domicilio: Punto de conexión admirable en el D.I.Pr. latinoamericano", *Inter-Amer. L. Rev.*, núm. 2, 1960, pp. 15-59; J. Matos, "Los principios de domicilio y de la nacionalidad y la próxima reunión de jurisconsultos en Río de Janeiro", *Rev. Der. Int. (La Habana)*, núm. 7, 1925, pp. 301-309; Q. Alfonsín, *Nacionalidad o domicilio, una antinomia del Derecho privado internacional*, Montevideo, 1858; *id.*, "Apostillas sobre el punto de conexión 'domicilio' en el Derecho privado internacional", *R.E.D.I.*, vol. X, 1957, pp. 53-65; J. Lisbonne, "Nationalité ou domicile. A propos d'un article de M. Quintín Alfonsín", *Jour. dr. int.*, t. 84, 1957, pp. 370-377; B. de Magalhaes, "La doctrine du domicile en droit international privé", *R. des C.*, t. 23 (1928-III), pp. 5-143, esp. 18 ss.; K. Nadelmann, "Mancini's nationality rule and non-unified legal systems. Nationality vs. domicile", *A.J.C.L.*, vol. 17, 1969, pp. 418-451; G. Portela, "Fórmulas para conciliar en América el principio de domicilio y el de la nacionalidad", *Rev. Der. Int. (La Habana)*, núm. 5, 1934, pp. 301-310; F. Ruiz Moncada, "La ley reguladora del estatuto personal en el segundo Congreso Hispano-

embargo, tal discusión es sólo aparente o parcialmente el principal factor que impidió a las naciones americanas la consecución de una reglamentación única para regir las relaciones de tráfico externo, a pesar de los muchos esfuerzos dedicados a ello. A su lado, la sombra del territorialismo (tercer "sistema") completa el panorama de obstáculos¹⁰⁴.

Por una parte, el principio de nacionalidad refleja la influencia de las ideas que se desarrollaban en Europa a finales del siglo XIX, sobre todo al influjo de la obra de P.S. Mancini, ideas que encontraban eco principalmente en cierta parte de la doctrina y en la jurisprudencia brasileñas¹⁰⁵. El criterio del domicilio, de otro lado,

americano de Derecho internacional", *La Ley* (Buenos Aires), 6/4/1954; W. Goldschmidt, "Anknüpfungsanordnungen und Anknüpfungen", *Konflikt und Ordnung. Festschrift für Murad Ferid zum 70. Geburtstag*, 1978, pp. 137-150; H. Valladao, "Lei reguladora do estatuto pessoal", *Rev. de Faculdade de Direito (Paraná)*, núm. 2, 1954, pp. 19 ss. Vid. también, sobre el mismo tema, el Segundo Dictamen del C.J.I., *Documentos de la O.E.A. sobre D.I.Pr.*, Doc. O.E.A./ser.Q/11.9, C.J.I.-15, Washington, 1973. Para una completa guía bibliográfica sobre el tema (no limitada a Iberoamérica), vid. J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *Curso de Derecho internacional privado*, Madrid, 1991, p. 471.

104. Vid. J. Samtleben, "El territorialismo de leyes en América Latina", *Primer Seminario Nacional de D.I.Pr.*, México, 1979, pp. 191 ss..

105. Vid. H. Valladao, "Le droit international privé des Etats américains", *R. des C.*, t. 81 (1952-II), pp. 80-82.

se manifestaba como una respuesta de política legislativa a una realidad social caracterizada por una fuerte inmigración, que llevaba a los Estados receptores a buscar el sometimiento de los inmigrantes a las leyes de esos Estados¹⁰⁶. Con este sentido era defendido a ultranza por los Estados convocantes del Congreso Sudamericano y hacia allí se dirigieron sus esfuerzos¹⁰⁷.

Visto desde una perspectiva de más de cien años, el problema no parece nada baladí. Es cierto que las posiciones encontradas en torno a ese objeto constituyeron una barrera infranqueable en el camino de una solución unánime, pero no es menos cierto que la cuestión sigue teniendo vigencia y por las mismas razones

106. J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., pp. 6-7. En M. García Calderón K., "Apuntes sobre los Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 y 1940", *Rev. Per. Der. Int.*, t. 35, núm. 88, 1983, p. 4, aún puede leerse: "Siendo los nuestros, países de inmigración, resulta imperativo adoptar el sistema domiciliario en materias de D.I.Pr.". Cf. la opinión de J.P. Niboyet, en VV.AA., *La codification...*, op. cit., p. 25: "Il y a une chose inéluctable: tout pays d'inmigration doit appliquer chez lui la loi du domicile (...) tout pays d'émigration (...) est conduit à appliquer la loi nationale (...) Il n'y a aucune raison pour qu'un pays cède devant l'autre. Voilà la difficulté politique".

107. Los datos citados por M. Torres Campos, *Elementos de Derecho internacional privado*, 4ª ed., Madrid, 1913, p. 101, son concluyentes: entre 1880 y 1888 entraron a la Argentina 1.560.000 extranjeros y en 1897 el número de éstos era mayor, en Buenos Aires, que el de argentinos (228.641 contra 204.774).

que la tenía en el siglo pasado. Basta considerar las mutaciones que están recibiendo algunos sistemas nacionales de D.I.Pr., precisamente bajo la presión de argumentos referidos a cuestiones migratorias¹⁰⁸. No siempre hay una relación causal entre los términos "Estado exportador o importador de nacionales" y "aplicación de la ley nacional o del domicilio"; pero, en la gran mayoría de los casos, la elección del punto de conexión destinado a regular el "estatuto personal" tenderá a ser un reflejo de los intereses de un Estado o grupo de Estados que, a la hora de codificar su D.I.Pr. y teniendo en cuenta las circunstancias imperantes en el momento histórico, adoptan la posición que juzgan más beneficiosa para esos intereses¹⁰⁹. No obstante el carácter obvio de esta afirmación, la actitud tomada en

108. Vid., por ejemplo, la evolución operada en el sistema de D.I.Pr. suizo, en S. Alvarez González, *Filiación hispano-suiza (Sistemas de D.I.Pr. y relaciones concernientes a la emigración española)*, León, 1989, esp. pp. 147-150. Vid. también A.E. von Overbeck, "Der schweizerische Entwurf eines Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht", *RabelsZ*, núm. 42, 1978, p. 612.

109. Vid. J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, pp. 450-451, donde estos autores brindan varios ejemplos al respecto, afirmando que "la formulación de una u otra conexión por el legislador no es un acto neutro". Por esta razón, algunos Estados americanos - sometidos desde hace varios años a una incesante emigración- tal vez debieran revisar sus posiciones al respecto.

Montevideo ha sido criticada precisamente por haber basado normas de D.I.Pr. en factores políticos, tales como los intereses de los países de emigración y de inmigración¹¹⁰.

15. Debe tenerse en cuenta que en los años que precedieron al Congreso de Montevideo, el continente europeo vivía momentos de similar euforia en lo que atañe a la codificación internacional del D.I.Pr. Fue en esa época cuando, al influjo de las concepciones internacionalistas¹¹¹ y en pleno auge del ideal de la codificación, se sucedieron en Europa distintos intentos con un mismo fin: llegar a un acuerdo para adoptar una reglamentación común de las relaciones de tráfico privado externo. Las iniciativas española, holandesa e italiana respondían a concepciones no idénticas y, de ellas, ésta

110. Así lo entiende H. Valladão, "Le droit international privé...", loc. cit., p. 100, calificando la postura del Congreso de Montevideo como un "virage dangereux". En el mismo sentido, pero con más contundencia, se expresa B. Nolde, "La codification ...", loc. cit., pp. 419-420. Justamente en contra se expresaba L. Segovia, *El Derecho internacional privado y el Congreso Sud-Americano de Montevideo*, Buenos Aires, 1889, pp. 11-15.

111. Vid. F.S. Lyons, *Internationalism in Europe 1815-1914*, Leyden, 1963, pp. 15-18, cit. por J.D. González Campos, "La revolución ...", loc. cit., p. 84.

fue la que con más fuerza impactó al otro lado del Océano Atlántico.

A pesar de las reservas que las iniciativas europeas despertaron en las naciones americanas, no pude soslayarse el hecho de que varias de ellas -como Argentina, Uruguay, Colombia, Perú y Venezuela- hubieran adelantado sus deseos de participar en el congreso que debía reunirse en Roma en 1885¹¹². No es fácil aventurar una opinión acerca de las eventuales consecuencias que la realización de tal congreso hubieran producido en el proceso que se desarrollaba en América. Sí se sabe, en cambio, que en la Primera Sesión de la Conferencia de La Haya de D.I.Pr. se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en Montevideo, y que éstos ocasionaron una discusión en torno a la conveniencia de proceder a una codificación de conjunto o, como finalmente se resolvería, por materias escogidas¹¹³.

112. Vid. J. Samtleben, *loc. cit.*, p. 15, citando a Martens, II, 16, pp. 154 ss., 159, 163, y 252 ss.

113. La memoria del Gobierno holandés los tiene expresamente en cuenta. Vid. M. Gutzwiller, "Das Internationalprivatrecht ...", *loc. cit.*, p. 36, R. Viñas Farré, *Unificación del Derecho internacional privado. Conferencia de La Haya D.I.Pr.*, Barcelona, 1978, pp. 50-51 y J.H.A. van Loon, "Quelques réflexions ...", *loc. cit.*, p. 1136.

Lo cierto es que los Estados americanos no parecían muy dispuestos a renunciar a ser protagonistas de su propio destino, a la vez que manifestaban cierto recelo en tomar parte de una acción conjunta con países extracontinentales. La amplitud de la primera afirmación debe entenderse valorando adecuadamente el sentimiento de solidaridad que existía en Iberoamérica frente a las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos, que reemplazaba en este sentido a las metrópolis europeas¹¹⁴. La segunda se explica como la expresión de una actitud cuidadosa destinada a proteger la identidad y, más aun, la soberanía de los jóvenes Estados americanos.

A estas consideraciones viene a sumarse el convencimiento que existía entre los juristas de estos países de que, a diferencia de lo que sucedía en Europa, las condiciones para el logro de una codificación internacional en su continente eran favorables, cuando no

114. Hay quienes ven en el Congreso de Montevideo una reacción "antinorteamericana" contra la Primera Conferencia Panamericana convocada para el año 1889 por los Estados Unidos y que habría de celebrarse en Washington. Cf. G. Ferrari, *Apogeo y crisis del liberalismo (1886-1890)*, Buenos Aires, 1978, pp. 128-133. Vid. también J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., p. 7. Sin embargo, curiosamente, V. Romero del Prado, citando actitudes y expresiones de Clay, Monroe, Blaine y Mc Conville, sostiene que Estados Unidos participaba de un sentimiento de solidaridad panamericana y que por esta razón impulsaba la celebración de las contemporáneas Conferencias Panamericanas (Vid. *Derecho internacional privado*, t. I, Córdoba (Argentina), 1961, pp. 549-550).

óptimas¹¹⁵. Las mismas se basaban en la pretendida homogeneidad de los países iberoamericanos, que tenían la gracia de estar a salvo de las cruentas luchas políticas, nacionales, raciales, culturales y religiosas, que se producían en el Viejo Mundo¹¹⁶. Otros prefieren buscar las causas en una particular orientación espiritual del pensamiento jurídico americano¹¹⁷, aparentemente más humana. La lectura de cualquier libro de Historia de América o de cualquier documento de la época, demuestra claramente la relatividad de estas ideas. En estas mismas páginas puede verse en varias oportunidades, de qué manera es difícil identificar una comunidad de intereses a través de las diferentes etapas de la codificación del

115. Cf. F.P. Contuzzi, *Diritto internazionale privato*, 2ª ed., Milán, 1911, p. 217, y, del mismo autor, "I trattati di Montevideo del 1889 e la codificazione del Diritto internazionale privato presso gli stati dell'America Meridionale", *Il Filangeri*, 1889, t. I, pp. 521 ss.. Ese convencimiento ha perdurado y ha sido enriquecido por la valiosa obra de autores brillantes. Baste, como ejemplo, citar a T.B. de Maekelt (*Vid. Normas Generales...., op. cit., 1984, pp. 15-33*).

116. Cf. A. Monsálvez Müller, *Del cumplimiento en Chile de resoluciones pronunciadas por tribunales extranjeros*, Santiago, 1973, p. 31, para quien tal homogeneidad se fundamenta en "tradiciones similares, con una misma religión, en fin, con intereses comunes".

117. R. Gallardo, *La solution des conflits de lois dans les pays de l'Amérique Latine. Divorce, séparation de corps et nullité du mariage*, París, 1956, pp. 2-3.

D.I.Pr. americano, intereses que muchas veces aparecen francamente contrapuestos.

B) *Los Tratados de 1889*

16. Finalmente el congreso se reunió el 25 de agosto de 1888, sesionando durante casi siete meses, hasta el 18 de febrero de 1889. Si bien la invitación cursada por Argentina y Uruguay estaba dirigida a todos los países sudamericanos, sólo se reunieron en Montevideo representantes de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, y de los Estados convocantes. La ausencia de delegados de Colombia, Ecuador y Venezuela, ha sido interpretada como una consecuencia de la conjunción de dos factores: la gran distancia que separa a estos países, ubicados en el norte de la región, de Montevideo -que era mucho más significativa en 1888, si nos atenemos a los medios de transporte entonces utilizados-, y la exigüidad del tiempo entre la invitación y la fecha prevista para la iniciación de las deliberaciones¹¹⁸. Sin perjuicio de la

¹¹⁸. Cf. las notas de respuesta en *Actas y Tratados -1911-*, pp. XVIII-XXI. En una carta dirigida al embajador de su país en el Uruguay y delegado en el Congreso de Montevideo, Roque Sáenz Peña, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina decía: "fué convenido que se

validez de estas causas, cabe mencionar que los gobiernos de Colombia y Ecuador adujeron inconvenientes de tipo político para justificar sus inasistencias¹¹⁹.

En el ánimo de los convocantes estaba presente la idea de alcanzar un cuerpo de normas de conflicto comunes y no un Derecho privado unificado. Sin embargo, debe destacarse que algunas interpretaciones erróneas acerca de ese objetivo, hicieron que el mismo debiera ser puesto en claro. Así, R. Sáenz Peña -delegado por Argentina- y G. Ramírez -representante de Uruguay-, en sendas intervenciones ante el Congreso, se dedicaron a dilucidar las diferencias entre ambas metodologías, concluyendo que no se podía buscar la unificación de las legislaciones sin poner en juego la soberanía de cada una de las

invitara a los Estados sudamericanos, teniéndose presente que éstos se encuentran vinculados entre sí por intereses políticos, comerciales y aun de vecindad. Los demás Estados del norte y centro de la América, o no vendrían o llegarían demasiado tarde". Y agregaba: "Si el Congreso fuera de todas las naciones del continente (...) temo en la posibilidad de un fracaso, malográndose así una idea que realizada entre los Estados sudamericanos podría ser más tarde aceptada por otras naciones" (*Vid. R.A.D.I.*, año II, núm. 6, pp. 420 ss.).

119. M.A. Vieira, "Le droit international privé...", *loc. cit.*, pp. 398-399. Cf. J.J. Caicedo Castilla, "Evolución y porvenir del D.I.Pr. en el continente americano", *R.E.D.I.*, vol. XXV, 1972, pp. 93-109.

naciones participantes. Antes bien, las peculiaridades de cada legislación, entendían, debían preservarse¹²⁰.

En una misma línea puede observarse que el criterio imperante identificaba unificación de normas indirectas con unificación del D.I.Pr., lo que equivale a decir que aquéllas constituían las normas exclusivas de la disciplina. Por los mismos senderos conceptuales, aunque en otro medio geográfico, había caminado el ministro de Estado español Manuel Silvela casi veinte años antes, al dirigirse al Gobierno Imperial de Francia proponiéndole la unificación de las reglas del D.I.Pr. en Europa¹²¹. No

120. R. Sáenz Peña afirmaba en la sesión de 1 de diciembre de 1888: "No venimos, pues, a uniformar legislaciones, como se ha dicho erróneamente al comentar la invitación de los Gobiernos del Plata para constituir este Congreso. Uniformar legislaciones (...) vale atacar el principio de inviolabilidad de los Estados". Más adelante decía: "cada Estado tiene y conserva su legislación propia, como signo visible de su soberanía", por lo tanto, sólo "vamos a tratar de la aplicabilidad internacional de las leyes y de la competencia de los tribunales con potestad de juzgamiento" (*Actas -1894-*, pp. 145-146). Por su parte, G. Ramírez, en la sesión de 1 de febrero de 1889, decía: "no estamos reunidos (...) con el propósito de unificar las legislaciones de los países representados en esta Asamblea, sino que, por el contrario, en la íntima persuasión de que no pueden suprimirse los conflictos que tienen por origen la diversidad de las disposiciones de los códigos internos, nos preocupamos exclusivamente de señalar la ley común destinada a dirimirlos" (*Actas -1894-*, p. 544). Cf. M.A. Vieira, "Le droit international privé...", *loc. cit.*, p. 402.

121. Vid. J.D. González Campos, "La revolución...", *loc. cit.*, esp. pp. 74-75.

obstante lo expresado por los representantes argentino y uruguayo, los congresistas de Montevideo no pudieron sustraerse al elaborar los tratados al impulso de dictar algunas normas directas, aunque sólo con un carácter que podríamos llamar auxiliar, esto es, dirigidas a obtener un funcionamiento más armónico de aquéllos¹²². Es el caso de las normas contenidas en los arts. 7 y 8 del Tratado de Derecho civil internacional, que disponen calificaciones de domicilio¹²³.

17. La labor del Congreso puede considerarse proficua si se tiene en cuenta que alcanzó a sancionar ocho tratados y un protocolo adicional, abarcando la práctica totalidad del contenido del D.I.Pr. Estos tratados, son¹²⁴: Tratado de Derecho civil internacional, de 12 de febrero de 1889; Tratado de Derecho comercial internacional, de 12 de febrero de 1889; Tratado de

122. A.M. Villela, "L'unification...", *loc. cit.*, pp. 237-239.

123. Vid. W. Goldschmidt, *Derecho internacional privado*, 5ª ed., Buenos Aires, 1985, p. 29.

124. W. Goldschmidt califica a los cuatro primeros como "fundamentales", atendiendo a las materias codificadas. *Ibid.*, p. 28. Un resumen del contenido de los principales aspectos de los tratados puede verse en D. Opertti Badán, "Estado actual del Derecho internacional privado en el Sistema Interamericano", *Noveno Curso C.J.I. -1982-*, pp. 312-317

Derecho procesal internacional, de 11 de enero de 1889; Tratado de Derecho penal internacional, de 23 de enero de 1889; Tratado sobre patentes de invención, de 16 de enero de 1889; Tratado sobre propiedad literaria y artística, de 11 de enero de 1889; Tratado sobre marcas de comercio y de fábrica, de 16 de enero de 1889; Convenio relativo al ejercicio de profesiones liberales, de 4 de febrero de 1889. Por su parte, el Protocolo adicional, de 13 de febrero de 1889, se ocupa de regular la aplicación del Derecho extranjero y consagra a tal fin tres principios fundamentales: la aplicación de oficio (art. 2), la aplicación de la legislación procesal del foro (art. 3) y el orden público internacional (art. 4).

18. El impulso decisivo de este hito en la historia de la codificación del D.I.Pr. correspondió al citado G. Ramírez -por ese entonces ministro uruguayo ante el gobierno argentino-¹²⁵, quien preparó un proyecto de Código de D.I.Pr. basado en la aplicación del principio domiciliar, y fue el principal redactor del texto del

125. Vid. G. Ramírez, *op. cit.*, *El derecho comercial en el Congreso Jurídico Sudamericano*, Montevideo, 1989, y *El derecho procesal internacional en el Congreso jurídico de Montevideo*, Montevideo, 1892. Sobre este autor, *vid.* la opinión de B. Nolde, en "La codification ...", *loc. cit.*, p. 353, donde compara su labor con la desarrollada en Europa por P.S. Mancini.

Tratado de Derecho comercial internacional¹²⁶. A su vez, M. Quintana -delegado de Argentina- y S. Vaca Guzmán -delegado de Bolivia- fueron los protagonistas en la redacción del Tratado de Derecho civil internacional, que presenta una notable influencia del C.c. argentino en vigencia desde 1871¹²⁷. Esto equivale a decir que este instrumento recibe, en forma indirecta y con una orientación territorialista, ciertos principios de Story, de Savigny y de Freitas¹²⁸, principales fuentes de este cuerpo normativo.

En realidad, la afirmación según la cual los Tratados de Montevideo de 1889 consagraron la aplicación de la conexión domiciliar al "estatuto personal", ha merecido algunas matizaciones. La razón de éstas se basa, de un lado, en el abandono de dicha conexión respecto de algunas cuestiones (existencia y capacidad de la persona jurídica, sucesión, y forma, existencia y validez del

126. Actas O.E.A., pp. 117 ss. y 127 ss.

127. Actas O.E.A., pp. 19 ss. y 33 ss.

128. H. Valladao, *op. cit.*, p. 100. Sobre la aportación personal de Freitas -cuyo *Esboço* fue la principal fuente de inspiración del codificador argentino D. Vélez Sársfield- dice M. Aguilar Navarro que difícilmente pueda entenderse si se prescinde de los elementos que había tomado "de los grandes maestros europeos, especialmente de Savigny" (*op. cit.*, p. 546). *Vid.* también L. Segovia, *op. cit.*, pp. 59-71.

matrimonio)¹²⁹ y, de otro, en que la utilización de la misma se presenta a menudo inseparablemente unida a una concepción territorialista del D.I.Pr.. No en vano ha llegado a decirse que "el Congreso de Montevideo supone un viraje en favor de una concepción territorialista, afincada en el principio de domicilio"¹³⁰. Esta crítica es aplicable también a las codificaciones estatales que aparentemente descansan en el principio domiciliario, en particular al citado C.c. argentino, en virtud del cual aquél se propagó por varios países de América. El empleo del adverbio se justifica, a medida que se van verificando, en esas codificaciones, recursos territorialistas dirigidos a la aplicación del Derecho propio a casos iusprivatistas internacionales¹³¹.

La señalada característica del C.c. argentino ha sido calificada como de un territorialismo "relativo", en comparación con el territorialismo "intermedio" del C.c. chileno de 1885 y el territorialismo "absoluto"

129. Cf. B. Nolde, *op. cit.*, pp. 356-357.

130. Vid. M. Aguilar Navarro, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 512-513. Cf. R.B. Santos Belandro, *Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias. Reglas de conflicto materialmente orientadas hacia la protección de las personas*, Montevideo, 1991, pp. 143 ss..

131. Vid. H. Batiffol, "L'expérience ...", *loc. cit.*, p. 862.

consagrado en el C.c. mexicano de 1932¹³². Ligada con esta idea, cobra certeza la afirmación según la cual, "el principio de domicilio considerado en forma bilateral, esto es, como válido para nacionales y extranjeros, no se halla plenamente realizado en ningún país de América latina (...) aparece, pues, más bien como un ideal todavía no alcanzado de un futuro derecho internacional privado latinoamericano que como una realidad palpable"¹³³.

19. Dicho esto, es preciso aclarar que hablar de la base domiciliar de los Tratados de Montevideo implica, en cierto sentido, una falta de rigurosidad, toda vez que tal caracterización sólo es válida para algunos de ellos y en particular para el de Derecho civil internacional¹³⁴. Aun dentro de éste, la conexión

132. Vid. L. Pereznieta Castro, "La tradition territorialiste en droit international privé dans le pays d'Amérique latine", *R. des C.*, t. 190 (1985-I), pp. 271-400. Cf. J. Samtleben, "Der Territorialitätsgrundsatz...", *loc. cit.* e *idem*, "El territorialismo ...", *loc. cit.*

133. J. Samtleben, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 6-7. Nótese que esta opinión se emitió antes de la vigencia de las nuevas normas de D.I.Pr. del C.c. peruano, que llevan a cabo la realización aludida.

134. Vid. C.A. Alcorta, *Los Tratados de Montevideo de 1889, 1931*, pp. 13-36.

domiciliar domina principalmente en la esfera de la capacidad de la persona física (art. 1), de las relaciones personales (art. 12) y patrimoniales (arts. 41 y 42) de los cónyuges, y de la separación y disolución del matrimonio (art. 13). La aplicación de la *lex rei sitae* es la regla general para los bienes (art. 26) y la *lex executionis* lo es para los actos jurídicos (art. 32).

Hasta aquí, la impronta *savignyana* es clara, mientras que pueden verse criterios de *Story* en la elección de la *lex loci celebrationis* para regir la capacidad para contraer matrimonio, la forma del acto y la existencia y la validez del matrimonio (art. 11)¹³⁵. La huella territorialista se hace visible, sobre todo, en la reglamentación de las sucesiones (arts. 44 y 45), sometidas al fraccionamiento que provoca la aplicación de la *lex rei sitae*. Precisamente, un carácter territorialista proveniente de su C.c. -obra insigne de Andrés Bello- informa el proyecto de tratado que la delegación chilena presentara al Congreso de Montevideo, expresando de este modo su desacuerdo con los principios plasmados en Montevideo¹³⁶. En cuanto a las fuentes

135. H. Valladão, *Derecho...*, op. cit., p. 195.

136. *Actas -1894-*, pp. 131-137 y *Actas y Tratados -1911-*, pp. 113-114, 129-137 y, esp., 504-522. El proyecto alternativo era obra del representante chileno, B. Prats

utilizadas para elaborar los tratados sobre Propiedad Literaria y Artística, Marcas de Comercio y de Fábrica, y Patentes de Invención se han mencionado las convenciones que sobre esos temas celebraron algunos países europeos en París (1883) y Berna (1886)¹³⁷.

C) *Las incorporaciones: los rechazos y sus causas*

20. Puede notarse que pese a que el protocolo firmado entre los ministros de Uruguay y Argentina hablaba de una obra unitaria¹³⁸, se confeccionaron instrumentos separados. Cabe pensar que la intención que guió tal actitud fue la de alcanzar un mayor número de incorporaciones¹³⁹, de modo que la eventual oposición relativa a alguna de las materias codificadas no

(Texto en F. Albónico Valenzuela, *Derecho internacional privado chileno. Leyes y tratados vigentes*, Santiago, 1958, pp. 205-209).

137. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., p. 18. Cf. *Actas y Tratados -1911-*, pp. 433-434.

138. *Actas -1894-*, loc. cit., donde se expresa: "Los Gobiernos Argentino y Oriental invitarán (...) para la reunión de un Congreso jurídico internacional sudamericano que tendrá por objeto la celebración de un **tratado** que comprenda las materias que abarca el derecho internacional privado" (la negrita es nuestra).

139. J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., p. 1774.

incidiera sobre las otras. Mas, si ese fue el objetivo perseguido, el esfuerzo resultó estéril respecto de los Estados participantes. De ellos, ni los que adoptaron la obra surgida del Congreso de Montevideo, ni los que la rechazaron, hicieron diferenciación alguna; los primeros se incorporaron a todos los Tratados y éstos, por el contrario, ni siquiera llegaron a firmarlos. Aquella actitud fue la seguida -según orden cronológico- por¹⁴⁰: Paraguay (3 de septiembre de 1889), Perú (4 de noviembre de 1889), Uruguay (3 de octubre de 1892), Argentina (11 de diciembre de 1894) y Bolivia (17 de noviembre de 1903).

La oposición chilena no sólo se debió al principio domiciliar consagrado en Montevideo, sino también a las contradicciones existentes entre los Tratados y algunos puntos de la legislación de ese país¹⁴¹. A su turno, el

140. Todas las fechas consignadas corresponden al depósito de los instrumentos de ratificación (de adhesión, en el caso de las mencionadas *infra*) ante el gobierno argentino, salvo la de Paraguay, que es la fecha de la ley paraguaya aprobatoria. En este país, se considera que los tratados están en vigor desde entonces, pese a que nunca existió la comunicación oficial de la aprobación a los gobiernos uruguayo y argentino, como exigen los tratados. Cf. Q. Alfonsín, *Teoría...*, op. cit., p. 281 y nota 27, y J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., p. 17ⁿ.

141. Como por ejemplo, respecto a la ley aplicable a los contratos. Actas -1894-, pp. 492 ss.

delegado de Brasil -Domingo de Andrade Figueira- criticó duramente la adopción de aquel principio y las razones migratorias en las que halla sustento, señalando que

*"os Estados sul-americanos para povoar os grandes desertos de seu território têm necessidade de oferecer aos estrangeiros que aí se estabelecem regras seguras e claras e a mesma base de capacidade pessoal que êles tivessem anteriormente"*¹⁴².

Finalmente, ciertas consideraciones referidas al contenido del D.I.Pr. en cuanto disciplina científica, fueron los argumentos esgrimidos por el representante brasileiro para no firmar el Tratado de Derecho penal internacional y el Convenio relativo al Ejercicio de profesiones liberales, aduciendo que sus poderes se limitaban a participar en la codificación del D.I.Pr. y se veían excedidos por estas materias¹⁴³.

21. Otro tema que habría de devenir conflictivo fue el de las eventuales adhesiones que terceros Estados

142. Actas -1894-, pp. 639-640. Vid. también A.A. Fernandes, *Curso de Direito internacional privado*, Rio de Janeiro, 1971: "A vitória do Uruguai representa um recuo cultural de mais de dois séculos, um desafio ao bom senso, um escárneo às nossas origens étnicas e total desprezo pela HISTORIA GERAL da humanidade. É uma vitória de Pirro, pois, nessa matéria jurídica não é possível alcançá-la sem o acôrdo unânime dos outros povos".

143. Sobre esta actitud M.A. Vieira, "Le droit ...", loc. cit., pp. 399-400.

quisieran realizar a la obra de Montevideo. En principio, era intención de los países participantes que los tratados tuvieran un alcance amplio y que superen incluso los límites continentales. Al menos es lo que podría desprenderse de varias intervenciones realizadas en el seno del Congreso; señaladamente, la que efectuó en la sesión de clausura el delegado uruguayo I. García Lagos, al decir:

"Hagamos votos fervientes porque la obra sea todavía más proficua y porque salvando las fronteras de nuestro continente pueda bien pronto propiciarse la adhesión de otros Estados de Europa y América, consolidándose así cada día más, con la certidumbre y la estabilidad de todos los derechos, el bienestar de sus nacionales que acuden a vivir en nuestro suelo bajo amparo de sus instituciones"¹⁴⁴.

Para que estas declaraciones entraran en el terreno de la realidad, era necesario que la letra de los tratados aprobados y la actitud de los gobiernos de las naciones vinculadas a ellos, brindaran ciertas facilidades a los terceros Estados que manifestaran la voluntad de incorporarse a los mismos. En lo que hace referencia al primer factor, debe notarse que todos los tratados de 1889 incluyen una cláusula de adhesión¹⁴⁵

144. *Actas y Tratados -1911-*, pp. 766-767.

ordenando que las disposiciones relativas a la ratificación y al canje en cada uno de ellos, se hacen extensivas "a las naciones que no habiendo concurrido a este Congreso, quisieran adherirse al presente Tratado". En primer lugar, la cláusula transcrita debe interpretarse poniéndola en relación con el Protocolo adicional, que en su art. 6 contiene una norma de capital importancia que establece como condición de validez para una eventual adhesión, la aceptación de los Estados signatarios, redactada en los siguientes términos:

"Los gobiernos de los Estados signatarios declararán, al aprobar los Tratados celebrados, si aceptan la adhesión de las naciones no invitadas al Congreso, en la misma forma que la de aquellas que habiendo adherido a la idea del Congreso, no han tomado parte en sus deliberaciones".

En segundo lugar, de la interpretación de ésta, surgirían las distintas posiciones en torno al segundo factor mencionado, es decir, qué actitud habrían de tomar los Estados vinculados a la obra de Montevideo, al momento de ratificar esa vinculación. La cuestión

145. Tratado de Derecho civil internacional, art. 71; Tratado de Derecho comercial internacional, art. 52; Tratado de Derecho procesal internacional, art. 16; Tratado de Derecho penal internacional, art. 51; Tratado sobre patentes de invención, art. 10; Tratado sobre propiedad literaria y artística, art. 16; Tratados sobre marcas de comercio y de fábrica, art. 8; y Convenio relativo al ejercicio de profesiones liberales, art. 6.

demuestra su importancia cuando se comprueba la aparición de una distinción en estos países que, en principio, no se infiere de la letra de los tratados ni de las actas del Congreso. Se trata de la distinción que comienza a realizarse respecto de los Estados no signatarios, en virtud de su pertenencia o no al continente americano. Un ejemplo muy claro lo brinda la ley uruguaya por la cual este país ratifica todos los Tratados de Montevideo. Dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 6 del Protocolo Adicional, el art. 2 de aquélla, dispone:

"En caso de que quisieran adherirse a uno o más tratados, naciones que no pertenezcan a América Latina, se requerirá expresamente la aprobación legislativa en cada caso, y podrá denegarse si la nación que solicita la adhesión, sin pertenecer al mencionado hemisferio no ofrece en cambio beneficio compensatorio y verdadera reciprocidad".

Queda de este modo establecido que Uruguay consideraba que la adhesión de cualquier país americano tenía efectos automáticos y no precisaba aprobación alguna de parte del primero¹⁴⁶. En cambio, si el Estado que pretendía incorporarse a algún tratado "no pertenecía a América Latina"¹⁴⁷, su adhesión sería sometida a un

146. Cf. M.A. Vieira, "Le droit...", *loc. cit.*, pp. 400-401.

trámite que se prometía difícil de antemano al requerir de parte de tal Estado una conducta y una prestación efectiva que dudosamente se ofrecería¹⁴⁸. La actitud uruguaya fue también adoptada por otros Estados signatarios, produciéndose un divorcio evidente entre lo declamado bajo los efectos de una embriaguez idealista durante las sesiones del Congreso, y la conducta efectiva guiada ora por el ánimo de proteger legítimos intereses, ora por temores infundados. Se presentaba otra vez el recelo, ahora más concreto, frente a la intervención de potencias europeas en la codificación americana, que vendrían a beneficiarse así de las ventajas que ésta podría reportarles¹⁴⁹ sin ofrecer nada a cambio.

147. La alusión parece abarcar a los Estados europeos y a los Estados Unidos.

148. Sin embargo, en la carta que el embajador español en Montevideo, José de la Rica y Calvo, envió al ministro de Estado de su país el mismo día en que firmó los tratados *ad referendum* (11 de noviembre de 1893) - *vid. Adhesión de España (firmada ad referendum) a los Tratados de D.I.Pr. que se convinieron en Montevideo, 1888-1889, Madrid, 1893, p.2-* señala entre las causas de su actitud, "la afirmación categórica de éste (el Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay), de que aceptaría nuestra adhesión á los Tratados, á condición de que ésta fuese al conjunto de todos ellos y no á algunos en especial, pues el Uruguay busca el éxito en las mayores proporciones posibles del Congreso".

149. *Vid. estas ventajas en Adhesión de España..., cit., esp. pp. 20-21. Vid. también, M. Torres Campos, "España y los Tratados de Montevideo", Rev. del Foro, La Habana, 1895 (cit. por él en Elementos..., op. cit., p. 148ⁿ) y M. de la Plaza y Navarro, "La codificación del*

Pero lo cierto es que, no obstante el panorama descrito, llegaron adhesiones, y debe subrayarse que en este ámbito la división de la obra en varios tratados, cumplió su cometido. Esto no fue óbice para que la validez jurídica de tales adhesiones fuera cuestionada¹⁵⁰. Del lado americano, Colombia adhirió al Convenio relativo al ejercicio de profesiones liberales, al Tratado de Derecho procesal internacional y, mucho después -en 1933-, a los Tratados de Derecho civil internacional y Derecho comercial internacional. Ecuador, a su vez, adhirió al Convenio sobre ejercicio de profesiones liberales. Todas estas adhesiones fueron aceptadas expresamente por Argentina. Mas el caso conflictivo, de acuerdo a los extremos que veníamos considerando, se produjo respecto al Tratado sobre propiedad literaria y artística, que provocó las

D.I.Pr. en las Conferencias de Montevideo. La adhesión de España", *R.L.J.*, 1908, t. 113, pp. 176-192, y t. 114, pp. 365-384.

150. Cf. Sent. de la Cám.Civ.Cap.Fed. (Argentina) de 19 de octubre de 1934, *J.A.*, t. 48, pp. 125 ss. y nota de Zavala; *Journ. dr. int.*, vol. 24, 1897, p. 634ⁿ; *Actas - 1928-*, pp. 977 ss.; Q. Alfonsín, *Curso de D.I.Pr.*, t. I, 1955, pp. 280 ss.; V. Romero del Prado, *Derecho...*, *op. cit.*, t. III, 1961, pp. 17-19; J. Samtleben, *Derecho...*, *op. cit.*, p. 18ⁿ; W. Goldschmidt, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 29 y 591ⁿ, donde señala que, existiendo aceptación por uno de los ratificantes, la adhesión cumple sus efectos, ya que se produce entre adherente y ratificante-aceptante un nuevo convenio independiente.

adhesiones de los siguientes Estados: Francia, España, Bélgica, Italia, Austria, Alemania y Hungría¹⁵¹. Mientras Perú rechazó las de Italia y Bélgica, y Paraguay la de Austria¹⁵², Argentina aceptó todas las adhesiones¹⁵³.

La particular actitud española frente a los Tratados de Montevideo será comentada más adelante. Pero no dejaremos de destacar aquí que estos tratados fueron firmados en su totalidad por el embajador español en el Uruguay, autorizado por el ministro de Estado de su país. Se ha dicho que las razones del posterior fracaso de esta adhesión se debieron en parte a las posturas contrarias de algunos países americanos¹⁵⁴. Sin embargo, el tema presenta también otras aristas, y exige la elucidación de

151. Sobre todo en virtud de sus arts. 2 y 4, este Tratado garantiza la protección total de las obras extranjeras. Téngase en cuenta, además, que en varios países americanos aún no existía normativa sobre la materia. *Vid. Adhesión de España...*, cit., pp. 4-5.

152. M. Vieira, "Le droit...", loc. cit. Sin embargo en *Derecho internacional privado*, 4ª ed., 1987, pp. 245-246, dice que "estas adhesiones no tienen ningún valor para el Uruguay, sí para la Argentina, Bolivia y Paraguay".

153. Respecto al acuerdo concreto entre Argentina y España, *vid. Journ. dr. int.*, 1901, pp. 612-613. Una adhesión posterior de la extinta República Democrática Alemana, fue rechazada por Argentina y Uruguay. *Vid. M.A. Vieira, Derecho internacional privado*, Montevideo, 1987, p. 246.

154. J.D. González Campos, "La revolución...", loc. cit., p. 103n.

los verdaderos intereses de España frente a la codificación internacional del D.I.Pr., signados desde hace más de un siglo por una inestable dialéctica entre actitudes "europeístas" y "americanistas"¹⁵⁵.

D) *La trascendencia del Primer Congreso Sudamericano*

22. A la hora de evaluar la trascendencia de la obra del Congreso de Montevideo de 1888-1889, no deberá desdeñarse el dato significativo de que constituye el primer intento a nivel mundial de codificación internacional del D.I.Pr. que alcanzó vigencia efectiva, dato que se ve realzado por la aplicabilidad actual de los tratados de allí emanados. Es notable que instrumentos firmados hace más de cien años (aunque mínimamente reformados) sean invocados una y otra vez por la práctica jurisprudencial de los países vinculados, especialmente en Argentina y Uruguay¹⁵⁶. El hecho de que

155. *Ibid.* Cf. M. Aguilar Navarro, *Derecho...*, op. cit., pp. 523-525.

156. *Vid. Los Tratados de Montevideo y su Interpretación Judicial*, publicado por el Instituto de Jurisprudencia de La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), vol. I, parte 1ª, La Plata, 1940, que recoge sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y

las soluciones brindadas por los tratados coincida generalmente con la consagrada en los sistemas nacionales de D.I.Pr. de esos países, no autoriza a menospreciar el rol desempeñado por la jurisprudencia¹⁵⁷, ya que lo que importa realmente es que aquéllos se apliquen a los supuestos previstos en sus normas. Un argumento de ese tipo llevaría a cuestionar directamente la función del juez en la interpretación y aplicación de los convenios internacionales, la cual, como es obvio, se moverá siempre discretamente dentro de unos parámetros fijados por los intereses de su país. Una actuación neutral de los jueces en este sentido, no se produce normalmente en ningún lugar del mundo, y es lógico que así suceda.

Los efectos de los Tratados de Montevideo de 1889 no se limitan a su aplicación en los países ratificantes.

por las Cámaras Federales de Apelación de Argentina, entre 1894 y 1914. En las obras de W. Goldschmidt (*Derecho...*, op. cit.) y A. Boggiano (*Derecho internacional privado*, Buenos Aires, 1991), puede encontrarse la jurisprudencia argentina relativa a estos tratados, con citas y valiosísimas notas. Cf., asimismo, J.E. Briceño Berrú, *La codificación del D.I.Pr. en América Latina* (tesis doctoral), t. II, Barcelona, 1986, pp. 426-525, e id., "Reflexiones...", loc. cit., pp. 180-186.

157. J.E. Briceño Berrú, *La codificación...*, op. cit., p. 502. Refiriéndose a los tratados de 1889, dice M.A. Vieira que "ces traités, malgré leurs défauts, que le temps a révélés, gardent une étonnante maturité, en réglant parfaitement les conflits de lois entre les pays qui les ont ratifiés" ("Le droit ...", loc. cit., p. 402).

Por el contrario, han excedido estas fronteras ejerciendo una gran influencia en algunos países no vinculados a la obra del Congreso Sudamericano¹⁵⁸. Esta afirmación puede comprobarse observando los tratados concluidos en los Congresos celebrados por los Estados centroamericanos (Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador) en 1897 (Guatemala) y 1901 (San Salvador), que demuestran una total inspiración montevideana. Si bien los instrumentos allí pergeñados no alcanzaron a gozar de vigencia efectiva, los principios en ellos consagrados se trasladaron a las legislaciones internas de los países implicados, en particular, el que establece la elección de la conexión domiciliar para regir las cuestiones atinentes a estado y capacidad de las personas¹⁵⁹. Una influencia similar recibieron los Acuerdos sobre: ejecución de actos extranjeros¹⁶⁰, propiedad literaria y

158. Cf. J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., pp. 6, 20 y 23-24.

159. *Ibid.* y, del mismo autor, "Der Territorialitätsgrundsatz...", loc. cit., pp. 99 ss. Cf. J. Matos, *Derecho internacional privado*, 2ª ed., Guatemala, 1941, p. 229; allí puede leerse que los cinco convenios de 1897 (sobre materia civil, penal, mercantil, procesal y sobre propiedad literaria y artística), "no se consideraron obligatorios en todos los países contratantes, no obstante que en la mayor parte de ellos parece que adquirieron fuerza de ley".

160. "La mayoría de las reformas hechas por el Congreso boliviano fueron meramente formales", dice G.

artística, patentes y privilegios de invención, y títulos académicos, celebrados entre Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en el marco del Congreso de Caracas de 1911, también llamado Primer Congreso Boliviano¹⁶¹.

23. No obstante lo hasta aquí afirmado, no puede olvidarse que las apetencias de los iniciadores de esta empresa iban mucho más allá y que, por lo tanto, en este sentido, el cuadro de incorporaciones recibido por los Tratados de Montevideo de 1889, no puede considerarse demasiado satisfactorio¹⁶². Autorizadas opiniones achacan

Parra-Aranguren, "El Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros (1911) a la luz de la jurisprudencia venezolana", *Rev. Fac. Der. Univ. Cat. A. Bello*, núm. 22, 1975-1976, p. 20, refiriéndose al Tratado de Derecho procesal Internacional de Montevideo, utilizado como base de este acuerdo.

161. Todos estos tratados han entrado en vigor para los Estados participantes, *Ibid.*, p. 19, y J. Samtleben, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 21-22. En contra, A.S. de Bustamante y Sirvén, *Derecho internacional privado*, t. I, 1ª ed., La Habana, 1931, p. 43, y V. Romero del Prado, *op. cit.*, p. 569, que parece tomar la cita del anterior.

162. Esa es la idea que expresa A.S. de Bustamante y Sirvén, en *La nacionalidad y el domicilio*, *op. cit.*, p. 16, restándole trascendencia práctica al congreso: "los tratados de Montevideo no rigen más que en cuatro de las veintiuna Repúblicas americanas. Reducida la situación a cifras, han logrado sólo el consentimiento legal del diez y nueve por ciento de los países a que podrían aplicarse (...) No cabe afirmar que eso constituye un triunfo del sistema". La misma opinión se intuye en *Derecho...*, *op. cit.*, (Cf. su opinión respecto al Código Bustamante, *ibid.*, pp. 46-47). *Vid.* asimismo su consideración en *El Código...*, *op. cit.*, pp. 10-11. Por la misma senda camina

estos "resultados negativos" al hecho de que haya sido un grupo reducido de Estados el que tomó la iniciativa codificadora, para después intentar su generalización¹⁶³, en vez de ser una obra verdaderamente colectiva, en tanto otros hacen hincapié en lo prematuro de la idea que se intentaba llevar a cabo.¹⁶⁴ A esto debe sumarse que, pese al aparente clima de confraternidad, entre los países participantes había más de un motivo de disputa por cuestiones políticas o de fronteras. Esto conspiraba contra el buen funcionamiento del Congreso y contra el logro de resultados óptimos, convirtiendo a aquél -según palabras de algún autor- en un "foco de susceptibilidades, de recelos, de intransigencias, que motivaron su fracaso parcial"¹⁶⁵

A.A. Fernandes, *loc. cit.*, al afirmar que con los Tratados de 1889 se produjo para los Estados del Plata "a vitória que os derrotou". Una crítica singular realiza E. Zeballos, al afirmar que los Tratados han complicado la vida jurídica al duplicar la legislación ("La codification du droit international privé aux Conférences de La Haye (1893-1904)", *Bull. arg. dr. int. pr.*, VI, 1903-1905, p. 387).

163. J.D. González Campos, "La revolución...", *loc. cit.*, p. 103, emplea estos términos al criticar la Resolución del I.D.I. de 1874 por la cual se aconsejaba este método.

164. A.M. Villela, "L'unification...", *loc. cit.*, p. 235.

165. E. Zeballos, *Justicia Internacional...*, *op. cit.*, pp. 217 ss. Compensando en parte la gravedad de esas afirmaciones, el mismo autor dice más adelante que

Mas, aunque la situación haya sido realmente así, lo cierto es que el Congreso de Montevideo ejerció un considerable impacto en la doctrina, a uno y a otro lado del Océano Atlántico¹⁶⁶. Más de un autor europeo llamó la atención sobre la superioridad científica de su obra respecto a regulaciones de D.I.Pr. en Europa. Así, pudieron leerse en España, por ejemplo, opiniones de aliento a la aceptación por parte de este país de

"... los Códigos de Montevideo que, con todos sus defectos, están inspirados en corrientes verdaderamente científicas, en contraposición á los arcaicos criterios que informan muchas legislaciones europeas, casi exclusivamente por respeto á la tradición é influencia de la doctrina estatutaria"¹⁶⁷.

"las convenciones de Montevideo quedan también en la ciencia con el carácter de punto de partida a la codificación del derecho privado humano en Europa; y cuando las conferencias de La Haya fueron iniciadas en 1892, se reconoció que la América del Sur había tenido la iniciativa y demostrado la posibilidad de una unificación que la política entorpece, pero que la ciencia quiere imponer e impondrá al fin, en nombre del bienestar humano".

166. Ese interés motivó que el mismo E. Zeballos persiguiera sin éxito la realización de una conferencia entre los países partidarios del principio de la ley del domicilio en Europa y América. *Vid.* K.H. Nadelmann, "Multilateral Conventions...", loc. cit., pp. 127-128. También en J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., p. 20.

167. M. de la Plaza y Navarro, *op. cit.*, p. 383.

Puede decirse, sin hesitación, que fue este el primer capítulo de una historia que habría de ocupar buena parte de las páginas dedicadas al estudio de la codificación internacional del D.I.Pr.; muchas veces escritas con la rigurosidad que exige la Ciencia del Derecho, otras con la superficialidad propia de un trabajo realizado por mera curiosidad.

2. LA HORA DE LA REVISION: MONTEVIDEO, 1939-1940¹⁶⁸

A) *La nueva situación del D.I.Pr. americano a la luz de las Conferencias Panamericanas*

24. Al cumplirse cincuenta años del Congreso Sudamericano, los mismos países que lo habían convocado volvieron a realizar una invitación conjunta a todos los Estados que habían participado en las sesiones de 1888-1889. El objeto perseguido con la nueva convocatoria era

168. Los documentos relativos a este Congreso pueden encontrarse en las publicaciones de la O.E.A. antes citadas y en: *Segundo Congreso Sudamericano de D.I.Pr. de Montevideo*, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, Buenos Aires, 1940 (en adelante: *Actas Segundo Congreso*), y *Segundo Congreso Sudamericano de D.I.Pr. de Montevideo, Acta final*, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, 1940 (en adelante: *Acta final -1940-*). También en R.A.D.I., 1940, pp. 91-427.

revisar los tratados existentes, procurando adecuarlos a los nuevos tiempos, teniendo en cuenta la experiencia acumulada hasta entonces¹⁶⁹. No debe olvidarse que en 1928, en el marco de la Sexta Conferencia Panamericana, se había aprobado el Código Bustamante, que ya contaba con varias incorporaciones, entre ellas las de Bolivia, Brasil, Chile y Perú¹⁷⁰.

Si bien el único de estos cuatro países que lo hizo sin que mediara reserva alguna fue Perú, la aparición de este cuerpo legal conspiró objetivamente contra las posibilidades de una evolución trascendente en los Tratados de Montevideo¹⁷¹ iniciando -o agravando- en la empresa codificadora americana, una bifurcación que quedaría consolidada con la nueva obra de Montevideo. La formación de dos bloques bien diferenciados, aunque con varios casos intermedios, vendría a caracterizar el perfil de la codificación internacional del D.I.Pr. en

169. Vid., E. Rabel, "The revision of the treaties of Montevideo on the law of conflicts", *Mich. L.R.*, 1940-41, pp. 517-525, y J.L. Bustamante y Rivero, *El Tratado de Derecho Civil Internacional de 1940*, Buenos Aires, 1942, p. 10.

170. Entre los Estados de América del Sur, también han ratificado el Código Bustamante, Ecuador, Venezuela (ambos con reservas) y Panamá.

171. Cf. G. Giraldo Jaramillo, *Los Tratados de Montevideo de 1940*, Bogotá, 1941, pp. 151-ss., y R. Zuccherino, *op. cit.*, pp. 10-11.

América hasta bien entrada la década del setenta¹⁷². En la misma línea de nuestras afirmaciones, se ha opinado que los Tratados de Montevideo de 1939-1940 se inscriben dentro del tercer período de la codificación del D.I.Pr. (1928-1960), el de la decadencia de los esfuerzos de integración jurídica, y se presentan como el "canto del cisne" de éstos¹⁷³.

B) Los tratados de 1939-1940

25. El Segundo Congreso Sudamericano comenzó sus sesiones en la ciudad de Montevideo el 18 de julio de 1939, con las presencias de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Brasil, por su parte, siguiendo un consejo de la Asociación Brasileña de Derecho Internacional, se abstuvo de participar, por entender que se debía proceder a una revisión más amplia que incluyera

172. Esta división existente entre partidarios de los Tratados de Montevideo y partidarios del Código Bustamante, fue señalada por M. Aguilar Navarro como un "obstáculo real" para una aproximación "americanista" de España (*op. cit.*, p. 525).

173. Cf. M.A. Vieira, "Le droit ...", *loc. cit.*, pp. 411-412. Debe tenerse en cuenta que esta opinión fue esbozada antes del comienzo de la nueva etapa protagonizada por la CIDIP.

al Código Bustamante¹⁷⁴. El Congreso tuvo lugar hasta el 4 de agosto del mismo año, fecha en la cual se firmaron los siguientes tratados: Tratado sobre asilo y refugio político, Tratado sobre propiedad intelectual y Convención relativa al ejercicio de profesiones liberales. Los tres tratados fueron firmados por Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, mientras que Chile sólo firmó el primero¹⁷⁵.

El principal motivo por el cual tuvo que suspenderse el Congreso, fue la insuperable controversia entre los países convocantes respecto a la reglamentación del divorcio, tema muy caro a los delegados argentinos, que manifestaban con su intransigencia el carácter netamente contrario a esa institución imperante en la legislación y jurisprudencia de su país¹⁷⁶, situación diametralmente

174. H. Valladão, "Le droit ...", *loc. cit.*, 107. La idea de la revisión amplia, que hallaba sustento en el art. 7 de la Convención que aprobó el Código Bustamante, constituyó el centro de atención de los internacionalistas americanos durante muchos años. La misma se intentaría incluyendo también a los *Restatements of the Law of Conflicts of Laws*. Vid. también R. Zuccherino, *op. cit.*, p. 27, y A.A. Fernandes, *loc. cit.* Sobre la actitud brasilera frente al Segundo Congreso, vid. E. González Lapeyre, "Los Tratados de Montevideo de 1939-1940 y la República Federativa del Brasil", *R.U.D.I.*, núm. 3, 1974, pp. 101-114.

175. *Actas Segundo Congreso*, pp. 63, 98 y 109.

176. Salvo un breve período entre los años 1954 y 1955, el divorcio vincular estuvo prohibido en la

opuesta a la existente en la otra ribera del Río de la Plata. También se produjeron divergencias en materia de competencia judicial internacional¹⁷⁷. Por estas razones, se decidió una nueva convocatoria para el año siguiente, la que se haría extensiva a los demás países sudamericanos. La intención que guiaba el accionar de los congresistas al decidir la prórroga, era que en el lapso que mediaba hasta el siguiente encuentro pudieran zanjarse las diferencias.

26. La nueva reunión se constituyó el 6 de marzo de 1940, con el agregado de los delegados de Brasil y Colombia. El Congreso no alcanzó a sesionar dos semanas, clausurándose el 19 del mismo mes con la firma de cinco tratados y un Protocolo Adicional con el mismo objeto que el anterior. Los tratados celebrados fueron: Tratado sobre Derecho civil internacional, Tratado sobre Derecho comercial terrestre internacional, Tratado sobre Derecho de navegación comercial internacional, Tratado de Derecho penal internacional y Tratado de Derecho procesal internacional.

Argentina hasta el año 1987 en el cual se sancionó la nueva ley de matrimonio civil (ley 23.515).

177. Cf. H. Valladão, "Le droit...", *loc. cit.*, pp. 107-108, y M.A. Vieira, "Le droit...", *loc. cit.*, p. 412 y nota 62. En general, *vid. R.A.D.I.*, 1940, pp. 352-373.

Como puede observarse en los cuadros anteriores, no se celebraron nuevos tratados en materia de patentes de invención, y de marcas de comercio y de fábrica, pero se dividieron los antiguos tratados en materia mercantil y penal, apareciendo de este modo instrumentos separados relativos a navegación comercial y a asilo y refugio político. La obra de 1939-1940 repite, en general, los textos anteriores, presentándose diferencias poco significativas¹⁷⁸. Cabe destacar, por ejemplo, la prohibición genérica¹⁷⁹ de la autonomía de la voluntad respecto a la elección de la ley aplicable y de la jurisdicción competente, que se realiza en el art. 5 del Protocolo adicional, aunque el art. 56 del Tratado de Derecho civil internacional de 1889, recibe en 1940 un agregado admitiendo la *prorrogatio fori*¹⁸⁰, bajo

178. T.B. de Maekelt, *Normas Generales...*, op. cit., p. 39, expresa que no obstante ello, "la revisión determinó un mayor predominio del principio de domicilio como factor de conexión", salvedad que no realizara en su Conferencia Especializada de D.I.Pr. (CIDIP-I), Caracas, 1979, p. 16. Vid. las modificaciones en D. Opertti, "Estado actual...", loc. cit., pp. 318-321

179. Decimos "genérica" porque la misma norma incluye como excepción la admisión de la autonomía en la medida en que lo autorice la ley aplicable. Cf. G. Chalita y M.B. Noodt Taquela, *Unificación del D.I.Pr.*, CIDIP - I, II y III, Buenos Aires, 1988, p. 19, donde las autoras critican, sin matizaciones, la prohibición, refiriéndose al art. 2 del Protocolo Adicional. Cf. también W. Goldschmidt, op. cit., p. 197.

determinadas condiciones. En lo que respecta a la reglamentación del divorcio, el art. 15 de este Tratado consagra una curiosa fórmula transaccional, a fin de no herir las susceptibilidades antidivorcistas que entonces campeaban por Argentina.

C) *La limitación regional en las incorporaciones y la cristalización del sistema montevideano*

27. Podría pensarse que las modificaciones operadas en los antiguos textos provocaron un mayor número de incorporaciones, superando así el limitado marco alcanzado por aquéllos. Mas, es sabido que no ha sido así. Los tratados celebrados en el Segundo Congreso Sudamericano confirmaron la tendencia territorialista que hemos señalado en los de 1889, y vieron la luz en un ambiente signado por las posiciones enfrentadas. No en vano, resulta ya un lugar común al comentar estos convenios, utilizar la frase acuñada por uno de los representantes peruanos en el Congreso, quien decía que en lugar de lograr una aproximación entre los países

180. "La réforme la plus notable", según G.A.L. Droz, "Regards...", loc. cit., p. 70.

americanos sólo hicieron acentuar las divergencias¹⁸¹. Clara muestra de ello, nos brinda la actitud tomada por los diferentes Estados ante la firma y posterior ratificación de los tratados concluidos en la segunda fase del Congreso. Estos fueron firmados en sus totalidad por Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Por su parte, Brasil rechazó firmar el de Derecho civil -debido principalmente a su rechazo a la aplicación de la ley del domicilio¹⁸²- y el Protocolo

181. Vid. J.L. Bustamante y Rivero, *El Tratado de Derecho Civil Internacional de 1940*, Montevideo, 1942, pp. 25-27. Según M. Aguilar Navarro, la consolidación de las tendencias territorialistas restó coherencia a la relación de los sistemas americanos (*Derecho...*, op. cit., p. 513). Coherente con su línea, mucho más terminante y despectivo, se expresa A.A. de Fernandes, op. cit., p. 159.

182. Señala H. Valladão que después de la aprobación en Brasil de la Ley de Introducción al C.c. de 1942, en la cual se adopta el principio domiciliario, se propuso en este país la adhesión al Tratado de Derecho Civil Internacional de 1940. A ella se opuso el autor, en su carácter de Consultor General de la República, diciendo que "a razão de o Brasil recusar sua assinatura ao Tratado nao foi apenas o problema da lei nacional e da lei do domicílio (...) foram outros, substanciais, p. ex., a regência das obrigações pela lei do lugar da execução (no Brasil, inclusive na nova Lei, pelo lugar da constituição); das sucessões pela "lex rei sitae" (...) (no Brasil, unidade e universalidade pela lei do domicílio do "de cujus")". Y esta fue la postura que tomó el gobierno brasileño (*Direito internacional privado...*, op. cit., p. 200ⁿ).

adicional, mientras que Chile sólo firmó el de Derecho comercial¹⁸³.

Las ratificaciones fueron aun más pobres. La única incorporación durante varios años fue la de Uruguay que, el 12 de noviembre de 1942, ratificó todos los tratados. Las divergencias antes subrayadas se reflejan ostensiblemente en la conducta seguida por el otro país convocante del Congreso, que sólo el 18 de junio de 1956, y en virtud de un acto emanado de un gobierno de facto, procedió a ratificar algunos tratados (los relativos a materia civil, comercial, de navegación y procesal) y el Protocolo adicional. En similar demora incurrió Paraguay, que ratificó el Tratado sobre asilo y refugio político el 15 de septiembre de 1956, mientras que el 5 de septiembre de 1958 ratificó todos los demás instrumentos excepto el Tratado de Derecho penal internacional (ratificaciones

183. Téngase en cuenta que, a diferencia de lo ocurrido con los tratados de 1889, se produjeron numerosas reservas, reflejadas en el siguiente cuadro:

- Tratado de Derecho civil internacional: Perú y Uruguay. *Actas Segundo Congreso*, pp. 197-198.
- Tratado de Derecho comercial terrestre internacional: Brasil y Colombia. *Id.*, p. 271.
- Tratado de Derecho de navegación internacional: Bolivia. *Id.*, p. 343 (Lógica limitación a la navegación fluvial, lacustre y aérea).
- Tratado de Derecho procesal internacional: Argentina y Brasil. *Id.*, pp. 445-446.
- Protocolo adicional: Perú. *Id.*, pp. 453-454.

aprobadas por el gobierno paraguayo desde 1950), que fue ratificado el 13 de marzo de 1961¹⁸⁴. Finalmente, el 31 de marzo de 1963, Argentina se incorporó al Convenio relativo al ejercicio de profesiones liberales. Se constata, por consiguiente, que los tratados y el Protocolo Adicional celebrados entre 1939 y 1940 están vigentes sólo con respecto a Argentina, Paraguay y Uruguay, salvo los relativos a Derecho penal, asilo y refugio político y propiedad intelectual, que rigen sólo para los dos últimos.

Fuera del continente americano, la repercusión no fue diferente. La noticia de los nuevos tratados fue conocida pero tomada con mucho menor interés que el despertado por la primera versión o por el Código Bustamante¹⁸⁵. Si bien las circunstancias del momento, signadas por la Segunda Guerra Mundial, no resultaban las más apropiadas para generar un estudio de los textos de Montevideo, lo cierto es que los textos de 1939-1940 quedaron prisioneros en un pequeño sector subregional y sin ninguna posibilidad de extensión de su ámbito de validez espacial. Sin embargo, en su estrecho campo de acción, los tratados han alcanzado una aplicación casi

184. Cf. W. Goldschmidt, *Derecho...*, op. cit., pp. 30 y 31.

185. E. Rabel, op. cit., pp. 518-519.

cotidiana, no son esotéricos para los operadores jurídicos, y se han revelado como una herramienta útil para la regulación de las relaciones de tráfico privado externo.

IV. La obra de las Conferencias Panamericanas y el Código Bustamante

1. LAS CONFERENCIAS Y LA NOCION DE PANAMERICANISMO

A) *Orígenes y alcance del nuevo movimiento panamericano*

28. Hacia fines del siglo XIX comenzó a gestarse, a instancias de los Estados Unidos, un proceso de alcance mucho más amplio que el encarnado por los Congresos Sudamericanos de Montevideo. A partir de entonces, el gobierno de aquel Estado empezó a desempeñar un rol protagónico en el continente de forma ostensible, orientado a encaminar las relaciones de los Estados americanos entre sí y entre éstos y Europa, papel que ya no abandonaría. Es en este momento cuando se inicia una nueva etapa en el desarrollo del movimiento panamericano, en la cual el panamericanismo iba a mudar

significativamente sus características esenciales. En efecto, tras un período de esfuerzos aislados, frecuentemente vanos, que venían produciéndose desde principios de siglo, vió la luz otro que, sólo en parte, puede ser visto como una continuación del anterior.

La razón principal de esta afirmación estriba en el carácter fundamentalmente político que animó al proceso anterior desde la impronta misma de Bolívar, que no se corresponde del todo con el talante económico que guió desde el inicio el accionar norteamericano. Aquél buscaba configurarse como una unión política que pudiera dotarse para cumplir sus fines, tanto de instrumentos políticos cuanto económicos y jurídicos. Este, nació haciendo girar todo en torno a sus necesidades comerciales¹⁸⁶. Es cierto que algunas conductas se repiten, pero la vocación

186. Por ello, hasta un panamericanista de pro como J.M. Yepes, estima que "il y a donc un grosse erreur à soutenir -comme d'aucuns le font très souvent- que le panaméricanisme d'aujourd'hui représente exactement les idées de Bolivar". Vid. "Les problèmes fondamentaux du droit des gens en Amérique", R. des C., t. 47 (1934-I), pp. 5-143, esp. 115-119. Id. *Del Congreso...*, cit., t. II, p. 22. Asimismo, C. Sepúlveda, *El Sistema Interamericano. Génesis, integración y decadencia*, 2ª ed., México, 1974, pp. 21-22 y R. Soler y R.D. Rodríguez Patiño, "Proyectos de unificación hispanoamericana durante el siglo XIX", An. Der. (Panamá), núm. 14, 1985, pp. 91-120 (esp. 110-111 y la referencia a J. Martí). Cf. M. Mackenzie, *Los ideales de Bolívar en el Derecho Internacional Americano*, Bogotá, 1955.

hegemónica de los Estados Unidos dibuja rasgos distintivos a la etapa que ahora nos ocupa¹⁸⁷.

Si en algún sentido puede considerarse al proceso iniciado en el Congreso de Panamá de 1826 como precursor del impulsado por los Estados Unidos, es en el de la idea presente en muchos de los participantes en ambos acerca de la existencia de un destino común americano. Algunos lo expresaron como un sentimiento de solidaridad inmanente al Nuevo Mundo, que incluso llegaba a configurarse como un principio americano del Derecho de gentes en ciertos desarrollos teóricos¹⁸⁸. Pero aún aceptando la veracidad de estas expresiones, no puede

187. M. Straznicky, *loc. cit.*, destaca en este sentido una triple política norteamericana respecto a América Latina: influencia, imperialismo y hegemonía. Sobre la evolución de mayor a menor de las facetas políticas y económicas de esa hegemonía en las Conferencias Panamericanas, *vid.* J. Basdevant, "La Conférence de Rio-de-Janeiro de 1906 et l'Union Internationale des Républiques Américaines", *Rev. gén. dr. int. pub.*, t. XV, 1908, pp. 209-270. *Cf.*, sin embargo, las interesadas distinciones de "semántica política", realizadas por J.B. Lockey, en "The Meaning on Pan-Americanism", *A.J.I.L.*, vol. 19, 1925, pp. 104-117 y "Pan-Americanism and Imperialism", *A.J.I.L.*, vol. 32, 1938, pp. 233-243. Por su parte, G. Kutzner, *op. cit.*, pp. 18-31, subraya como rasgo característico de la "primera fase" del panamericanismo (1826-1889), la ausencia de Estados Unidos y Brasil.

188. En varias partes del presente Capítulo puede contrastarse la ubicación de la solidaridad internacional como principio del D.I.P. americano. Consúltese, para un comprensión amplia de este enunciado A. Guani, "La solidarité...", *loc. cit.*

dejarse de lado el hecho nada trivial de que había demasiados intereses en juego, tanto continentales cuanto extra-continentales.

De un lado, la antinomia entre latinoamericanismo y panamericanismo no debe desdeñarse como elemento de análisis importante¹⁸⁹, toda vez que en diferentes momentos a lo largo de una historia cargada de vicisitudes, representantes de América Latina exteriorizaron sus reservas a la participación norteamericana en cualquier empresa de alcance continental¹⁹⁰; en este sentido, ya hemos expuesto la actitud de Bolívar con ocasión de cursarse las invitaciones para el Congreso de 1826¹⁹¹. En los Estados

189. La influencia de las definiciones macropolíticas determina en gran medida, como venimos viendo, la actitud de los países frente a los diferentes esfuerzos que se producen en el ámbito jurídico y el éxito -siempre relativo- de los mismos. Creemos por ello que M. Straznicky realiza un planteamiento algo sesgado acerca de la antinomia mencionada (*op. cit.*, pp. 485-486), que le lleva a identificar latinoamericanismo con los congresos de Lima y Montevideo, a partir de una lectura particular de A. Alvarez, *Le panaméricanisme et la VI^e Conférence panaméricaine*, París, 1928. Cf. J. Basdevant, *op. cit.*, pp. 211-212 y J.B. Lockey, "Pan-Americanism and Imperialism", *loc. cit.*

190. Cf. H. Wells, "The Institutional Framework of Inter-American Relations", *California Western Int. L.J.*, vol. 13, 1983, *concr.* pp. 227-228.

191. Esta postura se evidenció en variadas circunstancias, incluso una vez iniciado el ciclo de Conferencias Panamericanas.

Unidos no faltaron asimismo las voces discordantes, que fueron las que retardaron la realización de la Primera Conferencia Panamericana. Cuando ésta finalmente se produjo, pudo notarse que los países latinoamericanos veían en la actitud norteamericana un interés indisimulado por obtener y consolidar una posición dominante y esto los mantenía reacios, conduciéndolos a obrar con mucha precaución¹⁹².

Naturalmente, los países que tenían compromisos económicos con potencias europeas y que, en mayor o menor medida, disfrutaban de alguna ventaja comparativa respecto del resto, no simpatizaron con la propuesta norteamericana. Los mismos Estados europeos, especialmente Gran Bretaña, tenían grandes intereses económicos en América y muy pocas intenciones de echarlos a perder. Si a esto se le añade que la incipiente industria norteamericana, no obstante su volumen y su potencial, no estaba todavía en condiciones de competir de igual a igual con las de Europa, eran escasas las posibilidades de los Estados Unidos para conquistar el mercado latinoamericano. En tal situación, explotar la idea del panamericanismo en el sentido de "unión moral"

192. Vid. A. Alvarez, *Le droit international américain...*, op. cit., p. 213.

inherente a los Estados del continente¹⁹³ pudo ser infructuoso en un comienzo pero después traería algunos resultados, unida a otras políticas menos sutiles. Con el curso tomado por la situación política y económica internacional a lo largo del siglo veinte, Estados Unidos llegaría a consolidar su liderazgo en América y, casi sin solución de continuidad, en el mundo.

29. De otro lado, resulta revelador de la trama de intereses subyacentes a los fenómenos políticos acaecidos en América durante el último tercio del siglo XIX y principios del actual, la producción de numerosos conflictos localizados en diversas regiones. En efecto, a sucesos tales como la Guerra del Paraguay o de la Triple Alianza, la Guerra del Pacífico y la cuestión de la construcción del canal interoceánico, le siguieron otros de diferente envergadura pero igualmente traumáticos como la Guerra de Cuba, la intervención de la armada norteamericana en el puerto de Río de Janeiro en 1893 y el bloqueo a Venezuela por parte de Alemania, Italia y Gran Bretaña en 1902¹⁹⁴. Aunque configurados de distinto

193. J.M. Yepes, *Philosophie du Panaméricanisme et Organisation de la Paix*, Neuchatel, 1945, p. 24.

modo y en situaciones muy disímiles, un análisis pormenorizado de cada uno de ellos permite contemplar las dificultades que se presentaron en la construcción de un nuevo orden económico para América Latina, en un enfrentamiento permanente, en el cual las potencias europeas se resistían al desplazamiento¹⁹⁵.

A pesar de sus diferencias, al menos en un principio, este nuevo período estuvo marcado en general por la misma nota anodina que el anterior. Concretamente, en el tiempo que va desde la Primera Conferencia Panamericana hasta los años veinte, abundaron en las diversas reuniones que se realizaron una considerable cantidad de tratados, resoluciones, votos, etc. de variado tenor, caracterizados por el denominador común de su escasa trascendencia. Era como si las actividades se sucedieran sin un hilo conductor y todo se hubiera reducido a una imperiosa exigencia de producir por producir¹⁹⁶.

194. A raíz del problema venezolano se generó la célebre "doctrina Drago", que establece el principio de la prohibición del cobro compulsivo de la deuda pública.

195. *Vid.* S. Matos Ochoa, *op. cit.*, pp. 92-95.

196. Esta característica es la que ha servido para bautizar al período en cuestión como "panamericanismo por inercia". *Vid.* J.C. Puig y D. Colombo Imaz, "El movimiento por la unidad...", *loc. cit.*, p. 32.

La hipótesis según la cual el éxito del Primer Congreso de Montevideo actuó como catalizador de la preocupación norteamericana por desplazar el eje de la empresa codificadora hacia este país¹⁹⁷ no parece tener una base de sustentación demasiado sólida. Varias razones nos asisten para no compartirla. En primer lugar, no existe una correspondencia exacta entre las características que revisten ambos procesos, toda vez que la labor desplegada en Montevideo se centró en una disciplina muy concreta, el D.I.Pr., y en un ámbito espacial delimitado, América del Sur. El camino iniciado por los Estados Unidos, en cambio, pretendía un alcance pan-americano y respondía principalmente a móviles comerciales y económicos¹⁹⁸, aunque con el tiempo tendría importantes repercusiones en el campo del Derecho internacional.

En segundo lugar, la iniciativa norteamericana venía ya madurando al menos desde 1881, cuando el secretario de Estado James Blaine cursó una invitación a la práctica

197. Así lo expresa sin demasiada energía J. Constantinoff, entendiendo que los Estados Unidos "*se hâtent d'intervenir pour prendre la direction d'un mouvement qui sans cela aurait pu se développer sans eux, voir même contre eux*", op. cit., pp. 31-32.

198. Vid. J.C. Puig y D. Colombo Imaz, "Panamericanismo 'por inercia': 1889-1910", Rev. D.I. y Cs. Dipl. (Rosario), núms. 41-42, 1972, p. 156.

totalidad de los gobiernos americanos para la realización de una reunión continental¹⁹⁹. Si bien en aquel momento fracasó, saliendo del gobierno poco tiempo después, sus ideas fueron ganando adeptos entre la burguesía industrial de su país, es decir, entre los auténticos vencedores de la guerra de Secesión, ávidos de penetrar en ciertos mercados que hasta ese entonces sólo comerciaban con Europa. En este contexto, llegaron a plasmarse en la práctica en 1888, con la ley que concedió la autorización al presidente Cleveland para convocar lo que sería la Primera Conferencia Panamericana²⁰⁰.

Por último, en tercer lugar, referirse al éxito alcanzado por el Congreso Sudamericano es, como sabemos, bastante matizable, a punto tal que no es descabellado pensar que fueron precisamente los fracasos de este y otros intentos iberoamericanos los que dejaron el escenario libre para ser ocupado por otro actor principal²⁰¹. Todo parece indicar, en definitiva, que los impulsores de Montevideo se mantenían en un nivel

199. *Conferencias internacionales americanas...*, cit., t. I, pp. 3-4.

200. *Ibid.*

201. Cf. L. Moreno Quintana, *El sistema internacional americano*, t. I, Buenos Aires, 1925, pp. 120-123.

estrictamente jurídico que no denotaba un interés político sobresaliente y que tenía por destino, como máximo, un área subregional americana. Los otros intentos -iniciativas peruanas, colombianas, etc.- a que hemos hecho referencia nunca lograron generalizarse y, cuando obtuvieron algún resultado, su trascendencia fue escasa o nula. Como hemos visto, siempre faltaban algunos invitados de peso. En particular, eran habituales las ausencias o las presencias no muy convencidas de Argentina, Brasil y los Estados Unidos, circunstancias que marcaron a fuego las posibilidades de éxito de tales intentos²⁰².

Aunque no fue así desde el principio, la iniciativa norteamericana alcanzó un marco de acción importante en la Política Exterior y en el Derecho internacional público, pretendiendo englobar a todos los países del Nuevo Mundo. Mas el evidente interés económico que pesaba detrás de esta empresa, hizo que muchas de las actividades concretas en los campos mencionados correspondieran a los países latinos, en general más proclives a posturas idealistas carentes de razonables dosis de pragmatismo²⁰³. Del mismo modo que ha sucedido y

202. Cf. J.C. Puig y D. Colombo Imaz, "El movimiento..." *loc. cit.*, p. 30.

sigue sucediendo en otros ámbitos, puede decirse que el Código Bustamante constituye un producto no deseado o, al menos, no buscado por el movimiento panamericano en su concepción norteamericana. A años vista, da la impresión de ser el resultado del esfuerzo de un puñado de juristas brillantes (y de uno en particular), surgido de un contexto pensado para otros fines.

Por estas razones tampoco es exacto afirmar que las Conferencias Panamericanas constituyeron un movimiento paralelo a los Congresos Sudamericanos. Los ámbitos espacial y material de ambos foros coincidieron sólo parcialmente, y por ello el Congreso de Panamá de 1826 no puede considerarse con rigurosidad un antecedente de la obra de Montevideo aunque sí, en el sentido que hemos expuesto, de la desarrollada en el seno de las Conferencias. Además, mientras los Congresos de Montevideo tuvieron un objetivo específico que se traduce en los Tratados de 1889 y 1939-40, el movimiento panamericano se prolongó en el tiempo, matizado y con distintas formas y estructuras, a través de distintos pasos dados por la O.E.A.. Hechas estas aclaraciones,

203. A. Alvarez identifica la causa de tales posturas en el origen revolucionario de estos países. *Vid. Le droit international de l'avenir*, Washington, 1916, p. 42. Cf. C. Maresh, *La codification du droit international* (tesis), París, 1932, p. 44.

debe admitirse que existieron relaciones entre ambos procesos, como pondremos de manifiesto en las páginas siguientes.

B) *La codificación del Derecho internacional americano*

30. A la génesis y posterior desarrollo de las Conferencias Panamericanas contribuyó en gran medida la propagación de la idea de un Derecho internacional americano, con sus propios principios y características, y el convencimiento de que su codificación debía emprenderse sin demoras. Esta idea se refería en concreto al D.I.P., aunque existieron algunos planteamientos similares en el ámbito del D.I.Pr.²⁰⁴. Los fundamentos de aquélla se hallaban, en primer lugar, en la constatación de que el Derecho internacional por ese entonces vigente estaba pensado por y para Europa, razón por la cual sus reglas no siempre respondían a la realidad y a los intereses americanos; en algunos casos, se juzgaban

204. Concretamente, esa es la tendencia que deja entrever E.S. Zeballos en el prólogo a la 2ª ed. de su traducción de M. Weiss, *Manual de derecho internacional privado*, 5ª ed., París, 1924, pp. 5-6.

absolutamente incompatibles. En segundo lugar, las condiciones para avanzar en la regulación internacional de distintos aspectos del Derecho internacional, eran bastantes más propicias en América que en Europa. Si bien la situación general del continente americano no revestía los trazos idílicos con que algunos pretendían adornarla, es indudable que en ningún caso llegaba a parecerse a la de una Europa convulsionada y belicista²⁰⁵.

Los principios tenidos en cuenta para configurar el llamado Derecho internacional americano, difieren según los autores y según el momento de su formulación. Sin embargo, creemos que es una buena síntesis la que incluye en la lista a los siguientes: abolición de la esclavitud en todas sus formas, soberanía estatal, igualdad jurídica de los Estados, no intervención, Derecho de asilo, exclusión del recurso a la fuerza para el cobro de las deudas públicas, libertad de navegación de los ríos internacionales, no extradición por motivos políticos y

205. Vid. A. Alvarez, *Le droit international américain*, París, 1910. Id., *La codification du droit international. Ses bases - Ses tendances*, París, 1912, pp. 181-185 y 195-208. Ch. de Visscher expresa la misma idea, llegando a afirmar que "si Mancini a pu parler d'une vocation de notre siècle à la codification du droit international, on pourrait dire avec plus de justesse encore que l'Amérique possède une vocation continentale à cette oeuvre". Vid. "La codification du droit international", *R. des C.*, t. 6 (1925-I), pp. 425-426.

extradición de los nacionales, humanización del Derecho de guerra, solución pacífica de diferendos internacionales, seguridad colectiva, igualdad de tratamiento a los extranjeros, respeto internacional del Estado y *utis possidetis juris*²⁰⁶. Como puede observarse, algunos de los principios señalados tienen más peso que otros y no todos presentan un carácter más o menos acusado de "americanismo" o se dieron en América con diferentes perfiles (o antes) que en Europa.

Lo que queda fuera de toda discusión, es que sobre esta base la codificación continental del Derecho internacional hallaba su justificación fundamental, su razón de ser, la cual no estaba exenta de furibundas críticas dirigidas tanto a la existencia misma de tal Derecho, cuanto a los efectos negativos que aquélla acarreaba. Especialmente, se hacía referencia a que este accionar de los países americanos sustraía al continente

206. Vid. especialmente, además de las obras citadas de A. Alvarez, J.C. Puig, *Les principes du Droit international public américain*, París, 1954, D. Uribe Vargas, op. cit. pp. 143-151 y J.M. Yepes, "La contribution...", loc. cit., pp. 731-751. Una visión más actual en C. García Bauer, "Principios fundamentales del panamericanismo", *An. Jur. Interam.*, 1986, pp. 65-95 y en F.V. García-Amador, "Las doctrinas latinoamericanas y las propuestas actuales para revisar el Derecho internacional", *Temas de Derecho internacional en homenaje a Frida M. Pfirter de Armas Barea*, Buenos Aires, 1989, pp. 257-269.

del régimen de interdependencia y de solidaridad internacional, llevando a cabo una codificación fragmentaria que se constituía en obstáculo para el progreso del Derecho²⁰⁷.

Pero en realidad las ideas críticas más contundentes no hacían referencia a los extremos señalados, sino a uno mucho más tangible: la distancia existente entre la exposición teórica de los principios y algunos acontecimientos políticos que se producían en el continente americano, sobre todo en los primeros años del movimiento²⁰⁸. Dicho de otro modo, la formulación doctrinaria de estos principios o su consagración en alguna declaración o acción diplomática, no siempre se ha traducido en una conducta constante de los Estados. Y esto fue así en los comienzos y continúa hasta nuestros días, mucho más allá de los últimos estertores de aquella concepción de panamericanismo²⁰⁹.

207. Vid. J.G. Guerrero, *La codification du droit international, La Première Conférence (La Haye, 13 mars-12 avril 1930)*, París, 1930, pp. 12-15, donde este autor se expresa con vehemencia ante lo que considera "une régression et une réaction aussi fâcheuses que dangereuses". Asimismo, Sá Vianna, *De la non existence d'un Droit International Américain*, Río de Janeiro, 1912.

208. Tal era la opinión de C. Calvo, por ejemplo, respecto a la violación de algunos de esos principios por los Estados Unidos. Vid. D. Colombo Imaz de Puig y J.C. Puig, "El movimiento ...", *loc. cit.*, p. 14ⁿ.

Debe aclararse, empero, que en general lo que las Conferencias Panamericanas acogieron e intentaron poner en práctica fue la idea del Derecho internacional americano, entendido no como un conjunto de normas opuestas diametralmente a las europeas sino como aquellos problemas que se daban con sus propias notas distintivas en América y las normas pergeñadas para regularlos²¹⁰. Ahora bien, esta distinción no logró impedir que en las sucesivas Conferencias se plantearan una y otra vez bizantinas discusiones sobre la existencia de ese Derecho. Incluso, el debate superó las fronteras americanas, planteándose en el seno del I.D.I. y siendo

209. Piénsese, sin ir más lejos en el juego del principio de no intervención en América a través de este siglo. Contra, J.B. Lockey, "Pan-Americanism and Imperialism...", *loc. cit.*, p. 240.

210. Vid. el proyecto núm. 2 de los presentados por el Instituto Americano de D.I. al Consejo Directivo de la Unión Panamericana (2 de marzo de 1925), publicado en *Rev. Der. Int. (La Habana)*, t. VII, 1925 (núm. extraord.), p. 38. Cf. A. Alvarez, *Le droit international américain cit.*, pp. 267-270. En su obra póstuma *Le droit international nouveau dans ses rapports avec la vie actuelle des peuples*, París, 1959, pp. 90-91, todavía se puede leer: "No son sólo las formas de gobierno que difieren en Europa y en América sino también el sentido que se da en los dos continentes a nociones que les son comunes, como las de libertad, igualdad, democracia, federalismo, centralización, descentralización, etc.". Vid. el trasfondo filosófico del autor y de esta obra en M. Aguilar Navarro, "Las memorias de un gran internacionalista hispanoamericano", *Revista de Estudios Americanos*, núm. 92-93, 1959, pp. 235-341.

abordado por los más destacados internacionalistas europeos de principios de siglo²¹¹.

31. Las escasas líneas utilizadas para brindar un panorama del contexto en el cual se generó uno de los polos del D.I.Pr. americano, no empecen a la comprensión del fondo de la cuestión. Antes al contrario, permiten la formación de una idea, obligadamente demasiado somera, del "espíritu" que campeaba en las reuniones de la Conferencia y de la repercusión que éste alcanzaba en los propósitos de codificación del Derecho internacional general²¹². En el concreto espacio del D.I.Pr., también se han querido identificar algunos principios americanos. Curiosamente, es en este ámbito donde la búsqueda insistente de una regulación propia pudo alcanzar su mayor logro. Basta observar el contenido de cada Conferencia para comprender hasta qué punto es correcto

211. Vid. un resumen de estas posturas en J.M. Yepes, "La contribution...", *loc. cit.*, pp. 776-792.

212. Una muestra de este "espíritu" puede verse en el propósito de crear un tribunal de justicia continental. Vid. J.B. Scott, "Creación de un Tribunal Permanente Interamericano de Justicia", *Rev. Der. Int. (La Habana)*, t. XXI, 1932, pp. 97-146 (con varios anexos). El Proyecto, que fue presentado a la Reunión de la Comisión de Jurisconsultos de 1927, establecía la competencia del Tribunal para la interpretación de tratados.

hablar de "insistencia" sobre la necesidad de codificación²¹³.

No puede decirse con certeza que fue la existencia de principios o caracteres diferenciales americanos en la forma de presentarse las relaciones de tráfico privado externo o en su regulación estatal, la razón que abonó el terreno para que floreciera la mentada codificación. Pero pueden constatarse en cambio, no sin matices, algunos datos que informaban una realidad un tanto peculiar, y que son especialmente relevantes en la disciplina que nos ocupa. Primeramente llama la atención el alcance irrestricto dado al principio de igualdad de nacionales y extranjeros que, en el caso de ser americanos, llevaba en algunos casos a plantear una cierta "ciudadanía continental", elemento que ya aparecía en el Tratado de Panamá de 1826²¹⁴.

213. Cf. M. Straznicky, *op. cit.*, p. 489.

214. Vid. el desarrollo de esta idea en R. Soler y R.D. Rodríguez Patiño, *op. cit.*, pp. 107-109. La finalidad primaria de la equiparación entre nacionales y extranjeros, era la de crear situaciones propicias para el comercio internacional. Por ejemplo, el art. 1º del Tratado Continental hecho en Santiago de Chile el 15 de septiembre de 1856, lo refleja de la siguiente manera: "Los ciudadanos o naturales de cualquiera de las altas partes contratantes, gozarán en los territorios de cualquiera de las otras, del tratamiento de nacionales, con toda la latitud que permitan las leyes constitucionales de cada Estado. Sus propiedades o bienes gozarán igualmente en los territorios de cualquiera de las altas partes contratantes, y en todas circunstancias,

Aunque su desarrollo es más teórico que práctico, creemos no exagerar al resaltar su importancia, toda vez que se trata de un principio que penetra en la estructura de todos los sectores del D.I.Pr. Que los internacionalistas americanos -o algunos de ellos- que representaban a sus Estados en las reuniones jurídicas continentales, fijaran como punto fundamental este criterio, constituye un dato diferenciador. En un ámbito muy cercano, se ha subrayado la importancia que la protección del individuo (nacional o extranjero) frente a la acción del Estado debía alcanzar en los Estados "democráticos" de América, en comparación con las autocracias europeas²¹⁵.

No obstante la trascendencia del dato anterior, los elementos que cobran mayor importancia en cuanto a su continua invocación como rasgos característicos -en la doctrina y en la reglamentación positiva-, tienen que ver con la configuración de América como continente de inmigración. En este sentido, encontramos, de un lado, la consagración del *ius soli* como criterio atributivo de la

de la misma protección y garantías de que gocen las propiedades o bienes de los nacionales, y no estarán sujetos a otras cargas, exacciones o restricciones, que las que pesaren sobre los bienes y propiedades de los ciudadanos o naturales del Estado en que existan".

215. E.S. Zeballos, *Prólogo...*, cit..

nacionalidad; de otro, la adopción de la *lex domicilii* para regular el estado y la capacidad de las personas, criterio que se aplicaba asimismo a las sociedades comerciales constituídas en el extranjero pero que realizaban sus actividades en América²¹⁶. Lógicamente, después de la fórmula adoptada sobre este último punto en el Código Bustamante, no puede pensarse que el mismo fuera decisivo para la producción de un D.I.Pr. americano.

2. CONFERENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES ANTERIORES A LA SANCION DEL CODIGO DE BUSTAMANTE

32. Lejos de intentar hacer una cronología -que, por otra parte, puede encontrarse en muchísimos sitios²¹⁷- de

216. Al aplicarse este criterio, las sociedades no podían invocar la protección diplomática del Estado de constitución. Cf. J.M. Yepes, "La contribution...", *loc. cit.*, p. 752. Vid. la importancia dada a este dato en T.B. de Maekelt, "Reflexiones sobre Derecho comparado", *Libro Homenaje a la memoria de Joaquín Sánchez Covisa*, Caracas, 1975, pp. 226-227.

217. Además de *Conferencias internacionales americanas...*, *cit.*, puede consultarse S.G. Inman, *Inter American Conferences. 1826-1954. History and Problems*, Washington, 1965. Muy completa es la de E. Espínola, "A codificação do Direito Internacional para os Estados Americanos", *Pandectas Brasileiras*, vol. 2, 1927, pp. 5-592, esp. 35-592. Aunque planteada desde una perspectiva

los pasos sucedidos desde los orígenes del movimiento panamericano hasta la sanción del Código Bustamante²¹⁸, se trata aquí de poner de relieve la magnitud de la "insistencia" en la codificación del D.I.Pr. que mencionáramos en el epígrafe anterior. Las obligadas referencias a otras cuestiones que fueron tratadas en el seno de las Conferencias Panamericanas y en las reuniones que se produjeron en su entorno, se realizan en el entendimiento de que sirven para comprender aún mejor el ambiente en el cual se desarrollaba aquélla.

El punto principal, de cualquier manera, estriba en no perder de vista la compleja relación que se fue generando entre esta tarea de codificación y la obra promovida por los Estados rioplatenses. La consolidación de una estructura bipolar irreconciliable en la dimensión convencional del D.I.Pr. americano, constituye tal vez la muestra más tajante y más próxima a nuestra disciplina,

nacional, es también sumamente ilustrativa la de G. Parra-Aranguren, "Los precedentes venezolanos del Código Bustamante", *Codificación...*, op. cit., pp. 17-112. Especialmente interesante en cuanto a sus notas, G. Kutzner, op. cit., pp. 31-55. Para un excelente resumen anotado, dirigido principalmente a los aspectos de D.I.Pr., vid. J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., pp. 26-32.

218. La elección de este hito puede considerarse arbitraria si se tiene en cuenta que el eje principal de los intereses en presencia en las Conferencias pasaba por otro lado.

de la considerable distancia que ha existido prácticamente siempre entre los discursos y propuestas seguramente bienintencionados, por un lado, y los intereses y realizaciones por otro. No es sólo una cuestión de elección de uno u otro punto de conexión para regir el estatuto personal ni de la diversidad de influencias, aunque estos temas hayan tenido un singular impacto. Tampoco hay que centrarse demasiado en el problema de la cantidad de materia incluída en la codificación, ni en la utilización de uno o varios cuerpos normativos para llevarla a cabo. El *quid* de la bipolaridad parece moverse, sobre todo, en un marco acotado por mezquinas aunque comprensibles razones de protagonismo y de apego a las propias soluciones y el peso relativo de la antinomia latinoamericanismo-panamericanismo.

33. Desde la Primera Conferencia, que se reunió en Washington a partir del 2 de octubre de 1889, algunos de los extremos hasta aquí señalados fueron puestos de manifiesto. En la carta de invitación a la misma, se reproducía el art. 2 de la citada ley de 1888, en el cual los móviles económicos y comerciales que animaban a los Estados Unidos pasaban del ámbito de las informaciones

reservadas en que se encontraban en 1881 al de la plena evidencia²¹⁹. En aquella información reservada se expresaba, junto a la necesidad de preservar la paz en el continente, la de "cultivar relaciones amistosas y comerciales con todos los países americanos que lleven a un incremento en el comercio de exportación de los Estados Unidos"²²⁰. Dicho de otro modo, la primera se configuraba en un mero instrumento para la segunda²²¹. Varios países latinoamericanos dejaron ver que no les seducía demasiado la idea de subirse al tren comandado por Estados Unidos. Para algunos de ellos en particular, una decisión en ese sentido era en gran medida inconveniente²²². En la sesión del 7 de diciembre de

219. Vid. J.C. Puig y D. Colombo Imaz, "Panamericanismo...", loc. cit., p. 9 y H. Wells, loc. cit.

220. Ibid., citando a J.W. Pratt, *A History of United States Foreign Policy*, Englewood Cliffs, N.J., 1965, p. 185. Los temas fijados en dicha Ley se citan en J.J. Caicedo Castilla, *El Derecho internacional en el Sistema Interamericano*, Madrid, 1970, pp. 34-35.

221. De realizar un análisis de corte más político, en el que no queremos ni debemos introducirnos, pondríamos estas dos "necesidades" en términos de táctica y estrategia, respectivamente.

222. Argentina ejerció el liderazgo de esta posición "insumisa". Vid. la opinión en este sentido del delegado argentino Roque Sáenz Peña, en A. Whitaker, *La Argentina y los Estados Unidos*, trad., Buenos Aires, 1956, p. 15. Cf. también las instrucciones del presidente argentino Juárez Celman, en R. Sáenz Peña, *Escritos y Discursos*,

ese año, se votó una propuesta a raíz de la cual se nombró una comisión compuesta por cinco miembros para que presentara un trabajo sistematizado sobre Reglas Uniformes de D.I.Pr. referentes a las materias civiles, comerciales y de legalización de documentos. Los planteamientos tópicos de los representantes norteamericanos en lo que se refiere al impedimento constitucional de celebrar tratados en materias atinentes al Derecho privado y a la incompatibilidad entre el sistema del *common law* y el sistema romanista²²³, impidieron mayores progresos en el ámbito de la reglamentación del D.I.Pr.. Además, el texto de la invitación que se había formulado era claro en cuanto a que sólo se podían realizar consultas y recomendaciones. De esta manera, el 4 de marzo de 1890, la Conferencia sancionó una recomendación, sugiriendo a todos los gobiernos representados en la Conferencia que examinaran los Tratados de Montevideo de 1889 y que en el plazo de un año adhirieran a los mismos o expresaran una negativa

vol. III, Buenos Aires, p. 369, citado por S. Matos Ochoa, *op. cit.*, p. 102.

223. Vid. A.A. Fernandes, *op. cit.*, pp. 160-161. La interesante discusión acerca de los límites del *treaty making power* norteamericano, entre el delegado de este país y el argentino, es resumida también en K. Nadelmann, "Ignored State Interests...", *loc. cit.*, pp. 330-331.

fundada²²⁴. Antes de su finalización (19 de abril de 1990), la Conferencia alcanzó a adoptar otras resoluciones, entre las que se pueden destacar la creación de la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas -que pasaría a llamarse a partir de la Cuarta Conferencia (Buenos Aires, 1910) Unión Panamericana- y un proyecto sobre Arbitraje que más tarde se plasmaría en un Tratado.

Ya en la Segunda Conferencia (México, 1901-1902), se celebró una Convención (27 de enero de 1902) con el fin de establecer una Comisión encargada de redactar un Código de D.I.Pr. y otro de D.I.P., la cual estaría formada por cinco juristas americanos y dos europeos "de reconocida reputación"²²⁵, pero tampoco alcanzó vigencia efectiva²²⁶. La presencia extracontinental que se

224. También se recomendó la adopción de la legalización consular de los documentos. Ninguna de las recomendaciones tuvo efecto alguno. Vid. R. Octavio, *A codificação do direito internacional privado*, Oporto-Río de Janeiro, 1910, pp. 11-13.

225. Vid. Conferencias internacionales americanas..., cit., p. 61.

226. El proyecto de Convención fue presentado por el representante brasileño J. Hygino, quien falleció antes de la votación. Cf. H. Valladão, "Epitácio Pessoa, Jurista da Codificação do Direito Internacional", *Cuarto Curso C.J.I. -1977-*, pp. 15-36, esp. 27 y E. Espinola, "A codificação...", loc. cit., pp. 36-41. El estado de incorporaciones de todos los convenios celebrados en América, se puede consultar en *Tratados y Convenciones*

propugnaba, puede entenderse como un reflejo de la acción que se venía produciendo en Europa en este campo, específicamente en el marco del I.D.I..

Claro que no deja de ser relevante que durante el transcurso del tiempo pasado entre la Primera y la Segunda Conferencia, había comenzado a materializarse el sueño de P.S. Mancini, bajo la conducción magistral de T.M.C. Asser, con la reunión de las tres primeras Conferencias sobre D.I.Pr. en La Haya (1893, 1894 y 1900). La Cuarta, que marcaría el fin de la primera etapa en la vida de la Conferencia, se reuniría poco tiempo más tarde, en 1904. En ese lapso, fueron varios los convenios aprobados en La Haya, con diferente éxito pero indudable repercusión²²⁷. Lo mismo había sucedido en el ámbito del D.I.P.. La preocupación por obtener una suerte de "homologación" europea, choca un poco con los enunciados americanistas señalados anteriormente. Precisamente, entre las otras resoluciones adoptadas por la Segunda Conferencia, vale la pena destacar el protocolo de adhesión a las Convenciones de D.I.P. aprobadas en La Haya en 1889²²⁸, además de los convenios sobre propiedad

Interamericanas, Serie sobre Tratados, núm. 9, actualizada periódicamente por la Secretaría General de la O.E.A..

227. Vid. S.E. Baldwin, *op. cit.*

intelectual, profesiones liberales, derechos de los extranjeros y patentes de invención, el Tratado sobre arbitraje obligatorio y un singular Tratado sobre extradición y protección contra el anarquismo²²⁹.

34. La creación de la Junta Internacional de Jurisconsultos, mediante una convención firmada el 23 de agosto de 1906, constituyó el dato saliente de la Tercera Conferencia, celebrada en Río de Janeiro²³⁰. Se acordó una composición de un representante por cada Estado parte y se le asignó, como no podía ser de otra manera, la tarea de preparar un proyecto de código de D.I.Pr. y otro de D.I.P.. La convención fue ratificada por todos los Estados americanos²³¹, y posteriormente modificada por un protocolo firmado por el Consejo Directivo de la Unión

228. Según J. Basdevant, este protocolo "*une manifestation de sympathie pour l'oeuvre de la Haye et rien de plus*", *op. cit.*, pp. 256-257.

229. Los textos se encuentran en E. Espinola, *op. cit.*, pp. 41-49 y *Conferencias internacionales americanas....*, *cit.*, pp. 62 ss..

230. Este dato es importante en cuanto a la posterior evolución de la codificación del D.I.Pr.. No obstante, la Conferencia estuvo dominada por cuestiones atinentes al D.I.P. y a las relaciones internacionales, como las generadas por el bloqueo a Venezuela. *Vid.* J.J. Caicedo Castilla, *El Derecho internacional....*, *op. cit.*, pp. 39-43 y F.-J. Urrutia, *op. cit.*, pp. 116-119.

231. H. Valladão, "*Epitácio Pessoa...*", *loc. cit.*.

Panamericana, el 15 de enero de 1912. El propio impulsor de los Tratados de Montevideo, G. Ramírez, fue el encargado de recordar a los otros delegados la existencia de los mismos, reclamando su utilización como punto de partida para la codificación del D.I.Pr.²³²

En la primera reunión de la Junta (Río de Janeiro, 1912), se constituyeron seis comisiones, encargándoseles a la Quinta y a la Sexta los temas relativos al D.I.Pr.²³³. A aquélla se le fijó lugar de trabajo en Montevideo y se designó como integrantes a C. de Oliveira (Brasil), C. Báez y E. Ayala (Paraguay) y J.P. Varela (Uruguay), siendo sus temas específicos: capacidad, condición de los extranjeros, familia y sucesiones. La Sexta, tendría sede en Lima, sus miembros serían A. Elmore (Perú) y P. Arcaya (Venezuela), un representante de Cuba y uno de Bolivia, y los temas a tratar serían todos los que no estuvieran comprendidos en las materias

232. Los aspectos de D.I.Pr. presentados en la Tercera Conferencia, se transcriben en J. Philippi, "La Tercera Conferencia Internacional Americana", *Rev. Der. Jur.*, t. 4, 1906/1907, pp. 111-120.

233. Las cuatro comisiones encargadas del D.I.P., debían ocuparse de los siguientes temas: guerra marítima y derechos y obligaciones de los neutrales (Washington); guerra terrestre y guerra civil (Río de Janeiro); paz (Santiago de Chile); solución pacífica de controversias y organización de tribunales internacionales (Buenos Aires).

mencionadas, incluyendo al Derecho penal internacional²³⁴. En la misma reunión se recibieron del Gobierno de Brasil dos proyectos de códigos, uno de D.I.Pr. cuya autoría se debía a L. Rodrigues Pereira, y uno de D.I.P., preparado por E. da Silva Pessoa²³⁵.

Sin embargo, cuando la Quinta Comisión se reunió por primera vez en la ciudad indicada al año siguiente, se adoptó, por mayoría, un proyecto basado en el Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1889, presentado por el delegado uruguayo²³⁶. En la Sexta, en cambio, reunida

234. Debe tenerse en cuenta que en el mismo año se creó, a imagen y semejanza del I.D.I., el Instituto Americano de Derecho Internacional, que habría de servir de marco para el lanzamiento del Código Americano de D.I.Pr., aunque desde sus comienzos sus trabajos se dirigieron principalmente al D.I.P. El Instituto, siempre presidido por el norteamericano J.B. Scott, operó durante toda su existencia como caja de resonancia de los ideales panamericanos.

235. Los proyectos se pueden consultar en E. Espinola, *op. cit.*, pp. 69-127. El de D.I.Pr. constaba de 120 artículos y abarcaba las materias civil, mercantil y procesal. *Vid.* también, H. Valladão, "Epitácio Pessoa...", *loc. cit.*, p. 28, *Junta Internacional de Jurisconsultos. Primera Reunión de Río de Janeiro. Actas, resoluciones y documentos*, Río de Janeiro, 1914 y A. Alvarez, "La Conférence des juristes de Rio de Janeiro et la codification du droit international américain", *Rev. gén. dr. int. pub.*, vol. 20, 1913, pp. 24-52.

236. El otro proyecto, presentado por el representante brasileño, se basaba en el del año anterior. *Vid. Actas de la V. Subcomisión de la Junta Internacional de Jurisconsultos*, Santiago de Chile, 1923. Textos también en E. Espinola, *op. cit.*, pp. 184-192.

también en 1913, se aprobaron varios proyectos, aunque abundaron los votos negativos. Los mismos estaban referidos a: Derecho civil internacional (derechos reales, obligaciones y propiedad intelectual), Derecho civil procesal, Derecho comercial y Derecho penal internacional, y fueron presentados por el delegado del Perú. Las fuentes principales fueron los Tratados de Montevideo y el proyecto de código de D.I.Pr. que había preparado L. Rodrigues Pereira²³⁷. De todo este entramado de proyectos y "contra-proyectos", donde podía verse una disputa entre Brasil y los Estados rioplatenses, no quedan casi vestigios. Sólo puede rescatarse la tenaz persistencia de los últimos en la defensa de la única reglamentación vigente por ese entonces, y un rechazo de otra parte, dirigido más a sus autores que a su contenido²³⁸.

237. Vid. 6ª Comisión de la Junta Internacional de Jurisconsultos. Proyecto de codificación del D.I.Pr., Río de Janeiro, 1927, y L. Rodrigues Pereira, Proyecto de Código de D.I.Pr., Río de Janeiro, 1927.

238. El mismo tratamiento en subcomisiones en lugar de tomar los proyectos brasileños fue denunciado como causa de la relativa trascendencia de la tarea desarrollada por la Junta. Vid. E. Espinola, *op. cit.*, p. 165, A.S. de Bustamante y Sirvén, *La Comisión de Jurisconsultos de Río de Janeiro y el derecho internacional*, La Habana, 1927, p. 23 y C. Díaz Cisneros, "La codificación del Derecho internacional en América", *Rev. Col. Abog. Buenos Aires*, t. XIV, 1936, pp. 435-436. Cf. asimismo, G. Parra-Aranguren, "Los precedentes...", *loc. cit.*, pp. 48-49.

35. Después de un largo período jalonado por sucesos de honda repercusión mundial, se celebró la Quinta Conferencia (Santiago de Chile, 1923), que se impuso la tarea de reorganizar la Junta Internacional de Jurisconsultos -que no había vuelto a reunirse desde 1912-, la cual pasó a llamarse Comisión. A ésta se la convocó para 1925 con una agenda en la que se incluía la tarea de preparar un Código de D.I.Pr.. Si la decisión de la Tercera Conferencia Panamericana tuvo la importancia de representar el primer paso hacia una codificación que se quería continental, el acuerdo celebrado en la Conferencia de Santiago tuvo el mérito de decidir el paso de aquellas ideas codificadoras del campo de la teoría al de la práctica²³⁹.

Esta "Comisión Internacional de Jurisconsultos" no se reunió sino hasta el 18 de abril de 1927 en Río de Janeiro, extendiendo sus sesiones hasta el 20 de mayo del mismo año. Allí fue presentado para su discusión un proyecto de Código preparado por Antonio Sánchez de

239. Por esta razón y porque la decisión se tomó "después de un intervalo de muchos años y de haber pasado la gran guerra", J.B. Scott califica este acuerdo como "memorable". Vid. *La Codificación del Derecho Internacional*, La Habana, 1924, p. 13. Cf. M. Straznicky, *op. cit.*, pp. 491-494.

Bustamante y Sirvén²⁴⁰, a raíz de un encargo realizado por el Instituto Americano de Derecho Internacional a una comisión presidida por aquél. Respaldado por el interés en la codificación manifestado por la Unión Panamericana, el Instituto había hecho "suyo" el Proyecto de Bustamante pese a la enconada resistencia de Uruguay y Argentina²⁴¹. Dicha resistencia volvió a plantearse en Río de Janeiro, a través de las palabras del delegado argentino C. Saavedra Lamas, quien agregó a los consabidos argumentos relativos a la preferencia por la conexión domiciliar, el rechazo a una codificación global, proponiendo otra de corte gradual a partir, naturalmente, de los Tratados de Montevideo. No obstante ello, el proyecto fue aprobado sin realizar un examen demasiado detenido²⁴².

240. A.S. de Bustamante y Sirvén, *Proyecto de Código de D.I.Pr.*, La Habana, 1925. El texto del proyecto también se encuentra en otras obras del autor: *La Comisión...*, cit.; *El Código...*, cit., pp. 178-253; y *Manual de D.I.Pr.*, La Habana, 1939.

241. El proceso seguido por el proyecto de Bustamante es comentado por él mismo en *El Código...*, op. cit., pp. 14-23 y por J. Samtleben en *Derecho...*, op. cit., pp. 58-60.

242. Cf. Q. Alfonsín, *Teoría...*, op. cit., p. 287 y C. Díaz Cisneros, op. cit., p. 448. Además, se aprobaron doce proyectos de convención sobre D.I.P., uno sobre organismos técnicos permanentes, y otro sobre unificación de legislaciones, todos los cuales fueron presentados a la Sexta Conferencia Panamericana. Vid. E. Espinola, op. cit., pp. 270-592.

3. EL CODIGO BUSTAMANTE -SEXTA CONFERENCIA LA HABANA, 1928-243

A) La Conferencia

36. Con anterioridad a la realización de la Sexta Conferencia Panamericana existía ya en algunos Estados la preocupación por la carencia de ciertos caracteres de permanencia, ya que la Unión Panamericana, al igual que las Conferencias, sólo existía en virtud de las resoluciones que se iban adoptando en las reuniones sucesivas²⁴⁴. Por esta razón se aprobó en esta oportunidad lo que quería ser el estatuto constitutivo de la Unión Panamericana, la cual era definida como una unión moral basada en dos principios: la igualdad

243. Al existir una obra tan profunda y documentada como la de J. Samtleben (*Derecho...*, *op. cit.*), lógico es remitirse a ella en general, para todos los puntos que se quieran conocer con mayor detenimiento. Por nuestra parte, sólo intentaremos destacar, tal como hicimos con los Tratados de Montevideo, los elementos que consideramos relevantes para los objetivos de este trabajo.

244. J.M. Yepes, "Les problèmes fondamentaux...", *loc. cit.*, p. 120. Vid. también, W. Manger, "The Pan American Union at the Sixth International Conference of American States", *A.J.I.L.*, vol. 22, 1928, pp. 764-775 y J.B. Scott, "The Sixth Pan American Conference", *ibid.*, pp. 354-356.

jurídica entre todos los Estados del continente y el respeto mutuo de los derechos inherentes a su completa independencia. Sin embargo, el texto en cuestión no reunió la totalidad de incorporaciones que exigía (veintiuna) y el estado de precariedad subsistió. El marco jurídico de éste fue una resolución aprobada en la misma Conferencia, la cual, paradójicamente, establecía la vigencia de las resoluciones que previamente regían la Unión Panamericana²⁴⁵.

Obviamente, no se trataba sólo de buscar una mayor continuidad en las actividades, sino que existía en la base de esta cuestión una falta de acuerdo sobre la oportunidad de constituir un organismo internacional. Así las cosas, un objetivo de cierta prioridad, a esta altura de la evolución del movimiento panamericano, parecía centrarse en la codificación del Derecho internacional general²⁴⁶. Parcialmente consolidadas las relaciones económicas continentales, el componente jurídico pasó a un plano importante -no tanto en la voluntad de los

245. *Vid. El sistema interamericano. Estudio sobre su desarrollo y fortalecimiento*, Madrid, 1966, p. XXXV.

246. La actividad en este campo también recibía opiniones dispares. *Vid. por ejemplo*, A.K. Kuhn, "Coordination between the League and the Pan American Union in regard to codification", *A.J.I.L.*, vol. 22, 1928, pp. 590-592.

gobernantes como en la de algunos juristas-, aunque siempre sometido al estigma de la falta de concreción efectiva de sus resultados²⁴⁷.

Aunque normalmente se relacione a la Sexta Conferencia -que celebró sus sesiones entre el 16 de enero y el 20 de febrero de 1928- con el Código Americano de D.I.Pr., se adoptaron en ella otras nueve convenciones, además de la ya mencionada sobre la constitución de la Unión Panamericana. Los temas de las mismas fueron: condición de los extranjeros, tratados, aviación comercial, protección de la propiedad literaria y artística (revisión de la Convención de Buenos Aires), funcionarios diplomáticos, agentes consulares, neutralidad marítima, asilo y derechos y deberes de los Estados en las guerras civiles²⁴⁸. Debe tenerse en cuenta que varios de estos temas revestían para algunos Estados

247. Ya J. Basdevant, *op. cit.*, p. 236, criticaba que los convenios sólo existieran en el papel.

248. El *Acta Final* de la Conferencia, que contiene además de los textos citados, todas las resoluciones, mociones y acuerdos adoptados, es asequible en *Rev. Der. Int.* (La Habana), t. XIII, 1928, pp. 6-164. *Vid.* los comentarios sobre los proyectos previos aprobados en Río de Janeiro en 1927 en J.B. Scott, "La codificación gradual y progresiva del Derecho internacional", *Rev. Der. Int.* (La Habana), t. XII, 1927, pp. 19-61 (y textos de los proyectos), esp. 46-57, A. Sánchez de Bustamante y Sirvén, *La Comisión...*, *op. cit.*, esp. 173-176 (y textos) y G. Parra-Aranguren, "Los precedentes...", *loc. cit.*, pp. 96-97.

y juristas americanos al menos tanta importancia como el Código de D.I.Pr.²⁴⁹

Pero hay algo más. Aunque pueda parecer extraño, una vez que se había conseguido el objetivo tan afanosamente perseguido consistente en un texto abarcando la casi totalidad del D.I.Pr., en la reunión de La Habana se aprobó también una resolución (de 18 de febrero) creando tres Comités Permanentes: uno dedicado al D.I.P. (con sede en Río de Janeiro); otro, a realizar estudios de legislación comparada y unificación legislativa (La Habana); y el tercero, al D.I.Pr. (Montevideo)²⁵⁰. La función que se les encomendaba en primer lugar era la de "presentar a los gobiernos un cuadro o relación de las materias susceptibles de codificación y de uniformidad de legislaciones" y, concretamente al Comité de D.I.Pr. - según otra resolución de la misma fecha-, "el estudio de los mejores medios para la organización judicial de cada país, al efecto de la perfecta aplicación de los acuerdos de la Conferencia"²⁵¹.

249. Cf., en este sentido, la atención que les presta F.-J. Urrutia, *op. cit.*, pp. 193-231.

250. Vid. *Acta final cit.*, pp. 160-162 y *Conferencias Internacionales Americanas...*, *op. cit.*, p. 432. Cf. G. Parra-Aranguren, "La revisión del Código Bustamante", *Codificación...*, *op. cit.*, pp. 201-202.

251. *Acta final...*, *op. cit.*

De este modo se ponen de manifiesto dos datos significativos: de un lado, existía una conciencia acerca de las dificultades que la puesta en práctica del Código Bustamante -como la de toda la obra de las Conferencias Panamericanas a lo largo de su historia- traería aparejadas y, de otro, desde el momento mismo de la aprobación de dicho texto, se consideró que la codificación del D.I.Pr. americano no era una obra concluida. Si a ello se suma que la primera resolución citada dejaba planteada la posibilidad de proceder a la unificación de la legislación civil de los países de América²⁵², queda dibujado un panorama que demuestra que la indudable vocación codificadora de éstos no estaba exenta de algunos rasgos de confusión.

B) *El Código Americano de D.I.Pr.*

37. La Sexta Conferencia Panamericana aparece como la tercera y definitiva etapa en el camino que hubo de recorrer el proyecto de Bustamante, después de su paso por el Instituto Americano de Derecho Internacional y la

252. "Especialmente de la América Latina ... para obviar los inconvenientes que resultan de la diversidad de legislaciones", *ibid.*

Comisión de Jurisconsultos de Río de Janeiro. En cada una de ellas, se presenta una nota distintiva en lo que refiere al carácter que las informa. En este sentido se ha subrayado que en la primera se observa la acción de un talante eminentemente científico, de orden privado; en la segunda se pasa a la esfera pública, mediante la actuación de delegados gubernamentales; finalmente, la reunión de La Habana se inscribe en la órbita de la actividad diplomática²⁵³. La veracidad de esta evolución no impide reconocer su importancia decreciente en cuanto al impacto de cada una de las etapas sobre lo que sería el texto definitivo aprobado en La Habana. Para mayor exactitud, puede decirse que éste prácticamente no sufrió modificaciones desde la etapa "cero" constituida por la redacción del proyecto original²⁵⁴.

En el seno de la Conferencia, el proyecto de Bustamante fue sometido a la Tercera Comisión -encargada de la parte del programa relativa a la codificación del D.I.Pr. y a los numerosos puntos atinentes a la unificación legislativa- donde fue estudiado en un tiempo

253. Cf. A. Sánchez de Bustamante y Sirvén, *El Código...*, op. cit., p. 23.

254. Basta comparar Proyecto y Código para confirmar esta afirmación.

bastante breve, comparado con la extensión del mismo²⁵⁵. No parece tan claro que este extremo halle justificación en el hecho de ya haber sido objeto de una discusión previa en la reunión de juristas de Río de Janeiro²⁵⁶. Las opiniones allí vertidas estuvieron referidas mucho más a las cuestiones generales, que abocadas a la realización de un análisis pormenorizado²⁵⁷ y, de todos modos, no resulta una excusa satisfactoria. En realidad la Tercera Comisión aprobó el Código en forma global, remitiéndose las reservas y enmiendas puntuales presentadas por las distintas delegaciones a un comité especial, el cual, después de cuatro sesiones, realizó algunas modificaciones en el texto, casi todas de estilo. Estos cambios fueron redactados por el mismo A. Sánchez de Bustamante y constituyen la redacción definitiva del

255. Vid. la ajustada opinión de Q. Alfonsín, *loc. cit.* Cf. E. Espínola, "Informe sobre los trabajos de la Comisión III (codificación del Derecho internacional privado y uniformidad legislativa), presentado a la VI Conferencia Internacional Americana", *Rev. Der. Int. (La Habana)*, t. XIII, 1928, pp. 189-195. También en A. Sánchez de Bustamante y Sirvén, *El Código...*, *op. cit.*, pp. 158-169.

256. Tal es la opinión de M. Straznický, *op. cit.*, p. 501.

257. Cf. J.B. Scott, "La codificación...", *loc. cit.*, pp. 57-60 y G. Parra-Aranguren, "Los precedentes...", *loc. cit.*, pp. 97-101.

Código, ya que no fueron tocados por la Comisión ni por la Sesión Plenaria²⁵⁸.

En efecto, la Convención aprobatoria -junto al Código "anexo" a la misma- fue adoptada por unanimidad por la Sesión Plenaria de 13 de febrero de 1928, siendo firmada con reservas por parte de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay²⁵⁹. Los Estados Unidos se abstuvieron; tal como había sucedido al discutirse la posibilidad de incorporación a los Tratados de Montevideo en la Primera Conferencia, además de las consabidas razones de orden constitucional que impiden a los Estados Unidos incorporarse a convenios que regulan materias que corresponden al ámbito de atribuciones de los Estados de la Unión, se adujeron otros, relacionados con la pertenencia de este país a la familia jurídica "angloamericana"²⁶⁰. La falta de solidez del primero de

258. No se realizaron modificaciones relevantes (contra, J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., pp. 58, 63, etc.). Las objeciones que sí lo eran, fueron consideradas por A. Sánchez de Bustamante y Sirvén como "irreductibles". Vid. *El Código...*, op. cit., pp. 37-44, E. Espínola, "Informe...", loc. cit., esp. 193-194 y G. Parra-Aranguren, "Los precedentes...", loc. cit., pp. 106-108.

259. La firma del Acta final se produjo el último día de la Conferencia (20 de febrero).

estos argumentos ha quedado demostrada hace bastante tiempo²⁶¹. El segundo es evidente, aunque de todos modos no hubiera impedido una incorporación con reservas²⁶².

En realidad, en la declaración algo hipócrita de la delegación norteamericana, donde se expresa que se "siente mucho no aprobar desde ahora el Código" y que su Gobierno "mantiene firme la idea de no desligarse de la América Latina"²⁶³, se percibe claramente una intencionalidad política²⁶⁴. No había en este país

260. Llamativamente, E.G. Lorenzen parece asombrarse al afirmar "*the Code follows the continental system of the conflict of laws rather than the Anglo-American (!)*". *This is seen in the first place in the great importance attached to the 'personal' law*". Vid. "The Panamerican Code of Private International Law", *Tul. L. Rev.*, vol. IV, 1929-30, pp. 499-528, con-cr. 520. En p. 522, insiste: "*the Anglo-American conception of the Conflict of Laws differs widely from the one entertained on the continent and in Latin-America*".

261. Vid. especialmente K.H. Nadelmann, "Ignored State Interests..." cit., pp. 357-362 y J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., pp. 72-73.

262. Lo mismo puede decirse respecto de la utilización preferente de la *lex domicilii* de parte de la jurisprudencia de ese país, como lo han señalado M. Straznicky, op. cit., pp. 501-502 y R. Gallardo, op. cit., p. 36ⁿ.

263. Vid. *Acta final...*, cit., p. 81.

264. El mismo J. Samtleben, después de mencionar su abstención de comentar cuestiones de esta índole (*Derecho...*, op. cit., p. 271²²), debe reconocer que en la actitud norteamericana "las razones verdaderas son más de naturaleza política que jurídica" (*ibid.*, p. 70). Origen y evolución de esta "política ya tradicional" puede confrontarse en G. Parra-Aranguren, "El Código

voluntad de ligarse jurídicamente con los Estados latinoamericanos y ni siquiera reinaba entonces el pragmatismo que desde hace unos años ha provocado la instauración de una esmerada política de incorporación selectiva²⁶⁵. Seguramente el liderazgo indiscutido del movimiento panamericano desempeñado por este país (su propio presidente estuvo presente en La Habana), le impedía demostrar claramente su falta de interés oficial sobre estas realizaciones. Todos los Estados tenían, como es lógico, derecho a rechazar la incorporación a un texto que juzgaban incompatible con sus normas y principios; incluso, hubieran podido callar las razones invocando abstractas razones de política legislativa. Pero, mientras todos los Estados que se opusieron a la aprobación del Código Bustamante lo hicieron abiertamente, la actitud norteamericana fue, como mínimo, ambigua. Las remotas posibilidades de incorporación de este país a la obra de La Habana desaparecieron por completo con la adopción del primer *Restatement of Law of*

Bustamante: su vigencia en América y su posible ratificación por España", *Codificación...*, op. cit., pp. 115-121.

265. Vid. la exhortación de K.H. Nadelmann, en "The Need for Revision of the Bustamante Code on Private International Law", *A.J.I.L.*, vol. 65, 1971, p. 788, que no hace sino retomar los argumentos esbozados en "Ignored State Interests...", loc. cit., pp. 361-362.

Conflict of Laws por el American Law Institute²⁶⁶, para cuya redacción, por cierto, aquélla no fue tomada en cuenta²⁶⁷.

38. Es difícil resumir las características esenciales de una obra tan amplia, aunque su autor lo haya ensayado en muy pocas páginas²⁶⁸. No obstante, creemos factible resumir las mismas en orden a un tratamiento sucinto de las siguientes cuestiones: influencias, método y estructura y contenido. En cuanto al primer punto, es obligado volver sobre el peso decisivo que el bagaje teórico de la doctrina de P.S. Mancini ejerció sobre las concepciones jurídicas de A. Sánchez de Bustamante. Fundamentalmente, de allí proviene su conocida división en tres tipos de leyes (personales o de orden público interno, territoriales o de orden público internacional y voluntarias o de orden privado), que quedaría plasmada en el Código y, específicamente, en su art. 3²⁶⁹. La presencia del maestro cubano en Europa

266. A.K. Kuhn, *Comparative Commentaries on Private International Law*, Nueva York, 1937, p. 62.

267. J. Samtleben, *loc. cit.*

268. *El Código...*, *op. cit.*

269. E.G. Lorenzen, *op. cit.*, pp. 523-525, toma una idea del propio A. Sánchez de Bustamante para afirmar que

en plena época del auge de aquélla doctrina, se sumó a las particulares condiciones de su país, que arribó a la vida independiente mucho más tarde que el resto de las naciones americanas, para permitir la pervivencia de unas ideas que habían sido rechazadas en América varios años antes²⁷⁰. Sin embargo, no debe dejarse de lado que, en general, la comprensión dada a las mismas por A. Sánchez de Bustamante adquiere perfiles propios, incluyendo a las relativas a las relaciones entre D.I.P. y D.I.Pr. y al alcance de los principios de nacionalidad, soberanía y libertad²⁷¹.

Precisamente en la profunda modificación que el Código significa respecto de los principios generalmente aceptados hasta entonces en el D.I.Pr. americano, debe localizarse tal vez la causa más importante de su

este art. es la "llave" para conocer su pensamiento. Sobre la importancia de esta clasificación y las variaciones que presenta respecto de las ideas originales de P.S. Mancini, cf. la magnífica exposición de J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., pp. 191-231.

270. Vid. J. Samtleben, *loc. cit.*.

271. De allí que se considere a la "Escuela de La Habana" -fundada y dirigida por él- como una rama autónoma de la Escuela italiana. *Ibid.* y p. 55. Vid. también P.G. Medina y Sobrado, "La Escuela de La Habana", *An. Soc. Cub. Der. Int.*, t. XIII, 1930, pp. 407-419. En realidad, puede hablarse de una "trinidad" formada por la doctrina de A. Sánchez de Bustamante (condensada en el t. I de su *Derecho...*, op. cit.), la (su) Escuela y el (su) Código.

rechazo²⁷². A. Sánchez de Bustamante no siguió evidentemente la metodología que había preconizado; en lugar de "no perder de vista un sólo momento" el Derecho de los Estados implicados merced a la realización de un cuidadoso trabajo comparativo²⁷³, desarrolló sus propias ideas al calor de la tradición jurídica de su país²⁷⁴. El enorme espacio cedido a la acción del orden público constituye un ejemplo chocante de esta afirmación²⁷⁵. En este sentido, resulta revelador que pese a la destacada

272. H. Valladao subraya el abandono de las ideas de J. Story, A.T. de Freitas y A. Bello y la utilización de otros principios e, incluso, otra terminología. *Vid. Direito...*, op. cit., pp. 196-199. También en A.M. Villela, "L'unification...", loc. cit., p. 244. De igual manera, J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., pp. 286-292. Cf., sin embargo, H. Batiffol, "L'expérience...", loc. cit., p. 866.

273. *El Código...*, op. cit., pp. 16-17.

274. J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., pp. 191 y 196-197 y "La aplicación del Código Bustamante en Venezuela", *Libro ... Sánchez Covisa*, op. cit., pp. 319-356, esp. 320-321.

275. W. Goldschmidt, "Exposición de motivos y Anteproyecto de bases de un Ley Uniforme (o de un Convenio Unificador Normal o de una Ley-Tipo) de Derecho internacional privado", *Estudios jusprivatistas internacionales*, Rosario, 1969, pp. 163-206, concr. 174, reprocha la "influencia malsana de Mancini" en lo referente a orden público. A su vez, tal vez pensaba en el Código Bustamante E. Frankenstein cuando señalaba que el éxito de una codificación internacional está en directa relación con los límites que se tracen al juego del orden público. *Vid. "Projet d'un Code européen de droit international privé"*, Leyden, 1950.

presencia del principio de los derechos adquiridos en el art. 8 del Código, se señale con acierto la mayor importancia de la concepción de orden público internacional introducida en la misma norma y desarrollada extensamente a lo largo de todo el texto²⁷⁶.

Con respecto a la metodología escogida por el autor, debe indicarse principalmente la decisión de realizar una codificación global del D.I.Pr., pese a la existencia de una importante corriente de opinión adversa²⁷⁷. Ni siquiera él parece haber estado siempre inclinado hacia esta opción²⁷⁸. Posiblemente su cambio de actitud se haya basado en el convencimiento de que, contrariamente a lo que muchas veces se afirmaba, la concreción en un sólo texto facilitaría la aprobación, en un momento todavía dominado por cierta euforia internacionalista. De otro lado, la historia ha demostrado que cuando la

276. Se trata de una aclaración del mismo A. Sánchez de Bustamante (*Derecho...*, op. cit., pp. 275-276). Cf. J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., pp. 199-200 y 203-205.

277. En América esa corriente ya se había dejado ver en varias oportunidades. En la Quinta Conferencia Panamericana, se había aconsejado proceder a una codificación gradual y progresiva para el D.I.P., aunque sobrevivió la idea unitaria para el D.I.Pr. Vid. *Conferencias internacionales americanas...*, op. cit., pp. 253-255. Asimismo, cf. el contenido de la primera reserva argentina al Código Bustamante en *Acta final...*, op. cit., pp. 79-80.

278. Cf. J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., p. 56.

codificación es parcial, la discusión tiende a encerrarse en cuestiones puntuales, sin dejar de exigir por ello un acuerdo básico sobre las ^ecuestiones generales subyacentes²⁷⁹.

El contenido responde a una concepción del D.I.Pr. similar a la esbozada por los Tratados de Montevideo. Pero al reunir todas las normas en un sólo texto, los cuatro Libros (relativos a las materias civil -incluye nacionalidad y naturalización y comprende más de la mitad del Código-, mercantil, penal y procesal, respectivamente), vienen precedidos de un Título Preliminar, en forma similar a la estructura de los códigos estatales²⁸⁰. Es obvio que la propia heterogeneidad del contenido impide que dicho Título sea más comprensivo (sólo abarca 8 artículos muy generales, los dos primeros sobre condición jurídica de los extranjeros), ~~a~~ menos que hubiera sido dividido en varios capítulos o secciones. De otro lado, el tratamiento de las distintas materias es detallado²⁸¹,

279. Vid. E. Frankenstein, *op. cit.*, pp. 6-7.

280. E.G. Lorenzen, *op. cit.*, pp. 501-519. Sobre el modo de realizar esta concepción amplia del D.I.Pr., vid. E. Audinet, "Un projet de Code de droit international privé", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 22, 1927, pp. 1-17.

281. Vid. B. Nolde, "La codification...", *loc. cit.*, pp. 365-366.

alargándose a través de los restantes 429 artículos. No obstante la primera impresión, no puede considerarse tan largo, al menos si se lo compara con el Proyecto que preparó E. Frankenstein veinte años después²⁸².

Algunos datos del contenido los hemos adelantado al mencionar la influencia de la Escuela italiana. Resta comentar el otro rasgo característico, que también tiene relación con dicha aportación y que radica en la particular forma de "compatibilizar" la disparidad de criterios existentes respecto a la determinación de la "ley personal". La conocida fórmula transaccional consagrada en el art. 7 del Código, es producto de una larga andadura y constituye en iguales medidas un imán para elogios y descalificaciones. De un lado se afirma su virtualidad superadora y, de otro, se destaca su ambigüedad y se cita para justificar el rechazo global al Código²⁸³.

En razón de las sucesivas modificaciones sufridas por su enunciado, se concede a cada Estado parte la facultad de aplicar, además de los criterios de la

282. Esta obra comprende 816 artículos y no incluye el Derecho penal internacional.

283. Vid. M. Straznický, *op. cit.*, pp. 506-508. Obsérvese, no obstante el significativo error por omisión en la traducción del art. 7.

nacionalidad y el domicilio, cualquier otro "que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislación interior", presumiblemente, para permitir el juego de las normas basadas en principios territorialistas²⁸⁴. En el fondo de esta y otras expresiones de cierto espíritu transaccional presentes en el Código, se advierte el ánimo de realizar una obra a la cual pudieran, en principio, incorporarse todos los países del continente. Con esta idea tan ambiciosa, la tarea a realizar se distanciaba de la desarrollada en Montevideo, la cual se limitaba a traducir positivamente la mayor cantidad posible de denominadores comunes²⁸⁵.

284. J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., p. 63. Es preciso consultar además pp. 208-216 y 242-243, a fin de comprender las vicisitudes experimentadas en la elaboración de esta norma y su alejamiento del pensamiento del autor, mucho más próximo a la aplicación de la ley nacional, como puede comprobarse en todas las obras citadas y en otros artículos del Código. Cf., además, el contenido de la declaración de Panamá al momento de la firma en *Acta final...*, op. cit., p. 86 y J. Muci Abraham (h), *Código de Derecho internacional privado (Código Bustamante) precedido de un estudio sobre los conflictos de leyes y la codificación colectiva en América*, Caracas, 1955, pp. 41-45.

285. H. Batiffol señala esta dicotomía entre un esfuerzo "universalista" obligado a respetar el *status quo* y otro "regionalista" capaz de consagrar soluciones unitarias. Vid. "L'expérience...", loc. cit., pp. 858-859.

C) *El complejo cuadro de incorporaciones*

39. De los Estados firmantes (todos los latinoamericanos), Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia y México, no llegaron a incorporarse a la nueva codificación²⁸⁶. Los motivos fueron diferentes. Los tres primeros conforman el núcleo fundamental de los Tratados de Montevideo e incluso fueron los únicos en vincularse mediante la segunda versión de los mismos. En este sentido, los enunciados en buena parte coincidentes de las reservas presentadas por Argentina y Paraguay dejan terminantemente establecida esta adscripción, al igual que la declaración uruguaya remitiendo a las posturas defendidas por su representante en la reunión de Río de Janeiro de 1927. En concreto, no aceptan principalmente, una ley personal distinta a la del domicilio y un criterio diferente al del *ius soli* para las cuestiones de nacionalidad, propugnando el principio de la unidad en la ley aplicable a las sucesiones de bienes muebles, los criterios aceptados en "Conferencias universales" en lo

286. Seguramente, un error tipográfico entre las palabras "ratificada" y "assinada", hace incluir a W. de S.C. Batalha (*Tratado de D.I.Pr.*, t. I, 2ª ed., San Pablo, 1977, p. 124), a Argentina, Colombia, México, Paraguay y Uruguay, entre los ratificantes.

que concierne a letras de cambio y cheques, la ley del pabellón en cuestiones referidas al Derecho marítimo y la igualdad jurídica entre mujer y hombre²⁸⁷.

La actitud de los otros dos países mencionados responde a distintas consideraciones. La colombiana es bastante llamativa. En efecto, al momento de la firma, este Estado presentó una declaración conjunta con Costa Rica en la cual se manifiesta una reserva general y varias consideraciones particulares relativas a la superioridad de la doctrina "genuinamente americana" del domicilio²⁸⁸. Pero Colombia no sólo no se incorporó (cosa que sí hizo Costa Rica) al texto de La Habana, sino que depositó el instrumento de adhesión a los Tratados de Montevideo de Derecho civil y de Derecho mercantil (anteriormente se había incorporado al de Derecho

287. En la posición argentina se destaca también su antigua actitud contraria a la admisión del divorcio vincular. Para una explicación detallada de estos argumentos y para ver hasta qué punto son respetados por los Tratados de Montevideo, *vid.* A. Alcorta, "El Proyecto de Código de Derecho internacional privado", *Jurisp. Argentina*, t. 24 (Doctr.), 1927, pp. 28-91, A. Calandrelli, "Proyecto de codificación del Derecho internacional privado", *ibid.*, pp. 1-20, C.M. Vico, "El proyectado Código de Derecho internacional privado", *ibid.*, pp. 20-28 y J. Ruiz Moreno, "Rôle et action de l'Argentine à la sixième conférence panaméricaine", *Rev. gén. dr. int. pub.*, t. 36, 1929, pp. 73-87. Del primero, *cf.* también "Las Reglas Preliminares del Código Americano de Derecho internacional privado", *Anales Fac. Cs. Jur. Soc.*, t. 4, 1929, pp. 216-225.

288. *Acta final...*, *cit.*, pp. 82-84.

Procesal y al Convenio relativo al ejercicio de profesiones liberales), ¡cuarenta y cuatro años después de su aprobación! México, por su parte, basó su posición en una política tradicional que mantuvo a este Estado al margen de los resultados de la codificación internacional hasta épocas muy recientes²⁸⁹.

40. Varios de los que sí se incorporaron, lo hicieron con limitaciones de desigual alcance. El Código fue ratificado sin reservas sólo por Cuba (20 de abril de 1928), Guatemala (9 de noviembre de 1929), Honduras (20 de mayo de 1930), Nicaragua (28 de febrero de 1930)²⁹⁰, Panamá (26 de octubre de 1928) y Perú (19 de agosto de

289. Este dato realza la importancia de su actual actitud frente a la obra de la CIDIP y, en menor medida, de la Conferencia de La Haya de D.I.Pr..

290. No obstante este país había sugerido algunas reservas en la declaración presentada al momento de estampar su firma, lo cual ha provocado opiniones diversas acerca de la existencia o no de tales reservas. Acierta J. Samtleben al señalar que la discusión tiene un alcance general, no limitado a este caso particular y es clara la tendencia -refrendada por el art. 23.II de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados- de fijar el tiempo crítico en la ratificación. Sin embargo, el elemento decisivo radica en la elección expresa de este criterio en el art. 3 de la Convención que pone en vigor el Código, dato que quita sentido a las "reservas" nicaragüenses. Tampoco parece acertado referirse sólo a la primera parte de la declaración de este país. *Vid. Derecho...*, op. cit., pp. 100-101 y 108. Cf. G. Parra-Aranguren, "El Código...", loc. cit., pp. 123-124 y 174.

1929). En estos Estados, entonces, el Código tiene plena vigencia, al menos en sentido legal-positivo. Con reservas lo hicieron: Brasil (3 de agosto de 1929), Haití (6 de febrero de 1930), República Dominicana (12 de marzo de 1929), Venezuela (12 de marzo de 1932), Bolivia (9 de marzo de 1932), Costa Rica (27 de febrero de 1930), Chile (6 de septiembre de 1933), Ecuador (31 de mayo de 1933) y El Salvador (16 de noviembre de 1931). De éstos, sólo los cuatro primeros respetaron el tenor del art. 3 de la Convención, que consagra la facultad de reservar "la aceptación de uno o varios artículos". Los otros, al consagrar las llamadas reservas generales -aquéllas que exceptúan la aplicación de las disposiciones del Código en todo lo que se oponga o contradiga a la normativa interna- dejaron en duda el mismo sentido de la incorporación²⁹¹.

291. Todos los autores coinciden sobre esta idea (Vid., especialmente, *ibid.*, pp. 132-138 y 173-179 y J. Samtleben, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 100-121), adoptada como posición oficial de la O.E.A. Cf. "Posibilidad de revisión del Código Bustamante o Código de Derecho internacional privado", *Documentos de la Organización de los Estados Americanos sobre Derecho internacional privado*, Washington, D.C., 1973, pp. 331-332. En términos concretos, Bolivia reservó las normas del Código "que se hallen en desacuerdo con la legislación del país y los tratados internacionales suscritos por Bolivia"; Costa Rica señaló que "en cuanto a nuestra legislación esa reserva comprende no sólo la vigente, sino la que pueda dictarse en lo futuro"; Chile, que "los preceptos de la legislación actual o futura de Chile, prevalecerán sobre

Las reservas parciales o reservas en sentido estricto, tampoco son homogéneas y por lo tanto provocan situaciones diferentes. Así, la brasileña se concreta en los arts. 52 y 54 del Código y responde al interés de evitar el divorcio de nacionales de ese país de acuerdo con el Derecho extranjero de su domicilio²⁹². La reserva de Haití se refiere específicamente a ciertas normas en las cuales se consagra el principio de igualdad entre nacionales y extranjeros en cuestiones procesales²⁹³.

dicho Código"; Ecuador hizo referencia a la normativa que "no se oponga a la Constitución y Leyes de la República"; finalmente, en las declaratorias presentadas por El Salvador puede leerse que "en el caso de que las doctrinas jurídicas que contiene la convención de referencia, contraríen o restrinjan en alguna forma las leyes de El Salvador, no prevalecerán sobre dichas leyes". Cf. *Conferencias internacionales americanas...*, op. cit., pp. 349-350.

292. *Acta final...*, cit., p. 82. Cf. J. Samtleben, "Die brasilianische Rechtsprechung zur Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile", *RabelsZ*, vol. 30, 1966, pp. 459-483, esp. 479-480. Las normas reservadas establecen: "El derecho a la separación de cuerpos y al divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal..." (art. 52) y "Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someterán a la ley del lugar en que se soliciten, siempre que en él estén domiciliados los cónyuges" (art. 54). Aunque no se establezca expresamente, la reserva afectaría también al art. 56 que dispone el reconocimiento de las sentencias de separación y divorcio obtenidas "conforme a los artículos que preceden". Cf. *id.*, *Derecho...*, op. cit., p. 109.

293. Las cuestiones aludidas son: la "fianza para comparecer en juicio" (art. 383), la "fianza para querrellarse por acción privada" (art. 385), la "caución *judicio sisti*" y el "*onus probandi*" (art. 386) y los

La República Dominicana, en cambio, planteó en términos amplios una reserva con el objetivo de "mantener el predominio de la Ley Nacional en aquellas cuestiones que se refieren al estado y capacidad de los dominicanos, en donde quiera que éstos se encuentren"²⁹⁴, que parece concentrarse en las mismas normas afectadas por la reserva de Brasil, ya que casi todas las demás quedan dentro del ámbito actuación del art. 7. Algo similar sucede con las demás consideraciones vertidas por la República Dominicana -relativas a la nacionalidad de las personas físicas y a la nacionalidad y el domicilio de las sociedades-, cuya irrelevancia fue rápidamente puesta de manifiesto por el propio autor del Código²⁹⁵.

"embargos preventivos", la "fianza de cárcel segura" y "otras medidas procesales de índole análoga" (art. 387).

294. *Conferencias internacionales americanas...*, op. cit., p. 347.

295. Precisamente, el tenor de otras normas del Código Bustamante quita sentido a las manifestaciones dominicanas. A.S. de Bustamante cita, especialmente, los arts. 9 -"Cada Estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica ..."-, 21 -las disposiciones relativas a la nacionalidad de personas jurídicas (arts. 9, 16 y 20) "no serán aplicadas en los Estados contratantes que no atribuyan nacionalidad a dichas personas jurídicas"- y 22 -"El concepto, adquisición, pérdida y recuperación del domicilio general y especial de las personas naturales o jurídicas se regirán por la ley territorial"- . Vid. *El Código...*, op. cit., pp. 59 ss.. Cf. G. Parra-Aranguren, "El Código...", loc. cit., pp. 128-130.

Venezuela, por su parte, incluyó en su reserva nada menos que ;cuarenta y cuatro artículos!, orientada a la imposición de los criterios establecidos por la ley venezolana. Las normas reservadas se refieren a: nacionalidad de las personas jurídicas (arts. 16 a 18), domicilio de mujeres casadas, menores o incapaces (art. 24), atribución de los bienes de las personas jurídicas que dejan de existir (art. 35), indemnización por promesa de matrimonio incumplida (art. 39), efectos del matrimonio (arts. 43, 44, 49 y 50), filiación (arts. 57, 58, 62, 64 y 65), alimentos (art. 67), usufructo de bienes de las personas sometidas a patria potestad (art. 70), adopción (art. 74), afianzamiento y obligaciones relativas a las cuentas de la tutela y la curatela (arts. 87 y 88), hipoteca legal en beneficio de personas físicas (art. 139), sucesiones (art. 144), vocación hereditaria del Estado (art. 157), presunción de cosa juzgada de las sentencias extranjeras en cuestiones relativas a obligaciones (art. 174), carácter mercantil de las sociedades (arts. 247 y 248), delitos cometidos en naves o aeronaves mercantes (art. 301), competencia para acciones reales (art. 324), extradición (arts. 348, 360 y 378 -prohibición de la pena de muerte-) y ejecución de

sentencias dictadas por tribunales extranjeros en materia civil (arts. 423 a 435)²⁹⁶.

41. De los países que son parte de los Tratados de Montevideo, solamente Bolivia y Perú han ratificado también el Código Bustamante, éste sin reservas. Las posibles colisiones entre sendos textos han quedado prácticamente descartadas. Bolivia dejó a salvo en su reserva general al Código no sólo las normas de fuente interna sino también "los Tratados Internacionales suscritos por Bolivia", en obvia referencia a los de Montevideo. A partir de este dato, la Corte Suprema del Perú se ha pronunciado en la Sent. de 7 de diciembre de 1935 ("González")²⁹⁷, estableciendo expresamente la prelación de éstos respecto de los problemas de D.I.Pr. que se susciten con Bolivia²⁹⁸. Es interesante destacar que, en cierto modo, la actitud de la jurisprudencia peruana se aproxima a la del legislador de Colombia, ya

296. El proceso legislativo que llevó a la redacción de las reservas venezolanas se detalla en G. Parra-Aranguren, "El Código...", *loc. cit.*, pp. 138-173.

297. *Vid. Tratados, Convenciones y Acuerdos vigentes entre el Perú y otros Estados*, Lima, 1936, t. 2, p. 516.

298. M. García Calderón K., *Casos Prácticos y legislación de Derecho internacional privado*, Lima, 1977, p. 80. También J. Samtleben, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 127-128.

que la decisión contraria era perfectamente factible, sobre todo teniendo en cuenta la proximidad temporal del Código Bustamante²⁹⁹.

42. La eventualidad de la incorporación de países extracontinentales merece aún una pequeña reflexión. Desde un punto de vista meramente técnico, el análisis de la cláusula correspondiente -el art. 6 de la Convención que "pone en vigor" el Código- permite apreciar un carácter suficientemente abierto, como para que la mencionada eventualidad se produjera. En efecto, la norma en cuestión establece que la adhesión de cualquier Estado produce plenos efectos respecto de todos los Estados parte que no formulen reservas a la adhesión solicitada, para lo cual cuentan con un plazo que va desde la comunicación de la solicitud hasta treinta días después del depósito del instrumento de adhesión.

Entre los países americanos la posibilidad no se planteaba, como es lógico, como una cuestión central. Sin embargo, en general no se palpaba ese cierto recelo a la incorporación de potencias europeas que se ha subrayado

299. F. Majoros llega a sugerir la posibilidad de alguna tratativa diplomática previa a esta decisión, basándose en que la norma boliviana no obligaba, obviamente, a la Corte del Perú. *Vid. op. cit.*, pp. 319-321.

en relación con la obra de Montevideo³⁰⁰. Parece utópico pensar que éstas fueran a adoptar el Código para regular sus relaciones entre sí, pero, habida cuenta de la doctrina en él desarrollada, tal vez pudieran haberlo considerado como una vía propicia para la regulación del tráfico jurídico con los Estados americanos.

El único país no americano en el cual llegó a tratarse esta cuestión fue España, en un momento político muy determinado y sólo en el ámbito de la discusión científica. Las reacciones que en el mismo plano se produjeron en América, hacen pensar en la favorable acogida que hubiera tenido una adhesión española. Pero el obstáculo que no existía en el art. 6 de la Convención, fue descubierto rápidamente por algún autor español en el artículo siguiente. Este, al regular el mecanismo para proponer modificaciones al texto, sólo se refiere expresamente a "cualquiera República Americana", tenor que permitió afirmar la presencia de una situación desfavorable para los Estados no americanos. Se trata del único obstáculo en el cual puede identificarse, acaso,

300. Vid. M. de Lasala Llanas, "Acerca de la posible adhesión de España al Código Americano de Derecho internacional privado ("Código Bustamante")", *Universidad* (Zaragoza), núm . 12, 1935, pp. 907-919. No obstante, cf. la postura argentina en C.M. Vico, *op. cit.*, p. 20.

una actitud discriminatoria. Los otros consisten en la opción por determinadas concepciones jurídicas.

D) *Trascendencia teórica y práctica del Código*

43. El impacto causado por el Código Bustamante en los juristas de la época fue inmenso. Tanto éste cuanto la obra teórica de su autor fueron ampliamente difundidos en América y en Europa. Basta revisar la lista de autores citados en los epígrafes previos para comprobar que el tema estuvo presente en todos los trabajos importantes relativos a la codificación del D.I.Pr. de la tercera y cuarta década de este siglo. Todavía treinta años después de su aprobación, se discutía en Europa sobre distintos aspectos vinculados con el contenido y la aplicación del Código³⁰¹, y el estudio de conjunto más importante y valioso sobre el mismo no se realizó sino hasta medio siglo después de su aprobación³⁰². En este sentido, esta

301. En las *Journées de droit franco-latino-américaines* celebradas en París entre los días 13 y 16 de abril de 1948, se trabajó sobre la codificación internacional del D.I.Pr. en América, en una sesión presidida por J.P. Niboyet y que contó con el *Rapport général* de H. Batiffol. Vid. *Bull. Soc. Lég. Comp.*, t. 71, 1947/1948, pp. 318-325 (crónica), 681-733 (comunicaciones) y 853-890 (*Rapport général* y discusión).

obra ha superado a la impulsada por los Estados del Plata. Debe notarse que la relación de A. Sánchez de Bustamante con Europa (en lo científico y en lo personal) fue mucho más estrecha que la de los impulsores de los Tratados de Montevideo.

Sin embargo, en el terreno de la traducción de las normas convencionales a la actividad jurisprudencial han aparecido cuestionamientos. Es verdad que la aplicación práctica no se compadece con las expectativas abiertas con la aprobación³⁰³. Sin embargo, al analizar este punto deben introducirse matizaciones, ya que las situaciones que se presentan difieren entre sí. Sobre todo, muchas veces no queda muy claro qué se intenta decir cuando se afirma que determinado convenio internacional no es muy aplicado. Parece obvio que si no se encuentra ninguna o casi ninguna decisión judicial en los Estados parte, el convenio carece de éxito. Pero si se encuentran varias y

302. Nos referimos, huelga decirlo, al tantas veces citado libro de J. Samtleben, que se presenta como primer volumen (parte general) de un estudio más amplio.

303. G. Parra-Aranguren, "El Código...", *loc. cit.*, p. 173, califica, en esta línea, de "excesivo en demasía el optimismo" de su autor. Refiriéndose a la normas que reglamentan la competencia judicial internacional en el Código Bustamante y en los Tratados de Montevideo, G.A.L. Droz, "Regards sur le droit international privé comparé. Cours général de droit international privé", *R. des C.*, t. 229 (1991-IV), p. 71, manifiesta su impresión según la cual dichas normas "*sont des règles modèles sans sanction véritable*".

dictadas por los tribunales de distintos Estados, ¿a partir de cuántas se comienza a considerar que la aplicación práctica es satisfactoria? Y en todo caso, ¿es un parámetro válido compararlo con algún otro convenio sobre la misma materia o entre los mismos Estados?³⁰⁴

Un panorama muy general permite realizar una división, colocando de un lado la realidad de los países que no se han incorporado y los que lo han hecho con reservas generales y, de otro, la que atañe a los que han realizado reservas puntuales y los que se incorporaron llanamente. La primera agrupación puede considerarse antojadiza, mas desde antaño se ha puesto de relieve que no es así. Aplicar el Código sólo cuando coincide absolutamente con las normas de D.I.Pr. estatales o convencionales vigentes, convierte dicha aplicación en un acto retórico. Limitar su ámbito de vigencia a aquellas cuestiones no reguladas, tiene un cierto parecido con el recurso a la doctrina más recibida³⁰⁵. Por lo tanto, la

304. En este sentido, J.E. Briceño Berrú, "Reflexiones...", *loc. cit.*, parece utilizar distintos criterios al afirmar primero que el Código "no ha pasado de ser más que una simple declaración de buenas intenciones" (p. 174) o que su valor práctico "resulta poco significativo" (p. 177), para concluir: "a pesar de las reticencias y desconfianza de que ha sido objeto, ha encontrado una cierta aplicación por los tribunales de los países que lo han ratificado" (p. 191).

única diferencia digna de mención entre mantenerse al margen de un convenio internacional e incorporarse al mismo realizando una reserva indeterminada, aparece en los casos en los cuales la legislación interna de un país remite a lo dispuesto en aquél³⁰⁶.

Entre los Estados que configuran el segundo grupo, la aplicación tiene muchos matices, dependiendo del país en cuestión, la materia considerada en cada caso y el

305. Por ejemplo, en España, A. Miaja de la Muela aconsejaba a los jueces tener en cuenta el Código Bustamante, "como simple elemento de juicio" para colmar las lagunas. *Vid. Derecho internacional privado*, t. I, 6ª ed., 1972, pp. 491-492. La recomendación desaparece en las ediciones posteriores, extremo lógico si se tiene en cuenta la entrada en vigor del Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, que introduce las nuevas normas de D.I.Pr. en el Título Preliminar del C.c.. Como dato curioso, cabe señalar que en el Auto T.S. de 7 de febrero de 1955 se cita para corroborar el punto de vista del Ministerio Fiscal sobre el reconocimiento de una resolución en materia de jurisdicción voluntaria, no ya el Código sino la opinión de su autor en su carácter de "uno de los más caracterizados juristas de los países de habla española". Cf. A. Remiro Brotons, *Ejecución de sentencias extranjeras en España*, Madrid, 1974, p. 380.

306. De cualquier modo, el Código ha tenido una aplicación -limitada y singular- en los Estados que realizaron reservas generales incluso en supuestos conectados con Estados no incorporados al mismo. Cf., para el caso chileno, F. Albónico Valenzuela, *Manual de Derecho internacional privado*, t. I, Santiago de Chile, 1950, pp. 120-122 y J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., pp. 106 y 299-301. Para supuestos de aplicación en los demás Estados que realizaron reservas generales, *ibid.*, loc. cit. y pp. 301 ss. Igualmente, en pp. 327-328, las rarísimas referencias a alguna jurisprudencia argentina y colombiana.

título invocado para aplicarlo³⁰⁷. Como es lógico, existe una relación importante entre el volumen de relaciones de tráfico privado externo entre los Estados parte y las posibilidades de utilización del Código para su solución. Sin embargo, la consideración -concienzuda o espontánea- de éste como doctrina más recibida y su propia vastedad, ha permitido la aplicación más allá de los límites de su ámbito espacial. Su mayor predicamento en cuestiones atinentes a la cooperación judicial internacional civil y penal que en lo referente a Derecho aplicable, no parece diferir de la realidad de otros convenios internacionales e, incluso, del juego que se observa en las codificaciones estatales. Por último, el hecho de que una gran proporción de los casos jurisprudenciales se produzca en países cuya doctrina internacionalprivatista ha adquirido un notable desarrollo, no hace sino reafirmar los postulados anteriores³⁰⁸.

El valor actual del Código Bustamante no sólo se pone de manifiesto en su presencia en todas las

307. Para todas estas cuestiones, *ibid.*, pp. 155-189.

308. Para J. Samtleben, la aplicación "descansa en una convicción jurídica generalizada". Cf. *id.*, pp. 188-189 y, especialmente, los casos de Venezuela y Brasil, *loc. cit.* Por esto, los resultados del Código son poco significativos, según los parámetros que se utilicen.

argumentaciones que preceden los proyectos de convenios elaborados para ser discutidos en la CIDIP. Allí no dejan de ser, en cierto modo, una referencia al Derecho vigente en varios Estados de la región. Donde realmente se puede alcanzar a vislumbrar la impronta ejercida por la obra del maestro cubano, es en los trabajos de la doctrina y en la jurisprudencia sobre casos de D.I.Pr.. No es nada rara la mención y el desarrollo de las características generales del Código en obras europeas sobre la disciplina, tratamiento que se hace inevitable si el tema considerado es la codificación. Pero el dato más significativo en este sentido, estriba sin duda en las continuas referencias al texto de Bustamante en la actaución de los jueces y tribunales, incluso en los Estados americanos donde el mismo no está vigente y en casos que quedan fuera de su ámbito espacial de aplicación³⁰⁹.

309. *Ibid.*

V. Las últimas Conferencias Panamericanas y el inicio de las actividades de la O.E.A.

1. LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA CONFERENCIA DE LA HABANA

A) *La insistencia en la codificación del D.I.Pr.*

44. El movimiento panamericano adquirió unos rasgos particulares en el período que va desde la Séptima Conferencia (Montevideo, 1933) hasta el comienzo de la "guerra fría", en los años siguientes del final de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido se ha destacado que las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica atravesaron en esta época un período caracterizado, en líneas generales, por la distensión y un cierto grado de cooperación. El elemento central de la nueva situación lo constituye sin duda la aceptación (con alguna reserva) por parte del Gobierno de F.D. Roosevelt del principio de no intervención consagrado en el art. 8 de la Convención sobre derechos y deberes de los Estados, que marca el inicio de la *Good Neighbor Policy*³¹⁰. No debe olvidarse,

310. Vid. H. Wells, *op. cit.*, pp. 230-231 y C. Sepúlveda, *op. cit.*, p. 27. Es en esta época también cuando comienza a sustituirse "panamericanismo" por

empero, que al mismo tiempo se producían algunas situaciones complejas en la región, como la Guerra del Chaco, y que la actitud de los Estados latinoamericanos hacia el "vecino" del Norte no era homogénea³¹¹.

La agenda de la Séptima Conferencia fue tan amplia como las de las reuniones precedentes. En esta ocasión, se aprobaron, además de la ya mencionada y de las que comentamos más abajo, Convenciones sobre asilo político y enseñanza de la historia, un Protocolo adicional a la Convención general de conciliación interamericana de 1923 y nada menos que noventa y cinco resoluciones³¹². Mas, sin ánimo de extendernos sobre el desarrollo del temario, vale la pena comentar ciertos datos particularmente significativos que se producen a sólo cinco años de la aprobación del Código Bustamante. Las referencias anteriores sólo se realizan para llamar la atención sobre "interamericanismo", reconociendo la existencia de (al menos) dos Américas diferenciadas. Vid. Z. Drnas de Clement, *loc. cit.*.

311. Cf. G. Kutzner, *op. cit.*, pp. 75-76. Asimismo, sobre la actitud de Argentina, D. Colombo Imaz de Puig y J.C. Puig, "El movimiento...", *loc. cit.*, pp. 33-34 y, con más profundidad, las consecuencias de la misma, C. Escudé, Gran Bretaña, los Estados Unidos y la declinación argentina 1942-1949, Buenos Aires, 1982.

312. Acta final (VIIª Conferencia), *Rev. Der. Int.* (La Habana), t. XXV, 1934, pp. 93-122, J.G. Guerrero, "La VIIª Conférence Panaméricaine", *Rev. gén. dr. int. pub.*, t. 41, 1934, pp. 401-408 y J.J. Caicedo Castilla, *El Derecho internacional...., cit.*, pp. 59-62.

el verdadero lugar que ocupaba la codificación del Derecho internacional público y del D.I.Pr. en el seno de las Conferencias. Esta misma tangencialidad, es posiblemente la causa principal de los sucesivos rizados del rizo sobre el tema y de la situación algo confusa imperante en su organización.

En concreto, en lo que se refiere a este último punto, se dictaron varias resoluciones. Se adoptó una Res. (núm. LXX) sobre "Métodos de Codificación del Derecho Internacional" en la cual se llamó la atención sobre la necesidad de racionalizar los esfuerzos dedicados a la codificación, destacándose el carácter demasiado ambicioso de los mismos. Se propugna, a partir de allí, una labor codificadora "gradual y progresiva", con un criterio mucho más realista que debía buscar la conciliación de los elementos jurídicos con los políticos y con mayores posibilidades de vigencia efectiva que el imperante hasta ese momento. Paradójicamente, para alcanzar esos loables fines, se recomendó crear en cada Estado americano una Comisión Nacional de Codificación del Derecho internacional y constituir una Comisión de Expertos dependiente de la Comisión Internacional de Juristas Americanos, para organizar la obra de la

codificación³¹³. Esta no se reuniría hasta que aquélla no hubiera preparado "un número discreto de proyectos o declaraciones"³¹⁴. En otra Res. (núm. XXI) se recordó el interés en avanzar en la elaboración de un C.c. americano³¹⁵.

Las Res. XIV y XLVIII crearon también sendas Comisiones de Expertos. La primera, dedicada a la preparación de un Anteproyecto de unificación del Derecho cambiario a partir de los Convenios de La Haya y Ginebra, y la segunda (Comité), a la formulación de otros sobre unificación de legislaciones sobre simplificación y uniformidad de poderes y personería jurídica de las

313. Vid. E. Borchard, "Committee of experts. Pan American Codification of International Law", *A.J.I.L.*, vol. 31, 1937, pp. 471-473.

314. En el núm. 5 de la Res. comentada se dispuso además la creación de una Secretaría General "encargada del trámite y correspondencia de los órganos codificadores" y una División Jurídica "de orden puramente administrativo. El texto, también en *Conferencias internacionales americanas...*, cit., pp. 539-542. En la primera reunión de la Comisión de Expertos (Washington, 1937), se recomendó a las Comisiones Nacionales la preparación de un proyecto de convenio para la consolidación e integración de las reglas establecidas por la Conferencias sobre codificación del Derecho internacional. Cf. *Acta Final de la Primera Reunión de la Comisión de Expertos*, Washington (Unión Panamericana), 1937, pp. 1-5 y G. Parra-Aranguren, "La revisión...", loc. cit., pp. 207-210.

315. *Conferencias internacionales americanas...*, cit., p. 494.

compañías extranjeras³¹⁶. Pero además de ello, se trataron temas que ya habían sido objeto de preocupación o de regulación en reuniones anteriores. Así, se aprobaron Convenciones sobre nacionalidad, nacionalidad de la mujer y extradición³¹⁷, cuestiones incluídas en el Código Bustamante³¹⁸.

45. Si la Séptima Conferencia añadió un poco de confusión al desorganizado (o excesivamente organizado) panorama de la codificación americana³¹⁹, los pasos siguientes no mejorarían esa situación. Primero fue la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz (Buenos Aires, 1936), la que se encargó de reflotar los tres Comités Permanentes creados en la Sexta Conferencia

316. El Comité emitió un Protocolo sobre el primer tema en 1940 y una Declaración respecto del segundo en 1936. Sobre ambos se percibe un considerable interés de Estados Unidos. Vid. K.H. Nadelmann, "Ignored State Interests...", *loc. cit.*, pp. 340-341 y "Multilateral Conventions in the Conflicts Field...", *loc. cit.*, p. 146.

317. Vid. Conferencias internacionales americanas..., *cit.*, pp. 452-462.

318. Vid. G. Parra-Aranguren, "La revisión...", *loc. cit.*, pp. 205-207.

319. "La Conferencia ha postergado una vez más la obra de la codificación", decía C. Díaz Cisneros, *op. cit.*, p. 456. Sin embargo, es ostensible la fijación con la misma.

sin perjuicio de la subsistencia de todos los órganos creados en 1933³²⁰. Señaladamente, a la Comisión (ahora llamada Comité) de Expertos en codificación se le encargó estudiar, además de varias cuestiones estrictamente de D.I.P., el tema de la nacionalidad³²¹. Después fue la Octava Conferencia (Lima, 1938) que, so pretexto de solucionar los evidentes problemas operativos, mantuvo todos los organismos existentes reglando un procedimiento que nunca llegó a ponerse en funcionamiento³²².

A partir de 1939, finalmente, comenzaron a celebrarse las Reuniones de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, cuyo origen se remonta a la Conferencia de Buenos Aires de 1936 y que tiene por objeto el tratamiento de temas urgentes o de interés

320. Cf. la Res. VI "Codificación del Derecho internacional", Conferencias internacionales americanas..., cit., pp. 631-632.

321. Res. XXXVII, *ibid.*, pp. 653-654.

322. Res. XVII "Métodos para la Codificación del Derecho internacional", *ibid.*, Primer Supl., pp. 33-36. La que fuera Junta y después Comisión, pasó a ser Conferencia (Internacional de Jurisconsultos Americanos). La Octava Conferencia adoptó en total ciento doce (!) documentos, entre declaraciones, recomendaciones y resoluciones. Entre estas últimas, cabe destacar las referidas a nacionalidad, propiedad intelectual, arbitraje comercial y -una vez más- a la "uniformidad de los Derechos comercial y civil". Vid. también G. Parra-Aranguren, "La revisión...", loc. cit., pp. 225-227 y E. Borchard, "The 'Committee of Experts' at the Lima Conference", A.J.I.L., vol. 33, 1939, pp. 269-282.

común³²³. Los acontecimientos que se produjeron en el mundo y la participación activa de Estados Unidos en la Guerra, marcaron claramente el trabajo de la Unión Panamericana en ese tiempo. Para nuestro estudio tiene especial trascendencia la creación, en la Primera Reunión de Consulta (Panamá, 1939), del Comité Interamericano de Neutralidad³²⁴. Aunque sus funciones fueron concebidas en estrecha relación con su nombre³²⁵, el agravamiento de la situación provocó que la Tercera Reunión de Consulta (Río de Janeiro, 1942) decidiera la "ampliación sustancial de las finalidades" del mismo³²⁶.

Desde aquél momento hasta nuestros días, el órgano en cuestión pasó a llamarse Comité Jurídico Interamericano y su sede quedó fijada en Río de Janeiro. Entre sus funciones se estableció la de "desarrollar y

323. Vid. C. Sepúlveda, *op. cit.*, pp. 28 y 30-32.

324. Res. VI, Conferencias internacionales americanas. Primer Supl., pp. 115-118.

325. *Ibid.*, pp. 138-139, donde se encuentra la Res. I de la Segunda Reunión de Consulta (La Habana, 1940). La Res. XI (p. 147) se refiere otra vez a la Codificación del Derecho internacional, recordando el procedimiento previsto en la Octava Conferencia.

326. Res. XXVI, *ibid.*, pp. 206-207. Vid. J.J. Caicedo Castilla, La obra del Comité Jurídico Interamericano, Río de Janeiro, 1966, p. 6 y Ch. G. Fenwick, "The Inter-American Juridical Committee", A.J.I.L., vol. 37, 1943, pp. 5-29.

coordinar las labores de codificación del Derecho internacional, sin perjuicio de la competencia de los organismos existentes". Sus actividades, en la etapa previa a la creación de la O.E.A., estuvieron salpicadas por inconvenientes y dificultades que no obstaron a una producción jurídica significativa dirigida específicamente al D.I.P.³²⁷. En la misma subsistencia de otros organismos y en la falta de una delimitación precisa de sus funciones -acaso imposible- deben cifrarse las causas de los problemas reseñados.

B) El canto del cisne: la Novena Conferencia

(Bogotá, 1948) y la creación de la O.E.A.

46. El cambio fundamental operado en la situación política internacional a raíz de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, permitió en el ámbito americano concretar el viejo anhelo de fundar un organismo continental de carácter permanente³²⁸. Desde la fracasada

327. Vid. G. Parra-Aranguren, "La revisión...", loc. cit., pp. 229-234 y *Sistema interamericano...*, cit., pp. 234-240. Los documentos se encuentran en *Rec. e Inf.*, vol. I (1942-1944) y vol. II (1945-1947).

328. Sobre el contexto en el que surgen las organizaciones internacionales y la repercusión de las mismas sobre el Derecho internacional, vid. E. Pecourt

Convención de la Conferencia de La Habana de 1928, no se habían dado las condiciones necesarias para ello y no se había vuelto a intentar una estructuración del sistema regional. No obstante, alrededor de las Conferencias se había generado el complejo entramado de órganos, comités e institutos, que hacían más urgente la necesidad de racionalización³²⁹. Fue así como en el transcurso de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz (México, 1945), se adoptó una resolución³³⁰ para alcanzar la "reorganización, consolidación y fortalecimiento del Sistema Interamericano", que serviría de base para los documentos que habrían de desembocar en la Carta de la Organización de los Estados Americanos firmada en la Novena Conferencia (Bogotá), el 30 de abril de 1948³³¹.

García, "La acción normativa...", *loc. cit.*, pp. 165-166 y la bibliografía allí citada.

329. Los órganos encargados de la codificación se habían multiplicado a través de la vida de las Conferencias, creando en muchos casos situaciones de confusión producto del solapamiento en las actividades. Entre todos ellos llegaron a sumar 225 integrantes. *Vid. Sistema Interamericano...*, *cit.*, pp. 141-146 y 229ⁿ y A.V. Freeman, "The First Meeting of the Inter-American Council of Jurists", *A.J.I.L.*, vol. 44, 1950, p. 374.

330. *Vid. Conferencias internacionales americanas. Segundo Supl.*, pp. 20-24. Cf. P.R. Kelbaugh, "Developments in the field of Inter-American organizations", *An. Jur. Interam.*, 1949, pp. 63-71.

Precisamente en la creación de la O.E.A., radica la trascendencia de esta Conferencia que vino a marcar un punto de inflexión en la evolución del movimiento panamericano. A la antigua situación de relativa precariedad e improvisación, le sucedió a partir de este momento una estabilidad al menos formal y con ello un cauce más concreto y seguro para llevar a cabo la codificación del Derecho internacional³³². Existía un consenso respecto al agotamiento del sistema sostenido por las Conferencias, pero no estaba demasiado claro como debía sustituirse. Bajo estas particulares condiciones, la Carta de Bogotá produjo un resultado más bien híbrido³³³ constituido aparentemente alrededor del

331. Entrada en vigor el 13 de diciembre de 1951, conforme a su art. 145. En el transcurso de la Novena Conferencia se aprobaron también: el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), el Convenio Económico de Bogotá, dos convenciones sobre la mujer (una de derechos políticos y otra de derechos civiles) y cuarenta y seis resoluciones (entre ellas, la "Declaración americana de los derechos y deberes del hombre"). Vid. O.C. Stoetzer, *Panamerika. Idee und Wirklichkeit. Die Organisation der Amerikanischen Staaten*, Hamburgo, 1964, pp. 15-19.

332. La acción *nomogenética* "indirecta o mediata" de la O.E.A. llegaría a ser importante no sólo en el ámbito del D.I.P. sino también del D.I.Pr., como tendremos ocasión de analizar en el Cap. 2. Para la explicación medular de esta terminología, cf. E. Pecourt García, "La acción normativa...", *loc. cit.*, esp. pp. 174 ss..

333. Las sugerencias de reforma comenzaron apenas alcanzó vigencia. Vid. J.C. Dreier, *The Organization of American States and the Hemisphere Crisis*, Nueva York,

Consejo de la Organización, ente nuclear del cual dependían todos los demás: Conferencias Interamericanas, Reuniones de consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, Unión Panamericana (como Secretaría General), Conferencias Especializadas, Organismos Especializados y Comisiones y Agencias Especiales.

Dicha apariencia chocaba contra la confluencia de varios factores. De un lado, las Conferencias Interamericanas mantuvieron en la letra de la Carta su rol de órgano supremo, definidor de las grandes líneas de acción³³⁴. De otro lado, las Reuniones de Consulta y la Unión Panamericana terminaron fagocitando por diversas causas los respectivos ámbitos de atribuciones de las Conferencias y del Consejo³³⁵. En realidad, todos estos factores se resumen en que los problemas de fondo referidos a la construcción y fortalecimiento del Sistema Interamericano fueron desplazados por los importantes

1962, pp. 119-128 y C. Sepúlveda, *op. cit.*, pp. 61 y 77-83.

334. Sin embargo, sólo volvió a reunirse en una oportunidad. Fue la X Conferencia (Caracas, 1954), en la cual se aprobaron tres convenciones, sobre: fomento de relaciones culturales latinoamericanas, asilo diplomático y asilo territorial. Tiempo después comenzó a prepararse la XI, que debía realizarse en Quito en 1960 pero nunca llegó a reunirse. Vid. J.J. Caicedo Castilla, *El Derecho internacional...*, *op. cit.*, pp. 85-96.

335. Vid. C. Sepúlveda, *op. cit.*, pp. 44-52.

acontecimientos políticos que se sucedieron en la región y maniatados por el peso de la burocracia encarnada por la Unión Panamericana. Concretamente, debe tenerse en cuenta que la institucionalización supuso también una marcada politización de la Organización, la cual tuvo ocasión de manifestarse en numerosas oportunidades³³⁶. El Sistema interamericano en cuanto vehículo de relaciones norte-sur en el continente había perdido bastante su sentido, una vez consolidado el liderazgo norteamericano.

Por su parte, los aspectos jurídicos de la nueva organización fueron confiados al Consejo Interamericano

336. Debe tenerse en cuenta que el nacimiento se produce en pleno período de consolidación de la división del mundo en dos bloques antagónicos. Sobre los elementos que conforman la naturaleza política de la O.E.A., *vid.* G. Kutzner, *op. cit.*, pp. 199-212, esp. 203-206, donde se analizan los aspectos ideológicos de la Organización. La Res. XCIII de la Décima Conferencia ("Declaración de solidaridad para la preservación de la integridad política de los Estados americanos contra la intervención del comunismo internacional") es suficientemente ilustrativa al respecto. *Ibid.*, pp. 253-254. También son datos contextuales importantes la aprobación el 2 de septiembre de 1947, en Río de Janeiro, del Tratado interamericano de asistencia recíproca (T.I.A.R.), o los sucesos tales como la invasión a la República Dominicana, la exclusión de Cuba (el primer punto de la Res. VI de la Octava Reunión de Consulta (Punta del Este, 1962), donde se decidió la exclusión, reza: "Que la adhesión de cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano...") o la "crisis de los misiles". *Vid.* C. García Bauer, *Universalismo y Panamericanismo*, Guatemala, 1968, pp. 110-156 y A. Remiro Brotóns, *La hegemonía norteamericana, factor de crisis en la O.E.A.*, Bolonia, 1972, *passim*.

de Jurisconsultos -C.I.J., integrado por representantes de todos los Estados miembros (art. 59)- y al C.J.I. de Río de Janeiro -formado por representantes de nueve países (art. 69)-, que pasó a actuar como comisión permanente de aquél³³⁷. El primero era en cierto modo un símbolo de la continuidad de la etapa anterior, caracterizada al mismo tiempo por la elaboración de relevantes textos convencionales y por un notable grado de confusión en los trabajos de codificación. A él se le encargaron las tareas relativas al desarrollo y la codificación del Derecho internacional, así como las tendentes a lograr la uniformidad de las legislaciones americanas (art. 67). En este ámbito, la mayoría de sus actividades y las del C.J.I. continuaron dirigidas al D.I.P.³³⁸.

337. El C.I.J. era uno de los órganos subordinados del Consejo, junto al Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Cultural Interamericano, los cuales también contaban con sus respectivas comisiones permanentes.

338. *Vid.* J.J. Caicedo Castilla, *La obra...*, *op. cit.*, esp. pp. 87-88 y L. Kos-Rabcewicz-Zubkowski, "Les principaux organes de l'unification du droit et leur mission dans l'hémisphère américain", *Problèmes de droit contemporain. Mélanges Louis Baudouin*, Montreal, 1974, pp. 333-334.

2. LA ILUSION DE LA SINTESIS DEL D.I.Pr.

CONVENCIONAL AMERICANO

47. En lo que concierne a la empresa codificadora del D.I.Pr. americano, a partir de la institucionalización la práctica totalidad de los trabajos se dedicarían, durante muchos años, a la discusión acerca de la posibilidad de lograr una síntesis superadora entre las legislaciones internacionales globales de D.I.Pr. vigentes en América, incluyendo al *Restatement of the Law of Conflicts of laws*, aprobado por el American Law Institut en 1934. Puede pensarse, repasando la historia de los trabajos realizados desde la Séptima Conferencia Panamericana hasta la primera reunión de la CIDIP, que la ilusión de esa síntesis constituyó el principal escollo para la modernización o actualización del D.I.Pr. de la región³³⁹.

Ya en el *Informe sobre el plan para el desarrollo y la codificación del Derecho internacional público y del*

339. Una visión diferente, en H. Fix-Zamudio, "Armonización del Derecho de América latina y procedimientos para lograrla. Breves reflexiones sobre los instrumentos de armonización jurídica en América latina", *Rev. Jur. del Perú*, t. 30, 1979, pp. 283-309 y, con más amplitud, en *id.* y H. Cuadra, "Problemas actuales de armonización y unificación de los derechos nacionales en Latinoamérica", *An. Jur. (México)*, núm. 1, 1974, pp. 93-158.

Derecho internacional privado preparado por el C.J.I. para la Primera reunión del C.I.J. (Río de Janeiro, 1950), se comenzó a machacar con esta idea³⁴⁰. La misma fue asumida en esa oportunidad por el C.I.J. mediante la Res. VII, que encomendó al Comité el estudio de la "posibilidad de revisión en lo que fuere conveniente del Código Bustamante", a la luz de los Tratados de Montevideo y del *Restatement*³⁴¹. La posición del C.J.I. era mantener una obra de alcance general para el D.I.Pr., limitando la metodología de la codificación parcial al D.I.P..

Con el mencionado objetivo, algunos miembros del Comité prepararon dos dictámenes en los años 1951 y 1952, el segundo de ellos, después de haber recibido sólo las opiniones de los gobiernos de cinco países³⁴². En éste se

340. Doc. CIJ-3, Washington, D.C., 1949. Vid. G. Parra-Aranguren, "La revisión...", *loc. cit.*, pp. 237-244.

341. *Documentos de la organización de los Estados Americanos sobre Derecho internacional privado* (Doc. OEA/Ser. Q.II.9. CIJ/15), Washington, D.C., 1971, p. 1. Cf. G. Parra-Aranguren, *loc. cit.*

342. Vid. *Documentos...*, *cit.*, pp. 39-67. A diferencia de éste, el primer dictamen era algo pesimista. Cf. J. Samtleben, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 77-78 y P. Herrera Báez, "Nota explicativa", en *Compilación Trujillo de Tratados y Convenciones de la República Dominicana*, vol. VI, Ciudad Trujillo (Santo Domingo), 1958, pp. XXX-XXXV.

concluyó que la revisión era posible y se propuso para ello la consideración de varias modificaciones, entre otras, la relativa a la ley aplicable al estado y capacidad de las personas, señalando que el sistema del domicilio era el más conveniente para las naciones americanas. Incluso se llegó a afirmar que "no puede hablarse seriamente de revisión del Código si no se parte de la base de adoptar la reforma del domicilio".

Sobre la base de estos antecedentes, el C.I.J. aprobó en su Segunda Reunión (Buenos Aires, 1953) una resolución, solicitando al C.J.I. la elaboración de un estudio comparativo entre los señalados textos americanos³⁴³. Este le encargó el trabajo al representante colombiano J.J. Caicedo Castilla, quien además de realizar disquisiciones acerca del contenido de la obra y sus relaciones con las legislaciones estatales y una minuciosa comparación normativa, sugirió la inconveniencia de intentar un trabajo de síntesis contando con el *Restatement*. La fundamentación de la exclusión se refería tanto a las seguras reticencias norteamericanas frente a una obra de alcance general,

343. Res. XII, "Posibilidad de revisión del Código Bustamante o Código de Derecho internacional privado". *Documentos...*, cit., pp. 2-3.

cuanto a las dificultades propias de una codificación de este tipo entre Estados pertenecientes a distintas familias jurídicas³⁴⁴.

De este modo comenzó a perfilarse un nuevo rumbo en los trabajos de codificación del D.I.Pr. convencional americano. La pretendida síntesis se limitaría a las obras de Montevideo y La Habana y, más concretamente, se intentaría "revisar" ésta adornándola con elementos propios de aquélla. Fundamentalmente, el cambio pasaba por la aceptación del criterio del domicilio; la primera actividad en tal sentido consistía en el análisis de las reservas al Código Bustamante. Sin embargo, con esto el problema no quedaba solucionado, ya que entre ambas codificaciones las distancias se revelaron también insuperables³⁴⁵.

Así encarados, los trabajos desarrollados durante más de dos décadas no tenían ninguna posibilidad de

344. Cf. la opinión oficial norteamericana y los comentarios de K.H. Nadelmann, "A New Report of the Inter-American Juridical Committee on Revision of the Bustamante Code", *A.J.I.L.*, vol. 53, 1953, pp. 652-660. El "Estudio comparativo del Código Bustamante, los Tratados de Montevideo y el "Restatement of the Law of Conflicts of Laws" (Doc. CIJ-21, 1954), se encuentra en *Documentos...., cit.*, pp. 77-257.

345. J. Samtleben, *Derecho...., op. cit.*, p. 83, destaca una vez más la influencia del territorialismo, en tanto elemento que impide el juego bilateral de la ley del domicilio.

éxito³⁴⁶. Básicamente existía una contradicción insalvable que surgía de la utilización de un foro interamericano para realizar una obra latinoamericana. Obviamente esto no podía interesar a los Estados Unidos, verdadero *factotum* de la Organización³⁴⁷. En una época de producción de importantes acontecimientos políticos (algunos con notables repercusiones jurídicas) y en la cual se propugnaban acciones de envergadura como la Alianza para el Progreso (1961) o la creación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID - 1959)³⁴⁸, ocupar a los juristas en tareas engorrosas y carentes de resultados prácticos, no debía parecer razonable. Pero -y esto es decisivo- tampoco resultaba atractivo para el resto de los países. La generalizada falta de respuesta a

346. Las peripecias del largo peregrinaje de este intento frustrado se encuentran en J.J. Caicedo Castilla, *La obra...*, op. cit., p. 67-78 y *Derecho internacional privado*, 6ª ed., Bogotá, 1967, pp. 46 ss., W.S. Barnes, "Revision of the Bustamante Code", *Cursos monográficos* (La Habana), 1957, pp. 387-480, A. Linares Fleytas, *Código Bustamante de Derecho internacional privado. Sus antecedentes, sus propósitos, su texto y su posible revisión*, Caracas, 1975, G. Parra- Aranguren, "La revisión...", loc. cit., pp. 237-281, y J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., pp. 76-84.

347. W.S. Barnes, "Legal issues in inter-american relations", *Texas Int. L.J.*, vol. XI, 1976, p. 64.

348. Esta, según C. Sepúlveda, "por algún tiempo pareció ser la tabla de salvación de todo el Sistema", op. cit., p. 66. Los datos sobre su origen y evolución se encuentran en *El Sistema...*, op. cit., pp. 275-365.

los documentos enviados a los gobiernos por el C.I.J. es una clara muestra al respecto.

Contrariamente a lo que podría pensarse la actitud refractaria no fue exclusiva de los Estados parte de los Tratados de Montevideo³⁴⁹. Lo que sí es cierto es que en éstos flotaba una idea de incompatibilidad entre ambas codificaciones, pergeñadas para distintos ámbitos y bajo la inspiración de diferentes doctrinas. Por ello se rechazaba el "espíritu" existente en el seno de la O.E.A. para encarar la codificación, el cual se traducía en la búsqueda de unas normas comunes de D.I.Pr. "aun cuando esas normas sean de tipo regional (como los Tratados de Montevideo), por lo cual no son adecuadas para el continente entero, y aun cuando esas normas, por ser continentales (como las del Código Bustamante) no pueden convenir a la vez a las distintas regiones"³⁵⁰.

Todas estas son razones parciales. En el fondo, quedó demostrado que no se trataba de un problema de composición o atribuciones de los órganos encargados de la codificación ni de mecanismos empleados, aunque ambos

349. Vid. el apretado resumen de los argumentos defendidos por el representante argentino en L.A. Colombo, "La proyectada reforma del Código Bustamante", *La Ley (Argentina)*, t. 72, 1953, p. 908.

350. Q. Alfonsín, *Teoría...*, op. cit., p. 285.

pudieran mejorarse. El meollo de la cuestión era que, pasada la era del "romanticismo universalista", las viejas codificaciones globales habían perdido su sentido y su factibilidad³⁵¹. Los ingentes esfuerzos por alcanzar una reglamentación de los problemas que conllevan las relaciones de tráfico privado externo en América, debían dar paso a una metodología más pragmática. Los grandes textos habían alcanzado el techo de sus posibilidades y la hora de la codificación materia por materia, ajustada a las exigencias de la región, llegó para quedarse.

48. Por esos motivos, las tareas que siguieron configuraron una seguidilla de pasos en el vacío sin ninguna trascendencia efectiva para la codificación del D.I.Pr. En esta línea se inscriben los dictámenes preparados por el Departamento Jurídico de la Unión Panamericana y por el C.J.I. en 1961 y el Documento

351. Sin embargo, J. Samtleben, *loc. cit.*, parece creer en la factibilidad de las tareas de revisión al afirmar que las causas del "resultado decepcionante" estriba en no haber respetado la "condición necesaria para ello". Esta consiste en tener en cuenta cabalmente los sistemas estatales de D.I.Pr. de la región y los efectos del Código Bustamante en los Estados parte del mismo, y trabajar en colaboración estrecha con los legisladores nacionales. Desde otra óptica, la misma creencia en B. Gesche Müller, "Proyecto de investigación sobre la eficacia del Código Bustamante para unificar el Derecho internacional privado de los Estados americanos", *Rev. Der. (Chile)*, t. XL, 1972, núm. 158, pp. 48-54.

elaborado por éste en 1964³⁵². La Quinta (y última) Reunión del C.I.J. (San Salvador, 1965), introdujo un dato que habría de resultar importante: la recomendación al Consejo de la O.E.A. para que convoque una Conferencia Especializada de D.I.Pr.³⁵³. En efecto, pese a que el fin perseguido seguía consistiendo en la revisión del Código Bustamante, cuando esa recomendación se hizo realidad diez años después, el impulso inicial cobró otra dinámica. Pero, en sí, la Res. II fue apenas un poco más lejos en el sentido de "depurar" o "concretar" las tareas de revisión, al indicar que el trabajo debía limitarse a los sectores civil y mercantil, además de plantear el agregado al Código de un libro sobre Derecho laboral³⁵⁴.

352. En esta época también se llevan a cabo trabajos de unificación relativos a arbitraje comercial y a cooperación internacional en procedimientos judiciales. Vid. J.J. Caicedo Castilla, *La obra...*, op. cit., pp. 111-126 y L.A. Colombo, "La IIª reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos. Temas tratados y resoluciones adoptadas", *La Ley (Argentina)*, t. 70, 1953, pp. 741-743.

353. Res. II, "Posibilidad de Revisión del Código Bustamante", *Documentos...*, cit., pp. 5-7.

354. Con la señalada limitación, J.J. Caicedo Castilla elaboró su "Proyecto para la reforma del Código Bustamante", con escaso eco. *Documentos...*, cit., pp. 388-415. En el mismo sentido se pronunció el C.J.I. en su nuevo dictamen de 18 de agosto de 1966 (*Documentos...*, cit., pp. 383-387).

Finalmente, las verdaderas cuestiones por donde pasaba la vida de la O.E.A. forzaron la demorada reforma de la Carta, la cual había sido concebida como uno de los lados de un cuadrilátero que debía sostener todo el Sistema, pero que no llegó a funcionar como tal³⁵⁵. La nueva constitución, aprobada en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires) el 27 de febrero de 1970, quedó centrada en la Asamblea General, con una potestad directa sobre todos los órganos (Secretaría General, Consejo Permanente, Consejo Económico y Social, Consejo para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Reunión de Consulta, C.J.I., Comisión de Derechos Humanos, Conferencias Especializadas, organismos especializados y otras entidades)³⁵⁶.

355. C. Sepúlveda (op. cit., pp. 52-53) estima que la deficiencia de origen fue que dos de esos lados (un convenio económico y un tratado de medios de solución pacífica -vid. también, J.J. Quintana, "The Latin American Contribution to International Adjudication: The Case of the International Court of Justice", *N.I.L.R.*, vol. XXXIX, 1992, pp. 142 ss.-) fallaron (el cuarto era el T.I.A.R.). También E. Jiménez de Arechaga señalaba que la Carta de Bogotá no se bastaba a sí misma. Vid. "L'evolution du régionalisme interaméricaine", *Régionalisme et universalisme dans le droit international contemporain*, París, 1977, p. 46.

356. El "Protocolo de Buenos Aires" entró en vigor el 27 de febrero de 1970, conforme a lo estipulado en su art. XXVI. Para los cambios en la estructura vid. *Sistema interamericano...*, op. cit., pp. 146-206 y G. Kutzner, op. cit., conr. pp. 225-228.

En esta ocasión se produjo una modificación en lo que refiere a los órganos jurídicos. El C.I.J. desapareció y el C.J.I. asumió además de las funciones de cuerpo consultivo, las relativas a "promover el desarrollo progresivo y la codificación del Derecho internacional", estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración y las posibilidades de uniformidad legislativa (art. 105). Su composición pasó de nueve a once miembros, elegidos por la Asamblea General (art. 107). No sólo la Asamblea, sino también la Reunión de Consulta y los Consejos, tienen la facultad de encomendar trabajos y estudios al C.J.I., el cual también puede actuar por propia iniciativa y "sugerir la celebración de conferencias jurídicas especializadas" (art. 106). Puede decirse que el C.J.I. fue "jerarquizado" por el Protocolo de Buenos Aires (art. 51 y art. 108, que lo dota de "la más amplia autonomía técnica") y que ello tuvo algún reflejo en su actividad posterior³⁵⁷.

Dentro del concreto espacio del D.I.Pr., el Comité (o algunos de sus miembros) continuó batallando casi en

357. El antiguo art. 32 no lo mencionaba y además era "sólo" la comisión permanente del C.I.J.. *Vid. Sistema interamericano...*, op. cit., pp. 150 y 247-248 y G. Kutzner, pp. 284-287.

solitario en pos de la revisión del Código Bustamante. La importancia de la Secretaría General de la O.E.A. para la realización de trabajos tendentes a la codificación y, específicamente, de su Departamento de Asuntos Jurídicos (después Consultoría Jurídica y ahora Subsecretaría de Asuntos Jurídicos) sólo cobraría relieve coincidentemente con el inicio de las actividades de la CIDIP.

Una nueva reforma tuvo lugar en 1985, con el Protocolo de Cartagena de Indias en el XIVº Período Extraordinario de Sesiones de la A.G. (aprobado el 5 de diciembre de 1985, entró en vigor el 16 de noviembre de 1988, de acuerdo con lo preceptuado por el art. IX del Protocolo) y allí los aspectos relativos al C.J.I. y a la codificación del Derecho internacional se mantuvieron incólumbes, salvo en los números atribuidos y en una levísima modificación en el procedimiento de cobertura de vacantes³⁵⁸.

358. Vid. las contribuciones de R. Puceiro Ripoll, J. Peirano Basso y D. Opertti Badán, en "Las reformas a la Carta de la O.E.A. en el Protocolo de Cartagena de Indias", *Rev. Fac. Der. Cs. Soc. (Montevideo)*, t. XXVIII, 1987, pp. 25-36, 37-45 y 47-57, respectivamente.

Capítulo 2

UNA NUEVA METODOLOGIA PARA UNA NUEVA REALIDAD: LA CIDIP COMO INTENTO DE RESPUESTA A LOS PROBLEMAS ACTUALES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO INTERAMERICANO

I. Origen y características del nuevo proceso codificador americano

1. ORIGEN Y ELEMENTOS TECNICOS DE LA CIDIP

A) *El difícil nacimiento de la CIDIP*

1. La larga marcha iniciada por los países americanos en los años cincuenta, caracterizada por la paulatina toma de conciencia sobre la necesidad de utilizar un mecanismo de regulación del D.I.Pr. que hasta entonces habían reservado para el Derecho internacional público¹, experimentaría un vuelco decisivo el 23 de abril de 1971. Ese día la Asamblea General de la O.E.A. reunida en San José de Costa Rica, hizo suya la recomendación reiterada varias veces por el C.I.J. primero² y el C.J.I. después³, y convocó a una

1. Nos referimos a la metodología de la codificación gradual y progresiva en sustitución de la codificación global.

2. Destacamos sobre todo el párrafo 1 de la Resolución II cit., donde se recomienda por vez primera al Consejo de la O.E.A. la convocatoria a una Conferencia Especializada sobre D.I.Pr. (Dejando de lado la aislada expresión, como fórmula alternativa, de la solicitud hecha por el C.J.I. al C.I.J. -"Dictamen del Comité Jurídico Interamericano sobre Revisión del Código Bustamante", de 8 de septiembre de 1961, *Documentos...*,

Conferencia especializada interamericana sobre D.I.Pr., que habría de conocerse posteriormente por la sigla CIDIP. La convocatoria fue instrumentada mediante la Resolución AG/Res. 48 (I-O/71)⁴, en cuyo texto se ordenaba que la Conferencia debía realizarse antes de 1974, en lugar y fecha a designar por el Consejo Permanente de la O.E.A.

cit., p. 352-). No se nos escapa, como hemos indicado en el capítulo precedente, que el objetivo perseguido por el C.I.J. era la revisión del Código Bustamante. Precisamente, el título de la Resolución II era "Posibilidad de Revisión del Código Bustamante". Cf. *Documentos...., cit.*, pp. 5-7.

3. En los documentos "Dictamen del Comité jurídico Interamericano sobre el tema: Revisión del Código Bustamante", de 18 de agosto de 1966 (*cit.*), y "Dictamen del Comité Jurídico Interamericano sobre armonización de las legislaciones de los países latinoamericanos sobre sociedades, debiendo encararse el problema de las sociedades de carácter internacional", de 29 de agosto de 1968 (*Documentos...., cit.*, p. 492), el C.J.I. insistió - con particular vehemencia en el primero de ellos -, sobre la necesidad de llevar a cabo una Conferencia Especializada.

4. Puede consultarse en *Documentos...., cit.*, pp. 521-522, y en *Actas y documentos, Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP)*, (Doc. OEA/Ser.K/XXI.1, CIDIP/64), Washington, D.C., 1975 -en adelante: *Actas y documentos (CIDIP I)*-, vol. I, p. 4. Los avatares de todo el proceso que llevó hasta la realización de la primera CIDIP se encuentran, a modo de "actas y documentos" cuidadosamente anotados y enriquecidos, en los trabajos de G. Parra-Aranguren, "La revisión...", *loc. cit.*, pp. 271-295, y "La Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado" (Panamá, 1975, CIDIP-I)", *Codificación...., cit.*, pp. 297-318, esp. 300-302.

A partir de aquí, la nueva metodología con vistas a lograr la codificación internacional del D.I.Pr. en el continente, consistirá en la formulación de convenios singulares sobre temas específicos previamente identificados, similar a la empleada por la Conferencia de La Haya de D.I.Pr.. En efecto, dicha metodología iba a adquirir carta de ciudadanía con el transcurso de las siguientes convocatorias de la Conferencia especializada. Adoptar el mecanismo de codificación "parcial y progresiva", implica necesariamente abandonar la idea de la revisión del Código Bustamante, tan cara a un vasto sector de la doctrina americana. Coincidentemente, supone también alejarse de la síntesis quimérica entre el Código, los Tratados de Montevideo y los *Restatement of the Law of Conflict of laws*⁵.

Afirmar esto no significa en modo alguno que se ignore el peso considerable que los datos brindados por estos instrumentos tienen sobre la obra de la CIDIP, sobre todo en sus primeras realizaciones. Mucho menos autoriza a dejar de lado la insistencia del C.J.I. en el sentido de entender como labor y objetivo de la

5. Cosa distinta es que para la elaboración de las Convenciones adoptadas por la CIDIP, se tengan en cuenta ciertos criterios fraguados en esos textos. Esto no significa, ni con mucho, "armonizarlos". En contra, G. Chalita y M.B. Noodt Taquela, *op. cit.*, p. 36.

Conferencia la revisión del Código Bustamante⁶. Por el contrario, obliga a valorar en toda su amplitud la trascendencia de esta sustancial variación en la actitud asumida frente al desafío renovado de la codificación⁷. Nótese, por ejemplo, que en su referencia al tema 11 del proyecto de temario aprobado por el Consejo para la CIDIP I ("Acción que debe tomarse para el desarrollo de otros temas de Derecho internacional privado"), el C.J.I.

6. Al tomar conocimiento del Proyecto de Temario para la Conferencia preparado por un grupo de trabajo designado *ad hoc* por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente la O.E.A. (Vid. Documentos..., cit., pp. 647 ss., y Doc. OEA/Ser.G, CP/doc.237/72 rev. 1, de 20 de diciembre de 1972), el C.J.I. reaccionó duramente emitiendo un Dictamen donde se descalifica que se haya descartado lo referente a la revisión del Código. Allí puede leerse: "organizar una Conferencia de Derecho uniforme sobre cuestiones de derecho mercantil y procesal puede ser una iniciativa loable, pero no es eso lo que ordenó la Asamblea General"... "si se quiere convocar una conferencia de derecho comercial uniforme el camino a seguir es solicitarlo de la próxima Asamblea General" (*ibid.*, pp. 63 ss., y Documentos ..., cit., pp. 655 ss.). Un fiel reflejo de esta polémica es recogida por uno de sus protagonistas en J.J. Caicedo Castilla, "Introducción general al Derecho internacional privado, con especial referencia a los temas de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP) y proyectos del Comité Jurídico Interamericano", *Primer Curso C.J.I. -1974-*, pp. 129-155 y 157-182.

7. Ya en 1952, H. Valladão concluía su curso en la Academia de La Haya de Derecho internacional ("Le droit...", loc. cit., p. 110) diciendo: "*Un Droit International Privé unique dans toutes ses branches pour toutes les pays, est une utopie égale à celle d'un seul Droit Civil pour toutes les nations. Cela est encore vrai, même pour les Amériques*".

volvió a la carga al limitar la lista de documentos de trabajo recomendados para la CIDIP, al Código Bustamante, los Tratados de Montevideo, el proyecto de Código preparado por J.J. Caicedo Castilla y los demás estudios o proyectos del C.J.I.⁸. No obstante las dificultades y la disparidad de criterios sobre muchos de los puntos relacionados con la unificación interamericana del D.I.Pr., la nueva etapa de este proceso iría ganando en solidez y estabilidad. Al primer encuentro, que no se celebraría hasta enero de 1975 en Panamá⁹, le sucederían

8. Esta resolución recibió el voto en contra del delegado de Uruguay, por entender que se dejaba de lado a los países tributarios del sistema de *common law*, el cual no parece ser el único motivo válido para rechazarla. J.J. Caicedo Castilla, estima que los materiales sobre D.I.Pr. americanos son "preciosos y suficientes". Vid. "Exposición acerca de la Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-I)", *Segundo Curso C.J.I. -1975-*, pp. 249-268, esp. 255. Para algún autor, incluso, la CIDIP comporta el "primer intento de revisión del Código de Bustamante para lograr en un futuro no lejano un Código de derecho internacional privado para toda América". Vid. M.G. Monroy Cabra, *Conferencias Interamericanas de Panamá (1975) y Montevideo (1979) sobre derecho internacional privado*, Bogotá, 1979, e *id.*, *Tratado de Derecho internacional privado*, 3ª ed., Bogotá, 1982, pp. 386-412.

9. Concretamente, la Conferencia se reunió el 14 de enero de ese año, fecha que había sido fijada por el Consejo Permanente de la O.E.A. en la misma Resolución en que aceptaba el ofrecimiento del Gobierno panameño para que la capital de este Estado fuera la sede del esperado acontecimiento (Res. OEA-Ser.G., CP-Res. 109 (120-74), de 20 de marzo de 1974).

los de Montevideo (1979 y 1989) y La Paz (1984), estando ya convocada por la Asamblea General la CIDIP V.

Los problemas que giran en torno a la CIDIP no son tan extraños como para no ser susceptibles de analizarse utilizando los parámetros que se emplean al estudiar los movimientos hacia la unificación del D.I.Pr. en cualquier lugar del mundo. Tal extremo puede comprobarse apreciando muchos de los trabajos que se dedican a esta materia en América. Sin embargo, los datos diferenciadores aportados por la aguilatada tradición codificadora de los países americanos, exigen a quien se sumerge en esta realidad compleja avanzar munido de dos armas imprescindibles: un conocimiento general de los mismos y una buena dosis de precaución antes de emitir juicios valorativos.

Si lo que se intenta es relatar una cronología de los hechos salientes que se van produciendo en las distintas etapas atravesadas por la CIDIP, el problema prácticamente desaparece. Pero a poco que se pretenda desentrañar, aunque sea someramente, los elementos que la caracterizan y los eventuales principios particulares que la informan, es muy probable que se experimente la rara sensación de estar introduciéndose en un campo minado. Por doquier asomarán cuestiones difíciles de resolver con la simple ayuda de esquemas analíticos tradicionales. No

resultará fácil la comprensión de determinadas actitudes frente a aspectos tales como la elección de las materias a codificar o los procedimientos utilizados para la conclusión de algunas convenciones; mucho menos accesible aparece la identificación de los intereses subyacentes en toda la obra de la CIDIP. Es por esta razón que fijaremos nuestro norte más en la aportación de elementos de juicio que consideramos relevantes, que en dar una respuesta terminante a los interrogantes planteados por el actual proceso de codificación del D.I.Pr. que se desenvuelve en América.

Desde nuestro punto de vista, cobra esencial importancia la justificación del trabajo llevado a cabo por la CIDIP y de sus resultados concretos según un doble análisis. De un lado, lo que constituiría una perspectiva *ad intra* y que hace referencia a las posibilidades que asisten a los países americanos de consolidar un mecanismo regional encargado de codificar el D.I.Pr. Dentro de ella, el problema más complicado consistirá en identificar la existencia de principios propios y de elementos auténticamente "regionales" de carácter social, económico, político y jurídico, que demuestren la necesidad de un proceso autónomo de codificación en el momento actual. Llegados a un acuerdo en cuanto a la

presencia de estos datos "americanos", la cuestión se centrará en el estudio de su adecuación o su respeto en los procedimientos empleados en la elaboración de las convenciones.

Según una perspectiva *ad extra*, la atención debe centrarse en las relaciones que se establecen entre la CIDIP y los otros foros que se ocupan de la codificación internacional del Derecho, con un alcance más universal. La participación creciente de los países americanos en éstos y la influencia que ejerce su obra sobre las realizaciones de la CIDIP, hará surgir una vez más el planteamiento que gira en torno a la dialéctica universalismo-regionalismo¹⁰ en la codificación. Uno de los aspectos de esta polémica habrá referirse a una eventual incorporación de Estados no americanos a convenios celebrados por la CIDIP, camino que hasta ahora sólo ha recorrido España. En todo caso, el éxito de la ingrata labor de "artificiero" dependerá con toda seguridad del cumplimiento de la doble exigencia apuntada.

10. Para una interesante disquisición semántica sobre estos términos, *vid.* H.U. Jessurun d'Oliveira, "Universalisme et particularisme en la Conférence de La Haye", *Rev. crit. dr. int. pr.*, 1966, pp. 359-362.

2. En primer término, hay que tomar en consideración las estructuras de los sistemas estatales y convencionales de D.I.Pr. vigentes en el continente al momento en que la O.E.A. decide, con la resolución del 23 de abril de 1971, protagonizar la previsión contenida en el art. 67 de la Carta de Bogotá en lo que refiere al desarrollo y la codificación del D.I.Pr.. Puede contemplarse, de este modo, la situación mantenida a lo largo de varias décadas, signada por los vanos intentos de conciliar los sistemas en presencia. Varios sistemas autónomos, a su vez, se identifican históricamente con una u otra de las grandes codificaciones internacionales americanas, aunque suelen diferir notablemente entre sí. Si a ello se suma lo limitados que resultan los ámbitos de validez espacial de aquéllas y la imposibilidad de romper el techo alcanzado, el camino abierto en 1971 parece responder a una decisión imbuída, si no de sabiduría, al menos de un respetable pragmatismo. Emprender una vez más la senda de una unificación global del D.I.Pr. o la revisión de la existente en esas circunstancias, hubiera provocado seguramente nuevos fracasos y nulos resultados concretos. Es por eso que dicha decisión de abocarse a la elaboración de convenios separados, relativos a temas escogidos en virtud de

considerarse urgente o necesaria su regulación, merece ser calificada positivamente.

Puede adelantarse que tal vez uno de los efectos más importantes que está teniendo el proceso de codificación abierto con la CIDIP no debe buscarse en la aplicación directa de los convenios allí elaborados, sino en la -muy limitada, por cierto- "homogenización" indirecta que se va produciendo en las reformas de los sistemas estatales de D.I.Pr. de la región¹¹. Estas, llevadas a cabo en Perú, México, Uruguay y Paraguay, son muy diferentes entre sí si se consideran los sectores abarcados, los ámbitos de aplicación y la extensión y profundidad de cada una. Sin embargo, todas -la paraguaya en menor medida- acusan la influencia de los criterios establecidos para la regulación de las relaciones de tráfico privado externo en la instancia interamericana,

11. Brevemente, la idea ya aparece en R. Herbert, *Del Congreso de Lima a la CIDIP-III. El Derecho internacional privado en América Latina (1878-1984)*, Saarbrücken, 1984, p. 18. En este sentido vid. J. Samtleben, "Los resultados de la labor codificadora de la CIDIP desde la perspectiva europea", *España y la codificación internacional del Derecho internacional privado* (en prensa), para quien la obra de la CIDIP es para el D.I.Pr. de los Estados latinoamericanos "un modelo y un punto de orientación que asegura su constante evolución y modernización y tal vez una cierta armonización en un no remoto futuro".

lo cual implica de algún modo un efecto "modernizador" producido a través de los mismos¹².

Dicha constatación aparece, como es fácilmente comprobable, enmarcada entre dos datos de distinto signo: de un lado, una nota de relatividad que se va mitigando con la andadura de la CIDIP y que surge de la gran importancia concedida a los Tratados de Montevideo y al Código Bustamante en la elaboración de las convenciones interamericanas; de otro, una nota de *universalización* creciente, expresada mediante la significativa influencia de los criterios plasmados en los convenios adoptados en los foros codificadores de vocación universal¹³.

3. Desde otra óptica, se advierte que las ideas desarrolladas por la doctrina acerca de la descodificación del Derecho pueden tener aplicación, en

12. El Proyecto de Código de D.I.Pr. argentino revisado en 1989 se inscribe en la misma línea. Vid. H.D. Piombo, "Proceso de codificación del Derecho internacional privado en la Argentina: recepción legislativa del Código 'Goldschmidt'" (en prensa) y D.P. Fernández Arroyo, "La revisión del 'Proyecto Goldschmidt' de Código de D.I.Pr. para la República Argentina", R.E.D.I., vol. XLII, pp. 714-717.

13. Vid. nuestro trabajo "L'influence des conventions internationales sur l'actualisation du droit international privé: le cas latino-américain", *Permeabilité des ordres juridiques (Rapports présentés à l'occasion du colloque-anniversaire de l'Institut suisse de droit comparé)*, Zurich, 1992, pp. 217-234.

un nivel no restringido a los ordenamientos internos, a la realidad del D.I.Pr. americano¹⁴. De este modo, la CIDIP sería expresión de una nueva etapa de la producción jurídica internacional, caracterizada por el abandono de los grandes textos reguladores de la práctica totalidad del D.I.Pr., en aras de un sentido práctico y realista¹⁵. Sin olvidar las carencias y defectos de los instrumentos convencionales, las cuales pueden darse en mayor o menor medida cualquiera sea el método escogido, la actitud asumida era la única dotada de posibilidades de causar alguna mella sobre el *satus quo*. Frente a un panorama constituido por varios grupos de países -según

14. Así lo entiende A.M. Villela, "L'unification...", *loc. cit.*, pp. 239 y 247-248, expresando que, bajo la cobertura del proceso de codificación parcial y desarrollo progresivo del D.I.Pr. americano, se descubre más que una puesta al día una verdadera descodificación. No obstante, debe recordarse que las codificaciones globales son preservadas y mantienen toda su vigencia.

15. Vid. el Discurso pronunciado por H. Valladao en la sesión inaugural de la CIDIP II (*Actas y documentos, Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-II)*, Washington, D.C., 1980 -en adelante: *Actas y documentos (CIDIP II)*-, vol. I, pp. 101-102), donde califica a la postura adoptada a partir de la CIDIP I como "realista y progresista". Las mismas ideas se reproducen en un artículo periodístico del autor publicado en *El Día de Montevideo*, de 28 de abril de 1979, con el sugestivo título "El réquiem para los Códigos Monumentales", *cit.* por A.M. Villela, *loc. cit.*. Según J. Samtleben, *Derecho...*, *op. cit.*, p. 45, la segunda guerra mundial marcó el fin del tiempo de las grandes codificaciones de D.I.Pr. interamericanas.

consideremos su adscripción a los Tratados de Montevideo de 1889 y/o de 1939/1940, al Código Bustamante, a los dos anteriores, a ninguno o al sistema del *common law*- con escaso interés de llegar a un acuerdo compatibilizando "todo" el D.I.Pr.¹⁶, la opción que contaba con algunas posibilidades de lograr resultados susceptibles de alcanzar vigencia efectiva, era la finalmente triunfante¹⁷.

El mérito de esa postura debe adjudicarse al *grupo de trabajo* designado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la O.E.A., quien supo recoger con fidelidad las tendencias expresadas por la mayoría de los países, en el sentido de procurar la conclusión de convenios que aporten soluciones a problemas actuales antes que preocuparse de "mantener" la

16. Estima J.E. Ritch Jr., *op. cit.*, pp. 419 y 439-440, que la falta de interés (interés aparente) en la codificación, junto con la incapacidad y la persistencia de los órganos jurídicos de la O.E.A. por lograr la aceptación del Código Bustamante, era el principal obstáculo para alcanzar dicha codificación. La actitud de los mencionados órganos es advertida también por M.A. Vieira, "Le droit...", *loc. cit.*, pp. 416-418, quien recomienda una vuelta sobre las ideas de algunos juristas americanos de principios de siglo proponiendo una codificación gradual y progresiva. *Vid.*, asimismo, T.B. de Maekelt, *Normas Generales...*, *op. cit.*, p. 44.

17. Por lo demás, constituye la fórmula generalmente aceptada y la que con mayor seguridad puede conducir a la unificación que se desea. Cf. T.B. de Maekelt, *Conferencia Especializada...*, *op. cit.*, p. 33.

vigencia del Código Bustamante¹⁸. Así quedó plasmado en el Proyecto de Temario para la CIDIP I finalmente aprobado por el Consejo Permanentel¹⁹, en cumplimiento de la Resolución AG/RES. 48. Dicho proyecto incluyó, tal como lo había propuesto el *grupo de trabajo*, el tema relativo a la acción que debía tomarse para el desarrollo de otros temas de D.I.Pr. (tema 11), a fin de que fuera la propia Conferencia la encargada de decidir sobre el particular. De este modo, se trasladó el problema a un cuerpo más especializado, con el evidente propósito de obtener una respuesta idónea para superar la controversia.

18. En el Doc. OEA/Ser.G, CP/doc.237/72 *cit.*, pp. 17-25, puede constatarse la firmeza con que el *grupo de trabajo* defiende sus criterios para determinar el proyecto de temario para lo que sería la CIDIP I, pese a la resistencia del C.J.I.. También en *Documentos...*, *cit.*, pp. 680-687. Con anterioridad a esta polémica J.E. Ritch Jr., *op. cit.*, p. 441-442, ya había exhortado vivamente al C.J.I. y al C.I.J. a abandonar la idea de revisar el Código Bustamante y a considerar la posibilidad de llevar a cabo una codificación del D.I.Pr. "materia por materia".

19. Resolución CP/RES. 83 (89/72) de 20 de diciembre, en *Documentos...*, *cit.*, pp. 729-730.

4. La falta de consenso en este punto²⁰ no impide que el mismo se produzca en lo que hace referencia a la necesidad de poner la regulación internacional del D.I.Pr. americano al corriente de las nuevas pautas marcadas por la cambiante realidad de la región y los avances doctrinales²¹, extremo que constituye evidentemente una importante base de lanzamiento para el nuevo proceso. Este acuerdo se extiende a la idea de llevar a cabo el trabajo valiéndose de una infraestructura específica en el marco de la O.E.A.: la Conferencia especializada (arts. 127 y 128 Carta de la O.E.A.). Es decir, que se elige un cauce para la codificación fuera de los órganos ordinarios de la Organización²². Se establece así, al menos en teoría, una situación de relativa independencia, en cierta medida al margen de los condicionamientos políticos imperantes.

20. Cuestión sobre la que volveremos más adelante, al considerar las materias reguladas por la CIDIP, y que estriba, aparentemente, en diferentes concepciones acerca del contenido de la disciplina.

21. H. Valladao habla de "necesidad imperiosa" de revisar los textos citados y acerca algunos elementos de la evolución de la disciplina a tener en cuenta en esa tarea. *Vid.* "La importancia de la actualización de las normas de D.I.Pr. en las relaciones interamericanas", *Primer Curso C.J.I. -1974-*, pp. 183-204, esp. 195-204.

22. Es otra de las características, esta válida, señaladas por G. Chalita y M.B. Noodt Taquela, *loc. cit.*

Por otra parte, como ha quedado dicho, la mencionada infraestructura conlleva la posibilidad de que juristas, especialistas del D.I.Pr., de todo el continente, se dediquen concretamente a los esfuerzos que comporta la codificación de la disciplina. Estas cuestiones adquieren relevancia desde el momento en que se toma en cuenta que en los órganos de carácter jurídico ordinarios de la O.E.A., tradicionalmente ha habido una mayoría de publicistas²³, internacionalistas o no. Además, la existencia de una abultada y diversificada agenda de trabajo, en contraposición con la escasa duración de las sesiones de trabajo²⁴, convierten al recurso a una Conferencia especializada en la solución más acertada para intentar una labor fructífera; acaso, la única viable.

23. Vid. K. H. Nadelmann, "The Question of Revision...", *loc. cit.*, pp. 389-390.

24. Cf. art. 15 Estatuto vigente en *I.L.M.*, t. 11, 1972, pp. 746 ss., donde queda establecido para el C.J.I. un período de sesiones de tres meses por año, dividido en dos etapas.

B) *Las cuestiones técnicas para el funcionamiento de la Conferencia*

5. Existe, no obstante lo expresado en el epígrafe anterior, un condicionamiento objetivo respecto a la continuidad del esfuerzo impulsado por la CIDIP. Se trata de

su carácter de organismo no permanente²⁵, cuya reunión y funcionamiento depende de las convocatorias que oportunamente efectúa la Asamblea General de la O.E.A. a instancias de la propia CIDIP. En la última sesión de cada reunión de la Conferencia, se emite una recomendación dirigida a la Asamblea a fin de que ésta convoque la siguiente, proponiéndole los temas a tratar, que posteriormente alcanzan un mayor grado de concreción

25. Sobre este punto llamamos la atención en nuestra ponencia en colaboración con J.R. Albornoz, al IX Congreso de la Asociación Argentina de Derecho Internacional (Tucumán, 1987), "La protección de menores en el Derecho internacional privado", referida a las pautas que a nuestro juicio debía seguir la CIDIP en este tema, tal cual lo había expresado la Res. VI de la CIDIP III (*Acta final*, p. 15). En las *Jornadas sobre D.I.Pr. convencional...*, cit., insistimos sobre el mismo mediante la comunicación "La participación de España en la CIDIP. Actualidad y perspectivas", mencionándolo como una diferencia sustancial respecto a la Conferencia de La Haya sobre D.I.Pr.. Para J. Samtleben, esta falta de continuidad provoca "alguna inestabilidad y casualidad que se nota especialmente en la selección y determinación del temario". Vid. "Los resultados...", loc. cit..

con el proyecto de temario que elabora el Consejo Permanente. La solución al problema de discontinuidad que esta situación plantea, se brinda en parte en virtud del accionar de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la O.E.A., cuyo antecedente mediato fue el Departamento de Asuntos Jurídicos que actuaba como secretaría del C.I.J. y del C.J.I.²⁶. La presencia en la Subsecretaría y en su Oficina de codificación y desarrollo del Derecho internacional de prestigiosos juristas, especialmente interesados en el progreso del D.I.Pr. interamericano, ha posibilitado que la ausencia de una oficina permanente de la Conferencia no se echase tanto en falta²⁷.

Puede afirmarse que esta circunstancia constituye una diferencia sustancial, tal vez la más importante, con

26. Convertido en 1979 en Consultoría Jurídica, alcanza el rango actual de Subsecretaría en 1980, bajo la órbita de la Secretaría General (Vid. arts. 112 ss.. Carta de la O.E.A.). Cf. J. Samtleben, "Die Interamerikanischen Spezialkonferenzen für Internationales Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 44, 1980, pp. 310-311.

27. Baste para corroborar nuestra afirmación y la importancia alcanzada por la labor de la Subsecretaría, acudir a las Recomendaciones XIV y XV aprobadas por la CIDIP III el 24 de mayo de 1984, en las cuales se pone de relieve la calidad de dicha tarea, aludiéndose en la última a quien ejerciera brillantemente durante varios años la titularidad de la misma, T.B. de Maekelt. Más recientemente, ha resultado fructífera y encomiable la labor desempeñada por D. Opertti Badán desde su posición de Embajador de su país ante la O.E.A..

la Conferencia de La Haya sobre D.I.Pr.²⁸. Hasta tal punto es esto así, que la historia de ésta bien puede dividirse en antes y después de la creación, en 1951, de su *Bureau permanent*. No es que a partir de la fecha indicada todas las deficiencias que puedan achacarse a la Conferencia hayan desaparecido, mas es indudable que sus trabajos ganaron en coherencia y en continuidad²⁹. Al *Bureau* corresponde a partir de la institucionalización de la Conferencia³⁰, la organización y la preparación de las

28. Cf. D. Opertti Badán, "La codificación del Derecho internacional privado: análisis comparativo de la labor realizada por la Conferencia de Derecho internacional privado de La Haya y por la CIDIP", *España y la codificación internacional del Derecho internacional privado*, Madrid, Centro de Estudios Superiores, Sociales y Jurídicos Ramón Carande (en prensa).

29. Ni que decir tiene que también aquí el peso de los nombres propios ha resultado decisivo. Vid. G.A.L. Droz, "La Conférence de La Haye de droit international privé en 1980: évolution et perspectives", en G.A.L. Droz, M. Pelichet y A. Dyer, "La Conférence de La Haye de droit international privé après la création de son Bureau permanent: bilan et perspectives", *R. des C.*, t. 168 (1980-III), pp. 123-268, esp. 127-157. La misma valoración realiza P. Graveson, señalando que la implementación del estatuto de la Conferencia quedó asegurado con el establecimiento del *Bureau* y la designación de M.H. van Hoogstraten como su Secretario General. Vid. "Problems of the Hague Conference of Private International Law", *Le droit... (...) Etudes en l'honneur de Roberto Ago*, op. cit., pp. 125-138, esp. 127.

30. Vid. la importancia de este dato en la clasificación en etapas que hace H.U. Jessurun d'Oliveira, "Universalisme ...", loc. cit., p. 384.

sesiones de la Conferencia y de las Comisiones especiales, aunque quedan subsistentes las atribuciones reconocidas desde 1897 a la Comisión de Estado de los Países Bajos en el sentido de decidir sobre el temario de las reuniones previa consulta a los Estados miembros³¹.

En el ámbito de la CIDIP, la carencia de un órgano permanente provoca un complejo entramado de esfuerzos muchas veces superpuestos, provenientes de los más diversos órganos de la O.E.A. Así, la Secretaría General y sus dependencias, de un lado, el Consejo Permanente, de otro, el C.J.I., en tercer lugar, y órganos tales como el Instituto Interamericano del Niño o el Instituto para la Integración de América Latina, se reparten de manera no siempre armónica las tareas tendentes a la preparación de cada Conferencia. A estos deben sumarse diversos grupos que son creados para desempeñar alguna función específica (grupos *ad hoc*) y las reuniones de expertos sobre materias incluidas en el proyecto de temario respectivo³². La situación expuesta obliga a un

31. Cf. G. Parra-Aranguren, "La Conferencia de La Haya sobre Derecho internacional privado", *Rev. Fac. Der. Univ. Cat. A. Bello*, núm. 37, 1987, pp. 169-298, esp. 201-202.

32. La dispersión de esfuerzos se constata en la preparación de cada reunión de la CIDIP. *Vid.*, en general, J. Samtleben, "Neue interamerikanische Konventionen zum Internationalen Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 56, 1992, pp. 62-64, y como fiel ejemplo, el relato

replanteamiento de la cuestión, aún cuando no se ignoren las trabas, fundamentalmente burocráticas y económicas, que se oponen a la constitución de una oficina específica destinada a la codificación del D.I.Pr.³³. Para que la misma alcance un satisfactorio grado de eficacia, se haría indispensable dotarla de cierta autonomía y de un presupuesto acorde a sus finalidades. En última instancia, las posibilidades de que este planteamiento prospere dependerán de la importancia que la Organización conceda a la codificación del D.I.Pr. a realizar en su seno, extremo que no aparece como muy simple de cuantificar.

6. Otra diferencia importante de orden técnico viene dada por la variación de métodos que ha experimentado la unificación en la Conferencia de La Haya, a diferencia de la CIDIP que sólo ha utilizado uno, manteniéndolo a lo largo de las sucesivas reuniones. Lo tradicional, en el

de los antecedentes de la CIDIP IV efectuado por G. Parra-Aranguren, "La Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-IV, Montevideo, 9-15 de julio, 1989)", *Rev. Fac. Cs. Jcas. y Pol.*, núm. 75, 1990, esp. pp. 102-128. También R. Herbert, *op. cit.*, 15.

33. Como indica D. Opertti Badán, "La codificación ...", *loc. cit.*, la mala situación económica también incide sobre la participación activa de los Estados de la región en una "silenciosa tarea codificadora, casi siempre ausente de resonancia política".

marco del proceso evolutivo que ha sufrido el método de unificación en aquélla, ha sido el recurso a las convenciones multilaterales, camino elegido exclusivamente por la CIDIP. Sin embargo, la Conferencia de La Haya ha ensayado otros mecanismos, tales como el poco exitoso de los convenios modelos bilaterales y el introducido en 1966, conocido como "bilateralización"³⁴.

En este caso, la experiencia de La Haya ha servido a los Estados americanos para decidirse por un camino no demasiado rápido, plagado de inconvenientes y limitaciones, pero relativamente seguro para cumplir los objetivos fijados por la codificación. La lentitud no sólo recae sobre las tareas preparatorias y las negociaciones previas a la celebración de cada Conferencia sino, especialmente, sobre todo lo atinente al proceso de incorporación de los Estados a los diferentes convenios.

34. Para una explicación sucinta de esta evolución, *vid.* R. Viñas Farré, *op. cit.*, pp. 13-16. En la misma obra se encuentra una explicación detallada de cada uno de estos métodos y sus resultados. *Vid.* también: G.A.L. Droz, "La Conférence de La Haye de droit international privé et les méthodes d'unification du droit: traités internationaux ou lois modèles?", *Rev. int. dr. comp.*, vol. 13, 1961, pp. 507-521; A. Marín López, "La Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado y el método de las leyes modelo", *R.D.E.A.*, vol. 14, 1969, pp. 33-48; W. von Steiger, "Konventionen oder Modellgesetze?", *Ann. suisse dr. int.*, vol. 17, 1970, pp. 39 ss.; H.U. Jessurun d'Oliveira, "Universalisme...", *loc. cit.*, pp. 363 ss..

Esta afirmación no tiene nada de caprichosa si se piensa, por ejemplo, que tres de los cuatro textos convencionales (tres convenios y un protocolo adicional) celebrados en la CIDIP III de 1984 tan sólo han recibido la ratificación mexicana cuando han pasado más de ocho años desde su aprobación. Ni siquiera los países cuyos representantes más han trabajado para impulsar algunos de los instrumentos aprobados en La Paz, han demostrado particular interés o prisa en cumplir con los trámites correspondientes para su incorporación. Por el contrario, entre los primeros convenios hay varios que han alcanzado una aceptación muy satisfactoria.

La elección del método de las convenciones de tipo diplomático³⁵, plantea además de todos los problemas de fondo inherentes a la unificación del Derecho por esta vía, significativas cuestiones de orden puramente técnico. En particular llamaremos la atención sobre algunos elementos, unas veces relativos a la faceta iuspublicista de la codificación internacional y otras directamente relacionados con el D.I.Pr.. En efecto, es dable identificar en todos los convenios concluidos la repetición de una serie de cláusulas tipo o cláusulas

35. *Vid.* A.M. Villela, "L'unification...", *loc. cit.*, p. 234.

comunes³⁶. Entre ellas encontramos la relativa al orden público, la llamada cláusula plurilegislativa, las diplomáticas y, en varias convenciones, la cláusula de compatibilidad con otros instrumentos bi o multilaterales.

2. LAS CLAUSULAS TIPO EN LOS CONVENIOS DE LA CIDIP

7. Haremos mención, en primer lugar, a la omnipresente cláusula de orden público cuya redacción proviene de los extensos debates producidos en las dos comisiones que se dividieron el trabajo de la primera Conferencia³⁷. La fórmula utilizada se inscribe en una línea algo superada por la doctrina del D.I.Pr. al no brindar posibilidades para atenuar el efecto del orden público y al no distinguir entre el orden público

36. T.B. de Maekelt habla de "cláusulas comunes" a todas las convenciones de la CIDIP I en *Conferencia Especializada...*, op. cit., pp. 41-45.

37. Las discusiones pueden verse en *Actas y documentos (CIDIP I)*, vol. II, pp. 160-167 y 411-426. G. Parra-Aranguren se refiere a ellas como "irritantes debates", repletos de "excesos emotivos". Vid. "Las seis Convenciones suscritas en Panamá (1975) sobre Derecho Internacional Privado", *Codificación...*, op. cit., p. 342.

internacional y su homólogo interno³⁸. Por lo general, se establece como facultad del Estado frente a la aplicación de leyes extranjeras "manifiestamente contrarias" a sus principios de orden público³⁹. Esto significa que se adopta una concepción de orden público *a posteriori*, dato importante si se tiene en cuenta el peso que la concepción apriorística tiene en el D.I.Pr. estatal y convencional americano⁴⁰. El propio art. 5 de la Convención interamericana sobre normas generales de Derecho internacional privado (CIDIP II), emplea esos términos:

"La ley declarada aplicable por una convención de Derecho Internacional Privado podrá no ser aplicada en el territorio del Estado Parte que la considere manifiestamente contraria a los principios de su orden público".

38. *Vid.*, por todos, J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, pp. 482 ss.. Sin embargo, el tratamiento no se diferencia del alcanzado en la Conferencia de La Haya, pese a los numerosos debates sobre el particular. *Vid.* M.H. van Hoogstraten, "La codificación par traités en droit international privé dans le cadre de la Conférence de La Haye", *R. des C.*, t. 122 (1967-III), pp. 412-418.

39. Con la sola excepción de la Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional (CIDIP I), que omite el adverbio "manifiestamente" en su art. 5.2º.b).

40. El tratamiento que recibe el orden público en algunos países americanos, así como sus influencias, se hallan claramente expuestos en T.B. de Maekelt, *Normas Generales....*, *op. cit.*, pp. 116-129.

La circunstancia de que no se hable de ley "extranjera" lleva a algún autor a pensar que la cláusula puede también dirigirse contra una disposición de la *lex fori* en razón de estar ésta formulada concretamente para casos internos o porque su aplicación es buscada por las partes mediante una manipulación de los factores de conexión⁴¹. Dejando de lado que no es dable imaginar en la práctica que un juez deje de aplicar su propia ley cuando a ella lo remite una norma indirecta, los supuestos descriptos no parecen adecuados. El primero, por la complicada delimitación que exige en la operatoria normal del método de localización, y el segundo, por estar más cerca de otras figuras que del orden público.

Queda claro que, aún con una formulación muy similar, los principios de orden público internacional juegan un papel muy diferente según el tipo de convenio en el cual se inserten. En los que se encargan de regular el Derecho aplicable a determinada institución, la

41. Vid. P.H. Neuhaus, "Las convenciones interamericanas sobre D.I.Pr. vistas por un europeo", *An. Jur. Interam.* 1981, pp. 165-182, esp. 175. El mismo autor llama la atención sobre la inexactitud que entraña plantear la posible violación del orden público por una ley extranjera (como aparece en los art. 30 C.c. italiano y 12.3 C.c. español), en lugar de referirse a la aplicación de esa ley extranjera. *Op. cit.*, p. 174.

función de la cláusula es la de excluir la aplicación de la ley material extranjera llamada por el propio convenio, como lo indica la norma antes transcripta. En los que fijan su fundamento en la cooperación internacional considerada en sentido amplio⁴², la cláusula de orden público otorga la posibilidad a las autoridades del Estado requerido de excusarse de prestar la colaboración solicitada. Es el caso, por ejemplo, del art. 17 de la Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias (CIDIP I) que dispone:

"El Estado requerido podrá rehusar el cumplimiento de un exhorto o carta rogatoria cuando sea manifiestamente contrario a su orden público".

Una consideración particular de la cuestión demuestra la Convención interamericana sobre restitución internacional de menores (CIDIP IV). La referencia al orden público internacional del Estado requerido

42. Se incluyen aquí las convenciones reguladoras de la Asistencia judicial internacional, como las referidas a exhortos o cartas rogatorias, recepción de pruebas en el extranjero, régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero (todas éstas de la CIDIP I), prueba e información acerca del Derecho extranjero y cumplimiento de medidas cautelares (éstas correspondientes a la CIDIP II); la relativa al reconocimiento de decisiones judiciales y laudos arbitrales concluida en la CIDIP II; y las de carácter mixto o *sui generis* celebradas por la CIDIP IV y consagradas a las obligaciones alimentarias y a la restitución internacional de menores.

contenida en su art. 25, presenta una redacción más específica que la tradicional fórmula genérica incluida en el proyecto preparado por el C.J.I. para esa ocasión. El parámetro utilizado en ella consiste en "los principios fundamentales ... consagrados en instrumentos de carácter universal y regional sobre derechos humanos y del niño", frente a los cuales la restitución del menor deberá aparecer como "manifiestamente violatoria" para que la excepción prospere⁴³. También es singular la regulación que realiza la Convención interamericana sobre prueba e información acerca del Derecho extranjero (CIDIP II) en su art. 10:

"Los Estados Partes no estarán obligados a responder las consultas de otro Estado Parte cuando los intereses de dichos Estados estuvieren afectados por la cuestión que diere origen a la petición de información o cuando la respuesta pudiere afectar su seguridad o soberanía".

Por último, en la Convención interamericana sobre domicilio de las personas físicas en el Derecho

43. La mencionada especificidad establece un límite a la posibilidad de las autoridades requeridas de frustrar una restitución basándose en interpretaciones particularistas (Vid. H. Batiffol, "La quatorzième...", *loc. cit.*, p. 234). No obstante, entre el orden público y las excepciones previstas en el art. 11 de la misma se dejan muchas vías de escape expeditas para lograr su no aplicación. Cf. D.P. Fernández Arroyo, "Convención interamericana ...", *loc. cit.*, p. 167.

internacional privado y en cualquier convenio que se ocupe de unificar normas materiales de D.I.Pr. , la cláusula de orden público no tiene sentido alguno. En estos casos las disposiciones unificadas son conocidas por los Estados al momento de incorporarse a la convención y no existe, por el propio carácter de la misma, posibilidad alguna de una eventual aplicación de reglas de Derecho material extranjero incompatibles con el orden público⁴⁴.

Llegados a este punto puede sostenerse que es muy difícil que la redacción acordada en la CIDIP I reciba alguna variación, sobre todo a partir de la consagración del art. 5 de la Convención sobre normas generales. Esta afirmación adquiere mayor solidez si se revisa el modo en que se adoptan dichas cláusulas en las sucesivas reuniones de la Conferencia⁴⁵. La escasez de tiempo empleado en ellas y lo abultado de la agenda, conspiran directamente contra cualquier replanteamiento de este

44. Vid. G. Parra-Aranguren, "Las seis Convenciones ...", *op. cit.*, pp. 342-343.

45. Toda discusión sobre el particular se da por zanjada, remitiéndose a los debates realizados en la CIDIP I. Vid., a modo de ejemplo, el frustrado intento de reabrir el debate sobre este punto en la CIDIP IV por parte del delegado chileno A. León Steffen, en G. Parra-Aranguren, "La Cuarta Conferencia ...", *loc. cit.*, pp. 181-182.

problema. Las discusiones se nuclean lógicamente alrededor de las cuestiones propias de cada convenio, mientras que las cláusulas tipo quedan fuera del debate⁴⁶. La única posibilidad de que se modifique, si se estima conveniente, alguna de ellas, estriba en el trabajo que pueda desarrollar alguno de los órganos de la O.E.A. en el interregno que se produce entre dos reuniones. Cualquier propuesta así conseguida habría que presentarla en la CIDIP suficientemente "cocinada" para obtener su aprobación.

8. La cláusula plurilegislativa o cláusula federal permite a los Estados parte donde existan dos o más unidades territoriales en las cuales rijan diferentes regulaciones vigentes sobre la materia objeto del convenio en cuestión, a efectuar una declaración modificable por otra ulterior, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, respecto a la o las unidades

46. Cogiendo un ejemplo al azar, el *Informe del relator de la Comisión I sobre el tema Secuestro y Restitución de Menores*, Documento OEA/Ser.K/XXI.4, CIDIP IV/doc. 39/89, de 14 de julio, puede leerse, con una curiosa redacción, en su p. 13: "Siguen disposiciones sobre cláusula federal, concordante o restricciones vis a vis otras convenciones (bilaterales o multilaterales) firmados en esta materia por los Estados Contratantes, vigencia, firma, ratificación, reservas, depósito del instrumento en la Secretaría General de la OEA, etc.".

territoriales donde se aplicará dicho convenio. Tal cláusula halla su fundamento en el art. 29 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969 que establece:

"Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo".

Las declaraciones modificatorias podrían, en principio, extender o restringir el ámbito espacial de vigencia de la Convención, produciéndose en este último caso un supuesto de denuncia parcial habitualmente no prevista. La inclusión de esta cláusula en todos los instrumentos aprobados en la CIDIP I tiene su origen en la propuesta hecha por el observador canadiense⁴⁷ y se basa en su similar que ya venía siendo utilizada en los

47. Téngase en cuenta que Canadá se incorporó a la O.E.A. después de celebrada la CIDIP IV y que no se ha adherido a ningún convenio de la CIDIP. Las discusiones en torno a esta cuestión y la postura del representante canadiense pueden consultarse en *Actas y documentos (CIDIP I)*, vol. I, pp. 280-281 y 343-344. Precisamente Canadá es el ejemplo que utiliza P. Reuter en *op. cit.*, pp. 106-107, para justificar la cláusula, señalando su tendencia a desaparecer en la práctica de ciertas organizaciones. *Vid.* Choquette y St. Martin, "Treaty Making by a Federal State. The Canadian Experience", *Séptimo Curso C.J.I. -1980-*, pp. 348-390 y, más concretamente, T.B. Smith, "The Federal State Clause in Private International Law Conventions: the Canadian Experience", *International Uniform Law in Practice*, Roma-Nueva York, 1988, pp. 125-130.

convenios de La Haya⁴⁸. A partir de Panamá, se fue repitiendo en cada uno de los textos de la CIDIP. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en éstos la norma se plantea como una delimitación del ámbito espacial concreto afectado por cada convenio, mientras que en la Conferencia de La Haya también adoptan, con distintas modalidades, fórmulas de remisión a un sistema plurilegislativo (directas, indirectas o mixtas)⁴⁹.

9. Cuando se habla de cláusulas diplomáticas, se *finals relacion a los propios tratados* está haciendo referencia estrictamente a todas aquellas disposiciones relativas a los convenios en cuanto tratados internacionales, es decir, las que regulan la incorporación de los Estados, la vigencia temporal, la posibilidad de efectuar reservas y las formalidades inherentes a todas estas cuestiones⁵⁰. Concretamente, en el tema que nos ocupa, se está hablando de la regulación

48. Sobre el problema en particular es obligado referirse a la tesis de doctorado de L. Santos Arnau, *Les clàusules plurilegislatives dels convenis de la Conferència de Dret internacional privat de La Haia*, Barcelona, 1987.

49. Vid. S. Sánchez Lorenzo, "Artículo 12.5º", *Comentarios al Código civil* (en prensa).

50. En cierto sentido, la cláusula plurilegislativa y la referida a la compatibilidad entre convenios podrían incluirse en esta lista. Sin embargo, le otorgamos un tratamiento separado teniendo en cuenta su especialidad.

de la firma, de la ratificación por los Estados miembros de la O.E.A., de la adhesión de cualquier otro Estado, de las modalidades para la entrada en vigor y la denuncia, de las reservas y, por último, del depósito en la Secretaría General de la O.E.A. del texto original y de los instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como también de las notificaciones de la Secretaría a los Estados miembros de la O.E.A. y a los Estados parte de la convención que corresponda.

En el primer aspecto, el de las modalidades de incorporación a los convenios, se demuestra una actitud totalmente aperturista hacia los países que no son miembros de la O.E.A., al disponerse que aquéllos quedan abiertos a la adhesión de cualquiera de éstos, sin señalar ninguna clase de restricciones. Creemos importante subrayar esta postura por varias razones. En primer término, se marca de este modo la superación de las actitudes contradictorias y desconfiadas respecto de terceros Estados manifestadas un siglo atrás con ocasión del Primer Congreso Sudamericano. En segundo lugar, se brinda la oportunidad concreta a los Estados no americanos de vincularse mediante las convenciones de la CIDIP a los países del continente. Esta cuestión cobra especial relieve para aquellos Estados que mantienen un

importante caudal de relaciones de tráfico privado externo con países americanos⁵¹, aunque cuando esas relaciones aparecen focalizadas sobre uno o más países concretos, el camino más seguro estará dado por el recurso al convenio bilateral⁵². De cualquier modo, está ampliamente demostrado que ambas vías no son incompatibles y así parecen entenderlo las autoridades españolas.

Por último, y esto debe tenerse muy en cuenta, cabe indicar que la fórmula adoptada en la CIDIP, a diferencia de lo que suele ocurrir en los convenios concluidos en otras sedes internacionales, no requiere la aceptación expresa de las adhesiones por parte de los Estados parte de cada convención, ni otorga derecho a éstos para

51. España ha tomado esta actitud, que tal vez pudiera extenderse a otros convenios basados en la cooperación internacional. Lo mismo han sugerido respecto de Alemania, J. Samtleben, "Die Interamenikanischen...", *loc. cit.*, p. 307 y P.H. Neuhaus, "Las convenciones interamericanas...", *loc. cit.*, pp. 181-182, sin ningún éxito.

52. Un ejemplo muy claro en este sentido, desde el punto de vista de un país europeo, lo constituye el Convenio entre Italia y Argentina sobre asistencia judicial y sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias en materia civil, hecho en Roma el 9 de diciembre de 1987. Más recientemente ha entrado en vigor la Convención de cooperación judicial entre la República Argentina y la República Francesa, hecha en París el 2 de julio de 1991.

oponerse a dichas adhesiones, ni prevé la posterior presentación de una reserva⁵³. Muchos convenios elaborados en la Conferencia de La Haya, por ejemplo, presentan un carácter semi-cerrado, restringiendo en ámbito espacial primario de los mismos a los Estados miembros de la Conferencia, mientras que los demás Estados que desean adherirse, se ven sometidos a un paso posterior, cual es la aceptación de las adhesiones o la falta de objeción de parte de aquéllos. Esta condición se ha esgrimido alguna vez como argumento de peso para justificar la celebración de convenios sobre las mismas materias en la CIDIP⁵⁴.

Todos los convenios aprobados por la CIDIP entran en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya

53. Estos elementos son resaltados por P.H. Neuhaus, *loc. cit.*.

54. Es la opinión manifestada por D. Opertti Badán respecto al Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, de 25 de octubre de 1980. Señala este autor que el mero hecho de que la gran mayoría de los Estados americanos deban someterse a la "condición adicional" de la aceptación de sus eventuales adhesiones, justifica por sí mismo "el esfuerzo de codificación regional... en lo que hace a la materia de pronta restitución de menores". *Vid.* "Restitución internacional de menores. Aspectos civiles", Montevideo, 1989, p. 48. Sin embargo M. Aguilar Benítez de Lugo, "La cooperación internacional como objetivo del Derecho internacional privado", *Cursos de Derecho internacional de Vitoria -Gasteiz 1991*, pp. 188-189, cree advertir una "tendencia favorable a la conclusión de convenios abiertos" en el seno de la Conferencia de La Haya.

sido depositado el segundo instrumento de ratificación. Para que los países que ratifiquen o adhieran posteriormente queden vinculados a un convenio, se prevé el mismo plazo contado a partir de la fecha de depósito del respectivo instrumento. La vigencia de los convenios es indefinida, pero cualquier Estado parte puede denunciarlo, acto que surtirá efectos para éste una vez transcurrido un año del depósito de la denuncia. El depósito de todos los instrumentos, incluidos naturalmente los textos originales de cada convención interamericana redactados en los cuatro idiomas oficiales de la O.E.A.⁵⁵, se efectúa en la Secretaría General de la Organización, la que también se encarga de notificar a los Estados miembros y a los vinculados por los convenios sobre todos los avatares de los mismos: "las firmas, los depósitos de los instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere".

10. Precisamente un párrafo aparte merece la cláusula que faculta a los Estados que se incorporan a un convenio de la CIDIP a efectuar reservas respecto de las disposiciones contenidas en los convenios. Entre los países de América el tema es bastante "sensible", ya que

55. Español, francés, inglés y portugués.

trae a la memoria el recuerdo de las reservas generales que hicieron prácticamente inoperativo el Código Bustamante para varios países⁵⁶. Sin embargo, llamativamente, en la CIDIP I la regulación de las reservas se limita a una referencia indirecta en la obligación de notificar que incumbe a la Secretaría General y que citáramos en el párrafo anterior⁵⁷. A partir de la CIDIP II, además de la referencia indirecta que seguirá presente en el último artículo de cada convenio de la CIDIP, se incluye una cláusula expresa, basada en la propuesta hecha por el C.J.I. en los proyectos de convención por él preparados para dicha reunión. La norma sugerida estaba redactada en los siguientes términos:

"Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al momento de firmarla, ratificarla, aprobarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre una o más disposiciones específicas y de que (*sic*) no sea

56. En el ámbito de la Conferencia de La Haya, *vid.* G.A.L. Droz, "Las réserves et les facultés dans les Conventions de La Haye de droit international privé", *Rev. crit. dr. int. pr.*, 1969, pp. 386-389.

57. La única excepción aparece en el art. 2.b) de la Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, que permite concretamente excluir del ámbito material de la Convención mediante reserva expresa, a los exhortos o cartas rogatorias que tengan por objeto la recepción y obtención de pruebas e informes en el extranjero.

incompatible con el objeto y fin de la Convención"⁵⁸.

La cláusula expresa se incluyó así en todos los convenios aprobados en Montevideo, salvo en el Protocolo adicional a la Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias. La única modificación operada sobre el texto propuesto por el C.J.I. fue la supresión de la palabra "aprobarla". No obstante, se mantiene la inoperante posibilidad de efectuar reservas al momento de firmar la Convención⁵⁹. Los dos límites que se consagran a la facultad genérica de formular reservas, uno rígido y el otro flexible, pueden ser vistos lícitamente en el ámbito americano como una manifestación de lo que hemos llamado "síndrome de Bustamante"⁶⁰.

58. Doc. OEA/Ser. K/XXI.2, CIDIP-II/8. La preocupación por el tema de las reservas es de larga data en el sistema interamericano. El C.I.J. en su cuarta reunión (1959) había aprobado un proyecto de normas sobre reservas a los tratados multilaterales, recomendando que fuera estudiado por la Undécima Conferencia Panamericana, que no llegó a celebrarse. El tema estuvo enterrado hasta que fue reflatado en los años setenta. Concretamente en 1973, la Asamblea General aprobó las "Normas sobre Reservas a los Tratados Multilaterales Interamericanos" (AG/RES.102 (III-0/73)). Vid. An. Jur. Interam. 1958-1979, pp. 241-242.

59. Ambas "posibilidades" provienen, seguramente, de la definición de reserva consagrada en el art. 2.d) de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

60. Es decir que, en aras de establecer un marco más favorable para las incorporaciones, se permite

La CIDIP III mantuvo la cláusula en tres de los cuatro textos que aprobó, excluyéndola de la Convención que regula la competencia judicial internacional. De las dos limitaciones que hemos señalado en la redacción de la cláusula insertada en los textos de la CIDIP II, sólo se mantuvo la rígida, sin que pueda adivinarse el motivo. Las tres convenciones firmadas en la CIDIP IV, en cambio, vuelven a incorporar ambas limitaciones. Es indudable que la existencia de una cláusula expresa reguladora de las reservas que se pueden oponer a un convenio, se basa en la búsqueda de un mayor número de incorporaciones. De este modo, un Estado que adopte la decisión política de vincularse a un convenio, no se verá frenado por la presencia en el texto de alguna o varias disposiciones que considere incompatibles con normas de su ordenamiento o inaceptables desde el punto de vista de sus intereses. Para que esta finalidad práctica se cumpla, es indispensable que las reservas se refieran concretamente a esas disposiciones⁶¹.

expresamente la formulación de reservas pero siempre que no sean de carácter general. *Vid.*, A.M. Villela, "L'unification...", *loc. cit.*, p. 251, T.B. de Maekelt, *Normas Generales...*, *op. cit.*, p. 50⁹⁵ y J. Samtleben, "Neue interamerikanische...", *loc. cit.*, pp. 74-75. En cambio, la Conferencia de La Haya suele incluir en los convenios que aprueba, disposiciones específicas relativas a las normas concretas que pueden ser objeto de reserva.

II. Alcance de la CIDIP en el panorama mundial

1. LA MODIFICACION DE LAS COORDENADAS DE POLITICA LEGISLATIVA

A) *El peso de la tradición*

11. Cuando hablamos del "peso" de la tradición que impera en el D.I.Pr. americano de fuente convencional, lo hacemos con la intención de poner énfasis en la dificultad que constituye para avanzar por el camino elegido en los últimos veinte años por los Estados miembros de la O.E.A., la vigencia y el enraizamiento en varios de ellos de los grandes cuerpos de normas de D.I.Pr.. Se ha dicho en este sentido, con meridiano acierto, que resulta mucho más fácil emprender la tarea

61. La propia Convención de Viena habla en el art. antes citado de "ciertas disposiciones". Cf. sobre el particular, T.B. de Maekelt, *Conferencia Especializada...*, op. cit., p. 103. Para el concepto de reserva, sus modalidades y los efectos que produce, vid. J.D. González Campos, L.I. Sánchez Rodríguez y M^a.P. Andrés Sáenz de Santamaría, *Curso de Derecho internacional público*, vol. I, Madrid, 1990, pp. 159-166 (bibliografía en pp. 179-180). Desde una perspectiva nacional, es muy interesante el trabajo de J. Quel López, *Las reservas a los tratados internacionales (Un examen de la práctica española)*, Bilbao, 1991.

de unificar y codificar una rama del Derecho cuando nada se ha construido todavía que intentar la conciliación de divergencias profundas o armonizar sistemas jurídicos en oposición flagrante⁶².

El apego a la propia regulación autónoma de D.I.Pr. no ha pesado tanto en algunos países como el interés en mantener o, en el mejor de los casos, extender los criterios y las soluciones de los instrumentos multilaterales americanos. A lo largo de las sucesivas reuniones de la Conferencia, especialmente en las primeras, se ha podido comprobar la validez de estas afirmaciones, toda vez que el obstáculo mencionado ha salido a la luz en repetidas ocasiones, ora frenando proyectos en estudio o elaboración, ora imponiendo actitudes o concreciones poco fructíferas y difícilmente justificables. De los varios ejemplos que dan apoyo a lo que aquí se mantiene, es particularmente significativo el que se refiere a la extraña postura adoptada respecto a la regulación del cheque (CIDIP I y II)⁶³.

62. Vid. J.J. Caicedo Castilla, "La Segunda Conferencia Especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado (CIDIP II)", *Cuarto Curso C.J.I. - 1977-*, pp. 371-395, y A.M. Villela, "L'unification...", *loc. cit.*, pp. 256 ss.

63. Otro ejemplo podría ser el reiterado fracaso en el tratamiento del Proyecto de Convención sobre personalidad y capacidad en el D.I.Pr. propuesto por el C.J.I. a la CIDIP II (vid. G. Chalita y M.B. Noodt

En dicho caso llama la atención la obcecación por alcanzar una "Convención transitoria" calcada del Tratado de Derecho comercial terrestre internacional de Montevideo. La cuestión se desarrolló como sigue. El tema 4 del proyecto de temario de la CIDIP I aprobado por el Consejo Permanente, que había sido objeto de uno de los proyectos de convención preparado por el C.J.I., trataba conjuntamente los títulos valores mencionados en el título y los cheques. Pero al iniciarse el estudio del proyecto dentro del grupo de trabajo designado por la Comisión Primera, se tomó la decisión de regular las cuestiones atinentes a los últimos en forma separada⁶⁴.

Taquela, *op. cit.*, p. 44, y J.L. Siqueiros, "Resumen de los resultados obtenidos en la Conferencia Interamericana de Derecho internacional privado (CIDIP-II) celebrada en Montevideo, Uruguay, del 23 de abril al 8 de mayo de 1979", *Cooperación interamericana...*, *op. cit.*, pp. 679-687, esp. 681) y a la CIDIP III (vid. G. Parra-Aranguren, *La Tercera Conferencia Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP III, La Paz 1984)*, Separata de la *Rev. Fac. Der. Univ. Cat. A. Bello*, núms. 33-34, 1984-1985, pp. 60-65. La influencia de los viejos textos también es fácilmente comprobable en los convenios de la CIDIP sobre domicilio, personas jurídicas y sociedades comerciales.

64. La decisión se originó en una propuesta de la delegación mexicana basada en la necesidad de un estudio más detenido y profundo, habida cuenta de la gran trascendencia que tiene el cheque en la operatoria mercantil internacional americana. Actas y documentos (CIDIP I), vol. I, pp. 135 ss.. Sobre la relación del texto adoptado sobre letra de cambio con las normas del Código Bustamante y los Tratados de Montevideo de 1989 y 1940, y referencias de Derecho autónomo americano, vid. J. Samtleben, "Die Interamerikanischen...", loc. cit.,

Es así como la Convención sobre cheques presenta una deliberada nota de provisionalidad y refleja uno de los puntos más débiles de toda la historia de la CIDIP.

Teniendo en cuenta la existencia de consenso sobre la necesidad de brindar un tratamiento separado a los cheques con la previa realización de estudios más detenidos sobre la materia, los delegados reunidos en Panamá asistieron a una discusión planteada en torno a dos alternativas. De un lado, la promovida por México, que aparecía como más sensata, y que proponía diferir la elaboración de un convenio sobre cheques hasta que el C.J.I. con la ayuda de los Estados miembros de la O.E.A. hubiera llevado a cabo los trabajos acordes con la importancia que tiene el cheque en la actividad mercantil que se desarrolla en el continente. De otro, la que impulsada por Uruguay y apoyada especialmente por Venezuela y Chile resultó aceptada, y que sostenía la conveniencia de pergeñar un texto provisorio destinado a ser reemplazado por otro dotado de un carácter de mayor

pp. 262-263. Consultar también W. Frisch Philipp, "Die Interamerikanischen Abkommen von Panama über Wechsel, Schecks und Fakturen", *Recht der Internationalen Wirtschaft. Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters*, 1979, pp. 520-526, esp. 523-524. Sobre el tratamiento de la cuestión en el Código Bustamante, vid. J.A. Cordido Freites, *Les confits de lois en matière de lettre de change dans la Convention de La Havane*, tesis de doctorado, París, 1954.

permanencia. La técnica empleada para plasmar esta segunda alternativa consistió en "elaborar" una Convención con un solo artículo dedicado a la materia regulada, en tanto que los otros siete reproducen las cláusulas tipo presentes en todos los instrumentos de la Conferencia.

El propósito de dictar posteriormente una regulación específica sobre cheque, obligó a no incluir la norma provisoria en el texto de la Convención sobre letras de cambio, pese a que el primer párrafo de aquélla declara aplicables a los cheques las disposiciones de ésta. Es decir que se prefirió redactar una norma que fuera fácilmente derogable para los Estados que eventualmente se vincularan a ella mediante la simple incorporación al texto futuro, en lugar de introducirla en la otra Convención sobre papeles de comercio como se hizo con los pagarés y las facturas. Consecuentemente, la Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de cheques hecha por la CIDIP II dispone en su art. 14.2º:

"A medida que los Estados Partes en la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Cheques suscrita el 30 de enero de 1975 en la ciudad de Panamá, República de Panamá, ratifiquen la presente Convención o se adhieran a ella, cesarán para dichos Estados Partes los efectos de la mencionada Convención de Panamá".

Ahora bien, la búsqueda del contenido de la única norma específica de ésta, no fue demasiado exhaustiva. Antes al contrario, a continuación de la remisión a las normas de la Convención sobre letras de cambio, se introdujo una excepción tomada fielmente del art. 33 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo de 1940⁶⁵.

En total acuerdo con el carácter transitorio de la Convención, la CIDIP I aprobó una Resolución en la cual se solicitó al Consejo Permanente de la O.E.A. que encomendara al C.J.I. el estudio y elaboración de dos proyectos de convenios sobre cheques, uno basado en el método indirecto y el otro bajo la forma de una ley uniforme⁶⁶. A su turno el C.J.I. sólo se abocó a la preparación del primero, por cuanto consideró inoportuna

65. Como ya pusiéramos de manifiesto al analizar este tema en el seno del Instituto de Derecho internacional y Derecho Comparado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina), el 22 de septiembre de 1987, el dictado de la misma en los términos en que está redactada parece destinada a conseguir una "generalización", aunque sea efímera, de las normas montevidéanas. *Vid.* al respecto E. González Lapeyre, "Las Convenciones de Panamá en Materia de Letras de Cambio, Pagarés, Facturas y Cheques", en M.A. Vieira, D. Opertti Badán y E. González Lapeyre, *Cuadernos de Derecho internacional privado*, núm. 2, 1978, pp. 44-67, concr. 65.

66. *Actas y documentos (CIDIP I)*, vol. I, pp. 185 y 357.

la realización del segundo tratándose de una materia de la que estaban ocupándose otras organizaciones internacionales, entre ellas la UNCITRAL⁶⁷. Sin embargo las esperanzas depositadas en el nuevo texto se diluirían frente a la patética transcripción de las normas y criterios contenidas en las convenciones sobre letras de cambio y sobre cheques adoptadas en Panamá⁶⁸.

A pesar de sus limitaciones y su provisionalidad, la Convención sobre cheques de 1975 no fue rechazada de plano sino que, dando cierto crédito a los postulados uruguayos, recibió algunas incorporaciones incluso después de haberse firmado el texto de la CIDIP II⁶⁹. De todos modos y tal como estaba previsto, la entrada en

67. Resolución del C.J.I. de 29 de julio de 1977. *Vid. Trabajos realizados por el Comité Jurídico Interamericano durante el período ordinario de sesiones, celebrado del 18 de julio al 26 de agosto de 1977, CJI-32, Washington, 1977, pp. 33 y 40. Vid. también, M.A. Vieira, "La Convención sobre cheques de Panamá de 1975 y el Proyecto del Comité Jurídico Interamericano de 1977", Quinto Curso C.J.I. -1978-, pp. 441-457, y D. Opertti Badán, "La Convención de 1975 sobre letras de cambio. Proyecto de convención del CJI sobre cheques de circulación internacional", Cuarto Curso C.J.I. -1977-, pp. 397-411, esp. 409-411.*

68. En este sentido, *vid.* J.E. Briceño Berrú, "Las convenciones interamericanas sobre derecho comercial internacional", *Riv. dir. int. pr. proc.*, pp. 799-818, *concr.* 809.

69. Es el caso curioso de Guatemala que depositó el instrumento de ratificación el 17 de diciembre de 1979.

vigor de éste fue haciendo mella en la vigencia espacial de aquélla. Cabe acotar que teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la Convención celebrada en Montevideo, no se percibe una diferencia importante entre vincularse a ella o permanecer en el cuadro de incorporaciones de las dos convenciones de 1975. En última instancia la actitud adoptada antes y durante la CIDIP I frente a la reglamentación de una materia con tantas aristas, muestra una faceta de improvisación, de falta de rigurosidad, que viene a ser un poco el rostro oscuro de la Conferencia. Las actividades posteriores, en cambio, demuestran en general mayor cuidado en las realizaciones alcanzadas, haciéndonos ver los fallos de los primeros pasos como un comprensible síntoma de crecimiento.

Es preciso recordar que cuando el tema se volvió a tratar en la CIDIP II, se abandonó la idea de alcanzar también una ley uniforme sobre el cheque⁷⁰, partiendo de las ideas antes señaladas y llegándose a sugerir que el camino más propicio para obtener una regulación material

70. Por esta razón el C.J.I. decidió apartarse del Proyecto preparado por R. Eyzaguirre Echeverría (puede verse en el Doc. CJI 3). Vid. las consideraciones vertidas por M.A. Vieira, "La Convención sobre cheques...", loc. cit., pp. 450-451 y 454-455, donde estima la conveniencia y la posibilidad de dictar una regulación uniforme.

uniforme sobre la materia "puede resultar de un acuerdo inter-bancario, a nivel de Bancos Centrales de los diversos Estados, sin perjuicio de su convalidación formal mediante tratados internacionales"⁷¹. Dentro del marco de la reglamentación indirecta, el Proyecto del C.J.I. finalmente aprobado fue objeto de algunas controversias. De un lado, la delegación argentina insistió en todo momento en la condición de "instrumento de pago" que reviste el cheque a diferencia de la letra de cambio, lo cual hace exigible la unidad de ley; ésta debiera ser, tal como lo es en la legislación interna de este país, la ley del domicilio del banco pagador⁷². La posición triunfante, por su parte, tuvo en cuenta la faceta cambiaria del cheque y se apoyó en la aceptación que había recibido el convenio regulador de las letras de cambio en el cual se basaba el presente⁷³. De otro lado, la representación mexicana expresó su rechazo ante un instrumento que, lejos de innovar, se limita a repetir las disposiciones de Panamá e indirectamente las de los

71. Es la propuesta de D. Opertti Badán, "La Convención de 1975 sobre letras de cambio...", *loc. cit.*, p. 411.

72. *Vid. Actas y documentos (CIDIP-II)*, vol. III, pp. 41-43 y 75-76.

73. *Vid. G. Parra-Aranguren, "La Segunda Conferencia..."*, *loc. cit.*, pp. 413-418 y 428.

Tratados de Montevideo⁷⁴, lo que la hace innecesaria a la vez que fuente de posibles conflictos de convenciones⁷⁵. Estas apreciaciones, que sin duda contienen algo de verdad, no hicieron mella en la decisión mayoritaria de aprobar el texto en cuestión. Tal como podía preverse⁷⁶, las incorporaciones no fueron justamente masivas.

12. Debe quedar claro que los efectos de situaciones como la descrita repercuten no sólo de la forma indicada sino también, y esto es más grave, impidiendo planteamientos más modernos y adecuados a una realidad que se ha modificado sustancialmente. Además, llevan a poner en entredicho las opiniones esperanzadas de quienes vislumbran en la obra de la CIDIP la posibilidad más o menos cierta de superar el territorialismo que impregna buena parte de las soluciones tradicionales⁷⁷.

74. D. Opertti Badán, *loc. cit.*, había expresado su "particular satisfacción" por este hecho.

75. *Vid. Actas y documento (CIDIP-II)*, vol. I, pp. 142-144. *Cf.* la opinión del delegado J.L. Siqueiros, *op. cit.*, pp. 682-683, e *id.*, "La codificación del Derecho internacional privado en el continente americano", *Jurídica*, 1982, p. 248.

76. *Vid.* L. Pereznieto Castro, "Posibilidades de ratificación de las Convenciones de las Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho internacional privado I y II, desde una perspectiva latinoamericana", *An. Jur. Interam.* 1981, p. 201.

La cuestión no se agota en estas consideraciones, sino que se extiende hacia otros elementos dignos de tenerse en cuenta. De un lado, no habiendo dudas sobre la traba que supone el excesivo respeto a las antiguas codificaciones, debe llamarse la atención aún sobre el agudizamiento de las dificultades constituido por la participación en la obra unificadora de nuevo cuño de países pertenecientes a distintas familias jurídicas. De otro, cobra importancia la carencia de un criterio unívoco a la hora de elaborar las normas destinadas a resolver los eventuales problemas de delimitación entre las disposiciones contenidas en los convenios de la CIDIP y las que, referidas a las mismas materias, forman parte de los Tratados de Montevideo y del Código Bustamante⁷⁸. Aquél es un problema plagado de factores técnicos, históricos y políticos, al cual dedicaremos principalmente el próximo epígrafe. Este comporta una consecuencia directa del tema en análisis, aunque admite

77. Esta legítima esperanza es manifestada por J. Samtleben, "El territorialismo...", *loc. cit.*, pp. 208-209.

78. Los "conflictos de convenciones" con una especial atención en la situación de los Tratados de Montevideo, son abordados por R.B. Santos Belandro, "Vigencia de los tratados de Montevideo de 1889 y 1940 a la luz de las CIDIP I, II y III", *Rev. Inf. Leg. (Brasília)*, núm. 103, 1989, pp. 295-310. *Vid.*, también, A.M. Villela, "L'unification...", *loc. cit.*, pp. 258 ss.

también una lectura más vasta, a la cual nos referiremos, dedicada al estudio de la relación entre las convenciones interamericanas de D.I.Pr. y todos los otros instrumentos multilaterales y bilaterales reguladores del tráfico privado externo a los que se encuentran vinculados los países americanos.

B) Los límites de la CIDIP en cuanto instancia superadora de la bipolaridad Montevideo-Bustamante

13. El surgimiento de la posibilidad cierta de un "conflicto de convenciones" de D.I.Pr. prácticamente no aparece en América hasta la entrada en vigor de los textos realizados en la CIDIP. Antes del momento señalado, dos circunstancias impedían la producción de tal problema: pocos convenios y muy generales, ante los cuales los Estados se decantaban a favor de uno u otro⁷⁹. Sólo dos países, Bolivia y Perú, participan a la vez del Código Bustamante y de los Tratados de Montevideo de 1889, primando en ambos casos estos últimos. Para Bolivia, en virtud del art. 1 del instrumento de

⁷⁹. Para todas estas ideas, cf. el trabajo de Santos Belandro *cit.*, pp. 297 ss., se donde se extraen varios de los datos aquí considerados.

ratificación de la obra de La Habana⁸⁰, en el cual se consagra la reserva general a la misma en todo lo que no esté de acuerdo con "la legislación del país y los Tratados internacionales suscritos por Bolivia". En el caso peruano, la primacía de los Tratados de 1889 se sustenta en la decisión de la Corte Suprema de este país de 7 de diciembre de 1935⁸¹. Entre los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940, el conflicto queda zanjado respecto a los que regulan las materias civil y mercantil, ya que los celebrados en 1940 incluyen una disposición específica sobre el particular dejando sin efecto para los Estados que se incorporen a los mismos, los Tratados de 1889⁸².

Antes de continuar con el hilo expositivo, es preciso recalcar que el núcleo de todo este planteamiento consiste, a nuestro entender, en llegar a descubrir si lo que se pretende expresa o implícitamente con la CIDIP es forjar un sistema de D.I.Pr. convencional dotado de una

80. Ley de 20 de enero de 1932.

81. Vid. M. García Calderón, *Derecho internacional privado*, Lima, 1969, pp. 23 ss..

82. En virtud de estas normas, entre Argentina, Paraguay y Uruguay rigen los mencionados tratados de 1940, mientras que los respectivos de 1889 vinculan a cada uno de esos países con Bolivia, Perú y Colombia. Los tratados que disciplinan las materias penal y procesal no prevén ninguna regla específica.

relativa autonomía respecto de las codificaciones internacionales vigentes o si, por el contrario, sólo se intenta construir apéndices de éstas, dotados de un juego bastante limitado⁸³. Dicho en otros términos, se trata de dilucidar hasta qué punto los convenios de la CIDIP van reemplazando dentro de su ámbito espacial y material de aplicación a los Tratados de Montevideo y al Código Bustamante o si, por el contrario, estos textos conservan vigencia efectiva en algunos Estados pese a la incorporación de éstos a los nuevos convenios. Las discusiones reflejadas en las actas y documentos de cada fase de la Conferencia, los comentarios de algunos delegados respecto a las instrucciones impartidas por sus respectivos gobiernos y, en particular, la observación de las llamadas cláusulas de compatibilidad⁸⁴, pueden echar

83. La CIDIP IV manifestó su preocupación al respecto, incluyendo entre sus Resoluciones la solicitud a la Asamblea General para que incluya como temas para la labor jurídica inmediata de la O.E.A., la vigencia de las Convenciones de la CIDIP con relación a los demás tratados americanos y el análisis de aquéllas en cuanto sistema. Tal recomendación fue incluida, sin mucha precisión, en la Resolución AG/RES. 1024 (XIX-O/89), de 18 de noviembre, que convoca a la CIDIP V. R.B. Santos Belandro, *Convención...*, op. cit., pp. 179-196, se refiere a este problema bajo el sugerente epígrafe: "La CIDIP o la búsqueda de un orden jurídico intelegible".

84. Vid. la configuración de los distintos tipos que presentan dichas cláusulas en B. Dutoit y F. Majoros, "Le lacis...", loc. cit., pp. 571-573.

luz sobre el problema. Decíamos que la posibilidad de producción de conflictos entre convenios referidos a la misma materia se hace visible con la vigencia de las convenciones interamericanas, precisamente por las deficiencias y dudas que se perciben en la redacción de las citadas cláusulas.

Para comenzar, éstas no aparecen en siete de los diecinueve convenios aprobados por la CIDIP⁸⁵; nos referimos a las convenciones interamericanas sobre cheques, letras de cambio y arbitraje comercial de la CIDIP I, sociedades comerciales y domicilio de la CIDIP II, y personas jurídicas y adopción de la CIDIP III. En estos casos parece lógico buscar la solución de cualquier eventual contradicción basándose en el parámetro que brinda la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre el Derecho de los Tratados en su art. 30.3º, donde se consagra el principio lex posterior derogat priori⁸⁶. La

85. No tenemos en cuenta aquí a los Protocolos firmados en las CIDIP II y III, pues por su propia naturaleza sólo aceptan la incorporación de los países que se hayan vinculado a los Convenios a los cuales se adicionan.

86. Para una explicación del juego de esta regla y el art. 30 de la Convención, vid. F. Majoros, *Les conventions internationales en matière de droit privé*, vol. I, París, 1976, t. I, pp. 401 ss.. Los avatares de la elaboración de esta norma se encuentran en I. Sinclair, *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, 2ª ed., Manchester, 1984, pp. 94 ss..

misma consideración merecen las convenciones sobre cheques de 1979 y la que regula la eficacia extraterritorial de sentencias y laudos, del mismo año, ya que pese a hacer alusión a otros convenios concretos de la CIDIP⁸⁷, su relación con otros textos bilaterales o multilaterales no está reglamentada⁸⁸.

Las que sí poseen cláusula de compatibilidad con alcance general son las que conducen al meollo de la cuestión planteada. En esta lista encontramos a las Convenciones interamericanas sobre exhortos (art. 15), recepción de pruebas (art. 14) y poderes (art. 10) de la CIDIP I, medidas cautelares (art. 18), prueba e información acerca del Derecho extranjero (art. 8) y

87. La primera deroga expresamente, como se ha visto, su homólogo de 1975 y la segunda declara la aplicabilidad de sus normas "en lo relativo a laudos arbitrales en todo lo no previsto en la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional". Tal aplicación subsidiaria plantea la cuestión de la ampliación de la eficacia extraterritorial de los laudos arbitrales más allá del ámbito mercantil. Sobre las relaciones entre estos dos últimos convenios, L. Kos Rabcewicz Zubkowski, "Les conventions interaméricaines sur l'arbitrage commercial et la Commission interaméricaine d'arbitrage commercial", *Rev. arb.*, 1983, pp. 411-422, esp. 420-422.

88. Una situación singular se establece con la citada Convención sobre cheques de Panamá, la cual se limita en su art. 1 a realizar una excepción a la regla general constituida por la aplicación de las disposiciones contenidas en la Convención sobre letras de cambio suscrita el mismo día, sin incluir ninguna cláusula de compatibilidad de alcance general.

normas generales (art. 1) de la CIDIP II, competencia judicial internacional (art. 8) de la CIDIP III, y restitución de menores (art. 35), alimentos (art. 30) y contrato de transporte de mercaderías por carretera (art. 2). Todas estas cláusulas son del tipo de las aludidas por el art. 30.2º de la Convención de Viena⁸⁹, y están redactadas por lo general en los siguientes términos:

"Esta Convención no restringirá las disposiciones que en materia de ... hubieran sido suscritas o que se suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes, o las prácticas más favorables que dichos Estados pudieran observar en la materia"⁹⁰.

14. La presencia de esta clase de normas no son, por cierto, una característica diferenciadora de los convenios adoptados en la CIDIP. No existe tal rasgo de exclusividad. Antes al contrario es dable encontrarlas en muchos textos multilaterales relativos a nuestra disciplina, como es el caso de importantes Convenciones

89. En el mismo se lee: "Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado, prevalecerán las disposiciones de este último".

90. Las Convenciones sobre poderes, restitución de menores y adopción incluyen en el mismo o en otros artículos, cláusulas de compatibilidad con otros instrumentos multilaterales sobre la materia.

de La Haya, como prenda de cambio para intentar asegurar un cuadro de incorporaciones más nutrido que justifique el esfuerzo y el tiempo en su elaboración. Sin embargo, en conjunción con los otros elementos apuntados, cobran aquí un relieve singular. Nos estamos refiriendo a la preocupación demostrada por los Estados rioplatenses por la inclusión de dichas disposiciones⁹¹. Algunos de los delegados de estos países se pronuncian con palabras tan elocuentes como: "La inclusión de este artículo está referida a que el Uruguay desea que quede perfectamente establecido en esta Convención que ella de ningún modo puede restringir el alcance de la Convenciones de Montevideo de 1889 y de 1940, y que solamente en atención al espíritu de conciliación de las distintas tendencias, declinó su propósito de incluir una fórmula similar a la del art. 30 del Tratado de Derecho comercial de 1939-40, pero ese hecho de ninguna manera puede tener carácter derogatorio de dicha norma"⁹². Es difícil encontrar una

91. Vid. el Informe del relator de la Comisión II de la CIDIP I, quien al comentar el mencionado art. 15 de la Convención sobre exhortos deja en claro que "se trata de una norma introducida en el Grupo de Trabajo a iniciativa de los países vinculados a los Tratados de Montevideo". Doc. OEA/Ser.K/XXI.1, CIDIP/35, p. 310.

92. Tal es la opinión manifestada por E. González Lapeyre cuando la Comisión I de la CIDIP I trató el Proyecto sobre letras de cambio. Vid. Doc. OEA/Ser.K/XXI.1, CIDIP/31, p. 53. La opinión coincidente

afirmación hecha en términos más claros y tajantes, en este ámbito.

Es cierto que la cláusula en estudio habla también de convenios bilaterales⁹³, futuros y de prácticas más favorables, pero las opiniones antes comentadas no dejan resquicio alguno para dejar pasar dudas sobre cuál es el entendimiento que ciertos Estados dan a la misma. Incluso la referencia a las prácticas más favorables parece supeditada a la inexistencia o insuficiencia de otros convenios sobre la misma materia⁹⁴. Por todo ello es que

del delegado argentino en la misma Comisión se contrasta en la p. 64. Para mayor abundamiento, *vid.* el correlativo Doc. CIDIP/45, p. 159. La decisión de dar prioridad a los Tratados de Montevideo queda patente en estas intervenciones. Cf. R.B. Santos Belandro, "Vigencia...", *loc. cit.*

93. Existe un importante entramado de convenios bilaterales sobre todo en temas donde se halla implicada la cooperación judicial internacional. En concreto, cuando la que sería la Convención interamericana sobre restitución internacional de menores llegó a la tercera sesión plenaria de la CIDIP IV, incluía una norma que ordenaba la derogación de los convenios que sobre la misma materia vinculan a Uruguay, de un lado, con Argentina, Chile y Perú, del otro, respectivamente, en la medida en que los Estados parte de éstos ratificaran la Convención. Mas tal disposición fue eliminada a solicitud de los países mencionados.

94. Nótese que el citado precepto utiliza la conjunción "o". *Vid.* R.B. Santos Belandro, "Vigencia...", *loc. cit.* Aún así, difícilmente se entiende la inclusión -bastante festejada (*vid.* *Actas y documentos CIDIP I*, vol. II, pp. 388-391 y T.B. de Maekelt, *Conferencia...*, *op. cit.*, p. 82)- en el art. 14 de la Convención sobre exhortos, al lado de la cláusula de compatibilidad en su formulación más general, de una

se llega a afirmar que lejos están los países americanos de plasmar en los hechos el estadio superador de las viejas antinomias que tanto se declama en los foros continentales. Las realizaciones de la CIDIP, en este sentido, parecen destinadas a convivir con las obras americanas provenientes de la etapa de la codificación global o de la codificación propiamente dicha, antes que a reemplazarlas por otro sistema distinto.

Claro que esta afirmación no es admisible si no se sitúa en el contexto adecuado y no se calibra concienzudamente la magnitud de los intereses de política legislativa en presencia. Retener sin más el dato objetivo de la tendencia de los países del Río de la Plata a mantener la vigencia de los Tratados de Montevideo para sus relaciones recíprocas, puede conducirnos a una visión sesgada de la realidad. Entre estos países, que tienen un nivel de integración jurídica muy importante, los Tratados de 1939/1940 son de

norma que permite a los Estados "que pertenezcan a sistemas de integración económica" ... "acordar directamente entre sí procedimientos y trámites particulares más expeditos que los previstos en esta Convención". ¿Es que acaso los Estados que no pertenecen a los mencionados sistemas no pueden acordar mecanismos más favorables a la puesta en práctica del principio de cooperación internacional? La respuesta, evidentemente negativa, se fortalece con una simple observación de la ausencia total de sincronismo entre la integración jurídica y la integración económica en América, sobre la cual nunca se insistirá bastante.

aplicación cotidiana. La penetración de los mismos en la conciencia jurídica subregional hace impensable que se resigne fácilmente su vigencia por influjo de los nuevos convenios, sin poner en peligro la incorporación de los Estados afectados a estos últimos. Es decir que hay que hacerse a la idea de que los antiguos textos americanos seguirán en vigencia, y no sólo para aquellas materias o cuestiones específicas no reguladas por la CIDIP. De otro lado, como elemento matizador de estas ideas, no está de más recordar una vez más que varios de los convenios de la CIDIP recogen con bastante fidelidad las disposiciones de Montevideo.

De cualquier modo es fácil colegir que las posibilidades que tiene un conjunto de convenios sobre temas singulares surgidos de determinado foro codificador (o descodificador, si se prefiere) de constituir en sí mismo un "sistema" de D.I.Pr., son muy limitadas aún cuando se dude de la exigencia del carácter completo para la configuración del mismo. Propugnar una idea así concebida sería como pensar que el método de la codificación internacional total es todavía factible y acaso deseable, con la salvedad de que en vez de llevarlo a cabo de una sola vez se requiere para su realización una actividad progresiva. Tal idea puede ser defendible

pero no guardaría coherencia con otras constataciones o afirmaciones vertidas en este trabajo⁹⁵.

Existen materias relativas al tráfico privado externo en las cuales una puesta en común mediante un convenio internacional se revela sumamente difícil o imposible, otras que por distintos factores sugieren mirar hacia un ámbito espacial diferente del regional - más amplio o más estrecho- y otras, en definitiva, donde la producción normativa regional alcanza un grado estimable de justificación, más allá de los problemas de compatibilidad intra o extraregional. En cada sistema autónomo americano de D.I.Pr., estas normas provenientes de distintas fuentes deben convivir armónicamente para lo cual se necesitan reglas claras que organicen su aplicación a los supuestos concretos, obviamente, dentro de dichos sistemas⁹⁶.

95. El propio R.B. Santos Belandro, *Convención...*, *op. cit.*, *loc. cit.*, carga de matices sus planteamientos al respecto

96. La "creación de una Convención específica que resuelva los conflictos de Convenciones entre las CIDIP" que propugna R.B. Santos Belandro, "Vigencia...", *op. cit.*, p. 308, parece desmedido y tendría una utilidad relativa ya que, salvo excepciones, éstas se refieren a distintas materias y cuando no es así lo prevén expresamente. De otro lado, quedarían fuera de la regulación todos los demás textos convencionales que conforman cada sistema de D.I.Pr. americano.

Para un funcionamiento saludable de cada uno de ellos se requiere además que cada Estado defina y mantenga políticas coherentes en todos los foros de producción, que permitan ensamblar adecuadamente los diversos componentes de un sistema objetivamente pluridimensional. Esto no significa que los Estados americanos no puedan acordar un cuadro mínimo de coincidencias respecto a una política convencional común sino, pura y exclusivamente, situar esta posibilidad en el marco real, concreto e inexorable en el cual vive y se desarrolla. Cabe concluir, entonces, que a la CIDIP sólo se le debe exigir una política definida y una producción jurídica adecuada a las necesidades y particularidades de la región; la configuración de un "sistema", cualquiera sea la acepción de este término, resulta una exigencia totalmente fuera de época.

C) Los puntos de referencia externos: la influencia decisiva de la labor de la Conferencia de La Haya y la necesidad de coordinación

15. El panorama analizado en el epígrafe precedente no puede ser aprehendido en su totalidad si se ignora en

este punto la consideración de un dato que hemos invocado en otras oportunidades. En todos los convenios concluidos por la CIDIP, pero más acentuadamente en los que corresponden a las últimas reuniones, la autoridad de la tradición parece ir cediendo paso a las influencias externas provenientes de otros foros donde se desarrollan tareas de unificación del Derecho⁹⁷. Esta tarea de recepción ha tenido diferentes modalidades, un éxito dispar y ha generado un planteamiento que gira una vez más en torno a la dialéctica universalismo-regionalismo en lo que refiere a la codificación internacional del D.I.Pr.. Con la brillante pero aislada excepción de la Convención sobre normas generales, las convenciones que no se limitan a copiar los textos vigentes en América, suelen beber en las fuentes de la Conferencia de La Haya de D.I.Pr., de la C.E.E., del Consejo de Europa, de la UNCITRAL y en algún caso de la Sociedad de Naciones⁹⁸. De

97. En tal sentido, la CIDIP IV incluyó también en su Resolución sobre la labor de la O.E.A. en el ámbito del D.I.Pr., la solicitud a la Asamblea General del estudio del "sistema interamericano de D.I.Pr." frente a la obra de los demás foros codificadores. La Asamblea General, por su parte, en la citada AG/RES. 1024 (XIX-0/89), exhorta al I.I.N. para que coordine con la Secretaría Permanente de la Conferencia de La Haya los estudios sobre adopción internacional de menores "con miras a aprobar una convención universal" sobre la materia.

todos estos organismos el que con más énfasis nos lleva hacia el planteamiento indicado es sin dudas el primero.

Las circunstancias que informan la realidad que ahora nos ocupa no se agota en cierto mimetismo que es dable observar en algunos intereses de política legislativa, en las materias reguladas y, sobre todo, en los resultados concretos de las realizaciones obtenidas en sendos ámbitos de producción jurídica. Además de este dato empírico, muestran una serie de países miembros de la O.E.A. que se han incorporado a la Conferencia de La Haya (Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Surinam, Uruguay y Venezuela), participan activamente en sus tareas y que poco a poco se van vinculando a los convenios de ella emanados. Es en vistas a dichas circunstancias globalmente consideradas que debe analizarse la complejidad del binomio dialéctico señalado. Los síntomas de mimetismo por un lado y la creciente participación de los países americanos en la Conferencia de La Haya, deben tomarse como base en dicho análisis e ir desglosándose en busca de alternativas válidas.

98. Según A.M. Villela, *"les Etats américains ... se sont inspirés dans presque tous les cas, de textes conventionnels obtenus dans des instances européennes ... non seulement sous le point de vue des titres adoptés mais aussi de la teneur des textes conventionnels"* (loc. cit., p. 259).

La cuestión se decanta entonces hacia la necesidad de justificar el esfuerzo desplegado en el seno de la O.E.A. Tal justificación no podrá basarse exclusivamente en el argumento histórico según el cual la codificación efectiva del D.I.Pr. en América precedió a cualquier otra obra del mismo cuño intentada en el mundo. La certeza indubitable del mismo no parece suficiente en la hora actual. Es menester bucear dentro de este mar complejo, plagado de factores difícilmente clasificables, intentando encontrar razones convincentes que puedan servir como punto de partida para un trabajo riguroso, exento de voluntarismos. Andando por este camino es probable que puedan matizarse las críticas de quienes perciben en la obra de la CIDIP una preocupación más cuantitativa que cualitativa a la hora de legislar⁹⁹.

16. Una herramienta que podría llegar a considerarse insustituible para obtener una respuesta mínimamente satisfactoria, consistiría en llevar a cabo para cada materia a codificar un estudio profundo acerca de la existencia de una realidad regional característica que

99. Vid. A.M. Villela, loc. cit., p. 260, reprocha lo que entiende como un deseo de "*produire des conventions à tout prix, pour le simple plaisir d'attester une production quantitativement significative*".

exija un correlativo instrumento "regional". Pero, en el caso de ser factible, esta herramienta exige ser complementada con otra de carácter técnico que indague sobre las posibilidades concretas que asisten a los países americanos de incorporarse a los textos multilaterales originados en foros extracontinentales. Ahora bien, una y otra deben abordarse minuciosamente y el resultado integrarse con otros datos, con la finalidad de acercar indicios para la solución de esta conflictiva situación.

La intención de llevar a cabo un estudio como el indicado en primer término fue demostrada por el Instituto Interamericano del Niño respecto a las materias "secuestro y restitución de menores" y "obligaciones de alimentos" a tratarse en la CIDIP IV, mediante la preparación de un cuestionario sobre esos temas¹⁰⁰. El objetivo era que las autoridades de cada país respondieran diferentes interrogantes de índole sociológica, legislativa y jurisprudencial. Lamentablemente esta loable iniciativa, que se inscribe en la infatigable actividad desempeñada por el Instituto, no demuestra haber sido tomada en cuenta en forma

100. Doc. OEA/Ser.K/XXI.4, CIDIP-IV/doc. 13/89.

decisiva. Una tarea similar, ahora con más eco, está llevándose a cabo respecto del tema "contratación internacional" previsto para la CIDIP V.

17. Sobre los mencionados temas de la CIDIP IV, cabe indicar que la pregunta núm. 31 del cuestionario viene a refrendar nuestra línea de afirmaciones al demandar a los Estados miembros de la O.E.A. si consideraban "conveniente la adopción de una Convención interamericana en la materia que sea compatible con las previsiones de la Convención de la Conferencia de La Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Menores, de 25 de octubre de 1980, como forma de ir a un ordenamiento uniforme para resolver este tipo de problemas".

Coincidente y coetáneamente se alzaban voces resaltando la importancia de lograr una "conciliación entre la vocación universalista del Convenio de La Haya y el ámbito regional de la Convención interamericana"¹⁰¹. Al llegar al momento de la redacción definitiva de ésta, se incluyó una norma en el art. 34, cuyo primer párrafo dice:

101. Vid. D. Opertti Badán, *Restitución Internacional de Menores (Aspectos Civiles)*, Montevideo, 1989, p. 16.

"Entre los Estados miembros de la O.E.A. que fueran parte de esta Convención y del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de menores regirá la presente Convención"¹⁰².

Es decir, la regla es la prioridad de la Convención de Montevideo, elección que parece en principio lógica, sobre todo porque se limita a "los Estados miembros de la O.E.A.", quedando fuera del supuesto los Estados que eventualmente adhieran a aquélla, los que por definición (art. 30) no son miembros de la Organización. A ellos va dirigida, al menos en principio, la disposición contenida en el segundo párrafo del art. 34:

"Sin embargo, los Estados Partes podrán convenir entre ellos de forma bilateral el reconocimiento y la aplicación prioritaria del precitado Convenio de La Haya..."

102. Una disposición del mismo tenor aparece en el art. 29 de la Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias, respecto a los Convenios de La Haya de 2 de octubre de 1973 sobre Reconocimiento y eficacia de sentencias relacionadas con obligaciones alimentarias para menores y sobre Ley aplicable a obligaciones alimentarias. Mas en este caso la cuestión planteada es particularmente espinosa por el alcance general (*erga omnes*) que tiene este último, como pusiera de relieve en el transcurso de la CIDIP IV el representante de la Conferencia de La Haya, A. Dyer. Vid. G. Parra-Aranguren, "La Cuarta Conferencia...", loc. cit., p. 179.

Aquí el problema es que existe una manifiesta contradicción entre esta norma y la que, en el artículo siguiente, consagra la cláusula de compatibilidad, dándole preminencia las disposiciones de los convenios que se hubieran suscrito sobre la misma materia. No queda más posibilidad que entender que el art. 34 establece, con una regulación bastante particular, una excepción a la regla contenida en la cláusula del art. 35.

18. Por su parte, el cuestionario sobre contratación internacional merece algunos comentarios específicos, precisamente porque este tema se presenta en cierto modo como un *test* para todas las cuestiones tratadas en este capítulo, pero en especial para el que ahora nos ocupa. En concreto, la materia contractual suele verse como propicia para la unificación y, más aún, para la "universalización"¹⁰³. Tal vez fue esta consideración la

103. A. Boggiano, expresa esta idea en el trabajo preparado a pedido de la Secretaría General de la O.E.A. y publicado después como *Contratos internacionales*, Buenos Aires, pp. 79-81 y 152. El desarrollo es seguido cerradamente por A.M. Garro, "Armonización y unificación del Derecho privado en América Latina: esfuerzos, tendencias y realidades", en *España y la codificación internacional del Derecho internacional privado* (en prensa). El propio C.J.I. llegó a esta conclusión al considerar la posibilidad de regular la venta internacional de bienes muebles, señalando que "no existen motivos para propiciar la vigencia de un documento regional" en dicha materia y propiciando la

que llevó a incorporar en el cuestionario, propuesto originalmente por la representación uruguaya, una pregunta (la número 10) en la cual se plantean dos opciones básicas: elaborar una regulación regional que podría basarse en alguno o varios de los modelos indicados¹⁰⁴ o "limitarse a prestar su participación y/o aceptación respecto de los trabajos que lleva a cabo la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil

incorporación al texto aprobado en la Conferencia Diplomática de La Haya (1964). Vid. la Res. de 22 de diciembre de 1967 en *Trabajos realizados por el Comité Jurídico Interamericano en el curso del período ordinario de sesiones de 1967*, Washington, D.C., 1967, p. 17 (idéntica actitud se constata en pronunciamientos posteriores del C.J.I. -A. Boggiano, *loc. cit.*-). Cf. L. Kos-Rabcewicz-Zubkowski, "Les principaux organes...", *loc. cit.*, p. 335 y 346.

104. Tales "modelos" son: el Convenio de Roma sobre Derecho aplicable a las obligaciones contractuales, de 19 de junio de 1980 (C.E.E.), el Convención de Viena sobre los contratos de compraventa mercantil internacional, de 11 de abril de 1980 (O.N.U.), el Proyecto de UNIDROIT contenido en el Doc. UNIDROIT 1990, Study L - Doc. 40 Rev. 5, y las diversas regulaciones americanas desde Bustamante y Montevideo hasta las "Bases propuestas por la Conferencia para el estudio futuro del tema relativo a la ley aplicable en materia de contratación internacional", establecidas por la CIDIP IV (*Acta final CIDIP IV*, Washington, D.C., 1990 -en adelante: *Acta Final CIDIP IV-*, p. 27), pasando por "algunas Convenciones de CIDIP (v.gr. la de Sociedades Mercantiles de 1979)". Cf. el cuestionario en el "Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos acerca del cuestionario sobre contratación internacional" (Doc. OEA/Ser.G, CP/doc.2139/91 corr.1, de 27 de febrero de 1991), pp. 5-9. Sobre la actividad de la Comisión Segunda de la CIDIP IV sobre el tema, vid. G. Parra- Aranguren, "La Cuarta Conferencia...", *loc. cit.*, pp. 153-161 y J. Samtleben, "Neue interamerikanische...", *loc. cit.*, pp. 57-60.

Internacional (CNUDMI) integrada por 36 miembros, en cuya agenda figura, por ejemplo, el tema de las Prácticas Contractuales Internacionales ... entre otros"¹⁰⁵. Debe pensarse que la última opción también puede aplicarse a otros foros de alcance o vocación universal, como lo han entendido los Gobiernos de Argentina y Canadá en sus respectivas respuestas al cuestionario¹⁰⁶.

Para asumir una posición coherente frente a esas opciones deben tenerse en cuenta todos los elementos que

105. "Informe...", *loc. cit.*, p. 7.

106. Así, la lacónica respuesta canadiense a la décima pregunta expresa: "en la medida de lo posible, toda nueva regla debería ser preparada bajo la égida de organismos internacionales de amplia constitución, como la O.N.U., UNCITRAL, la Conferencia de La Haya sobre Derecho Privado Internacional y UNIDROIT" (Doc. OEA/Ser.G, CP/CAJP-822/91 add. 4 rev. 1, de 31 de octubre de 1991, p. 6). Argentina no contesta dicha pregunta pero sí la anterior, referida a la posibilidad de formulación por parte de la O.E.A. de "convenciones y leyes uniformes sobre temas tales como ... empresas binacionales y multinacionales y empresas conjuntas, contrato de inversión extranjera, transferencia de tecnología, ...", en los siguientes y curiosos términos: "En tal sentido, se estima conveniente que a nivel regional y en una primera etapa, los Estados Miembros accedan a los instrumentos internacionales de carácter universal, ya que resultan propicios para la unificación regional y mundial. Asimismo, es recomendable el tratamiento del tema de las "Obligaciones contractuales internacionales", teniendo en consideración la Convención sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales de las Comunidades Europeas, Roma 1980. Correspondería a una etapa posterior el tratamiento de los contratos en particular" (Doc. OEA/Ser.G., CP/CAJP-822/91 add. 3, de 17 de mayo de 1991 -y fe de errata, de 11 de julio de 1991-, pp. 4 y 5).

las fundamentan. En tal sentido, la afirmación "en lugar de trabajar en un proyecto de convención interamericana en materia de ley aplicable a la contratación internacional, los Estados miembros de la O.E.A. deberían considerar seriamente la adopción de la Convención de La Haya del 22 de diciembre de 1986"¹⁰⁷ es, sin dudas, bien intencionada pero adolece de una falta de concreción que desemboca, de cualquier modo y fatalmente en un resultado que poco tiene que ver con la "unificación universal" que se pregona¹⁰⁸. En efecto, si por adopción se entiende la incorporación de los Estados miembros de la O.E.A. a dicho Convenio, una simple mirada al cuadro de Estados parte indicaría que, en el más optimista de los casos, aquéllos quedarían prácticamente sólo vinculados entre sí. Si lo que se busca es en cambio que la CIDIP apruebe un texto calcado del Convenio de La Haya, la finalidad universalista quedaría igualmente hipotecada, ya que, de entrada, tal regulación no coincidiría con la acordada por los Estados de la C.E.E..

107. A.M. Garro, *loc. cit.*. La idea subyacente a esta propuesta ya se deja entrever en *id.*, "Unification and Harmonization of Private Law in Latin America: Background, Trends and Perspectives", *Permeabilité des ordres juridiques. Rapports présentés à l'occasion du colloque-anniversaire de l'Institut suisse de droit comparé*, Zurich, 1992, pp. 235-264.

108. *Ibid.*

Salvo las excepciones mencionadas, los países americanos en su conjunto han reivindicado en sus respuestas al cuestionario una reglamentación regional de la contratación internacional realizada, como no puede ser de otra manera, a partir de los textos elaborados en otros ámbitos¹⁰⁹. Las citadas "Bases", ya se dirigían claramente en ese sentido. El "Proyecto de Convención interamericana sobre ley aplicable en materia de contratación internacional", aprobado por el C.J.I.¹¹⁰, no hace más que confirmarlo. La influencia de los textos antes señalados se constata con facilidad al observar los criterios elementales establecidos: juego del principio de la autonomía de la voluntad para la determinación de la ley aplicable al contrato; en su defecto, aplicación

109. La respuesta del Gobierno uruguayo al cuestionario (Doc. OEA/Ser. G, CP/CAJP-822/91 add. 7, de 29 de enero de 1992) hace hincapié en la compatibilidad entre la participación en los trabajos de UNCITRAL y una regulación interamericana, siempre que ésta "se adapte a las específicas necesidades de los Estados miembros". Y concluye: "adviértese sin embargo, la mayor intensidad del trabajo que cumplen en aquélla los Estados de mayor desarrollo económico y su consiguiente influencia".

110. Doc. OEA/Ser.Q, CJI/RES.II-6/91, de 31 de julio de 1991, elaborado a partir del Anteproyecto presentado por J.L. Siqueiros (Doc. CJI/SO/II/doc. 6/91, de 3 de julio de 1991). Todos estos documentos se encuentran reunidos en el "Documento de antecedentes sobre el tema 'Proyecto de temario de la reunión de expertos en materia de contratación internacional'" (Doc. OEA/Ser.G, CP/CAPJ-839/91, de 29 de octubre de 1991).

de la ley del Estado con el cual presente vínculos más estrechos, determinada en principio por la prestación más caracterísitica; aplicación necesaria de las normas imperativas de la *lex fori* y discrecional de las correspondientes a terceros Estados vinculados estrechamente con el contrato; exclusión del reenvío; regulación de la validez formal por la *lex celebrationis*; etc.¹¹¹.

19. Dentro del mismo tema general, pueden hacerse todavía unas referencias al arbitraje comercial internacional. La Convención sobre arbitraje de la CIDIP I es un producto bastante híbrido en el cual se nota un injustificado apresuramiento para regular una cuestión que tiene varias aristas complicadas, y donde existen convenios internacionales que han alcanzado gran predicamento. La respuesta material a los numerosos problemas que surgen en torno al arbitraje comercial internacional y la pertenencia de varios países americanos a algunos de los convenios mencionados, exigía un trabajo mucho más meditado a fin de lograr un

111. A. Boggiano constata esta influencia en su reciente curso "The Contribution of the Hague Conference to the Development of Private International Law in Latin America. Universality and Genius Loci", dictado en la Academia de Derecho internacional de La Haya (en prensa).

resultado satisfactorio¹¹² Especialmente, no debiera haberse dejado de lado la consideración de la particular actitud de los Estados del continente respecto del arbitraje, actitud signada por una cierta reticencia manifestada en normas internas restrictivas y en muchas dudas, en la actualidad más moderadas, frente a los convenios multilaterales sobre la materia¹¹³ De otro lado, es preciso recordar que el Convenio sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958¹¹⁴ es de alcance general (art. I.3), y que ello es fuente de

112. En idéntico sentido se expresa T.B. de Maekelt, *Conferencia...*, op. cit., pp. 39 y 59. Vid. también la opinión de la autora como delegada de Venezuela ante la CIDIP I en *Actas y documentos CIDIP I*, vol. II, pp. 226-227, y la de G. Parra-Aranguren, quien recuerda la abstención de los delegados de Argentina, Perú y Venezuela, a fin de no interferir en los evidentes intereses de otros países ("La Primera Conferencia...", loc. cit., p. 313). En contra, C.R. Norberg, "Inter-American Commercial Arbitration Revisited", *Law. Am.*, vol. 7, 1975, pp. 275-290.

113. Vid. P. Fouchard, "La convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial international (Panama, 30 janvier 1975)", *Rev. arb.*, 1977, pp. 203-207, esp. 203-204. Sobre las causas de esta actitud, vid. A.J. van den Berg, "L'arbitrage commercial en Amérique latine", *Rev. arb.*, 1979, pp. 123-203, esp. 133-135, y D. Straus, "Why International Commercial Arbitration is Lagging in Latin America: Problems and Cures", *Arb. J.*, vol. 33, 1978, pp. 21-24.

114. Vid., por todos, A.J. van den Berg, *The New York Arbitration Convention of 1958*, La Haya, 1981.

eventuales problemas en la aplicación¹¹⁵. Mas lo cierto es que existía un notable interés por llevar adelante la reglamentación, aunque no estuvieran suficientemente madurados los trabajos previos.

El modelo seguido por la Convención de Panamá es básicamente el Convenio de Nueva York, al cual se hallan vinculados los siguientes miembros de la O.E.A.: Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, México, Panamá, Trinidad-Tobago y Uruguay. Sin embargo, se incorporan normas materiales en las cuales se deja sentir, como es fácilmente comprobable, la influencia del Convenio europeo sobre arbitraje comercial internacional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961¹¹⁶. La Comisión encargada de los proyectos relativos al Derecho mercantil internacional en la CIDIP I rechazó el que había preparado el C.J.I. y tomó como punto de partida el realizado por un grupo de trabajo del que formaron parte

115. *Ibid.*, pp. 102 ss. y "The New York Convention 1958 and Panama Convention 1975. Redundancy or Compatibility?", *Arb. Int.*, vol. 5, 1989, pp. 214-229. Vid. también R. Eyzaguirre Echeverría, *El arbitraje comercial en la legislación chilena y su regulación internacional*, Santiago, 1981, pp. 255-277.

116. Vid., por todos, E. Mezger, "Das Europäische Überreinkommen über die Handelsschiedsgerichtsbarkeit", *RabelsZ*, 1965, pp. 231-301.

delegados de Brasil, Estados Unidos y México¹¹⁷. No obstante, esto no impidió que para arribar al texto definitivo fuera necesario superar muchos puntos de vista divergentes.

20. El camino de recomendar la incorporación a los instrumentos multilaterales existentes, sin elaborar Convenciones interamericanas, ha sido recorrido varias veces en el ámbito de la CIDIP. Así se hizo en la CIDIP II, a solicitud de la delegación de Venezuela, respecto a la obtención de alimentos en el extranjero¹¹⁸; se repitió en la CIDIP III, en relación con los Convenios sobre la representación en materia de venta internacional de mercancías y de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de mercancías (Reglas de Hamburgo) de 1978; idéntica actitud se aprecia en las resoluciones 1, 2, 3 y 4 de la CIDIP IV, que recomiendan la ratificación o adhesión de los países miembros de la O.E.A. de las

117. Actas y documentos CIDIP I, vol. II, pp. 194 ss.

118. La propuesta se hizo en el marco de la discusión del proyecto sobre medidas cautelares y desembocó en una resolución en la cual se solicita a la Asamblea para que exhorte a los Estados miembros de la Organización a incorporarse al Convenio sobre obtención de alimentos en el extranjero, hecho en 1956 en Nueva York. Vid. Actas y documentos (CIDIP II), vol. I, pp. 339 ss..

Convenciones sobre Factoraje internacional y sobre Arrendamiento financiero internacional (Ottawa, 28 de mayo de 1988), de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa internacional de mercaderías (Viena, 11 de abril de 1980), sobre la Prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías (Nueva York, 14 de junio de 1974) y del Protocolo de 1980 que la enmienda y sobre Ley aplicable a los contratos de compraventa internacional de mercaderías (La Haya, 22 de diciembre de 1986), respectivamente¹¹⁹. Hasta el momento esta vía no ha sido exitosa. No se advierte en ella la utilización de un parámetro sólido ni un estudio detenido para la elección de las materias que deben transitarla. Puede observarse que los temas apuntados no pertenecen al mismo sector de materias, ni responden en todos los casos a cuestiones que no hayan figurado ni figuren en la agenda de trabajo de la Conferencia interamericana.

El problema, frente a un panorama como el descrito, subsiste aún cuando se piense que hay consenso sobre la necesidad de economizar, de racionalizar, los trabajos de

119. Vid. *Acta Final CIDIP-IV*, pp. 8-12. A. Boggiano, sugiere también la posibilidad de tener en cuenta el Convenio de Roma sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, de 1980. En todo caso felicita a la CIDIP por su paso de lo interamericano a lo universal. Vid. *Contratos...*, op. cit., pp. 151 ss..

codificación desarrollados en el seno de la O.E.A. en relación con los que se acometen en otros foros. Y subsiste porque el problema se convierte en señalar un criterio razonable para determinar cuándo procede la elección de un camino o de otro, es decir, cuándo se justifica el esfuerzo de realizar una codificación "regional"¹²⁰. De cualquier manera, la situación no debe asombrar demasiado ni sacarse de los justos términos en que se produce, sobre todo porque no es patrimonio exclusivo del ámbito americano. También la Comunidad Europea, el Consejo de Europa, la Conferencia de La Haya y la UNCITRAL, suelen elaborar -no sin dificultades- convenios sobre la misma materia que provocan, en aquellos países que se vinculan a más de uno de ellos, grandes quebraderos de cabeza a la hora de su aplicación¹²¹. Temas como la protección de los menores, la ley aplicable a las obligaciones contractuales, la compraventa internacional de mercaderías, la prestación

120. J. Limpens, "Relations entre l'unification au niveau régional et l'unification au niveau universel", *Rev. int. dr. comp.*, 1964, p. 13, señala como parámetro la noción de *unifiabilité*, que designa "*le degré de chance que possède une matière déterminée de passer avec succès l'épreuve de l'unification*".

121. En España dicho problema se pone de manifiesto con las vacilaciones de la jurisprudencia al enfrentarse con problemas de *legal kidnapping*.

de alimentos o el reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras constituyen algunos ejemplos en tal sentido. No faltan los casos tampoco en que convenios que se refieren total o parcialmente a una materia son concluidos por el mismo organismo en forma sucesiva¹²².

21. El elemento de carácter técnico que señaláramos, también nos trae a colación argumentos que no podemos desdeñar. Señaladamente, existen convenios de tipo abierto, en los cuales no se pone ninguna traba a los Estados que quieran incorporarse a los mismos; basta manifestar la voluntad de vincularse a ellos en la forma prevista en el texto. A esta categoría pertenecen, como hemos visto, los celebrados en la CIDIP. Otros convenios requieren de los países que pretenden formar parte de ellos el cumplimiento de ciertas condiciones, trazando de este modo un límite a las apetencias de éstos. Es el caso de muchos convenios de La Haya, que presentan una naturaleza semi-cerrada a los países que no son miembros

122. V. Fuentes Camacho ha puesto de relieve los problemas y las soluciones posibles que se presentan en la Conferencia de La Haya, respecto de las materias: protección de menores, alimentos y procedimiento civil, en la comunicación "Los tratados sucesivos concernientes a la misma materia concluidos en el marco de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado: la posición de España", inéd. (Vid. A. Alvarez Rodríguez, "Jornadas...", *loc. cit.*, p. 686).

de la Conferencia¹²³. El mecanismo consiste en acotar los efectos de la adhesión de terceros países a las relaciones entre el Estado adherido y los Estados contratantes que hayan declarado su aceptación de la adhesión.

Una disposición de este tipo se contiene en el art. 38 del Convenio de La Haya que regula los problemas de *legal kidnapping* y ha servido como lógico argumento para justificar la elaboración de un convenio de alcance regional americano sobre la materia¹²⁴. En esta materia concreta, aunque no es la única afectada, pudiera haber jugado también decisivamente en tal justificación el fuerte impacto que ejerce la "doctrina" llamada del conflicto de civilizaciones. Si en algún Estado miembro de la C.E.E. se ha considerado a otros países comunitarios como pertenecientes a una "cultura

123. Para unos datos precisos sobre la evolución de esta cuestión, *vid.* F. Knoepfler, *Les nouvelles conventions de La Haye de droit international privé. Etude de leurs clauses d'adhésion et de leur rôle de lois modèles*, Neuchatel, 1968.

124. Así lo afirma D. Opertti Badán, *Restitución...*, *op. cit.*, pp. 47-48. Para la relatora del Convenio de La Haya "la nature semi-fermée de la Convention provient du mécanisme de la déclaration d'acceptation par les Etats parties et non pas de l'existence d'une restriction quelconque relative aux Etats pouvant y adhérer". *Vid.* E. Pérez Vera, "Rapport explicatif", *Conférence de La Haye, Actes et documents de la Quatorzième session*, t. III, p. 428. Sin embargo, objetivamente la restricción existe.

parcialmente diferenciada" para refrendar actitudes negativas frente al cumplimiento de las obligaciones asumidas por vía convencional, la más que probable mutación del adverbio en "totalmente" para casos en que se hallen implicados nacionales de países latinoamericanos, hubiera coadyuvado significativamente en la argumentación sobre la necesidad de una nueva regulación americana¹²⁵.

22. Es con estos componentes que se plantea entonces, dentro de este ámbito, la dialéctica universalismo-regionalismo en la producción del D.I.Pr.¹²⁶, la cual debe evaluarse necesariamente a la

125. Sin embargo, tal consideración no aparece en los múltiples trabajos realizados en el proceso de elaboración de la Convención interamericana. Sobre el "conflicto de civilizaciones" y su penetración en el problema de la restitución internacional de los menores, vid. las medulares reflexiones de J.C. Fernández Rozas, en J.D. González Campos y otros, *Derecho...*, op. cit., pp. 130-131.

126. No puede ignorarse en este punto la aportación de H.U. Jessurun d'Oliveira, "Universalisme ou régionalisme de la Conférence de La Haye", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. LV, 1966,, pp. 357-362, donde exige una correcta delimitación de los términos en danza. En este contexto, establece que la noción de regionalismo sugiere la existencia de una unión, de un cierto número de elementos comunes de carácter estable, hipótesis que sólo puede producirse en el marco de una "*cohésion générale permanente entre Etats plus ou moins limitrophes*". Creemos que la situación americana llena en general estos requisitos, sin peligro de caer en una concepción

luz de los resultados concretos que pueden obtenerse por uno y otro camino y a los condicionamientos de distinto orden que los informan. Siguiendo una idea generalizada, habría que ver en primer lugar, para cada supuesto, cuáles materias se hallan impregnadas de algún tipo de particularismo americano y obrar en consecuencia. Pero una buena utilización de esta herramienta exige tener en cuenta otras cuestiones que pueden hacer incidencia en el sector de materias implicado, en cuanto parámetro básico. Por ejemplo, buena parte de los asuntos jurídicos de carácter patrimonial se mencionan habitualmente como más proclives a recibir una regulación uniforme que los que tocan cuestiones personales o familiares; sin embargo, esta distinción no pasa de ser apriorística y maniquea¹²⁷.

superficial de la noción. *Ibid.*, cita a G. Philipps, *Erscheinungsformen und Methoden der Privatrechtsvereinheitlichung*, Frankfurt, 1965, p. 121. Cf., sin embargo, con la definición de "grupo regional de Estados" que brinda F. Rigaux, "L'harmonisation des règles de conflits de lois et de juridiction dans les divers groupes régionaux d'Etats", *Rapports belges au VI^e Congrès international de droit comparé (Hambourg, 1962)*, Bruselas, 1962, p. 155.

127. Hace tiempo que la clasificación de A.F. Schnitzer, *op. cit.*, pp. 43 ss., entre "*matières de tradition*" y "*jeunes matières*", viene siendo matizada por la realidad. Cf. N., Ujlaki, "International Unification of Law. Reflections on Adolf F. Schnitzer's *De la diversité et l'unification du droit*", *Liber Amicorum Adolf F. Schnitzer*, Ginebra, 1979, pp. 489 ss..

De un lado, tal vez no sea demasiado aventurado afirmar que pese a las diferentes realidades que pueden identificarse, los Estados latinoamericanos se desenvuelven en general en un sistema capitalista dependiente que condiciona en gran medida todo tipo de problemas en los cuales estén implicados elementos de orden económico¹²⁸. La presencia de grandes concentraciones de capital (exacerbada en algunos de los países que llevan a cabo políticas de privatización), muchas veces extranjero, que merced a situaciones monopólicas u oligopólicas condicionan el funcionamiento de los mercados, hace pensar en principio que los correctivos destinados a generar cierto equilibrio en las relaciones, deben poseer aquí especial fuerza¹²⁹. Desde

128. Ya en un estudio publicado en 1968, J. Lambert distinguía entre países relativamente desarrollados, desigualmente desarrollados, subdesarrollados y situaciones aberrantes. *Vid. Amérique latine, structures sociales et institutions politiques*, París, 1968. Cf. W. Goldschmidt, "Derecho internacional privado latinoamericano", *op. cit.*, p. 1087. Sin entrar a analizar el acierto y de la objetividad de esta clasificación, queda claro que las profundas diferencias que se constatan sólo entran en un proceso de "homogenización" por referencia a elementos externos comunes, como la crisis de la deuda externa.

129. E.A. Farnsworth destaca los diferentes puntos de vista manifestados durante los trabajos de la UNCITRAL por los países industrializados, los países no desarrollados y los países socialistas. *Vid. "Looking in from Outside your Garden: Another View of Comparative Law", Permeabilité des ordres juridiques...*, *op. cit.*, p.

este punto de vista, parece más factible detectar problemas necesitados de tratamiento particular en este sector que en otros¹³⁰. Claro que no se puede desconocer que sería más coherente con dichas políticas y su consustancial "aperturismo" la eliminación de cualquier signo intervencionista¹³¹.

Llegados a este punto es impostergable precisar qué debe entenderse por elementos o datos "regionales". Si ya serían difíciles de determinar dentro de los límites del espacio iberoamericano o latinoamericano¹³² -a no ser que

422. Los intereses de política convencional difícilmente pueden ser totalmente coincidentes.

130. Particularmente interesante se presenta el tema de la autonomía de la voluntad en los contratos internacionales. En un extremo -favorable a una consagración amplia del principio-, aparecen la introducción del mismo en el Proyecto de Convención interamericana, la participación de Estados americanos (Argentina, Chile, México, Uruguay y Venezuela, más las representaciones de Honduras, Brasil y Ecuador) en la elaboración del Convenio de La Haya de 1986 y la opinión de que se trata de un principio general de Derecho reconocido universalmente por las naciones "civilizadas" (A. Boggiano, sigue estas ideas en el Curso citado). En el otro -el de los partidarios de trazar algunos límites al juego de dicho principio-, la interpretación restrictiva de los Tratados de Montevideo y una considerable tendencia doctrinal (*vid.*, por todos, C. Fresnedo de Aguirre, *La autonomía de la voluntad en la contratación internacional*, Montevideo, 1991, esp. pp. 98 ss. y 115 ss.).

131. Es la propuesta de A. Garro, *loc. cit.*.

132. Algunos análisis consideran casi obvia la existencia de un particularismo jurídico y abogan por "la preservación de las características de la región

se establezcan por referencia común al mundo exterior-, tanto más lo serán si lo que se pretende es abarcar la totalidad del sistema interamericano. No debe olvidarse que cuando se aprueba un convenio en la CIDIP, se están regulando eventualmente tres diferentes tipos de relaciones de tráfico privado externo en lo que concierne a los Estados que se incorporen: las que puedan producirse dentro del marco iberoamericano o latinoamericano, las que presenten a la vez elementos de algún ordenamiento de este sector y de uno de raíz anglosajona dentro de los Estados miembros de la O.E.A., y las que pongan en contacto a éstos con países no pertenecientes a la Organización. En este sentido hay una notoria similitud con la labor que se desarrolla en las organizaciones de carácter universal¹³³.

La realidad del tráfico externo en sus aspectos constitutivos, como vemos, tiende a uniformarse a un ritmo cada vez más acelerado. Por ello, cuando se habla de principios regionales a menudo se hace referencia a meras cuestiones de técnica legislativa por lo general

latinoamericana". Vid. M.A. Ciuro Caldani, "América Latina en la encrucijada del valor", *Investigación y docencia*, núm. 14, 1989, pp. 3-7.

133. Vid. D. Tallon, "L'harmonisation des règles du droit privé entre pays de droit civil et de common law", *Rev. int. dr. comp.*, núm. 2, 1990, pp. 513-523.

largamente opinables o, como máximo, a ciertos hábitos o tradiciones presentes en las regulaciones vigentes o en la conducta de los operadores jurídicos. La observación de las sucesivas reuniones de la CIDIP y sus trabajos de elaboración de textos convencionales, nos demuestra que la no identificación de elementos "regionales" distintivos no obsta a la producción de convenios sobre materias ya reguladas en otros foros. Es más, el problema muchas veces ni llega a plantearse.

En cuanto a las posibilidades de incorporación a los convenios acordados en otros foros, no sólo hay que evaluar las de índole técnica sino que también hay que preocuparse por las que brinda la realidad del tráfico; esto significa que deben fijarse las condiciones de oportunidad y la solvencia que tiene el texto en cuestión para dar una respuesta satisfactoria al problema planteado en cada caso. Por supuesto que el mismo análisis debe hacerse para tomar la decisión de elaborar cualquier convenio interamericano, haciéndolo pasar rigurosamente por el tamiz que conforman las exigencias de urgencia y necesidad en la reglamentación de la materia de que se trate.

Todas estas cuestiones conducen en definitiva a un planteamiento de fondo que estriba en la conveniencia de

propender a una participación creciente, activa y tan homogénea como sea posible de los países latinoamericanos en los foros internacionales que se encargan de la codificación del D.I.Pr.. Particularmente, en propugnar la incorporación paulatina de dichos Estados a la Conferencia de La Haya de D.I.Pr.¹³⁴, como principal órgano codificador, sin perjuicio del mantenimiento de los resortes regionales en el ámbito de la O.E.A.. De este modo se podría avanzar hacia una unificación internacional más amplia y rigurosa¹³⁵, a la par que seguiría en pie la estructura americana, para todos aquellos puntos que requieran regulaciones paralelas u originales y para poder mantener, cuando sea posible y necesario, posiciones comunes en el seno de la Conferencia. No se nos escapa que aunque ésta ha dejado de ser una *limited company* y ha traspasado los límites de Europa, el ingreso sigue teniendo ciertas restricciones no sólo de orden estatutario (art. 2 del Estatuto de la

134. Esta idea se inscribe en la concreción de la cuarta etapa de la Conferencia que preconizara hace 25 años H.U. Jessurun d'Oliveira, *loc. cit.*, esp. 384-386.

135. Sin olvidar lo que enseña A. Boggiano en el Curso citado: el carácter razonable de las normas consagradas por la Conferencia de La Haya genera un "D.I.Pr. standard", utilizable para medir la razonabilidad de otras soluciones.

Conferencia)¹³⁶, y que aún cuando se acepten varios Estados más miembros de la O.E.A., es impensable y acaso indeseable una incorporación total. Está claro que un ingreso paulatino, acompañado de una prudente racionalización de medios, es perseguible y se compece con el espíritu universal que debe animar a la Conferencia de La Haya. Sin embargo, atendiendo a las limitaciones señaladas -y a otras cuestiones de orden mucho más general-, sería difícil y acaso irresponsable sugerir el abandono de la vía regional¹³⁷. Antes bien,

136. *Ibid.*, p. 357. A principios de siglo, J. Jitta se interesaba por las dificultades de acceso de los países del *common law* y los no europeos a los convenios elaborados por la Conferencia, dificultades centradas principalmente en cuatro puntos: la forma de la reglamentación adoptada, las cuestiones de Derecho procesal civil, la oposición entre los principios de nacionalidad y domicilio y el tratamiento dado a los inmuebles. *Við.* "L'accession de la Grande-Bretagne, des Etats Unis de l'Amérique du Nord et, en général, des Etats non européens aux traités de La Haye, concernant le droit international privé", *I.L.A. Rep.*, núm. 27, 1912, pp. 322-333, y "L'accession de la Grande-Bretagne, des Etats du Nord, du Centre et du Sud de l'Amérique et en général des Etats non européens aux traités de La Haye concernant le droit international privé", *I.L.A. Rep.*, núm. 28, 1913, pp. 548-556.

137. En las Jornadas de D.I.Pr. de León (1989), afirmábamos honradamente con algo de ingenuidad que tal vez fuera mejor propender a dicha incorporación paulatina, señalando como necesaria una actitud aperturista de la Conferencia de La Haya. Algún tiempo después, dicho argumento, que fue retomado en las Jornadas de Toledo (1990) -*vid.* "Convención interamericana...", *loc. cit.*, pp. 170-171-, se ve desdibujado al influjo de una visión más realista. Cf.,

podrían profundizarse y generalizarse vías de cooperación ya establecidas, que permitan ahorrar esfuerzos vanos y evitar contradicciones artificiales.

2. ELEMENTOS CONDICIONANTES DE LA CODIFICACION

A) *Materias reguladas*

23. Al hablar de las materias reguladas por la Conferencia Especializada Interamericana de Derecho internacional privado nos estamos refiriendo, de un lado, a la ubicación que tienen los temas abordados por ella en el panorama de la disciplina y, de otro, a la variedad de métodos de reglamentación que se emplean en ese cometido. Ambos aspectos se introducen en cierta manera por senderos ya recorridos. Mientras el primero aparece directamente influenciado por los intereses en presencia, sobre el segundo ejerce una fuerza considerable el apego a las fórmulas ya experimentadas en el ámbito interno y, sobre todo, en el internacional. Queda todavía, dentro de

sin embargo, A. Boggiano, *Derecho internacional privado*, t. I, 3ª ed., Buenos Aires, 1991, p. 197. Parece que, como señala certeramente D. Opertti Badán constatando que "por tradición e influjo La Haya descansa todavía en un gran consenso europeo", "a un universalismo verdadero debe corresponder un regionalismo aperturista" ("La codificación...", *loc. cit.*).

este tema, una referencia a la unificación de diversas materias del Derecho privado en Iberoamérica y la relación que esta actividad puede guardar con el campo de trabajo abordado por la CIDIP.

Respecto de la primera cuestión mencionada, cabe indicar que de los sectores implicados en la codificación, aparece a simple vista un cierto predominio del Derecho procesal civil internacional y de la asistencia judicial internacional. De los veintiún textos que han sido concluidos por la CIDIP, nueve¹³⁸ se

138. Diez, si se incluye la Convención sobre arbitraje comercial internacional, que contiene varias disposiciones sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. En este trabajo se ha preferido seguir la línea escogida por la doctrina americana más calificada. Los nueve textos considerados son: las Convenciones interamericanas sobre exhortos o cartas rogatorias, recepción de pruebas en el extranjero, y régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero (CIDIP I); eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, cumplimiento de medidas cautelares, y prueba e información acerca del Derecho extranjero (CIDIP II); y competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras (CIDIP III). A éstas se agregan los Protocolos adicionales a la Convención sobre exhortos (CIDIP II) y a la Convención sobre recepción de pruebas (CIDIP III). Un panorama sintético en J.M. Rouvier, "El Derecho procesal civil internacional en la codificación americana. Antecedentes. Situación actual. Convenciones de la Conferencia Especializada Latinoamericana (sic) sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP). Proyección en la comunidad hispano luso americana", Ponencia al XVII Congreso I.H.L.A.D.I. (Cáceres, septiembre 1992), Madrid, 1992. Vid. también, J.E. Briceño Berrú, "Las conferencias especializadas interamericanas sobre derecho internacional privado y las convenciones interamericanas

encargan de regular temas relativos a esos sectores. A fines expositivos y para no entrar en un tema ajeno a nuestro trabajo, englobamos a todos estos temas - competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de decisiones, asistencia judicial internacional- según el criterio tradicional, dentro del tronco "Derecho procesal civil internacional". La influencia ejercida por la presencia de los Estados Unidos en la configuración de esta realidad es ostensible¹³⁹. No obstante, no puede olvidarse que un objetivo de orden práctico ha pesado sobre la actitud de la CIDIP. Se trata del hecho, justamente realzado, que muestra que las cuestiones sobre aplicación del Derecho extranjero son susceptibles de resolverse en general, en ausencia de normas convencionales. En cambio, gran parte de la temática relativa al Derecho procesal civil

de derecho internacional civil y procesal civil", *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1982, pp. 27-59.

139. R. Abarca Landero, "Convenciones Interamericanas en Materia Procesal, Panamá 1975", en L. Kos-Rabcewicz-Zubkowski (dir.), *Cooperación interamericana en los procedimientos civiles y mercantiles*, México, 1982, pp. 643-645, subraya con insistencia que los tres temas que más preocupaban a Estados Unidos (exhortos, pruebas y arbitraje) a tenor de la nota diplomática 158-A (Doc. OEA/Ser.J/11.9, CJI 15, p. 729), se plasmaron en sendos convenios.

internacional, está destinada al fracaso en las mismas condiciones¹⁴⁰.

Es difícil, y tal vez poco riguroso, concentrar a los otros temas regulados en la CIDIP dentro del sector del Derecho aplicable. La existencia de algunas Convenciones mixtas o de carácter *sui generis*, hacen preferible el recurso a la clasificación tradicional. De este modo, podemos hablar de seis convenios que tratan cuestiones de Derecho mercantil internacional¹⁴¹, sector de materias donde más se advierte la tendencia a ir exhortando a los Estados miembros de la O.E.A. a incorporarse a convenios suscritos en foros internacionales de alcance universal.

Por su parte, el sector del Derecho civil internacional desembarca algo tarde en el mar de la CIDIP, en la tercera reunión. Sin embargo, habría de desempeñar el papel central en la CIDIP IV. Tres de los

140. Cf. P.H. Neuhaus, "Las convenciones interamericanas ...", *loc. cit.*, esp. 167-171, quien indica que el contenido práctico de la decisión ha podido comprobarse en la Conferencia de La Haya de D.I.Pr.

141. Se trata de las Convenciones interamericanas sobre arbitraje comercial internacional, letras de cambio, pagarés y facturas, y cheques (CIDIP I); cheques y sociedades mercantiles (CIDIP II); y contrato de transporte internacional de mercadería por carretera (CIDIP IV).

cuatro temas regulados¹⁴² giran en torno a la problemática del menor¹⁴³, aunque uno de ellos -el relativo a obligaciones alimentarias- también abarca a los cónyuges y puede ver extendido su ámbito personal de aplicación, si algún Estado manifiesta su voluntad en tal sentido. Detrás de esta temática aparece siempre un disciplinado ejército de juristas uruguayos y el apoyo institucional del I.I.N., con sede y alma en Montevideo. Las tres Convenciones sobre menores desarrollan, al igual que algunas de las referidas a otras materias, una especie de "universalización indirecta" del D.I.Pr. convencional americano, al basar sus respuestas en una recepción amplia de las brindadas a los mismos temas en la Conferencia de La Haya.

Las otras dos Convenciones de la CIDIP, ambas aprobadas en la reunión de Montevideo de 1979, son las que regulan las normas generales de D.I.Pr. y el

142. Se han elaborado Convenciones interamericanas sobre: adopción de menores y personalidad y capacidad de las personas jurídicas en el D.I.Pr. (CIDIP III) y restitución internacional de menores y obligaciones alimentarias (CIDIP IV).

143. Vid. E. Tellechea Bergman, *El nuevo Derecho internacional privado interamericano sobre familia y protección de menores*, Montevideo, 1991 y sucintamente, en P.-P. Miralles Sangro, "La protección jurídica internacional de los menores en el ámbito de la CIDIP", *España y la codificación internacional...*, op. cit..

domicilio de las personas físicas. A estas las incluimos en el grupo de los convenios reguladores de problemas generales de aplicación de las normas de D.I.Pr., concientes de la ambigüedad que conlleva dicho título. Constituyen, sobre todo la primera, el material más novedoso de la obra de la CIDIP, despertando un considerable interés¹⁴⁴.

Ahora bien, puede observarse que de las nueve veces que un tema relativo al Derecho procesal civil internacional llegó a plasmarse en un texto convencional, en tres de ellas se hizo para completar o reglamentar cuestiones anteriormente reguladas. Así sucede evidentemente en el caso de los Protocolos y en el supuesto representado por la Convención sobre competencia judicial internacional, que no hace más que integrar un vacío que había sido llenado transitoriamente en la Convención sobre eficacia extraterritorial de

144. P.H. Neuhaus, loc. cit.. A su turno, J. Kropholler, *Internationales Privatrecht*, Tubinga, 1990, p. 58, señala: "Originell ist die Konvention von Montevideo aus dem Jahre 1979 über Allgemeine Regeln des IPR. Sie hat in Europa kein vergleichbares Vorbild oder Gegenstück. Ihre praktische Bedeutung dürfte freilich gering bleiben, da sie den Renvoi nicht regelt und viele Fragen offenlässt". P. Mayer, *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. LXXX, 1991, p. 233, pone de manifiesto que el art. 1009 del Código de las personas y de la familia de Burkina Faso de 1989 (adaptación), está "directamente inspirado" en el art. 9 de la Convención interamericana.

decisiones¹⁴⁵. Algo similar se advierte en el sector del Derecho mercantil internacional, donde la Convención sobre cheques de la CIDIP II viene a reemplazar a la elaborada en la CIDIP I (entre los Estados partes). Más aún, no parece ilícito el interrogante, a la luz de los resultados, acerca de la procedencia de tener tres instrumentos sobre papeles de comercio, cuando los tres acaso hubieran podido resumirse en uno solo.

El temario finalmente adoptado por el Consejo Permanente para la próxima reunión de la CIDIP, a celebrarse en México en octubre de 1993, recoge los siguientes temas: obligaciones contractuales, tráfico de menores y transferencia de tecnología. Es decir que se ha realizado una "razonable reducción y especificación" del proyecto de temario contenido en la Res. AG/RES. 1024 (XIX-O/89) que convoca la CIDIP VI¹⁴⁶, atendiendo a las

145. Ejemplo de los problemas de delimitación entre estos textos y otros de carácter bilateral y multilateral vigente, lo brinda la Sent. de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay núm. 315/84, recogida en *Rev. Urug. Der. Proc.*, 1985, pp. 62-73, con nota de R. Herbert. Tema principal en las tres primeras reuniones de la Conferencia, el Derecho procesal no se tocó en la CIDIP IV ni aparece en la agenda de la CIDIP V.

146. Era lo que señalábamos como "deseable" al comentar dicho proyecto de temario en "Cuarta Conferencia especializada interamericana sobre Derecho internacional privado (CIDIP IV)", *R.E.D.I.*, vol. XLII, 1990, p. 311. Los demás temas eran: unificación de las legislaciones americanas a la luz de las convenciones interamericanas sobre D.I.Pr. y armonización de las diferentes

materias privilegiadas por la Asamblea General (las dos primeras), y escogiendo sólo una más con un ánimo que parece centrarse más en los estudios previos que en la elaboración de un convenio¹⁴⁷. Cabe señalar que en el segundo tema mencionado se prevé el tratamiento no sólo de las cuestiones civiles sino también de las penales¹⁴⁸.

24. Desde el punto de vista de los métodos de reglamentación empleados por la Conferencia se observa la inclusión de normas materiales incluso en las convenciones tituladas como de "conflicto de leyes". Mas eso no autoriza totalmente a hablar de una aplicación cabal del pluralismo metodológico en la reglamentación de las cuestiones del sector del Derecho aplicable del

codificaciones sobre la materia; Derecho mercantil internacional, con especial referencia a los negocios jurídicos internacionales; cooperación judicial internacional; Derecho internacional de la familia, con especial referencia a la guarda, filiación e instituciones de protección de menores; y nuevos desarrollos de D.I.Pr.

147. D. Opertti Badán, "La codificación ...", *loc. cit.*

148. Referencias a cuestiones penales ya aparecen en el art. 15 de la Convención sobre obtención de pruebas (que permite extender el ámbito material de aplicación de la misma a varias materias -entre ellas la "criminal"-, actitud que han seguido Colombia y Chile al ratificar) y el art. 26 de la Convención sobre restitución internacional de menores.

D.I.Pr. americano¹⁴⁹. Ciertamente es que se han celebrado convenios que unifican disposiciones materiales como el relativo a domicilio o el ya mencionado sobre normas generales, pero sus funciones se limitan a permitir el juego algo más armónico de los instrumentos basados sobre todo en el método de localización¹⁵⁰. En este sentido, al igual que la mayoría de las normas materiales contenidas en muchas de las Convenciones aprobadas, aquéllos bien podrían calificarse como "convenios de aplicación". Es decir, que la remanida idea según la cual la Conferencia interamericana avanza por caminos de diversidad y amplitud metodológica¹⁵¹, exige alguna matización. El estudio de la actitud adoptada a lo largo de las sucesivas etapas de la CIDIP a la luz de sus resultados

149. Si entramos a considerar la utilización o la referencia a normas especiales imperativas, sólo podemos señalar el ejemplo aislado del art. 15 del Protocolo sobre recepción de pruebas en el extranjero, de la CIDIP III, además del art. 10 del citado Proyecto sobre contratación internacional.

150. A.M. Villela, "L'unification...", *loc. cit.*, pp. 238-239. De las mencionadas antes, también realizan una unificación de normas materiales las Convenciones sobre poderes y sobre transporte.

151. *Vid.*, por ejemplo, H. Valladão, "O direito internacional privado interamericano: pioneirismo e atualização", *An. Jur. Interam.* 1979, pp. 136-137. En la Conferencia de La Haya la citada metodología irrumpe en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. *Vid.* F. Rigaux, "Droit privé matériel et règles de conflit de lois", *Rev. belge dr. int.*, 1991, pp. 385-397.

concretos y de sus fracasos¹⁵², pone bastante claro que la norma de conflicto sigue ocupando el centro de la escena y que el recurso a las técnicas de reglamentación directas aún está muy verde¹⁵³.

Por lo demás, sólo si se parte de una concepción restringida del D.I.Pr., puede descubrirse una paradoja en el hecho de que muchos convenios que se celebran en el seno de una Conferencia que se llama "de D.I.Pr." se dediquen a disciplinar cuestiones procesales¹⁵⁴. En cambio sí resulta, ~~sino~~ paradójica, al menos inadecuada, la utilización de la expresión "conflicto de leyes" para titular algunas Convenciones interamericanas, como la que regula las letras de cambio¹⁵⁵. Aún dejando de lado las

152. *Vid.*, entre otros, L. Pereznieto Castro, "Posibilidades de ratificación...", *loc. cit.*, 195 ss., donde se ocupa sintéticamente de analizar la metodología utilizada en los convenios de la CIDIP I y la CIDIP II.

153. Salvo que se exceda el ámbito propio del sector del Derecho aplicable y se incluyan los convenios sobre Derecho procesal dentro de la metodología de la unificación material, como hace L. Pereznieto Castro, "Some Aspects...", *loc. cit.*, pp. 253 ss., distinguiendo tres metodologías: de Derecho uniforme, conflictual y "combinada".

154. Tal es el caso de J. Samtleben, "Los resultados...", *loc. cit.* Por el contrario, en la CIDIP se le da al D.I.Pr. el mismo alcance amplio que se le otorga en la Conferencia de La Haya.

155. *Actas y documentos CIDIP I*, pp. 5 ss. Se rechazaron otras propuestas como la de reemplazar la controvertida expresión por "D.I.Pr." o la de fijar como título "Convención interamericana sobre títulos valores

dudas que suscita esa terminología por su falta de correspondencia con la realidad que pretende abarcar¹⁵⁶, lo cierto es que suele tratarse de textos que no se limitan a incluir normas de Derecho aplicable, como sucede en el caso indicado¹⁵⁷. Conste que lo que aquí se critica es la inadecuación de la terminología empleada y no la presencia de normas de competencia, extremo que puede ser muy positivo en casos de carencias o amplia diversidad de normas del sector¹⁵⁸.

de circulación internacional", en una actitud que G. Parra-Aranguren ha definido como "un homenaje a la terquedad". *Vid.* "Las seis Convenciones ...", *loc. cit.*, p. 328.

156. Las principales opiniones que ha vertido la doctrina sobre la solvencia de la misma, pueden consultarse en J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, pp. 93-95.

157. En efecto, el art. 8 de la Convención en cuestión consagra los foros de competencia judicial internacional para las controversias que se produzcan con motivo de la negociación de una letra de cambio, aunque debe aclararse que su inclusión no fue nada pacífica. El texto se debe a una propuesta uruguaya defendida exitosamente por E. González Lapeyre, *Actas y documentos CIDIP I*, pp. 140 ss..

158. Volviendo al mismo ejemplo, la norma de competencia citada parece saludable, habida cuenta de la inexistencia en 1975 de una regulación sobre la competencia judicial internacional en el ámbito de la CIDIP y de la superación que la fórmula concreta escogida representa respecto de los textos de Bustamante y Montevideo. En el mismo sentido, T.B. de Maekelt, *Conferencia...*, *cit.*, p. 54. El art. 8 brinda al actor la opción de demandar ante los tribunales del Estado parte donde debe cumplirse la obligación o donde el demandado tiene su domicilio.

25. La unificación del Derecho privado material merece aún algunas reflexiones. En la historia de la codificación internacional del continente el problema estuvo siempre presente, muchas veces ligado a los intentos unificadores llevados a cabo en el ámbito del D.I.Pr.. Así, hemos visto cómo en el Congreso de Jurisconsultos de Lima de 1878, la unificación de la normas indirectas constituía un objetivo de mínima, ya que lo que se buscaba realmente era obtener, en la medida de lo posible, la uniformización de la legislación material. En el Primer Congreso Sudamericano, celebrado en 1888-1889, la misma inteligencia estaba en el ánimo de varios de los asistentes, lo cual originó sendas aclaraciones de parte de representantes de Argentina y Uruguay, en el sentido inverso. El interés en unificar el Derecho material de los países americanos también se paseó por la Conferencia de La Habana de 1928 y ocupó un lugar relativamente importante en la agenda del movimiento iniciado en 1889 y concluido a mediados de este siglo, mas, como en los casos anteriores, el Código Bustamante se dedicó mayoritariamente a disponer normas de conflicto¹⁵⁹.

La carta de la O.E.A. en su art. 104 -heredero del antiguo art. 67-, plantea la posibilidad de "uniformar sus legislaciones" en términos muy lacónicos, como uno de los objetos de estudio del C.J.I.. Este ha desarrollado una actividad en tal sentido, junto a las otras que le encomienda la norma mencionada (servir de cuerpo consultivo jurídico, promover el desarrollo y la codificación del Derecho internacional y estudiar los problemas jurídicos de la integración). Sin embargo, no parece que la unificación del Derecho sustantivo sea una tarea a desarrollar por la CIDIP. Antes bien, dicha tarea debería concentrarse en un órgano específico que podría ser el mismo que se encargue de los aspectos jurídicos de la integración actuando, incluso por razones estatutarias, en estrecha relación con el C.J.I. y la Secretaría General (Subsecretaría de Asuntos Jurídicos) de la O.E.A.¹⁶⁰. Claro que todavía subsiste un problema

159. No obstante, desde alguna óptica particular, el Código de Bustamante más un código de legislación uniforme que un código de D.I.Pr. Vid. Ch. Fenwick, *The organization of American States*, 1963, p. 336. Cf. en todo lo atinente a esta evolución, A.M. Villela, "L'unification...", loc. cit., pp. 324-237.

160. Obviamente, el ideal sería contar con un organismo de carácter permanente. De no ser así, el recurso a Conferencias Especializadas que se ocupen específicamente de estas cuestiones aparece como única vía posible.

en la base de esta propuesta: el carácter potencialmente interamericano -con reservas- de los procesos de integración no deja dudas sobre su "encaje" en el marco de atribuciones de la O.E.A., extremo difícilmente predicable de la unificación del Derecho privado material, tarea eminentemente iberoamericana o latinoamericana.

Pero más allá de la búsqueda de un cauce institucional apropiado para concentrar los esfuerzos de unificación sustantiva, lo cierto es que a partir de la constatación de la existencia de elementos comunes, producto generalmenete de herencias compartidas, se han elaborado ambiciosos trabajos sobre distintas ramas del Derecho, tanto pública como privado¹⁶¹. En este orden pueden mencionarse los proyectos que con el nombre de "Ley Tipo" o "Código Tipo" y los estudios en general que se realizan para los países latinoamericanos, ya sea en sedes oficiales o en organismos de carácter académico-científico o profesional y que abarcan materias tan disímiles como el Derecho procesal civil¹⁶², el Derecho

161. Una perspectiva general puede obtenerse en H. Fix Zamudio, "Breves reflexiones...", *loc. cit.*, esp. 294 y ss. y también en *id.* y H. Cuadra, *op. cit.*, *passim*.

162. *Vid.* S. Schipani y R. Vaccarella (dirs.), *Un "Codice tipo" di procedura civile per l'America Latina. Atti del Congresso Internazionale (Roma, 26/28 settembre 1988)*, Padua, 1990, esp. los trabajos de R.O. Berezione,

procesal penal¹⁶³, el Derecho tributario¹⁶⁴, el Derecho

"Código- tipo y reforma del proceso en América Latina)", pp. 29-39 (también en *Rev. Urug. der. proc.*, t. XIV, 1989, pp. 7-15), A. Gelsi Bidart, "Código-tipo y reforma del proceso en América Latina: entre Derecho común o uniforme", pp. 69-100. Entre los varios trabajos sobre el particular de V. Fairén Guillén, *vid.* "Observaciones sobre la sistemática del proyectado Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica", *Rev. Der. Proc.*, núm. 3, 1989, pp. 647-674. Sobre el tema, en general, *vid.* L. Kos-Rabcewicz-Zubkowski (dir.), *Cooperación interamericana...*, *cit.*, y la tarea del C.J.I. reseñada en J.J. Caicedo Castilla, *La obra...*, *op. cit.*, pp. 113-126.

163. V. Fairén Guillén, "Notas sobre el proyectado Código de Proceso Penal-modelo para Iberoamérica", *Bol. Mex. Der. Comp.*, vol. XXIV, núm. 70, 1991, pp. 97-168. Según este autor, *ibid.*, p. 98, fue N. Alcalá- Zamora quien, desde el exilio, lanzó la idea de elaborar códigos-modelo para el proceso civil y penal (*vid.* de este autor "C.I.J. Informe sobre uniformidad de la legislación referida a la cooperación en procedimientos judiciales", *Bol. Inst. Mex. Der. Comp.*, año VI, núm. 18, 1953, pp. 206 ss.). *Vid.* también, A. Reyes, "El Proyecto de Código Penal Tipo Latinoamericano", *Rev. Universidad Externado (Colombia)*, 1967, pp. 583-589, F. Grisolia, "Génesis y trayectoria del proyecto de Código Penal Tipo para Latinoamérica", *Rev. Mex. de Derecho Penal*, nov.-dic. 1971, pp. 26 ss. y E. Novoa y J. Vérin, "Le projet de Code pénal modèle pour l'Amérique latine", *Rev. sc. crim. dr. pén. comp.*, oct.- dic. 1973, pp. 859-863, todos citados en H. Fix-Zamudio, "Breves reflexiones...", *loc. cit.*, pp. 300-302. Sobre elementos de un Derecho penal internacional en el sistema interamericano, *vid.*, M.A. Vieira, "El Derecho internacional penal, en el sistema interamericano, con especial referencia a los nuevos desarrollos que cabría esperar en este plazo hacia el futuro", en F. Orrego Vicuña y J. Irigoin Barreme (dirs.), *Perspectivas del Derecho internacional contemporáneo (Experiencias y visión de América Latina)*, vol. 3, Santiago (Chile), 1981, pp. 146-164, y, recientemente, D. Opertti Badán, "Juridical Mutual Cooperation in Criminal Matters", *N.I.L.R.*, vol. XXXIX, 1992, pp. 89-115 (apéndice: 116-125).

aeronáutico¹⁶⁵, el arbitraje¹⁶⁶, los títulos valores¹⁶⁷, la transferencia de tecnología¹⁶⁸ y las sociedades¹⁶⁹.

164. Cf. *Reforma tributaria para América Latina. Modelo de Código Tributario*, Washington, D.C., 1967. Vid., los comentarios de H. Fix-Zamudio, "Breves reflexiones...", loc. cit., pp. 296-298.

165. Vid. A. Bauza Araujo, "Unificación legislativa, doctrinal y jurisprudencial iberoamericana en Derecho aéreo", *Segundas Jornadas Iberoamericanas de Derecho Aeronáutico y del Espacio* (Salamanca, 1964), Madrid, 1964, pp. 191-224 y A. Rodríguez Jurado, "El Proyecto de Código Aeronáutico Latinoamericano", *Estudios jurídicos en Homenaje al Profesor Enrique A.C. Aztiria*, Buenos Aires, 1966, pp. 168-297, ambos citados por H. Fix-Zamudio, "Breves reflexiones ...", loc. cit., pp. 302-304, y el completo trabajo dirigido por E. Malpelli López, *Códigos y Leyes de Aviación Civil de Iberoamérica*, Madrid, 1970 (Proyecto: pp. 819-856).

166. Vid. M. Cabanas Rodríguez, "La Ley-Tipo de Arbitraje para Iberoamérica", R.C.E.A., vol. I, 1984, pp. 29-34 (en el mismo vol.: "Anteproyecto de Ley-Tipo sobre Arbitraje elaborado por la Unión Interamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados", pp. 243-251, y "Ley-Tipo de Arbitraje para los países hispano-luso-americanos", pp. 252-257. Un amplio estudio de Derecho comparado sobre arbitraje interno e internacional en Iberoamérica, puede consultarse en VV.AA., *El arbitraje comercial en Iberoamérica*, Madrid, 1982. También en P. Sanders (ed.), *Yearbook C.A.*, vol. III, 1978, y en *El arbitraje en el Derecho latinoamericano y español. Liber Amicorum en Homenaje a Ludwick Kos-Rabcewicz-Zubkowski*, Lima, 1989. Antecedentes de la labor del C.J.I., en J.J. Caicedo Castilla, *La obra...*, op. cit., pp. 111-113.

167. Vid., en general, *Proyecto de legislación uniforme para Latinoamérica de títulos valores*, Buenos Aires, 1967. También, I. Winizky, "Le projet de loi uniforme de titres négociables pour l'Amérique latine", *Rev. int. dr. comp.*, 1971, pp. 331-341.

168. El INTAL y el BID publicaron en 1977 en Buenos Aires, el *Régimen de la transferencia de tecnología en los países de América Latina. Textos legales y procedimientos administrativos*. La publicación se ha ido

Aunque la traducción práctica de estas iniciativas ha sido casi o totalmente nula¹⁷⁰, cabe señalar que la presencia en algunos de los trabajos citados de normas relativas al tráfico externo¹⁷¹ y la proximidad temática con asuntos desarrollados en la CIDIP, aconsejan el aprovechamiento de todo este bagaje de material en la elaboración de las Convenciones interamericanas.

B) Los participantes y los intereses en presencia

26. Mucho se ha hablado de la importancia que adquiere la CIDIP como paso superador de la antinomia inconciliable entre países del círculo de Montevideo y países tributarios de Bustamante¹⁷². Pero ya hemos

actualizando con el nombre de *Régimen jurídico de la transferencia de tecnología en los países de la ALADI*.

169. Vid. el doc. OEA/Ser.I.VI.1, CIJ-94 (1968), titulado *Armonización de las legislaciones de los países latinoamericanos sobre sociedades, incluso el problema de las sociedades de carácter internacional*.

170. Hace más de un cuarto de siglo E. Novoa Monreal, "La integración jurídica latinoamericana", *La justicia (México)*, t. XXVII, núm. 449, 1967, pp. 25-36, denunciaba la falta de voluntad política para concretar en los hechos lo acordado en distintos foros.

171. Piénsese, por ejemplo, en las normas de este tipo que contiene el Código procesal civil modelo.

señalado que esa apreciación es cuanto menos parcial. Junto al dato nada desdeñable de la existencia de Estados que pertenecen a ambos grupos y Estados que no participan en ninguno de ellos, merecen especial atención los problemas que se plantean a partir de la presencia dentro de la Conferencia, en cuanto miembros de la O.E.A., de países de tradición jurídica anglosajona. Nada más lejos de nuestro ánimo que restar importancia a la actividad desempeñada en el seno de la CIDIP por la mayoría de ellos, pero es indudable que la presencia con mayor trascendencia desde varios puntos de vista es la de los Estados Unidos.

Lo afirmado no nos hace olvidar lo que mencionáramos respecto al interés de varios países vinculados con los sistemas tradicionales del D.I.Pr. americanos en perpetuar y, en la medida de lo posible, ampliar su ámbito de vigencia. Ahí están, para corroborar lo dicho, los denodados intentos del C.J.I. para que la CIDIP se limitara a modernizar algunos puntos del Código Bustamante y la recurrente insistencia de los Estados del Plata en mantenerse fieles a los postulados montevidéanos. De otra parte, como es lógico, muchos de

172. *Vid.*, entre otros, J.J. Caicedo Castilla, "Introducción general al D.I.Pr....", *loc. cit.*, pp. 153-155, y H. Valladao, "O direito internacional privado interamericano ...", *loc. cit.*, pp. 134 ss.

los textos adoptados han recibido un impulso particular de algún Estado o grupo de Estados, e incluso de algún organismo que representa intereses privados. Esta circunstancia no debe mover a asombro porque constituye un modo normal de iniciación de trabajos en un foro de las características de la CIDIP.

Lo que debe preocupar es que los mencionados intereses en vez de canalizarse mediante estudios rigurosos y un amplio debate previo, puedan adquirir *status* convencional al margen de ese cauce, dejando de lado, algunas veces, hasta elementales cuestiones de técnica legislativa. Baste como ejemplo del interés localizado en algunos Estados determinados, la actitud de los países del Cono Sur al promover y obtener un texto sobre contrato de transporte de mercaderías por carretera en la CIDIP IV, tema en el cual, las enormes distancias y la precariedad y escasez de caminos hacen surgir dudas a propósito del número de incorporaciones que recibirá la convención y, en un sentido más de fondo, acerca de la justificación de la decisión de preterir otros temas sobre los que existe un interés más general¹⁷³. Ejemplo

173. Vid. G. Parra-Aranguren, "La Cuarta Conferencia especializada interamericana sobre Derecho internacional privado (CIDIP-IV, Montevideo, 9-15 de julio, 1989)", *Rev. Fac. Cs. Jur. y Pol. Univ. de Venezuela*, núm. 75, 1990, pp. 97-186, esp. 169. Similar constatación se

claro de la concurrencia de intereses privados, aunque asumidos como propios por algunos Estados, es el que constituye la razón fundamental de la aprobación de la Convención sobre arbitraje en la CIDIP I, aunque fuera de "manera rápida y poco ortodoxa"¹⁷⁴.

encuentra en D.P. Fernández Arroyo, "Cuarta Conferencia ...", *loc. cit.*.

174. Cf. G. Parra-Aranguren, "La Primera Conferencia...", *loc. cit.*, p. 313. Nótese que en dicha Convención se consagra la aplicación, a falta de acuerdo expreso de las partes, de las reglas de procedimiento de la CIAAC (Comisión interamericana de arbitraje comercial, con sede en Nueva York y creada en 1933 por la Séptima Conferencia Panamericana). Se constata así la victoria de los intereses privados ligados con esta institución, otrora estrechamente vinculada a los Estados Unidos, a punto tal de llegar a funcionar durante varios años en las mismas oficinas de la *American Arbitration Association*. Después de un período de crisis, a partir de 1969 se ha llevado a cabo una cierta descentralización de la CIAAC (*Vid.* D.B. Straus, "La coopération entre organismes d'arbitrage en Amérique", *Rev. arb.*, 1969, p. 51, y Ph. Fouchard, "La convention...", *loc. cit.*, pp. 206-207. Las palabras del representante de la CIAAC que se encuentran en el Doc. OEA/Ser.K/XXI.1, CIDIP/61, pp. 23-24, son fiel reflejo del interés descrito). De otro lado, es de suponer que la referencia a tales reglas de procedimiento, que constituye el primer caso de incorporación como *ius dispositivum* de las normas de una institución permanente de arbitraje, está dirigida salvo decisión expresa de las partes a las que estén vigentes al momento del acuerdo arbitral, ya que las mismas han variado desde la aprobación de la Convención de Panamá y pueden volver a variar en el futuro. De hecho, el 6 de mayo de 1977, las reglas de la CIAAC fueron reemplazadas por las de la UNCITRAL con ciertas adaptaciones basadas en razones institucionales. Cf. L. Kos-Rabcewicz-Zubkowski, "Les conventions interaméricaines sur l'arbitrage commercial et la Commission interaméricaine d'arbitrage commercial", *Rev. arb.*, 1983, pp. 417-418.

27. En lo que refiere al impacto de la participación de los diferentes Estados puede afirmarse, sin menospreciar la labor cumplida por ninguno de ellos, que son tres los países que configuran el motor que mueve la maquinaria de la Conferencia: Uruguay, Venezuela y México. Esta apreciación se basa en varios parámetros que no se cumplen por igual en cada uno de los nombrados. En primer lugar cabe señalar el protagonismo desempeñado por sus representantes, no tanto en el par de semanas que dura cada reunión de la CIDIP, sino especialmente en las labores de preparación de cada tema introducido en la agenda, como así también en la ingrata tarea de dar publicidad a los resultados obtenidos.

Esta actividad se percibe en cada reunión de expertos, en los debates y en los cursos organizados por el C.J.I., en la preparación de Cursos, Jornadas y Seminarios en los más variados puntos de la geografía americana, en los estudios y proyectos elaborados y en la publicación de trabajos de alto nivel didáctico que no resignan por ello un ápice de contenido científico¹⁷⁵.

175. En este aspecto, hay nombres que sobresalen notoriamente, como H. Valladao, D. Opertti Badán, M.A. Vieira, G. Parra-Aranguren, T.B. de Maekelt, L. Pereznieta Castro y A. Boggiano, habiendo trascendido los límites del continente con sus enseñanzas. Prueba de ello la constituyen los cursos que han impartido en la Academia de Derecho internacional de La Haya, que han

Estrechamente vinculado a la primera, una segunda pauta para valorar la actitud de los distintos países frente a la CIDIP, viene dada por el peso de ellos en órganos interamericanos implicados en la codificación del D.I.Pr. La otrora Consultoría Jurídica, actual Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, el C.J.I. y organismos tales como el I.I.N. o la A.L.A.L.C./A.L.A.D.I., reafirman nuestras palabras. Por último, el tercer elemento tenido en cuenta para pergeñar estas consideraciones, es la política de incorporación masiva a las Convenciones aprobadas por la CIDIP que estos tres países han desarrollado, en mayor o menor medida. Es este dato el que justifica sobre todo la presencia mexicana en la terna indicada. Si la aceptación generalizada de la obra de la Conferencia reviste una importancia fundamental, sin entrar a considerar los nombres de los Estados que se relacionan, la actitud mexicana cobra especial relieve si se tiene en cuenta que, pese a la influencia decisiva que ejerce este país en variadas esferas de la vida americana, había permanecido prácticamente al margen de todos los intentos de codificación continental.

De lo dicho no debe desprenderse, no obstante, una conclusión falsa como la que podría derivarse de

servido, entre otras cosas, para hacer conocer la realidad del D.I.Pr. americano al mundo entero.

confundir el destacado protagonismo de los Estados mencionados con una mayor tendencia a la aplicación de las normas convencionales por parte de sus jueces y tribunales. Incluso, existen otros países como Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y, algo menos, Argentina, que también han evidenciado una actitud positiva en lo que hace referencia a sus respectivas políticas de incorporaciones. Sin embargo, unos y otros quedan igualados -en términos generales- cuando se observan los casos concretos en los cuales los convenios son puestos en práctica. Se trata de casos aislados y no de una jurisprudencia constante en la que puedan descubrirse determinadas tendencias de aplicación¹⁷⁶. La raíz de tal situación se ha vinculado, del mismo modo que se hace con respecto a las codificaciones generales americanas, con las escasas relaciones que tienen los Estados de América entre sí¹⁷⁷. Sin embargo, en el caso de la CIDIP la situación tendría que ir cambiando, sobre la base de unos

176. J. Samtleben, "Los resultados...", *loc. cit.*, señala que en la mayoría de los no muchos casos encontrados se produce una aplicación como "doctrina más recibida" en supuestos que no tienen ninguna conexión con otros Estados contratantes, criticando que la propia CIDIP limite la aplicación a las relaciones entre éstos.

177. *Ibid.*, comparando con la que muchos de ellos tienen con países europeos. También en R. Herbert, *op. cit.*, p. 20.

cuadros de incorporaciones considerablemente poblados (limitados, eso sí, a los convenios de CIDIP I y II) y en la medida en que progresen los diversos esquemas de integración en marcha.

28. Un párrafo aparte, todavía pequeño, merece la integración de Canadá en la O.E.A., ocurrida con posterioridad a la celebración de la CIDIP IV¹⁷⁸. Es de esperar que en próximas reuniones los delegados de este país enriquezcan los trabajos de la Conferencia, expectativa que se realza al comprobar su preocupación por la inclusión de la cláusula federal, cuando aún ostentaba la categoría de observador permanente. La no participación de Cuba también es un dato significativo, partiendo de la importancia histórica que ha tenido para la codificación del D.I.Pr. en América y el nivel doctrinal alcanzado con la incorporación del ideario manciniano. Las razones políticas que motivaron la "suspensión" de Cuba del sistema interamericano en 1962¹⁷⁹, son difícilmente sostenibles en una etapa

178. Para la situación anterior, *vid.* Pharand, "Canada and the OAS. The Vacant Chair Revisited", *Rev. gén. de droit (Ottawa)*, t. 17, 1986, pp. 429-454, citado por J. Samtleben, "Neue interamerikanische ...", *loc. cit.*, p. 664⁶¹.

histórica marcada por la "distensión" y el fin del enfrentamiento este-oeste. En consecuencia, en la medida en que se produzcan actitudes positivas recíprocas entre la O.E.A. (concretamente, de parte de los Estados Unidos) y el Estado caribeño, no debería pasar mucho tiempo para que éste se reincorpore a la Organización y, por ende, se integre en las labores de la Conferencia.

29. Volviendo a la participación de los países del *common law*, deben analizarse siquiera brevemente las consecuencias que de este dato se infieren, dejando de lado las cuestiones inherentes a "Teoría de Derecho comparado". En primer término, la actitud participativa de los Estados Unidos en la elaboración de muchos de los textos aprobados, tiene un marcado efecto sobre las materias elegidas para su reglamentación y sobre algunas disposiciones concretas contenidas en los convenios. De otro lado, la sempiterna postura refractaria frente a la posible incorporación a éstos, se ha visto morigerada tímida pero progresivamente, coincidiendo con una conducta similar en la Conferencia de La Haya de D.I.Pr.¹⁸⁰. Por lo demás, la presencia de los Estados

179. Vid. E.O. Rabasa, "Cuba y el Sistema Interamericano. Presencia de México", *Décimosegundo Curso C.J.I.* -1986-, pp. 137-150.

Unidos y los demás países angloparlantes¹⁸¹ ha provocado varios problemas de fondo, referidas algunas veces a la falta de equivalencia entre las instituciones comprendidas en las regulaciones¹⁸² y otras a la

180. Vid. ya K.H. Nadelmann, "Clouds over international efforts to unify rules of Conflict of Laws", *L.C.P.*, vol. 41, 1977, esp. pp. 73-84. Sobre la evolución de la participación norteamericana en la codificación internacional del D.I.Pr. vid. los sucesivos comentarios de P.H. Pfund en *Int. Lawyer* (vol. 19, 1985, pp. 505-591; vol. 20, 1986, pp. 623-631; vol. 21, 1987, pp. 1245-1254; y vol. 22, 1988, pp. 1157-1170) y el trabajo de P. Rogers, "Private International Law", *id.*, vol. 23, 1989, pp. 207-212.

181. Presencia más teórica que efectiva si se observa que sólo Trinidad y Tobago (CIDIP I, II y IV) y Jamaica (CIDIP I) han participado de las reuniones de la Conferencia.

182. Circunstancia que motivó, por ejemplo, a instancias de Estados Unidos, el dictado del Protocolo adicional a la Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero. D. Tallon, *loc. cit.*, señala con carácter general tres problemas básicos para la armonización del Derecho entre países del *common law* y del "Derecho civil": las diferencias lingüísticas, la discordancia de conceptos y la oposición de estilos.

utilización de diferentes procedimientos¹⁸³, y de orden técnico, como los problemas lingüísticos¹⁸⁴.

183. Es el caso de los problemas planteados en la redacción de la Convención sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros (CIDIP II). Las dificultades para elaborar un convenio con algún grado de globalidad sobre esta materia se advierten en varios puntos. Principalmente en las relaciones que el mismo guarda con otros textos aprobados por la CIDIP en otras reuniones, sobre todo con la Convención de la CIDIP III encargada de regular la competencia indirecta. Desde el comienzo de las deliberaciones en el seno de la Comisión I de la Conferencia de Montevideo, hubo intercambios de ideas sobre todos y cada uno de las disposiciones contenidas en el proyecto discutido. En primer lugar, la denominación finalmente dada a la Convención surgió de la firme postura de algunos participantes, en el sentido de considerar inapropiada la terminología utilizada en el proyecto, el cual hablaba de "reconocimiento y ejecución". Esto se explica por la difícil distinción entre ambos vocablos a la luz de las regulaciones internas y multilaterales americanas que, en general, sólo regulan la ejecución, pero no autoriza a reducir la cuestión a una "intrascendente cuestión semántica" (así la califica G. Parra-Aranguren, "La Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-II), *Codificación...*, cit., p. 407. En idéntico sentido, T.B. de Maekelt, *Conferencia...*, op. cit., p. 116. El cuestionamiento sobre la terminología empleada en el proyecto fue especialmente manifestado por H. Valladao. Vid. *Actas y documentos CIDIP-II*, vol. II, p. 78. Para la utilización de los vocablos mencionados en América latina, vid. F. González, *La reconnaissance et l'exécution des jugements civils en Amérique Latine: étude et comparaison des systèmes positifs en vue de l'élaboration d'une nouvelle convention multilatérale*, tesis de doctorado, Zurich, p. 198. No deja de ser curioso que después del extenso debate suscitado. la terminología cuestionada se haya "colado" en el art. 2.h).

184. Vid. J. Samtleben, "Neue interamerikanische...", loc. cit., pp. 72-73. De cualquier modo tales problemas no son exclusivos de la

Además de estos datos, cabe resaltar la proliferación en los Estados Unidos de doctrinas que han puesto en tela de juicio la configuración misma del mecanismo de localización y la aplicación neutral de la norma de conflicto. Teorías que plantean una justificación de la aplicación primordial de la *lex fori* generando un recurrente *home trend*¹⁸⁵, abren una brecha que es difícil cerrar entre este país y los que no participan de la familia del *common law*. Estos elementos, junto a la incidencia de la configuración federal, hace que la participación norteamericana se concrete en el sector de materias correspondientes al Derecho procesal civil internacional en sentido amplio. Ahora bien, es

CIDIP (A. Borrás, planteaba la producción de estos problemas respecto a la traducción al castellano de los Convenios de La Haya en las *Jornadas de D.I.Pr. convencional* celebradas en León en 1989 y también en "Unificación de la traducción al castellano de los Convenios de La Haya de Derecho internacional privado", *R.E.D.I.*, vol. XLII, 1990, pp. 703-705) ni se producen aquí sólo con relación al inglés. Valga como ejemplo las peripecias que tuvo que pasar la Comisión de Estilo de la CIDIP I para redactar los textos oficiales en francés, debido a la ausencia de la representación haitiana; el problema fue zanjado parcialmente con la ayuda de G.A.L. Droz, presente en nombre de la Conferencia de La Haya. Vid. G. Parra-Aranguren, "La Primera Conferencia...", *loc. cit.*, p. 306. Recuérdese también que el único idioma oficial de un Estado de la O.E.A. no reconocido del mismo modo por ésta es el holandés, hablado exclusivamente en Suriname.

185. Vid., por todos, A.A. Ehrenzweig, "The Lex Fori Basic Rule in the Conflict of Laws", *Michigan L.R.*, vol. 58, 1960, pp. 637 ss..

bueno recordar que el sistema federal no es exclusivo de los Estados Unidos y que también otros países se ven en problemas a la hora de obligar a sus Estados autónomos mediante convenios internacionales.

Sobre los problemas de fondo mencionados *ut supra*, cabe señalar que al aprobarse en Panamá las Convenciones sobre exhortos y sobre recepción de pruebas, los Estados Unidos cayeron en la cuenta de que para poder incorporarse a las mismas necesitarían algunas especificaciones y precisiones que "completaran" sus textos y armonizaran en cierto sentido el juego de los distintos sistemas en presencia. Fue así como en el transcurso de la elaboración del proyecto de temario para la CIDIP II se introdujeron, a instancias de ese país y con esa finalidad, sendos proyectos de Protocolos adicionales¹⁸⁶.

186. Cf. los elementos de la actitud norteamericana en B.M. Carl, "Service of Judicial Documents in Latin America", *Denver L.J.*, vol. 53, 1976, pp. 455-471, *id.*, "Unification of Private International Law in Western Hemisphere", *Liber Memorialis François Laurent...*, *op. cit.*, pp. 707-722, L.A. Low, "International Judicial Assistance Among the American States. The Inter-American Conventions", *Int. Lawyer*, vol. 18, 1984, pp. 705-714, y R.D. Kearney, "Developments in Private International Law", *A.J.I.L.*, vol. 81, 1987, pp. 724-739. Llama la atención el trabajo de S.B. Pierson, "The Five (sic) Inter-American Conventions: In Support of Their Ratification", *Law. Am.*, vol. 9, 1977, pp. 509-517.

Mientras el referido a la obtención de pruebas hubo de dejarse para la próxima convocatoria de la Conferencia, en virtud de ciertos problemas inconciliables en los sistemas probatorios vigentes en la mayoría de los países de América latina y los pertenecientes a la familia del *common law*¹⁸⁷, el relativo a exhortos o cartas rogatorias recibió la aprobación de la CIDIP II, constituyéndose en la puerta de entrada para la participación efectiva de los Estados Unidos en el llamado sistema interamericano de D.I.Pr.. Debe tenerse en cuenta que para incorporarse al Protocolo basta con haber firmado la Convención de Panamá (art. 8), aunque en la práctica esta exigencia se traduzca en una ratificación o adhesión¹⁸⁸.

187. *Vid.* la Resolución aprobada por la CIDIP II, en la cual se recomienda la realización de estudios a cargo de expertos designados por la Secretaría General de la O.E.A. y la posterior inclusión en el proyecto de temario de una futura reunión de la CIDIP (*Actas y documentos... (CIDIP-II)* cit., vol. I, pp. 345-346. Sobre las peculiaridades probatorias en Estados Unidos, *vid.* J.L. Siqueiros, "La cooperación procesal internacional. El sistema norteamericano del 'discovery'", *El Foro*, vol. 1, núm. 4, 1988, pp. 97-112 y M.M. Cohen y M.L. Hutzelmann, "Interamerican Cooperation in Obtaining Testimony. The Problems of Integrating Foreign Systems of Evidence. A Comparative Study of the United States, the Federal Republic of Germany and Mexico", *Law. Am.*, vol. 13, 1981, pp. 211-234.

188. Recordamos que Estados Unidos ha ratificado ambos textos pero sólo se vincula con aquellos países que también se incorporen a los dos.

Los objetivos perseguidos por Estados Unidos con el dictado de un Protocolo se concretaban principalmente en la adopción de formularios uniformes para las solicitudes de asistencia judicial y el establecimiento en términos claros y precisos de la obligatoriedad de la designación de una autoridad central en cada Estado parte. De otro lado, al preverse la impresión de los formularios en los cuatro idiomas oficiales de la O.E.A., se proponía la limitación del requisito de traducción sólo a un resumen de la demanda que ha iniciado el procedimiento en el cual se libra el exhorto. Además, el proyecto norteamericano incluía la eliminación del requisito de legalización cuando los documentos fueran remitidos por la autoridad judicial o la autoridad central del Estado de origen a la autoridad central del Estado requerido y la eximición de costas y costas¹⁸⁹. El texto aprobado adoptó las dos primeras propuestas mencionadas. En cuanto a la traducción, dispone que debe abarcar a la totalidad de la demanda, aclarando todos los documentos cuya copia debe acompañarse. La eliminación de la legalización no fue incluida, en tanto se matiza la

189. Cf. el Proyecto norteamericano en *Actas y documentos... (CIDIP-II)*, cit., vol. II, pp. 406-416 (418-424 en español) y la interesante defensa del delegado P. Trooboff, en *ibid.*, pp. 14-18.

eximición de gastos dejando a salvo los pagos exigidos por la ley del Estado requerido.

Con respecto al tema de la obtención de pruebas, los objetivos perseguidos por Estados Unidos al impulsar el dictado de un Protocolo se resumían básicamente en las mismos términos que motivaron el Protocolo sobre exhortos. En este caso, a la adopción de formularios uniformes, la obligatoriedad de la designación de la Autoridad central y disposiciones referentes a la tramitación y a las costas y gastos originados en ella, se adicionan algunas consideraciones específicas relativas a procedimientos o formalidades de la prueba propios del sistema del *common law* y a la intervención de agentes diplomáticos y consulares. Las propuestas formuladas por Estados Unidos con anterioridad a la CIDIP II, fueron pasadas por el tamiz primero de la Reunión de Expertos realizada en Washington del 9 al 15 de abril de 1980, a la luz de los postulados del Convenio de La Haya sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, de 18 de marzo de 1970¹⁹⁰, y

190. Cabe recordar que este Convenio vincula entre otros países a Estados Unidos, México y Argentina. Elementos para el análisis comparativo de ambos textos se encuentran en K. Schwappach, "The Inter-American Convention on Taking Evidence Abroad: A Functional Comparison with the Hague Convention", *New York Int.*

modificadas después por el C.J.I.. Con mayor o menor alcance, todas esas inquietudes fueron contempladas en el texto definitivo adoptado en La Paz¹⁹¹, sin que ello haya provocado hasta el momento el aluvión de incorporaciones que parecía aguardarse¹⁹².

30. También participan otros Estados que tienen *status* de observadores permanentes de la O.E.A.. Esta condición fue creada por la Asamblea General mediante la Res. AG/RES. 50 (I-O/71) y posteriormente hecha efectiva por el Consejo Permanente (Resolución CP/RES. 52 (61/72), de 19 de enero). Básicamente, se establece una distinción según la cual los Estados americanos no miembros de la O.E.A. pueden alcanzar dicha condición sin ningún requisito específico, mientras que si se trata de un

L.R., 1991-4, pp. 70-76. También en A.M. Garro, "Armonización...", *loc. cit.*.

191. Las discusiones se detallan en G. Parra-Aranguren, "La Tercera Conferencia ...", *loc. cit.*, pp. 68-98.

192. *Vid.*, por ejemplo, los elogiosos conceptos vertidos por M. Solari Barrandeguy, "Significado y trascendencia del Protocolo de La Paz sobre recepción de Prueba en el Extranjero", *Rev. Urug. Der. Proc.*, 1984, pp. 487-494. Ni siquiera Estados Unidos mostró interés en este sentido (*vid.* J. Samtleben, "Neue interamerikanische...", *loc. cit.*, p. 28), a pesar de la recomendación de la American Bar Association, aprobada en la reunión celebrada en Los Angeles en noviembre de 1989. *Vid. Int. Lawyer*, vol. 24, 1990, pp. 880-891.

Estado no americano se le impone la participación en los programas de la Organización. No obstante, unos y otros deben presentar una solicitud formal, la cual en caso de resolverse favorablemente faculta a los primeros para actuar en todos los órganos, organismos y entidades de la O.E.A., mientras que respecto de los segundos el Consejo determina ante cuál o cuáles de ellos se entienden acreditados, teniendo en cuenta el interés que manifiestan en su respectiva solicitud¹⁹³. La actuación concreta de los Observadores en cada uno de los órganos, organismos y entidades, debería ser regulado por cada uno de éstos en los reglamentos respectivos¹⁹⁴.

España fue el primer país extra-americano en obtener la condición de Observador permanente de la O.E.A., según Resolución 54 - 62/72, de 2 de febrero, manteniendo en Washington una Misión observadora permanente, independiente de su embajada en Estados Unidos, únicamente dedicada a los asuntos interamericanos¹⁹⁵. En

193. La participación de estos Estados en la CIDIP es con voz pero sin voto y puede extenderse incluso a aquellos que no sean observadores permanentes de la Organización, siempre que manifiesten su interés y cuenten con la pertinente autorización del Consejo Permanente. *Vid.* D. Opertti Badán, "La codificación...", *loc. cit.*.

194. *Vid.* la Reseña de las actividades jurídicas de la O.E.A., en *An. Jur. Interam.* 1958-1979, pp. 229-230.

la actualidad revisten tal carácter, además, Austria, Bélgica, Egipto, Francia, Grecia, Guyana, Holanda, Israel, Italia, Japón, Portugal, República Federal de Alemania, Santa Sede y Suiza. La presencia de los Observadores en el ámbito específico de la CIDIP ha sido importante por la calidad que han tenido algunas de las comitivas enviadas¹⁹⁶ y por la posibilidad de que los Estados asistentes se vinculen a alguna convención de la CIDIP, camino que hasta ahora sólo ha recorrido España.

195. Para la relación de España con la O.E.A., *vid.* R. de Miguel Egea, "Los observadores permanentes ante la Organización de los Estados Americanos", *Quinto Curso C.J.I.* (1978), Washington, 1980, pp. 247-277, esp. 266-268. En un sentido más general, *Sistema interamericano...*, *cit.*, pp. 117-126.

196. Sin perjuicio de la calidad de todas las delegaciones asistentes, cabe destacar la aportación que ha significado la presencia de la representación de la Conferencia de La Haya.

III. La CIDIP frente a los problemas y las soluciones de los procesos de codificación internacional

1. LAS OPCIONES EN EL AMBITO INTERNACIONAL

A) *Los elementos metodológicos*

31. Parece factible resumir brevemente las opciones en presencia al encarar un proceso de codificación internacional, en el planteamiento de las cuestiones que han ocupado más páginas en la literatura jurídica específica. De esa descripción, pueden extraerse varias conclusiones más acerca de la situación que ocupa la CIDIP en el campo de la codificación internacional del D.I.Pr.. Para comenzar, cabe señalar la opción entre codificar la totalidad del D.I.Pr. o solamente algunas materias escogidas, que se planteó desde el Primer Congreso Sudamericano¹⁹⁷ y que sería una constante en la definición de la metodología de codificación en los

197. Queda claro que el carácter "general" admite grados, dependiendo de la noción que se tenga sobre el contenido del D.I.Pr.. La unificación de Montevideo, por ejemplo, alcanzó al Derecho civil, mercantil, procesal y penal, regulándose separadamente algunas materias específicas: marcas, patentes, derechos de autor y ejercicio de profesiones liberales. Sin embargo, no sería dudoso calificar como general a una codificación que abarcara "sólo" las materias civil y procesal.

distintos foros encargados de esa tarea. Lógicamente, la elección del criterio de la generalidad se compadece con la actitud idealista del internacionalismo más extremo¹⁹⁸.

Esto se puso de manifiesto en las primeras sesiones de la Conferencia de La Haya, donde se analizó la decisión adoptada por los Estados sudamericanos en Montevideo, escogiéndose la postura contraria a pesar de la insistencia de T.M.C. Asser en favor de la generalidad¹⁹⁹. A partir de allí esta cuestión quedaría zanjada para la Conferencia, manteniéndose invariable hasta la actualidad²⁰⁰. Por el contrario, en América sólo después de años de discusiones se llegó a estimar más conveniente esta solución para desarrollar el "sistema" de D.I.Pr. "interamericano". El Código de Bustamante en 1928 y los Tratados de Montevideo en 1939 y 1940, se mantuvieron fieles a la opción amplia, aunque el primero

198. Precisamente en este idealismo encuentra J.D. González Campos, "La revolución...", *loc. cit.*, p. 103, la originalidad de la propuesta de M. Silvela al Gobierno francés.

199. *Ibid.* 108-109. Cf. R. Viñas Farré, *op. cit.*, pp. 50-51 y, más detenidamente, en J.H.A. van Loon, "Quelques réflexions...", *loc. cit.*, pp. 1134-1138.

200. J.H.A. van Loon, "Quelques réflexions...", *loc. cit.*, pp. 1139-1144.

incluyó todo en un mismo texto y la obra de Montevideo se plasmó en Tratados individuales.

Es evidente que hoy en día nadie discute que cuando se trata de regular a escala internacional las relaciones de tráfico privado externo debe hacerse de manera parcial y atendiendo a necesidades previamente identificadas. La pretensión de alcanzar una realización unitaria con vocación de vigencia ilimitada en el tiempo, no parece compadecerse con una realidad salpicada con el fortalecimiento de las codificaciones estatales. De otra parte, la obtención de un número de incorporaciones relevante, proceso siempre lento y dificultoso aún en la más parcial de las codificaciones, tiene que ser forzosamente más complicado respecto de las generales. La aceptación limitada de los grandes textos americanos, no obstante haberse elaborado en una época más propicia para las veleidades internacionalistas, confirma la afirmación²⁰¹.

201. En este sentido, puede decirse que varios convenios de la CIDIP han alcanzado el *status* de "verdadera codificación" al que aludía R. Ago, "La codification...", *loc. cit.* Mas, como señaláramos, subsisten todavía ciertos rasgos de casualidad y timidez en la aplicación de los mismos que tendrían que ir remitiendo.

El problema entonces se centra, como sucede desde antaño, en la elección de las materias²⁰². Básicamente son dos los requisitos que debe reunir una materia determinada para merecer el costoso trabajo que supone su codificación internacional: la necesidad de ésta y las posibilidades de arribar a un resultado concreto satisfactorio²⁰³. De los dos, el primero es menos objetivo, ya que depende de la voluntad política de los Estados. Puede adquirir a veces unos ribetes de cierta urgencia -como ha sucedido con algunos temas relativos a la protección internacional de los menores- y, en general, se mide con criterios cuantitativos y cualitativos en función de los intereses comunes de los Estados implicados. El segundo hace alusión al grado de particularismo que cada materia entraña y a la consiguiente dificultad de arribar a un denominador

202. La utilización del método comparativo, entonces, es inevitable.

203. Parcialmente se trata de los requisitos de deseabilidad y posibilidad de los que hablaba R. David, *Tratado...*, op. cit., esp. 138 y 171-172. Cf. F. de Solá Cañizares, *Iniciación al Derecho comparado*, Barcelona, 1954, concr. p. 113 y J. Castán Tobeñas, "Horizontes actuales de la unificación supranacional del Derecho", *R.G.L.J.*, vol. 205, 1958, pp. 389-403.

común. Ambos requisitos son susceptibles de variar con el tiempo²⁰⁴.

32. En segundo lugar, corresponde situar las opciones metodológicas abrazadas por la CIDIP en el amplio panorama que brindan las otras experiencias de producción jurídica convencional. Esto significa ahondar un poco en las diferencias que presentan entre sí los procedimientos elegidos para la unificación, los cuales, aunque muchas veces se presenten en una forma difícil de individualizar, responden a realidades y finalidades diversas. Nos referimos a los distintos campos que puede abarcar la codificación internacional del Derecho. Básicamente, existe una considerable distancia entre buscar la unificación del D.I.Pr. y la del Derecho privado material o alguna de sus partes²⁰⁵. Algo similar

204. J.H.A. van Loon resalta este dato en la evolución de la Conferencia de La Haya, dentro de lo que denomina "dimensión *ratione temporis* de la unificación progresiva" en esa institución. "Quelques réflexions...", *loc. cit.*, p. 1140.

205. *Vid.*, A. Malintoppi, "Les rapports entre droit uniforme et droit international privé", *R. des C.*, t. 116 (1965-III), pp. 10-15 y A. Marín López, "Unificación del Derecho privado material y unificación del Derecho internacional privado", *R.D.E.A.*, núm. 18, 1967, pp. 30-37. R. Demogue se refiere en este caso a los distintos "grados" de unificación. *Vid.* *L'unification internationale du droit privé*, París, 1927, pp. 152-161. Más recientemente, S. Bariatti, *L'interpretazione delle*

sucede con el segundo escalón de esta metodología, es decir, con la decisión que debe adoptarse una vez que se ha elegido descartar la codificación sustancial y acometer la de la específica rama jurídica que nos ocupa²⁰⁶. Allí se abre un abanico de posibilidades entre los distintos mecanismos jurídicos disponibles - convenios, convenios modelo, leyes uniformes, leyes modelo, bilateralización de convenios multilaterales, etc.²⁰⁷-, que están en función más del grado de

convenzioni internazionali di diritto uniforme, Padua, 1986, pp. 18-40.

206. Para F. Rigaux, el recurso a la armonización del D.I.Pr. es residual; sólo procede en aquellos casos en los cuales no se juzga necesaria la unificación del Derecho privado material. Vid. "L'harmonisation des règles de conflits de lois et de jurisdiction dans les divers groupes régionaux d'Etats", *Rapport belges au VI^e Congrès international de droit comparé*, Bruselas, 1962, p. 162. En el mismo sentido, F. Knoepfler, *Les nouvelles conventions de La Haye de droit international privé. Etude de leurs clauses d'adhésion et de leur rôle de lois-modèles* (tesis), Neuchatel, 1970, p. 12. La palabra "nécessaire" no parece la más adecuada.

207. Para una distinción entre estos métodos y la historia de su producción en la Conferencia de La Haya, vid. R. Viñas Farré, op. cit. Asimismo, A. Marín López, "La Conferencia...", loc. cit. y M. Aguilar Benítez de Lugo, op. cit., pp. 181-183. Deben mencionarse además los métodos de reglamentación característicos (no exclusivos) de la dimensión institucional del D.I.Pr.: los reglamentos y las directivas. Aún a sabiendas de la falta de precisión que implica, en el presente trabajo se identifica, por lo general, la codificación internacional del D.I.Pr. con el método de las convenciones internacionales.

compromiso que los Estados están dispuestos a asumir que del nivel de unificación que se pretende. La percepción de distintas posibilidades es anterior a la historia de la Conferencia de La Haya²⁰⁸.

La dicotomía central sobre este punto se ha planteado en torno al binomio "convenio multilateral - ley modelo" (o convenio - ley uniforme en algunos casos), que alcanzó máxima difusión a partir del memorándum de 15 de octubre de 1956, presentado por la delegación norteamericana a la Octava Sesión²⁰⁹. En el mismo se planteaba si no sería deseable que la Conferencia elaborara "*projets alternatifs sous forme de lois uniformes*" en lugar de convenios, especialmente en los casos en los cuales la materia a unificar no "impusiera" la reciprocidad²¹⁰.

208. Ya era sugerida por T.M.C. Asser, en "De l'effet ou de l'exécution des jugements rendus à l'étranger en matière civile et commerciale", *R.D.I.L.C.*, 1869, concr. pp. 82-84 y en "Droit international...", *loc. cit.*, pp. 16 ss. Cf. K.H. Nadelmann, "Méthodes d'unification du droit international privé. La législation uniforme et les conventions internationales", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. XLVII, 1958, p. 39.

209. Conférence de La Haye de droit international privé, *Documents relatifs à la huitième session*, pp. 230-231.

210. Una visión contemporánea de la cuestión se ve en G.A.L. Droz, "La Conférence de La Haye de droit international privé et les méthodes d'unification...", *loc. cit.*, *passim* y en *id.*, "Regards...", *loc. cit.*, pp. 375 ss..

La idea esgrimida en lo que concierne a esta dimensión metodológica era la de lograr el máximo de incorporaciones posibles, objetivo que exigía la flexibilización de los requisitos e, indirectamente, de los contenidos. De este modo, además, podía propugnarse la ampliación geográfica de un organismo restringido como la Conferencia de La Haya²¹¹. El problema de fondo que se suscita radica en que la uniformidad buscada es, en el mejor de los casos, sólo parcial²¹². La exposición de éxitos conseguidos en Estados Unidos con este método, desarrollada hasta el cansancio por sus sostenedores no es en absoluto extrapolable. Sucede, y así se ha entendido en los principales foros²¹³, lo mismo que en otros aspectos del Derecho y concretamente del D.I.Pr.: la realidad jurídica y legislativa norteamericana

211. Vid. K.H. Nadelmann, *op. cit.*, "Uniform Legislation Versus International Conventions Revisited", *Ann. UNIDROIT* 1967-68, t. II, pp. 173-195 e *id.* y W.L. Reese, "The American Proposal at the Hague Conference on Private International Law to Use the Method of Uniforms Laws", *A.J.C.L.*, vol. 7, 1958, pp. 239-247.

212. Vid. M. Matteuci, "Introduction à l'étude systématique du droit uniforme", *R. des C.*, t. 91 (1957-I), pp. 389 ss. y R. David, "The International Unification...", *loc. cit.*, p. 104.

213. El recurso a la ley modelo es en la actualidad limitado. El caso más sobresaliente que se nombra es el de la Ley modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional, aprobada por la UNCITRAL el 21 de junio de 1985.

responde a concepciones e intereses determinados bastante homogéneos, sólo extensibles a escala internacional en algunas materias y a algunos grupos de países también determinados²¹⁴.

La ley modelo en cuanto tal no deja de ser una especie de "recomendación" dirigida a los Estados miembros de la organización que la adopta, del tipo de las que realizan organismos gubernamentales o no gubernamentales. Para los terceros Estados, a su vez, desempeña el mismo papel de ejemplo que puede cumplir un convenio multilateral²¹⁵. Por eso cuando se traza un antagonismo entre el "imperialismo" de los convenios - especialmente de los que contienen cláusulas de alcance general- y el "respeto" al legislador nacional que muestra la ley modelo, deben balancearse varios elementos. De un lado, si se cree que la unificación convencional es posible y deseable, ¿por qué dejar sus resultados a mitad de camino? La soberanía legislativa de cada Estado siempre tendrá las armas suficientes para expresar su desacuerdo con la materia escogida, con el

214. *Vid.* F. Knoepfler, *op. cit.*, pp. 78-84.

215. Las recomendaciones efectuadas en la CIDIP, instando a los Estados miembros a incorporarse a distintos textos multilaterales surgidos de otras organizaciones cumple este papel.

método utilizado o, en definitiva, con el contenido material del convenio, a través de la no incorporación, las reservas que el convenio permita o la denuncia en su caso. De otro, resulta contradictorio que el mismo legislador que da el sí a la incorporación a un convenio de los llamados *erga omnes*, alce la voz contra la "invasión" de su soberanía²¹⁶.

Finalmente, el hilo más fino en la definición de este proceso estriba en la elección de una metodología directa o indirecta para la elaboración de las normas de D.I.Pr.²¹⁷. Aunque los ejemplos de convenios que utilizan exclusivamente o como regla general algún tipo de normas no escasean, puede afirmarse que hoy en día sendas metodologías conviven en multitud de textos convencionales²¹⁸, del mismo modo que sucede en varios

216. Una pregunta provocativa en este sentido planteó J.D. González Campos en un reciente coloquio científico (Vid. nuestra crónica "Jornadas sobre España y la codificación internacional del D.I.Pr. (San Lorenzo de El Escorial, 13 y 14 de diciembre de 1991)", *R.E.D.I.*, vol. XLIV, 1992, p. 288), referida al tenor de la actitud de la Conferencia de La Haya al plantear la sustitución del D.I.Pr. autónomo. El rechazo -o al menos una cierta insensibilidad- frente a este tipo de reglamentaciones convencionales se produce más en la esfera de atribuciones del juez que en la del legislador, lo cual genera difíciles situaciones de incerteza.

217. Vid. A. Marín López, "Unificación...", *loc. cit.* y F. Rigaux, "Droit privé matériel...", *loc. cit.*

218. La aplicación de normas materiales convencionales no está exenta de problemas, sobre todo

convenios de la CIDIP. Es común encontrarse con materias donde se regula a la vez el Derecho aplicable (mediante normas directas o indirectas) y la competencia judicial o administrativa²¹⁹. Incluso se ha convertido en un saludable hábito que típicas normas materiales como son las calificaciones autárquicas incluídas en los convenios, aparezcan en la regulación de las más variadas materias²²⁰. De este modo se tiende a evitar que eventuales divergencias interpretativas redunden en una falta de uniformidad en la aplicación de los convenios en los distintos Estados parte²²¹, a la vez que el D.I.Pr.

provenientes de la falta de una jurisdicción común. *Vid.* H. Batiffol, "Le pluralisme des méthodes en droit international privé", *R. des C.*, t. 139 (1973-II), pp. 113-121. Acerca de la justificación de estas normas, *vid.* H. Bauer, "Les traités et les règles de droit international privé matériel", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. LV, 1966, esp. pp. 550 ss..

219. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que dentro de los convenios (bi o multilaterales) reguladores de relaciones de tráfico privado externo, el porcentaje de los que se refieren al Derecho aplicable es relativamente pequeño, comparado con los que rigen la condición de los extranjeros o el reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. *Vid.* B. Audit, *op. cit.*, p. 37.

220. *Vid.* M. Aguilar Benítez de Lugo, *op. cit.*, pp. 194-196.

221. Sobre la obligación de los Estados de aplicar de modo uniforme las normas uniformes, *vid.* S. Bariatti, *op. cit.*, esp. pp. 62-72. Allí se encuentran, además, larguísimas listas con la apabullante bibliografía sobre el particular.

va ganando en la definición de conceptos propios, esto es, ajustados a la heterogeneidad de las relaciones que regula²²².

B) *La definición del ámbito espacial de aplicación*

33. La celebración de convenios internacionales de D.I.Pr. entre un grupo regional o entre dos Estados, se presenta como una opción frente a la acción desarrollada por los organismos de carácter o vocación universal²²³. La realidad demuestra una acusada nota de relatividad en esta opción, ya que la elección de una vía no cierra las otras y, en algunas materias, parece exacerbarlas.

222. La elaboración o el "descubrimiento" de conceptos propios por vía interpretativa puede resultar, en cambio, perjudicial para la seguridad jurídica. Vid. M. Virgós, *Lugar de celebración y de ejecución en la contratación internacional*, Madrid, 1989, pp. 23-24. Vid. también A.E. von Overbeck, "Essai sur la délimitation du domaine des conventions de droit international privé", *Ius et lex. Festschrift Gutzwiller...*, op. cit., pp. 328-329.

223. No hay dudas respecto a que el carácter "regional" admite diversos fundamentos e intensidades. Cf. F. Rigaux, "L'harmonisation...", loc. cit., p. 155. La diferenciación entre organismos de carácter universal y los que sólo poseen una vocación en tal sentido, no necesita aclaraciones. Vid., no obstante, H.U. Jessurun d'Oliveira, "Universalisme...", loc. cit., p. 357 y K.H. Nadelmann, "Méthodes...", loc. cit., p. 37, refiriéndose a la Conferencia de La Haya como una *limited company* de fin universal.

Paradójicamente, cuanto más "importante" sea una materia o, mejor dicho, cuanto más alto sea el grado de coincidencia respecto de la necesidad de su regulación, mayor es el riesgo de contradicciones y solapamientos entre la normas internacionales que se elaboran²²⁴. Ello se debe en parte a que los organismos internacionales - universales, regionales o subregionales- suelen entrar en una especie de competencia, las más de las veces deliberadamente²²⁵.

Debe entenderse sin embargo, que cada organización regional o grupo regional de Estados aspira legítimamente a consolidar una estructura jurídica más o menos completa y satisfactoria para las relaciones privadas internacionales que se producen en su seno²²⁶. Es difícil

224. F. Rigaux, *ibid.*, pp. 159-162. Vid. también J. Limpens, "Relations...", *loc. cit.*. K.H. Nadelmann, "Conflicts between Regional and International Work on Unification of Rules of Choice of Law", *Harvard Int. L.J.*, vol. 15, 1974, pp. 213-237 (esp., sobre la coordinación de esfuerzos, pp. 233-237) y G.A.L. Droz, "L'harmonisation des règles de conflits de lois et de juridictions dans les groupes régionaux d'Etats", *Rapport généraux au VI^e Congrès international de droit comparé (Hambourg, 1962)*, Bruselas, 1964, esp. pp. 421 ss.

225. H.U. Jessurun d'Oliveira, subraya esta paradoja que provoca que, mientras se busca la uniformidad, se llegue a una farragosa diversidad por culpa de la coincidencia en el tratamiento de los temas. "Codification...", *loc. cit.*, p. 122.

226. Los aspectos políticos de este problema son descritos con cierta acidez por F. Majoros, "Zur Krise

hallar una justificación de fondo que fundamente la "obligación" de algunos organismos internacionales de no regular determinadas materias porque éstas ya han sido o van ser objeto de convenios en otra sede de carácter o vocación universal. Existe, eso sí, una evidente cuestión de ahorro de esfuerzos, de tiempo y de recursos económicos (además de los problemas de aplicación), que aconseja no multiplicar los trabajos sobre una misma materia. Pero son dos cosas diferentes. En última instancia, la decisión en cada caso compete al organismo regional, el cual debería obrar guiado por dos parámetros: la pertenencia de sus miembros a la organización "universal" (o el fácil acceso a sus producciones jurídicas) y la presencia de elementos regionales característicos²²⁷.

Esta complicada situación se da no sólo por la acción contemporánea o sucesiva de distintos órganos codificadores, sino también por el replanteamiento total

der internationalen Kodifikationspolitik", *Zeitschrift für Rechtspolitik*, vol. 6, 1973, pp. 65-73, esp. 72.

227. Un tercer parámetro podría ser el elevado nivel de integración regional, tal vez el único argumento para justificar que la C.E.E. "quite" materias a la Conferencia de La Haya. En el caso del Consejo de Europa la justificación es realmente difícil, razón que ha llevado a un acuerdo de colaboración entre ambos organismos.

o parcial de un tema dentro del mismo organismo²²⁸. Paralelamente, el secular recurso al convenio bilateral mantiene siempre su vigencia, sobre todo en virtud de su idoneidad -al menos teórica²²⁹- para adaptarse a los criterios cuantitativos y cualitativos que hemos mencionado. En estas circunstancias se generan determinados problemas técnicos relativos a la incorporación y aplicación de los convenios que se comentan en el epígrafe siguiente. La prevención de los conflictos entre convenios, ya sea mediante acuerdos entre los órganos encargados de la codificación o a través de la redacción de cláusulas de compatibilidad adecuadas, constituye sin dudas un mejor camino que las dolorosas "terapias" a *posteriori*. Sin embargo, historia y actualidad de la codificación internacional del D.I.Pr. están llenas de ejemplos de falta de previsión y de previsiones erróneas.

228. V. Fuentes Camacho, *loc. cit.*.

229. Por limitado que sea su ámbito material de aplicación, el convenio bilateral siempre debería resultar beneficioso para la correcta regulación de las relaciones, sobre todo cuando el volumen de éstas es elevado entre los países implicados. En este sentido, F. Rigaux, *op. cit.*, pp. 167-168. Contra: G.A.L. Droz, "L'harmonisation...", *loc. cit.*, pp. 423 ss.

2. LIMITACIONES DE LA VIA CONVENCIONAL PARA LA REGULACION DEL TRAFICO PRIVADO EXTERNO

A) *La codificación estatal frente a la codificación internacional*

34. En la base de todo el planteamiento genérico de esta cuestión existe un falso problema metodológico: el que se refiere a la "opción" entre la codificación estatal y la codificación internacional. Dicha observación de fondo se centra en la conocida discusión en torno a la teoría de las fuentes del D.I.Pr. El problema es tan antiguo como los primeros intentos de unificar las normas de D.I.Pr. a escala internacional²³⁰, pero sigue planteándose cada vez que se encara o analiza un proceso de codificación estatal²³¹. En la actualidad,

230. Vid. H. Batiffol y P. Lagarde, *Droit international privé*, t. I, 7ª ed., París, 1981, pp. 24-26. Vid., asimismo, B. Nolde, "La codification...", *loc. cit.*, pp. 303-307.

231. E. Vitta, señala como uno de las principales razones para acometer la reforma del sistema estatal de D.I.Pr., la oportunidad de llevar a cabo una adecuación a los Convenios. Vid. "Per una riforma del diritto internazionale privato", *Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano* (a cura del Consiglio nazionale del notariato), Milán, 1986, 285-302, esp. 289 ss. En la misma obra, vid. asimismo A. Giardina, "Criteri ispiratori e technique di una eventuale riforma", pp. 303-354, esp. 310-311.

el planteamiento gira en torno a las relaciones que se establecen entre los dos ámbitos de producción, dirigiéndose hacia las opciones de regulación de los condicionamientos recíprocos²³². Más tradicionalmente la tarea de los estudiosos se basaba en defender o atacar la conveniencia de la codificación del D.I.Pr. en general²³³ o en intentar discernir las bondades o limitaciones de uno u otro mecanismo, cuestión a la que nos referiremos sólo limitadamente.

En este sentido, la unificación se vislumbraba, de un lado, como un mecanismo más acorde con el declamado fin del D.I.Pr. de buscar la armonía internacional de las normas de esta disciplina, dato que se realzaba frente al efecto particularizador de la codificación estatal²³⁴. Mientras el legislador estatal tiende a construir el edificio del sistema de D.I.Pr. sobre los cimientos y con los materiales de su propio ordenamiento, el ámbito

232. E. Vitta, "International Conventions...", *loc. cit.*, esp. pp. 164 ss., desmenuza criteriosamente las influencias que sobre los sistemas nacionales de D.I.Pr. ejercen los convenios de D.I.Pr. y los convenios de Derecho uniforme.

233. Si algo tienen en común ambas dimensiones de la codificación del D.I.Pr. es la "*communauté des difficultés*" que presentan. H. Batiffol, "Codificación y unificación...", *loc. cit.*, p. 135.

234. Cf. M. Aguilar Navarro, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 477 ss.

internacional se demuestra como más acorde al carácter del objeto de la disciplina²³⁵. Muchos son los mecanismos y las combinaciones posibles a utilizar en la esfera internacional. Depende de las decisiones que se tomen respecto del ámbito material y espacial que se pretende abarcar con un convenio, del alcance restringido a los participantes o general que se quiera dar a sus disposiciones, de los métodos y las técnicas que se elijan para su elaboración, el impacto que podrá causar el mismo en las regulaciones estatales de D.I.Pr.²³⁶. Incluso, si la actividad unificadora se encamina a poner en común normas de Derecho privado material relativas a alguna materia, podría pensarse -y, de hecho, se ha pensado ilusionadamente- en la supresión definitiva de producción de conflictos de leyes. La historia de todos los esfuerzos, más o menos limitados, que persiguieron ese norte, refleja meridianamente la imposibilidad de coronar con éxito una empresa así concebida²³⁷.

235. Vid. M.H. van Hoogstraten, "La codification par traités...", *loc. cit.*, p. 354. En un sentido más amplio, sobre las implicaciones del carácter internacional del D.I.Pr., vid. J.A. Carrillo Salcedo, *Derecho internacional privado. Introducción a sus problemas fundamentales*, 3ª ed., Madrid, 1983, pp. 24-29.

236. Vid. E. Vitta, "International Conventions...", *loc. cit.*, *loc. cit.*

35. Con un criterio diametralmente opuesto, se ha profundizado en la idea de señalar las virtudes de la codificación estatal frente a las dificultades y limitaciones que aparecen en la unificación. La evidencia de la actitud emprendida por una más que considerable cantidad de países, exime de la repetición de las primeras. Entre las últimas se han destacado cuestiones tales como la rigidez de los convenios, la erosión causada en la calidad de sus respuestas por las sucesivas transacciones entre los Estados parte, el escaso número de incorporaciones, los conflictos de convenciones relativas a un mismo tema, la desunificación producida por las diversas interpretaciones estatales y la falta de adecuación del proceso unificador a un mundo caracterizado por cíclicas irrupciones del intervencionismo estatal²³⁸. Estos y otros elementos han causado tanto un cierto

237. Ya hace mucho tiempo que E. Bartin, publicaba su famoso trabajo *cit.*. Más modernamente se ha expresado P. Lalive, "Tendances et méthodes...", *loc. cit.*, pp. 89-90, para quien una unificación internacional completa del Derecho material posee un "caractère tout à fait utopique, au mauvais sens du terme, et probablement peu souhaitable". Cf. A. Malintoppi, *loc. cit.*

238. *Vid.*, por todos, F. Majoros, *Les Conventions internationales...*, *op. cit.*, esp. pp. 67-82. En el concreto ámbito del D.I.Pr., puede consultarse una lista sintética de estas deficiencias en A.E. von Overbeck, "Les questions générales...", *loc. cit.*, pp. 42-45.

escepticismo respecto de la codificación internacional²³⁹ cuanto un redescubrimiento de los aspectos positivos de la desarrollada en fuente estatal²⁴⁰, amén de la posibilidad que ésta presenta de incorporar soluciones escogidas de convenios a los cuales el Estado no se ha incorporado porque no puede o porque no lo desea. Paralelamente, se ha señalado como causa principal del auge de la codificación estatal, la diversidad que emerge de una codificación internacional sobredimensionada.

Constatada objetivamente la coexistencia de los distintos ámbitos de producción del D.I.Pr., y habida cuenta de su complementariedad²⁴¹, es preciso resaltar la

239. En las *Jornadas de D.I.Pr. convencional español* (León, 1989), se discutieron en general todas estas consideraciones. En la ponencia central, J.D. González Campos, apuntó las falencias de la vía convencional y señaló la ineludible obligación de realizar rectificaciones de fondo y de procedimiento.

240. Claramente lo expresa E. Jayme, "Considérations historiques...", *loc. cit.*, p. 61: "Les Etats maintiennent les conventions de droit privé pour des raisons politiques bien qu'elles soient, souvent, totalement dépassées. C'est pour cela que, vis-à-vis des traités internationaux, la codification nationale ne deviendra jamais obsolète". En las conclusiones del mismo trabajo (p. 87), Jayme vuelve a insistir sobre la compatibilidad de ambas vías. Parecida, aunque algo más matizada, es la opinión de A.E. von Overbeck, "Les questions générales..." *loc. cit.*, pp. 43. Cf. H.U. Jessurun d'Oliveira, "Codification...", *loc. cit.*, pp. 123-124.

241. Cf. A. Migliazza, "Problemi generali di una nuova codificazione del diritto internazionale privato",

esterilidad de las discusiones antes resumidas. Mucho más fructífero y hasta mucho más lógico, que detenerse a remarcar defectos y virtudes recíprocas, es dedicar los esfuerzos a desentrañar los modos de armonizar contenido y funcionamiento de ambas esferas de legislación, partiendo de la base de los diferentes criterios que suelen informar la construcción y la aplicación práctica de las normas de sendos círculos²⁴².

Problemi di riforma..., op. cit., pp. 355-401, esp. 363-365 ("l'una non può che essere integrata dall'altra"). En el mismo sentido, A.S. Hartkamp, "International Unification and National Codification and Recodification of Civil Law: the Dutch Experience", *Questions of Civil Law Codification*, Budapest, 1990, pp. 67-73.

242. Cf. A.L. Calvo Caravaca, "Las fuentes del Derecho internacional privado", *R.G.D.*, 1986, pp. 5051-5093, esp. 5069 ss. Por su parte, F. von Schwind, "Aspects et sens...", loc. cit., pp. 121-124, ha señalado el peligro que conlleva mezclar reglas nacionales e internacionales y la consecuente necesidad de mantener la independencia de los dos dominios. En el mismo sentido se expresa F. Rigaux, "Quelques réflexions de nature méthodologique sur la codification du droit international privé en 1984", *Problemi di riforma...*, op. cit., p. 409, afirmando que es necesario dejar a los convenios o bien a la evolución de la jurisprudencia, todo lo que se refiere a "conflictos de sistemas". Desde la específica perspectiva de nuestro trabajo, nos preocuparemos especialmente en este punto por observar las consecuencias que sobre estas relaciones tiene la elección de un determinado modelo de codificación estatal, problema desarrollado con más detenimiento en el capítulo siguiente.

36. Los antiguos Códigos describen un camino paralelo, coincidente o divergente, pero casi siempre ajeno al de las convenciones internacionales. Los problemas para dar aplicación práctica a éstas han supuesto siempre una gran dificultad, pese a la extendida presencia de disposiciones constitucionales que ordenan la supremacía de las disposiciones en ellas contenidas sobre las normas de fuente interna. El problema se ahonda con la proliferación de instrumentos internacionales²⁴³, cuyos ámbitos materiales suelen superponerse. No es demasiado extraño que en la práctica tribunalicia de un país se ignore el cumplimiento de obligaciones asumidas con la incorporación a instrumentos internacionales²⁴⁴,

243. En esta proliferación estriba la gran diferencia entre el planteamiento actual del problema y lo que sucedía en otras épocas. Vid. K. Siehr, "Codificazione del diritto internazionale privato e convenzioni internazionali", *Problemi di riforma...*, op. cit., pp. 497-507.

244. Un ejemplo claro viene dado por las dificultades evidenciadas en España para la aplicación de los convenios sobre *legal kidnapping* a los que este país se ha incorporado, y que motivaran profundas reflexiones en las *Jornadas sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores* (Toledo, 1990). Vid. crónica de J. Labrador Encinas, *R.E.D.I.*, vol. XLII, 1990, pp. 329-330 y las opiniones de J.C. Fernández Rozas, en J.D. González Campos y otros, op. cit., pp. 134-135, y S. Álvarez González, *Proyecto docente y de investigación*, inéd., Santiago de Compostela, 1990, pp. 61-62. Sobre las vacilaciones de la jurisprudencia española expresa en multitud de autos y sentencias, vid. las notas de A. Borrás, *R.E.D.I.*, vol. XLII, 1990, pp. 247-249 y vol. XLIII, 1991, pp. 507-510, y D. Fernández Arroyo,

en lo que se ha caracterizado con acierto como una "insensibilidad de los mecanismos autónomos para poner en marcha las exigencias de los convencionales"²⁴⁵.

Incluso, cuando los convenios vienen a reemplazar la legislación interna sobre determinada materia, en razón de la inserción de una cláusula de alcance general (*erga omnes*), los tribunales se muestran reacios a aceptar esta situación y los legisladores estatales a resignar su autonomía en la factura de las normas²⁴⁶. Instrumentos con tanta difusión como el Convenio de Roma sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, de 19 de junio de 1980 (art. 2), el Convenio sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales

R.E.D.I., vol. XLIII, 1991, pp. 204-206 y vol. XLIV, 1992, pp. 221-223. Vid. también el llamado de atención que por esta actitud se hace a las autoridades españolas por parte de la Conferencia de La Haya, en A. Borrás, "Comisión especial de octubre de 1989 sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos civiles de la sustracción internacional de menores", R.E.D.I., vol. XLII, 1990, pp. 289-291.

245. S. Alvarez González, *Proyecto...*, op. cit., p. 60.

246. Sobre este problema en particular y sobre todos los relativos a este punto, vid. F. Matscher, K. Siehr y J. Delbrück, *Multilaterale Staatsverträge erga omnes und deren Inkorporation in nationale IPR-Kodifikationen -Vor- und Nachteile einer solchen Rezeption*, Heidelberg, 1986, esp. pp. 52-57 (tesis de K. Siehr). Más sucintamente, vid. K. Siehr, "Codificazione...", loc. cit., pp. 500-501.

extranjerías, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958 (si no se hace la declaración prevista en el art. I.3º) y algunos convenios de La Haya, plantean con diferentes modo y alcance estos problemas²⁴⁷. En el ámbito interamericano, en cambio, se trata de una vía prácticamente inexplorada, que tal vez habría que estudiar para determinados casos concretos²⁴⁸. Sería otro modo de avanzar hacia una más efectiva, aunque siempre parcial, unificación de determinados sectores del D.I.Pr. de la región.

247. Es muy sugerente el trabajo de H. van Houtte, "La reciprocité des règles de conflit dans les conventions de La Haye", *Rev. belge dr. int.*, 1991, pp. 491-503, quien se pronuncia abiertamente por la elaboración de convenios "erga omnes". España ha sido escenario de la producción de algunas de estas cuestiones merced al impacto ejercido por los convenios. *Vid.* las apreciaciones volcadas sobre el particular, al referirse a los efectos causados por la incorporación española al Convenio de La Haya de 2 de octubre de 1973 sobre ley aplicable a las obligaciones de alimentos, por P. Domínguez Lozano, "La determinación de la ley aplicable a las obligaciones de alimentos en el Derecho internacional privado español", *R.E.D.I.*, vol. XLI, 1989, pp. 433-485, esp. 473-478.

248. En "Los resultados...", *loc. cit.*, J. Samtleben sugiere la posibilidad de romper la sujeción a la reciprocidad respecto de la Convención sobre adopción aprobada por la CIDIP III.

B) Elementos para la "coexistencia" de ambas dimensiones

37. El aspecto que más nos interesa destacar de estas problemáticas relaciones se configura alrededor de las distintas variantes de adecuación de las normas estatales a las convencionales. El paso de la mera -y dificultosa- "coexistencia" a una deseable "convivencia" armónica se ha ensayado con distintos métodos. Todos demuestran, más allá de sus aciertos y defectos, la palpable necesidad de desbrozar el terreno donde se mueven las relaciones codificación-unificación para arribar a esa convivencia; un terreno que ha veces se transforma en campo de batalla y otras veces en tierra de nadie²⁴⁹.

Uno de los métodos, el más tradicional, consiste en una reserva general que reproduce en cierta manera el mandato constitucional de supremacía de los tratados sirviendo, de un modo bastante relativo, de advertencia al juez. Pero, sin dudas, el método que más interés ha despertado en la doctrina es el de la incorporación por

249. Sendas síntesis, ejemplos y valoraciones de ellos pueden consultarse en H.U. Jessurun d'Oliveira, "Codification...", loc. cit., pp. 124-128 y en K. Siehr, *Multilaterale...*, op. cit., esp. pp. 85-98 y "Codificazione...", loc. cit.

referencia utilizado en seis ocasiones por la Ley federal suiza de 1987 y adoptado también en el nuevo proyecto italiano de Ley de D.I.Pr.²⁵⁰. A su favor puede argüirse especialmente que permite extender el campo de aplicación de un convenio a materias no reguladas, extrapolar soluciones a un ámbito espacial no pensado por el convenio (valor constitutivo de la referencia) y, en tercer lugar, hacer más ostensible la precitada advertencia (valor declarativo). De otro lado, no puede ignorarse que este mecanismo supone someter a normas insertas en la codificación interna a las vicisitudes propias de la vida de los instrumentos internacionales²⁵¹.

Frente a esta opción, el codificador alemán de 1986 se inclinó por reproducir disposiciones convencionales en el articulado de la *EGBGB*, en una operación que ha sido bautizada gráficamente como *Kopiermethode*, y que ya había sido utilizada en la Ley yugoslava de 1982. Queda claro

250. Vid. A. Davi, "La questioni generali del diritto internazionale privato nel progetto di riforma", *Riv. dir. int.*, vol. LXXIII, 1990, pp. 576-582.

251. Es por esta razón que H.U. Jessurun d'Oliveira, *loc. cit.*, entiende que la incorporación por referencia "n'est pas une méthode heureuse", subrayando que el legislador suizo realizó un uso muy limitado de esta metodología de incorporación, si se compara con la cantidad de convenios cuya aplicación queda supeditada a la reserva general.

en este caso que ya no se puede hablar de "advertencia". La presencia de las normas originadas en los convenios dentro de la legislación interna, obliga al juez a la misma consideración imperativa o dispositiva que merecen las demás normas. La tantas veces tratada previsibilidad que debe asistir a los operadores jurídicos del tráfico privado externo, queda mejor cubierta con este mecanismo que con los otros. Sin embargo, hay una traba difícilmente salvable: los convenios se elaboran con unos criterios de carácter internacional que se traducen en particulares normas de aplicación, calificaciones autárquicas, combinación de métodos, etc., elementos todos que tenderán a ser dejados de lado en favor de los correlativos de la legislación interna²⁵². La adecuación en este supuesto no aparece demasiado fácil.

Ahora bien, la exposición conjunta del método "tradicional" y los otros dos señalados no implica que los mismos se confundan, ya que la "funcionalidad" de ambos no es exactamente igual. En el primer caso el convenio que se ciñe a las exigencias de la cláusula

252. *Ibid.* No es la única desventaja del método de la copia. K. Siehr, *Multilaterale...*, op. cit., ha subrayado la dificultad que entraña dicha "copia" cuando el convenio contiene además de normas específicas sobre la materia regulada, normas sobre problemas generales. Esta y otras razones marcan la superioridad de la incorporación por referencia según este autor.

general ha sido incorporado mediante los mecanismos de D.I.P. y conserva, dentro del orden jurídico interno, una nota de relatividad que le hace eventualmente generador de responsabilidad internacional del Estado²⁵³. La incorporación por referencia (al igual que el método "reproductivo") es un acto unilateral y por lo tanto las exigencias y consecuencias anteriores no concurren. Pero, además, esa unilateralidad lleva implícita una imposibilidad evidente de dar cabal aplicación a algunos convenios en el supuesto de que sean incorporados o reproducidos²⁵⁴.

Al hablar de diferentes mecanismos de recepción de soluciones convencionales en el sistema autónomo, el análisis parece situarse en principio en este último sector y de hecho así es en todos los casos de referencia o reproducción. No obstante, resulta singular que la cláusula general haya alcanzado una concreción

253. S. Alvarez González, *Proyecto...*, cit., p. 61.

254. Es la realidad que se plantea frente a convenios que, siendo indudablemente reguladores de relaciones de tráfico privado externo, se sitúan total o parcialmente en el ámbito de la cooperación entre autoridades, llegando a "repartir" competencias entre distintos Estados. Como ejemplo basta ver la incorporación del Convenio de La Haya sobre protección de menores, de 5 de octubre de 1961, a la Ley federal suiza de D.I.Pr. ¿Pueden recibir aplicación todas las normas del mismo fuera de la esfera de los Estados vinculados al mismo?

convencional dentro de la obra de la CIDIP. En efecto, el art. 1 de la Convención interamericana sobre normas generales de D.I.Pr. la consagra en estos términos:

"La determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones vinculadas con derecho extranjero, se sujetará a lo establecido en esta Convención y demás convenciones internacionales suscritas o que se suscriban en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes.

En defecto de norma internacional, los Estados Partes aplicarán las reglas de conflicto de su derecho interno."

De este modo, el moderno proceso de codificación internacional del D.I.Pr. americano se ha decantado expresa y decididamente hacia una concepción monista que tiende a justificar en parte sus esfuerzos²⁵⁵.

38. Vistos los diferentes métodos, el modelo de la Ley especial se revela en principio como más propicio para brindar una regulación más coherente en relación con los instrumentos internacionales a que se ha incorporado el Estado que lleva a cabo un proceso de codificación

255. W. Goldschmidt, "Normas generales de la CIDIP-II: hacia una teoría general del Derecho internacional privado interamericano", *An. Jur. Interam.*, 1979, p. 151. La inclusión, sin embargo, no fue pacífica. *Vid. Actas y documentos CIDIP II*, pp. 219-220. Cf. también T.B. de Maekelt, *Normas generales...*, *op. cit.*, p. 153 y G. Parra-Aranguren, "La Convención interamericana sobre normas generales de Derecho internacional privado (Montevideo, 1979)", *Codificación...*, *op. cit.*, p. 455.

estatal. El ejemplo alemán no debe hacer perder de vista el peligro de contradicciones y hasta la imposibilidad material de plantear la relación con los convenios dentro de los Códigos²⁵⁶. Frente a esta limitación, no parece desmedido afirmar que la versatilidad en la recepción de las respuestas de D.I.Pr. de fuente convencional, constituye uno de los mayores méritos que presenta la codificación estatal realizada mediante una Ley especial²⁵⁷.

Lo dicho no significa que no tengamos en cuenta las objeciones vertidas. No obstante, considerándolas en su justa medida, los argumentos en favor de una regulación específica de las relaciones entre normas provenientes de diferentes fuentes salen airoso. Teóricamente, la supremacía consagrada en la Constitución o la reserva general, deberían ser suficientes para la correcta aplicación de los convenios, en un juego armónico con las normas internas más favorables dejadas a salvo en algunos

256. *Vid.* F. von Schwind, *loc. cit.* y las referencias a las severas críticas que recibió en su día el proyecto alemán en nota 155.

257. Así lo comprende A.E. von Overbeck, "Le projet suisse de loi sur le droit international privé - une codification nationale d'inspiration internationaliste?", *Liber Memorialis François Laurent...*, *op. cit.*, pp. 1181-1197.

convenios mediante la llamada *more-favourable-right (mfr)* - *provision*. En la práctica, se demuestra la necesidad de la incorporación en las materias que la permitan.

Es indudable que la cantidad de convenios a los que un país se va incorporando traza un límite a las posibilidades reales de rectificación de la legislación autónoma de D.I.Pr.²⁵⁸. Pero no es menos cierto que es absolutamente legítimo mantener una codificación estatal ágil y flexible en vías a su actualización²⁵⁹. El equilibrio estará influenciado en todo caso por la peculiar realidad de cada Estado, ya que las experiencias legislativas no son extrapolables sin más. El dilema entre la "consistencia interna" y la "armonía internacional"²⁶⁰ puede ser un falso dilema en cuanto

258. Vid. H.U. Jessurun d'Oliveira, "Codification...", *loc. cit.*, pp. 128-130, para quien los países que se han incorporado a un gran número de convenios no necesitan (no debieran) modificar sus normas internas, en una argumentación que toca aristas políticas no demasiado optimistas. La trascendencia del papel del Parlamento en la elaboración del D.I.Pr. es puesta en entredicho (Vid. también R. Loewe, "Le droit uniforme et son introduction dans les droits nationaux", *International Uniform law in Practice*, Roma - Nueva York, 1988, pp 151-157, esp. 155). El problema estriba, si se acepta esta idea, en saber cuál deberá ser el *quantum* de convenios necesario para abandonar la codificación.

259. Las fuentes internas son, además de legítimas en Derecho, fácticamente indispensables. Cf. H. Batiffol y P. Lagarde, *loc. cit.* En idéntico sentido, cf. E. Jayme, "Considérations historiques...", *loc. cit.*, pp. 59-61.

parcialmente solucionable. La solución dependerá del respeto a esa realidad y de la utilización del o los métodos apropiados a la idiosincracia de los legisladores, jueces y particulares que la informan. Lo ideal es que ambas fuentes queden integradas en un mismo "microsistema", extremo sólo aproximable mediante la utilización de una Ley especial de D.I.Pr. y una política de incorporación a convenios suficientemente meditada.

IV. Los ensayos subregionales y las perspectivas de integración

1. LAS CODIFICACIONES SUBREGIONALES DE D.I.Pr.

A) *Los desarrollos centroamericano y "boliviano"*

39. El fenómeno de la codificación internacional del D.I.Pr. en América no se agota en los procesos que, con alcance material general (Montevideo y Bustamante) o parcial (CIDIP), han involucrado o intentado involucrar a la práctica totalidad de los Estados del continente. Por

260. Vid. el desarrollo de esta dialéctica en O. Kahn-Freund, "General Problems of Private International Law", *R. des C.*, t. 143 (1974-III), pp. 155-158, y cómo puede llevar a adoptar una actitud de relativismo escéptico. Vid., también, *ibid.*, p. 229.

el contrario, desde los primeros años de la producción jurídica convencional de D.I.P. americano, se han llevado a cabo trabajos con una deliberada limitación espacial. Pese a este carácter, no se trata de esfuerzos que no guardan relación con los textos mencionados; en general se han pergeñado en estrecha relación con la doctrina de los mismos. En ciertos casos, incluso, puede hablarse de un mecanismo de "regionalización" ("subregionalización") de reglamentaciones elaboradas para un ámbito geográfico más amplio.

Esta tendencia hacia la subregión aparece casi siempre ligada a los intentos, más pretensiosos, de integración económica o política. La idea parece expresar que lo que se muestra difícil y genérico o superficial en un ámbito muy extendido, puede devenir realizable y ganar en concreción y profundidad si los resultados de la tarea se limitan a una zona específica. La existencia de intereses comunes y de una realidad más o menos homogénea, aumenta las posibilidades de surgimiento de empresas de estas características.

El caso de los Estados centroamericanos es tal vez el que más claramente ejemplifica el supuesto planteado. Unidos por un pasado histórico con notables rasgos de identidad, han tenido siempre además un volumen de

relaciones de tráfico privado externo considerable, producto de movimientos migratorios constantes. En ese contexto y teniendo en cuenta que se trata de países pequeños en extensión y población, no es raro que hayan procurado en más de una oportunidad alcanzar una integración que abarcara plenamente el aspecto político²⁶¹. Recuérdese que al celebrarse el primer paso hacia la codificación continental del Derecho internacional en Panamá (1826), los ahora Estados centroamericanos acudieron como lo que eran entonces: una República única²⁶².

La ambiciosa meta política tuvo la mayor parte de las veces un reflejo en el campo estrictamente jurídico. Así, en el último cuarto del siglo XIX puede advertirse el comienzo de una producción normativa convencional significativa en la región. Algunas veces, dispersas (o

261. Esto no excluye, como siempre ocurre entre buenos vecinos, que hayan existido no pocos enfrentamientos entre algunos de ellos, como es el caso de la tan conocida "Guerra del fútbol" entre Honduras y El Salvador, ocurrida en 1969.

262. No debe llamar la atención, desde esta óptica que R. Gallardo haya titulado a su estudio de Derecho Público subregional, *Las constituciones de la República Federal de Centro-América*, Madrid, 1958. En estas Constituciones -con la excepción del de Costa Rica- se reconoce expresamente la existencia de dicha República. Cf. E.J. Cárdenas, "Hacia un Derecho comunitario latinoamericano", *Der. integr.*, núm. 1, 1967, pp. 38-39.

diluídas) en textos bilaterales que disciplinan ámbitos materiales diversos bajo rúbricas como "Tratado de paz y amistad", se encuentran normas jurídicas reguladoras de las relaciones privadas internacionales: sucesiones, reconocimiento de decisiones y documentos, cooperación en materia de exhortos, condición jurídica de los extranjeros, etc.²⁶³.

Ya sobre el fin de la centuria, el Primer Congreso Jurídico Centroamericano reunido en Guatemala en 1897, elaboró, siempre en un marco político²⁶⁴, varios tratados de D.I.Pr.. De este modo la República Mayor de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Nicaragua), Costa Rica y Guatemala, no se limitaron a fundar la efímera Unión Centroamericana²⁶⁵, sino que recogieron los trazos maestros de la obra montevideana, aprobando sendos textos sobre Derecho civil, comercial, penal y procesal, además de reglamentar la propiedad literaria e industrial.

263. Un resumen en J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., pp. 23-25.

264. Vid. F.-J. Urrutia, op. cit., pp. 128-129. Todos los textos relativos a la integración de esta subregión, pueden consultarse en F. Fernández-Shaw, *La integración de Centroamérica*, Madrid, 1965.

265. R. Gallardo, *Las Constituciones...*, op. cit., pp. 483-494.

Los mismos temas fueron visitados otra vez cuatro años más tarde en San Salvador, donde se realizó el Segundo Congreso Jurídico Centroamericano. Los tratados aprobados en esta oportunidad no tuvieron -al igual que los anteriores- una trascendencia directa importante, aunque indirectamente sirvieron de cauce para la introducción del principio domiciliar en las legislaciones estatales centroamericanas.. Dados los distintos límites planteados en los instrumentos de ratificación, la posterior incorporación de todos estos países al Código Bustamante, sólo alcanzó los resultados parciales señalados.

Con la salvedad de lo que refiere al grado de insistencia en los esfuerzos de integración política, el proceso descrito respecto de los Estados centroamericanos guarda cierto paralelismo con el de los llamados países bolivianos en honor a S. Bolívar (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). También algunos de ellos constituían una sólo República en las primeras épocas de la independencia, y también existió el proyecto de una unificación. Como aquéllos, además de la amplia gama de convenios bilaterales en las que se incluyen aspectos del

266. J. Samtleben, "Der Territorialitätsgrundsatz...", *loc. cit.*, pp. 100-102 y *loc. cit.*

D.I.Pr., los Estados bolivianos celebraron varios "acuerdos" relativos concretamente a esta disciplina, basados en los Tratados de Montevideo de 1889. En particular, el Primer Congreso Boliviano, que tuvo lugar en Caracas en 1911, aprobó textos sobre propiedad literaria y artística, patentes y privilegios de invención, títulos académicos, extradición y ejecución de actos extranjeros, junto con otros de contenido heterógeneo²⁶⁷.

Si se afina un poco más el análisis y se pone el acento no en los propósitos sino en los resultados concretos, también los Tratados de Montevideo constituyen una codificación hasta cierto punto subregional. De más está decir, en la misma línea de lo anterior, que los Estados del Plata también abandonaron la época de la colonia conformando una sola entidad: las Provincias Unidas del Río de la Plata. Políticas mezquinas e intereses cuya explicación excede con mucho los horizontes de este trabajo, lograron atomizarla. Pero, sobre todo, es ostensible el modo cómo estos países se

267. Los antecedentes del Congreso y el cuadro de incorporaciones todos los acuerdos se consulta en G. Parra-Aranguren, "El Acuerdo Boliviano sobre ejecución de actos extranjeros (1911) a la luz de la jurisprudencia venezolana", *Rev. Fac. Der. Univ. Cat. A. Bello*, núm. 22, 1975-1976, pp. 9-132, esp. 9-20.

convirtieron en abogados de determinados criterios de solución para la codificación del D.I.Pr., nucleados en torno a la regulación del estatuto personal por la *lex domicilii*. Por su parte, respecto del Código Bustamante, ya hemos subrayado su especial predicamento en los países centroamericanos, del Caribe latino y del norte de Sudamérica. Con una precisión algo menor, entonces, puede hablarse aquí también de un desarrollo convencional subregional.

Tal vez no haga falta repetir -parece evidente- que el carácter "regional" asignado a un fenómeno codificador puede referirse a situaciones diversas²⁶⁸. Sin embargo, cabe mencionar algunos aspectos de la realidad descrita que no se corresponden cabalmente con el planteamiento general de las relaciones entre universalismo y regionalismo. En efecto, en las experiencias señaladas, no se trata de acciones llevadas a cabo por organismos permanentes especializados, con una política medianamente definida frente a la reglamentación de un sector determinado de la vida social. Es decir, la cuestión no se resume en un problema de opciones jurídicas. El fundamento en estos casos es eminentemente político o, dicho de una forma acaso más certera, el consustancial

268. F. Rigaux, "L'harmonisation...", *loc. cit.*

componente político ocupa un espacio destacado dentro de los procesos respectivos²⁶⁹. En el elevado nivel de integración fáctica entre estos grupos de Estados debe buscarse la motivación, e incluso la justificación, de su actitud.

B) *La integración jurídica bilateral: el caso del Río de la Plata*

40. Además de las codificaciones globales y de las realizaciones subregionales reseñadas, existe una vasta red de convenios bilaterales sobre la cual es preciso hacer algunos apuntes. Debe considerarse que el grueso de estos convenios proviene, al igual que los mencionados anteriormente, de la etapa comprendida por las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Tratan sobre temas específicos del tráfico privado externo y muchos de ellos regulan concretos aspectos de D.I.Pr. Sin embargo, algunos han sido reemplazados por otros convenios o privados de trascendencia práctica por la vigencia de las codificaciones más generales. De allí que

269. F. Majoros, "Zur Krise...", *loc. cit.*

su aplicación y aún su existencia sea raramente mencionada por los autores.

De otro lado, la extendida presencia de los mismos y un nuevo impulso que se advierte en épocas recientes, tiene una faceta que puede considerarse en abstracto positiva. Esta se refiere a la eventual superación del divorcio entre el volumen de relaciones y el ámbito de aplicación de su reglamentación. Téngase en cuenta que una de las principales causas de las limitaciones del Código Bustamante para alcanzar una vigencia práctica satisfactoria ha sido cifrada precisamente en el escaso número de relaciones jurídicas privadas conectadas con más de un Estado parte²⁷⁰. Por ello, la celebración de convenios entre países con un considerable nivel de intercambios -especialmente países vecinos- parece en principio provechosa.

No sólo es destacable, en este sentido, la situación que se da entre los Estados centroamericanos. También configura un dato de particular relieve y que ofrece varias aristas dignas de análisis, el grado de integración jurídica que han alcanzado, Argentina y Uruguay, más allá de los Tratados de Montevideo.

²⁷⁰. J. Samtleben, *Derecho...*, *op.cit.*, pp. 157-159 y 176.

Lógicamente, la vinculación de estos dos países mediante la obra elaborada entre 1939 y 1940, es ya lo suficientemente significativa si se recuerda una vez más el carácter omnicomprensivo de la misma. Sin embargo, ambos han concluido además algunos convenios bilaterales relativos a temas comprendidos en la agenda de la CIDIP. Nos referimos a los convenios sobre igualdad de trato procesal y exhortos y sobre aplicación e información del Derecho extranjero (ambos concluidos el 20 de noviembre de 1980) y sobre protección internacional de menores (hecho el 31 de julio de 1981)²⁷¹. A éstos se agrega el Convenio sobre responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito (hecho el 8 de julio de 1991), que regula la competencia judicial internacional y el Derecho aplicable en dicha materia. Bajo estas condiciones, no debe sorprender la celebración del Convenio de cooperación jurídica (31 de julio de 1981), que señala como principal objetivo "desarrollar aún más el Derecho

271. Vid. los textos y algunos comentarios en E. Tellechea Bergman, *Derecho internacional privado y Derecho procesal internacional*, Montevideo, 1982. A estos cabe agregar también el Convenio argentino-uruguayo de 7 de abril de 1903, que suprime el requisito de legalización de formas para las comisiones rogatorias cursadas por intermedio de agentes diplomáticos o consulares.

internacional privado entre las dos Repúblicas", creando una Comisión Técnico-Mixta encargada de esa tarea.

El hecho de que las materias señaladas hayan sido reguladas por la CIDIP, no constituye un dato baladí. Especialmente, debe pensarse que tanto Argentina como Uruguay son partes de los convenios sobre exhortos o cartas rogatorias (hecho en Panamá el 30 de enero de 1975) y sobre prueba e información acerca del Derecho extranjero (hecho en Montevideo el 8 de mayo de 1979), así como del Protocolo del primero (hecho en estas últimas ciudad y fecha). Los convenios bilaterales de 1980 han tomado como modelo los de la CIDIP, pero sin reproducirlos textualmente²⁷². De este modo quedan algunos flecos que habrán de resolverse de acuerdo a las normas generales de Derecho de los tratados²⁷³.

Por su parte, el tema abordado por el Convenio sobre protección internacional de menores -*legal kidnapping*- es

272. Vid. W. Goldschmidt, "Integración jurídica argentino-uruguaya", *El Derecho* L.A., 1981, pp. 1201-1204.

273. Nótese que pese a esta proliferación de normas convencionales, el Convenio de 1903 mantiene su vigencia al no haber sido regulada la supresión de legalización por los convenios posteriores. Sobre el particular, la Sent. C.S.J.N. (Argentina) de 14 de diciembre de 1976, señaló tal extremo respecto al Tratado de Derecho procesal internacional de Montevideo de 1940. Vid. *El Derecho*, t. 70, 1977, p. 386.

también objeto de un convenio elaborado en la CIDIP IV (1989) que todavía no ha entrado en vigor. Pero aún cuando esto suceda, la norma introducida en su art. 35 adoptó una postura de no restricción respecto a la vigencia de otros instrumentos -actuales o futuros, bilaterales o multilaterales-, desechando una solución propuesta en el proyecto presentado a la sesión plenaria, la cual disponía la derogación de los convenios bilaterales en la medida en que los Estados parte de éstos se incorporaran a la Convención²⁷⁴.

El ejemplo de la regulación bilateral de las relaciones de tráfico privado externo entre Argentina y Uruguay, llama particularmente la atención por su número y por la superposición de materias con los multilaterales. Pero la verdadera dimensión de la cuestión no puede alcanzarse ~~sino~~ se contempla que la misma se sitúa en un contexto más general caracterizado por una deliberada "ofensiva" uruguaya en materia convencional²⁷⁵. A los ya citados deben agragarse los

274. Vid. D.P. Fernández Arroyo, "Convención...", *loc. cit.*, p. 156.

275. Vid. los datos referidos a esta "Vertragsoffensive" en J. Samtleben, "Neue interamerikanische...", *loc. cit.*, pp. 31-34. Esto no significa olvidar la existencia de otros convenios sobre cooperación jurídica celebrados en los últimos años, entre Colombia y Chile en 1981 (en vigor) y entre Argentina y Brasil en 1991.

convenios con Chile sobre igualdad de trato procesal y exhortos de con Chile (15 de octubre de 1981) y con Perú sobre reclamación internacional y ejecución de sentencias en materia de alimentos (7 de febrero de 1985)²⁷⁶.

42. Es curioso cómo este país ha protagonizado desde hace más de un siglo, la evolución de la codificación del D.I.Pr. americano. Adalid de los Tratados de Montevideo, opositor implacable de la obra de las Conferencias Panamericanas y motor irremplazable de la CIDIP, ha anudado también estos lazos bilaterales en varias direcciones, lo que demuestra la gran vocación del Uruguay hacia la cooperación jurídica internacional²⁷⁷.

276. Los textos de estos convenios (todos vigentes) se encuentran en M.A. Vieira, *Derecho...*, op. cit. y U. Calvento Solari (dir.), *Legislación atinente a menores en las Américas*, Montevideo, 1989. Vid. también A. Landoni Sosa y E. Tellechea Bergman, "Problemas procesales que plantean los Convenios de Cooperación Jurisdiccional con Argentina y Chile", *Rev. Urug. Der. Proc.*, núm. 2, 1983, pp. 145-162. Además Uruguay ha celebrado dos convenios con España el 4 de noviembre de 1987: uno sobre Derecho aplicable y reconocimiento y ejecución de decisiones y transacciones en materia alimenticia y otro sobre cooperación jurídica que regula básicamente el reconocimiento de decisiones. Este último no ha entrado en vigor.

277. Llamativamente, Uruguay se ha mantenido al margen de los resultados de la codificación del D.I.Pr. en la Conferencia de La Haya, aunque participa de algunos de la O.N.U.. Una sugerencia para la modificación de esta actitud se encuentra en D. Opertti Badán, "La codificación...", loc. cit..

Sin embargo, algunos elementos de esta actitud no quedan suficientemente claros. Sin entrar a considerar los aspectos de técnica jurídica de los textos señalados y limitándonos a los atinentes a la política de convenios de las autoridades uruguayas, aparecen ciertos interrogantes.

En primer lugar, puede constatarse que no todos los convenios responden a una misma justificación. Los que se han elaborado antes del tratamiento del mismo tema en la CIDIP -restitución internacional de menores- se adelantaron en muchos años a la obra interamericana, desbrozando de alguna manera el camino hacia su consecución²⁷⁸. Si se tiene en cuenta que la codificación de esta materia se consideraba "urgente", el recurso a la vía bilateral parece entonces lógico, máxime al observar que la Convención interamericana no ha entrado aún en vigor. Incluso hasta puede parecer válido el argumento respecto de los convenios multilaterales ya celebrados pero desprovistos de vigencia entre las partes al momento del acuerdo bilateral -habría aquí una bilateralización-.

278. Vid. M. Varela de Motta, "Una forma eficaz de protección de la familia en Latinoamérica. Convenios sobre restitución de menores y sobre pensiones alimenticias", *Rev. urug. Der. fam.*, III, núm. 3., 1989, pp. 122-123.

Pero en este supuesto, como los mismos países suelen vincularse después mediante los multilaterales²⁷⁹, los convenios bilaterales deberían ser más profilácticos y proceder a una regulación clara de las relaciones con aquéllos.

Dicho esto la atención se dirige, en segundo término, hacia la actuación de una "economía convencional"; es decir, hacia la exigencia de agotar el estudio de las normas convencionales existentes para arri^ovar a un juicio correcto acerca de su suficiencia. Este punto es importante, ya que si bien es evidente el "avance" que significan en general los convenios bilaterales mencionados respecto a los Tratados de Montevideo, no queda tan claro en relación con los textos de la CIDIP. A ello debe agregarse -naturalmente- el análisis de la correspondencia entre la cantidad de casos que se presentan entre ambos países en la materia que se reglamenta y la prisa y el esfuerzo realizado por éstos. Las relaciones jurídicas privadas con elementos uruguayos y argentinos son muchísimas. Ahora, ¿existe una cantidad

279. Es el caso de lo sucedido entre Argentina y Uruguay, quienes celebraron los Convenios sobre exhortos y Derecho extranjero cuando las convenciones interamericanas respectivas ya estaban vigentes al este del Río de la Plata pero no al oeste.

tan significativa de relaciones entre Uruguay y Perú que motive el apuro para celebrar esos convenios bilaterales?

2. LOS INTENTOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SUS ASPECTOS JURIDICOS

A) *Perspectiva general*

43. En muchas oportunidades se ha destacado el hecho de que en América la integración jurídica ha ido muy por delante de la integración económica. La palabra "fracaso" aparece una y otra vez en las descripciones de los diferentes proyectos que en esta última dirección se han intentado en el continente americano. Este podría ser un buen punto de partida para tejer unas reflexiones sobre el tema (el *quid* de la escasez en un ámbito y la abundancia en el otro). Sin embargo, nos resulta más atractivo desde la óptica de nuestro trabajo, tirar las redes en el mar -en una permanente marea baja- de las relaciones entre ambas realidades. Para ello hay que observar qué ha habido y qué hay en materia de integración en América, distinguiendo el alcance y las circunstancias de cada desarrollo. Sobre estas pautas, se

puede avanzar en la verificación de las relaciones señaladas y ver hasta qué punto el desarrollo en uno de los campos facilita o condiciona al del otro²⁸⁰.

Realizado el estudio de los elementos que rodearon el nacimiento y la evolución de los textos globales de D.I.Pr. en América, y sugeridos los lineamientos generales de los que informan al nuevo proceso codificador, cabe brindar ahora algunos referidos al ámbito más genérico de la integración. Hasta ahora ha existido una doble vertiente de esfuerzos en esta esfera: regional y subregionales. Desde un principio, las características y la intensidad difieren en cada caso singular. La idea central de Bolívar, por ejemplo, pasaba por los aspectos políticos, pero tenía en cuenta cuestiones relativas al comercio, precisamente para reforzar esa elección. El espacio abarcado por este proyecto era, no obstante algunos datos que podrían llegar a confundir, las viejas colonias españolas que

280. Es en este sentido que se ha destacado el papel del desarrollo jurídico en cuanto medio idóneo para afianzar la integración entre los Estados del continente. Vid. T.B. de Maekelt, *Conferencia Especializada...*, op. cit., p. 10 y *Normas Generales...*, op. cit., p. 24. Menos optimista aparece la postura de A.M. Villela, "L'unification...", loc. cit., p. 261, poniendo de relieve el reiterado fracaso de los intentos de carácter económico, "exigence préalable logique d'une intégration juridique". En general, sobre el problema, cf. M.A. Vieira, "Le droit...", loc. cit., pp. 379 ss..

habían alcanzado la vida independiente. Los numerosos ensayos llevados a cabo a lo largo del siglo XIX, se inscriben en la misma tónica: un fuerte sustrato político y acuerdos concretos sobre materias relativas a libertad de circulación de personas y mercancías. Los países participantes variaban en cada oportunidad y ningún texto llegó a entrar en vigor.

Cuando irrumpió en este escenario el movimiento panamericano dirigido por los Estados Unidos, los perfiles del desarrollo antecedente sufrieron una modificación sustancial. La base política, conectada siempre con la existencia o eventualidad de agresiones externas, se abandonó en favor de un talante eminentemente comercial²⁸¹. La presencia de aquél país imprimió un carácter unidireccional a las relaciones y la idea de integración continental se desvaneció por completo. Salvo excepciones, las producciones jurídicas de D.I.P. y D.I.Pr. realizadas en el seno de las Conferencias Panamericanas durante la primera mitad del siglo, fueron algo así como los hijos no buscados de este proceso.

281. Basta recordar que la actual Secretaría General de la O.E.A. desciende de la Unión Panamericana, la cual a su vez, en los primeros veinte años de las Conferencias Panamericanas, se llamó en un alarde de sinceridad Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas.

44. De otra parte, la función económica de la organización regional terminó de perder su sentido cuando varió profundamente la situación del mundo y los Estados Unidos consolidaron su posición hegemónica en América -y en buena parte del mundo-. La O.E.A. surgió así como un mecanismo principalmente político pero, obviamente, sin ninguna inclinación hacia la integración, pese a lo que podían sugerir los textos de algunos artículos de la Carta. En tal medida es esto cierto que el punto de partida de los trabajos en ese sentido tuvo que venir de la O.N.U., cuya Comisión Económica para América Latina (CEPAL) realizó los primeros trabajos con tal fin en la década de los cincuenta²⁸².

Fue, en efecto, en la CEPAL, donde se comenzó a trabajar sobre dos temas elementales para la integración (el sistema multilateral de pagos y las transacciones comerciales regionales) y donde se definieron como etapas en este camino a: la zona de libre comercio, la unión

282. El mentor de estas iniciativas fue R. Prebisch. Vid. G. Parra-Aranguren, "El impacto del proceso de integración latinoamericana sobre las normas convencionales de Derecho internacional privado", *Codificación...*, op. cit., p. 349 y G. Magariños, "Primero decênio da ALADI. Princípios e instituições", trad., *Rev. inf. leg. (Brasília)*, vol. 28, núm. 111, 1991, pp. 175-177.

aduanera y el mercado común²⁸³. Precisamente, sobre la base de un anteproyecto elaborado por su secretaría, se celebró en Montevideo el 18 de febrero de 1960, el Convenio constitutivo de la ALALC, dirigido a cubrir la primera de las etapas indicadas²⁸⁴. Concretamente, la Asociación se proponía crear dicha "zona" en un plazo no mayor de doce años, para lo cual se debían ir eliminando paulatinamente los aranceles y exacciones que recaían sobre el comercio entre los Estados. Pero para ello no se dispuso un mecanismo de reducciones automáticas ni se cedió soberanía a un ente dotado de potestades para llevar adelante el proceso. Por el contrario, la suerte de su evolución quedó sujeta a la voluntad expresada en reuniones sucesivas, y esto enmarcado en un ambiente de

283. Sobre el alcance de cada una de estas expresiones, *vid.*, por todos, A. Mattera, *EL Mercado Unico Europeo. Sus reglas, su funcionamiento*, trad., Madrid, 1991, pp. 41-45 y 54-55. En América, R.T. Alemann, "Los conceptos jurídico-económicos de preferencia, zona de libre comercio, unión aduanera, asociación económica, comunidad económica y unión económica", *An. urug. Der. int.*, IV, 1965/66, pp. 23-36.

284. *Vid.* Z. Drnas de Clément, *op. cit.*, pp. 130-131 y E. Jiménez de Aréchaga, "Las normas del Tratado de Montevideo que prevén su evolución hacia un mercado común", *An. urug. Der. int.*, núm. IV, 1965/66, pp. 403-414. El Convenio entró en vigor para México y todos los países latinos de América del Sur y Panamá. *Vid.* también, VV.AA., *La integración latinoamericana*, Buenos Aires, 1965 y los materiales recogidos en *Aspectos legales de la Asociación latinoamericana de libre comercio*, Montevideo, 1963.

inestabilidad política donde los gobiernos autoritarios daban al traste con cualquier proyecto a mediano o largo plazo.

A la situación descrita se agrega que el aparente espíritu globalizador de la Asociación convivió -por decirlo de algún modo- con desarrollos subregionales. Al mismo tiempo que se creaba la ALALC, vio la luz el MCCA, creado por el Tratado general de integración económica centroamericana, celebrado en Managua el 13 de diciembre de 1960²⁸⁵. A diferencia de aquélla, el MCCA nació con el propósito de constituir un mercado común, como su propio nombre lo sugiere. Pero a pesar de sus avances parciales en algunos temas concretos (propiedad industrial, sociedades, transportes, etc.) y el apoyo que suponía la existencia de la ODECA creada el 14 de octubre de 1951²⁸⁶, no llegó a completar ni siquiera la primera

285. Dicho Tratado vincula a los cinco Estados de la región y entró en vigor el 4 de agosto de 1961. Para los datos sobre los Estados parte en todos los acuerdos de integración económica vigentes entre los países de la O.E.A., cf. el Doc. OEA/Ser.G, CP/GT/OJI-7/92, de 23 de enero. Vid. F. Villagrán Kramer, "Controles de legalidad e impugnación de los actos de los organismos de la integración centroamericana", *Der. integr.*, núm. 4, 1969, pp. 141-155, A. Linares, *Aspectos jurídicos de los sistemas de integración*, Caracas, 1969, pp. 195-214 y J.C. Brandi Aleixo, "Mercado Comum Centro-Americano", *Rev. Inf. Leg. (Brasília)*, vol. 21, núm. 81 supl., 1984, pp. 111-130 (textos: 471-578).

286. R. Gallardo, *Las Constituciones...*, op. cit., pp. 595-611.

etapa. Un proceso similar desembocó el 4 de julio de 1973 en la constitución de la CARICOM²⁸⁷, sobre la base de los antecedentes representados por la ya extinguida Federación del Caribe, el MCCO y la CARIFTA²⁸⁸.

Más adelante -el 26 de mayo de 1969- se constituyó por el Acuerdo de Cartagena el Grupo Andino, entre Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Perú, con la finalidad de lograr un equilibrio en el desarrollo de la subregión, mediante la utilización de mecanismos de integración económica²⁸⁹. No obstante las declaraciones

287. Firmado en Puerto España, el comienzo de su vigencia data del 1 de agosto de 1973, siendo sus Estados miembros Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.

288. La evolución hasta los primeros pasos de la CARICOM se encuentran en H.J. Geiser, "La integración regional entre los países en desarrollo: el caso de la Commonwealth del Caribe", *Der. Integr.*, núm. 21, 1976, pp. 87-107 (documentos: pp. 117 ss.), F.V. García-Amador, "Nuevas dimensiones institucionales de la integración económica en América latina y el Caribe", en F. Orrego Vicuña y J. Irigoien Barrenne (dirs.), *op. cit.*, vol. III, Santiago de Chile, 1981, pp. 57-79 y H. Braga, "Comunidade do Caribe - CARICOM", *Rev. Inf. Leg. (Brasilia)*, vol. 21, núm. 81 supl., 1984, pp. 131-146 (textos: 579-618).

289. El acuerdo fue firmado, en realidad, en Bogotá, y entró en vigor el 16 de octubre del citado año. En 1974 se incorporó Venezuela y en 1976 se retiró Chile. Los antecedentes pueden consultarse en *Der. Integr.*, núm. 5, 1969, pp. 117-119, bajo el título "Antecedentes y principales características y mecanismos del Acuerdo Subregional Andino". También sus características, en E.

referidas a la compatibilidad con la ALALC, el nacimiento del Grupo Andino fue una consecuencia lógica de los defectos de aquélla²⁹⁰. De un lado el diferente grado de desarrollo de los Estados latinoamericanos provocaba dificultades para encontrar mecanismos satisfactorios para todos, a la vez que iba consolidando liderazgos que sólo alimentaban susceptibilidades. De otro lado, la presión de factores externos (GATT y partenaires poderosos) crearon límites infranqueables para el avance de un proceso de integración, siquiera tímido y parcial²⁹¹. Por esa misma época, con unos objetivos mucho más concretos y limitados, se firmó el Tratado de la Cuenca del Plata, entre Argentina, Bolivia, Brasil,

Ferrero Costa, "El Derecho de la integración latinoamericana frente a la nueva década, con particular referencia a la integración subregional andina", en F. Orrego Vicuña y J. Irigoin Barrenne (dirs.), *op. cit.*, pp. 36-56, M. Panebianco, "O Grupo Sub-Regional Andino", trad., *Rev. Inf. Leg. (Brasilia)*, vol. 21, núm. 81 supl., 1984, pp. 93-110 (textos: 324-460) y, con más amplitud, F.V. García-Amador, *El ordenamiento jurídico andino. Un nuevo Derecho comunitario*, Buenos Aires, Depalma, 1977.

290. Vid. E.J. Cárdenas y F. Peña, "Los acuerdos subregionales y el Tratado de Montevideo", en *La dimensión jurídica de la integración*, Buenos Aires, 1973, pp. 124-142 y F.V. García-Amador, *op. cit.*, esp. pp. 41-61.

291. M.J. Magariños de Melo, "La Asociación latinoamericana de libre comercio: esperanzas, frustraciones y perspectivas de la integración latinoamericana", *Der. Integr.*, núm. 14, 1975, *passim*.

Paraguay y Uruguay, celebrado en Brasilia el 23 de abril de 1969 y en vigor desde el 14 de agosto de 1970. Un alcance similar tiene el Tratado de Cooperación Amazónica, firmado en la misma ciudad por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, el 3 de julio de 1978 y en vigor desde el 3 de agosto de 1980²⁹².

Fue así que en 1980 y como un medio para sacar a la Asociación del estado de inmovilidad en el que se encontraba, se realizó una reforma creando la ALADI, buscando la participación efectiva de un mayor número de países y la modificación de ciertos aspectos sustanciales, como la facilitación de convenios entre algunos Estados miembros sin necesidad de la intervención de los demás*. La nueva organización nació intentando

292. Estos acuerdos se dirigen sobre todo a enunciar la necesidad del aprovechamiento racional de los recursos naturales y del mejoramiento de las vías de comunicación. Vid. A.M. Villela, "O Tratado da Bacia do Prata", *Rev. Inf. Leg. (Brasília)*, vol. 21, núm. 81 supl., 1984, pp. 147-176 (textos: 619-660) y R. Ricupero, "Tratado de Cooperaçao Amazônica", *ibid.*, pp. 197-212 (textos: 661-685).

293. La finalidad era aprovechar los avances subregionales como pasos instrumentales hacia un horizonte más amplio. E. Vescovi y E. Vescovi, "Hacia la integración institucional: evolución del Derecho internacional privado y comunitario en Latinoamérica", *La Ley (Argentina)*, 1987-E, pp. 1087-1093, conr. 1088. El Tratado constitutivo, celebrado en Montevideo el 12 de agosto de 1980, entró en vigor el 18 de marzo de 1981.

corregir las carencias de la anterior, sin variar la formulación de sus objetivos fundamentales. Más concretamente, puede afirmarse que existe una opinión generalizada que afirma que fue el fracaso sin paliativos de la ALALC en sus tibios intentos de crear una zona de libre comercio, la razón que obligó a pergeñar una nueva estructura²⁹⁴. Sin embargo, el proceso iniciado en 1980 tampoco supera las deficiencias básicas apuntadas: falta de transferencia de soberanía a un órgano con determinada capacidad legislativa y ausencia absoluta de una voluntad integradora, más allá del simple -y difícil- avance hacia la eliminación de las barreras aduaneras²⁹⁵.

294. G. Magariños, *op. cit.*, p. 178-179. Cf. L.D. de Castello Cruz, "Da ALALC à ALADI", *Rev. Inf. Leg. (Brasília)*, vol. 21, núm. 81 supl., 1984, pp. 47-80 (textos: 233-275) y J.A. Estrella Faria, "Integração econômica na América Latina: sairemos do discurso?", *Rev. Dir. Merc.*, t. 79, 1990, pp. 63-83.

295. También se han señalado algunas más sofisticadas como la carencia de un tribunal común encargado de interpretar los textos legales relativos a la integración y de dirimir los conflictos que se susciten en el seno de la organización. Vid. M.A. Ekmekdjian, "¿Hacia un Derecho comunitario latinoamericano? (¿Es viable un Mercado común latinoamericano?)", *Rev. del Foro*, vol. 75, 1988, pp. 81-104. El alcance de las modificaciones puede consultarse en G. Magariños, *op. cit.*, R. Barros Charlín, "El Derecho de la integración ante una nueva década: análisis comparativo de ALALC y ALADI", en F. Orrego Vicuña y J. Irigoien Barrenne (dirs.), *op. cit.*, pp. 11-35 y W. Hummer, "Die 'Lateinamerikanische Integrationsassoziation' (ALADI) als Rechtsnachfolger der 'Lateinamerikanischen Freihandelsassoziation' (ALALC)",

B) *El nuevo impulso de la integración*

45. En los últimos años los esfuerzos subregionales han retomado la iniciativa. El carácter es, asimismo, marcadamente económico-comercial y está dominado en general por la desaparición de los aranceles en los intercambios recíprocos. Uno de estos acuerdos, tiene una relevancia singular porque pone en contacto a un país latinoamericano (México) con las dos grandes potencias económicas norteamericanas, dejando abiertas las puertas para la incorporación de otros Estados. Se trata del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLC/NAFTA), concluido en 1992²⁹⁶, sobre la base del Acuerdo de libre comercio entre Canadá y Estados

Verfassung und Recht in Übersee, t. 13, 1980, pp. 361-370.

296. Vid. J. Witker V., "Las bases jurídicas del Tratado Trilateral de Comercio", *Rev. Der. Priv. (México)*, vol. 2, núm. 5, 1991, pp. 359-368, R. Cruz Miramontes, "Implicaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá en el Acuerdo Latinoamericano de Integración", *ibid.*, pp. 351-358 e *id.*, "La reordenación económica mundial y el TLC de América del Norte", *ibid.*, núm. 6, 1991, pp. 667-685.

Unidos²⁹⁷ y los sucesivos "entendimientos" entre este país y México²⁹⁸.

En el otro extremo del continente, la constitución del MERCOSUR en Asunción, el 26 de marzo de 1991 (en vigor desde el 29 de noviembre del mismo año) ha logrado, merced a la constatación de una importante voluntad política de profundizar sus trabajos, el resurgir de un optimismo que ya parecía derrotado por los sucesivos fracasos²⁹⁹. Los Estados participantes en esta empresa - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- han acordado en el nuevo texto conformar un mercado común para lo cual se han fijado como fecha tope el 31 de diciembre de 1994. La avanzada en este camino está constituida por la incipiente integración argentino-brasileña, que se viene desarrollando desde 1985 y que se coronó con el Tratado

297. Firmado en Ottawa (22 de diciembre de 1987 y 2 de enero de 1988), Washington, D.C. (23 de diciembre de 1987) y Palm Springs (2 de enero de 1988), en vigencia desde el 1 de enero de 1989. Vid. M. Miller, "El acuerdo de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos: lecciones para América Latina", *Int. Lat.*, núm. 153, 1990, pp. 24-34.

298. Suscritos en México D.F. y Washington, D.C., los días 6 de noviembre de 1987 y 3 de octubre de 1989.

299. En este sentido, M.A.R. Midon, "El mayor desafío del siglo XX: la integración a través del MERCOSUR. Inexorable emprendimiento reservado al Derecho", *El Derecho*, 8 de septiembre de 1992, pp. 4-7 y J.H. Lavopa, "Organización institucional y Derecho comunitario en el MERCOSUR", *ibid.*, pp. 7-12.

de integración, cooperación y desarrollo, firmado en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1988 y en vigor desde el 23 de agosto de 1989³⁰⁰. Como pasos mediatos cabe reconocer los Convenios de cooperación económica entre Argentina y Uruguay (CAUCE) de 1974, así como el Protocolo de Expansión Comercial (PEC) entre Uruguay y Brasil de 1975, y sus respectivos desarrollos.

A diferencia de otros intentos habidos en la región, el MERCOSUR se introduce en una senda más ambiciosa, al plantear no sólo la constitución de una unión aduanera, sino también -de un lado- la adopción de políticas comunes en materia comercial, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, de transportes y comunicaciones "y otras que se acuerden" (art. 1) y -de otro- el compromiso de armonizar las legislaciones en las áreas que sean pertinentes. El Tratado de Asunción y sus anexos (programa de liberación comercial, régimen general de origen, solución de controversias y cláusulas de

300. Una apretada síntesis de este proceso en C. Salomao Filho y J. Samtleben, "Der Südamerikanische Gemeinsame Markt -Eine rechtliche Analyse des MERCOSUR-", *WM Zeitschrift für Wirtschafts und Bankrecht*, vol. 46, 1992, pp. 1345-1352 y 1385-1392, esp. 1346-1347. Sobre la vigencia del Tratado argentino-brasileño, *vid.* H. Gros Espiell, "El Tratado de Asunción y algunas cuestiones jurídicas que plantea", *Rev. Inf. Leg. (Brasilia)*, t. 28, núm. 111, 1991, pp. 223-225.

salvaguardia) están elaborados en general en unos términos bastantes amplios, que deberán ir concretándose necesaria y paulatinamente³⁰¹. Las diferencias de desarrollo relativo no tendrían por qué configurar un obstáculo para la integración, estando previstas diferentes velocidades según los Estados (art. 6 y anexo I). Del mismo modo, el Tratado deja abiertas las puertas para la incorporación de otros países de la región (art. 20), habiéndose ya iniciado conversaciones con Bolivia y Chile³⁰².

C) La CIDIP como cauce de la reglamentación de los aspectos jurídicos de la integración

46. Ahora bien, una vez pintado un panorama muy general a título informativo de las realizaciones en el campo de la integración, surge la pregunta relativa a las relaciones de ese proceso con la unificación jurídica. En

301. Sobre este carácter "provisorio o preliminar" del Tratado, vid. H. Gros Espiell, *MERCOSUR. El Tratado de Asunción*, Montevideo, 1991 (con Tratado y anexos) y *op. cit.*. Vid. también la opinión de C. Salomao Filho y J. Samtleben, *op. cit.*, pp. 1388 ss.

302. Téngase en cuenta que este Estado ha celebrado un Acuerdo de complementación económica con México (Santiago, 22 de septiembre de 1991), en vigor desde el 1 de enero de 1992, y que es visto también como un posible miembro del acuerdo norteamericano.

este sentido, puede afirmarse que se ha buscado denodadamente y con verdadero arte identificar los puntos que demuestran el impacto de los intentos integradores americanos sobre el D.I.Pr. o, más genéricamente, sobre el Derecho. Sin embargo, esas indagaciones concluyen forzosamente con un rosario de empresas inconclusas o privadas de trascendencia. El carácter netamente comercial de los ensayos de integración no deja mucho espacio para las normas de D.I.Pr., aunque toquen zonas y realidades muy cercanas³⁰³.

Los desarrollos jurídicos intentados posteriormente por los organismos integradores han sido por lo general infructuosos. En el seno de ALALC/ALADI, por ejemplo, se han atacado sin demasiado éxito los sectores de seguros, marcas y patentes, transportes y arbitraje comercial internacional. Suerte dispar han tenido, por su parte, los trabajos realizados por el Grupo Andino relativos a capitales extranjeros, marcas, patentes, licencias y regalías, doble tributación, propiedad industrial,

303. M.A. Vieira descubre como única norma de Derecho procesal civil internacional en el Tratado de la ALALC, la que contiene el principio general de su inmunidad de jurisdicción, indicando los problemas sucedidos en su concreción. "Le droit...", loc. cit., pp. 422-424. Vid. también del mismo autor, "La Asociación latinoamericana de libre comercio y el Derecho privado internacional", An. IHLADI, núm. 2, 1963, pp. 176-186.

empresa multinacional andina, transporte internacional, seguridad social y migración laboral³⁰⁴. Lo mismo es predicable de los demás esfuerzos mencionados.

En los nuevos procesos subregionales, los aspectos relativos al D.I.Pr. dudosamente susciten nuevas reglamentaciones específicas, al margen de las realizaciones de la CIDIP. Pero debe tenerse en cuenta que en algunos de estos ámbitos podrá producirse al influjo del aumento exponencial de los intercambios económicos y comerciales, un campo propicio para la aplicación de ciertos convenios. Concretamente, en el caso del MERCOSUR, con la excepción de Brasil, los otros países son parte en convenios de la CIDIP relacionados con la nueva realidad que se pretende desarrollar.

En efecto, además de la vinculación jurídica a través de los Tratados de Montevideo de 1939/1940, de los convenios bilaterales reseñados, de todos los textos de las CIDIP I y II reguladores del Derecho procesal civil internacional, de las convenciones interamericanas sobre papeles de comercio (CIDIP I) y sobre normas generales de D.I.Pr. (CIDIP II), es significativa la incorporación de estos Estados a la Convención interamericana sobre

304. Vid. el minucioso análisis de G. Parra-Aranguren, "El impacto...", *loc. cit.*, pp. 361-392.

conflictos de leyes en materia de sociedades mercantiles³⁰⁵. En cuanto al arbitraje comercial internacional, materia de especial importancia en esta realidad, las aguas se dividen: mientras la Convención de Panamá vincula a Uruguay con Paraguay, la de Nueva York (O.N.U.) hace lo propio respecto de Argentina. De otro lado, un convenio que cuenta con un incierto futuro en lo que refiere al eventual número de incorporaciones que pueden esperarse -el de la CIDIP IV relativo al contrato de transporte internacional de mercaderías por carretera-, puede constituirse en una importante herramienta entre los Estados del MERCOSUR³⁰⁶. Es decir que en este supuesto tal vez se realice algo así como una utilización indirecta del foro codificador regional o, dicho de otro modo, un aprovechamiento subregional de su producción jurídica, basado en necesidades concretas. En realidad, justo es decirlo, el convenio parece hecho a la medida de los Estados del MERCOSUR³⁰⁷. Por último, la inclusión del

305. C. Salomao Filho y J. Samtleben, *op. cit.*, p. 1390.

306. *Ibid.*

307. *Vid.* el "Estudio sobre el transporte internacional terrestre de mercaderías por carretera", preparado por J.P. Bedomir y M. Solari Barrandeguy para la CIDIP IV (Doc. 10/88). Sobre el Convenio de transporte internacional terrestre de la ALALC, de 10 de noviembre de 1977, *vid.* I. Halperín, "El transporte terrestre entre los países de la ALALC -un nuevo convenio multilateral",

tema de la contratación internacional en la agenda de la CIDIP V y los trabajos que se van llevando a cabo al respecto, despierta algunas esperanzas sobre la conclusión de un avance significativo en una cuestión crucial para el andamiaje normativo de cualquier proceso integrador.

47. La evolución desde el escenario latinoamericano, parcialmente ocupado por los viejos textos, al nuevo espacio interamericano (al que aspiró sin éxito el Código Bustamante) en la codificación del D.I.Pr., parece armonizar con la incipiente perspectiva actual de integración económica. En efecto, los intentos renovados de los procesos integradores subregionales han suscitado la atención de la O.E.A., que ha creado -en el seno de su Consejo Permanente- una Comisión para la eliminación de los obstáculos jurídicos a la integración, que se esfuerza en encontrar un mecanismo regional de síntesis a los trabajos en general aislados y muchas veces superpuestos. Los fracasos precedentes y los contrastes socio-económicos visibles entre los Estados de la región, trazan una frontera difícil de traspasar. Sin embargo, no

Der. integr., núm. 28-29, 1978, pp. 119-123 (texto: 148-158).

alcanzan a enervar la seriedad y el carácter indispensable de la obra encarada, enmarcada en el "propósito esencial" enunciado del art. 2.f) de la Carta ("promover, por medio de la acción cooperativa, su (el de los Estados americanos) desarrollo económico, social y cultural") y en el compromiso hacia la integración contenido en los arts. 41 a 43³⁰⁸.

El Grupo de Trabajo sobre los obstáculos jurídicos a la integración se creó sobre la base de una resolución de la Asamblea General -AG/RES. 944 (XVIII-0/88)- que encomendó al C.J.I. "llevar a cabo un inventario de los obstáculos jurídicos que sería necesario remover para que la integración pueda ser más efectiva". Los fundamentos de dicho documento, originado a su vez en una recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente (CP/doc. 1943/88 rev. 1), se fueron desarrollando sucesivamente para desembocar en la resolución AG/RES. 1104 (XXI-0/91) que concreta la labor del Grupo de Trabajo en los siguientes puntos: identificación de los temas que requieren una tarea

308. Existen antecedentes de esta actitud de la O.E.A., aunque no hayan tenido continuidad. Ya en su última Reunión de 1965, el C.I.J. había hecho suya la preocupación manifestada por el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General y por el C.J.I., referida a la necesidad del estudio de los aspectos jurídicos de la integración. Cf. *Sistema...*, op. cit., p. 243.

legislativa, coordinación de los trabajos de la O.E.A. - en colaboración con la Secretaría General- con organismos y entidades competentes en cuestiones de integración y confección de un balance de los instrumentos jurídicos que pueden ser útiles a estos fines³⁰⁹.

La intensa actividad desplegada por el Grupo de Trabajo ha dado como resultado la elaboración de un cuestionario dirigido a los Estados miembros, donde se incluyen los interrogantes esenciales que urge resolver para poder seguir por la senda iniciada. Paralelamente, el C.J.I. emprendió varios estudios monográficos relativos a los obstáculos jurídicos -incidencia constitucional de la integración, transporte internacional, seguros, contratación internacional y empresas conjuntas- que fueron puestos en común con el Grupo de Trabajo en su sesión llevada a cabo en Washington, D.C., entre el 2 y el 13 de marzo de 1992³¹⁰.

El contenido del cuestionario se concreta en: el rol que debe asignarse a la O.E.A. en el proceso de integración regional, coordinación de esfuerzos entre la

309. La evolución detallada de estos pasos, se puede consultar en el documento informativo preparado por el Presidente del Grupo de Trabajo, D. Opertti Badán (Doc. OEA/Ser.G, CP/GT/OJI-4/91, de 30 de agosto).

310. Los informes correspondientes se encuentran en el Doc. CP/CAJP-858/92 add. 1.

Organización y acuerdos y organismos integradores regionales y subregionales en todo lo que concierne al desarrollo progresivo y la codificación del Derecho internacional, papel de los órganos encargados de esta tarea en la O.E.A. (CIDIP, C.J.I. y Secretaría General) en relación con la futura agenda de trabajo, impacto constitucional de la integración³¹¹ y mecanismos de incorporación de las normas producidas a nivel regional, tratamiento y desarrollo de la Iniciativa para las Américas (ILA) en el seno de la O.E.A., participación del sector privado y delimitación de las materias que deben ser objeto de una regulación jurídica³¹².

Indudablemente, no sólo la decisión de elaborar el cuestionario sino también su contenido y presentación, configuran elementos preciosos a los fines perseguidos. Su feliz conclusión y su mayor o menor utilidad estarán en directa relación con la voluntad política de los Estados sobre el particular, la cual debería traducirse en la confección de respuestas rigurosas y completas. De los puntos incluidos, hay tres que nos merecen una

311. En la elaboración del cuestionario se cuidó especialmente obviar toda referencia expresa a la "trasferencia de soberanía".

312. Vid. el Informe del Presidente del Grupo de Trabajo, en Doc. OEA/Ser.G CP/doc. 2251/92, de 6 de abril.

acotación adicional. En primer lugar, y en la misma línea del análisis desarrollado respecto de otros ámbitos, creemos importante hacer una pequeña mención a la participación de los Estados Unidos que, si bien siempre levanta razonables temores en los demás Estados de la región, puede significar una aportación importante al éxito del perfil económico de la empresa.

Aunque el infructuoso antecedente de la Alianza para el Progreso esté aún fresco, debe tenerse en cuenta que ahora las circunstancias han cambiado. Se ha gestado el acuerdo tripartito Canadá - Estados Unidos - México y crece el convencimiento que en un mundo dominado por grandes y poderosos bloques económicos, no hay ninguna opción más que integrarse. Dentro del ámbito de la ILA, los Estados Unidos han comenzado a celebrar desde mayo de 1990, acuerdos marcos bilaterales sobre comercio e inversión con los demás países miembros de la O.E.A. y con algunos organismos de integración. Entre estos destacan los realizados con el MERCOSUR (Washington, D.C., 19 de junio de 1991) y la CARICOM (Washington, D.C., el 22 de julio del mismo año). La puesta en práctica de la ILA y la importancia que le ha concedido la O.E.A., también ha suscitado la atención del C.J.I., llevándole a encomendar estudios a algunos de sus

miembros sobre los siguientes temas: "facilitación jurídica para el funcionamiento a nivel internacional de los sujetos de derecho individuales y de los sujetos colectivos", empresas conjuntas, contratación internacional, arbitraje comercial internacional y emisión y comercialización de valores mobiliarios³¹³.

48. En segundo lugar, cabe aún una consideración sobre otros dos puntos: los que se refieren a la utilización de la CIDIP y las materias que se le encargarían en este nuevo cometido. De un lado, no parece claro que la CIDIP en su actual configuración de conferencia no permanente que se reúne merced a las pertinentes convocatorias de la Asamblea General, pueda acometer con éxito una tarea de tanta envergadura, que superará ampliamente los márgenes más generosos del D.I.Pr.. Las alternativas, entonces, pasarían por la convocatoria de Conferencias Especializadas dedicadas específicamente a los aspectos jurídicos de la integración o -acaso más deseable- la creación de una oficina permanente con suficientes atribuciones y medios, que trabajaría en estrecha relación con el C.J.I. y la

313. *Vid.* el Doc. CP/CAJP, *cit.*

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos o en el seno de ésta³¹⁴.

De otro lado, las materias que compondrían la agenda de este nuevo proceso son agrupadas en tres "áreas" en el cuestionario: sujetos de Derecho, negocios jurídicos y solución de controversias privadas. Seguidamente, se sugieren sin ánimo taxativo las que podrían ocupar la atención de la Organización: capacidad, estatuto común de las sociedades mercantiles³¹⁵, compraventa internacional de mercaderías, transporte, comunicaciones, seguros, patentes, marcas, transferencia de tecnología, arbitraje comercial y -tema fundamental- creación de un tribunal ("Corte Interamericana de Justicia") con facultades de decisión y consulta³¹⁶. La cuestión de fondo no pasa, a

314. Tal vez una posibilidad fuera disponer al efecto una "jerarquización" del actual Departamento de desarrollo y codificación del Derecho internacional, con la eventual separación de estas funciones, de un lado, y las relativas a la integración y a la unificación del Derecho material, de otro.

315. En la O.E.A. se había preparado un extenso documento sobre armonización de legislaciones en esta materia, ya en 1968 (Doc. OEA/Ser.I.VI.1 - CIJ - 94).

316. El cuestionario cita como posible modelo el Tribunal Andino de Justicia, aunque la idea parece dirigirse más al T.J.C.E.. Vid. M. Díez de Velasco Vallejo, "Nuevas perspectivas de la justicia internacional: el Tribunal de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena", *Temas de Derecho...*, op. cit., pp. 257-269.

nuestro juicio, por la concreción del temario sino por la definición del grado de obligatoriedad de las normas que se creen en la instancia regional, y de los correspondientes mecanismos de incorporación a los Derechos internos. Lo que sí resulta indispensable es que dicha concreción se opere en lo posible a la luz de los instrumentos mecanismos que ya existen, siempre que se demuestren satisfactorios, evitando la duplicidad de esfuerzos y una producción jurídica "descontrolada" (o "incontrolable").

Capítulo 3

**EL DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO IBEROAMERICANO
Y SUS RELACIONES
CON ESPAÑA**

Sección 1ª: Los sistemas estatales de D.I.Pr.
iberoamericanos

**I. Elementos característicos en la formación de los
sistemas estatales de D.I.Pr. iberoamericanos**

**1. LA CODIFICACION DEL DERECHO EN AMERICA
COMO REALIDAD DIFERENCIADA**

A) Componentes esenciales de la codificación estatal

1. Como es obvio, la codificación internacional del Derecho y, concretamente, del D.I.Pr., no es un proceso que se produce en forma aislada, en una realidad acotada. Por el contrario, la evolución descrita, con sus períodos de auge y sus horas bajas, hunde sus raíces en un fenómeno mucho más amplio, cuyo desarrollo sostenido había comenzado ya en los últimos años del siglo XVIII y que se extiende durante todo el siglo XIX y hasta entrada el siglo XX: la codificación concebida como paradigma de la racionalización del Derecho. Aún teniendo en cuenta las primeras realizaciones del D.I.Pr. convencional cerca del 1900 (Tratados de Montevideo y Convenios de La Haya),

puede decirse que a lo largo del período indicado la práctica totalidad del Derecho posible se concentra en el código¹, expresión por excelencia de la ley escrita en su estado más puro y perfecto, que se erige así como fuente única del Derecho. Las demás fuentes pasan a despertar hasta una cierta desconfianza y a verse incluso como elementos de un pasado que se considera totalmente superado.

Basta observar la construcción paradigmática de la primera época de la codificación, el Código civil francés, para comprobar estas afirmaciones; no se encontrará allí mención alguna a las demás fuentes. Se pasa así del pluralismo de fuentes propio del iusnaturalismo clásico, a un sistema monista donde la ley quita toda posibilidad de protagonismo tanto a los jueces cuanto a los particulares. Estas ideas, junto a la que establece la consideración del Derecho positivo como la voluntad del Estado o del soberano y la que estima que cada orden jurídico constituye un todo completo y carente

1. E. Zuleta Puceiro, *Teoría del Derecho. Una introducción crítica*, Buenos Aires, 1987, p. 123. Cf. la opinión al respecto de F.K. von Savigny, *De la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del Derecho*, trad., Buenos Aires, 1977, pp. 55-57. Como señala acertadamente L. Díez-Picazo, *Experiencias jurídicas y teoría del Derecho*, cap. VII, 2ª reimp., Barcelona, 1983, p. 151, no se puede afirmar claramente que el período indicado haya concluido.

de lagunas, conforman en su conjunto el resumen del positivismo jurídico como teoría². Con una configuración un tanto heterogénea, dichas ideas se encuentran en el trasfondo de todo el andamiaje teórico de la época.

2. Ahora bien. ¿Qué alcance tiene para los distintos ordenamientos, la comprensión de la codificación como una racionalización del mundo del Derecho?³. Como punto de partida y más allá de las particularidades que pueden reconocerse en los Estados americanos, supone una concepción progresista del orden jurídico en la medida en que se produce una evolución tendente a un mejoramiento general, que puede desgajarse en varios componentes o notas distintivas⁴. De la conjunción de éstas y de la

2. Es uno de los significados dado a la expresión "positivismo jurídico" por N. Bobbio, *El problema del positivismo jurídico*, trad., Buenos Aires, 1965, pp. 37-66. Cf. G.R. Carrió, "Dworkin y el positivismo jurídico", *Cuadernos de crítica*, núm. 16, 1981, pp. 8-13.

3. Sobre todas estas ideas, *vid.* L. Díez-Picazo, *op. cit.*, esp. pp. 154-161, quien en realidad habla de un "intento" de racionalización. También en *id.*, "Codificación, descodificación y recodificación", *A.D.C.*, t. XLV, 1992, pp. 474-478.

4. Resulta sumamente didáctica la construcción de J.D. González Campos, ponencia inédita "La codificación del D.I.Pr. en España: resultados, perspectivas y problemas" (Coloquio sobre *La codificación del D.I.Pr. en Europa*, Madrid, junio de 1984).

adecuación a la realidad del medio al cual se destina la labor codificadora, dependerá que la misma halle o no plena justificación.

En primer lugar, se opera una remarcable simplificación de los materiales jurídicos, producto de la reunión de todas las normas en un cuerpo legal único. Esto significa que se elimina la dispersión normativa, característica del período anterior⁵. Diversos elementos hacen que en algunos Estados este proceso se presente particularmente arduo. De un lado, puede hacerse referencia a la existencia de multitud de normas consuetudinarias con diferente grado de arraigo y aplicación. De otro lado, la falta de unidad política y las situaciones beligerantes, se erigen en una valla difícil de superar, impidiendo la obtención de resultados concretos.

El segundo dato relevante lo constituye la sistematización lógica de las normas jurídicas bajo categorías generales y admitidas. Esta operación es

5. L. Díez-Picazo, *Experiencias...*, op. cit., p. 156. J.L. Baudouin, "Réflexions sur la codification comme mode d'expression de la règle du droit", *Unification. Liber Amicorum Jean Georges Sauveplanne*, Deventer, 1984, pp. 21 y 25-26, habla de necesidad de síntesis y de simplificación de las normas jurídicas a la cual responde la codificación, marcando las diferencias en el modo de manifestarse estas y otras características en el siglo pasado y en la actualidad.

factible de llevarse a cabo, como se ha afirmado ajustadamente⁶, bajo dos formas no excluyentes: la transformación de las normas del Derecho no escrito en Derecho escrito o el mejoramiento de este último para obtener un Derecho bien escrito⁷. De este modo se garantiza, en primer lugar, un grado de coherencia insospechable hasta entonces, que se erige en una especie de "hilo conductor" que permite sortear en buena medida las contradicciones de cada ordenamiento⁸. En segundo lugar, la posibilidad concreta de conocer y manejar esos materiales jurídicos, aún para personas no especializadas⁹, da lugar al tercer componente de la

6. B. Nolde, *op. cit.*, pp. 304-305, citando a H.S. Maine, *Village-communities in the East and West*, 3ª ed., 1876, p. 364. Precisamente, el barón Nolde define a la codificación como "la création de 'systèmes' de règles de droit logiquement unifiées".

7. *Vid.*, en idéntico sentido, E. Vitta, "Parallelo sviluppo della codificazione, interna ed internazionale, del diritto internazionale privato", *Dir. int.*, vol. XXIII, 1969, p. 3. En la comunicación recogida en VV. AA., *La codification du droit international privé*, París, 1932, pp. 10-27, J.-P. Niboyet opina que el codificador no puede escapar de alguna de estas opciones: codificar la costumbre o crear un Derecho nuevo; aunque lo más deseable es una combinación de los dos procedimientos.

8. *Vid.* J.L. Baudouin, *op. cit.*, p. 20.

9. H. Batiffol menciona estos aspectos al indicar como efectos de la codificación los siguientes: "rassembler les dispositions et solutions éparses, les classer en un ordre intelligible qui facilite la recherche, éliminer les doubles emplois et les contradictions, combler les lacunes". *Vid.* "Le droit,

codificación, el pedagógico, que sitúa al código como instrumento fundamental de la enseñanza del Derecho tanto para los maestros cuanto para los discípulos¹⁰.

Resta aún un cuarto elemento que adopta la forma, desde los análisis de las primeras codificaciones, de una controversia ubicua y duradera que ha ido perdiendo fuerza por mor de su desmitificación. Nos referimos a la remanida idea según la cual la codificación provocaría, con algún grado de fatalidad, la petrificación del Derecho o al menos cierta lentitud en la adecuación de las normas codificadas a los cambios operados en la sociedad¹¹. De otro lado, la necesidad de pergeñar un ordenamiento dotado de estabilidad y que, por tanto, destierre en principio las sombras de la

matière en expansion?", *Festschrift für Gerhard Kegel*, Stuttgart y otros, 1987, p. 29.

10. Cf. L. Díez-Picazo, *Experiencias...*, op. cit., p. 153, pone de relieve este extremo citando a A. Thibaut cuando decía: "un código nacional sencillo será en cambio totalmente accesible a cualquier mente, incluso a las mediocres ...". Vid. también p. 159.

11. En el primer sentido, constituye uno de los elementos de las discrepancias entre A. Thibaut y F.K. von Savigny. En el segundo ha sido puesto de manifiesto infinidad de veces, gracias a su obviaidad. Vid. G. Kegel, "The Crisis of Conflict of Laws", *R. des C.*, t. 112 (1964-II), p. 183 y J.L. Baudouin, op. cit., pp. 22-23, donde se refiere a la necesidad de permanencia. Cf., asimismo, T.B. de Maekelt, *Normas Generales...*, op. cit., pp. 19-20.

imprevisibilidad, es otro argumento que se añade a la controversia.

Estabilidad o permanencia aparecen así como enfrentados a posibilidad de adaptación a los nuevos tiempos, a las modificaciones que se van sucediendo tanto en el campo de los hechos cuanto en el de las ideas¹². Aquéllas incluso llegan a relacionarse con la dificultad de trasladar determinadas concepciones políticas a la realidad o, mejor dicho, a alterar profundamente algunos sectores de la misma a partir de una decisión política. Los principios y las normas consagradas en un código penetran de tal modo en la sociedad y se mantienen invariables durante tanto tiempo, que no es difícil sostener su entronización, su carácter casi absoluto¹³. Por esta razón desde el comienzo del moderno proceso de codificación, ha resultado habitual mencionar una cierta superioridad de la familia jurídica del *common law* respecto a la que desciende del tronco romano-germánico,

12. L. Díez-Picazo, "Codificación ...", *loc. cit.*, tomando la idea de C. Varga (*Codification as a socio-historical phenomenon*, Budapest, 1991), habla de la utopía que significa "plasmar un instante de la realidad y pretender que la realidad será siempre la misma".

13. *Vid.* el desarrollo realizado, desde una concepción política de izquierdas, por E. Novoa Monreal, *El Derecho como obstáculo al cambio social*, México, 1975, partiendo del estudio de distintas doctrinas referidas a ese objeto.

ya que al haber sucumbido ésta al embrujo de la codificación se ha alejado de las posibilidades de adaptación señalada. El tiempo ha venido a matizar bastante esta idea¹⁴.

3. Simplificación, sistematización, carácter pedagógico y riesgo de petrificación, son o deberían ser total o parcialmente, elementos predicables no sólo de la codificación estatal, sino también de la internacional. Pero sucede que es en aquélla donde cobran mayor relieve, sobre todo en el período indicado. Su alcance general, su centro de gravedad en el Derecho civil -núcleo del ordenamiento-¹⁵ y su virtualidad organizadora del orden social, constituyen el origen de esta situación. Sin

14. Vid. especialmente F.H. Lawson, "A Common Law Lawyer Looks at Codification", *Selected Essays*, vol. I (*Many Laws*), Amsterdam, 1977, pp. 43-49, E. Bodenheimer, "Is Codification an Outmoded Form of Legislation?", *A.J.C.L.*, vol. 30 suppl., 1982, pp. 20-23 y P.M. North, "Problems of Codification in a Common Law System", *RabelsZ*, vol. 46, 1982, pp. 502-508. Vid. también J.L. Baudouin, *op. cit.*, p. 22. Resulta muy interesante el tratamiento que presenta G. Calabresi, "Incentives, Regulation and the Problem of Legal Obsolescence", en M. Cappelletti (ed.), *New Perspectives for a Common Law of Europe*, Leyden y otros, 1978, pp. 291-307, jugando con estas ideas sobre un ámbito muy concreto.

15. N. Irti, *op. cit.*, pp. 10-11. V. Torralba Soriano, "El Derecho Civil desde la codificación hasta el tiempo presente", *R.G.L.J.*, t. LXXI, 1975, pp. 245-248, relaciona esta situación con el protagonismo del individuo en el Derecho civil codificado.

embargo, el último de los elementos señalados va a adquirir con el tiempo especiales características en el D.I.Pr., precisamente por la importancia que cobran las fuentes de origen convencional, que escapan de alguna forma a la tradición jurídica de cada pueblo, catalizador decisivo de ese proceso.

B) *Las distintas experiencias frente al auge del positivismo*

4. Así como la codificación internacional no respondió a un modelo uniforme en la experiencia de las diversas sedes de producción jurídica en el mundo, debe ponerse un acento sobre el diferente modo de producirse el fenómeno de carácter estatal. En Europa, este hecho ya hace tiempo constatado¹⁶ provocó el fin del *ius commune* (europeo) en su sentido más amplio, es decir, el fin de la ciencia jurídica, la jurisprudencia, y la educación jurídica comunes y, consecuentemente, el fin de una

16. Es famoso el análisis comparativo de F.K. von Savigny, *De la vocación...*, op. cit., pp. 85-127, sobre el *Landrecht* prusiano de 1794 (*Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten*), el Código civil francés de 1804 (*Code Napoléon*) y el Código civil austríaco de 1811 (*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch*).

profesión jurídica común¹⁷. Aunque la función desempeñada por los códigos iba a quedar "homologada" con el correr de los años, cada uno de ellos se gestó y se puso en práctica en circunstancias diferentes como diferentes serían sus *performances* respecto a su ámbito espacial de validez.

El dato es importante. Particularmente resulta reveladora la comparación entre el origen y los resultados de las codificaciones francesa y prusiana. Tan pronto como se ~~o~~bserve el clima político que precedió a la aparición de cada una de ellas, se llegará a la conclusión de que se trata de situaciones no del todo homogéneas aunque puedan presentar caracteres comunes o similares. Postulados tales como la sencillez del lenguaje jurídico, la ley como fuente única del Derecho, la garantía irrestricta de los Derechos individuales y la igualdad como premisa fundamental¹⁸, son mucho más visibles en el proceso de formación del Código Napoleón

17. K. Kreuzer, "*Lex communis europaea de collisione legum: utopie ou nécessité*", *España y la codificación internacional...*, op. cit. (en prensa). Vid. también L.-J. Constantinesco, *Tratado...*, op. cit., vol. I, pp. 44-45 y 59-62.

18. Postulados esenciales de la ideología revolucionaria y de los cimientos del edificio de la codificación. Vid., sobre el particular, M. Cattaneo, *Iluminismo e legislazione*, Milán, 1966, pp. 115 ss.

que en el del *Landrecht* prusiano¹⁹. El impacto de la Revolución, como es lógico, se deja sentir notablemente mucho más en aquél que en éste.

Esto quiere decir que la razón básica de las diferencias entre uno y otro estriba en que, si bien ambos son resultado de la labor minuciosa característica del "iluminismo jurídico", el impulsado por Federico II de Prusia pertenece a la fase absolutista del mismo, mientras que el napoleónico responde a la fase democrática²⁰. Ahora bien, no debe perderse de vista que la codificación francesa ve la luz cuando el calor revolucionario ya no es tan abrasador y que este hecho repercute de manera decisiva en el respeto a ciertos legados de la tradición jurídica. Nadie podría decir, sin faltar a la verdad, que Portalis es un exponente del

19. El mismo F.K. von Savigny hacía hincapié en esas diferencias en su célebre trabajo *De la vocación...*, *op. cit.*, pp. 87-88. Quedan allí de manifiesto sus concepciones políticas, al afirmar "si por efecto del Código, Francia retrocedió en parte en el camino que había recorrido, en Alemania, por el contrario, donde la Revolución no había tocado, el Código significó más bien un primer paso hacia ella, por lo que fue más nocivo y funesto que en la Francia misma". Téngase en cuenta, como mero ejemplo de las diferencias entre los Códigos, que en el austríaco de 1811 sí se consagra la referencia a los principios generales del Derecho que se rechazan en el francés.

20. Cf. E. Zuleta Puceiro, "Razón y codificación", *loc. cit.*, pp. 569-573.

pensamiento jacobino. Al contrario, el autor de la Exposición preliminar al Code encarna la reacción conservadora contra los excesos revolucionarios o, en el mejor de los casos, un espíritu de síntesis entre los elementos tradicionales y reformistas, ideal para el nacimiento de la codificación²¹. No parece demasiado aventurado pensar que precisamente en este dato radica el eco impresionante que el C.c. de Francia tendría allende sus fronteras.

5. Otro punto sobre el cual debe ponerse énfasis radica en la coincidencia del inicio de la era de la codificación con el nacimiento de la moderna ciencia del Derecho, de la dogmática jurídica, para la cual la codificación distará de ser indiferente. El principal polo de desarrollo de esta ciencia es, sin duda, la

21. Este dato fundamental ya era señalado en los demoledores análisis de F.K. von Savigny, *De la vocación...*, op. cit., pp. 86-87. Vid. también M. Cattaneo, loc. cit. Para este autor, la filosofía del Código Napoleón expresa más los intereses del *bourgeois* que los ideales revolucionarios del *citoyen*. Siguiendo un esquema menos politizado, M.A. Ciuro Caldani ("La filosofía del Derecho privado en la Revolución francesa", *Investigación y docencia*, núm. 13, 1989, pp. 111-121) afirma que el período revolucionario francés se nutre de las bases preparadas durante el Antiguo Régimen, pasa por el liberalismo de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 y el igualitarismo de la Convención de 1793, para terminar brindando un producto "equilibrado": el C.c. de 1804.

escuela histórica alemana, que se desenvuelve paralelamente a otros centros de reflexión jurídica: la escuela de la exégesis francesa y la jurisprudencia analítica inglesa²². La primera construye sus postulados en contra de la codificación²³, la segunda a partir de la misma y la tercera, por la particular tradición jurídica que la informa, al margen de ella. No obstante, no debe olvidarse que los mismos elementos que rodearon el movimiento hacia la codificación -más temprano o más tarde- en los Estados tributarios de la familia jurídica romano-germánica, estuvieron presentes en el surgimiento de cierta legislación en Inglaterra y en varios Estados norteamericanos²⁴.

22. Cf. M. Atienza, *Introducción al Derecho*, Barcelona, 1985, pp. 196-199. Según K. Olivecrona, *El Derecho como hecho*, trad., 1ª ed., Madrid, 1980, p. 31, las distintas direcciones tomadas por la teoría jurídica en esos países son producto de las diferencias en el pensamiento filosófico, las condiciones políticas y las corrientes ideológicas.

23. Al menos, hasta que no se den las condiciones apropiadas. Vid. F.K. von Savigny, *De la vocación...*, op. cit., esp. pp. 129-147. Cf. E. Agostini, *Droit comparé*, París, 1988, pp. 181 ss. y R. Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, 4ª ed., 1ª reimp., Turín, 1990, pp. 147-149.

24. Por esta razón, J.H. Merryman afirma que "esta era la Edad de la Legislación, no sólo la Edad de la Codificación (...) la edad de la unificación legislativa, del nacionalismo legislativo y de la consolidación legislativa de los ideales de la revolución burguesa". Vid. "Modernización ...", loc. cit., p.74.

Todas estas tendencias del pensamiento jurídico reconocen un factor aglutinante en la noción de Derecho positivo. El Derecho es, a partir de aquí, Derecho positivo proveniente del pueblo, del soberano o del codificador. La modificación fundamental que se observa respecto al Derecho natural es, por lo tanto, que la ciencia del Derecho no construye su objeto como aquélla, sino que reflexiona sobre un objeto dado²⁵. Como se ha expresado, la escuela histórica construye la moderna ciencia del Derecho sobre dos pilares: el Derecho positivo y el método dogmático²⁶ y ambos están íntimamente unidos al fenómeno de la codificación.

No cabe duda acerca de la participación de la Ciencia del Derecho en el "viraje general hacia el positivismo", que caracteriza al "movimiento espiritual general (europeo)" y que tiene su origen en el campo de las ciencias naturales, donde había alcanzado un éxito tan considerable en la primera mitad del siglo XIX que haría inevitable su "exportación" a las ciencias del espíritu²⁷. De allí que se señale como irrelevante el

25. F.K. von Savigny, *loc. cit.*

26. A. Hernández Gil, *Metodología de la ciencia del Derecho*, t. III, Madrid, 1973, p. 404.

27. Vid. K. Larenz, *Metodología de la Ciencia del Derecho*, trad., 2ª ed. (de la 4ª alemana), Barcelona-

intento de situar al positivismo jurídico respecto de la filosofía social positivista, de buscar algún tipo de nexo o de influencia de ésta sobre aquél²⁸. Aunque puedan resultar interesantes e ilustrativos en otro contexto, poco aportan al objeto en estudio los datos referentes a los precursores del positivismo jurídico o el hecho de que J. Bentham precediera a A. Comte. Sí es trascendente en cambio, caracterizar brevemente el perfil que adopta este sustrato filosófico sobre el que habría de edificarse la codificación y cuál es el sentido que debe dársele en el ámbito jurídico.

Básicamente, en cuanto actitud científica, el positivismo encarna el rechazo de toda especulación apriorística, así como de las construcciones que buscan las causas de los fenómenos más allá de los hechos que brinda la realidad (metafísica). En consecuencia, uno de los métodos más utilizados y el que con mayor rigor caracteriza este movimiento, estriba en la observación cuidadosa de los hechos empíricos y los datos perceptibles por los sentidos, mediante la cual poder formular una ley de causalidad satisfactoria entre

Caracas-México, 1980, p. 57. Vid. la evolución de este proceso en E. Bodenheimer, *Teoría del Derecho*, trad., 9ª reimp., 1986, México, pp. 303-307.

28. K. Larenz, *loc. cit.* Cf. K. Olivecrona, *op. cit.*, pp. 56-57.

ellos²⁹. El positivismo exige la demostración de los enunciados o presupuestos y por ello destierra del ámbito de lo científico las ideas y los valores que no son aprehensibles racionalmente³⁰. El mundo jurídico fue alcanzado por la impronta positivista al igual que todas las ciencias sociales, pero en sus dominios se generaron no pocas confusiones motivadas especialmente por el uso algo promiscuo de tal terminología³¹. Sin embargo, es factible identificar una cualidad distintiva común a todos los desarrollos teóricos sobre el tema y a todas las realizaciones prácticas: el positivismo jurídico implica la negación del Derecho natural.

29. Vid. E. Bodenheimer, *loc. cit.*

30. Por ello se ha caracterizado al positivismo como una dirección espiritual "predominantemente negativa". Cf. K. Larenz, *op. cit.*, p. 58. La "transformación radical" de la actitud filosófica ante la realidad y de la metodología jurídica, caracteriza el paso del iusnaturalismo racionalista al positivismo o científicismo positivista; a partir de este momento la actitud científica básica en este ámbito será el formalismo, el conocimiento de la forma. Vid. E. Zuleta Puceiro, "Razón y codificación"..., *loc. cit.*, pp. 579-580.

31. G.R. Carrió habla en este sentido de la "intolerable ambigüedad" de la expresión positivismo jurídico, *op. cit.*, p. 5.

C) *El origen particular del fenómeno en los Estados americanos*

6. De un modo similar a lo que había sucedido con las doctrinas filosóficas y políticas, las ideas centrales respecto de la codificación y al alcance del fenómeno pergeñadas fuera de Iberoamérica, pasaron a formar parte rápidamente del acervo intelectual de sus elites dirigentes. Si aquéllas habían ayudado a encauzar teóricamente el proceso de emancipación de las colonias³², éstas, en el estricto campo del Derecho, incitaron el inicio de un movimiento de vastas consecuencias. El sustrato filosófico-jurídico de la codificación americana respondió de esta manera a los mismos parámetros generales que en Europa, aplicados, obviamente, a otra realidad³³. La necesidad de

32. Estas doctrinas no comprenden sólo a las que precedieron o consolidaron las profundas transformaciones en Francia, Inglaterra o Estados Unidos, sino también a la teoría política de la escolástica española. Para una extensa explicación del carácter "hispanico" de la Revolución americana, vid. O.C. Stoetzer, *El pensamiento político en la América española durante el período de la emancipación (1789-1925)*, Madrid, 1966, esp. vol. I, pp. 87-90 y vol. II, pp. 257-260. Vid. también, V. Tau Anzoátegui, *Las ideas jurídicas en la Argentina (siglos XIX - XX)*, 2ª ed., Buenos Aires, 1987, 19-20. Cf. J. Lynch, "The origins of Spanish American Independence", en L. Bethell (ed.), *The Cambridge History of Latin America*, vol. III, Cambridge y otros, 1985, pp. 3-50, esp. 42 ss.

simplificar y hacer accesible un cuerpo de normas que sustituyera la maraña de disposiciones heredadas -Fuero Real, leyes del Estilo, Partidas, Novísima Recopilación y Leyes de Indias- en la América española, es señalada así como causa inmediata³⁴. Los que difieren, los que introducen una nota de relatividad, son algunos de los elementos que se han destacado como los condicionantes político y económico de la misma³⁵.

7. En lo que hace referencia a los factores políticos, también en América la codificación gira en torno al nacimiento y la consolidación de los Estados nacionales. La codificación estatal se presenta, desde esta óptica, como factor indispensable de la afirmación nacional y de la superación de la situación anterior³⁶.

33. Según E. Zuleta Puceiro, "Razón y codificación...", *loc. cit.*, pp. 587-588, la "negación" del Derecho natural adopta en América la forma del rechazo a factores de poder establecidos y no se produce sino a finales de siglo XIX.

34. Algo parecido puede decirse de Brasil. Cf. J. Ma Castán Vázquez, *La influencia...*, *op. cit.*, pp. 101-102, quien hace referencia a la similitud de razones jurídicas invocadas para codificar en España, en el resto de Europa y en América (*ibid.*, p. 97).

35. Los factores que operan como presupuestos de la codificación se exponen en M. Weber, *Economía y sociedad*, 2ª ed., 8ª reimp., t. I, México, 1987, p. 608, M. Cattaneo, *op. cit.*, p. 10 y J.D. González Campos, *ponencia cit.*

En Europa, el suceso político clave, que resume en cierto modo el vuelco histórico que se produce hacia fines del siglo XVIII, es la Revolución francesa de 1789. Los efectos de este hecho sin precedentes iban a exceder en mucho los límites de Francia, desde un principio³⁷, y del continente europeo, poco después. Con la Revolución se consagra en forma inequívoca el ascenso al poder de la burguesía y el fin del absolutismo, sobre la base de la igualdad ideal de todos los ciudadanos. El Estado se constituye en gendarme garantizador de Derechos y el Derecho en expresión de la voluntad general. En el reverso de la misma moneda se encuentra al Estado reivindicando para sí el monopolio de la ley y la jurisdicción, mediante la unificación de la legislación y de la interpretación³⁸. Paradójicamente, la consecuencia directa del presupuesto político de la codificación es la despolitización del Derecho, que pasa a desempeñar así el

36. F.K. von Savigny, llama "elemento político" del Derecho a la dependencia en que está respecto a la vida social del pueblo, por contraposición al "elemento técnico", científico y separado de aquélla. *Vid. De la vocación...*, op. cit., p. 47.

37. *Vid.* para el caso español, el singular trabajo de J. Vallet de Goytisolo, "Influjo de la Revolución francesa en el Derecho Civil. Su incidencia en la codificación española", A.D.C., t. XLII, 1989, pp. 261-316.

38. Cf. E. Zuleta Puceiro, "Razón y codificación...", loc. cit., p. 567.

rol de regulador neutro de la vida social, convirtiéndose en la expresión más tangible y aséptica del despliegue de la razón³⁹.

A diferencia del anterior, puede afirmarse que el condicionante político del surgimiento de la codificación en América es, valga la redundancia, "puramente" político. Esto quiere decir que no se perciben, al menos no con la misma fuerza, los ingredientes sociológicos contundentes de la experiencia francesa. La conocida razón de este postulado estriba en la importancia directa y fundamental del hecho emancipador. Los Estados dotados de un poder propio e independiente debían lógicamente dictar en forma autónoma las reglas que regirían sus destinos. Primero fueron las constituciones nacionales, desde la segunda década del siglo XIX, las que marcaron los primeros compases en esta marcha. Los modelos seguidos predominantemente fueron el norteamericano y el francés, aunque la Constitución

39. Esta acepción del vocablo "despolitización" no se confunde con el incuestionable contenido político de la impronta revolucionaria. Vid. M. Aguilar Navarro, *Derecho...*, op. cit., Madrid, 1976, p. 94. Se trata más bien de lo "político" por oposición a lo "civil", lo relativo a las relaciones a los hombres entre ellos. Vid. A.-J. Arnaud, *Essai d'analyse structurale du Code civil français, la règle du jeu dans la paix bourgeoise*, París, 1973, p. 11. Cf. asimismo el sentido que se da a esta regulación apolítica en J. Habermas, "La legitimidad, hoy", *Revista de Occidente*, núm. 9, 1976, pp. 3-12.

liberal de Cádiz de 1812, ejerció también alguna influencia⁴⁰. Después llegaron los códigos.

El proceso, sin embargo, no fue constante ni homogéneo. Aunque existieron algunas experiencias aisladas ya a partir de los años veinte (Códigos civiles de Haití y de algunos Estados mexicanos⁴¹), las realizaciones que adquirieron más trascendencia no se produjeron hasta la segunda mitad del siglo⁴². Es decir que entre las primeras constituciones y los códigos media un período que se explica en la diferente urgencia para concretar la organización política respecto de la social, y en el fuerte condicionante de la inestabilidad que sobrevino a la independencia⁴³. La nota de heterogeneidad

40. Sobre los "rápidos cambios en el Derecho público", vid. J.M^a Castán Vázquez, *La influencia...*, op. cit., pp. 64-67.

41. Existen todavía algunas controversias sobre si el primer Código correspondió a Oaxaca o a Zacatecas. Vid. L. Pereznieto Castro, *Derecho internacional privado, notas sobre el principio territorialista y el sistema de conflictos en el derecho mexicano*, México, 1977, p. 252⁶ y J. Samtleben, "El territorialismo de leyes en América latina", *Primer Seminario Nacional de Derecho internacional privado*, 1979, p. 179.

42. Nos referimos a los Códigos de Chile y Argentina y al *Esboço* brasileño de A.T. de Freitas. *Ibid.*, pp. 103 ss. y S. Schipani, "Nota introduttiva...", loc. cit., pp. XIII-XIV.

43. En este período "sobrevive" el Derecho colonial (J.M. Ots y Capdequí, *Historia del Derecho español en América y del Derecho indiano*, Madrid, 1969, p. 349 y B.

se cifra en los diversos grados que adquiere la recepción del Derecho europeo y en los matices de la misma, no limitada al Derecho civil. Así, desde la reproducción lisa y llana del C.c. francés en los supuestos de Haití, Oaxaca y Bolivia⁴⁴, se llega a las elaboradas obras antes mencionadas. Por esta razón cuando se habla de "códigos iberoamericanos", debe tenerse presente que no se hace referencia a una realidad uniforme.

8. Por su parte, el presupuesto de carácter económico -estrechamente relacionado con los de orden

Bravo Lira, "El Derecho indiano y sus raíces europeas: Derecho común y propio de Castilla", *An. Hist. Der. esp.*, t. LVIII, 1988, pp. 5-80, esp. 67-69); muchas de sus disposiciones se consagraron después en las propias codificaciones americanas (J.ª Castán Vázquez, *loc. cit.*), junto a las numerosas provenientes del C.c. francés, de los otros códigos europeos y americanos y del Derecho romano. El período mencionado separa la adopción de la idea de fijación del Derecho de la concreción de la codificación del mismo. *Vid.* A. Guzmán Brito, "Puntos de orientación para el estudio histórico de la fijación y codificación del Derecho en Iberoamérica", *R.G.L.J.*, t. LXXXVI, 1983, pp. 3-22, esp. 12-14. Fueron también circunstancias políticas las que hicieron retrasar el dictado del C.c. en España casi hasta fines del siglo, a pesar de la existencia de esfuerzos encaminados a tal fin.

44. A. Guzmán Brito (*Andrés Bello codificador. Historia de la fijación y codificación del Derecho civil en Chile*, t. I, Santiago de Chile, 1982, pp. 158-164) señala que también se propuso tal actitud en Chile en 1822, abarcando a todos los códigos franceses, códigos que influyeron decisivamente en los proyectos posteriores.

político en Europa- se mitiga notablemente en América. El poder burgués que surge en los Estados europeos necesita para su consolidación la seguridad que sólo le puede brindar un cuerpo sistemático de normas que, redactado de una manera clara y precisa, le permita enseñorearse de un mundo que hasta entonces le resultaba incomprensible. Para controlar las riquezas y llegar a ejercer de un modo efectivo el poder económico, es indispensable que las reglas de juego queden fijadas de antemano recogiendo los ideales del liberalismo y del individualismo. La única exigencia de la seguridad es por tanto la consagración de tales reglas, ya que el éxito o el fracaso de las actividades humanas dependerán en todo caso de la iniciativa individual y del carácter aleatorio de las leyes de mercado⁴⁵. Estas concepciones se reflejan prístinamente en los códigos, especialmente en los que regulan la materia civil. No es difícil advertir el tratamiento como instituciones fundamentales del contrato y la propiedad privada, y la utilización de una

45. Es en este sentido que se pronuncia N. Irti, al afirmar que *"il diritto fissa appunto le regole del giuoco: regole generali ed astratte, che saranno utilizzate da persone ignote, per scopi ed in circostanze particolari che non conosciamo né siamo in grado di conoscere"*. Vid. op. cit., p. 5. Desde un punto de vista mucho más ideológico, pone de relieve las mismas cuestiones A.-J. Arnaud, op. cit.

metodología basada en la supuesta igualdad de los ciudadanos.

La "regla de juego" de la "Pax burguesa" -sucesora de la *Pax Romana* y de la *Pax Ecclesiae*- sólo puede encontrarse en el Derecho vigente, que se asimila estrechamente a la concepción burguesa del mundo y capitalista de la economía, en formación en ésta época. En este contexto, el individuo -su libertad y sus propiedades- necesita la protección y el orden que el Derecho privado le garantiza⁴⁶. Fundamentos similares se trasladan al ámbito internacional bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, cuando la demanda de seguridad por parte de la burguesía rompe el estrecho corsé nacional y comienza a ver más allá de las fronteras⁴⁷.

El hecho de que el elemento de carácter económico conviva con otros de distinta índole no autoriza a menospreciarlo. Evidentemente, la mayoría de las construcciones que lo realzan, prestando especial atención al ascenso de la burguesía y a los intereses implicados y al modo de plasmarlos en los textos

46. A.-J. Arnaud, *op. cit.*, esp. pp. 3-14.

47. Vid. M. Aguilar Navarro, *Derecho...*, *op. cit.*, p. 477, quien subraya que se necesitaron muchos años para caer en la cuenta del "grado de erosión que había alcanzado el viejo patrimonio jurídico común por la acción disgregadora de estas codificaciones estatales".

jurídicos, no ignoran los otros componentes del fenómeno pese al acusado sustrato ideológico (generalmente de raíz marxista) que las sustentan. De allí que cause asombro el rechazo puntual de estas y no de otras explicaciones "monistas" centradas, eso sí, en alguno de los otros elementos⁴⁸.

La presentación diluída, mediatizada, del componente económico en el surgimiento de la codificación americana, no parece tampoco un argumento definitivo para descartar su ostensible influencia en el origen del fenómeno a escala universal⁴⁹. Está claro que en el Nuevo Mundo no existía al momento de iniciarse la andadura codificadora, un modelo de organización de las fuentes de producción que respondiera a unas mínimas pautas capitalistas. Es más, tampoco existía el concepto de sociedad civil como el que encarnaban las burguesías europeas⁵⁰.

Sin embargo, la formación europea de los juristas americanos provocó el trasplante -matizado, teñido de

48. Tal es la crítica que realiza E. Zuleta Puceiro, "Razón y codificación...", *loc. cit.*, pp. 588-589, rechazando señaladamente la ambigüedad de la expresión "regla de juego de la sociedad burguesa".

49. *Ibid.*, p. 587.

50. N. Saldanha, "História e sistema em Teixeira de Freitas", *Augusto Teixeira de Freitas...*, *op. cit.*, pp. 51-70, esp. 58.

caracteres originales- del producto de unos factores muy concretos a una realidad diversa⁵¹. Y en ésta cumplió desde muy temprano su cometido esencial de completar el andamiaje jurídico de las nuevas repúblicas iniciado con la elaboración de las constituciones. Pero además de esta finalidad eminentemente política, las codificaciones americanas civiles y mercantiles llegaron después a constituir también un soporte satisfactorio para el incipiente desarrollo comercial y productivo, que comenzó a operarse hacia fines del siglo XIX, con el auge de las ideas liberales en América⁵².

9. Puede afirmarse, en definitiva, que los contrastados presupuestos filosóficos, iusfilosóficos, políticos y económicos, que permitieron el surgimiento del fenómeno de la codificación moderna, no se reprodujeron exactamente ni al mismo tiempo en todos los países que adoptaron este método de legislación. Pero

51. No podía ser de otra manera, ya que, a diferencia de lo que podía ocurrir en otros campos científicos, técnicos o artísticos, faltaban los cimientos autóctonos tanto jurídicos cuanto filosóficos. *Ibid.*, resaltando el carácter inevitable de la condición de "juristas europeizados".

52. Vid. W. Glade, "Latin America and the International Economy, 1870-1914", *The Cambridge History of Latin America*, vol. IV, pp. 1-56, esp. 46-56.

existe un elemento relativamente "homogenizador" de todas las experiencias, que consiste en la idea de seguridad que va unida al proceso de codificación del Derecho y que permite vislumbrar la concepción del mundo y de la vida que define toda una época, más allá de los matices. Esta cosmovisión descansa sobre el individuo en cuanto valor fundamental y originario, alrededor del cual se construyen todas las relaciones sociales⁵³. En ella, la función reservada al Derecho es la de garantizar con el mayor grado de certeza las posibilidades de desarrollo de la individualidad. El hombre elige los fines a perseguir en su vida y asume la responsabilidad de su iniciativa; el Derecho le brinda los instrumentos necesarios para conseguirlos, advirtiéndole qué es lo que puede esperar de los otros sujetos y del poder público⁵⁴.

53. Precisamente, la fidelidad sin fisuras a tal cosmovisión es lo que distingue a la burguesía europea de otras minorías históricas o grupos hegemónicos, según N. Irti, op. cit., pp. 3-5. Allí el autor define este período como el "*mondo della sicurezza*", citando la traducción italiana de S. Zweig, *Die Welt von Gestern*, 5ª ed., Milán, 1954. Ese "espíritu" se transplantó a América.

54. *Ibid.* Aplicado a otras épocas, el término "seguridad" se refiere a la existencia de un punto de referencia ubicado fuera de lo terreno, que garantizaba la estabilidad a la vez que era la justificación última del orden universal. Era la concepción teocéntrica de la vida lo que brindaba al hombre una protección que no era posible encontrar en el medio mundano.

Vemos entonces cómo la codificación supera con creces la condición de mero hecho histórico. Los factores descritos definen el clima intelectual que posibilitó obtener un instrumento de ordenación racional de la sociedad consagrando, con una actitud formalista, los valores de la sociedad burguesa. La impresionante fuerza de este movimiento originado hace doscientos años, se constata con bastante facilidad con la sola observación de las enormes repercusiones del mismo, en el tiempo y en el espacio, en la triple dimensión estatal, convencional e institucional. Los argumentos expuestos deben servir ahora para estudiar el sentido que adquiere la codificación dentro de una particular "rama del mundo jurídico"⁵⁵ -el D.I.Pr.-, y especialmente las características que presenta la producción del fenómeno en el continente americano. Sobre esta base, podrá indagarse acerca de los planteamientos que se vienen formulando desde hace tiempo, referidos a la procedencia que tiene hoy día la codificación del Derecho centrada en un código por sector de materias cuyos principios son desarrollados por varias leyes complementarias, a la luz de la sustancial modificación experimentada por los

55. La terminología es utilizada y desarrollada por M.A. Ciuro Caldani, *El Derecho internacional privado, rama del mundo jurídico*, Rosario, 1965.

presupuestos que le servían de sustento y la justificaban⁵⁶.

2. CONFIGURACION DEL D.I.Pr. AMERICANO

A) Antecedentes

10. El fenómeno descrito ejerció un enorme impacto en todas las ramas del Derecho, si bien generalmente ha sido estudiado en relación con los Códigos civiles, resultando incluso bastante difícil escindir la idea de la codificación del análisis de estos últimos. En particular, fue principalmente a través de ellos que la codificación actuó de manera decisiva como catalizador para la construcción de los sistemas estatales de D.I.Pr⁵⁷. Ahora bien, ¿cómo se expresa el movimiento

56. Vid. N. Irti, *op. cit.*, esp. pp. 29-39.

57. J.C. Fernández Rozas Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, p. 181. Vid. también la síntesis del desarrollo histórico de la codificación estatal del D.I.Pr. y de la evolución de los problemas que le son inherentes en G. Parra-Aranguren, "General Course of Private International Law: Selected Problems", *R. des C.*, t. 210 (1988-III), pp. 183 ss. y en F. Schwind, "Aspects et sens du droit international privé", *R. des C.*, t. 187 (1984-IV), pp. 96-105.

codificador en el ámbito del D.I.Pr. y cuáles son los principales problemas que plantea?

Para responder a estos interrogantes, es menester considerar que la situación que se dió en Europa de paulatina superación de las concepciones estatutarias mediante la nueva empresa⁵⁸, no se reprodujo exactamente en América. En ésta, puede decirse que prácticamente no existía una regulación del D.I.Pr. antes de la irrupción de los códigos; sólo unos pocos trazos territorialistas. Dejando de lado los casos que constituyen una reproducción más o menos fiel del C.c. francés, cuando se producen las primeras formulaciones "originales", algunas toman como punto de partida un poco tardío los datos estatutarios europeos y otras desembarcan directamente en la etapa científica -sin el paso previo "estatutario"-.

58. El incipiente esfuerzo de sistematización que denotan las normas de D.I.Pr. del *Landrecht* prusiano, del C.c. francés y del C.c. austríaco, y, sobre todo, el relevante desarrollo doctrinario y jurisprudencial que originaron, conduce a matizar la idea de que encarnan una mera proyección estatutaria. En cualquier caso, esto podría adjetivarse no sin ciertos reparos de los dos primeros, pero en mucho menor medida del último. Cf. B. Nolde, "Les étapes historiques de la codification législative du droit international privé", *Rev. crit. dr. int. pr.*, 1927, pp. 365-366. Sobre el origen estatutario del C.c. francés, *vid.*, J.-P. Niboyet, *Traité de droit international privé*, t. III, 1944, pp. 120 ss. y A. Lainé "La rédaction du Code civil et le sens de ses dispositions en matière de droit international privé", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. I, 1905, pp. 21-60 y 443-479, esp. 22-23 y 52 ss.

La mencionada utilización del Código civil como sede principal de las normas de D.I.Pr. -uno de los postulados básicos en esta explicación-, caracterizó desde sus comienzos el proceso de codificación de la disciplina proyectándose hasta nuestros días. Debe insistirse, sin embargo, en la diferente evolución ocurrida. En Europa, cuando se supera el período de la influencia estatutaria⁵⁹ se llega a la etapa que se distingue por la recepción del pensamiento de los grandes maestros y que tiene lugar principalmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX.

Si como requisitos de la codificación se exige que la sistematización que se realiza sea "completa y exhaustiva", resulta evidente que sólo a partir de este momento pueden considerarse alcanzados dichos objetivos y que, en consecuencia, en la etapa precedente no existió propiamente ninguna codificación del D.I.Pr.⁶⁰. En el

59. Sin embargo, esta influencia se dejaría sentir ulteriormente en distintas regulaciones. Señaladamente, en el Tít. Prel. del C.c. español de 1889.

60. E. Jayme introduce este concepto restringido que le conduce a afirmar, por ejemplo, que el art. 3 del C.c. francés no llega a ser una codificación de D.I.Pr. aún cuando forma parte de una gran codificación. *Vid.* "Considérations historiques...", *op. cit.*, pp. 23-24. El desarrollo de la evolución histórica puede verse en T. Ballarino, "Osservazioni sulla codificazione del diritto internazionale privato nell'Europa centro-orientale", *Le*

podio del honor del nuevo período, el del renacimiento doctrinal de la disciplina, cabe señalar al Código del Piamonte de 1865 y a la Ley de Introducción al C.c. alemán de 1896 (EGBGB). A su lado, aparecen algunos códigos americanos, especialmente el argentino de 1869, del cual se afirma que "se trata del primer código de América Latina que contiene una auténtica regulación de Derecho Internacional Privado"⁶¹.

Pero más allá de estas diferencias, se observa un denominador común que es la trascendencia que tiene el fenómeno en el desarrollo del D.I.Pr., que ha llevado a estimar que con esta metodología se ha creado un nuevo Derecho⁶². El enriquecimiento técnico de las soluciones propuestas, la brillantez del trabajo doctrinario, las fructíferas discusiones acerca de las fuentes y, en definitiva, la construcción del D.I.Pr. en cuanto disciplina jurídica, reconocen en la codificación la piedra angular donde descansará todo el andamiaje del

droit international... Etudes en l'honneur de Roberto Ago, pp. 14-16.

61. J. Samtleben, "El territorialismo...", *loc. cit.*, 1979, p. 184. También en *Derecho...*, *op. cit.*, p. 284.

62. Así lo entiende el barón Nolde, según quien "*on pourrait presque dire que l'histoire du droit international privé se confond avec l'histoire de sa codification*". "La codification...", *loc. cit.*, p. 307.

sistema. La codificación del D.I.Pr., entendida como sistematización lógica y coherente de sus normas, será a partir de este momento y a un mismo tiempo, punto de partida y ansiada meta de la labor científica de sus cultores⁶³. Y esto no implica desconocer las variaciones que va sufriendo ese punto de llegada de acuerdo al paso del tiempo y a los datos particulares de cada ordenamiento.

Precisamente por ello consideramos conveniente hacer un breve repaso⁶⁴ de algunos elementos de la situación socio-histórica en la que irrumpen los sistemas estatales de D.I.Pr. americanos, para comentar después las distintas influencias que los nutren. Sobre esta base, y con los elementos habidos de los dos capítulos precedentes, podrá analizarse cómo -ya en el siglo XX- las normas reguladoras de las relaciones de tráfico privado externo presentes en los códigos, comenzaron un

63. El D.I.Pr. presenta algunas dificultades adicionales respecto a las demás ramas jurídicas en lo que concierne a su codificación. Cf. O. Kahn-Freund, "General problems of private international law", R. des C., t. 143 (1974-III), p. 226.

64. El tema ya ha sido suficientemente trillado como para realizar una exposición detallada del mismo. Se trata entonces de señalar los puntos que tienen especial relieve para ubicar los sistemas de D.I.Pr. americanos en el panorama internacional y poder apuntar sobre las tendencias de su evolución.

proceso de depuración en búsqueda sobre todo de una mayor perfección técnica, aunque sin dejar de lado totalmente las posibilidades de adecuación a los requerimientos sociales y a los intereses del Estado⁶⁵.

11. Durante todo el proceso de conquista y colonización de América las instituciones de la metrópoli se fueron trasplantando al Nuevo Mundo, cuyos habitantes hubieron de acostumbrarse a unas formas de organización política y social desconocidas para algunos, muy diferentes a las conocidas para otros. Entre estos mecanismos, el Derecho ocupó un lugar importante experimentando distintos grados de asimilación. Cada potencia colonizadora desplegó sus armas jurídicas de manera singular y con efectos desiguales. Si existió algo en común en los intereses de política legislativa respecto de los dominios americanos, fue la desconfianza mutua, la hostilidad permanente, que en nada difería de la realidad operada en Europa desde el comienzo de los viajes a América. En efecto, España, Portugal, Gran Bretaña, Francia y Países Bajos, mantuvieron al otro lado

65. Sobre esto, cf. J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, pp. 181-184. Vid. asimismo J. Yanguas Messía, *Derecho internacional privado. Parte general*, 3ª ed., Madrid, 1971, pp. 154-161.

del Atlántico las profundas divergencias y la rivalidad secular habidas en el viejo Continente, ahondadas por el ánimo de hacerse fuertes en un mercado inesperado que se revelaba como una fuente de suministro de materias primas baratas y un destino seguro para la colocación de manufacturas.

La política de hostilidad recíproca provocó que las relaciones entre los conquistadores de unas y otras potencias coloniales y entre sus respectivos "conquistados" fueran durante mucho tiempo prácticamente nulas, a raíz de la terminante prohibición del comercio "exterior"⁶⁶. Así, en el Título XXVII del Libro IX de la Recopilación de las Leyes de Indias -que rigió junto a otros instrumentos la vida de las colonias españolas⁶⁷- se encontraban disposiciones que llegaban a penar con la muerte y la pérdida de los bienes a los extranjeros que

66. Cf. E. Zeballos, "Le droit international privé dans l'Amérique coloniale", *Bull. arg. dr. int. pr.*, núm. VII, 1905, esp. p. 535.

67. Además de las leyes dictadas por la corona para "Indias", regían las normas sancionadas por las autoridades residentes, un Derecho indiano criollo y el Derecho castellano supletoriamente. Vid. A. García-Gallo, *Manual de Historia del Derecho español*, t. I, 5ª ed., Madrid, 1973, p. 104. Sobre las influencias recíprocas entre estos "sitemas", *id.*, "El pluralismo jurídico en la América española, 1492-1824", en *Los orígenes españoles de las instituciones americanas. Estudios de Derecho indiano*, Madrid, 1987, pp. 229-310, esp. 306 ss.

osaran penetrar en ellas y realizaran tratos con los indios⁶⁸. Las normas vigentes en los dominios portugueses e ingleses iban en el mismo sentido⁶⁹.

Por supuesto que las prohibiciones dispuestas eran violadas sistemáticamente por una práctica contrabandista que, alentada por las dificultades de vigilancia en un territorio tan extenso, casi alcanzaba un *status* institucionalizado. El reconocimiento de esta situación, junto a la toma de conciencia respecto a la inconveniencia económica de algunas exclusiones, llevaría paulatinamente a una matización de las medidas antes mencionadas, pero siempre en un ámbito de exclusividad del comercio entre cada metrópoli y sus colonias, donde las excepciones adquirirían el rango de excepciones especialmente sancionadas, ora mediante normas unilaterales, ora a través de tratados internacionales.

Cabe agregar que dentro de los dominios de la Corona española la admisión de extranjeros en el comercio indiano estaba condicionada a la "naturalización" de los mismos, según se extrae del Título de la Recopilación

68. Sobre las dificultades para determinar el carácter de extranjero, *vid.* J.Mª. Ots y Capdequí, *Historia del Derecho español en América y del Derecho indiano*, Madrid, 1969, p. 86-87.

69. E. Zeballos, "Le droit...", *loc. cit.*, pp. 545 ss.

antes citado. La concesión de tal situación por el Real Consejo de Indias exigía estrictos requisitos entre los cuales se destacaba el domicilio durante veinte años consecutivos en España o en las Indias, tiempo que se reducía a la mitad si el interesado contraía matrimonio con una india o hija de extranjeros nacida en España o en las Indias. Por su parte, el llamado Derecho de "composición" jugó en la práctica como una especie de "regularización" destinada a aquellos extranjeros que, ingresados ilegalmente en la América hispana, prestaban posteriormente algún servicio a la Corona⁷⁰. Claro que una vez producida la "naturalización", el elemento extranjero de carácter personal desaparecía de la eventuales relaciones jurídicas privadas que entablara el "naturalizado".

Ante un panorama signado por la práctica interdicción de las relaciones del tráfico privado externo, lógicamente habría de gestarse un embrionario D.I.Pr. de alcance estrictamente territorialista. La configuración de unas normas así caracterizadas en el Derecho emanado de la metrópoli⁷¹, dejaría una huella

70. *Ibid.*, pp. 538-540.

71. El criterio territorialista no era exclusivo de la normativa dirigida a América, sino que era propio del Derecho español. *Vid.* la evolución del antiguo D.I.Pr.

visible sobre la posterior construcción de los sistemas de D.I.Pr. del continente americano. Concretamente, la herencia de las antiguas leyes de los reinos españoles fundamenta el sino territorialista del D.I.Pr. iberoamericano incluso después de la emancipación de los nuevos Estados, como se ha demostrado con contundencia⁷². Resulta claro que en una organización monopólica del comercio respecto a las colonias, donde la regla general era la exclusión de intercambios con extranjeros, las posibilidades siquiera teóricas de aplicación de un ordenamiento foráneo eran prácticamente nulas.

B) Las influencias en la formación de los sistemas

12. Los Códigos civiles americanos que recibieron el impacto de las obras europeas del primer período de la codificación, incorporaron también de este modo sus fragmentarias normas de D.I.Pr.. Concretamente, se han

español en C.A. Lazcano, "El Derecho internacional privado en las antiguas leyes españolas", *R.A.D.I.*, t. IX, 1946, pp. 121 ss..

72. Cf. las invalorable aportaciones en este sentido brindadas por L. Pereznieta Castro, "La tradition territorialiste...", *loc. cit.*, pp. 323-326 y J. Samtleben, "El territorialismo...", *loc. cit.*, pp. 174-178.

señalado los supuestos heterogéneos de los Códigos de Haití de 1825, de Bolivia de 1830, de Costa Rica de 1841, de la República Dominicana de 1845 y 1884 y del Perú de 1851, respecto del Code francés, y de los de México de 1870, Guatemala de 1877 y Costa Rica de 1887, en relación con el ABGB austriaco -a través del C.c. portugués de 1867-⁷³. Claro que debe matizarse que a los últimos la influencia les llega diluída en la fuerte impronta ejercida por otros códigos europeos y americanos, en especial por el chileno de 1855, con lo cual la primera afirmación se desvanece para ellos.

Sobre el C.c. de A. Bello, pueden analizarse muchas cuestiones desde variadas perspectivas. Fundamentalmente, su impresionante aceptación en muchos Estados del continente tuvo un efecto unificador indirecto sobre el Derecho civil que, aunque parcial, no puede menospreciarse⁷⁴. En forma prácticamente literal, el C.c. chileno se transplantó a El Salvador (1859), Ecuador (1860), Venezuela (1862 -de vida efímera-), Nicaragua

73. También se indican dentro del primer grupo los C.c. de Luisiana (1809 y 1824), pero en ellos se siguió, en realidad, el Proyecto de Código de 1800. Vid. sobre las influencias en general, H. Valladao, "Le droit...", *loc. cit.*, pp. 10-20 y 53-62 y J. Samtleben, "Der Territorialitätgrundsatz...", *loc. cit.*, pp. 83-89.

74. J.Ma. Castán Vázquez, "El Código civil de Andrés Bello y la unidad...", *loc. cit.*, *passim*.

(1867), Uruguay (1868), Colombia (1873/1887) y Honduras (1880). Muchas de sus normas impactaron también en México (1870), Guatemala (1877), Costa Rica (1887) y Panamá (1916)⁷⁵.

En el campo del D.I.Pr., el C.c. chileno fue uno de los canales por cuyo cauce el principio territorialista irrigó a gran parte de los sistemas americanos⁷⁶, incluso en mayor medida que en el ámbito convencional, donde su principal impacto radica en el Tratado de Lima de 1878⁷⁷. Así, en los Estados que recibieron su influencia, la concepción territorialista imperante en su Título Preliminar, vino a consolidar la tradición proveniente del Derecho español. Incluso, en el caso del C.c. argentino, más afín a otros parámetros tanto en general cuanto en lo que particularmente se refiere al D.I.Pr., la presencia de la obra de A. Bello ayudó a teñirlos de

75. Sobre la difusión de este texto, *vid.* A. Guzmán Brito, *Andrés Bello codificador...*, *op. cit.*, pp. 466-468.

76. *Vid.*, los matices en la recepción del territorialismo en los códigos mencionados en, H. Valladao, "Le droit...", *loc. cit.*, pp. 36-62, *id.*, "Contribuição da legislação nacional para a solução dos conflitos de leis na América", *Sexto Curso C.J.I.* (1979), pp. 79-106, esp. 90-93 y J. Samtleben, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 277-279.

77. Debe recordarse también el Proyecto presentado por B. Prats en el Primer Congreso Sudamericano.

territorialismo⁷⁸. En el origen de dicha concepción se encuentra el fortísimo presupuesto político típico del fenómeno de la codificación en América Latina. A su influjo, las ideas de soberanía política e independencia se tradujeron en el plano jurídico en el criterio típicamente iuspublicista del imperio exclusivo de las leyes de cada Estado dentro de su territorio⁷⁹.

De este modo se buscaba, al igual que se hacía en otros ámbitos, excluir cualquier ingerencia de Estados extranjeros. El sistema de D.I.Pr. pergeñado sobre estas bases se compone de normas unilaterales que se ciñen a delimitar el campo de acción de la propia legislación, la cual se aplica siempre en el territorio del Estado -a nacionales y extranjeros (art. 14 C.c.)- y a los chilenos aún en el extranjero (art. 15). Mientras la primera de dichas normas no concreta la materia abarcada, permitiendo una interpretación amplia referida a los

78. L. Pereznieta Castro, "La tradition...", *loc. cit.*, pp. 337-359 y J. Samtleben, "Der Territorialitätsgrundastz...", *loc. cit.*, *passim*, "El territorialismo...", *loc. cit.*, pp. 182-185, "La relación entre Derecho internacional público y privado en Andrés Bello", *R.E.D.I.*, 1982, pp. 399-400 y *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 4-5 y 276-277.

79. "A la tradición territorialista heredada, se anuda ahora el ideal de la independencia", J. Samtleben, "El territorialismo...", *loc. cit.*, p. 178. *Vid.* también los elementos brindados por R.B. Santos Belandro, *Convención interamericana...*, *op. cit.*, pp. 142 ss.

habitantes en Chile, los bienes allí situados y los actos realizados en ese país⁸⁰, la segunda se dirige expresamente a las cuestiones personales y familiares. De la bilateralización de dichas normas cabría inferir la aplicación de la ley de la residencia al extranjero no residente en Chile, aunque sobre este punto no hay una opinión unánime⁸¹.

No obstante la veracidad de los extremos señalados, los efectos de la concepción desarrollada por A. Bello se atenúan por mor del juego de tres principios, basados según el autor en la *comitas gentium*: los derechos adquiridos, el fraude a la ley y la eficacia

80. J.C. Fabres, "Le droit international privé dans la législation du Chili", *Journ. dr. int.*, t. XIV, 1887, pp. 133-143, esp. 137, F. Duncker Biggs, *Derecho internacional privado*, 3ª ed., Santiago de Chile, 1967, p. 149, F. Albónico Valenzuela, *Manual de Derecho internacional privado*, Santiago de Chile, 1950, t. I, p. 128. Sin embargo, D. Guzmán Latorre y M. Millán Simpfendörfer, *Curso de Derecho internacional privado*, Santiago de Chile, 1973, pp. 754-757, realizan una restricción al ámbito personal, reconociendo que la jurisprudencia siempre ha estado de acuerdo con la otra postura. Cf. J. Samtleben, *Derecho...., op. cit.*, p. 276⁴.

81. J. Samtleben, *Derecho...., op. cit.*, pp. 276-277 y notas 5 y 6 y M. Ramírez Necochea, "La ley personal", *Rev. Der. Jur. Cs. Soc. (Chile)*, t. 63, 1966, pp. 216-221. Una crítica al criterio territorialista, subrayando la "contradicción" entre los arts. 14 y 15, en B. Gesche Muller, "El artículo 14 del Código civil como norma de Derecho internacional privado", *Rev. de Der. (Concepción)*, t. 25, 1957, pp. 442-461.

extraterritorial de las decisiones judiciales⁸². Por esta razón, el territorialismo consagrado en el C.c. chileno es denominado "intermedio", en relación con el absoluto de México y el relativo de Argentina⁸³. Las raíces de la construcción que tanta repercusión alcanzaría en el continente americano, deben buscarse en la estatutaria holandesa -especialmente en U. Huber-, que deslumbró a A. Bello en sus largos años londinenses⁸⁴. Sin embargo, la

82. A. Bello lo había dejado muy claro en sus *Principios de derecho de jentes*, Santiago de Chile, 1832, pp. 40-41: "Las leyes de un Estado no tienen más fuerza en otro que la que el segundo haya querido voluntariamente concederles...". Vid. J. Samtleben, "La relación...", loc. cit., pp. 404-407. Sobre la excepción referida a la sucesión (art. 955.2), vid. V. Pescio, "Les règles de droit international privé dans le code chilien", *Rev. dr. int. dr. comp.*, 1963, pp. 181-191, esp. 183-184.

83. L. Pereznieta Castro, "La tradition...", loc. cit., p. 183. En realidad, la nueva redacción del art. 12 C.c. para el D.F. mexicano morigera un poco el "absolutismo" del sistema vigente desde 1932, estableciendo un sistema mixto de base territorialista. *Id.*, *Derecho internacional privado*, 5ª ed., México, 1991, pp. 299-300.

84. J. Samtleben, "El territorialismo...", pp. 180-181. Fueron los mismos años en los que bebió de las ideas utilitaristas de J. Bentham, como puede constatarse, por todos, en J. Samtleben, "Menschheitsglück und Gesetzgebungssexport. Zu Jeremy Benthams Wirkung in Lateinamerika", *RabelsZ*, núm. 50, 1986, pp. 451-482, conr. 456-458. Sobre la noción de comitas en U. Huber, vid. E.G. Lorenzen, "Huber's De Conflictu Legum", *Selected Articles in the Conflict of Laws*, New Haven, 1947, pp. 136-162 (trad. al inglés de la 2ª ed. del texto de Huber de 1707: 162-180), esp. 138-139 y 158-160. Puede

fuente legal considerada por el autor fue el art. 9 del C.c. de Lousiana (1808/1825), que basaba a su vez la redacción en el Proyecto de Code de 1800⁸⁵.

13. Varios años antes de la promulgación del C.c. de A. Bello y contemporáneamente con sus *Principios de derecho de jentes*, la singular impronta territorialista de J. Story comenzaba su andadura con la publicación de los famosos *Commentaries on the Conflict of Laws Foreign and Domestic in regard to Contracts, Rights and Remedies and Especially in regard to Marriages, Divorces, Successions, and Judgements* (Boston, 1834). A sabiendas de los riesgos que ello entraña, puede intentarse un resumen de la doctrina de J. Story, a fin de contemplar su reflejo en el D.I.Pr. latinoamericano, teniendo en cuenta que también en este caso existe un fuerte condicionante político *postrevolucionario* que lleva a buscar un distanciamiento de todo lo que signifique una continuidad del estado de cosas anterior.

En primer lugar debe ponerse de relieve la recepción de las construcciones estatutarias, donde ocupa un sitio

consultarse también H.E. Yntema, "The Comity Doctrine", *A.J.C.L.*, vol. 65, 1966, pp. 9-32.

85. J. Samtleben, "Der Territorialitätsgrundsatz...", *loc. cit.*, pp. 77-78.

preferente U. Huber con su *De conflictu legum*⁸⁶, dato que marca su parentesco con el pensamiento de A. Bello⁸⁷. De aquéllas toma también J. Story la noción de *comitas gentium*, entendiendo que el imperio de la ley de un Estado llega sólo hasta los límites de su territorio (aplicándose allí a todas las personas) y que, por lo tanto, cualquier efecto extraterritorial dependerá de la voluntad de los demás Estados; éstos, en nombre de la *comitas*, reconocerán tales efectos en tanto no atenten contra sus poderes o derechos o los de sus ciudadanos. En esta actitud de "cortesía", que él sitúa en la esfera de atribuciones del legislador más que del juez, encuentra J. Story una necesidad moral de hacer justicia para poder esperar una justicia a cambio, una cuestión de interés mutuo y utilidad, todo lo cual conforma "el verdadero

86. E. Lorenzen, "Story's Commentaries on the Conflict of Laws - One Hundred Years After", *Harv. L.R.*, vol. XLVIII, 1934, pp. 15-38, esp. 34-35, M. Gutzwiller, "Internationalprivatrecht: Die drei Grossen des 19. Jahrhunderts", *Festschrift Frank Vischer...*, *op. cit.*, pp. 131-140, concr. 131-132 y L. Pereznieta Castro, "La tradition...", *loc. cit.*, pp. 302-303. Especialmente por intermedio de J. Story, algunos elementos de la doctrina de U. Huber, llegan a Argentina (H.A. Grigera Naón, "Huber and Contractual Choice-of-Law in the Argentine Civil Code", *N.I.L.R.*, vol. XXXIX, 1992, pp. 195-207) y a Uruguay (V. Matteo, M. Solari y R. Herbert, "Dutch Threads in a Uruguayan Tapestry", *id.*, pp. 209-227).

87. J. Samtleben, "Der Territorialitätsgrundsatz...", *loc. cit.*, p. 75.

fundamento" sobre el que debe descansar la administración del Derecho internacional privado. Su atención hacia ésta, le lleva a considerar la jurisprudencia norteamericana de entonces, especialmente la de la *Supreme Court* de Lousiana⁸⁸.

Mas, no obstante estas raíces, en lugar de buscar una reglamentación de las relaciones de tráfico privado externo basándose simplemente en los "estatutos" tradicionales, parte de la consideración del tema al cual se refieren, para designar la ley aplicable a cada uno. Así, las cuestiones relativas al estado y la capacidad de la persona son reguladas, salvo excepciones, por la ley del domicilio. La capacidad para contratar, por ejemplo, se somete a la ley del lugar de celebración, ley que gobierna la globalidad del contrato, excepto en aquellos

88. Estas ideas, resumidas aquí con cierta audacia, se contienen en el segundo capítulo de los *Commentaries*, titulado "General Maxims of International Jurisprudence" (una traducción castellana del mismo realizada en 1880 por H.S. Gabilondo, puede consultarse -presentada por K.H. Nadelmann- en *Jurídica (México)*, núm. 15, 1983, pp. 221-232). Cf. E.G. Lorenzen, *loc. cit.* (sobre las limitaciones de la concepción territorialista de J. Story, *vid. id.*, "Territoriality, Public Policy and the Conflict of Laws", *Selected Articles...*, *loc. cit.*, pp. 1-18, esp. 2-12), M. Aguilar Navarro, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 253 ss., L. Pereznieto Castro, *loc. cit.* y H. Valladao, "Le droit...", *loc. cit.*, pp. 24-25 e *id.*, "The Influence of Joseph Story on Latin-American Rules of Conflict of Laws", *A.J.C.L.*, vol. 3, 1954, pp. 27-41, esp. 30-31.

supuestos en que expresa o tácitamente se designe el lugar de cumplimiento en otro Estado; en tal caso, se debe aplicar la ley de éste. Capacidad, forma y validez del matrimonio, se rigen a su vez por la ley del lugar de celebración, mientras que la ley del domicilio conyugal regula los derechos y deberes de los cónyuges y la *lex fori* el divorcio. En cuanto a los bienes, los inmuebles se someten a la ley del lugar de situación y los muebles a la ley del domicilio del propietario. La misma distinción juega para las sucesiones⁸⁹.

La repercusión teórica de J. Story es conocida, como también lo es su importante ascendiente respecto de la jurisprudencia norteamericana sistematizada en el primer *Restatement*⁹⁰, y que en algunas cuestiones se mantiene hasta la actualidad. Sin embargo, cobra especial interés

89. *Vid.*, con más detalle, E.G. Lorenzen, "Story's Commentaries...", *loc. cit.*, pp. 19-26, explicación que es seguida cerradamente por H. Valladao; sólo que donde el primero dice "leaving out of consideration for the present the general maxims", el segundo afirma "*sans s'occuper beaucoup des maximes générales, Story...*", (este párrafo es borrado de la versión inglesa citada). Una acertada síntesis también en L. Pereznieto Castro, "La tradition...", pp. 303-304.

90. *Vid.* E.G. Lorenzen, "Story's Commentaries...", pp. 27 ss. y K.H. Nadelmann, "Joseph Story's Contribution to American Conflicts Law", *Conflict of Laws...*, *op. cit.*, pp. 21-40. También en *id.*, "Some Historical Notes on the Doctrinal Sources of American Conflicts Law", *ibid.*, esp. pp. 11-14.

la influencia sobre el D.I.Pr. latinoamericano, que se expresa especialmente en varias normas del C.c. argentino y, en consecuencia, en el paraguayo. Asimismo, y lo que es más importante, por intermedio del sistema argentino, estos criterios impregnan algunas soluciones de los Tratados de Montevideo. Señaladamente, en la obra redactada por D. Vélez Sársfield y en vigor para la República Argentina desde 1871, se contempla el impacto directo de la doctrina de J. Story en lo referente a "actos, contratos hechos o derechos adquiridos fuera del lugar del domicilio" (art. 8), incapacidades contra leyes de la naturaleza o penales (art. 9), bienes inmuebles (art. 10), validez y efectos personales y patrimoniales del matrimonio (arts. 159 a 163)⁹¹ y contratos internacionales (arts. 1205 a 1208).

En el Tratado de Derecho civil internacional de Montevideo de 1889 (cuyas reglas se mantienen en general en la versión de 1940), se reproducen las mismas líneas directrices respecto de la capacidad, forma del acto y existencia y validez del matrimonio (art. 11), a la vez que se nota una marcada huella territorialista en la

91. Cuando veinte años más tarde estas normas son reemplazadas por la Ley 2393 de Matrimonio civil, la influencia de J. Story sobre los arts. 2 a 6 de la misma sigue siendo decisiva. Al igual que lo sucedido con el C.c., esta ley fue adoptada por Paraguay (en 1898).

regulación de las sucesiones (arts. 44 y 45). En otras reglas, la influencia del autor norteamericano se confunde con otras, particularmente con la de F.K. von Savigny⁹².

14. En un sentido más general, puede decirse que muchos de los códigos que se elaboran en el segundo período de la codificación del D.I.Pr. -el de la consagración legislativa de las doctrinas clásicas- constituyen resultados "mixtos", donde conviven elementos provenientes de distintas fuentes. Sin embargo, el Código (*Privatrechtliches Gesetzbuch*) del cantón de Zurich de 1854, el Código de Sajonia de 1863 (*Bürgerliches Gesetzbuch für das Königreich Sachsen*) y el Código de las provincias bálticas rusas de 1864, se inscriben en esta historia como los primeros en recibir la influencia de las ideas de F.K. von Savigny, al mismo tiempo que A.T. de Freitas se guiaba por ellas para elaborar las normas de D.I.Pr. de su célebre *Esboço* (entre 1860 y 1865).

Los matices que pueden observarse en la forma de recibirlas⁹³ no empuenecen la dimensión de los

92. Sobre esto, cf. H. Valladao, "Le droit...", *loc. cit.*, pp. 27-29 y con más detalle "Joseph Story...", *loc. cit.*, pp. 33-41, donde también se destaca la influencia sobre la Ley de Matrimonio civil brasileña de 1890.

denominadores comunes. Concretamente, el problema no radica ahora en determinar el ámbito de aplicación territorial o personal de las normas, sino en localizar las relaciones jurídicas dentro del ordenamiento en el cual se encuentre su centro de gravedad⁹⁴. De este modo alcanza sanción legislativa el paradigma savignyano basado en la norma de conflicto bilateral. Partiendo de la noción de "relación jurídica", se trata de encontrar la "sede" que corresponda a su naturaleza para lograr, de este modo, la "localización" de aquélla en un determinado ámbito espacial, en el cual hallará su regulación. En consecuencia, las cuestiones a regular dentro del D.I.Pr. no se dividen según el "estatuto" a que pertenezcan sino a partir de la naturaleza de las distintas relaciones de Derecho privado que se producen en la práctica⁹⁵. En

93. Para las diferencias entre las respectivas obras de Bluntschli, von Wächter y Bunge, *vid.* B. Nolde, "Les étapes..." *loc. cit.*, pp. 365-371, *id.*, "La codification..." *loc. cit.*, pp. 317-322 y M. Gutzwiller, "Le développement historique du droit international privé", *R. des C.*, t. 29 (1929-IV), pp. 352 ss.. Sobre la primera, *vid.* K. Siehr, "Johann Caspar Bluntschli et le droit des conflits de lois dans le Code civil du Canton de Zurich de 1853/55", *Liber Memorialis François Laurent...*, *op. cit.*, pp. 1017-1038, esp. 1023 ss..

94. F.K. von Savigny, *Sistema...*, *op. cit.*, esp. pp. 181 ss. *Vid.* R. de Nova, *op. cit.*, pp. 456 ss. y R.B. Santos Belandro, *Convención...*, *op. cit.*, pp. 140-142.

95. Precisamente este cambio en los fundamentos del D.I.Pr. es lo que permite hablar a J.D. González Campos en su Curso general de 1987 en la Academia de Derecho

otras palabras, se plantea claramente en esta construcción la distinción entre relación jurídica e institución; aquélla representa la combinación en la vida real de distintas instituciones y se erige en el punto de partida idóneo para el trazado de los límites al ámbito de aplicación de las reglas de derecho⁹⁶.

La reglamentación, de otro lado, va adquiriendo los rasgos característicos de bilateralidad y exhaustividad⁹⁷ que se harían definitivos en el C.c. italiano de 1865. A pesar de las diferencias apuntadas, no cabe hesitación respecto a que el cambio medular provocado por la difusión del octavo volumen del *Sistema de Derecho romano actual*, junto a la consolidación de la nacionalidad como principal punto de conexión⁹⁸, son los factores que distinguen esta nueva etapa en la codificación del

internacional de La Haya, de la "formación del paradigma".

96. "Una posible lectura" de los alcances de esta distinción se expone en J.ª Espinar Vicente, *Curso de Derecho internacional privado español. Técnicas de reglamentación y normas*, Madrid, 1991, esp. 101-109.

97. Las lagunas que existen son deliberadas, como demuestra E. Jayme, *op. cit.*, pp. 31-32, refiriéndose a la falta de reglamentación de las obligaciones extracontractuales en el Código de Zurich.

98. Aunque el C.c. báltico sigue el criterio más savignyano del domicilio (*Vid.* F.K. von Savigny, *Sistema...*, *op. cit.*, pp. 128-131 y 142 ss.).

D.I.Pr. europeo continental⁹⁹, a la vez que determinan el inicio de la separación entre éste y el D.I.Pr. de los países tributarios del sistema de *common law*¹⁰⁰.

Por su parte, la recepción del modelo savignyano en el *Esboço* es evidente y singular, concretándose en la aplicación de la ley del domicilio a la capacidad con la excepción de la *lex fori* para las incapacidades para un acto determinado¹⁰¹, la del lugar de situación a los bienes muebles e inmuebles (a diferencia de F.K. von Savigny), la del lugar del acto a éste, la del domicilio conyugal a las relaciones personales y económicas entre los esposos, la *lex fori* a la disolución del matrimonio, la ley del domicilio del padre a la patria potestad, la misma ley y la *lex fori* a la filiación y la adopción, y la ley del lugar de ejecución al fondo de los contratos. A.T. de Freitas consagra también normas específicas al orden público internacional, al *favor negotii* y a la

99. F. von Schwind, "Problems of codification of Private International Law", *I.C.L.Q.*, 1968, pp. 428-442, esp. 430, llega a afirmar que dichos factores han creado no sólo la posibilidad sino también la necesidad de codificar el D.I.Pr.

100. E. Jayme, *op. cit.*, p. 30.

101. A.M. Villela, "O Direito internacional privado no *Esboço* de Teixeira de Freitas", *Augusto Teixeira de Freitas e il Diritto Latinoamericano...*, *op. cit.*, pp. 179-191, esp. 188-190.

exigencia de alegación y prueba del Derecho extranjero¹⁰². Esta última no llega a desdibujar empero, la formulación bilateral de las normas, abriendo las puertas a la aplicación de la ley foránea¹⁰³.

Aunque la obra de Freitas no llegó a consagrarse legislativamente en Brasil¹⁰⁴, su contenido repercutió de una manera acentuada en los C.c. uruguayo de 1869, argentino de 1869 y, por medio de éste, paraguayo de 1876. Esto es especialmente cierto respecto de las normas propiamente civiles¹⁰⁵, pero también puede

102. Para la explicación de estas cuestiones y para ver hasta qué punto constituyen aportaciones del autor, vid H. Valladao, "Le droit...", loc. cit., pp. 69-77 y F. Pocar, "Considerazioni sull'attualità del pensiero internazionalprivatistico di Augusto Teixeira de Freitas", *Augusto Teixeira de Freitas e il Diritto Latinoamericano...*, op. cit., pp. 173-177.

103. En este sentido F. Pocar, op. cit., 175 y, A.M. Villela, "O Direito...", loc. cit., pp. 184-185. La falta de preocupación de A.T. de Freitas por la reciprocidad, por "lo que se ha hecho, se hace o se hará" en los países extranjeros, es resaltada por H. Valladao, "Le droit...", loc. cit., p. 68.

104. Los sucesivos C.c. brasileños se apartan en muchos puntos de los criterios del *Esboço*. Cf., A.M. Villela, "O Direito...", loc. cit., p. 191. Sobre las características del D.I.Pr. en el C.c. de 1916, vid. R. Octavio, "Conflict of Laws in Brazil", *Yale L.J.*, núm. 28, 1919, pp. 463-477.

105. Vid., E. Martínez Paz, *Freitas y su influencia sobre el Código Civil Argentino*, Córdoba, 1927 y A. Levaggi, "Influencia de Teixeira de Freitas sobre el Proyecto de Código Civil Argentino en materia de relaciones de familia. Las fuentes utilizadas por Vélez

aplicarse a las de D.I.Pr., pese a la mixtura con otras influencias (J. Story y A. Bello), no relevantes en el *Esboço*¹⁰⁶. Especialmente, el C.c. argentino sigue la obra del jurista brasileño en lo referente a la ley aplicable a la capacidad (arts. 6, 7, 948 y 949), aplicación del Derecho extranjero (arts. 13 y 14), ley aplicable y competencia judicial internacional en materia contractual (arts. 1.209 y 1.210 y 1.212 a 1.216) y sucesiones (art. 3.283)¹⁰⁸.

15. En la línea que venimos apuntando, debe hacerse alusión a la irrupción del pensamiento internacionalista de P.S. Mancini que se vería reflejado en el marco legislativo, en las normas de D.I.Pr. acuñadas en el Código piamontés de 1865. En realidad, las enseñanzas del

Sársfield", *Augusto Teixeira de Freitas e il Diritto Latinoamericano...*, op. cit., 399-426.

106. En Freitas triunfa la influencia europea sobre la americana. Vid. J. Samtleben, "Teixeira de Freitas e a autonomia das partes no direito internacional privado latino-americano", *Augusto Teixeira de Freitas e il Diritto Latinoamericano...*, op. cit., pp. 193-211, esp. 193. La "reacción antiestatutaria" de A.T. Freitas, se analiza en M. Panebianco, "Principi di diritto internazionale privato in Teixeira de Freitas", *Augusto Teixeira de Freitas e il Diritto Latinoamericano...*, op. cit., pp. 213-218.

108. Cf. H. Valladao, "Le droit...", loc. cit., pp. 77-79.

maestro italiano, por la propia fuerza de su configuración y contenido, se extienden por todo el Derecho internacional general y nacen, específicamente, dentro del Derecho internacional público sobre la base de considerar a la nacionalidad como verdadero núcleo del mismo¹⁰⁹.

La razón decisiva de la elección de tal punto de partida para realizar su particular construcción teórica, tiene indudables ribetes políticos en cuanto manifestación de una ideología dominante, que se adicionan al carácter eminentemente político de la labor personal desplegada por P.S. Mancini¹¹⁰. Aquélla se

109. La famosa lección de Mancini en la Universidad de Turín en enero de 1851, en la que se explican los elementos constitutivos de esta idea fuerza, lleva por título precisamente *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*. Puede consultarse la versión española en *Sobre la nacionalidad* -A.E. Pérez Luño (ed.)-, Madrid, 1985, pp. 3-65. Vid. el tratamiento que se hace de este tema en A. Droetto, Pasquale Stanislao Mancini e la scuola italiana di diritto internazionale del secolo XIX, Milán, 1954, pp. 311 ss.. Se ha insistido en la idea de que en el ámbito del D.I.Pr. el introductor del criterio de la nacionalidad ha sido en realidad P. Eperson. Vid. M. Gutzwiller, "Le développement...", loc. cit., p. 367 y H. Batiffol, *Aspects...*, op. cit., p. 10.

110. En el primer caso hay una influencia indirecta sobre la codificación del D.I.Pr. y en el segundo, directa. Vid. E. Jayme, "Potere politico e codificazione del diritto internazionale privato da Mancini a Bismarck", *Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi*, Florencia, 1982, esp. pp. 1174-1175.

incardina en la realidad de un Estado que había llegado a la unificación y en el cual la exaltación de lo nacional era un imperativo del momento. Superado el hecho insurreccional popular contra la permanencia en el trono de un monarca extranjero y lograda la práctica unidad con la sola exclusión de Roma y Venecia, es inevitable que todos los actos políticos vayan dirigidos de una forma u otra a la autoafirmación de la nacionalidad¹¹¹. Mas este concepto, dentro de las construcciones teóricas de Mancini, se transforma al pasar las fronteras en un imperativo de igualdad y coexistencia¹¹² y en una obligación ineludible de respetar los derechos civiles de los extranjeros¹¹³.

111. Vid. E. Vitta, "Parallelo...", *loc. cit.*, p. 5. Id. "International Conventions and National Conflict Systems", *R. des C.*, t. 126 (1969-I), pp. 111-232, esp. 126. En idéntico sentido, T. Ballarino, *Diritto internazionale privato*, Padua, 1982, pp. 31 y 42. Cf. A. Droetto, *op.cit.*, pp. 5-14.

112. Vid. P.S. Mancini, "De la nacionalidad..." *loc. cit.*, pp. 53 ss.. Sobre los distintos enfoques de la nacionalidad en el desarrollo del pensamiento de Mancini, resulta de suma utilidad consultar los materiales del coloquio dirigido por E. Jayme y H.-P. Mansel, *Nation und Staat im Internationalen Privatrecht*, Heidelberg, 1990. La relación con la construcción de A. Gebhard es tratada también por este último autor, en "L'adoption du principe de la nationalité par le EGBGB du 18 août 1896", *Liber Memorialis François Laurent...*, *op. cit.*, pp. 869-879, *concr.* 874-877.

113. P.S. Mancini, "De l'utilité...", *loc. cit.*, pp. 292-293.

En el ámbito del D.I.Pr., el principio de igualdad se expresa mediante la paridad en el tratamiento al que son sometidas las legislaciones extranjeras con las cuales la situación privada internacional presenta algún punto de contacto, respecto de la *lex fori*. De otro lado, esta tendencia se demuestra en la posibilidad de reconocer actos y sentencias extranjeras establecida en el art. 10 C.c. italiano. El postulado de igualdad debe jugar, para el autor italiano, en la doble vertiente interna e internacional, aunque es mucho más realizable en la segunda, donde también es alcanzable el ideal de la armonía internacional de las soluciones¹¹⁴.

Sobre la nacionalidad puede afirmarse que invade casi todas las categorías reguladas en el Título Preliminar del C.c. de 1865. El estado y la capacidad de la persona, las relaciones de familia, los bienes muebles, las sucesiones, el contenido y efecto de las obligaciones, todo queda afectado por la aplicación de la ley nacional. Lo que resulta más llamativo es que el

114. Cf. E. Vitta, "Parallelo...", *loc. cit.*, pp. 29-32. Mancini expresa la idea de la armonía como una aplicación del imperativo categórico kantiano, toda vez que según su doctrina, el legislador estatal debe dictar las normas de D.I.Pr. del mismo modo que lo haría un legislador universal. *Vid.* también G. Diena, "La conception du droit international privé d'après la doctrine et la pratique en Italie", *R. des C.*, t. 17 (1927-II), pp. 347-360.

ensamble de estas ideas conduce a la formulación de normas bilaterales y completas de D.I.Pr., rasgos que son comprendidos desde una óptica que los convierte en condiciones inherentes a aquéllas¹¹⁵ y que permiten realizar el ideal de igualdad que antes describimos.

Tan característico como estas líneas maestras por las que se desenvuelve el pensamiento de Mancini, resulta el principio de *ordine pubblico* que se plasma en el art. 12 C.c. italiano y que opera como excepción a la regla general de la personalidad de las leyes¹¹⁶. Precisamente fueron el orden público y la consagración de la nacionalidad como punto de conexión fundamental, los criterios básicos de la Escuela italiana y los que más desarrollo doctrinario e influencia legislativa lograrían. En un segundo orden, el principio de libertad

115. Con evidente admiración opina E. Jayme, "Considérations historiques...", loc. cit., pp. 26 y 40-41, que Mancini toma a la bilateralidad como una cuestión de base iusnaturalista, lo que confiere a la codificación italiana "*un élan spirituel et philosophique*" que subyuga a los legisladores de otros Estados. Vid. también del mismo autor Pasquale Stanislao Mancini: *Il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense*, trad., Padua, 1988, esp. pp. 77-81. F. Schwind, "Aspects...", loc. cit., p. 99, afirma sobre estos datos que la obra de Mancini plasmada en las Disposiciones preliminares al C.c. de 1865, constituye la primera legislación que merece ser llamada "codificación".

116. P.S. Mancini, "De l'utilité...", loc. cit., pp. 296-297. Cf. G. Diena, op. cit., pp. 386-391.

que lleva a admitir la autonomía de la voluntad de los particulares para designar el Derecho aplicable a sus negocios jurídicos, también ocupa un lugar importante en la codificación italiana (art. 9.2º C.c.). Aquí queda patente el imperio del individualismo y el auge del fomento de la iniciativa privada, elementos a los cuales Mancini no era ajeno¹¹⁷. Por último, cabe hacer mención de un dato que surge de la observación de las normas de D.I.Pr. contenidas en el C.c. italiano de 1865. El mismo consiste en la "emancipación" que experimenta por primera vez el D.I.Pr., entendida ésta como el dictado de normas que se limitan a señalar el Derecho aplicable a los distintos supuestos de hecho formulados, sin mezclarlas con normas de Derecho privado interno¹¹⁸.

117. P.S. Mancini, "De l'utilité...", *loc. cit.*, pp. 294-295. Para E. Jayme la libertad, así entendida, es uno de los tres principios inspiradores del ideario manciniano, en el mismo rango que los anteriores ("Considérations historiques...", *loc. cit.*, p. 47.). Tal consideración ya se apreciaba en M. Gutzwiller, "Le développement...", *loc. cit.*, p. 368-374. Cf. O. Kahn-Freund, *op. cit.*, pp. 275-276. Vid. también A. Weiss, *Traité théorique et pratique de droit international privé*, vol. III, 2ª ed., París, 1912, pp. 126-128.

118. E. Jayme, "Considérations historiques...", *loc. cit.*, pp. 25 y 48-49. Partiendo de una concreta visión del contenido de la disciplina y situándonos en el momento histórico en que se pone en vigor, constituye un elemento indudablemente innovador.

La proyección de la obra de Mancini en el D.I.Pr. se constata en la influencia ejercida sobre los arts. 10.1º y 2º y 11.3º del C.c. español de 1889¹¹⁹ y sobre el EGBGB. En América se palpa su impronta en lo que podríamos llamar las codificaciones estatales tardías (como el C.c. de Brasil de 1916), a veces directamente y otras a través del C.c. español (C.c. de Cuba de 1889 y C.c. de Puerto Rico de 1898 reformado en 1902.). Pero, como ha sido puesto de relieve, la mayor importancia está en el impacto causado sobre la codificación internacional del D.I.Pr., tanto en Europa¹²⁰ cuanto en América. Del lado americano, la poderosa fuerza de la Escuela italiana estuvo presente en el primer intento de codificación internacional del D.I.Pr., el Tratado de Lima de 1878, dejándose sentir también sobre el más famoso, el Código Americano de D.I.Pr. o Código Bustamante de 1928¹²¹.

119. Es de destacar que dicha influencia no aparece en los proyectos de Código. Cf. J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *loc. cit.*

120. La influencia se alarga en el tiempo. Vid. R. Vander Elst, "La loi nationale dans les conventions de La Haye", *Rev. belge dr. int.*, 1991, pp. 398-407.

121. Vid. J. Samtleben, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 191-200. También analiza profundamente esta influencia F. Mosconi, "La legge regolatrice della capacità delle persone fisiche: delle proposte di Pasquale Stanislao Mancini alla prassi convenzionali", *Le droit international... Etudes en l'honneur de Roberto Ago*, t. IV, Milán, 1987, pp. 187-225, esp. 210-217.

17. El mismo apunte respecto a la influencia sobre las codificaciones americanas tardías puede señalarse sobre la codificación del D.I.Pr. llevada a cabo en el EGBGB. Obviamente, este cuerpo normativo plasmado en 1896, mal podía influir en las reglamentaciones que ya existían en su gran mayoría en América. Si a dicho dato adicionamos el hecho de que buena parte de éstas se mantienen prácticamente intactas en la actualidad, puede apreciarse límpidamente que la docencia de la codificación alemana sobre la producción jurídica del Nuevo Continente, no tuvo la trascendencia que alcanzaron otras.

Lo que no puede desestimarse es la atención que, partiendo de la inspiración de Gebhard, despertaron los arts. 7 a 31 de la Ley de Introducción al C.c. alemán entre los internacionalistas del mundo entero. Bajo la influencia preponderante del C.c. italiano¹²², las primeras tareas encaradas por la Conferencia de La Haya de D.I.Pr., el nacionalismo y el positivismo alemán y las ideas de Savigny, las normas citadas inician el camino de

122. W. Simons agrega algunos efectos del *Code Napoléon* y de la teoría de Story y la jurisprudencia anglosajona. Vid. "La conception du droit international privé d'après la doctrine et la pratique en Allemagne", *R. des C.*, t. 15 (1926-V), pp. 476-485.

la regulación de algunas técnicas de aplicación que tendrían un importantísimo desarrollo posterior. Baste señalar el tratamiento que se otorga en la Ley de Introducción al C.c. alemán a cuestiones tales como el reenvío (art. 27) o la retorsión (art. 31)¹²³, para comprender el significado de esta afirmación. La impronta de la Escuela italiana se palpa especialmente en la utilización primordial de la conexión "nacionalidad" en lo referente a estado y capacidad de la persona y a sucesiones.

Mas, debe prestarse atención a que, en general, salvo en contadas excepciones como el art. 7 -relativo a la capacidad jurídica de la persona-, las normas incluídas en la codificación alemana son unilaterales. Andando en el tiempo, la jurisprudencia se ha tomado el trabajo de bilateralizarlas¹²⁴ y de hacerlas jugar en forma armónica. Una y otra vez se ha señalado que fue la falta

123. Según W. Simons, estas dos cuestiones junto con el orden público (art. 30) y la reciprocidad (consagrada en leyes procesales), constituyen los cuatro principios "egoístas" del D.I.Pr. incorporados a la legislación alemana. *Ibid.*, pp. 504-519.

124. Cf. E. Jayme, *op. cit.*, pp. 72-74, quien al comentar el proyecto de reforma finalmente plasmado en 1986, establece que dictar normas bilaterales de D.I.Pr. en Alemania es, al mismo tiempo, volver a Mancini y a Savigny y reconocer la realidad jurídica de ese país. *Vid.*, sobre el mismo punto, W. Simons, *op. cit.*, pp. 485-497.

de decisión del legislador alemán para tomar partido sobre puntos controvertidos, el hecho desencadenante de una sensible falta de coherencia en el sistema de D.I.Pr. Dicha circunstancia se destaca más aún si se tienen en cuenta algunas de las disposiciones contenidas en los primeros proyectos, bastante más logradas que el resultado final 125.

18. De todo lo dicho puede concluirse que el carácter ecléctico que se ha destacado como rasgo principal de la naturaleza de esta disciplina¹²⁶, se acentúa con la positivación de las ideas de los grandes maestros. Es que cuando las teorías de Savigny, Mancini y Story -pergeñadas cada una de ellas de cara a realidades particulares- son puestas en vigor, se mezclan muchas veces con realidades y tradiciones diversas. La amalgama

125. Cf. al respecto M. Gutzwiller, "Le développement...", *loc. cit.*, pp. 380-381, quien afirma que el sistema adoptado por el EGBGB, se caracteriza por "une contradiction assez singulière". En idéntico sentido se expresa W. Simons, *loc. cit.*, diciendo que "en vain chercherait-on dans cette loi d'introduction un système complet et scientifique de droit international privé".

126. M. Aguilar Navarro, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 245-246, señala varios puntos que le permiten llegar a tal caracterización. El eclecticismo se revela sobre todo en una serie de binomios dialécticos como territorialidad-personalidad, nacionalismo-universalismo, libertad del hombre-soberanía del Estado, etc.

de elementos provenientes de fuentes muchas veces contradictorias, impide alcanzar sistemas más homogéneos y adaptados a las necesidades particulares de cada Estado¹²⁷. A esto debe agregarse la inevitable lentitud con que estos procesos llegan a desarrollarse y a alcanzar una sanción positiva medianamente satisfactoria.

De otro lado, debe volverse la mirada a los argumentos metodológicos vertidos al inicio del trabajo. Hablar de un D.I.Pr. iberoamericano aludiendo a una entidad más o menos homogénea, no se compadece con el perfil que presentan los distintos sistemas estatales y convencionales de la región, en lo que refiere a las influencias en la formación de los mismos. Aún cuando se admita que los C.c. de América responden en general a una serie de parámetros comunes, en el campo del D.I.Pr. el efecto de las divergencias de las doctrinas utilizadas para construir los sistemas cobra una dimensión decisiva.

127. Puede observarse cómo las influencias no son lineales ni excluyentes, sino que hay una tendencia hacia construcciones mixtas. Cf. E. Vitta, "Parallelo sviluppo...", *loc. cit.*, p. 9. En América esto es un dato evidente que constituye una peculiaridad de los sistemas de D.I.Pr. de la región, según T.B. de Maekelt, *Normas generales...*, *op. cit.*, pp. 62-63. *Vid.* dentro de un particular ámbito de análisis, Ph. Francescakis, "Problèmes de droit international privé de l'Afrique noire indépendante", *R. des C.*, t. 112 (1964-II), pp. 290-292.

En este sentido, la configuración de un panorama donde los principios de domicilio, nacionalidad y territorialidad penetran en las legislaciones estatales de modo desigual y no excluyente, afectó desde el origen mismo de las codificaciones al D.I.Pr. de la región¹²⁸.

La situación señalada es determinante en el sector del Derecho aplicable, pero inunda también los otros sectores del D.I.Pr., mucho más pobres y fragmentarios en su desarrollo dentro de los sistemas estatales. Sobre el "Derecho procesal civil internacional", el territorialismo se expresa en una tendencia hacia el "imperialismo jurisdiccional" y en una correlativa actitud negativa frente al reconocimiento de las

128. También dentro de un mismo sistema -el argentino, por ejemplo- se reflejan ciertas "contradicciones". En el C.C. de este país, el art. 1205 (Story) ordena la aplicación de la ley del lugar del celebración a los contratos celebrados en el extranjero; mientras que en virtud de los arts. 1209 y 1210 (von Savigny) los contratos que tienen conexión con Argentina por su celebración o ejecución, se rigen por la ley del lugar de cumplimiento. De ello se infiere que el 1205 sólo se refiere a los contratos que no se celebran ni se ejecutan en dicho Estado. Asimismo, la norma referida a la ley aplicable a las sucesiones (art. 3283) establece como punto de conexión la ley del último domicilio del causante (von Savigny), en una aparente adopción del principio de unidad sucesoria; sin embargo, el juego del art. 10 (Story), ha conducido a la jurisprudencia a la aplicación del Derecho del lugar de situación a los inmuebles argentinos e, incluso, ¡a la justificación de la competencia judicial internacional de los tribunales del país, pese a la existencia de una norma de competencia "paralela" al 3283 (art. 3284).

decisiones judiciales extranjeras. El panorama de heterogeneidad no ha cambiado con las modificaciones que se vienen sucediendo en los sistemas de D.I.Pr. iberoamericanos. Sin embargo, paulatinamente, parece ir creándose un ámbito propicio para su modernización. Para ésta se observan algunos condicionantes importantes (el mantenimiento del C.c. como cauce de la codificación y la consecuente dispersión de los sistemas) y un elemento que puede ir actuando como catalizador de la operación: el reflejo en las legislaciones estatales de los nuevos criterios adoptados en los convenios. Unos y otros son, en todo caso, relativos.

II. Tendencias del D.I.Pr. iberoamericano frente a los modelos y caracteres de la codificación estatal del D.I.Pr.

1. CONSECUENCIAS DE LA UTILIZACION PRIMORDIAL DE LOS CODIGOS CIVILES COMO CAUCE DE LA POSITIVACION DEL D.I.Pr.

A) *La difícil justificación de la autonomía del D.I.Pr.*

19. Del análisis de todos los cuerpos normativos estatales comentados *ut supra* y teniendo en cuenta su relación con el ordenamiento en el cual se incardinan, podemos extraer una serie de conclusiones, válidas en general para todos los sistemas de D.I.Pr. que se han regulado fundamentalmente bajo la órbita de los Códigos civiles¹²⁹. En este orden de ideas, se perciben con claridad algunas cuestiones que giran en torno a la falta de autonomía legislativa del D.I.Pr., a las consecuencias que esta realidad trae aparejadas y a los problemas que plantea la presencia de normas reguladoras del tráfico privado externo en las codificaciones estatales y su

129. Para la elaboración de estas conclusiones nos han resultado especialmente sugerentes las reflexiones de J.D. González Campos, ponencia *cit.*, pp. 8-12, a partir de las cuales las hemos ido construyendo.

relación con la unificación o codificación internacional de las mismas.

Estas tres cuestiones se manifiestan en todo el proceso evolutivo de la codificación del D.I.Pr. desde sus primeras expresiones, manteniendo su vigencia en la actualidad¹³⁰, habida cuenta de la subsistencia de los sistemas normativamente dispersos en convivencia con otros, relativa o absolutamente autónomos. Algunas apreciaciones sobre éstos irán surgiendo con la explicación, al tratar sobre los proyectos nunca positivizados de regulaciones autónomas de D.I.Pr. en Iberoamérica¹³¹. Frente a éstos, podrá contemplarse el

130. No por casualidad el tema de la codificación del D.I.Pr. -particularmente de la codificación estatal- sigue siendo en los últimos años objeto de detallados estudios, especialmente en el seno de la Academia de Derecho internacional de La Haya por parte de autores de prestigio. Baste citar los cursos dictados por A. Ferrer Correia, "Les problèmes de codification en droit international privé", *R. des C.*, t. 145 (1975-II), pp. 57-204, E. Jayme, "Considérations historiques...", *loc. cit.*, A.E. von Overbeck, "Les questions générales...", *loc. cit.*, G. Parra-Aranguren, *loc. cit.*, T.B. de Maekelt "General Rules...", *loc. cit.* (corresponde a *id.*, *Normas generales...*, *op. cit.*), esp. pp. 203 ss. y 239 ss., F. von Schwind, "Aspects et sens...", *loc. cit.*, esp. pp. 96-115, etc.

131. Nos referimos a los Proyectos venezolano de Ley de normas de D.I.Pr., de 1963/1965, brasileño de Código de aplicación de normas jurídicas, de 1964 y argentino, compuesto en realidad por dos Leyes: una de D.I.Pr. y otra de Derecho internacional procesal civil y comercial para la Justicia Federal, de la Capital Federal y de los Territorios Nacionales, de 1974/1989.

desigual alcance de las reformas de D.I.Pr. que, sin escapar de los Códigos civiles, han tenido lugar en los últimos años¹³². Del mismo modo irán apareciendo problemas más de fondo que hacen referencia al D.I.Pr. como "sistema" y a las variaciones operadas en la estructura de los ordenamientos jurídicos.

20. La primera observación que emerge diáfana del problema en estudio se refiere a una precisión terminológica que da juego para todo un cúmulo de observaciones y que representa, en gran medida, el problema central de toda esta temática. Y es que, en sentido estricto, no puede hablarse de codificación del D.I.Pr. en razón de la falta de autonomía legislativa utilizada como hipótesis¹³³. Existe codificación del

132. Se trata de las reformas de los Códigos civiles peruano, de 24 de julio de 1984, paraguayo de 23 de diciembre de 1985, cubano de 15 de octubre de 1987 y mexicano para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, de 7 de enero de 1988 (acompañada de una reforma de los Códigos de procedimientos civiles para el Distrito Federal y federal de procedimiento civil, de la misma fecha). En su carácter de Estados "contenidos" en Estados miembros de la O.E.A., cabe mencionar también los casos de Lousiana y Quebec, que han establecido en 1991 (Acta núm. 923 y Ley de 18 de diciembre, respectivamente) sendos sistemas de D.I.Pr. en sus Códigos civiles.

133. El hecho de que no pueda hablarse de verdadera codificación del D.I.Pr. en numerosos países, hace pensar a S. Alvarez González, *Proyecto...*, op. cit., pp. 49-50, que la tan mentada "descodificación" puede darse en otras

Derecho civil, comercial, procesal, etc. y, dentro de cada uno de los respectivos cuerpos legales, normas de D.I.Pr.

Esta situación ofrece dos datos destacables que se presentan, en realidad, como dos facetas del mismo análisis. De un lado, el problema se plantea en íntima relación con la comprensión del contenido de la disciplina, apuntando a una necesidad de delimitación que permita determinar qué materias deben o pueden incluirse dentro de la codificación. En segundo término, el carácter objetivo del análisis pone de manifiesto una evidente nota de dispersión del sistema, que por el hecho mismo del empleo del C.c.¹³⁴ como instrumento principal para la codificación del D.I.Pr., vinculará a ésta con un particular sector de la disciplina: el sector del Derecho aplicable. El peso de esta configuración se traslada

ramas del Derecho pero no en el D.I.Pr. Por nuestra parte, preferimos interpretar que el D.I.Pr. puede verse inmerso en el proceso de descodificación, con el logro de su autonomía legislativa, esto es, de su "codificación", como comentaremos más abajo.

134. P. Neuhaus, *Die Grundbegriffe des Internationalen Privatrechts*, 2ª ed., Tubinga, 1976, p. 95, subraya el proceso varias veces centenario de incorporación del D.I.Pr. al Derecho civil o mercantil. La misma idea se desarrolla en T.B. de Maekelt, *Normas generales...*, op. cit., p. 57 y en R. Dávalos Fernández, "Sistemas del Derecho internacional privado", *Rev. Jca. (Cuba)*, núm. 25, 1989, pp. 70-119, esp. 80-82. Cf. A.-J. Arnaud, op. cit., p. 5.

incluso al tratamiento de los problemas por parte de la doctrina internacional privatista, en cuyas obras las cuestiones referidas al denominado Derecho procesal civil internacional ocupan un lugar insignificante.

Varios son los argumentos que se pueden esgrimir partiendo de los datos mencionados. Es notorio que la relación entre la codificación y el contenido del D.I.Pr. se decanta hacia el sector indicado y acentúa la identificación de los conceptos "D.I.Pr." y "conflicto de leyes". Esto no implica desconocer que en el mismo esquema legislativo, las normas relativas a las cuestiones de índole procesal internacional suelen aparecer en leyes específicamente procesales. No obstante, en no pocos casos, especialmente las normas que regulan la competencia judicial internacional de jueces y tribunales, se incluyen también en los Códigos civiles, como es el caso de los conocidos arts. 14 y 15 C.c. francés. En Argentina, por ejemplo, al no pertenecer la materia procesal al ámbito de atribuciones reconocido por la Constitución al Poder legislativo del Estado nacional sino a las Legislaturas provinciales, los Códigos de procedimientos de cada provincia recogen normas dedicadas a supuestos de tráfico externo¹³⁵. Sin embargo, en el

Código civil y sus leyes complementarias aparecen inevitablemente normas de competencia judicial internacional¹³⁶. Los otros dos sectores comprendidos en la concepción amplia de la disciplina, la nacionalidad y la extranjería, han sido legislados tradicionalmente y salvo aisladas excepciones, mediante leyes especiales¹³⁷. Ni siquiera en las realizaciones más modernas, incluyendo a aquellas que se han ocupado del D.I.Pr. en forma autónoma, la concepción amplia se ha visto reflejada en

135. Cf., por ejemplo, las normas sobre reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras de los Códigos de Córdoba, Tucumán y Santa Fe, en H.D. Piombo, *Estructura normativa del Derecho internacional privado*, Buenos Aires, 1984, pp. 554-556.

136. Si en un principio esa inevitabilidad hacía referencia a la inexistencia de Códigos procesales, en la actualidad son la opinión de la doctrina más autorizada y el criterioso empleo del sentido común los que fundamentan este carácter. Al menos, mientras no se concrete la ansiada ley que regule especialmente este problema. Del mismo modo que el C.c. contiene desde su redacción original normas de competencia judicial internacional -por ejemplo, relativas a obligaciones contractuales (arts. 1.215 y 1.216) y a sucesiones (arts. 3.284 y 3.285)- que aún siguen vigentes (también el C.com. -art. 205- establece la competencia para las acciones relativas al contrato de transporte), la Ley 23.515 de matrimonio civil de 1987 (incorporada al C.c.) disciplina los tres sectores del D.I.Pr. de la materia que regula. Vid. B.A.M. Pallarés, op. cit.

137. Vid., entre las últimas realizaciones en el ámbito de la extranjería, la guatemalteca (Decreto Ley núm. 22-86, de 10 de enero de 1986 -vid. comentario de J. Samtleben y contenido en RabelsZ, vol. 51, 1987, pp. 117-120 y 214-223-) y la salvadoreña (Ley de 20 de febrero de 1986 -vid. comentario de A. Tiedemann y texto en *ibid.*, pp. 120-123 y 224-227-).

una reglamentación unitaria del D.I.Pr.¹³⁸. La falta de homogeneidad entre los distintos "subsistemas" está sin duda en la base de tal actitud, aún cuando se comparta la correlación de fondo que en muchos casos presentan las soluciones¹³⁹. En este sentido, la aspiración de máxima parece haberse convertido hoy en la búsqueda de una ley única, de un "código", que pueda dar respuesta a los problemas del D.I.Pr. enmarcados en un contenido delimitado a partir de una noción funcional de su objeto¹⁴⁰. De este modo se ha pronunciado la Ley federal suiza sobre D.I.Pr., de 18 de diciembre de 1987, al incluir en su articulado la regulación del Derecho aplicable, la competencia judicial internacional y el reconocimiento de actos y decisiones extranjeras; he aquí

138. Como máximo, sólo se incluyen normas muy generales sobre estos sectores, como es el caso -por ejemplo- de los arts. 18 y 19 del Proyecto brasileño.

139. En el trabajo varias veces citado, J.D. González Campos se ocupa de estos problemas desde una perspectiva actual respondiendo a la pregunta: ¿es realizable la codificación estatal como sistematización completa del D.I.Pr.? Similar preocupación se advierte en P.H. Neuhaus, "Empfiehl sich eine Kodifizierung des internationalen Privatrechts?", *RabelsZ*, vol. 37, 1973, pp. 453-465. La explicación estructural del contenido puede contrastarse en J.D. González Campos, *Derecho internacional privado. Introducción*, Madrid, 1984, pp. 41-44.

140. Vid. sobre este modo de entender el contenido del D.I.Pr., J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, Prólogo y pp. 77-96 en relación con 39-43.

justamente la característica que conduce a afirmar que se trata del "único ejemplo de codificación *stricto sensu* del D.I.Pr."¹⁴¹.

En los sistemas sustentados primordialmente en los Códigos civiles, la nota de dispersión señalada es en general obligada, debido al carácter especial que anima dichos cuerpos; además, como ha quedado dicho, esta realidad determina que la codificación sea entendida muchas veces como inherente al sector del Derecho aplicable. Pero la dispersión sistemática que anotamos debe comprenderse también en otra dimensión, y es que aún dentro de este sector, las normas aparecen diseminadas en distintos cuerpos normativos aunque el principal sea sin lugar a dudas el Código civil¹⁴². Hasta tal punto es esto cierto que

141. Vid. S. Alvarez González, *Proyecto...*, op. cit., p. 50. Los mencionados proyectos argentino, brasileño y venezolano se dirigen en el mismo sentido. También el Proyecto italiano. Vid. *Riv. dir. int.*, vol. LXXIII, 1990, pp. 741-740 (texto) y artículos de T. Ballarino, A. Davi (cit.) y P. Picone.

142. En una expresión muy ocurrente pero no menos exagerada, W. Goldschmidt califica a los Derechos civil, mercantil, procesal y penal como "las cuatro potencias imperialistas" que han querido repartirse "el botín de guerra" compuesto por los elementos del D.I.Pr., intención que fracasa desde que en 1849 comienza la construcción de esta "ciencia exacta jusprivatista internacional" (*Derecho internacional privado*, 5ª ed., Buenos Aires, 1985, Prólogo a la 2ª ed.). Siempre con un léxico ajeno a la disciplina, señala en otra parte de su obra que puede hablarse de una situación de "colonianismo" respecto del D.I.Pr. (op. cit., p. 19).

cuesta encontrar una justificación rigurosa de la utilización del vocablo "sistema"¹⁴³, cuando ciertamente nos enfrentamos a un conjunto de normas que provienen de momentos históricos diferentes, con la consiguiente variación en el marco de intereses dominantes y de principios informadores¹⁴⁴. El ejemplo de las últimas codificaciones de Perú y de Quebec, disciplinando los tres sectores del D.I.Pr. dentro del Código civil, es excepcional y en cierta medida incomprensible. Las normas de carácter procesal aparecen allí desubicadas, tal vez como manifestación de un temor irracional a quitar algo de materia al venerado Código¹⁴⁵. Una breve

143. Para la comprensión general de este vocablo tan multívoco, *vid.* por todos, K. Larenz, *op. cit.*, pp. 437-482, donde el autor expone una atractiva construcción dogmática en la que se diferencia entre sistema externo e interno, en base al grado de abstracción de los conceptos y la configuración de los tipos y los principios jurídicos. Desde otra óptica, tal vez fuera lo más lógico, siguiendo a N. Irti, hablar de un "micro-sistema" de D.I.Pr. y de la existencia de "normas a-sistemáticas" (*L'età...*, *op. cit.*, esp. pp. 187-189).

144. *Vid.* la inteligencia del término en los redactores del *Code* y su relación con la idea de Código en R. Sève, "Système et Code", *Archives de Ph. du droit*, t. 31, 1986, pp. 77-84, esp. 81 ss.

145. En el caso peruano, la opción elegida navega entre la decisión de no perder la posibilidad de actualizar el sistema autónomo de D.I.Pr. y la obligación de no rebasar los límites de la función impuesta por el Gobierno a la "Comisión encargada del estudio y revisión del Código civil". *Vid.* D. Revoredo de Debakey, en

atención a las dos primeras acepciones de "sistema" que brinda el Diccionario usual de la Real Academia Española de la Lengua (1. Conjunto de reglas y principios enlazados entre sí y 2. Conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a determinado objeto), sirve de apoyo a la idea que expresamos¹⁴⁶. Resulta obvio que si se coge la segunda debe descartarse inmediatamente la posibilidad de hablar -salvo en el caso de las excepciones mencionadas- de sistema. La primera, en cambio, obliga a determinar los criterios de "enlace", que dependerán siempre de las nociones que sobre el objeto y el contenido del D.I.Pr. se sustenten y del respeto que se desee guardar a la exigencia de integridad (carácter completo) del sistema¹⁴⁷.

Desde una perspectiva histórica, habría además que preocuparse por la evolución de la idea de sistema de D.I.Pr., mediante

VV.AA., *Código civil. Exposición de motivos y comentarios*, t. VI, pp. 878-879.

146. Cf. S. Alvarez González, *Proyecto...*, op. cit., p. 25, quien realiza este peregrinaje al Diccionario después de llamar la atención sobre el "problema polisémico que arrastra el término sistema".

147. Se trata de una exigencia algo discutida. Vid. K. Larenz, op. cit., p. 438. Vid. asimismo el complejo enfoque de N. Luhmann, "L'unité du système juridique", trad., *Arch. ph. dr.*, t. 31, 1986, pp. 163-188, y su idea de sistema cerrado normativamente pero abierto a las influencias sociales.

un hilo conductor que fuera atravesando ciertos binomios dialécticos (fundamentos científicos-fundamentos políticos, carácter teórico-carácter positivo, bilateralismo-unilateralismo), tomando como punto de referencia las relaciones existentes entre el sistema de D.I.Pr. y la variación en las concepciones del Estado y del Derecho. Pero, más allá de todos elementos, debe retenerse que la sucesión de reformas parciales a las que se ven sometidos constantemente los Códigos sustanciales y las leyes que los complementan¹⁴⁸, provocan además una carencia de unidad metodológica en las normas de D.I.Pr. que desemboca muchas veces en contradicciones a menudo insalvables¹⁴⁹.

B) *El problema de la Parte general*

21. Como última referencia en el análisis de esta primera observación, dedicada a la falta de autonomía

148. Junto a la acción de la jurisprudencia, estas reformas son a la vez causa y efecto del progresivo "envejecimiento" de los Códigos. Vid. H. Batiffol, "Le droit, matière en expansion...", *loc. cit.*

149. El sentido que tiene el carácter sistemático del Derecho en el ámbito del D.I.Pr. es analizado con solvencia, aunque en un contexto determinado, por H. Batiffol, *Aspects philosophiques du droit international privé*, París, 1956, pp. 19-24.

legislativa del D.I.Pr., debe situarse el problema de la construcción de una Parte general de la disciplina, que puede verse de alguna manera como la búsqueda dentro del plano científico de una autonomía que no tenía en el plano legislativo¹⁵⁰. Durante muchos años y desde las más variadas corrientes metodológicas, se intentó ensamblar un conjunto de problemas generales que hicieran las veces de andamiaje estructural válido y aplicable para toda la disciplina¹⁵¹, aunque no han faltado voces que pusieran en duda la utilidad de tal procedimiento¹⁵².

Esta idea se desenvuelve a la par que se mantiene la vigencia de una concepción netamente conflictualista del

150. Diferentes ideas en torno a la autonomía pueden consultarse en J.D. González Campos, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 91-98.

151. En este sentido, la impronta dejada por J. Maury es importantísima, aunque su concepción sea mucho más amplia que la que habitualmente se maneja. Según su ésta, a pesar de las dificultades que se oponen, es preciso brindar al legislador y al juez, una teoría general de D.I.Pr. que abarque sus problemas esenciales de filosofía jurídica, de método y de técnica (*op. cit.*, pp. 330-332 y 416). Cf. Ph. Francescakis, "Une lecture demeurée fondamentale: les 'Règles générales des conflits de lois' de Jacques Maury", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 71, 1982, pp. 3-23, concr. 12-13.

152. Esta actitud ha sido notoria en la doctrina norteamericana. *Vid.*, en especial, B. Currie, "The verdict of Quiescent Years: Mr. Hill and The Conflit of Laws", *University of Chicago L.R.*, vol. 28, 1961, pp. 258-295 y F.K. Juenger, "American and European Conflicts Law", *A.J.C.L.*, vol. 30, 1982, pp. 117-133. Cf., sin embargo, R. de Nova, "Historical...", *loc. cit.*, p. 479.

D.I.Pr.; la Parte general es en este sentido, con variaciones, un intento de sistematización de las cuestiones que plantea la norma indirecta de D.I.Pr.¹⁵³ Desde sus primeras postulaciones, la Parte general irá acogiendo en su seno distintos contenidos, pero siempre definidos por su relación con la norma de conflicto. Sirve para comprobar esta afirmación tomar en consideración cualquier esquema tradicional, donde podrá verse, por lo general, el tratamiento de una temática que discurre entre la naturaleza del conflicto de leyes, los desarrollos doctrinales, el análisis de la estructura y la aplicación de la norma de conflicto y la teoría de las fuentes.¹⁵⁴

153. Vid. M. Aguilar Navarro, *Derecho...*, op. cit., pp. 90-96, donde puede encontrarse un medular planteamiento sobre los problemas que supone la definición de una Parte general y la inevitable relación que hay entre ésta y la forma de comprender el Derecho. De todos modos, la noción misma de Parte general dista de provocar una posición unánime en la doctrina. Se han ensayado muchas postulaciones de ella, partiendo de muy variadas concepciones y metodologías. Sin ir más lejos, G. Kegel ha hablado de verdaderos "*Spezialisten des Allgemeinen Teils*", refiriéndose a Melchior, Maury, Neuhaus y Keller-Siehr (*Internationales Privatrecht*, 6ª ed., Munich, 1987, p. 127). T.B. de Maekelt, op. cit., p. 12ⁿ, agrega en esa lista al propio Kegel, a Niederer y, ya en el nuevo continente, a Goldschmidt y Valladao. Y, evidentemente, ella también entra en esta lista.

154. Vid., M. Aguilar Navarro, loc. cit. Por ejemplo, en el ámbito americano, el *Informe Final* del Segundo Seminario sobre la enseñanza del Derecho internacional organizado por la O.E.A. (Bogotá, 1979) contiene una resolución según la cual la Parte General

Otras veces, y acaso más modernamente, la noción de Parte general tiene una comprensión ciertamente más restringida, haciendo referencia exclusivamente a los problemas que se producen en la aplicación de la norma de conflicto en sí misma considerada y, por conexión, los que aparecen con la aplicación del Derecho material extranjero y del D.I.Pr. extranjero. Desde una singular vertiente iusfilosófica, se ha llegado a caracterizar a la Parte general como el sector de la Ciencia del D.I.Pr. que se dedica a estudiar la "norma generalísima" que, fruto de la abstracción científica, se ocupa de sistematizar los problemas que pueden encontrarse en el funcionamiento de las normas generales e individuales tratadas en la Parte especial¹⁵⁵. Esto no es óbice para

debe abarcar: objetivos, finalidad y métodos; fuentes; historia; la norma, su estructura y sus problemas; la calificación; la cuestión previa y la adaptación; el fraude a la ley; los puntos de conexión; el reenvío, la aplicación y la eficacia de la ley extranjera; el orden público internacional.

155. Es una visión que proviene de una concepción normológica del D.I.Pr. y que se articula como una exposición del sistema concebido. En la misma línea de pensamiento, el sistema es consustancial con la existencia de la ciencia como tal y ésta a su vez no puede pensarse sin la elaboración de una Parte general. Vid. W. Goldschmidt, *Derecho...*, op. cit., pp. 17-18, donde se incluye la afirmación "una ciencia sin Parte General es como una persona sin cabeza". El mismo autor se refiere también a esta cuestión, en "Derecho internacional privado latinoamericano", loc. cit., p. 1105.

que en la exposición de la disciplina, se sigan incluyendo en la Parte general los temas señalados en el párrafo anterior, que mal podrían ubicarse en la Parte especial, si para ésta se reserva la tarea de describir las materias en las que hallan aplicación aquellos problemas¹⁵⁶.

La noción que se tenga acerca de la Parte general habrá de variar sustancialmente si se abandona una concepción estrictamente normativista del objeto del D.I.Pr. Pero aún dentro de ésta, los temas que se incluyan y la óptica desde la cual se desarrollen, no podrán escogerse desligándolos por completo de una consideración meditada de la evolución del D.I.Pr. La profundidad de los cambios metodológicos y su impacto sobre la fundamentación teórica, las técnicas legislativas y las soluciones jurisprudenciales, exigirán al menos una revisión del tratamiento de la Parte general que ya no podrá seguir prisionera en los apretados límites de la norma de colisión¹⁵⁷.

156. Sería como hablar de una Parte general *stricto sensu* (aspecto científico) y otra *lato sensu* (aspecto didáctico). Sin embargo, sin necesidad de violar esta concepción, algunos de los temas tratados en la última podrían incluirse en una especie de Introducción, como de hecho se hace.

157. Hace ya bastante tiempo que las dificultades implicadas en el "confinamiento" de la Parte general al método indirecto y la norma de conflicto, fueron puestas

Si se sigue apostando por elaborar una Parte general de base normativista o formalista, es inevitable por fuerza de rigurosidad científica, vertir estos datos dentro de aquélla. Además habrá que tener en cuenta la interrelación necesaria que guarda esa elaboración con la delimitación del contenido de la disciplina, el que a su vez se ve condicionado por la definición que se haga del objeto¹⁵⁸. Objeto, contenido y posibilidades -o mejor, necesidad- de construir una Parte general, son conceptos que se implican entre sí¹⁵⁹ y no pueden escindirse sin

de relieve por M. Aguilar Navarro, *Derecho...*, op. cit., p. 95. Por ello, es lógico que, como señala F. Rigaux, sea necesario agregar a la lista de "problemas tradicionales" aquellos que conciernen a la estructura de las normas de D.I.Pr.: normas materiales, conexiones alternativas, subsidiarias y condicionales, normas de aplicación inmediata, etc. Según este autor, tal idea no se confunde con la noción de método, que puede ser más restringida (definición de esos problemas en el ámbito de una codificación estatal) o más amplio (básicamente, las opciones que hemos descrito en el epígrafe anterior). Vid. "La méthode des conflits de lois dans les codifications et projets de codification de la dernière décennie", *Rev. crit. dr. int. pr.*, 1985, pp. 3-4.

158. Vid. J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, op. cit., p. 31.

159. Un particular enfoque de la relación entre los tres elementos analizados es indicado por A. Miaja de la Muela, op. cit., pp. 87-88, apuntando que la aparición de la concepción amplia del contenido del D.I.Pr. tiene también su reflejo en el correlativo ensanchamiento de los temas incluidos en la Parte general. Una explicación de la relación entre ésta y la Parte especial, basada en la concepción amplia, se encuentra en F. Rigaux, *Derecho internacional privado. Parte general*, trad., Madrid, 1985, pp. 108-109.

comprometer la solvencia lógica que debe mantener toda elucubración científica. De cualquier manera, teorizar acerca de la parte general del D.I.Pr. es una tarea complicada, debido, de un lado, al grado de complejidad que entraña la cuestión y, de otro, a la existencia de diferentes "niveles" de producción jurídica (autónomo, convencional e institucional).

22. La falta de autonomía legislativa del D.I.Pr. influyó en la búsqueda de una sistematización de unos problemas considerados de alcance general. Ahora bien, tomando una perspectiva de análisis parcialmente distinta, es innegable la trascendencia que tuvo la codificación del D.I.Pr. para todos los intentos de pergeñar una Parte general. Fue a partir del estudio de las dificultades que aparecían en la aplicación práctica de las normas de conflicto clásicas, que comenzaron a idearse otras normas destinadas a solucionar preventivamente dichos obstáculos¹⁶⁰.

160. Hemos mencionado ya la importancia que le asigna B. Nolde a la codificación del D.I.Pr. en cuanto determinante de su evolución científica, haciendo hincapié en la interdependencia entre el fondo y la forma. *"L'étude de l'évolution formelle de cette codification sans tenir compte de l'évolution des règles mêmes de droit international privé considérées ne serait qu'une anatomie simplifiée d'un corps vivant conduisant à des conclusions très rudimentaires"*. Vid. "La

En efecto, buena parte de los problemas de aplicación fueron detectados y estudiados en virtud de experiencias jurisprudenciales que llegarían a ser célebres. En esta línea se inscriben los casos de la *Condesa de Charaman-Chimay, Forgo*, de la *viuda maltesa y Ponnoucannamalle*, en relación con los problemas del fraude a la ley, reenvío, calificación y cuestión preliminar, respectivamente¹⁶¹. Otros problemas, como el orden público o la consideración del Derecho extranjero, se deben sobre todo a la elaboración doctrinal. Es precisamente mediante la codificación que se va dando una regulación positiva a todos ellos y que va cobrando cuerpo la mentada "concepción restringida" de la Parte general. Un ejemplo típico de consagración legislativa de dicha concepción lo constituye el art. 12 del Título

codification...", *loc. cit.*, p. 307. La misma idea es manifestada una y otra vez por M. Aguilar Navarro, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 476-477: "Los 'problemas generales', el sistema de las 'reglas generales de colisión' han nacido como obligada respuesta lógica y funcional a la codificación del Derecho internacional privado." Cf., también, T.B. de Maekelt, *Normas generales...*, *op. cit.*, pp. 21-22.

161. Vid. W. Goldschmidt, *Derecho...*, *op. cit.*. Aunque tradicionalmente se ha presentado de otro modo, el último de los asuntos mencionados se trataba más concretamente de un problema de sustitución. Cf. las distintas opiniones al respecto en J.A. Tomás Ortiz de la Torre, *Derecho...*, *op. cit.*, vol. II, 2ª ed., Madrid, 1990. pp. 179 ss.

preliminar del C.c. español, según la redacción otorgada al mismo por el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, que reglamenta calificación, reenvío, orden público, fraude a la ley, remisión a un sistema plurilegislativo y aplicación del Derecho extranjero. En el ámbito convencional la muestra emblemática es sin dudas la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, hecha en Montevideo el 8 de mayo de 1979, regulando aplicación del Derecho extranjero, institución desconocida, recursos procesales, orden público, fraude a la ley, Derechos adquiridos, cuestión preliminar y adaptación¹⁶².

En términos de rigurosa técnica legislativa, dentro de las codificaciones que se valen de una Ley especial, los problemas generales pueden adquirir un mayor desarrollo. Parece una conclusión obvia que fuera de las

162. Un magistral tratamiento del problema, de la Convención, de sus antecedentes y perspectivas, puede verse en T.B. de Maekelt, *Normas generales...*, *op. cit.* De todos los otros trabajos que se ocupan de la Convención, resulta relevante en relación con nuestra exposición, el de W. Goldschmidt, "Normas generales...", *loc. cit.* y G. Parra-Aranguren, "La Convención interamericana sobre normas generales de derecho internacional privado (Montevideo, 1979)", *Codificación...*, *op. cit.*, pp. 433-478. Cf. M. Giuliano y P. Lagarde, "Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles", *J.O.C.E.*, C 282 de 31/10/1980, p. 5, para los problemas que se pretendían regular como "cuestiones generales" en la C.E.E.

murallas levantadas por la rigidez del Código civil, las normas de D.I.Pr. pueden hallar más oxígeno para desarrollarse. Pero lo que de todos modos se revela como más interesante en esta evolución, es que por la vía de la Ley especial puede arribarse a la consideración legislativa de una Parte general que recoja principios no exclusivamente referidos a la dimensión del Derecho aplicable.

El ejemplo de la Ley suiza de 1987 es contundente. Los 32 artículos contenidos en el primer capítulo de la misma, establecen las *Disposiciones comunes* a las que se sujetan los sectores de la competencia judicial internacional, el Derecho aplicable y el reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, dedicándose el primero de ellos a delimitar el ámbito de aplicación de la Ley y los arts. 20 a 24 a regular el tratamiento de los puntos de conexión personales. Dicha visión se compadece en cierto modo con una definición más funcional del objeto del D.I.Pr., dentro de la cual "cada sector mantiene una sustantividad propia, unos principios de regulación diferentes, y unas técnicas normativas particulares"¹⁶³.

163. J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, p. 32. Los autores completan esta idea afirmando que "la existencia de principios de regulación diferentes abunda en el hecho de que cada sector resuelve un

Sin embargo, debe quedar claro que las *Disposiciones comunes* de la Ley suiza son tales en relación con las "especiales" de los capítulos 2 a 11 y, en menor medida, con las que se incluyen en el capítulo 12, relativas al arbitraje comercial internacional. Pero no son ni pueden ser "comunes" por referencia a los tres sectores que constituyen el contenido del D.I.Pr. y que se derivan de la concepción funcional apuntada. Una discusión en términos similares se planteó en un ámbito diferente, cuando se discutió el Proyecto de Convención interamericana sobre normas generales en el Grupo de trabajo preparatorio para la CIDIP II. Allí, H. Valladao sostuvo firmemente que sólo se debían incluir normas generales, es decir, comunes a todos los conflictos de leyes civiles, mercantiles, procesales, penales, etc. Las normas sobre domicilio y sobre ley aplicable a la existencia, estado y capacidad de la persona, al ser "especiales" del Derecho civil internacional (de una parte del mismo), no debían incluirse en el texto¹⁶⁴. Dentro de esta línea, recientes desarrollos de autorizada

conjunto de problemas muy específico y particular, sin perjuicio de sus relaciones mutuas".

164. Vid. G. Parra-Aranguren, "La Convención interamericana sobre normas generales...", *loc. cit.*, p. 452.

doctrina han puesto también el acento en dichos elementos de análisis¹⁶⁵.

Las *Disposiciones generales* contenidas en el Título I del Libro X del C.c. peruano de 1984¹⁶⁶, por su parte, sólo incluyen dos normas de verdadero alcance "general": las que disciplinan la igualdad jurídica entre nacionales y extranjeros (art. 2.046) y el orden de prelación de las fuentes del D.I.Pr. peruano (art. 2.047). Las restantes, se refieren al reenvío (art. 2.048), el orden público (art. 2.049), los derechos adquiridos (art. 2.050) y aplicación del Derecho extranjero (arts. 2.051 a

165. La conclusión de los mismos se decanta hacia el carácter innecesario de la elaboración de una Parte general del D.I.Pr., a no ser que ésta se limite a la descripción de su objeto y contenido y, cuanto más, a sus mecanismos de producción jurídica y a las vicisitudes que presenta el proceso de codificación en sus distintos ámbitos. Cf. J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.* El esquema elaborado por P. Mayer, *Droit international privé*, 4ª ed., París, 1991, participa parcialmente de dicha concepción. El mismo se vertebra en una Introducción conteniendo los temas que los autores antes citados entienden como la "Parte general", un Libro primero (Las relaciones internacionales entre personas privadas) que desarrolla como Parte general el tríptico de sectores y como Parte especial el Derecho civil internacional, y un Libro segundo (Las personas privadas implicadas en las relaciones internacionales) dedicado a la nacionalidad y la extranjería.

166. Un completo examen comparativo de las "normas generales" presentes en los sistemas autónomos de D.I.Pr. americanos, puede verse en T.B. de Maekelt, *Normas generales...*, *op. cit.*, pp. 73-149. Acerca de los textos más recientes, *vid.* G. Parra-Aranguren, "Recent developments ...", *loc. cit.*, pp. 235-239.

2.056)¹⁶⁷, confirmando lo expresado más arriba¹⁶⁸. Las disposiciones proyectadas sobre fraude a la ley, calificación, cuestión previa y domicilio internacional, fueron eliminadas en la redacción final¹⁶⁹.

También el C.c. de Quebec excluye de sus *Dispositions générales*, algunos problemas de aplicación por su carácter controvertido¹⁷⁰. En consecuencia, el

167. En realidad, el art. 2.054 se refiere a la aplicación del Derecho peruano en el extranjero, autorizando a la Corte Suprema "para absolver las consultas que le formule un tribunal extranjero, por la vía diplomática, sobre puntos del derecho nacional", texto que reproduce casi textualmente el contenido del art. XIII C.c. del Perú de 1936.

168. Para el alcance de estas normas, *vid.* J. Samtleben, "Neues Internationales Privatrecht in Peru", *loc. cit.*, pp. 494-499. En forma resumida, en J. Lisbonne, "Les dispositions de droit international privé du nouveau code civil du Pérou", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 75, 1986, pp. 192-209, esp. 193-195 y en A.M. Garro, "Introductory Note on the Codification of Conflicts Law in the New Peruvian Civil Code of 1984", *I.L.M.*, vol. 24, 1985, pp. 997-1001, esp. 999-1000 (texto: 1002-1014).

169. Sobre los motivos invocados para esas supresiones, *vid.* D. Revoredo de Debaquey, *op. cit.*, pp. 882-894. Algunos de los textos previos a la reforma de 1984, pueden consultarse en *Proyectos y Anteproyectos de la Reforma del Código civil*, t. I, Lima, 1980 y en *R.P.D.I.*, vol. 32, núm. 77, 1980.

170. Las cuestiones deliberadamente ignoradas son básicamente el fraude a la ley y la cuestión previa. *Vid.* J.A. Talpis y G. Goldstein, "Analyse critique de l'avant-projet de loi de Québec en droit international privé", *La Revue du Notariat (Montreal)*, vol. 91, núms. 5-6, 1989, p. 299, quienes mencionan también la distinción entre el orden público interno y el orden público internacional y el conflicto transitorio.

Título I del Libro X, se limita a regular: la aplicación de las normas materiales imperativas nacionales (art. 3.076) y extranjeras (art. 3.079), la remisión a un sistema plurilegislativo (art. 3.077), la calificación (art. 3.078), el reenvío (art. 3.080), el orden público internacional (art. 3.081) y la cláusula de excepción (art. 3.082); todas normas "generales" relativas al Derecho aplicable¹⁷¹.

La reforma mexicana de 1988 no rompió con el carácter disperso del sistema estatal de D.I.Pr.; ni siquiera reunió todas las normas relativas al sector del Derecho aplicable en el orden civil. Sin embargo, las cuestiones generales aparecen reguladas en los arts. 12 (norma llave del nuevo sistema mexicano de D.I.Pr.¹⁷²), 13 (que incluye el tratamiento de los derechos adquiridos junto a normas indirectas sobre cuestiones específicas), 14 (aplicación de oficio del Derecho extranjero, reenvío,

171. Vid. J.-G. Gastel, "Commentaire sur certaines dispositions du Code civil du Québec se rapportant au droit international privé", *Journ. dr. int.*, 1992, pp. 627-632.

172. "Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentran en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquellos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea parte".

institución desconocida, cuestión previa y adaptación) y 15 (fraude a la ley y orden público)¹⁷³. A estos se agregan los arts. 29 a 32 que introducen normas materiales que califican el domicilio de las personas físicas¹⁷⁴.

El C.c. cubano de 1987 contiene, por su parte, tres normas generales de aplicación del Derecho extranjero: el art. 18 dedicado a la calificación, el art. 19 admitiendo los reenvíos de primero y segundo grado y el art. 21 expresivo de una formulación política del orden público internacional¹⁷⁵. El C.c. paraguayo reformado en 1985, que reglamenta las cuestiones de D.I.Pr. en los arts. 11 a 26 del Título Preliminar, sólo ocupa un art. (el 22)

173. Vid. L. Pereznieto Castro, *Derecho internacional privado*, 5ª ed., México, 1991, pp. 299-307, *id.* "Réformes législatives en matière de droit international privé au Mexique", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 78, 1989, pp. 593-599, esp. 593-596 (texto: 583-585), K.A. Prinz von Sachsen-Gessaphe, "Neues IPR in Mexico", *IPRax*, 1989-2, pp. 111-119, esp. 115-118 y F.A. Vázquez Pando, "Comentarios...", *loc. cit.*, pp. 22-36.

174. Las normas citadas introducen con bastante fidelidad los criterios establecidos en las Convenciones interamericanas sobre normas generales y sobre domicilio de las personas físicas. Vid. V.C. García Moreno, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 25-31.

175. Vid. el comentario de estas normas en I. García Velasco, "El sistema...", *loc. cit.*, p. 671 y, muy sucintamente, en E. Huzel, "Neues internationales Privatrecht in Kuba", *IPRax*, 1990, pp. 416-419, conocr. 417.

como regulador de la aplicación de oficio, el orden público y el *favor negotii*¹⁷⁶. Por último, el C.c. de Louisiana presenta en el Título I del Libro IV incorporado en 1991, unos pocos preceptos generales cuya nota común es la flexibilidad que los penetra. De esta forma adquieren consagración legislativa el principio de proximidad (art. 3.515), una definición de "Estado" (art. 3.516), la eliminación -como regla general- del reenvío (art. 3.517), y las reglas para determinar el domicilio de personas físicas y jurídicas (art. 3.518)¹⁷⁷.

Cabe afirmar, sin embargo, que si la formación de la Parte general en el seno del C.c. provoca que la misma se conciba guardando una estrecha conexión con el Derecho civil internacional, no se vislumbra posibilidad alguna de aplicación más amplia de los preceptos y principios en ella contenidos, en las regulaciones basadas en una Ley

176. También aquí cabe destacar la influencia de las normas consagradas en la CIDIP II. Vid. M. Baus, "Der neue Código Civil von Paraguay und seine Kollisionsnormen", *RabelsZ*, vol. 51, 1987, pp. 440-453, esp. 445-446 (texto: 454-465; también en *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 76, 1987, pp. 469-470).

177. La explicación del proceso de elaboración de estas normas, así como las razones para descartar otras, se explica con elogiada claridad en S. Symeonides, "Les grands problèmes de droit international privé et la nouvelle codification de Louisiane", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 81, 1992, pp. 223-281 (texto: 394-400).

especial¹⁷⁸. La inaplicabilidad de muchos de éstos a otras materias de una correlativa Parte especial, es acaso el mayor obstáculo para la supervivencia de las teorías tradicionales. Así por ejemplo, la particular configuración del Derecho del comercio internacional, limita notablemente la utilidad y el alcance de la Parte general.

C) *Consecuencias sobre las relaciones intrasistemáticas del D.I.Pr.*

23. Las dificultades para concretar la autonomía del D.I.Pr. en el plano legislativo repercuten también en el cuadro de relaciones que se dan dentro de cada sistema. Más exactamente, las complicaciones se expresan, de un lado, en la falta de autosuficiencia del sistema y, de otro, en la compleja interacción -ya esbozada- entre las normas de D.I.Pr. incluidas en los Códigos y las provenientes de fuentes de carácter no estatal. En el primer aspecto, se hace necesario buscar determinadas

¹⁷⁸. Los proyectos argentino y venezolano son muy parcos en este sentido. El proyecto brasileño, al estar incluido en un singular Código de aplicación de normas, no disciplina una Parte general específica para el D.I.Pr.

respuestas fuera del sistema o extender el ámbito de comprensión del mismo, para poder lograr un funcionamiento acorde con unas exigencias mínimas de regulación completa.

En el segundo, la subsistencia de los límites constituidos por los Códigos se ha revelado tradicionalmente como un obstáculo para el establecimiento de relaciones "maduras" entre normas surgidas de distinto ámbito de producción. Sin embargo, este último problema se mitiga en parte en algunas reformas como la alemana de 1986 la cual, pese a no emanciparse del C.c., demuestra un considerable interés en el mejoramiento de esas relaciones. La influencia de las soluciones convencionales en la dimensión autónoma es evidente en la reforma mexicana de 1988 (y no sólo de los aspectos de Derecho aplicable) y en la reforma procesal uruguaya del mismo año. En menor medida, en los casos peruano y paraguayo. Es decir que ambas cuestiones se traducen básicamente en dos actividades complementarias que contribuyen a dar fisonomía propia a un sistema: "completar" y "armonizar"; actividades, por lo demás, que son consustanciales con la noción de sistema que hemos referido anteriormente.

24. De esta suerte, como segunda observación que nos merece la presencia de la regulación estatal del D.I.Pr. en los cuerpos normativos del Derecho privado, y que aparece como consecuencia de la anterior, se constata una dependencia de los Códigos en lo que respecta a interpretación, integración de lagunas y problemas de aplicación de las normas de D.I.Pr., así como en ciertas cuestiones de Derecho transitorio¹⁷⁹. Al estar las normas de esta disciplina incardinadas dentro de un todo coherente ("sistemático"), es inevitable a fuer de necesario contar con este punto de referencia para resolver determinados problemas que no alcanzan a ser solucionados de forma autónoma por las limitadas normas de D.I.Pr.. La dependencia del significado de los conceptos utilizados por este sector del ordenamiento respecto de otros, nos coloca frente a un problema que excede de la discusión en torno a la autonomía. Aparece así la exigencia de continuidad del significado de los conceptos a través del ordenamiento en cuanto garantes de la seguridad jurídica, junto a la necesaria adecuación de ese significado a la realidad específica que contemplan los conceptos y a la finalidad perseguida en cada caso¹⁸⁰.

179. J.D. González Campos, ponencia *cit.*

Es evidente que si se utiliza el Código civil como principal continente de éstas (no exclusivo), es casi forzosa tal dependencia de normas y principios generales de aquél, ya que ese mismo hecho se constituye objetivamente en un obstáculo para la existencia de normas detalladas de D.I.Pr.¹⁸¹. Los caracteres de dispersión normativa y metodológica provocan por lo general consecuencias negativas para la estructura y funcionamiento de los sistemas de D.I.Pr., manifestadas en la existencia de "lagunas, contradicciones, incongruencias y ambigüedades"¹⁸², que encuentran en el recurso a los códigos una precaria tabla de salvación a fin de mantener un estado mínimo de coherencia y aplicabilidad. Pero el panorama se hace más confuso,

180. Para una completa comprensión de los problemas inherentes a la identidad y relatividad de los conceptos, vid. la sugerente exposición de M. Virgós Soriano, *op. cit.*, pp. 15-24.

181. Desde una óptica muy particular, M. Scerni, *Il diritto internazionale privato nella nuova codificazione*, Milán, 1939, p. 9, señala que de este modo se correría el "riesgo" de hacer un Código dentro del Código. El riesgo puede entenderse como tal en el sentido del peligro de falta de coherencia.

182. W. Goldschmidt, "Codificación del Derecho internacional privado argentino (Reformas requeridas por la Constitución nacional y reformas convenientes aconsejadas por la vida y la ciencia)", *R.E.D.I.*, vol. V, 1952, pp. 499-528, esp. 505-506, señala la existencia de estos defectos al referirse al sistema argentino de D.I.Pr.

dentro de este contexto, cuando irrumpen en los códigos sustanciales las normas de carácter "procesal". La regulación autónoma, entonces, vuelve a presentarse como un objetivo deseable, al representar la única herramienta válida para dar una respuesta no provisional a esta situación¹⁸³.

25. La función del Código civil no ha sido siempre la misma a través del tiempo. En plena euforia racionalista "todo" el Derecho estaba codificado. Los Códigos, y el civil en particular, contenían con carácter exclusivo y unitario todo el Derecho posible¹⁸⁴. Mas, la evolución que han ido sufriendo, con la proliferación de

183. M. Virgós Soriano, *loc. cit.*, señala la vía legislativa como medio adecuado para concretar el significado de los conceptos del D.I.Pr. En tal sentido, una Ley especial parece el cauce más idóneo. No parece en cambio tan real el problema apuntado por E. Vassilakakis (*Orientations méthodologiques dans les codifications récentes du droit international privé en Europe*, París, 1987, p. 8), quien estima que la presencia de las normas de D.I.Pr. en los textos relativos al Derecho interno, provoca con bastante frecuencia que las mismas estén destinadas a delimitar los respectivos dominios de aplicación.

184. *Vid.* R. Sacco, "Codificare: modo superato de legiferare?", *Riv. dir. civ.*, 1983, pp. 118-119. D. Tallon, "Codification et réforme du droit", *Legal Theory. Comparative Law. Studies in Honour of Professor Imre Szabó*, Budapest, 1984, p. 408, habla en este sentido de una cierta idolatría por el Código. Cf. G. Brogginì, "La codification du droit international privé en Suisse", *Rev. dr. suisse*, t. 112, 1971, pp. 262-265.

leyes excepcionales y especiales, ha hecho cambiar progresivamente el rol desempeñado por el Código civil dentro de cada Ordenamiento. Algunas leyes que por diferentes razones no hallan ya cabida dentro del Código, y concretos "micro-sistemas" que aun permanecen en su seno -como el del D.I.Pr. en muchos ordenamientos-, seguirían encontrando respuestas a sus carencias en ese cuerpo, que pasa a recoger lo que se ha denominado el "Derecho común"¹⁸⁵.

Pero cuando los "micro-sistemas" rompen el cerco del Código civil, sustráyndole materias enteras o grupos de relaciones homogéneas, se hace difícil continuar justificando el carácter común o general del mismo¹⁸⁶. En la medida en que las leyes especiales comienzan a presentarse no como un desarrollo o una excepción del Código, sino como una ejecución de mandatos

185. N. Irti, *op. cit.*, p. 11, dice que con la proliferación de las leyes especiales, el C.c. cambia su función elemental y pasa a representar "*non più il diritto esclusivo ed unitario dei rapporti privati, ma il diritto comune, cioè la disciplina di fattispecie più ampie e generali*". Vid. también T. Ascarelli, "L'idea di codice nel diritto privato e la funzione dell'interpretazione", *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Milán, 1952, pp. 181-182. Cf., asimismo, K. Zweigert y H.-J. Puttfarcken, "Allgemeines und Besonderes zur Kodifikation", *Mélanges en l'honneur d'Imre Zajtay*, Tubinga, 1982, pp. 574-575.

186. N. Irti, *op. cit.*, pp. 24-26.

constitucionales¹⁸⁷, dotadas de autonomía propia, la función de aquél va adquiriendo poco a poco un perfil residual¹⁸⁸. Incluso, no pocas de las instituciones en él reguladas, se ven profundamente afectadas por la consagración de nuevos valores de ordenación social en la Constitución, que vienen a agregar un factor más de erosión a la vieja estructura del Código¹⁸⁹.

187. Vid., por ejemplo, respecto del D.I.Pr., el tratamiento de la cuestión que hace E. Jayme, "Considérations historiques...", loc. cit., pp. 68-72, y la cita a G. Beitzke, *Grundgesetz und International-privatrecht*, Berlín, 1961. Las relaciones entre el D.I.Pr. y la Constitución han ocupado también la especial atención de: M. Ferid, "L'interdipendenza del diritto costituzionale e del diritto internazionale privato", *Dir. int.*, vol. XVII, 1963, pp. 143-152; T. Ballarino, *Costituzione e diritto internazionale privato*, Padua, 1974; K. Siehr, "Diritto internazionale privato e diritto costituzionale", *Il foro italiano*, vol. XCVIII, 1975, pp. 1-19; y R.M.G. de Moura Ramos, *Direito internacional privado e Constituição*, Coimbra, 1979. En la doctrina española, revisten particular interés las opiniones de J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, op. cit., pp. 136-142, J.M. Espinar Vicente, "Constitución, desarrollo legislativo y Derecho internacional privado", *R.E.D.I.*, vol. XXXVIII, 1986, pp. 109-134 y R. Arroyo Montero, "Derecho internacional privado y Constitución: proyección en la Jurisprudencia española de la doctrina del Tribunal Constitucional Federal de Alemania", *R.E.D.I.*, vol. XL, núm. 2, pp. 89-103.

188. Así lo expresa N. Irti, op. cit., p. 27: "Il codice civile subisce così un rovesciamento di funzione: non diritto generale, ma residuale; non disciplina di fattispecie più ampie, ma di fattispecie vuote, prive, cioè, di quegli elementi di fatto, di quelle note individuati, che suscitano l'emersione di nuovi principi nelle leggi speciali". Vid. también pp. 33 ss.

El reverso de la moneda cuya cara nos ofrece un panorama en el cual las normas de D.I.Pr. llevan a cabo la realización del programa ordenado por los principios y valores contenidos en la Constitución, nos muestra un necesario recurso directo del sistema de D.I.Pr. a ésta cuando de corregir las carencias apuntadas se trata¹⁹⁰. La Constitución pasa de este modo a constituirse en principio y fin de la legislación internacional privatística. Si hay necesidad de colmar una laguna, de bucear la interpretación que debe darse a determinado concepto jurídico, de saber hasta qué punto puede estirarse la flexible noción de orden público internacional, de completar, en definitiva, el sistema de D.I.Pr., será en principio la Constitución y no el Código quien brinde las pautas de solución a esos problemas.

189. Cf. J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*

190. La jurisprudencia ha tenido ocasión de pronunciarse claramente sobre la incidencia de los valores constitucionales en la reglamentación de las relaciones de tráfico privado externo. Han tenido una notoria trascendencia la Sent. del Trib. Constitucional Federal de Alemania (Sala 1ª) de 4 de mayo de 1971 (texto español en J.D. González Campos y J.C. Fernández Rozas, *Derecho internacional privado. Materiales de prácticas*, Madrid, 1983, pp. 74-80) y, en España, la Sent. Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Gijón de 13 de octubre de 1986. *Id.*, *Derecho internacional privado español. Textos y materiales*, vol. I, 2ª ed., Madrid, 1991, pp. 44-47 y la profusa bibliografía allí citada, donde destaca el comentario de R. Arroyo Montero, *op. cit.*, quien con agudeza pone en relación ambas decisiones.

Aquella se configura así en el núcleo ("mono-sistema general") que irradia sus contenidos fundamentales hacia todos los componentes del poli-sistema, recibiendo a su vez las demandas suscitadas por las insuficiencias normativas o funcionales de éstos. Este viaje de ida y vuelta, de principios y valores en un sentido, y demandas basadas en carencias en el otro, sólo se desvía hacia el Código en aquellos supuestos en los cuales los "micro-sistemas" no han llegado a alcanzar una completa autonomía. En estos casos el Código barre los flecos que se desprenden del hilo comunicante fundamental, utilizando las categorías amplísimas que aún recoge¹⁹¹.

Por supuesto que, como veremos seguidamente, estas apreciaciones no pretenden una validez universal y son susceptibles de recibir matizaciones. Las mismas reflejan una tendencia manifiesta pero no absoluta. Frente a cualquiera de los problemas descritos, las modernas Constituciones ocupan el lugar preponderante para su solución, sin que ello implique necesariamente la

191. Es en este sentido que N. Irti afirma que las leyes especiales van adquiriendo carácter general y el Código carácter residual (*op. cit.*, p. 35). Para R. Sacco, *"il declino del codice è un fatto compiuto ... il diritto civile stesso ha perduto la sua posizione centrale nel sistema"* (*"Codificare..."*, *loc. cit.*, p. 120). Asimismo, N. Irti, *La cultura del diritto civile*, Roma, 1990, pp. 69-72.

ignorancia o la desaparición de otros elementos del ordenamiento jurídico. Centrándonos, por ejemplo, en uno de los problemas indicados, podremos ver que la interpretación "conforme a la Constitución" no es, evidentemente, el único criterio posible. Mas, con los datos aportados por los otros criterios (el sentido literal, el significado contextual, la intención del legislador y la finalidad de la norma), es la Constitución la que marca el límite último mediante la consagración de principios y valores jurídicos inderogables¹⁹².

II. PROBLEMAS Y POSIBILIDADES ACTUALES DE LA CODIFICACION

A) *¿Hacia el ocaso del ciclo histórico del Código civil?*

26. Frente al panorama descrito, se ha venido a destacar la variación profunda de las bases que permitían regular la totalidad del Derecho a través de un Código por sector de materias. Se trata de la transformación que

192. Vid. K. Larenz, *op. cit.*, pp. 316-344, esp. 337-341.

comienza a producirse con la "caída del imperio liberal", sucedida a partir de la Primera guerra mundial, y que se consolida con la aparición de las Constituciones sociales¹⁹³. Durante el auge del liberalismo, los Códigos, en particular el civil, estructuraron una ordenación global de la sociedad sobre la base de la seguridad y la igualdad formal de los ciudadanos, expresada en figuras concretas tales como la autonomía de la voluntad y la propiedad privada. Dentro de tal esquema la Constitución no tenía sino un valor referencial, de carácter orgánico, y los Códigos convivían en una relación de buena vecindad con las leyes especiales -que desarrollaban los principios de aquéllos- y las leyes excepcionales -que establecían derogaciones de los mismos sobre puntos concretos-¹⁹⁴. Pero con el cambio de situación, estos dos tipos de leyes nacidas aparentemente

193. Nuestra intención es acercar esta confrontación entre dicha variación y el Derecho, al campo específico del D.I.Pr.. La referencia a la crisis del liberalismo no impide tomar en cuenta los innumerables datos que muestran el fortalecimiento de diversas corrientes "neoliberales", de sesgo economicista, sobre todo en algunas regiones.

194. Así describe este período N. Irti, "Leggi speciali (dal mono-sistema al poli-sistema)", *L'età...*, op. cit., pp. 117-137, esp. 117-121. El mismo trabajo puede consultarse en *Riv. dir. civ.*, 1979-I, pp. 140-153. Una compleja y apasionante distinción algebraica entre leyes especiales y excepcionales se encuentra en *id.*, "Le leggi speciali fra teoria e storia", *L'età...*, op. cit., pp. 41-102, esp. 50-52.

con una naturaleza efímera se van consolidando, escindiéndose definitivamente de los Códigos y dando paso a la formación de "micro-sistemas" de normas, impregnados cada uno de ellos de un sentido lógico autónomo¹⁹⁵.

En este orden de cosas, el centro de gravedad del ordenamiento jurídico se traslada del Código civil a la Constitución, que pierde su condición referencial para constituirse en muchos países en garante de un Estado social y democrático de Derecho, mediante el establecimiento de principios y valores jurídicos fundamentales que sirven de cauce a una nueva configuración del orden social¹⁹⁶. Por otro lado, el sujeto apuntado por las leyes deja de ser el ciudadano anónimo e indiferenciado y pasa a ser cada grupo social, definido en relación con la posición relativa que ocupa en su entorno, en especial desde un punto de vista económico-profesional.

195. *Id.*, "Leggi speciali...", *loc. cit.*, pp. 121-122. Sobre la "necesidad" de tales leyes, *vid.* V. Italia, *Le leggi speciali*, Varese, 1984, esp. 5-6. Para L. Díez-Picazo, "Codificación...", *loc. cit.*, p. 478: "la descodificación es, en primer lugar, la proliferación de leyes especiales que se sitúan extramuros del Código". En realidad, como señala N. Irti, *loc. cit.*, no todas las leyes especiales tienen un efecto descodificador, sino sólo las que consagran principios distintos a los del Código (también en "I cinquant'anni del codice civile", *Riv. dir. civ.*, 1992-I, pp. 232-233).

196. J.D. González Campos, *ponencia cit.*

Desmitificada la igualdad ideal, se contemplan entonces los intereses y las realidades heterogéneas de éstos¹⁹⁷ y se los va dotando de estatutos particulares. He aquí el nuevo significado que cobran las leyes especiales, en cuanto regulaciones que no se ocupan ahora de desarrollar las instituciones tratadas en los Códigos, sino de dar vida a los valores fundamentales de ordenación social contenidos en la Constitución¹⁹⁸. Este nuevo modelo de ordenamiento, que responde a una sociedad bien distinta a la del siglo pasado, quedaría de esta manera configurado bajo la forma de un sistema planetario, en el cual los "viejos" Códigos y las "nuevas" leyes especiales giran en torno a un astro -la Constitución- que les brinda a un tiempo los principios informadores y los criterios de interpretación¹⁹⁹.

197. Piénsese, por ejemplo, en empresarios, consumidores, trabajadores, propietarios, arrendatarios, parados, etc. Cada uno de estos grupos tiene intereses determinados que, en general, aparecen en contradicción o en contacto con los de otro u otros. Cada individuo, además, forma habitualmente parte de más de un grupo.

198. Una nota de escepticismo respecto de la relación ley especial-Constitución, se encuentra en V. Italia, *op. cit.*, pp. 98 ss.

199. En este esquema, leyes especiales y Códigos (los "poli-sistemas") se encuentran en una situación de igualdad, subordinadas por igual al "mono-sistema" general. *Vid.* N. Irti, "Leggi speciali...", *loc. cit.*, pp. 123-126. Las mismas circunstancias hasta aquí señaladas son puestas de manifiesto por, R. Sacco, *loc.*

27. Sin embargo, una observación sin prejuicios de la realidad demuestra que el Código civil sigue gozando de buena salud a pesar de las enjundiosas construcciones teóricas que se ocupan con acierto de describir su ocaso²⁰⁰. En el esquema expuesto por N. Irti se contemplan básicamente tres limitaciones, sin que esto obste a la calidad y la profundidad de su razonamiento, ni a que sea indudable la verosimilitud de todo el planteamiento de fondo. En primer lugar, el autor italiano estudia y desarrolla el problema a partir de la concreta realidad que se produce en su país con la entrada en vigor de la Constitución de 1948²⁰¹; en consecuencia, el esquema no

cit., como las razones aducidas para officiar "la cerimonia funebre del codice".

200. La obra de N. Irti es la más completa y conocida. No obstante, el tema fue objeto de numerosos trabajos y de varios coloquios científicos. *Vid.*, por ejemplo, *Temi della cultura giuridica contemporanea*, Padua, 1981, que recoge los materiales del coloquio de Roma de 1979, y los diversos *Rapports* presentados en el XI Congreso internacional de Derecho comparado (Caracas, 1982). La amplia mayoría de los autores expresan allí una visión coincidente en líneas generales con la de N. Irti. Para una visión optimista respecto del futuro de la codificación como técnica jurídica, *cf.* L. Díez-Picazo, "Codificación ...", *loc. cit.*, pp. 481-484.

201. Nótese que la crítica realizada por G. Rebuffa (*Sociologia del diritto*, t. VIII, 1981, pp. 87-92), centrada en la permanencia de la utilidad del C.c., es siempre desde la óptica de la realidad italiana.

parece ser igualmente válido para todos los ordenamientos jurídicos²⁰². Obviamente no alcanza a aquellos que, como los tributarios del sistema de *common law*, nunca se han edificado sobre el Código civil²⁰³. Pero, más aún, tampoco se compece con algunas situaciones que se presentan dentro de la gran familia romano-germánica.

Señaladamente, en muchos países, no sólo subsisten con variaciones los viejos Códigos²⁰⁴ sino también las Constituciones decimonónicas. En otros se ha reconocido con algo de demora²⁰⁵ la impostergable necesidad de reformar o reemplazar estas últimas, habida cuenta de su falta de adecuación a un orden económico y social que ha

202. Tampoco en todos los tiempos, *vid.* J.L. Badouin, "Réflexions sur la codification...", *loc. cit.*, p. 18.

203. La visión que los juristas de estos países tienen acerca de la codificación no es tan terminante ni unánime como habitualmente se cree. *Vid.* distintos matices de esta idea ya en F.H. Lawson, *op. cit.*, p. 43 y, más recientemente en E. Bodenheimer, "Is Codification...", *loc. cit.* y P.M. North, "Problems of Codification...", *loc. cit.*

204 Incluso en muchos países, como señala D. Tallon, *op. cit.*, p. 404, la descodificación es un fenómeno excepcional: "*normalment, un code sera remplacé par un code, o deux codes par un seul*". La defensa de la codificación lleva a decir a R. Sacco, *op. cit.*, p. 125, que lo que se ha superado es la idea de un Código perfecto, sin lagunas, donde todo esté previsto; mas no la idea de Código en sí.

205. Generalmente por particulares situaciones políticas, caso de España o Brasil, entre otros.

variado sustancialmente en lo internacional con profundas repercusiones en lo interno, y su lógica ignorancia de la evolución técnica y metodológica de la Ciencia jurídica. Pero los efectos de las Constituciones más modernas han hecho relativa mella por el momento en los Códigos. ¿Cómo puede entonces aplicarse este modelo de interpretación para descifrar panoramas no homologables? La única forma parece ser entendiendo que se trata de una tendencia más o menos generalizada, de una situación bastante ideal que puede plantearse como cuestión objetiva en algunos casos o posible punto de llegada en otros.

En segundo lugar, la comprensión de las leyes especiales parece aún más multívoca que la que se desprende de la presentación que hace N. Irti²⁰⁶. Puede constatarse que algunas de ellas se ocupan no sólo de los intereses de un sector determinado, sino que se construyen en vista de un cúmulo de intereses de más de un grupo social, lo que podría dar lugar a la consideración de una categoría de leyes especiales complejas²⁰⁷. Otras, en cambio, siguen desarrollando

206. Cf. F. Bydlinski, "Civil Law Codification and Special Legislation", *Questions...*, op. cit., pp. 30 ss.

207. Un "Código" o ley especial de D.I.Pr. entraría notoriamente dentro de esta categoría. La diversidad de intereses en cuestión (Vid., por todos, E. Pérez Vera, *Intereses del tráfico jurídico externo y Derecho*

principios contenidos en los Códigos e incluso podrían desarrollar principios e instituciones de otras leyes especiales. El denominador común que se percibe en el origen de todas estas leyes estriba, en general, en que los Códigos se revelan como ampliamente insatisfactorios para dar cabida a ciertas regulaciones, aún para ofrecerle siquiera una base de apoyo mediante datos informadores. Aceptar esta afirmación no autoriza en modo alguno a deducir que la nueva legislación debe entenderse siempre como de ejecución constitucional, por el simple hecho de la carencia en muchos supuestos de este *prius*.

Por último, no se vislumbra el lugar que deben ocupar en el análisis del profesor de Roma, los convenios internacionales. Si es cierto -y creemos que no lo es en todos los casos- que la Constitución pasa a ser el sol de la impronta copernicana, mientras Códigos y leyes especiales giran en órbitas del mismo rango a su alrededor, no queda muy claro qué rol astral desempeñarían los instrumentos de fuente internacional en dicha descripción. La cuestión no es baladí bajo ningún punto de vista, pero mucho menos desde la óptica del D.I.Pr., que asiste cada vez en mayor medida a una

internacional privado, Granada, 1973) y la pluralidad de sujetos implicados (Vid. J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, pp. 50-60) así lo sugieren.

"convencionalización" de problemas inherentes a su objeto²⁰⁸. De una parte el planteamiento se dirige a la jerarquía supralegal que los distintos ordenamientos le van reconociendo a los convenios²⁰⁹ y, de otra, a las relaciones que se establecen entre las normas provenientes de diferentes fuentes. Mientras el primer problema señala un bache en la teoría comentada, el segundo se configura como uno de los focos que más ha suscitado la atención de la doctrina internacionalista desde hace más de cien años.

Es decir, que en el ámbito del D.I.Pr. el proceso de descodificación adquiere unas características particulares recordando, como punto de partida, que hay normas de esta disciplina que no tienen o no deberían tener cabida en el Código civil. Leyes especiales, constituciones que acuñan nuevos valores y, sobre todo, labor desigual de la jurisprudencia y desarrollo del Derecho comunitario y convencional, son causas

208. En las Jornadas de D.I.Pr. celebradas en León en 1989, J.D. González Campos puso de relieve este dato trayendo a colación que cuando el legislador suizo redactaba la Ley federal de D.I.Pr. se "encontró" con la existencia de más de 300 convenios internacionales.

209. Los nuevos textos americanos incluyen normas expresas en tal sentido: art. 2.047 C.c. peruano, art. 20 C.c. cubano, art. 12 C.c. del D.F. mexicano.

descodificadoras generales²¹⁰ pero de especial relevancia en el D.I.Pr..

B) El modelo de codificación basado en una Ley especial

28. Una vez elucidada esta situación, y sobre la base de los planteamientos vertidos en los epígrafes anteriores, debemos hacer algunas precisiones respecto al modelo de codificación del D.I.Pr. sustentado en una ley especial, es decir, fuera del Código civil. En verdad, Códigos o, mejor dicho, leyes especiales de D.I.Pr. no aparecerán en el horizonte del Derecho comparado hasta los confines del siglo XIX y principios del siglo XX²¹¹, aunque con un carácter más bien aislado. Sólo en la segunda mitad de esta centuria el modelo de codificación del D.I.Pr. basado en una Ley especial, bien que con heterogéneos contenidos, iba a adquirir carta de ciudadanía, pasando a convivir con el modelo tradicional.

210. Vid. L. Díez-Picazo, "Codificación...", loc. cit., pp. 478-481.

211. Ley federal suiza de 25 de junio de 1891, sobre las relaciones de Derecho civil de los ciudadanos establecidos o transeúntes (Vid. G. Broggini, op. cit., pp. 245-258) y Ley polaca de 1926.

Este proceso de nuevo cuño tuvo un impulso determinante en el círculo de los países europeos considerados, hasta los inesperados y vertiginosos cambios políticos sucedidos entre 1989 y 1990, como tributarios del socialismo real, a partir del ejemplo constituido por los arts. 122 a 129 de los "Principios fundamentales de la legislación civil de la U.R.S.S. y de las Repúblicas de la Unión" y 59 a 64 de los "Principios fundamentales del procedimiento civil", ambos de 8 de diciembre de 1961. Es el caso de las regulaciones de D.I.Pr. de Checoslovaquia (1963), Albania (1964), Polonia (1965), Bulgaria (1968), R.D. Alemana (1975), Hungría (1979) y Yugoslavia (1982). Evidentemente, el desenlace sorprendente de la apertura política iniciada con la *perestroika* soviética y la consiguiente y paulatina incorporación de los países del socialismo real a la economía de mercado -de un lado- y la desaparición o desmembramiento de algunos de estos Estados -de otro-, condicionarán una futura "adaptación" de estas leyes a la nueva realidad imperante²¹². Fuera de este particular

212. Vid., en tal sentido, las consideraciones generales que realizan J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, pp. 185-186. De cualquier manera, las eventuales reformas no tendrán grandes dificultades técnicas si nos atenemos a las conclusiones expuestas por A.E. von Overbeck, "Les questions générales...", *loc. cit.*, pp. 48-51. La codificación estatal del D.I.Pr. en

ámbito, el modelo de Ley especial ha tenido aceptación en Austria (1978), Turquía (1982) y Suiza (1987).

No cabe duda de las posibilidades que la utilización de este modelo concede al perfeccionamiento técnico de la reglamentación de las relaciones de tráfico privado externo. El desarrollo de las normas de aplicación es, en este sentido, un parámetro contundente. Sin embargo, no debe perderse de vista el hecho de que estas leyes son muy diferentes entre sí y que en general no abarcan la totalidad del D.I.Pr. Son escasos los supuestos en que a una codificación de la dimensión del Derecho aplicable le acompaña una correlativa de la dimensión judicial (caso de Turquía, Yugoslavia, Suiza, Kuwait, etc.). Por otro lado, el modelo no aparece como válido para todos los países. El ejemplo suizo no debe trasplantarse sin más a contextos que poco o nada tienen que ver con el que le sirve de entorno²¹³. El Código civil sigue despertando

este singular círculo jurídico es estudiada antes del "seísmo democrático y nacionalista" especialmente por P. Kalensky, "Le droit international privé comparé des Etats socialistes dans leur coopération économique", *R. des C.*, t. 208 (1988-I) y R. de Nova, "Recenti sviluppi...", *loc. cit.*, pp. 21-34.

213. Para T. Ballarino la Ley suiza constituye el resultado más significativo pero también más problemático de la codificación del D.I.Pr., "almeno dal punto di vista della idoneità a fare scuola in altri paesi" ("Le codificazioni recenti del diritto internazionale privato in Europa", *Il nuovo diritto internazionale privato in*

confianza en muchos países que se han dado codificaciones ampliamente elogiadas por la solvencia de sus soluciones. Baste traer a colación el C.c. portugués de 1966, que en sus arts. 14 a 65 consagra un completo tratamiento del Derecho aplicable, muy tenido en cuenta en otros Estados como contribución de Derecho comparado a la hora de encarar la codificación del D.I.Pr.²¹⁴.

Incluso, el modelo basado en el Código civil no ha sido óbice para dar una respuesta de conjunto a la problemática del D.I.Pr., incluso corrigiendo la nota de dispersión que le caracteriza. Si bien el mecanismo de la Ley especial permite un mayor desarrollo técnico-normativo, las líneas maestras del actual proceso codificador -especialización, materialización y flexibilización- pueden encontrarse con cierta similitud bajo los dos modelos. Es llamativo el hecho de que el legislador alemán de 1986 aprovechara la ocasión de la

Svizzera (Quaderni giuridici italo-svizzeri - Raccolti da G. Brogini), Milán, 1990, p. 363.

214. Vid. I. García Velasco, *Concepción del Derecho internacional privado en el nuevo Código civil portugués*, Salamanca, 1971. A. Ferrer Correia toma como dato relevante y diferenciador de la codificación portuguesa y el que le da mayor prestigio, el desarrollo del principio de igualdad entre la *lex fori* y el Derecho extranjero. Vid. "Une codification nationale du droit international privé à l'épreuve du principe d'égalité: le code civil portugais de 1966 'revisited'", *Le droit...Etudes en l'honneur de Roberto Ago*, op. cit., pp. 63-87.

reforma del sistema de D.I.Pr. (Ley de 25 de julio de 1986), para modificar el Código de Procedimiento Civil. Esta solución es probablemente más realizable, más "exportable", en vistas a aquellos Estados que se mantienen reacios al dictado de una Ley especial o que, como hemos señalado, difícilmente podrían alcanzar una legislación como la suiza²¹⁵, y no presenta la rareza metodológica de las codificaciones de Perú y de Quebec (incorporación de las normas "procesales" de D.I.Pr. en el Código civil). La pervivencia de los sistemas que utilizan fundamentalmente el Código civil como continente para sus normas y su vigencia efectiva durante larguísimos períodos de tiempo, deben hacernos valorar el profundo enraizamiento que tienen los mismos y las correlativas dificultades para su abandono.

De todos modos, cualquiera sea el modelo que se elija, parece evidente que la tendencia sigue siendo la

215. Tal es la opinión de J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, p. 204, quienes creen más adecuada la técnica seguida en Alemania para una eventual reforma del D.I.Pr. español. La dificultad de utilizar el modelo suizo en España, argumentada sobre todo en las diferencias observables tanto en la tradición y en la cultura jurídica cuanto en la actitud frente a la codificación, es apuntado con destreza por S. Alvarez González, *op. cit.*, pp. 50-51. Esta reflexión nos parece sumamente válida en relación con los Estados iberoamericanos. El fracaso de los varios intentos en ese sentido ratifica la idea.

de alcanzar una regulación completa del D.I.Pr., no obstante los obstáculos que tal empresa debe resolver²¹⁶ y las dudas más de fondo sobre la procedencia actual de la codificación²¹⁷. Pese a los reparos puestos de relieve en la doctrina, referidos a la necesidad de evaluar concienzudamente las condiciones de oportunidad y viabilidad que se presentan en cada caso²¹⁸, los esfuerzos realizados en las últimas décadas en los más variados círculos jurídicos se encaminan incontestablemente en ese sentido. Las experiencias codificadoras ocurridas en Europa (las mencionadas más los proyectos franceses e italianos), en Africa subsahariana, en Asia, en los países árabes y América,

216. Dichos obstáculos han sido resumidos por A. Ferrer Correia, "Les problèmes...", *loc. cit.*, pp. 110-112. En un sentido más amplio se han expresado P.H. Neuhaus, "Empfiehl sich eine Kodifizierung des Internationalen Privatrechts", *RabelsZ*, t. 37, 1973, pp. 453-463 y F. von Schwind, "Problems...", *loc. cit.* Sin embargo, de una forma u otra, todos participan de la idea codificadora. Este último autor, por ejemplo, afirma: "I am fully aware of the fact that there are also many arguments against codification of private international law"... "Thus, codification of private international law seems to become a matter of common concern" (*ibid.*, pp. 441-442). Vid. asimismo la expresión de la idea favorable en P. Lalive, "Tendances...", *loc. cit.*, pp. 360-362.

217. J.D. González Campos, ponencia *cit.*, se pregunta si no es que la codificación llega tarde al D.I.Pr., como un espejismo del pasado.

218. Vid. M. Aguilar Navarro, *Derecho...*, *op. cit.*, pp., 479-482.

sustentan con fuerza esta afirmación. Ello no implica de ningún modo desconocer la marcada heterogeneidad entre los diferentes procesos y mucho menos adelantar alguna consideración axiológica al respecto. Se trata de una constatación objetiva que demuestra, como máximo, que la necesidad de simplificar los materiales jurídicos de esta disciplina sigue al orden del día.

Las coordenadas identificadas en el proceso de codificación general originario (racionalización, progreso, pedagogía, utopía)²¹⁹ continúan siendo válidas al menos en el ámbito del D.I.Pr., aunque sus contenidos no sean los mismos y respondan a unos presupuestos económicos, políticos y sociales claramente diferentes. Si los dos parámetros para no insistir con la codificación (recodificación) son la capacidad de asimilación de los códigos y la existencia de una jurisprudencia aguda y flexible²²⁰, la necesidad de regulación del "mono-sistema D.I.Pr." es evidente. Y, precisamente por ello, el moderno impulso "recodificador" general (allí donde se dé) debería, en la medida que lo permitan tradición y cultura jurídica, dejar salir al

219. L. Díez-Picazo, "Codificación...", *loc. cit.*, p. 474.

220. Es la opinión de F. Galgano citada en *ibid.*, p. 483.

D.I.Pr. o, al menos, permitirle una adecuación sistemática digna en consonancia con las condiciones actuales.

2ª Sección: La reglamentación de las relaciones entre España y América

III. Avatares y perspectivas de la reglamentación de las relaciones de tráfico privado externo entre Iberomérica y España

1. EL DILEMA ESPAÑOL: ¿EUROPEISMO O AMERICANISMO?

A) *Las actitudes y sus componentes*

29. La actitud asumida por España frente al fenómeno de la codificación internacional del D.I.Pr. ha estado siempre marcada por una aparente contradicción²²¹. De un lado, se presenta la opción "iberoamericana" cargada con los datos históricos y culturales que brindan los lazos que le vinculan con las antiguas colonias. De otro, aparece la opción "europea", basada sustancialmente en criterios de proximidad geográfica, a los cuales se les ha sumado con el tiempo el hecho integrador comunitario con sus decisivos elementos económicos y políticos. Entre ambas opciones no es fácil identificar una relación

²²¹. Vid. M. Aguilar Navarro, *Derecho...*, op. cit., pp. 523-525.

antitética que responda linealmente a factores determinados. Por el contrario, sí parece factible constatar los hechos producidos en una evolución cronológica distinguiendo, en la medida de lo posible, el plano de la mera retórica del de las realizaciones concretas. De ahí se podrán extraer conclusiones importantes.

Pese a lo que pudiera creerse, la cuestión de fondo no se plantea en términos específicos de D.I.Pr.. En todo caso, no ha existido una afinidad decisiva entre los sistemas de D.I.Pr. europeos, al menos no más allá de la que pudiera encontrarse entre cualquiera de éstos y cualquiera de los americanos. Por el contrario, en uno y otro ámbito, los sistemas autónomos y las realizaciones internacionales han estado marcadas por un alto grado de heterogeneidad, tanto en la configuración metodológica cuanto en el contenido y alcance de las soluciones concretas. Si la obtención de toda regulación de D.I.Pr. iberoamericana se ha demostrado especialmente complicada, las razones no deben buscarse en factores tales como la preferencia por la nacionalidad o el domicilio para regir el estatuto personal, por la ley del lugar de celebración o ejecución del contrato para las obligaciones contractuales, por el criterio de unidad o pluralidad en

las sucesiones, etc.²²² (factores que obviamente no son privativos de una codificación iberoamericana). Antes bien, debe volverse la mirada hacia los elementos fundamentalmente políticos que actuaron como barrera total o parcial ante todas las iniciativas en este sentido, influenciando las decisiones de política convencional en cuanto ésta ha llegado a existir.

Las bases fácticas que han dado lugar a las relaciones de tráfico privado externo en sendos ámbitos geográficos y sobre las que descansa el juego de las opciones europeísta y americanista, se objetiva, en términos muy generales, en la distinta trascendencia de los flujos migratorios y en la importancia y la magnitud de los intercambios económicos y mercantiles. Aquéllos, de evidente relevancia en la producción de tales relaciones, han sido desiguales tanto en intensidad cuanto en duración. Como denominador común y constante

222. Sin embargo estas eran las causas en las que se basaba W. Goldschmidt, "Exposición de motivos y Anteproyecto...", *loc. cit.*, pp. 164-165, para decir: "¿Será fácil lograr en el ámbito de los países hispano-luso-americanos una ley uniforme en sentido estricto referente al Derecho Internacional Civil y Comercial más el Derecho Procesal Internacional? La contestación negativa es evidente..., aún renunciando a una ley uniforme en sentido estricto y contentándonos con un convenio sencillo tendiente a unificar entre países ratificantes el D.I.Pr. y el Procesal, tampoco parece fácil...".

histórica, cabe apuntar el carácter centrífugo de los movimientos migratorios acaecidos en España, sólo revertido en los últimos años aunque en dimensiones comparativamente insignificantes. En efecto, el destino americano de la emigración española comenzada con aires de conquista hace quinientos años, y que adquirió visos de masividad en los últimos años del siglo pasado y los primeros de este²²³, fue reemplazado sobre los años cincuenta por otro preponderantemente centroeuropeo²²⁴; la situación actual demuestra un proceso de inmigración con un importante componente hispanoamericano. En ambos casos la realidad así representada generó -sigue generando- especialmente problemas relativos no sólo a los sectores de la nacionalidad y la extranjería, sino también al Derecho civil internacional.

En el orden económico y comercial, los intercambios con la América española y sus peculiaridades en la época que va desde el "descubrimiento" hasta la consolidación jurídica de los Estados emancipados, contrastan con las

223. Vid. los elevados números que muestran las estadísticas de la inmigración en América Latina en las dos últimas décadas del siglo XIX y las tres primeras del XX, en N. Sánchez Albornoz, "The population...", *loc. cit.*, esp. pp. 126-139.

224. Pueden consultarse a tal efecto, las publicaciones de la Dirección General del Instituto Español de Emigración, en especial, las *Memorias anuales*.

diversas manifestaciones beligerantes presentes en el escenario europeo. Ya en el siglo XX, marcado en su primera mitad por los azarosos episodios provenientes de una Europa convulsionada, la situación exterior de España se caracterizó por un notable aislamiento que se prolongaría hasta la década de los sesenta, cuando comenzó a hacerse sentir el fin de la autarquía. Hasta este momento, los casos de D.I.Pr. se limitaron, salvo excepciones, a los reseñados anteriormente. España se mantuvo materialmente al margen de los primeros pasos dados en la construcción de la Comunidad Europea, y no sería sino hasta la llegada de la democracia que este país apresuró su integración en el marco comunitario.

La situación actual muestra un desarrollo sostenido de este factor que, además de condicionar fuertemente la regulación jurídica del tráfico externo, influye directamente sobre los elementos que configuran la realidad de éste. En este panorama no debe olvidarse que la pertenencia de España a la C.E.E. afecta en cierta medida sus relaciones extra-comunitarias. No obstante ello, la afluencia masiva de capital público y privado español a Iberoamérica, alentada por el fenómeno de la desregulación presente en unos países que han "optado" por la instauración de políticas de corte neoliberal -

ultraliberal, en algunos casos-, ofrece un cuadro en el cual habrá de aumentar inexorablemente el volumen de relaciones bilaterales, hecho que exige una adecuada valoración a la hora de definir la política convencional en este ámbito²²⁵.

30. Repasados someramente, con el único objetivo de obtener un punto de referencia, los cambios operados en las bases fácticas de las relaciones jurídicas privadas internacionales, debe atacarse concretamente la evolución de la actitud española ante la reglamentación convencional de dichas relaciones. Con alcance general, puede decirse que la historia de esa reglamentación entre España y los países iberoamericanos es verdaderamente singular pues, frente a todas las realizaciones de la codificación internacional del D.I.Pr. logradas en el continente americano, España ha permanecido indiferente - al menos desde la perspectiva de los resultados concretos-, manifestando desde el último tercio del siglo pasado varios gestos dirigidos hacia una codificación de alcance europeo. No por casualidad, fueron los hombres de

225. En este contexto deben valorarse los Acuerdos bilaterales con Argentina y con Bolivia sobre promoción y protección recíproca de inversiones, de 24 de abril de 1990 (B.O.E. de 15/7/92) y 3 de octubre de 1991 (B.O.E. de 18/11/92).

la Revolución de 1868 los que iniciaron el movimiento codificador internacional del D.I.Pr. en Europa, solicitando la ayuda de Napoleón III²²⁶.

Es cierto que esa iniciativa no tendría mañana y que, cuando por fin se puso en marcha en el seno de la Conferencia de La Haya de D.I.Pr., el impulso correspondería a otras naciones; mas es indudable que la propuesta de Manuel Silvela sería recogida por P.S. Mancini para dar pie a los cimientos sobre los cuales se edificaría la labor de la Conferencia, en la cual España participa activamente desde 1893²²⁷. Se ha señalado también como un gesto de orientación "europeísta", la favorable acogida que tuvieron en España en los años 1881 y 1882, las iniciativas lanzadas por el Gobierno italiano y auspiciadas por el propio Mancini para convocar una conferencia internacional con la finalidad de unificar normas de D.I.Pr.²²⁸.

226. Vid. J.D. González Campos, "La revolución..., loc. cit.. Consúltense especialmente, las pp. 102 ss. y la nota 51. El autor destaca, entre otros extremos, el carácter liberal de la Revolución que obliga, en el sector del D.I.Pr., a "establecer un estatuto político y jurídico que diese satisfacción a la burguesía española en sus intereses de clase" (Vid. p. 71).

227. Vid. A. Borrás, "La participación de España en la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado", *España y la codificación internacional...*, op. cit. (en prensa).

Dentro de la opción "americana", los primeros resultados concretos en lo que refiere a normas que regulan problemas de D.I.Pr. (*lato sensu*) se producen en los primeros años del siglo XX. Con anterioridad al inicio de algún tipo de intercambio en el plano normativo, es factible identificar una etapa previa que se abre con las independencias americanas a comienzos del siglo XIX y se cierra hacia fines del mismo siglo. A lo largo de este período las únicas normas sobre el tráfico privado externo descansan en los convenios de reconocimiento, paz y amistad, y presentan un carácter residual, afectando fundamentalmente al sector del Derecho de extranjería²²⁹. Sin embargo, como será puesto de relieve, varios de ellos han sido invocados más de una vez para finalidades distintas a las que motivaron su

228. Cf. M. Aguilar Navarro, *loc. cit.*. Cf. Cátedra de Derecho internacional privado de la Universidad de Madrid, *Textos y documentos...*, *op. cit.*, pp. 238-239.

229. Sin embargo, el 24 de noviembre de 1852 fue firmado un Tratado entre Venezuela y España, cuyo objetivo pasaba por "autorizar en sus respectivos países, en cuanto lo permitan las leyes de cada Estado, el cumplimiento de las sentencias en materia civil ordinaria o comercial expedidas por los tribunales del otro Estado; estipulando, además, las condiciones, trámites y circunstancias con que serán válidos y causarán los efectos que procedan en justicia todos los contratos y demás actos públicos notariados en cada una de las dos Naciones". El mismo no llegó a entrar en vigor. *Vid.* G. Parra-Aranguren, "La solicitud para obtener el exequatur de las sentencias extranjeras en Venezuela", *Rev. Fac. Der. Univ. Cat. A. Bello*, núms. 39-40, 1988, p. 260.

elaboración. De todos modos no puede desconocerse que, a pesar de estar cargados de ingredientes políticos y responder a unos intereses bastante particulares, estos tratados significaron un primer intento de acercamiento concreto a los Estados independientes de América.

En el ámbito más estricto de la codificación internacional del D.I.Pr., y como excepción a los señalados signos europeístas en la actitud de España, aparece en esta etapa previa su frustrada vinculación con los Tratados de Montevideo de 1889 -surgidos del Primer Congreso Sudamericano- y su participación en los Congresos Jurídicos de los países iberoamericanos que, celebrados en Lisboa (1889) y en Madrid (1892 y 1900), estuvieron impregnados de un marcado sentimiento de "comunidad iberoamericana"²³⁰. Con respecto a los citados Tratados de Montevideo, cabe recordar que fueron firmados en su totalidad por el entonces legado español en el Uruguay, pero su país sólo adhirió al relativo a propiedad literaria y artística, al igual que otros países Europeos. El contenido de esta experiencia americanista truncada puede cifrarse en dos elementos esenciales: del lado español, el perfil en cierto modo

230. *Vid.*, en general, sobre el alcance dado a esa idea, F. Castejón, *op. cit.*, *passim*.

imperialista o al menos paternalista que parece descubrirse en su relativo interés por incorporarse a la obra montevideana; del lado americano, la actitud reticente de algunos Estados a la participación extracontinental, en parte reflejo del perfil antes reseñado.

El primer elemento se percibe en las propias palabras que propugnaron en aquel momento la vinculación de España a los Tratados de 1889. En la carta aludida del Embajador español ante el Gobierno de la República Oriental del Uruguay al Ministro de Estado de su país y en las palabras de los profesores que se alinearon en la propuesta afirmativa, se deja ver claramente la idea según la cual los criterios de igualdad y reciprocidad subyacentes en los textos pactados por los Estados americanos, serían muy favorables a los intereses españoles²³¹, y que las ventajas a obtener nunca se hubieran logrado en negociaciones directas. Para fundamentar dicha idea se invocan numerosas razones, susceptibles de sintetizarse en tres principales. En primer lugar, la evidente desproporción en las corrientes migratorias recíprocas que provocaría que frente al gran

231. Vid. *Adhesión de España...*, op. cit. y los trabajos citados de M. de la Plaza Navarro y M. Torres Campos.

número de compromisos que adquirirían los Estados de América respecto a los inmigrantes españoles²³², las obligaciones de España serían insignificantes. En segundo término, la amplia superioridad del desarrollo industrial y comercial hispano en relación con el de Iberoamérica que permitiría a empresarios y comerciantes españoles - "en especial los de Cataluña"- desarrollar su actividad en América en condiciones de competencia ampliamente favorables. Por último, la mayor cualificación de los componentes del servicio diplomático español -"aún en América"- que pondría a este país en situación de lograr las modificaciones y mejoras que le convengan y que los Tratados permiten.

A partir de estas razones pueden mencionarse como ejemplo algunos datos que se refieren concretamente a disposiciones contenidas en los Tratados²³³. Al ya referido Tratado sobre propiedad literaria y artística que brindaba una protección que España buscaba sin éxito desde hacía algún tiempo, deben agregarse los relativos a

232. En *Adhesión de España...*, op. cit., p. 20, se señala como otro dato positivo que se desprende de esa desproporción, que los "inmensos derechos individuales" concedidos a los extranjeros, aminora "el interés que muchos españoles pueden sentir por adquirir la nacionalidad del país americano en que viven".

233. *Ibid.*, pp. 4-19, y M. de la Plaza y Navarro, op. cit., pp. 380-384.

marcas de comercio y fábrica y a patentes de invención que abría las puertas de un mercado ocupado ahora mayoritariamente por otras potencias. El Tratado sobre profesiones liberales, a su vez, organizaba un sistema simple de reconocimiento de títulos y diplomas, que favorecería en principio mucho más a españoles que a americanos, no sólo por el número de emigrantes sino también por las diferencias en los estudios organizados y en las posibilidades de acceso en uno y otro continente por aquellos tiempos. En definitiva, la obligación de aplicar de oficio el Derecho material extranjero, cuando así correspondiera en virtud de las normas indirectas, establecida en el art. 2 del Protocolo adicional a los Tratados de 1889, debía ser vista como una posibilidad concreta de "exportación" de normas para regular supuestos heterogéneos (algo matizada en virtud del juego del criterio del domicilio), frente a una improbable producción de casos en España.

El denunciado perfil subyacente en la actitud española adquiere en algunos pasajes expresiones muy concretas, como cuando M. de la Plaza y Navarro se refiere a la eventual adhesión diciendo que "nos proporcionaría el medio de mezclarnos en los asuntos de nuestros perdidos dominios, cuyos habitantes hablan

nuestro idioma, y no han podido olvidar por el transcurso del tiempo que nos deben sus primeros gérmenes de civilización"²³⁴. Idéntica apreciación cabe realizar respecto de la indisimulada pretensión del Embajador español en Uruguay de que Madrid desplace a Montevideo, es decir, a los países del Plata, como sede de elaboración de la reglamentación de las relaciones de tráfico privado externo iberoamericanas²³⁵. No está de más agregar que en los elementos recogidos sólo se encuentran las opiniones de este diplomático y de algunos profesores, las cuales no dejan de ser meritorias y respetables pero que no alcanzan el rango de posición oficial.

Por todas las cuestiones apuntadas es que señalamos que la actitud reticente de algunos países americanos tenía motivos lógicos y que el fracaso de la incorporación española a los Tratados de Montevideo no parece sorprendente desde una perspectiva actual. Todo lo dicho no significa de ningún modo desconocer los problemas técnicos que hubiera deparado para España la mentada incorporación. Piénsese, por ejemplo, en la conocida preeminencia de la ley del domicilio (Tratado de

234. *Op. cit.*, p. 383.

235. *Adhesión de España...*, *op. cit.*, p. 21.

Derecho civil), en la obligación de extraditar a los nacionales (art. 20 Tratado de Derecho penal), o en la reciprocidad dispuesta en los Tratados mencionados anteriormente que, aunque favorable a España en aquel momento, hubiera consagrado una vinculación no del todo previsible. Tampoco significa dejar de lado las falencias que podían ya entonces detectarse en los textos de Montevideo²³⁶.

De todos modos, si se hubiera llegado a un acuerdo acerca de la necesidad de alcanzar una regulación del D.I.Pr. iberoamericano, la única opción con posibilidades más o menos ciertas de concretarse hubiera sido la adhesión a todos los Tratados, sin perjuicio de intentar ulteriores modificaciones²³⁷. La realización de un nuevo congreso que contara con la participación de España era totalmente impracticable; además, como ha quedado señalado, difícilmente se hubieran obtenido en él muchos de los postulados destacados como favorables. Los

236. Algunas de las cuales eran puestas de relieve por P. Pradier-Fodéré en "Le Congrès...", *loc. cit.*, o por los mismos autores que proponían la adhesión española.

237. La incorporación aislada a un texto estaba condenada al fracaso, habida cuenta de la postura esgrimida por algunos de los Estados americanos. *Vid. Adhesión de España...*, *op. cit.*, p. 2. No obstante, cabe recordar que entre Argentina y España el Tratado sobre propiedad literaria y artística adquirió validez.

Congresos jurídicos celebrados en la península ibérica por aquellos años discurrieron en lo atinente al D.I.Pr. entre esas dos líneas de acción: recomendaciones de incorporación a los textos de Montevideo y tentativas de sentar bases para nuevas regulaciones.

31. En el Congreso Mercantil hispano-americano-portugués (Madrid, noviembre de 1892) organizado por la Unión Iberoamericana, se planteó la "conveniencia de que España y Portugal se adhiriesen al Tratado de Derecho internacional privado respecto de obligaciones mercantiles, pruebas, exhortos y ejecución de sentencias que desde 1890 une a las Repúblicas de La Plata, Chile, Bolivia y Venezuela"²³⁸. Los Congresos celebrados en Lisboa y Madrid, se ocuparon de temas puntuales como los problemas relativos a la nacionalidad y el domicilio, el reconocimiento de ^{su}decisiones judiciales extranjeras, la propiedad literaria, artística e industrial o celebración y disolución del matrimonio²³⁹. Estas reuniones pueden

238. Actas, Madrid, 1893, pp. 13 y 341. Cf. M. de la Plaza y Navarro, *op. cit.*, p. 382.

239. Sobre los Congresos de Lisboa y Madrid y la actividad allí desarrollada, *vid.* M. Torres Campos, "Le congrès juridique de Lisbonne", *R.D.I.L.C.*, t. 21, 1889, pp. 238-260; *id.*, *Elementos...*, *op. cit.*, pp. 145-146 y 149-150; G. Parra-Aranguren, "Las tentativas de codificación del Derecho internacional privado en la

anotarse como antecedentes de una larga historia de encuentros de este tipo, institucionalizados oportunamente en el IHLADI, en los cuales se depositaron algunas esperanzas de obtener algunas regulaciones sectoriales o globales, que casi nunca llegaron a cristalizarse. Es indudable que de los intercambios realizados entre los estudiosos siempre pueden lograrse resultados más o menos mediatos. Pero de la labor de los congresos iberoamericanos de fines del siglo pasado, al menos, no se extrae ninguna utilidad concreta²⁴⁰.

comunidad hispano-luso-americana y las filipinas", *Monografías selectas de Derecho internacional privado*, Caracas, 1984, pp. 9-10; Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, *Congreso Jurídico Iberoamericano reunido en Madrid el año 1892*, Madrid, 1893; F. Castejón, *op. cit.*, pp. 95 ss.; J. Samtleben, *Derecho...*, *op. cit.*, p. 741²⁷.

240. En contra, A. Monsálvez Müller, *Del cumplimiento en Chile de resoluciones pronunciadas por tribunales extranjeros*, Santiago, 1973, pp. 30-31: "Sin duda alguna que la labor de estos Congresos españoles constituyó una aportación y un progreso notable en lo que respecta al reconocimiento y la ejecución de las decisiones judiciales extranjeras; desde luego, en ellos se aceptó la ejecución de las sentencias de acuerdo con el sistema de la regularidad internacional, que ha sido, hoy en día, aceptado por la mayoría de los países, de tal suerte que se procede a su ejecución una vez sometida al proceso de *exequatur* (...)".

B) *Evolución de las relaciones a lo largo del siglo*

XX

32. Un período algo más rico en relaciones se produce con los primeros años del presente siglo, donde sobresalen algunos acuerdos bilaterales. El texto central de esta época lo constituye el Convenio sobre ejecución de sentencias civiles entre España y Colombia, hecho en Madrid el 30 de mayo de 1908²⁴¹. Curiosamente, pese a la abundancia de relaciones de tráfico externo entre ambos países, sólo se registran por parte española dos supuestos de aplicación; en concreto, el Auto T.S. de 3 de octubre de 1924²⁴² y el Auto T.S. (Sala 1ª) de 14 de julio de 1983.

Con otro alcance, pero todavía vigentes, encontramos dos convenios que regulan cuestiones atinentes a la asistencia judicial internacional. Se trata del Canje de Notas ente España y Uruguay suprimiendo la legalización de exhortos y comisiones rogatorias, hecho en Montevideo el 16 de julio de 1901²⁴³ y del Convenio entre España y

241. *Gaceta de Madrid* de 18/4/1909.

242. Cf. A. Remiro Brotóns, *Ejecución ...*, op. cit., pp. 323-324.

Argentina sobre supresión de las legalizaciones de firmas en las comisiones rogatorias, hecho en Buenos Aires el 17 de septiembre de 1902²⁴⁴. Estos textos, algo olvidados por cierto, deben ponerse en relación con los arts. 5.a) y 6 de la Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, hecha en Panamá el 30 de enero de 1975, que vincula a España con los dos países mencionados. En este sentido, los exhortos que se tramiten entre estos Estados dentro del ámbito de aplicación de dichos textos, no necesitarán legalización²⁴⁵.

Después de estos limitados logros bilaterales, las proposiciones acerca de merituar las posibilidades de incorporarse a los Tratados de Montevideo o de generar un espacio jurídico común más o menos amplio, se fueron diluyendo. Frente a la activa participación española en los trabajos desarrollados por la Conferencia de La Haya

243. *Gaceta de Madrid* de 19/9/1901.

244. *Gaceta de Madrid* de 3/1/1907.

245. La formalidad de la apostilla prevista en el Convenio sobre supresión de la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961 (B.O.E. de 25/9/1978), no debe guardarse respecto de Argentina pese a ser parte del mismo, en virtud del art. 8.

de D.I.Pr. durante esos años²⁴⁶, la nueva etapa del movimiento codificador gestado en América a partir de las Conferencias Panamericanas iniciadas en 1889, fue prácticamente ignorado por España hasta el advenimiento de la República.

33. Precisamente es allí donde puede identificarse una segunda etapa en las relaciones que se producen durante el siglo XX, que se inicia a fines de los años veinte y que es tan próspera en declaraciones genéricas de iberoamericanismo como parca en cuanto a resultados. Comienza a partir de la confluencia de dos importantes elementos. De un lado, el impacto causado en la doctrina española por el Código Bustamante, reacción que no debiera sorprender, habida cuenta de la práctica inexistencia de un sistema de D.I.Pr. en España. De otro, el carácter marcadamente iberoamericanista de la Constitución de 1931, en la cual la idea de una política asimilacionista del iberoamericano cede ante otra, la de "comunidad histórica iberoamericana"²⁴⁷. Su

246. Vid. A. Borrás, "La participación...", loc. cit..

247. Tal extremo fue puesto de relieve por N. Pérez Serrano, *La Constitución española (9 de Diciembre de 1931). Antecedentes, textos, comentarios*, Madrid, 1932, pp. 109 ss.

cristalización descansará en los párrafos tercero y cuarto del art. 24 de la Constitución del 31, sobre la base de la noción de doble nacionalidad²⁴⁸. Frustrado el desarrollo de estos preceptos por los acontecimientos subsiguientes, debe dejarse constancia aquí de que la idea expuesta no era un hecho aislado sino que estaba en relación directa con otras iniciativas tomadas durante el período republicano. Cabe señalar especialmente, ciertos reflejos aperturistas en la jurisprudencia²⁴⁹ y la eventual adhesión de España al Código Bustamante, que generó una célebre y enriquecedora polémica durante esos años.

Hubo importantes opiniones doctrinarias que se ocuparon de destacar las ventajas que tal adhesión habría de comportar, mas no faltaron opiniones eclécticas ni quienes abogaran en su contra²⁵⁰. Sin desconocer el

248. *Ibid.* y J.R. de Orúe, "Preceptos internacionales en la Constitución de la República Española (9 de diciembre de 1931)", *Rev. Gen. Leg. Jur.*, t. 160, núm. IV, 1932, concr. pp. 443-444.

249. *Vid.* los Autos T.S. de 1 de junio de 1933 y de 10 de diciembre de 1937, en A. Remiro Brotons, *Ejecución...*, *op. cit.*, pp. 339-343 y 369-370. También en J.D. González Campos y J.C. Fernández Rozas, *Derecho internacional privado español. Textos y materiales*, vol. I, 2ª ed., Madrid, 1992, pp. 628-630 y 567-568.

250. Un completo cuadro de todas ellas se encuentra en G. Parra-Aranguren, "El Código...", *loc. cit.*, pp.

peligro de caer en simplificaciones desprovistas del necesario rigor, es preciso resumir las razones esgrimidas para sostener las diferentes posturas, toda vez que algunas de ellas -como sucedía respecto de los Tratados de Montevideo- cobran especial interés al ser observadas desde un punto de vista actual comparando ambas situaciones. De la tendencia favorable a que España quedara vinculada con los Estados americanos ratificantes del Código Bustamante pueden destacarse varios argumentos, todos ellos contruidos a partir de una idea bastante optimista acerca del éxito en cuanto a las ratificaciones y las posibilidades reales de aplicabilidad de éste²⁵¹.

179-190. Para un resumen, vid. J. Samtleben, *Derecho...*, op. cit., pp. 75-76.

251. El adalid de esta tendencia fue M. de Lasala Llanas. Al respecto pueden consultarse tres artículos: "Posibilidad de accesoión de España al Código Americano de D.I.Pr. ("Código Bustamante")", *R.D.P.*, vol. 21, 1934, pp. 221-228; "¿Puede adherirse España al Código Bustamante?", *R.D.P.*, vol. 22, 1935, pp. 217-221; y "Acerca de la posible adhesión...", loc. cit. En idéntico sentido, vid. I. Beato Sala, "Sobre la accesoión o adhesión de España al Código Americano de D.I.Pr., denominado Código Bustamante", *R.G.L.J.*, t. 167, 1935, pp. 603-616, E. Alvarez, "El código de D.I.Pr. (C. Bustamante) y la adhesión de España", *Universidad (Zaragoza)*, vol. 12, 1935, pp. 589-613 = *Rev. Der. Int. (La Habana)*, núm. 28, 1935, pp. 176-200 y H. Corvington, "Una opinión de profesor sobre la extensión del campo de aplicación del Código Bustamante y la oportunidad de su adopción por el gobierno de España", *Rev. Der. Int. (La Habana)*, vol. 31, 1937, pp. 88-99.

En un contexto diferente respecto del siglo anterior, no debe ignorarse en esta tendencia una manifestación algo tardía de un "internacionalismo ingenuo" denunciado al referirse a los intentos unificadores de aquella época²⁵². De un lado, se echaba mano una vez más a los datos migratorios y a las ventajas que supondría para los emigrantes, resaltando el espíritu del citado art. 24 de la Constitución y el "ideal hispanoamericanista"²⁵³. En la vertiente más técnica, la procedencia de la adhesión se justificaba fundamentalmente en la fórmula transaccional del art. 7, que permitía la aplicación de la ley nacional al estatuto personal de parte de las autoridades españolas. En la mencionada opinión ecléctica se tomaban recaudos - planteados como reservas dentro de una adhesión que se preconizaba en general- frente al juego que podía tener este artículo, descartando los efectos en España de las

252. Así caracteriza J.D. González Campos esa actitud que, sin prestar debida atención a los datos particularistas, deposita una "fe ciega en las posibilidades de la cooperación internacional en cualquier esfera". Vid. "La revolución...", *loc. cit.*, p. 111.

253. Esta idea se muestra en general menos "paternalista" que la esbozada frente a los Tratados de Montevideo. Cf., por ejemplo, L. de Lasala Llanas, "Posibilidad de accesión...", *loc. cit.*, p. 223.

disposiciones o resoluciones que consagren un criterio distinto al nacional respecto de españoles²⁵⁴.

La posición contraria a la adhesión²⁵⁵ se articuló en torno a varias cuestiones esgrimidas para evidenciar la inconveniencia de llevar a cabo ese acto y la superioridad de la vía bilateral para regular las relaciones de tráfico externo con Iberoamérica. La razón invocada con más ahínco fue la pretendida exclusividad de las naciones americanas para proponer modificaciones al Código, según la interpretación literal que se hacía del art. 7 del Convenio²⁵⁶, que se sumaba a la falta de

254. J. Quero Molares fue quien se destacó en esta idea de aceptación crítica, indicando como otras reservas necesarias las siguientes: *lex fori* como rectora de la calificación ante los Tribunales españoles, si ésta difiriera de la brindada por el Código Bustamante; consideración de la Constitución -bastante obvia-, en particular de sus arts. 23, 24 y 43, como obstáculo para la aplicación de las normas del Código que la contradiciesen; atribución de nacionalidad a las personas jurídicas privadas según su ley domiciliar; ley nacional de los cónyuges para regir el divorcio. *Vid.* "La adhesión de España...", *loc. cit.*, p. 721.

255. La misma fue argumentada por F. de Castro, invocando la representación del Instituto de Estudios Internacionales y Económicos, en "¿Debe adherirse España al Código Bustamante?", *R.D.P.*, vol. 22, 1935, pp. 1-6, y "De nuevo sobre la pretendida adhesión de España al Código Bustamante", *idem*, pp. 306-307.

256. F. de Castro, "¿Debe adherirse...", *loc. cit.*, p. 2 y "De nuevo...", *loc. cit.*, p. 306. El art. 6 del Convenio que aprueba el Código Bustamante establece que "Cualquiera República americana ligada por este Convenio, que desee modificar en todo o en parte el Código anexo, presentará la proposición correspondiente a la

intervención española en la elaboración. Es evidente, empero, que cualquier país vinculado con un texto internacional tiene derecho a proponer reformas a los demás Estados y, en última instancia puede llegar a denunciarlo (art. 8 del Convenio), con lo que la función del art. 7 sería más bien la de estipular una formalidad para los miembros de la entonces Unión Panamericana que quisieran llegar a reformar el Código²⁵⁷. En lo que hace referencia al contenido mismo de la obra de Bustamante, dos fueron las objeciones principales. Una, curiosamente, también era resaltada por quienes abogaban por la adhesión española y recaía, claro está, sobre el carácter ecléctico impreso al Código por el art. 7 del mismo²⁵⁸. La otra se dirigía contra el juego desmedido del orden público que hemos subrayado.

Sin menospreciar la importancia de estos y otros argumentos técnicos, creemos factible cifrar las bases de

Conferencia Internacional Americana para la resolución que proceda".

257. Cf. M. de Lasala Llanas, "¿Puede adherirse...", *loc. cit.*, pp. 220-221.

258. Según F. de Castro, "¿Debe adherirse...", *loc. cit.*, p. 3, "en el caso que más interesa a España, el de los españoles que mueren en América, continuaría ocurriendo lo que actualmente sucede: las herencias de los españoles que fallecen en Ultramar seguirán sometidas a las leyes del lugar de su residencia".

una postura opuesta a la adhesión en tres elementos principales. En primer término, es indudable que la presencia protagónica de los Estados Unidos en el impulso a las Conferencias Panamericanas, constituía un obstáculo político difícilmente salvable en aquellos tiempos²⁵⁹, toda vez que borraba el sello de iberoamericanismo a la empresa. En segundo lugar, la configuración de dos grupos frente a la codificación internacional en América²⁶⁰ -que ya comenzaba a perfilarse claramente y que habría de significar el final de la ilusión de una reglamentación global del D.I.Pr. americano, con o sin España- debía provocar lógicas dudas acerca de la viabilidad de la adhesión y de su eventual trascendencia práctica, más allá de la euforia manifestada por algunos y del impacto causado sobre otros. Los nuevos esfuerzos codificadores iniciados en el seno de la Conferencia Panamericana y la referencia a una codificación gradual y progresiva en su VII reunión, no hicieron más que enterrar toda posibilidad en el sentido estudiado. Ahora bien, si este

²⁵⁹. Nótese que decimos político pues, pese a las vagas referencias de F. de Castro sobre las trabas de carácter jurídico (*loc. cit.*), la influencia de los Estados Unidos en este punto es limitada y su incorporación al Código era sensatamente impensable.

²⁶⁰. Vid. M. Aguilar Navarro, *Derecho...*, *op. cit.*, p. 525.

elemento es achacable totalmente a los países americanos, el tercero corresponde por entero a España; estriba en un recelo entendible ante el hecho de quedar vinculada con una regulación exhaustiva de D.I.Pr., en un momento en el cual comenzaba a echarse en falta una adecuada legislación española sobre esta disciplina²⁶¹.

No es posible aventurar una idea acerca de lo que hubiera sucedido si la discusión hubiera continuado y, sobre todo, si hubiera pasado del ámbito universitario al político. En cualquier caso, la frustrada experiencia republicana fue similar al intento exteriorizado en España de incorporarse a una manifestación de la codificación internacional del D.I.Pr. más afín a la concepción española y menos territorialista que la que caracterizó a los Tratados de Montevideo. La citada afinidad estriba tanto en la consideración de la "legislación hispano-cubana" como fuente de inspiración de la obra de A. Sánchez de Bustamante²⁶², cuanto en la influencia desplegada por el ideario manciniano sobre ésta y sobre el C.c. español de 1889²⁶³. No por

261. Cf. F. de Castro, "¿Debe adherirse...", *loc. cit.*, p. 5.

262. Vid. J. Samtleben, *Derecho...*, *op. cit.*, esp. 235-239.

263. *Ibid.*, p. 75 y J. Quero Molares, "La adhesión de España...", *loc. cit.*, p. 701.

casualidad se llegó a recomendar a los jueces españoles, antes de la reforma del Título Preliminar del C.c. de 1974, el recurso a las normas del Código Bustamante para colmar las lagunas de su sistema de D.I.Pr.²⁶⁴. Sin embargo, la cuestión de la adhesión ya no se volvería a discutir²⁶⁵ y hoy en día constituiría un planteamiento absolutamente extemporáneo.

34. Finalmente, es dable identificar dos períodos desiguales cuyas manifestaciones, por su actualidad, serán objeto de un tratamiento particular. El primero de ellos viene a coincidir con el régimen franquista y de él únicamente cabe destacar, desde el punto de vista normativo, el juego de los convenios bilaterales de doble nacionalidad celebrados a partir del año 1958. Es curioso que durante esta etapa, caracterizada como de un

264. Recomendación hecha por A. Miaja de la Muela.

265. No obstante, un Acuerdo adoptado en el Sexto Congreso del I.H.L.A.D.I. (Mérida -Venezuela-, 1967), propuso todavía "apoyar los estudios encaminados a la revisión de los sistemas convencionales de Derecho Internacional Privado de América (Código Bustamante y Tratados de Montevideo) y los dirigidos a lograr la adhesión de los demás países de la comunidad hispano-americano-filipina". Cf. *Anuario I.H.L.A.D.I.*, t. IV, 1973, p. 684.

"iberoamericanismo militante"²⁶⁶, los reiterados contactos de los científicos, tanto esporádicos como institucionales, no encontrasen una mayor traducción concreta en el Derecho positivo. De ello es una clara muestra la actuación del IHLADI, cuya labor no se ha reflejado, lamentablemente, en un avance de un cuerpo normativo adaptado a las necesidades específicas de las relaciones del tráfico privado externo entre los diferentes actores iberoamericanos, más allá de los mencionados convenios. A caballo entre este período y el siguiente se sitúa la aparición en escena de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países hispano-luso-americanos y Filipinas que inició sus actividades en 1970, con la finalidad de mejorar los cauces de cooperación jurídica entre los Estados miembros²⁶⁷.

La última etapa es la que se inicia con el proceso de cambio democrático en España y coincide con el nuevo sesgo que se otorga a la codificación internacional del

266. Vid. J.C. Fernández Rozas, *Derecho español de la nacionalidad*, Madrid, 1987, p. 25964.

267. El impulso de esta Conferencia se debió al Gobierno español y su origen se debe a la conmemoración del Centenario de la L.O.P.J. Vid. G. Parra-Aranguren, "Las tentativas de codificación...", *loc. cit.*, pp. 15 ss..

D.I.Pr. en América, mediante la labor que en el seno de la O.E.A. realiza la CIDIP, reunida por primera vez en Panamá en 1975.

Es en esta etapa donde se produce, dentro de la política de incorporación masiva a convenios reguladores del D.I.Pr. que se ha operado en España en los últimos años, la adhesión a dos instrumentos suscritos en la CIDIP. En concreto, las Convenciones interamericanas sobre exhortos o cartas rogatorias, hecha en Panamá el 30 de enero de 1975 y sobre prueba e información acerca del Derecho extranjero, hecha en Montevideo el 8 de mayo de 1979. Asimismo, se ha producido la incorporación al Convenio de la Conferencia de Ministros de Justicia sobre comunicación de antecedentes penales y de información sobre condenas judiciales por tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecho en Lisboa el 12 de octubre de 1984²⁶⁸, y se han concluido convenios bilaterales sobre distintas materias donde destaca el reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales civiles y mercantiles (con México y Brasil), ley aplicable y reconocimiento y ejecución respecto de alimentos con Uruguay, junto a un profuso entramado de

268. B.O.E. de 13 de junio de 1989.

convenios en materia penal, de seguridad social, etc. y los más amplios de cooperación²⁶⁹.

Esta actitud española viene de alguna manera a otorgar una nueva dimensión a la reglamentación de las relaciones del tráfico externo con los países americanos que es preciso situar en el amplio contexto en el cual se produce, signado por la incorporación de España a la C.E.E., la participación común en foros codificadores de alcance real o teóricamente universal y la definición de una política convencional española a la luz de esos datos. Sin otorgarle más importancia de la que tiene, queda claro que hasta la llegada de la nueva etapa que se abre en 1975, prácticamente las únicas expresiones concretas de americanismo con alguna repercusión sobre el tráfico privado externo, está constituida por los

269. No está de más señalar que ante la inminencia del Quinto Centenario, en el Gobierno español existió la preocupación por potenciar de alguna manera la conclusión de convenios con las naciones iberoamericanas. Al menos eso es lo que se desprende del contenido de una carta del Ministro de Asuntos Exteriores, F. Fernández Ordoñez, a su par de Justicia, E. Múgica Herzog, fechada el 26 de diciembre de 1989, en la cual le exhorta a intensificar acuerdos bilaterales e iberoamericanos en general, en el ámbito de un llamado "Plan Quinto Centenario". Las "cumbres" iberoamericanas de Guadalajara y Madrid se inscriben en el mismo sentido. En una fecha relativamente reciente, un profesor peruano, M. García Calderón, abogaba por la institucionalización de una organización internacional "hispanica". *Vid.* "Hacia un Convenio Constitutivo de la Comunidad Hispánica de Naciones", *Rev. del Foro (Lima)*, vols. 64-65, 1977-1978, pp. 7-23.

Tratados de paz y los de doble nacionalidad. Es fácilmente observable que este americanismo está teñido de relatividad, tanto por las dificultades de adecuación entre los objetivos perseguidos en la elaboración de los textos y su posterior aplicación práctica, cuanto por el cambio de la realidad que los vio nacer. De todos modos, vale la pena hacer una breve referencia concreta a los mismos.

2. VARIANTES DE UN IBEROAMERICANISMO RELATIVO

A) Los Tratados de paz y amistad y los Convenios de cooperación

35. Los Tratados de paz y amistad constituyen la expresión jurídica del "reestablecimiento" de relaciones entre España y los nuevos Estados iberoamericanos después de los procesos independentistas desarrollados por éstos. Desde una perspectiva eminentemente internacional privatista no tendrían por qué ser mencionados en este marco, habida cuenta de su carácter público regulador de las relaciones bilaterales. Sin embargo, se ha pretendido más de una vez la utilización de algunos de ellos con finalidades distintas a las que motivaron su redacción.

Bastan como ejemplos la invocación de los viejos convenios celebrados con Argentina en 1863 y con Uruguay en 1870, de parte de odontólogos provenientes de esos países que, en virtud de la cláusula de nación más favorecida contenida en los mismos, han reclamado en los últimos años la aplicación del convenio hispano-alemán de 1970, y la pretendida asimilación del Tratado General de Paz y Amistad con Perú, de 14 de agosto de 1879, a los tratados sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras a que se refiere el art. 951 L.E.C.²⁷⁰. Algo similar había ocurrido en América con el Tratado de Paz y Reconocimiento con Venezuela de 1845, el cual, al contener en su art. 13 una disposición que ordenaba la igualdad jurídica de venezolanos y españoles, sirvió de base a algunos súbditos de España en Venezuela para realizar reclamaciones al Gobierno de este país por presuntos daños sufridos con ocasión de las luchas civiles, reclamaciones rechazadas tajantemente por la cancillería venezolana²⁷¹.

270. Dicha asimilación se basaba concretamente en su art. 6. Vid. J.G. Verplaetse, *Derecho internacional privado*, Madrid, 1954, p. 666. En contra, A. Miaja de la Muela, t. II, 8ª ed., Madrid, 1979, pp. 510-511 y J.D. González Campos, "El Convenio entre España y Francia de 28 de mayo de 1969 sobre reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras", *Estudios de Derecho internacional público y privado. Homenaje al profesor Luis Sela Sempil*, t. II, Oviedo, 1970, p. 964n.

36. Al hablar de los viejos Tratados de paz y amistad se hace inevitable una referencia a los Tratados de cooperación que viene celebrando España con diferentes Estados de Iberoamérica y que pueden verse, en un sentido muy restringido, como herederos de aquéllos. Los Tratados de cooperación (científica, tecnológica, cultural, jurídica, etc.), que se firman habitualmente coincidiendo con las visitas que ciertas autoridades gubernamentales españolas realizan a otros países o viceversa, adoptan, en general, la forma de convenios-marco a partir de los cuales se desarrollan los instrumentos específicos que regulan dichas áreas de cooperación. Esos textos u otros que se pactan en virtud del "ambiente cooperativo" que se genera en torno a los señalados viajes, suelen servir de cauce para el establecimiento de compromisos más o menos

271. La norma en cuestión señalaba que "los Venezolanos en España y los Españoles en Venezuela, podrán poseer libremente toda clase de muebles o inmuebles, tener establecimientos de cualquier especie, ejercer todo género de industrias y comercio por mayor y menor, considerándose en cada país como súbditos nacionales los que así se establezcan, y como tales, sujetos a las leyes comunes del país donde posean, residan o ejerzan su industria o comercio; extraer del país sus valores íntegramente, disponer de ellos, suceder por testamento y ab intestato, todo en los mismos términos y bajo las mismas condiciones que los naturales". Vid. G. Parra-Aranguren, "Los antecedentes de la codificación civil y el D.I.Pr. venezolano (1810-1862)", *Rev. Fac. Der. Univ. Cat. A. Bello*, vol. 2, 1965-1966, pp. 78-143, esp. 139-141.

concretos para regular cuestiones atinentes al D.I.Pr. En algún caso, se han celebrado el mismo día el convenio general y el regulador de la cooperación jurídica²⁷².

Así considerada, la situación que se pone de relieve no tendría por qué implicar una valoración negativa de la actitud llevada a cabo por la parte española. Antes al contrario, en principio podría traer aparejada una voluntad clara de analizar la realidad de las relaciones jurídicas privadas que se producen entre los países implicados, con la correspondiente identificación de necesidades e intereses recíprocos, tomando siempre en cuenta las dificultades técnicas que la configuración y el contenido de los sistemas en presencia pudieran plantear en orden a una eventual regulación común²⁷³. Sin embargo, la distancia entre las intenciones declaradas y

272. Es el caso del Convenio de cooperación jurídica con Brasil de 13 de abril de 1989, firmado el mismo día que el Convenio básico de cooperación técnica, científica y tecnológica entre los dos países.

273. El art. 10.a) del Tratado general de cooperación y amistad entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado el 11 de enero de 1990, sirve de ejemplo. En él las partes acuerdan "analizar la posibilidad de cada una de las Partes de participar, por la vía de la adhesión, en convenciones multilaterales en materia de cooperación jurídica que se hayan adoptado en el ámbito regional de la otra Parte, a fin de ampliar la gama de oportunidades de colaboración entre ambos países por esa vía". Cabe resaltar que este acuerdo se plasmó en el tiempo transcurrido entre la firma y la ratificación del Convenio bilateral sobre reconocimiento y ejecución.

las realizaciones no parece muy corta. Por ello resulta tal vez tan difícil comprender desde una perspectiva española, la conclusión de un convenio como el hispano-uruguayo que regula la ley aplicable a las obligaciones alimentarias respecto de menores -materia en la cual España se ha incorporado al Convenio de La Haya de 2 de octubre de 1973, de conocido alcance general- y que en la parte relativa al reconocimiento y ejecución de decisiones sobre alimentos remite a las normas de un Convenio que no está en vigor, y todo esto sin plantear normas de compatibilidad.

La necesidad de coordinación entre los distintos sectores de la administración debe ponerse, por lo tanto, de relieve. Es indispensable evitar la producción de determinadas actitudes que generan desconcierto tanto en los operadores jurídicos y en los particulares, cuanto en los mismos estudiosos. A veces, incluso, llega a pensarse que cada visita entre autoridades gubernativas de distintos países supone la eventualidad de la elaboración de convenios de difícil justificación. Algunos de éstos se firman pensando en reforzar la cooperación entre los Estados y, paradójicamente, sólo pueden presentar problemas para sus súbditos frente a los casos concretos.

B) Los Convenios reguladores de la doble nacionalidad

37. Sin intentar hacer una valoración pormenorizada de estos instrumentos, tarea que se sitúa al margen del objeto de la presente tesis y que ha ocupado a buena parte de la doctrina española²⁷⁴, debe mencionarse que, al menos en la actualidad, la trascendencia práctica de los convenios reguladores de la doble nacionalidad, ha quedado menguada. Lejos están los tiempos en que, en el ámbito del Primer Congreso Hispano-Luso-Americano de Derecho internacional celebrado en Madrid en 1951, se retomaba el espíritu del art. 24 de la Constitución republicana y se lanzaba la propuesta de celebrar tratados de doble nacionalidad con los Estados hispanoamericanos²⁷⁵. Fue así como en once años se

274. Además de los trabajos que se citan en este epígrafe, existe una copiosa bibliografía que puede consultarse en J.C. Fernández Rozas, *Derecho español...*, op. cit., pp. 235-266.

275. El contenido de dicha propuesta puede verse en la ponencia de F. de Castro, "La doble nacionalidad", *Actas del Primer Congreso Hispano-Luso-Americano de Derecho internacional*, Madrid, 1952, pp. 340-367 y en su trabajo previo que, bajo el mismo título, apareciera en *R.E.D.I.*, vol. I, 1948, pp. 77-107. Como es bien sabido, Portugal se decantó por una forma diferente a la hora de dar una respuesta legislativa a la misma realidad

concluyeron otros tantos tratados para regular esta materia²⁷⁶. Los criterios de política legislativa de España y la acción de la Administración en el ámbito de los sectores de nacionalidad y extranjería, dista de ser "neutral", en el sentido tradicional de la palabra. Esto

planteada respecto de sus ex-colonias, la cual se plasma, en el caso de Brasil mediante un estatuto que reconoce la igualdad de los derechos y deberes entre nacionales y extranjeros (Convenio firmado en Brasilia el 7 de septiembre de 1971, y en vigor desde el año siguiente) sin adquisición de la nacionalidad. *Vid.* los detallados trabajos de R.M.G. Moura Ramos, "La double nationalité d'après le droit portugais", *Boletim da Faculdade de Direito (Coimbra)*, vol. LIX, 1983, pp. 181-211 y *La double nationalité et les liens spéciaux avec d'autres pays (colonies précédentes, unions d'Etats, etc.): les développements et les perspectives au Portugal* (Conferencia dictada en el Instituto Universitario Europeo), Florencia, 1992.

276. Se trata de los Convenios entre España y: Chile, hecho en Santiago de Chile el 24 de mayo de 1958 (B.O.E. de 14/11/1958) y Canje de Notas sobre conflictos de leyes en materia de doble nacionalidad, hecho en la misma ciudad el 23 de junio de 1958 (B.O.E. de 14/11/1958); Perú, 16 de mayo de 1959 (B.O.E. de 19/4/1960); Paraguay, 15 de diciembre de 1959 (B.O.E. de 19/4/1960); Guatemala, 28 de julio de 1961 (B.O.E. de 10/3/1962); Nicaragua, 25 de enero de 1962 (B.O.E. de 2/5/1962); Bolivia, 25 de enero de 1961 (B.O.E. de 14/4/1964); Ecuador, 22 de diciembre de 1964 (B.O.E. de 13/1/1965); Costa Rica, 21 de enero de 1965 (B.O.E. de 25/6/1965); Honduras, 15 de junio de 1966 (B.O.E. de 18/5/1967); República Dominicana, 16 de diciembre de 1968 (B.O.E. de 8/2/1969); Argentina, hecho en Madrid el 14 de abril de 1969 (B.O.E. de 2/10/1971). Fuera de este período, también cabe mencionar el Canje de Notas con Venezuela sobre otorgamiento recíproco de nacionalidad, de 4 de julio de 1974 (B.O.E. de 12/11/1975). Ya bajo la vigencia de la Constitución de 1978, se celebró otro Convenio con Colombia, hecho en Madrid el 27 de junio de 1979 (B.O.E. de 29/11/1980).

significa que no se realiza una aplicación normativa más o menos mecánica frente a los supuestos que se presentan; por el contrario, se trata de colocar una barrera a un movimiento migratorio de carácter centrípeto y para ello se utilizan verdaderas "normas de combate"²⁷⁷ y prácticas que fuerzan al máximo la letra de normas nacionales y convencionales.

Esta actitud podría comprenderse prestando simplemente atención a una argumentación de corte humanitario basada en la imposibilidad de ofrecer condiciones de vida dignas a todos los extranjeros que pretenden radicarse en España. Pero difícilmente pueda compartirse si se tienen en cuenta todos los elementos - jurídicos y extrajurídicos- que informan esta realidad. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, debe recordarse el respeto a los derechos humanos exigido en varios instrumentos de los que España es parte y, más concretamente incluso, el respeto estricto que se debe a las obligaciones asumidas mediante los convenios

277. Así caracterizan a estas normas J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, criticando la discriminación que subyace en ciertas normas jurídicas y prácticas judiciales de los países de Europa Occidental. Con respecto a España, los citados autores no dudan en calificar como "infame en función de la maldad ética que contiene" a la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros (*op. cit.*, p. 13).

bilaterales vigentes y, obviamente, a las normas dictadas por el propio Estado. En un plano más general, es ineludible observar que la actitud descrita se ejerce, por regla general, indiscriminadamente, abarcando a aquellos extranjeros que tienen en la medida de lo posible resueltos los problemas relativos al acceso a una "vida digna"; por último, la magnitud del flujo de inmigrantes hacia España puede considerarse sin ambages insignificante si se compara tanto con el número que llega a la mayoría de los Estados de la C.E.E. -donde va generando la imposición de ciertas limitaciones- cuanto con el número de españoles que fueron acogidos sobre todo en el último siglo en algunos países, especialmente de América²⁷⁸.

278. Sobre la influencia de los movimientos migratorios en la reglamentación del D.I.Pr., es obligada la lectura de J.C. Fernández Rozas, "Los movimientos migratorios y la nueva configuración del tráfico externo", *A.I.H.L.A.D.I.*, vol. 8, 1987, pp. 49-74. Cf., además, T. Ansay, "Legal Problems of Migrant Workers", *R. des C.*, t. 156 (1977-III); J. Ma Espinar Vicente, "Los movimientos migratorios y su encuadre sistemático en el D.I.Pr.", *A.E.S.J.*, vol. VII, 1978, pp. 129-152; J. Garde Castillo, "Contribución al estudio de los factores determinantes del D.I.Pr.", *Actas del Primer Congreso Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional*, t. II, Madrid, 1952, pp. 463 ss.; C. Labrusse, "La compétence et l'application des lois nationales face au phénomène de l'immigration étrangère", *Travaux Com. fr. dr. int. pr.* (1975-1977), pp. 111-144; J. Yangüas Messía, "L'influence des conditions démographiques sur le règlement des conflits des lois", *Annuaire I.D.I.*, vol. 43, I, 1950,

Las dificultades técnicas en la aplicación de los convenios se potencian por las diferencias que presentan los textos entre sí, por las pretensiones de extender su aplicación a fines no previstos en su elaboración, y por los problemas relativos a la relación de las normas convencionales con las normas autónomas sobre la materia²⁷⁹. Estas razones, escuetamente expuestas, invocan a gritos algún tipo de ordenación que permita una aplicación más acorde con los textos -actuales o futuros-, a la luz de los intereses en presencia y del compromiso histórico común reflejado en la Constitución española²⁸⁰. España encaró el tejido de un entramado de convenios sobre doble nacionalidad con dos finalidades específicas: reforzar los lazos con los Estados hispanoamericanos y

pp. 461-482; A. Álvarez Rodríguez, *Nacionalidad y emigración*, Madrid, 1991.

279. Vid. M. Virgós Soriano, "Nationality and Double-Nationality Principles in the Spanish Private International Law System", en E. Jayme y H.-P. Mansel (dirs.), *Nation und Staat im Internationalen Privatrecht*, Heidelberg, 1990, pp. 237-258 y con un carácter más general, P. Rodríguez Mateos, "La doble nacionalidad en la sistemática del Derecho internacional privado", *R.E.D.I.*, vol. XLII, 1990, pp. 463-493.

280. En este sentido siguen siendo válidas muchas de las reflexiones que se encuentran en J.D. González Campos, "Reflexiones sobre la doble nacionalidad. Consecuencias en la emigración española", *Emigración y Constitución*, Guadalajara, 1983, pp. 91-102 y en J.C. Fernández Rozas, *Derecho español....*, op. cit., pp. 259 ss.

proteger a los emigrantes españoles, permitiéndoles adquirir otra nacionalidad sin perder la de origen²⁸¹. Ahora hay que ver hasta qué punto la primera de estas metas debe prevalecer cuando la segunda va perdiendo sentido y los convenios van siendo cada vez más importantes para "proteger" a los hispanoamericanos en España. Ese es el ámbito que parece destinado a captar casi todo el interés del problema en este Estado, toda vez que desde el punto de vista estricto de la aplicación de las normas de D.I.Pr., la nacionalidad va cediendo terreno como punto de conexión y, más aún, como foro de competencia.

IV. Perspectivas de la regulación de las relaciones del tráfico privado externo entre España y América

1. LA MODIFICACION DE LA REALIDAD DEL D.I.Pr. ESPAÑOL FRENTE A LAS VIAS DE VINCULACION CON AMERICA

38. Resulta casi un lugar común desde hace algún tiempo en la doctrina internacional-privatista española,

²⁸¹. M. Virgós Soriano, "Nationality...", *loc. cit.*, p. 238.

la afirmación según la cual el D.I.Pr. de este país²⁸² ha sufrido una mutación radical producto, básicamente, de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y del alcance dado en la última década a los mecanismos de producción jurídica de carácter internacional, en su doble manifestación: convencional e institucional. Ambos factores han venido a modificar la configuración misma del sistema de D.I.Pr. y, sobre todo el segundo -de expresión multifacética-, el sector de la realidad social regulado por sus normas.

Si nos situamos en la porción concreta de este sector ocupada por las relaciones de tráfico privado externo que vinculan a España con la mayor parte de los países del continente americano, los dos fenómenos mencionados son susceptibles de ser tomados en consideración. El primero, porque el nuevo texto constitucional cambia el sentido del concepto tantas veces invocado de "comunidad histórica iberoamericana", retomando en cierto modo el espíritu que sobre el particular rezumaba la Constitución de 1931²⁸³. El

282. "La concepción, el contenido y las fuentes", en palabras de J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, p. 29.

283. Dicha idea adquiere un sentido relevante al ponerse en relación con el art. 56 CE que, al aludir al papel del Rey en las relaciones internacionales, hace

segundo, por la existencia, junto al amplio cúmulo de problemas comunes que presenta la reglamentación internacional del D.I.Pr. en sus cuatro momentos principales (elección de materias, elaboración, incorporación y aplicación), de algunos datos particulares o que cobran particularidad en el campo delimitado.

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, la progresiva integración de España en el espacio europeo no ha obstado a la producción en los últimos años, de un notable aumento de las realizaciones que vinculan a España con los Estados americanos en un considerable espectro de materias. En efecto, las normas cada vez más numerosas e importantes de "Derecho internacional privado europeo" y que, en lo que nos toca más de cerca alcanza su máxima significación con los Convenios de Bruselas y de Roma, se incorporan al ordenamiento español al mismo tiempo que lo hacen variopintos convenios bilaterales hispano-americanos y multilaterales interamericanos e

especial mención de las naciones de esa comunidad histórica y, naturalmente, al mantenimiento de la doble nacionalidad en el sentido tradicional que se contiene en el primer inciso del párr. 3º de su art. 11. Vid. J.C. Fernández Rozas, *Derecho español...*, op. cit., pp. 240 ss. (texto revisado por A. Álvarez Rodríguez), en relación con N. Pérez Serrano, *La constitución española* (9 de diciembre de 1931). *Antecedentes, textos, comentarios*, Madrid, 1932, pp. 109 ss.

iberoamericanos. Desde tal punto de partida pueden analizarse los diferentes mecanismos que sirven de cauce para esta regulación, su utilización más o menos espontánea y sus consecuencias, y las perspectivas que se brindan de cara al futuro²⁸⁴.

39. La regulación de las relaciones de D.I.Pr. entre España y los países iberoamericanos reconoce dos vías "propias"²⁸⁵ de positivación. De un lado, encontramos el recurso a los convenios bilaterales mediante los cuales se tiene la posibilidad, al menos en teoría, de obtener una reglamentación sobre sectores o materias específicas que presentan un volumen de relaciones cuantitativamente significativo y que carecen de normas especialmente concebidas para este ámbito espacial concreto. Dicha opción debería permitir, además, la consecución de instrumentos razonablemente ajustados tanto a los intereses de política legislativa y al plexo sistemático de los Estados en cuestión, cuanto a la habitual configuración de los supuestos regulados. Salvo ocasiones

284. Salvo referencias expresas, nos referiremos siempre a la perspectiva española de los problemas tratados.

285. Preferimos este término a "directas" ya que éste hace alusión también al carácter de una determinada técnica de reglamentación.

excepcionales, siempre que se respeten las pautas indicadas, no hay margen para la producción de problemas de incorporación²⁸⁶, mientras que los de aplicación son en general susceptibles de preverse y subsanables sin mayores dificultades, si fuera el caso.

La otra vía propia consiste en la incorporación de España a convenios de D.I.Pr. celebrados entre los Estados americanos. Descartada por extemporánea una actitud de este tipo respecto de los Tratados de Montevideo de 1889 y 1939/1940 y del Código Bustamante, la opción se reduce en la práctica a la incorporación a determinadas "convenciones interamericanas" elaboradas en el ámbito de la CIDIP, que aglutina en su seno a todos los países miembros de la O.E.A.. El carácter propio de esta modalidad es un tanto relativo debido al hecho de que dichas convenciones son pensadas para el ámbito americano, aunque, como hemos puesto de relieve, no es una tarea fácil la identificación de elementos regionales característicos. De otro lado, la CIDIP denota una marcada influencia de la obra realizada en otros foros internacionales²⁸⁷, lo que en el fondo se explica en

286. Sin embargo existe algún famoso antecedente en este sentido, como el caso del malogrado Convenio hispano-francés de 14 de mayo de 1870. Cf. J.D. González Campos, "El Convenio...", *op. cit.*, pp. 945-949.

función de la misma "universalización" de los conceptos jurídicos, extremo que se agudiza en la reglamentación de las relaciones de tráfico privado externo²⁸⁸.

Puede observarse, siguiendo con el mismo orden de ideas, que el único ámbito en el que ha cobrado vigencia para España una regulación de verdadera inspiración ibérica y americana -lo cual constituiría una tercera vía propia y la más estricta de todas- es el de la cooperación en materia penal. En este campo el logro está representado por el citado Convenio de la Conferencia de Ministros de Justicia hispano-luso-americanos, de Lisboa. En términos generales, la actividad de la Conferencia de Ministros ha sido proficua pero no ha dado unos resultados prácticos realmente satisfactorios. Algo similar puede decirse del IHLADI; muchas reuniones, multitud de declaraciones, algunos proyectos, pero en el plano de las concreciones ha faltado el impulso que sólo puede dar la voluntad política, representada en la Conferencia de Ministros mas no en este foro²⁸⁹.

287. Situación a la cual D. Opertti Badán ha simbolizado como la "función puente" de la CIDIP.

288. Vid. B. Audit, *Droit international privé*, París, 1991, pp. 25-26 y O. Kahn-Freund, "General Problems of Private International Law", *R. des C.*, t. 143 (1974-III), p. 226.

289. Antes de la reforma del Tít. Prel. del C.c. español, se llegó a sugerir la posibilidad de establecer

40. Junto a estos mecanismos aparece una vía "impropia" de regulación común, que va adquiriendo fuerza en los últimos años para algunas materias determinadas. Consiste en la incorporación común de España y de algunos países americanos a convenios elaborados en foros con una vocación más universal. Concretamente, nos referiremos aquí a la Conferencia de La Haya de D.I.Pr. y a las Naciones Unidas. La apuntada dificultad de regionalización de muchas materias constituye el sustrato básico del recurso a este mecanismo que, especialmente en el caso de la UNCITRAL, muestra un interés creciente de algunos países americanos por los convenios allí elaborados. El caso de la Conferencia de La Haya, por su parte, presenta aristas particulares. Allí el número de Estados americanos que poseen el carácter de miembros se limita a ocho, aunque se ha extendido en los últimos años. Entre ellos, los iberoamericanos sólo son cinco: Argentina, Chile, México, Uruguay y Venezuela²⁹⁰; como

una "Ley uniforme ibérica", a partir de la codificación portuguesa de 1966. Vid. I. García Velasco, *Concepción del Derecho internacional privado en el nuevo Código civil portugués*, Salamanca, 1971, pp. 161-162.

290. Los demás son: Canadá, Estados Unidos y Suriname.

veremos, éstos no han sucumbido, salvo contadas excepciones, al encanto de los convenios de La Haya.

2. LAS VIAS PROPIAS DE REGULACION ENTRE ESPAÑA E IBEROAMERICA EN LA POLITICA CONVENCIONAL ESPAÑOLA

A) *Intensificación de los acuerdos bilaterales*

41. Las materias que han sido objeto de regulación hasta el momento son el reconocimiento y la ejecución de decisiones (con alcance general y respecto de obligaciones de alimentos -junto al Derecho aplicable-), la asistencia judicial internacional y la cooperación entre autoridades en materia civil y en materia penal y la doble nacionalidad. Como puede verse, no nos ceñimos a una concepción restringida o estricta del contenido del D.I.Pr., con la finalidad de percibir con una perspectiva más amplia por dónde pasan los puntos prioritarios de acción legislativa de los Estados implicados, aunque obviamente no se pretende agotar todo el entramado de

lazos convencionales que abarca las materias más dispares²⁹¹. Señaladamente, dentro de la vía bilateral, debemos señalar:

- Sobre reconocimiento y ejecución:

Convenio entre España y Colombia sobre ejecución de sentencias civiles, hecho en Madrid el 30 de mayo de 1908;

Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales en materia civil y mercantil entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Madrid el 17 de abril de 1989²⁹²;

Convenio de cooperación jurídica en materia civil entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil, hecho en Madrid el 13 de abril de 1989²⁹³ -incluye cooperación y reconocimiento-.

- Sobre asistencia judicial internacional:

Canje de Notas entre España y Uruguay suprimiendo la legalización de exhortos y comisiones rogatorias, hecho en Montevideo el 16 de julio de 1901;

Convenio entre España y Argentina sobre supresión de las legalizaciones de firmas en las comisiones rogatorias, hecho en Buenos Aires el 17 de septiembre de 1902.

291. Se han regulado materias tales como: transporte aéreo, promoción y protección recíproca de inversiones, servicio militar, seguridad social, etc.

292. B.O.E. de 9/4/1991 y, corr. errores, de 6/5/1991 y 20/9/1991.

293. B.O.E. de 10/7/1991 y, corr. errores, de 13/8/1991.

- Otros:

Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay sobre conflictos de leyes en materia de alimentos para menores y reconocimiento y ejecución de decisiones y transacciones judiciales relativas a alimentos, hecho en Montevideo el 4 de noviembre de 1987²⁹⁴.

42. Las realizaciones que se vislumbran para un futuro inmediato pasan por la conclusión de varios Convenios en materia penal, que vienen a completar el ya poblado cuadro de regulaciones en esta materia²⁹⁵. El

294. B.O.E. de 5/2/1992.

295. El cuadro de convenios vigentes sobre cooperación en el ámbito penal, se compone de la siguiente manera: Tratados de extradición con: El Salvador, firmado en París el 22 de noviembre de 1884 (*Gaceta de Madrid* de 20/6/1885); Uruguay, firmado en Montevideo 23 de noviembre de 1885 (*Gaceta de Madrid* de 5/1/1887); Colombia, firmado en Bogotá el 23 de julio de 1892 (*Gaceta de Madrid* de 20/2/1894), y Canje de Notas para desarrollarlo, de 19 de septiembre de 1991 (B.O.E. de 3/7/1992); Chile, firmado en Santiago de Chile el 30 de diciembre de 1895 (*Gaceta de Madrid* de 12/5/1897) y Protocolo firmado en la misma ciudad el 1 de agosto de 1896 (*Gaceta de Madrid* de 19/5/1897); Guatemala, firmado en Guatemala el 7 de noviembre de 1895 (*Gaceta de Madrid* de 10/6/1897); Cuba, firmado en Madrid el 26 de octubre de 1905 (*Gaceta de Madrid* de 1/8/1906); Paraguay, firmado en Asunción el 23 de junio de 1919 (*Gaceta de Madrid* de 15/9/1922); México, firmado en México D.F. el 21 de noviembre de 1978 (B.O.E. de 17/6/1980) -incluye asistencia judicial en materia penal- y Canje de Notas para desarrollarlo, realizado en Madrid el 1 de diciembre de 1984 (B.O.E. de 7/11/1986); República Dominicana, hecho en Madrid el 4 de mayo de 1981 (B.O.E. de 14/11/1984) -incluye asistencia judicial en materia penal-; Brasil, hecho en Brasilia el 2 de febrero de 1988

interés demostrado por el *aggiornamento* de la reglamentación de las relaciones bilaterales relativas a cuestiones penales, se confirma al observar el número de convenios en preparación sobre extradición -Bolivia, Costa Rica, Chile (en la misma fecha -12 de abril de 1992- se firmó otro Tratado sobre asistencia judicial en materia penal), Ecuador y Perú-, traslado de condenados -Bolivia, Brasil, Cuba (paralizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores) y Uruguay- y narcotráfico -Bolivia y México-.

Por su parte, en materia civil, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia señalaba en 1991²⁹⁶ que se hallaban en elaboración Convenios de cooperación jurídica con Cuba y Venezuela. Mencionaba también los ahora vigentes con Brasil, México y Uruguay (alimentos para menores), pero nada decía respecto al celebrado con este último país sobre cooperación jurídica

(B.O.E. de 21/6/1990); Argentina, hecho en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987 (B.O.E. de 17/7/1990) -incluye asistencia judicial en materia penal- y Canje de Notas para desarrollarlo, de 12 y 20 de febrero de 1991 (B.O.E. de 22/5/1991); Venezuela, hecho en Caracas el 4 de enero 1989 (B.O.E. de 8/12/1990). Existen también tres Tratados referentes al traslado de condenados: con México, hecho en México D.F. el 6 de febrero de 1987 (B.O.E. de 15/5/1987), con Perú, hecho en Lima el 25 de febrero de 1986 (B.O.E. de 5/8/1987), y con Argentina, hecho en Buenos Aires el 29 de octubre de 1987 (B.O.E. de 27/5/1992).

296. *Boletín de Información*, núm. 1591, p. 52.

(Montevideo, 4 de noviembre de 1987), el cual, pese a ser autorizada su firma por el Consejo de Ministros el 18 de noviembre de 1991, aún no se encuentra en vigor. Los dos primeros han desaparecido de las últimas relaciones de la Secretaría²⁹⁷. En realidad, en el caso de Cuba se trataba de una propuesta de este país que regulaba, con criterios y conceptos bastante diferentes a los establecidos en los convenios que viene celebrando España, la cooperación en materia civil, comercial, administrativa y penal, incluyendo el reconocimiento de decisiones²⁹⁸.

Existen además dos textos vigentes cuyos títulos podrían llevar a pensar que regulan aspectos propios del D.I.Pr., cuando en realidad no es así. Se trata del Acuerdo con México sobre cooperación para el intercambio de información sobre los ordenamientos jurídicos, firmado el 1 de diciembre de 1984²⁹⁹, y del Convenio con Chile sobre cooperación en materia jurídica, firmado en Santiago el 14 de abril de 1992³⁰⁰. Mientras el primero

297. *Ibid.*, núm. 1640, 1992, pp. 163-165.

298. Expte. Ministerio de Justicia núm. 221/71, de 20 de junio de 1988.

299. *B.O.E.* de 8/6/1985.

300. *B.O.E.* de 16/6/1992. Aunque según su art. VII el Convenio se aplicaba provisionalmente desde su firma, ha entrado en vigor 27 de enero de 1993 (*B.O.E.* de 8/2/1993).

se limita a un simple intercambio de textos legales vigentes, el segundo desarrolla el cap. V del Tratado General de Cooperación y Amistad de 19 de octubre de 1990, estableciendo algunas reglas para realizar una actividad común en temas tales como funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, acceso a la justicia, formación de jueces, etc.

B) La incorporación a los convenios de la CIDIP

43. Dentro de la modalidad de incorporación de España a los convenios realizados en el seno de la CIDIP, encontramos hasta el momento las Convenciones interamericanas sobre exhortos o cartas rogatorias, hecha en Panamá el 30 de enero -de la cual también son parte Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos³⁰¹, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela- y sobre prueba e información acerca del Derecho extranjero, hecha en Montevideo el 8 de mayo de 1979 -vincula con Argentina,

301. Sin embargo, este país sólo reconoce la vinculación con aquellos Estados que también se incorporen al Protocolo adicional a la Convención, hecho en Montevideo el 8 de mayo de 1979, situación en la que no se encuentra España.

Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela-.

Respecto a la eventual adhesión a otras convenciones interamericanas, no sería extraño que tal actividad se desplegara en relación con aquellas que regulan problemas atinentes a la asistencia judicial internacional y a la cooperación entre autoridades, siguiendo con la política hasta ahora desarrollada. Es de destacar que una recomendación en este sentido fue efectuada por J. Samtleben a las autoridades de su país -la República Federal Alemana-, propuesta que cayó en el vacío de la indiferencia³⁰². Los textos que entrarían en esta lista son: el Protocolo a la Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, hecho en Montevideo el 8 de mayo de 1979; la Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, hecha en Panamá el 30 de enero de 1975; y la Convención interamericana sobre régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero, *idem*.

302. Vid. "Die Interamerikanischen...", *loc. cit.*, p. 307. Una idea parecida se deja entrever en P.H. Neuhaus, "Las convenciones interamericanas...", *loc. cit.*, pp. 181-182, incluyendo la Convención interamericana sobre normas generales de Derecho internacional privado, hecha en Montevideo el 8 de mayo de 1979.

En el Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia³⁰³ en el cual se da una opinión favorable sobre la incorporación a la Convención sobre prueba e información acerca del Derecho extranjero, se descarta "por el momento" la misma actitud respecto de las convenciones relativas a la recepción de pruebas y a la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, como asimismo del Protocolo a la Convención sobre exhortos, invocando como causa el escaso número de incorporaciones que habían recibido dichos textos. Sobre el relativo a recepción de pruebas, se asegura en el mismo documento que su objeto "ya está cubierto por el de exhortos", extremo que parece sólo relativamente cierto. El convenio cuya incorporación se juzga favorablemente, tampoco gozaba en ese momento de un gran número de Estados parte. Pero sobre éste se afirma que tal carencia se suple con la experiencia aportada por la vigencia en España del Convenio de Londres sobre la misma materia.

Como puede observarse, las razones esbozadas no resultan especialmente sólidas ni son suficientes para distinguir con certeza el *quid* de las diversas posturas

303. De fecha 27 de junio de 1986, expte. núm. 2/73 del Ministerio de Justicia.

asumidas frente a cada convención interamericana. Concretamente, si el parámetro cuantitativo de las incorporaciones es un elemento decisivo, no queda justificada la no incorporación a otros convenios ni la incorporación a algunos que, adoptados en distintos foros, no presentan unos cuadros de Estados parte demasiado poblados.

Además, la inclusión de una referencia a la Convención sobre eficacia extraterritorial de las sentencias, parece coja si no se la pone en relación con la Convención elaborada por la CIDIP III para completar aquélla con normas de competencia indirecta (Convención interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras), del mismo modo que no se comprende por qué no se dice nada sobre la Convención interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares, hecha -como la primera- en Montevideo el 8 de mayo de 1979, ni sobre su Protocolo, hecho en La Paz el 24 de mayo de 1984. De otro lado, es indudable en este momento que el sector del reconocimiento dentro del sistema español, tiende a la consolidación del modelo concebido en los Convenios de Bruselas y Lugano, el cual constituye también la base del texto que se comienza a pergeñar en

el seno de la Conferencia de La Haya de D.I.Pr.. Fuera del ámbito europeo, no parece haber para España más lugar que para convenios bilaterales que intenten acercarse al modelo indicado.

Resulta de suma importancia destacar que la primera etapa en el *iter* de la codificación internacional - entendido globalmente como el de la elección de la materia-, no debe ser considerada válida sólo en los casos de elaboración de un nuevo convenio. Por el contrario, la materia regulada debe ser el elemento central en la adopción de una decisión acerca de la incorporación a convenios ya elaborados, apuntando sobre todo a la posible interacción con otros convenios vigentes o futuros, además de la lógica consideración de la necesidad de regulación en cada caso. Sin embargo, en el caso de las realizaciones de la CIDIP, España podría suplir la imposibilidad de participar en la primera etapa señalada con una actividad más significativa que la que ha desempeñado hasta el presente en la segunda -la de la elaboración de cada convenio-304.

304. Teniendo en cuenta que la incorporación a convenciones interamericanas no es sólo una hipótesis sino una realidad ocurrida ya en dos casos, una actitud previsor de parte de las autoridades españolas debería concretarse en el envío de delegaciones representativas que acudieran tanto a las CIDIP cuanto a sus reuniones previas, con la atención puesta en una eventual adhesión posterior a aquéllas.

44. La situación de la Convención interamericana sobre restitución internacional de menores, hecha en Montevideo el 15 de julio de 1989, requiere una consideración especial, pese a no haber entrado aún en vigor (ha sido firmada por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Frente a una realidad que muestra cómo algunos países americanos miembros de la Conferencia de La Haya se van incorporando al Convenio de La Haya de 1980, que inspiró en gran medida el de la CIDIP, es difícil preveer hasta dónde llegará la adhesión de Estados americanos no miembros de la Conferencia al momento de la aprobación del citado Convenio, no sólo por la existencia de una Convención interamericana abierta, sino también por el carácter semi-cerrado de se desprende del art. 38 de aquél³⁰⁵. Teniendo en cuenta que al incorporarse al Convenio de La Haya, España se ha colocado en situación de quedar vinculada por la misma con Estados de América (y de hecho ya ha aceptado las

305. Pese a la matización realizada por E. Pérez Vera, "Rapport Explicatif", *cit.*, la "condición adicional" a que deben someterse la mayoría de los Estados americanos fortalece las posibilidades del instrumento regional. *Vid.* D. Opertti Badán, *Restitución...*, *op. cit.*, p. 48.

adhesiones de Belize, Ecuador y México³⁰⁶), la adhesión a la Convención de Montevideo sería coherente y le permitiría cubrir el área de países que difícilmente se incorporen al primero y con los cuales tiene un volumen de relaciones relativamente importante. Particularmente, resulta un dato importante la facultad que le brindaría el art. 34.2º de la Convención de convenir con otros países la aplicación prioritaria del Convenio de La Haya³⁰⁷. De cualquier modo, habrá que esperar para ver cómo evoluciona la actitud de los países de la O.E.A. respecto a uno y otro texto.

45. Por último, en lo que concierne a las convenciones interamericanas, su aplicación en América todavía es tímida en términos generales³⁰⁸, extremo que se realza al observar que ya son quince las que están vigentes y que algunas presentan un cuadro de incorporaciones densamente poblado. Por lo demás, la

306. B.O.E. de 6/10/1992. También vincula con Argentina, Canadá y Estados Unidos.

307. Para un tratamiento pormenorizado de la cuestión, *vid.* D.P. Fernández Arroyo, "Convención interamericana...", *loc. cit.*, pp. 154-155 y 172-174.

308. *Vid.* la sistematización realizada por J. Samtleben, en "Neue interamerikanische...", *loc. cit.*, pp. 87-114.

adhesión de España a cualquiera de estas convenciones hace destacables dos elementos interesantes. En primer lugar, el paso de un escenario "latinoamericano" a otro "interamericano" que fue deseado sin éxito por el Código Bustamante, supone que en las relaciones que eventualmente se regulan por esta vía puedan quedar incluídas algunas no iberoamericanas, posibilidad hasta ahora limitada a la vinculación con los Estados Unidos³⁰⁹. En segundo lugar, el citado mecanismo no vincularía con Cuba, que está excluída de la O.E.A. desde 1962, ni con los países que no han demostrado hasta el momento ninguna inclinación hacia las convenciones interamericanas, entre los que destaca Brasil³¹⁰.

309. Esta situación se produciría, por ejemplo, si España se adhiere al Protocolo a la Convención de exhortos.

310. Además de Canadá -de reciente incorporación a la O.E.A.-, Haití, Suriname y los Estados anglófonos a excepción de los Estados Unidos. Cabe destacar, asimismo, que respecto a Dominica rige el Convenio entre España y Gran Bretaña relativo a la mutua asistencia en procedimientos civiles y comerciales, hecho en Londres el 27 de julio de 1929 (*Gaceta de Madrid* de 10/4/1930) merced a un Acuerdo celebrado en 1991 (*B.O.E.* de 5/6/1991).

C) *Balance de las realizaciones en la vía propia*

46. Llegados a este punto es importante realizar un balance, al menos parcial, que permita obtener algunas conclusiones y que sea válido no sólo para las regulaciones bilaterales sino para todas las alcanzadas en la vía propia. Básicamente se trata de ver si la regulación de materias que ya existe y la que formará parte de las próximas realizaciones responde en alguna medida a la realidad del tráfico privado externo entre España y los países americanos implicados. Es decir, si el volumen de las relaciones -en particular, en los sectores hoy reglamentados por convenios- justifica el recurso a instrumentos convencionales dentro de la que hemos denominado vía directa o propia. Fuera del notable interés en revisar los viejos convenios de cooperación penal y realizar otros nuevos, vale la pena indagar doble el alcance de la regulación que toca más de cerca al D.I.Pr. El protagonismo de las cuestiones penales se ha visto inducido especialmente por el auge de delitos relacionados con el narcotráfico y no muestra elementos particulares que diferencien las relaciones con

Iberoamérica de las que España tiene con el resto del mundo³¹¹.

Los convenios que reglamentan aspectos del Derecho procesal y la cooperación internacional de autoridades son demasiado jóvenes como para poder valorar defectos y virtudes en su aplicación. La única excepción la constituye el Convenio con Colombia, el cual no brinda datos demasiado alentadores si se tiene en cuenta que sólo se conocen -en España- dos casos de puesta en práctica³¹².

En un ámbito vecino a esta cuestión cabe volver - ahora con alcance general- a una afirmación que hacíamos al referirnos a la política de formulación de acuerdos en materia penal. Se trata del dato evidente según el cual, del análisis de los convenios que viene celebrando o negociando España, no puede inferirse una política

311. Si se revisa la lista de acuerdos -de distintas características y alcance- recientes y próximos sobre esta materia, se encuentran Estados como Alemania, Australia, Bulgaria (incluye cuestiones civiles), Canadá, Corea, Checoslovaquia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Hungría, India, Italia, Japón, Marruecos, Polonia, Tailandia y Yugoslavia.

312. Sin embargo, el que sí parece utilizarse con cierta fluidez es el Convenio con Venezuela (*sic*), que aparentemente rige el reconocimiento y la ejecución de decisiones judiciales de ese país en España y viceversa (Autos T.S. de 20 de febrero de 1989 -*vid. R.E.D.I.*, vol. XLIII, y nota de de la redacción, pp. 214-215- y de 21 de febrero de 1991).

convencional específica respecto de los países iberoamericanos, ni la presencia de elementos que la caractericen. Sin ir más lejos, es conocido el hecho de que en la misma época en que se celebraban los convenios con México y con Brasil, también se plasmaba un texto sobre la materia con Israel. Probablemente sea lógico que esto sea así en términos generales.

Pero si no se puede hablar todavía de las deseables bondades en la aplicación ni se puede identificar una política convencional concreta hacia Iberoamérica, sí es factible mencionar escuetamente unos datos respecto a puntos muy generales de los recientes convenios con Brasil, México y Uruguay, que indudablemente no alcanzan para hechar suficiente luz sobre los mismos. En los dos primeros³¹³, los elementos que podrían mostrar una actitud deliberada por parte de España se reducen a dos cuestiones que parecen tomarse de los convenios "europeos" concluidos en los últimos años por este país: la atribución de competencia para el reconocimiento a los

313. Cabe aclarar que el alcance de los mismos es muy diferente. Mientras el texto hispano-mexicano se limita al reconocimiento y ejecución de sentencias civiles, el otro abarca la cooperación jurídica, el reconocimiento y ejecución de decisiones y transacciones judiciales, laudos arbitrales y documentos con fuerza ejecutiva y el régimen del proceso con elemento extranjero.

jueces de Primera instancia y la distinción entre reconocimiento y ejecución. En lo demás, no parece haberse guardado un excesivo celo en la búsqueda de una aceptable rigurosidad técnica³¹⁴.

En cuanto al Convenio con Uruguay que regula el Derecho aplicable y el reconocimiento de decisiones y transacciones en materia alimentaria para menores, probablemente no responda a una decisión de política convencional meditada, si se tiene en cuenta la vigencia en España de un convenio sobre Derecho aplicable a los alimentos que tiene alcance general, la remisión realizada a un convenio de reconocimiento entre las

314. F. Garau Sobrino ("El reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales, transacciones, laudos arbitrales y documentos con fuerza ejecutiva através del nuevo convenio bilateral hispano brasileño sobre asistencia judicial", *R.E.D.I.*, vol. XLIII, 1991, pp. 581-584) critica con vehemencia los caps. III y IV del Convenio con Brasil. La utilización reiterada de signos de exclamación y de expresiones tales como: "pésima traducción", "graves carencias", "especialmente desafortunado" (dos veces), "mentalidad de cajón de sastre", "*sin sentido*", "sumamente impreciso", "mala copia", "ejemplo de *mal hacer*", "escandalosos" -referidas a preceptos concretos o al texto en general-, en un comentario de poco más de dos folios, tal vez sirva para dar una idea acerca de la necesidad de ajuste en los procedimientos de elaboración. Más optimista es la visión de P.-P. Miralles Sangro sobre el Convenio hispano-mexicano (*vid.* "El reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales y la cooperación jurídica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derecho internacional privado: la perspectiva española", *B.F.D.U.N.E.D.*, 2ª ép., núm. 1, 1992, pp. 145-169).

mismas partes que no está (todavía) en vigor³¹⁵ y la utilización de criterios discordantes con los presentes en el sistema español³¹⁶. Aunque no se trata de problemas que hagan insoluble la aplicación, hubiera sido recomendable también aquí una atención más esmerada.

47. Ahora bien, el análisis de las crónicas de jurisprudencia publicadas en la *R.E.D.I.* en los últimos años³¹⁷ demuestra que respecto de algunos países iberoamericanos hay un volumen de relaciones relativamente importante. Las materias sobre las que recaen provocan el planteamiento de algunas dudas acerca de la eficacia de los instrumentos bilaterales concebidos. Concretamente, la mayoría de los supuestos consiste en la solicitud de reconocimiento en España de sentencias iberoamericanas de divorcio, materia excluida de los

315. Sobre éste -redactado por la parte uruguaya- también cabrían algunas de las consideraciones vertidas sobre los otros. Al igual que el hispano-brasileño, el Convenio con Uruguay abarca con amplitud un abanico de materias relativas a la cooperación judicial internacional.

316. P. Domínguez Lozano habla de "criterios absolutamente extraños no sólo al Derecho español de origen convencional sino también al Derecho autónomo". "La determinación...", *loc. cit.*, p. 481.

317. Bajo la dirección de J.D. González Campos y J.C. Fernández Rozas. *Vid.* de estos autores, *Derecho...*, *op. cit.*

últimos convenios que regulan el reconocimiento y la ejecución de las decisiones extranjeras (México y Brasil, además de Israel y del texto no vigente uruguayo)³¹⁸. Podrá argumentarse que la tendencia actual respecto de esas decisiones extranjeras estriba en la concesión del *exequatur*³¹⁹, lo que implica en los hechos que este procedimiento se haya convertido por lo general en un mero trámite. No obstante, una crítica de ese tenor sería en todo caso más un argumento contra la conclusión de convenios de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, que una aportación que pudiera matizar el dato empírico apuntado.

Todos los elementos reseñados hasta ahora nos sitúan frente a un panorama en el cual no es posible determinar cuál es la influencia precisa del volumen de relaciones de trafico privado externo en la determinación de la política convencional española. Algún observador más agudo o simplemente más escéptico podría preguntarse incluso si tal política existe o ha existido en algún

318. La misma materia no se excluye del ámbito de aplicación de los convenios bilaterales "europeos".

319. Extremo que puede observarse en el libro de materiales citado, donde se ve, por ejemplo, que del medio centenar de sentencias venezolanas de divorcio sólo dos chocaron contra la barrera de la denegación del reconocimiento en España.

momento. Obviamente, los problemas que se producen en los diferentes estadios de la codificación bi o multilateral del D.I.Pr. no son exclusivos ni característicos de este ámbito de relaciones, pero pueden señalarse algunas cuestiones que generan una trascendencia singular. Entre ellas destaca la mencionada situación que suele producirse a partir de (o coincidentemente con) la celebración de los convenios de cooperación, en el campo específico de regulaciones bilaterales de D.I.Pr..

Los defectos en los momentos de elaboración e incorporación, basados especialmente en la coincidencia de materias con otros convenios, pronto se traducen en problemas de aplicación. Esto significa, en otros términos, que en la atención que se preste a todos los elementos implicados en la primera etapa de la codificación suele estar la clave de la cual depende el éxito de la obra codificadora³²⁰. Habitualmente se expresa que la incorporación a determinados convenios no tiene por qué ser excluyente con la incorporación a otros bi o multilaterales, que regulen total o parcialmente la misma materia. Sin embargo, es preciso observar con sumo cuidado el juego de las citadas cláusulas de

320. Vid. R. Ago, "La codification...", *loc. cit.*, pp. 102-109.

compatibilidad, las cuales debieran ser redactadas respetando escrupulosamente los criterios dictados por los intereses de política legislativa y siempre, como mínimo, las cuestiones elementales de técnica legislativa.

3. LA OPCION IBERICA Y AMERICANA PARA LA REGLAMENTACION DEL TRAFICO EXTERNO: LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA

48. En cuanto a la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, cabe repetir que se trata de una iniciativa española que se remonta a la celebración del centenario de la L.O.P.J., en 1970³²¹. Entre los días 16 y 19 de septiembre de ese año, se reunieron los Ministros de Justicia iberoamericanos y acordaron, en el Acta de Madrid, la constitución de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países hispano-luso-americanos y Filipinas, que debería sesionar cada dos años, cuyo objetivo principal sería alcanzar una

321. Sin embargo, según señala el Informe del Secretario General de 10 de julio de 1988, "las Conferencias celebradas, con excepción claro es de la primera de 1970, han sido organizadas por la Secretaría General sin apoyo alguno oficial del Gobierno español, con la natural colaboración de los Gobiernos de los países que se han ofrecido como anfitriones".

efectiva cooperación en el orden jurídico y en el ámbito propio de los Departamentos de Justicia. Para ello se instituyeron dos órganos: una Comisión Delegada compuesta por cinco miembros elegidos en cada Conferencia y una Secretaría General Permanente con sede en Madrid.

A través de su existencia la Conferencia ha realizado tarea de vasto alcance, consistente en la adopción de numerosas recomendaciones y resoluciones de distinto tipo, como así también de convenios cuya importancia hipotética no se ha visto refrendada por un volumen de incorporaciones siquiera simbólico³²². Aunque el núcleo temático se ha venido a centrar en la cooperación en materia penal -sobre todo en cuestiones relativas al narcotráfico- y en menor medida en los avances de la informática jurídica y otros medios para mejorar la Administración de justicia en los Estados miembros, no son estos los únicos tópicos que han ocupado la atención de la Conferencia³²³. Así, puede señalarse la

322. Las actividades hasta la IV Conferencia (Caracas, 1978), son comentadas por G. Parra-Aranguren, "Las tentativas...", *loc. cit.*, pp. 15-28. En general, la documentación relativa a la Conferencia aparece publicada en el *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*.

323. Cabe mencionar asuntos tales como: régimen jurídico de las sociedades mercantiles, defensa de la intimidad de las personas, situación jurídica de los hijos nacidos fuera del matrimonio, inversiones extranjeras, régimen de ejecución de sentencias penales

conclusión de los siguientes convenios: sobre información en materia jurídica respecto al Derecho vigente y su aplicación, hecho en Brasilia el 22 de septiembre de 1972³²⁴; sobre auxilio judicial, hecho en la misma ciudad y fecha³²⁵; sobre un sistema uniforme para la ejecución de sentencias civiles y laudos arbitrales, hecho en Buenos Aires el 13 de junio de 1975; sobre simplificación de la legalización de documentos públicos extranjeros, hecho en la misma ciudad y fecha; sobre expedición de extractos de actas del Registro Civil, hecho en Caracas el 28 de abril de 1978³²⁶ y el varias veces citado convenio de Lisboa³²⁷.

extranjerías, arbitraje, transplante de órganos, protección del medio ambiente, incidencia de la genética en el Derecho de familia, extradición, gestión penitenciaria, protección del consumidor, armonización del Derecho de familia. Los resultados de los estudios realizados por la Secretaría son puestos en común con todos los Estados miembros.

324. En vigor entre Argentina, Cuba y Portugal. España lo firmó el 13 de junio de 1975, sin llegar a ratificarlo.

325. Sólo recibió la adhesión portuguesa. España lo firmó en la misma fecha que el anterior.

326. España lo firmó en el momento de su aprobación.

327. Vincula a España con Argentina, Cuba, Chile y Ecuador. En relación con la misma materia, el Real Decreto 1176/1992 de 2 de octubre (B.O.E. de 3 de octubre de 1992) recoge la recomendación de la VII Conferencia (Acapulco, 1988), y procede a crear el registro de condenas por tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, dictadas por los Tribunales de

Por lo general, los convenios mencionados son reproducciones bastante fieles -en algún caso resumidas- de textos adoptados por organismos en los que participa España: Consejo de Europa, Conferencia de La Haya de D.I.Pr. y C.I.E.C.³²⁸. En un sentido más amplio, puede decirse que gran parte de la actividad de la Conferencia se presenta como un intento español de trasplantar al ámbito iberoamericano las experiencias adquiridas en las instancias europeas, señaladamente en el Consejo de Europa³²⁹. En este contexto, resultan ilustrativos los "Informes de la Delegación española a la IX Conferencia", celebrada en Madrid entre los días 5 y 7 de octubre de 1992³³⁰. Incluso, la existencia de un documento de la

los países hispano-luso-americanos. Teniendo en cuenta que la Disposición final tercera ordena la entrada en vigor del Real Decreto "a los seis meses de su publicación", el Ministerio de Justicia ha remitido cartas a todos los embajadores iberoamericanos a fin de que cada Estado designe la autoridad competente encargada de llevar a cabo las actividades previstas.

328. Vid. G. Parra-Aranguren, "Las tentativas...", *loc. cit.*.

329. En cuanto a Portugal, de las actas de las reuniones y de los documentos presentados en las mismas, se desprende que su interés se centra sobre todo en los problemas de tráfico de estupefacientes y en las cuestiones ligadas a la informatización de la administración de justicia.

330. Sin embargo, en uno de ellos, titulado "El acceso a la justicia: la perspectiva europea", se advierte que no se trata "de presentar, etnocéntricamente, un modelo ideal y universal, sino de

Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, titulado "Nota informativa sobre las técnicas de adhesión de terceros Estados a los convenios jurídicos al (sic) Consejo de Europa", de 10 de septiembre de 1992, muestra claramente el interés de España por la incorporación de los Estados americanos a estos convenios, para lo cual "la intervención de España ... tendría que consistir en gestiones mas (sic) o menos oficiosas, en relación a convenios abiertos, tendentes a provocar una decisión del Comité de Ministros, según las reglas de mayoría pertinentes".

Posiblemente este interés se base en la constatación de la escasa predisposición de los Estados a vincularse con las realizaciones de la Conferencia, pese a que una recomendación en tal sentido se repite en cada Conferencia. Nótese, además, que desde 1984 no se han vuelto a celebrar convenios. Del lado americano, la coincidencia de algunas de las materias reguladas con las de las convenciones de la CIDIP, pone freno a una eventual incorporación. La multiplicación de textos sobre la misma materia no suele producir resultados

hacer una aportación teórica...", para agregar más adelante que "España y Portugal pueden asumir un papel de puente" (supuestamente en doble sentido) porque al fin y al cabo "los problemas son semejantes y a esa semejanza de problemas responden soluciones proyectadas comunes".

alentadores. Un ejemplo puede verse en los intentos de una regulación sobre la extradición: la V Conferencia (Lima, 1981) recomendó estudiar la posibilidad de elaborar un Convenio o Tratado-tipo sobre la materia, pese a la existencia de regulaciones previas (Convención interamericana adoptada por la Conferencia especializada interamericana sobre extradición en 1981 y Convención europea del Consejo de Europa de 1957); el fracaso queda patente en la reiteración de la recomendación que aparece en el Acta final de la última conferencia (p. 12).

Al mismo tiempo que ésta, se celebró una Conferencia extraordinaria con el objeto de adoptar el Tratado constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos (7 de octubre de 1992), que reemplaza al Acta de Madrid de 1970. Los Estados participantes parecen decididos a darle más fuerza a partir de ahora y en el art. 11 del Tratado se comprometen a contribuir a la financiación de la Conferencia, en forma proporcional a su "nivel de desarrollo económico". No es fácil predecir hasta dónde llegará el éxito de esta "transformación" (art. 1), pero sí en cambio cabe preguntarse sobre las posibilidades de que la Conferencia se convierta en un foro donde se discuta la "iberoamericanización" de las convenciones

interamericanas mencionadas *ut supra* y no sólo de los textos europeos. Los fines señalados en el art. 3 b) y c) -adoptar Tratados de carácter jurídico, resoluciones y recomendaciones a los Estados-, podrían encaminarse, al menos parcialmente, a optimizar las consecuencias negativas de la pluralidad de convenios sobre la misma materia y a sacar provecho de las regulaciones ya existentes.

4. PARTICIPACION COMUN EN FOROS CODIFICADORES CON VOCACION UNIVERSAL COMO VIA IMPROPIA DE REGLAMENTACION

49. El mismo título de este epígrafe nos sitúa sobre la pista de una opción de política legislativa que paulatinamente va generando adhesiones. La incorporación de España y de países (así, indeterminadamente) iberoamericanos a convenios elaborados en los foros codificadores de mayor alcance espacial supone, de este modo, una regulación común que tiene la virtud de no consagrar microcosmos particularistas sino, por el contrario, configurar un escenario potencialmente universal. El desplazamiento que en ciertas materias ejerce la opción universal sobre la regional, pudo

comprobarse en varias ocasiones en la CIDIP, donde se han aprobado resoluciones recomendando a los Estados miembros de la O.E.A. la ratificación o adhesión de convenios provenientes de los foros mencionados. Decíamos que este fenómeno se alimenta de una realidad cada vez más homogénea, más intercambiable, que dificulta en buena parte de las materias objeto de codificación la visualización de intereses estatales o regionales nítidos y que llega incluso a desvestir de caracteres particulares materias que en teoría los poseen. Como contrapartida, dicho fenómeno no puede hacer olvidar que si lo anterior es cierto, también lo es que posiblemente ciertos criterios plenamente válidos y ajustados a determinadas situaciones particulares, no acaban de compadecerse totalmente con otras.

Con una u otra concepción, lo cierto es que España y algunos Estados de América han encontrado en esta vía el camino de una regulación en muchos casos necesaria o, al menos, medianamente satisfactoria. Como hemos apuntado, hasta el momento son contados los casos regulados mediante incorporación común a convenios realizados en la Conferencia de La Haya de D.I.Pr. Pese al aumento de relaciones reguladas por esta vía, el crecimiento que puede esperarse respecto de la producción en este foro es

relativamente limitado. En efecto, como ha quedado señalado, la participación iberoamericana en la Conferencia no es precisamente masiva y difícilmente vaya a aumentar de un modo significativo en los próximos años. De otro lado, el carácter semi-cerrado de algunos convenios constituye una barrera objetiva para la adhesión de Estados no miembros de la Conferencia. Por último, la existencia de convenios paralelos de alcance regional, hacen que la idea de integrarse en un ámbito jurídico "universal" con el cual muchas veces se tienen escasas relaciones, se desvanezca al presentarse como costosa y acaso innecesaria.

Las materias en las cuales España ha quedado vinculada con Estados iberoamericanos³³¹ mediante convenios de La Haya son:

- Convenio sobre procedimiento civil, de 1 de marzo de 1954³³²; vincula con Argentina (Suriname).
- Convenio sobre supresión de legalización de documentos públicos extranjeros, de 5 de octubre de 1961³³³; vincula con Argentina y Panamá (Suriname, Antigua y Barbuda, Estados Unidos y Bahamas).
- Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, de 18

331. Entre paréntesis señalamos la vinculación con otros países miembros de la O.E.A.

332. B.O.E. de 13/12/1961.

333. B.O.E. de 25/9/1978.

de marzo de 1970³³⁴; vincula con Argentina y México (Barbados y Estados Unidos).

- Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, de 25 de octubre de 1980³³⁵; vincula con Argentina, Ecuador y México (Canadá, Estados Unidos y Belize)³³⁶.

50. Aunque la Conferencia de La Haya resulta su ámbito más característico y reseñable, esta vía está muy extendida en muchas materias que exceden los límites del D.I.Pr., aún en el sentido más amplio. Sin embargo, algunas de ellas tienen una acusada incidencia en los sistemas de D.I.Pr., como la normativa internacional referida a los Derechos humanos. Por ello, a sabiendas de que se engloban cuestiones muy disímiles y sin ánimo de agotar una lista seguramente más amplia³³⁷, vale la pena

334. B.O.E. de 25/8/1987.

335. B.O.E. de 24/8/1987 y, corr. errores, B.O.E. de 30/6/1989.

336. Cabe agregar que el Convenio relativo al reconocimiento y a la ejecución de las decisiones en materia alimentaria, de 15 de abril de 1958 (B.O.E. de 12/9/1973), continúa vigente respecto de Suriname; que el Convenio sobre conflicto de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias, de 5 de octubre de 1961 (B.O.E. de 17/8/1988), vincula con Antigua y Barbuda y Grenada; que el Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, de 15 de noviembre de 1965 (B.O.E. de 25/8/1987 y, corr. errores, B.O.E. de 13/4/1989), hace lo propio respecto de Antigua y Barbuda, Barbados, Canadá y Estados Unidos.

mencionar, sólo en lo que respecta a la producción de las Naciones Unidas, los siguientes textos:

- Convenio sobre obtención de alimentos en el extranjero, hecho en Nueva York el 20 de junio de 1956³³⁸; vincula con Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y República Dominicana (Barbados, Haití y Suriname).

- Convención relativa al consentimiento para el matrimonio, edad mínima para contraer matrimonio y registro de los mismos, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 1962³³⁹; vincula con Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela (Antigua y Barbuda, Barbados, Estados Unidos y Trinidad y Tobago).

- Convención sobre los derechos del niño, hecha en Nueva York el 20 de noviembre de 1989³⁴⁰; vincula con Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Barbados, Belize y Grenada).

- Convención sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha en Viena el 11

337. Vid. A. Boggiano, "The experience of Latin American States", *International Uniform Law in Practice*, Roma-Nueva York, 1988, pp. 28-47. Por ejemplo, dentro del campo de la unificación del Derecho privado, podrían señalarse los Convenios sobre las siguientes materias: asistencia y salvataje en el mar (Bruselas, 23 de septiembre de 1910), *Bill of lading* (Bruselas, 25 de agosto de 1924), transporte aéreo internacional (Varsovia, 12 de octubre de 1929 y Protocolo -La Haya, 28 de septiembre de 1955-), propiedad literaria y artística (Bruselas, 26 de junio de 1948), *copyright* (París, 27 de julio de 1971 y Ginebra, 6 de septiembre de 1952), daños causados por aeronaves sobre la superficie (Roma, 7 de octubre de 1952), etc.

338. B.O.E. de 24/11/1966.

339. B.O.E. de 29/5/1962.

340. B.O.E. de 31/12/1990.

de abril de 1980³⁴¹; vincula con Argentina, Chile, Ecuador y México (Estados Unidos).

- Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958³⁴²; vincula con Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay (Antigua y Barbuda, Canadá, Dominica, Estados Unidos, Haití, Suriname y Trinidad y Tobago).

- Convenio europeo sobre arbitraje comercial internacional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961³⁴³; vincula con Cuba.

- Convención sobre el estatuto de los refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951³⁴⁴; vincula con Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay (Canadá, Haití, Jamaica y Suriname).

51. El recurso a la vía impropia ha ido generando una regulación en el ámbito específico de este estudio que, sin llegar a ser casual, nadie podría entender como deliberado. Lógicamente, cuando en España se decide la incorporación a convenios elaborados en los foros de codificación de alcance más o menos universal, no se piensa que de este modo se está planteando una eventual vinculación con los Estados iberoamericanos. Sin embargo, parece prudente sugerir una toma en consideración de los

341. B.O.E. de 30/1/1991.

342. B.O.E. de 11/7/1977.

343. B.O.E. de 4/10/1975.

344. B.O.E. de 21/10/1978 y, corr. errores, B.O.E. de 14/11/1978.

resultados arrojados mediante este mecanismo a la hora de decidir las líneas de acción en la vía propia. Dicha sugerencia cobra especial relieve a la luz de la producción de problemas que no por conocidos han perdido su condición de tales. Es el caso de la conclusión de convenios sucesivos sobre la misma materia en el mismo o en distintos foros, de los convenios que poseen alcance general, de las relaciones entre codificación interna e internacional, etc.; problemas todos que se convierten en obstáculos a la normal aplicación de los textos convencionales³⁴⁵.

No debe olvidarse, tampoco, que la pertenencia de España a la C.E.E. informa a una realidad llena de condicionamientos objetivos, que afecta en cierta medida sus relaciones extra-comunitarias. No obstante ello, la afluencia masiva de capital público y privado español a Iberoamérica, alentada por el fenómeno de la desregulación presente en unos países que han "optado" por la instauración de políticas de corte neoliberal, configura un cuadro en el cual habrá de aumentar inexorablemente el volumen de relaciones bilaterales. Este hecho exigirá una adecuada valoración de parte

345. M. Aguilar Benítez de Lugo, *op. cit.*, pp. 196-198.

española, para poder alcanzar los mecanismos de reglamentación más ajustados a las nuevas características de los intercambios. Los defectos en los momentos de elaboración e incorporación, basados especialmente en la coincidencia de materias con otros convenios, pronto se traducen en problemas de aplicación. Esto significa, en otros términos, que en la atención que se preste a todos los elementos implicados en la primera etapa de la codificación suele estar la clave de la cual depende el éxito de la obra codificadora. Habitualmente se expresa que la incorporación a determinados convenios no tiene por qué ser excluyente con la incorporación a otros bi o multilaterales, que regulen total o parcialmente la misma materia. Sin embargo, es preciso observar con sumo cuidado el juego de las cláusulas de compatibilidad, las cuales deberían ser redactadas respetando escrupulosamente los criterios dictados por los intereses de política legislativa y siempre, como mínimo, las cuestiones elementales de técnica legislativa. La materia sobre la que versa cada intento codificador, finalmente, se revela como la pauta fundamental para determinar el mecanismo a seguir en cada caso y éste nunca debería elegirse según concepciones apriorísticas y menos aún siguiendo una actuación inercial.

CONCLUSIONES

I

1. El D.I.Pr. convencional americano presenta tres ámbitos de producción jurídica multilateral. El primero de ellos es el que traza los confines de la empresa codificadora en las fronteras de los países americanos cuyos ordenamientos jurídicos se inscriben en la familia del Derecho romano-germánico, es decir, los países latinoamericanos. Esta delimitación se realiza con las dos grandes codificaciones globales (Tratados de Montevideo y Código Bustamante), aunque sólo en el primer caso es deliberada. El segundo es el que cobra relieve con la obra de la CIDIP, si bien ya había sido transitada -sin mucho éxito- en las Conferencias Panamericanas, e incorpora a todos los Estados americanos miembros de la O.E.A.. Desde un punto de vista práctico se concreta con la incorporación de Estados Unidos a convenios de la CIDIP. Al lado de estas dos primeras opciones, se alza claramente una tercera: la dimensión iberoamericana, comprendida en su

sentido más amplio, ibérica y americana, es decir, aquella que se refiere a las relaciones entre España y Portugal y los Estados americanos que fueron colonias de dichos países europeos.

2. No existe una homogeneidad entre los sistemas estatales de D.I.Pr. de la región que permita hablar de la existencia de un D.I.Pr. americano o latinoamericano. En realidad, tanto en los sistemas autónomos cuanto en los grandes textos convencionales, se constata la influencia de las concepciones doctrinarias clásicas, pintando un panorama donde coexisten varios modelos cargados de matices.

3. La codificación internacional del D.I.Pr. en América ha tenido mucho más desarrollo que la codificación interna. Para entender esta afirmación, debe tenerse en cuenta que el Derecho privado fue tempranamente codificado en la mayoría de los países latinoamericanos, así como en algunos Estados norteamericanos. Con la exclusión de unos pocos casos en los cuales se produjo un fenómeno de recepción deliberada (prácticamente meras copias) del C.c. francés, puede decirse que las obras de los grandes

codificadores de América fueron al menos tan originales como cualquiera de los elaborados posteriormente en Europa. Ahora bien, la obviedad de esta afirmación no hace perder de vista que los presupuestos y circunstancias originarias de la codificación, no se perciben con la misma claridad al oeste del Océano Atlántico. De manera principal, los elementos de carácter económico que estuvieron en la base del surgimiento del moderno fenómeno de codificación en Europa, difícilmente podían configurarse del mismo modo en países que presentaban unos sistemas económicos y unas relaciones de producción precapitalistas.

En los procesos de codificación interna llevados a cabo por los jóvenes Estados de América se aprecia, por el contrario, la acción vigorosa de dos factores que en realidad responden a un sólo hecho generador. En efecto, la necesidad de construir un orden jurídico nuevo que completara en este aspecto a la emancipación política, halló un cauce inmejorable para su realización en la existencia de juristas conocedores por igual de la doctrina científica y del Derecho positivo habido desde el Imperio romano hasta sus días. La inquebrantable decisión de las élites políticas por romper con los viejos esquemas, se canalizó en gran

medida a través de una producción jurídica muchas veces distante o incompatible con el medio social al que iba dirigido. Con sus virtudes y defectos, con sus éxitos y fracasos, se trató en general de un esfuerzo encomiable por incorporar a los Estados americanos los valores progresistas y humanistas de las concepciones liberales.

En el sector concreto del D.I.Pr., a diferencia de lo que sucedería en el ámbito de la producción jurídica convencional, los sistemas estatales americanos no alcanzaron un desarrollo sobresaliente. Esto es lógico si se tiene en cuenta que las obras principales -que sirvieron de modelo en el resto de América- se produjeron en el segundo tercio del siglo XIX. Así y todo, la excepcional preparación de los juristas mencionados permitió obtener en algunos casos normas de D.I.Pr. divorciadas de las construcciones estatutarias, con estructura perfectamente bilateral, donde la influencia de F.K. von Savigny es clara. Sin embargo, el grueso de los esfuerzos se dedicó -en un impulso que es una característica de los Estados americanos desde su existencia como tales- a la codificación internacional. El crecimiento y la evolución de esta concreta dimensión del D.I.Pr. ahogó en cierta manera

el paralelo desarrollo de los sistemas internos. Es preciso dilucidar entonces cada una de las situaciones en los cuales esta particularidad se ha ido produciendo, sin dejar de lado la consideración de las interacciones entre ambos procesos.

En resultados concretos alcanzados en la codificación internacional, América aventajó a Europa. En ese contexto, es de destacar el convencimiento que existía entre los juristas de los países americanos de que, a diferencia de lo que sucedía en el Viejo Mundo, las condiciones para el logro de una codificación internacional en su continente eran favorables, cuando no óptimas. Las mismas se basaban en la pretendida homogeneidad de los países iberoamericanos, que tenían la gracia de estar a salvo de las cruentas luchas políticas, nacionales, raciales, culturales y religiosas, que se producían en Europa.

II

4. La codificación internacional en general, y la que tiene por objeto al D.I.Pr. en particular, atraviesa desde hace unos años una etapa de auge a la cual no es ajena el continente americano. Debe recordarse que en el período de entreguerras la crisis del internacionalismo -casi podríamos decir el "desengaño" respecto de él- significó un notable impacto sobre el movimiento unificador. En la medida en que una visión más realista respecto de la naturaleza del D.I.Pr. y sus mecanismos de producción jurídica fue ganando adeptos, todo lo que se sostenía sobre una base ideal comenzó a ponerse en duda. Correlativamente, tanto el liberalismo económico cuanto la situación de relativa armonía internacional en el plano político habían sufrido un retroceso tan significativo, que los planteamientos científicos basados en esa realidad dejaron de verse como dogmas inmodificables.

Pero a partir de la segunda mitad del siglo la tendencia hacia la unificación cobró nuevos bríos. Las bases de este resurgir deben buscarse especialmente en

la influencia de la *dritte Schule*, que llevó a cabo una especie de síntesis entre las posturas ciertamente antagónicas mencionadas más arriba, a la luz de la impronta de E. Rabel. El postulado central de esta doctrina se sitúa en el recurso al D.I.Pr. comparado, en la inteligencia de que la constatación de las diferencias que presentan los sistemas estatales de D.I.Pr. entre sí no debe obstaculizar los intentos por encontrar una coordinación basada en la inducción de caracteres comunes.

5. La tendencia internacionalista, la construcción de un D.I.Pr. de fuente internacional con bases sólidas, no parte ya del rechazo a las realidades particulares sino que opera con ellas. Las manifestaciones "particularistas" que han tomado carta de ciudadanía en el D.I.Pr. no impiden el citado crecimiento. En los últimos veinte años se ha producido una verdadera explosión convencional que ha coincidido con la elaboración de los nuevos sistemas nacionales. Sobre las definiciones metodológicas de la codificación internacional los organismos codificadores han adquirido una considerable experiencia. El problema principal ahora parece haberse trasladado al ámbito

técnico, especialmente a las cuestiones de incorporación y aplicación. En la búsqueda de soluciones válidas para éstas, no obstante, debe tenerse en cuenta su dependencia respecto de los problemas de fondo y de método. Pero eso no es suficiente; no debe olvidarse que existe una estrecha relación entre los elementos que informan tanto la situación política internacional cuanto la particular de cada Estado actual o eventualmente implicado en un proceso de codificación y la actitud asumida por éstos frente a la puesta en práctica de dicho proceso.

III

6. La historia de las codificaciones globales americanas está jalonada aparentemente por la lucha entre los Estados partidarios del principio de la nacionalidad como criterio de conexión en las materias del estatuto personal y los que se han inclinado por el principio domiciliario. Sin embargo, no puede dejarse de lado la impronta territorialista manifestada en los recursos dirigidos a la aplicación del Derecho propio a casos iusprivatistas internacionales, presentes en

mayor o menor medida en los sistemas estatales de D.I.Pr. americanos. A punto tal, que hasta la sanción de la reforma peruana de 1984 no podía hablarse en América de la consagración perfectamente bilateral del principio del domicilio (válido para nacionales y extranjeros).

El principio de nacionalidad refleja la influencia de las ideas que se desarrollaban en Europa a finales del siglo XIX, sobre todo al influjo de la obra de P.S. Mancini, ideas que encontraron eco en un primer momento principalmente en cierta parte de la doctrina y en la jurisprudencia brasileñas y después en la obra de A.S. de Bustamante. El criterio del domicilio, de otro lado, se manifestaba como una respuesta de política legislativa a una realidad social caracterizada por una fuerte inmigración, que llevaba a los Estados receptores a buscar el sometimiento de los inmigrantes a las leyes de esos Estados. Con este sentido era defendido a ultranza por los Estados convocantes del Congreso Sudamericano y hacia allí se dirigieron gran parte de sus esfuerzos a lo largo de todo el proceso de codificación.

Para valorar la importancia concedida a las soluciones territorialistas en el D.I.Pr.

iberoamericano puede, por ejemplo contrastarse el art. 7 del Código Bustamante, que consagra la conocida "fórmula transaccional". Esta no se agota, como a veces se cree, en la opción entre nacionalidad y domicilio, sino que concede a cada Estado parte la facultad de aplicar, además de los criterios de esos criterios, cualquier otro "que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislación interior", precisamente, para permitir el juego de las normas basadas en principios territorialistas.

7. Aunque puede afirmarse que no ha existido prácticamente relación entre los trabajos de codificación internacional global del D.I.Pr. americano y las iniciativas europeas, las doctrinas y realizaciones positivas eran mutuamente conocidas. Señaladamente, en cada una de las obras omnicomprensivas latinoamericanas se advierte la influencia significativa de las teorías de los autores clásicos. Ya en el Tratado de Lima la consagración del principio de nacionalidad con alcance amplio (rige el estado y la capacidad de las personas y, con excepciones, los impedimentos matrimoniales y las

sucesiones), demuestra el influjo italiano recibido sobre todo a través de la obra de Fiore.

En los Tratados de Montevideo la impronta *savignyana* es clara, con la incorporación de algunos elementos de la doctrina de Story. Pero aquí debe notarse que la afirmación según la cual los Tratados de Montevideo de 1889 consagraron la aplicación de la conexión domiciliar al "estatuto personal", merece ser matizada. De un lado, se abandona dicha conexión respecto de algunas cuestiones (existencia y capacidad de la persona jurídica, sucesión, y forma, existencia y validez del matrimonio) y, de otro, la utilización de la misma se presenta a menudo inseparablemente unida a una concepción territorialista del D.I.Pr. que hemos subrayado.

Por su parte, el Código Bustamante acusa el peso decisivo que el bagaje teórico de la doctrina de P.S. Mancini ejerció sobre las concepciones jurídicas de A. Sánchez de Bustamante. Fundamentalmente, de allí proviene su conocida división en tres tipos de leyes (personales o de orden público interno, territoriales o de orden público internacional y voluntarias o de orden privado), y la presencia algo desmedida del criterio de

orden público como vía de escape para la no aplicación del Derecho extranjero.

IV

8. Entre los Tratados de Montevideo y el Código Bustamante existe una diferencia fundamental que se sitúa más allá del contenido normativo de ambos textos. Los primeros fueron producto del trabajo tesonero de unos académicos con notable participación política que veían la conveniencia de alcanzar una reglamentación común de las relaciones de tráfico privado externo entre sus países. El segundo, en cambio, aparece como un producto no previsto de las Conferencias Panamericanas, establecidas por iniciativa norteamericana con meros fines comerciales.

Por ello, la hipótesis según la cual el éxito del Primer Congreso de Montevideo actuó como catalizador de la preocupación norteamericana por desplazar el eje de la empresa codificadora hacia este país no parece tener una base de sustentación demasiado sólida. Varias razones nos asisten para no compartirla. En primer lugar, no existe una correspondencia exacta entre las características que revisten ambos procesos, toda vez que la labor desplegada en Montevideo se centró en una disciplina muy concreta, el D.I.Pr., y en un ámbito espacial delimitado, América del Sur. El camino iniciado por los Estados Unidos, en cambio, pretendía un alcance *pan-americano* y respondía principalmente a móviles comerciales y económicos aunque con el tiempo tendría importantes repercusiones en el campo del Derecho internacional. Además, la iniciativa norteamericana venía ya madurando al menos desde 1881 y, en tercer lugar, referirse al éxito alcanzado por el Congreso Sudamericano es, como sabemos, bastante matizable.

Los impulsores de Montevideo se mantenían en un nivel estrictamente jurídico que no denotaba un interés político sobresaliente y que tenía por destino, como máximo, un área subregional americana. Los otros

intentos -iniciativas peruanas, colombianas, etc.- a que hemos hecho referencia nunca lograron generalizarse y, cuando obtuvieron algún resultado, su trascendencia fue escasa o nula. Del mismo modo que ha sucedido y sigue sucediendo en otros ámbitos, puede decirse que el Código Bustamante constituye un producto no deseado o, al menos, no buscado por el movimiento panamericano en su concepción norteamericana. A años vista, da la impresión de ser el resultado del esfuerzo de un puñado de juristas brillantes (y de uno en particular), surgido de un contexto pensado para otros fines.

9. Por estas razones tampoco es exacto afirmar que las Conferencias Panamericanas constituyeron un movimiento paralelo a los Congresos Sudamericanos. Los ámbitos espacial y material de ambos foros coincidieron sólo parcialmente, y por ello el Congreso de Panamá de 1826 no puede considerarse con rigurosidad un antecedente de la obra de Montevideo aunque sí, en el sentido que hemos expuesto, de la desarrollada en el seno de las Conferencias. Además, mientras los Congresos de Montevideo tuvieron un objetivo específico que se traduce en los Tratados de 1889 y 1939-40, el movimiento panamericano se prolongó en el tiempo,

matizado y con distintas formas y estructuras, a través de distintos pasos dados por la O.E.A.. No obstante, debe admitirse que existieron relaciones entre ambos procesos.

10. No caben dudas de que los Estados vinculados a cada codificación global, conformaron sendos "polos", que se aferraron a posiciones irreductibles, haciendo imposible un avance hacia un entendimiento de mayor alcance. En el fondo, se detecta la dicotomía entre un esfuerzo "universalista" obligado a respetar el *status quo* (Bustamante) y otro "regionalista" capaz de consagrar soluciones unitarias (Montevideo). Sin embargo, no debe olvidarse que también incidieron contra cualquier posibilidad de entendimiento los problemas de protagonismo encarnados por algunos Estados, algunas con posturas teñidas de mezquindad. Ahora bien, puede admitirse como cierto que en ambos grupos, los respectivos textos se toman como la legislación básica de D.I.Pr., más allá de su efectiva o repetida aplicación.

V

11. La intervención de la O.E.A. en el trabajo relativo a la codificación y el desarrollo del D.I.Pr. debe valorarse tomando en cuenta que ésta es una actividad con poco atractivo político, en una organización que tiene netamente ese carácter. Además, la escasez de medios económicos de la Organización realza en términos relativos todos los frutos de su accionar en este campo. De cualquier modo, puede pensarse que el trabajo de los órganos de codificación que actúan en el seno de la O.E.A. ha experimentado una evolución de menor a mayor, altamente positiva.

12. En un principio se gastaron muchos esfuerzos en los intentos de revisar el Código Bustamante para lograr su "extensión" a los países que no se habían incorporado al mismo o que lo habían hecho mediando reservas generales. A partir de la institucionalización en 1948 la práctica totalidad de los trabajos se dedicarían, durante muchos años, a la discusión acerca

de la posibilidad de lograr una síntesis superadora entre las legislaciones internacionales globales de D.I.Pr. vigentes en América, incluyendo al *Restatement of the Law of Conflicts of laws*, aprobado por el American Law Institut en 1934. Resulta afirmable, repasando la historia de los trabajos realizados desde la Séptima Conferencia Panamericana hasta la primera reunión de la CIDIP, que la ilusión de esa síntesis constituyó el principal escollo para la modernización o actualización del D.I.Pr. de la región. Básicamente existía una contradicción insalvable que surgía de la utilización de un foro interamericano para realizar una obra latinoamericana.

13. El abandono de la idea de lograr una codificación global de síntesis y el paso consiguiente a una política de codificación materia por materia, constituye el punto de inflexión que marca el antes y el después en la codificación americana. En el fondo, quedó demostrado que no se trataba de un problema de composición o atribuciones de los órganos encargados de la codificación ni de mecanismos empleados, aunque ambos pudieran mejorarse. El meollo de la cuestión era que, pasada la era del "romanticismo universalista", las

viejas codificaciones globales habían perdido su sentido y su factibilidad. Los ingentes esfuerzos por alcanzar una reglamentación de los problemas que conllevan las relaciones de tráfico privado externo en América, debían dar paso a una metodología más pragmática.

VI

14. Con la codificación parcial, progresiva, existe una mayor posibilidad de que se produzca un acercamiento a los problemas más acuciantes dentro de las necesidades de la región. El carácter progresivo, en este sentido, puede verse como la adecuación a las exigencias actuales. Además, también crece la posibilidad más o menos cierta de superar el territorialismo que impregna buena parte de las soluciones tradicionales. Sin embargo, la agenda de la CIDIP presenta muchos altibajos. La elección de las materias a codificar, decisión esencial y primera de cualquier proceso codificadorio, no siempre se ha

demostrado cauta y reflexiva. Sin embargo, se observa una mejora paulatina que sobre todo se manifiesta en la limitación de la cantidad de materias para cada reunión de la CIDIP. Si a ello se suma un adecuado trabajo previo sobre las mismas, las condiciones van acercándose a lo óptimo.

15. Hasta ahora ha existido cierto predominio del Derecho procesal civil internacional y de la asistencia judicial internacional, en las materias reguladas por la CIDIP. La influencia ejercida por la presencia de los Estados Unidos en la configuración de esta realidad es ostensible. Sin embargo, no puede olvidarse que un objetivo de orden práctico ha pesado sobre la actitud de la CIDIP. Se trata del hecho que muestra que las cuestiones sobre aplicación del Derecho extranjero son susceptibles de resolverse en general, en ausencia de normas convencionales. En cambio, gran parte de la temática relativa al Derecho procesal civil internacional, está destinada al fracaso en las mismas condiciones. La reglamentación de mecanismos de cooperación entre autoridades judiciales y administrativas de distintos Estados ha venido a ocupar un espacio preponderante en la realidad de las normas

convencionales de D.I.Pr., y la CIDIP no escapa a esta tendencia general.

Básicamente son dos los requisitos que debe reunir una materia determinada para merecer el costoso trabajo que supone su codificación internacional: la necesidad de ésta y las posibilidades de arribar a un resultado concreto satisfactorio. De los dos, el primero es menos objetivo, ya que depende de la voluntad política de los Estados. Puede adquirir a veces unos ribetes de cierta urgencia -como ha sucedido con algunos temas relativos a la protección internacional de los menores- y, en general, se mide con criterios cuantitativos y cualitativos en función de los intereses comunes de los Estados implicados. El segundo hace alusión al grado de particularismo que cada materia entraña y a la consiguiente dificultad de arribar a un denominador común. Ambos requisitos son susceptibles de variar con el tiempo. En resumen, la consigna debería ser: pocas materias, importantes (para la región y para los Estados miembros), bien discutidas antes de cada Conferencia y que cuenten con razonables posibilidades de alcanzar una aceptación unánime o ampliamente mayoritaria.

16. La carencia de un órgano permanente en la CIDIP provoca un complejo entramado de esfuerzos muchas veces superpuestos, provenientes de los más diversos órganos de la O.E.A. Así, la Secretaría General y sus dependencias, de un lado, el Consejo Permanente, de otro, el C.J.I., en tercer lugar, y órganos tales como el Instituto Interamericano del Niño, se reparten de manera no siempre armónica las tareas tendentes a la preparación de cada Conferencia. A estos deben sumarse diversos grupos que son creados para desempeñar alguna función específica (grupos *ad hoc*) y las reuniones de expertos sobre materias incluidas en el proyecto de temario respectivo. La situación expuesta obliga a un replanteamiento de la cuestión, aún cuando no se ignoren las trabas, fundamentalmente burocráticas y económicas, que se oponen a la constitución de una oficina específica destinada a la codificación del D.I.Pr.. Para que la misma alcance un satisfactorio grado de eficacia, se haría indispensable dotarla de cierta autonomía y de un presupuesto acorde a sus finalidades. En última instancia, las posibilidades de que este planteamiento prospere dependerán de la importancia que la Organización conceda a la

codificación del D.I.Pr. a realizar en su seno, extremo que no aparece como muy simple de cuantificar.

VII

17. El divorcio secular entre trabajos tendentes a la integración regional y codificación del D.I.Pr., puede encontrar un cauce de arreglo en la etapa que se abre con los nuevos impulsos integradores. La evolución desde el escenario latinoamericano, parcialmente ocupado por los viejos textos, al nuevo espacio interamericano en la codificación del D.I.Pr., parece armonizar con la incipiente perspectiva actual de integración económica. En efecto, los intentos renovados de los procesos integradores subregionales han suscitado la atención de la O.E.A., que ha creado - en el seno de su Consejo Permanente- una Comisión para la eliminación de los obstáculos jurídicos a la integración, que se esfuerza en encontrar un mecanismo regional de síntesis a los trabajos en general aislados y muchas veces superpuestos. Los fracasos precedentes y los contrastes socio-económicos visibles entre los

Estados de la región, trazan una frontera difícil de traspasar. Sin embargo, no alcanzan a enervar la seriedad y el carácter indispensable de la obra encarada, enmarcada en el "propósito esencial" enunciado del art. 2.f) de la Carta ("promover, por medio de la acción cooperativa, su (el de los Estados americanos) desarrollo económico, social y cultural") y en el compromiso hacia la integración contenido en los arts. 41 a 43.

No parece claro que la CIDIP en su actual configuración de conferencia no permanente que se reúne merced a las pertinentes convocatorias de la Asamblea General, pueda acometer con éxito una tarea de tanta envergadura, que superará ampliamente los márgenes más generosos del D.I.Pr.. Las alternativas, entonces, pasarían por la convocatoria de Conferencias Especializadas dedicadas específicamente a los aspectos jurídicos de la integración o -acaso más deseable- la creación de una oficina permanente con suficientes atribuciones y medios, que trabajaría en estrecha relación con el C.J.I. y la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos o en el seno de ésta.

18. En cuanto a las materias sobre las que cabe esperar trabajos de codificación en el ámbito de la integración, la cuestión de fondo no pasa, a nuestro juicio, por la concreción del temario sino por la definición del grado de obligatoriedad de las normas que se creen en la instancia regional, y de los correspondientes mecanismos de incorporación a los Derechos internos. Lo que sí resulta indispensable es que dicha concreción se opere en lo posible a la luz de los instrumentos mecanismos que ya existen, siempre que se demuestren satisfactorios, evitando la duplicidad de esfuerzos y una producción jurídica "descontrolada".

VIII

19. Dentro de la perspectiva *ad intra* de los convenios de la CIDIP, la que se refiere a su relación con el medio al cual van dirigidos, cabe afirmar que los mismos están destinados a convivir con las codificaciones globales. Existe sin dudas una gran

dificultad para avanzar por el camino elegido en los últimos veinte años por los Estados miembros de la O.E.A., consistente en la vigencia y el enraizamiento en varios de ellos de los grandes cuerpos de normas de D.I.Pr. americanos. El apego a la propia regulación autónoma de D.I.Pr. no ha pesado tanto en algunos países como el interés en mantener o, en el mejor de los casos, extender los criterios y las soluciones de los instrumentos multilaterales americanos. A lo largo de las sucesivas reuniones de la Conferencia, especialmente en las primeras, se ha podido comprobar la validez de estas afirmaciones, toda vez que el obstáculo mencionado ha salido a la luz en repetidas ocasiones, ora frenando proyectos en estudio o elaboración, ora imponiendo actitudes o soluciones poco fructíferas y difícilmente justificables.

20. La posibilidad de producción de conflictos entre convenios referidos a la misma materia se hace visible con la vigencia de las convenciones interamericanas, precisamente por las deficiencias y dudas que se perciben en la redacción de las cláusulas de compatibilidad. Lejos están los países americanos de plasmar en los hechos el estadio superador de las

viejas antinomias que tanto se declama en los foros continentales. Las realizaciones de la CIDIP, en este sentido, parecen destinadas a convivir con las obras americanas provenientes de la etapa de la codificación global o de la codificación propiamente dicha, antes que a reemplazarlas por otro sistema distinto.

Claro que esta afirmación no es admisible si no se sitúa en el contexto adecuado y no se calibra concienzudamente la magnitud de los intereses de política legislativa en presencia. Retener sin más el dato objetivo de la tendencia de los países del Río de la Plata a mantener la vigencia de los Tratados de Montevideo para sus relaciones recíprocas, puede conducirnos a una visión sesgada de la realidad. Entre estos países, que tienen un nivel de integración jurídica muy importante, los Tratados de 1939/1940 son de aplicación cotidiana. La penetración de los mismos en la conciencia jurídica subregional hace impensable que se resigne fácilmente su vigencia por influjo de los nuevos convenios, sin poner en peligro la incorporación de los Estados afectados a estos últimos. Es decir que hay que hacerse a la idea de que los antiguos textos americanos seguirán en vigencia, y no sólo para aquellas materias o cuestiones específicas no

reguladas por la CIDIP. De otro lado, como elemento matizador de estas ideas, no está de más recordar una vez más que varios de los convenios de la CIDIP recogen con bastante fidelidad las disposiciones de Montevideo.

De cualquier modo es fácil colegir que las posibilidades que tiene un conjunto de convenios sobre temas singulares surgidos de determinado foro codificador (o descodificador, si se prefiere) de constituir en sí mismo un "sistema" de D.I.Pr., son muy limitadas aún cuando se dude de la exigencia del carácter completo para la configuración del mismo. Propugnar una idea así concebida sería como pensar que el método de la codificación internacional total es todavía factible y acaso deseable, con la salvedad de que en vez de llevarlo a cabo de una sola vez se requiere para su realización una actividad progresiva. Tal idea puede ser defendible pero no guardaría coherencia con otras constataciones o afirmaciones vertidas en este trabajo. A la CIDIP sólo se le debe exigir una política definida y una producción jurídica adecuada a las necesidades y particularidades de la región; la configuración de un "sistema", cualquiera sea la acepción de este término, resulta una exigencia totalmente fuera de época.

21. En lo que se refiere a la perspectiva *ad extra*, debe mencionarse la influencia de la Conferencia de La Haya y de otros foros internacionales de codificación. La

recepción ha tenido diferentes modalidades, un éxito dispar y ha generado un planteamiento que gira una vez más en torno a la dialéctica universalismo-regionalismo dentro de la codificación internacional del D.I.Pr.. Las posibilidades de incorporación masiva de los Estados americanos a la Conferencia de La Haya no parecen ser muchas, aunque sí pueden participar en aquellos casos en que se producen conferencias abiertas. Lo que sí se puede constatar es que existe una serie de países miembros de la O.E.A. que se han incorporado a la Conferencia de La Haya (Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Surinam, Uruguay y Venezuela), participan activamente en sus tareas y que poco a poco se van vinculando a los convenios de ella emanados.

22. El camino de recomendar la incorporación a los instrumentos multilaterales existentes, sin elaborar Convenciones interamericanas, ha sido recorrido varias

veces en el ámbito de la CIDIP. Hasta el momento esta vía no ha sido exitosa. No se advierte en ella la utilización de un parámetro sólido ni un estudio detenido para la elección de las materias que deben transitarla. Puede observarse que los temas apuntados no pertenecen al mismo sector de materias, ni responden en todos los casos a cuestiones que no hayan figurado ni figuren en la agenda de trabajo de la Conferencia interamericana.

El problema, frente a un panorama como el descrito, subsiste aún cuando se piense que hay consenso sobre la necesidad de economizar, de racionalizar, los trabajos de codificación desarrollados en el seno de la O.E.A. en relación con los que se acometen en otros foros. Y subsiste porque el problema se convierte en señalar un criterio razonable para determinar cuándo procede la elección de un camino o de otro, es decir, cuándo se justifica el esfuerzo de realizar una codificación "regional".

Siguiendo una idea generalizada, habría que ver en primer lugar, para cada supuesto, cuáles materias se hallan impregnadas de algún tipo de particularismo americano y obrar en consecuencia. Pero una buena utilización de esta herramienta exige tener en cuenta

otras cuestiones que pueden tener incidencia en el sector de materias implicado, en cuanto parámetro básico. Por ejemplo, buena parte de los asuntos jurídicos de carácter patrimonial se mencionan habitualmente como más proclives a recibir una regulación uniforme que los que tocan cuestiones personales o familiares; sin embargo, esta distinción no pasa de ser apriorística y maniquea.

De un lado, tal vez no sea demasiado aventurado afirmar que pese a las diferentes realidades que pueden identificarse, los Estados latinoamericanos se desenvuelven en general en un sistema capitalista dependiente que condiciona en gran medida todo tipo de problemas en los cuales estén implicados elementos de orden económico. La presencia de grandes concentraciones de capital (exacerbada en algunos de los países que llevan a cabo políticas de privatización), muchas veces extranjero, que merced a situaciones monopólicas u oligopólicas condicionan el funcionamiento de los mercados, hace pensar en principio que los correctivos destinados a generar cierto equilibrio en las relaciones, deben poseer aquí especial fuerza. Desde este punto de vista, parece más factible detectar problemas necesitados de tratamiento

particular en este sector que en otros. Claro que no se puede desconocer que sería más coherente con dichas políticas y su consustancial "aperturismo" la eliminación de cualquier signo intervencionista.

23. Es conveniente propender a una participación creciente, activa y tan homogénea como sea posible de los países latinoamericanos en los foros internacionales que se encargan de la codificación del D.I.Pr.. Particularmente, debe propugnarse la incorporación paulatina de dichos Estados a la Conferencia de La Haya de D.I.Pr. como principal órgano codificador, sin perjuicio del mantenimiento de los resortes regionales en el ámbito de la O.E.A.. De este modo se podría avanzar hacia una unificación internacional más amplia y rigurosa, a la par que seguiría en pie la estructura americana, para todos aquellos puntos que requieran regulaciones paralelas u originales y para poder mantener, cuando sea posible y necesario, posiciones comunes en el seno de la Conferencia. No se nos escapa que aunque ésta ha dejado de ser una *limited company* y ha traspasado los límites de Europa, el ingreso sigue teniendo ciertas restricciones no sólo de orden estatutario (art. 2 del

Estatuto de la Conferencia), y que aún cuando se acepten varios Estados más miembros de la O.E.A., es impensable y acaso indeseable una incorporación total. Está claro que un ingreso paulatino, acompañado de una prudente racionalización de medios, es perseguible y se compadece con el espíritu universal que debe animar a la Conferencia de La Haya. Sin embargo, atendiendo a las limitaciones señaladas -y a otras cuestiones de orden mucho más general-, sería difícil y acaso irresponsable sugerir el abandono de la vía regional. Antes bien, podrían profundizarse y generalizarse vías de cooperación ya establecidas, que permitan ahorrar esfuerzos vanos y evitar contradicciones artificiales.

24. Cada organización regional o grupo regional de Estados aspira legítimamente a consolidar una estructura jurídica más o menos completa y satisfactoria para las relaciones privadas internacionales que se producen en su seno. Es difícil hallar una justificación de fondo que fundamente la "obligación" de algunos organismos internacionales de no regular determinadas materias porque éstas ya han sido o van ser objeto de convenios en otra sede de carácter o vocación universal. Existe, eso sí, una

evidente cuestión de ahorro de esfuerzos, de tiempo y de recursos económicos (además de los problemas de aplicación), que aconseja no multiplicar los trabajos sobre una misma materia. Pero son dos cosas diferentes. En última instancia, la decisión en cada caso compete al organismo regional, el cual debería obrar guiado por dos parámetros: la pertenencia de sus miembros a la organización "universal" (o el fácil acceso a sus producciones jurídicas) y la presencia de elementos regionales característicos.

25. En los convenios de la CIDIP se demuestra una actitud totalmente aperturista hacia los países que no son miembros de la O.E.A., al disponerse que aquéllos quedan abiertos a la adhesión de cualquiera de éstos, sin señalar ninguna clase de restricciones. Creemos importante subrayar esta postura por varias razones. En primer término, se marca de este modo la superación de las actitudes contradictorias y desconfiadas respecto de terceros Estados manifestadas un siglo atrás con ocasión del Primer Congreso Sudamericano. En segundo lugar, se brinda la oportunidad concreta a los Estados no americanos de vincularse mediante las convenciones de la CIDIP a los países del continente. Esta cuestión

cobra especial relieve para aquellos Estados que mantienen un importante caudal de relaciones de tráfico privado externo con países americanos, aunque cuando esas relaciones aparecen focalizadas sobre uno o más países concretos, el camino más seguro estará dado por el recurso al convenio bilateral. De cualquier modo, está ampliamente demostrado que ambas vías no son incompatibles y así parecen entenderlo, señaladamente, las autoridades españolas.

Además, y esto debe tenerse muy en cuenta, cabe indicar que la fórmula adoptada en la CIDIP, a diferencia de lo que suele ocurrir en los convenios concluidos en otras sedes internacionales, no requiere la aceptación expresa de las adhesiones por parte de los Estados parte de cada convención, ni otorga derecho a éstos para oponerse a dichas adhesiones, ni prevé la posterior presentación de una reserva. Muchos convenios elaborados en la Conferencia de La Haya, por ejemplo, presentan un carácter semi-cerrado, restringiendo en ámbito espacial primario de los mismos a los Estados miembros de la Conferencia, mientras que los demás Estados que desean adherirse, se ven sometidos a un paso posterior, cual es la aceptación de las adhesiones o la falta de objeción de parte de aquéllos.

IX

26. El cuadro de incorporaciones a los convenios de la CIDIP presenta unas ~~características~~ llamativas. Los que corresponden a las dos primeras Conferencias (Panamá-1975 y Montevideo-1979) han recibido una aceptación que puede considerarse muy satisfactoria en general, ya que todos han entrado en vigor con un considerable número de ratificaciones (adhesiones en su caso) y la gran mayoría de los Estados latinoamericanos han demostrado una actitud positiva frente a la obra de la CIDIP. Sin embargo, los convenios elaborados en las dos últimas Conferencias (La Paz-1984 y Montevideo-1989) no han tenido la misma repercusión. Sólo uno de ellos ha entrado en vigor y vincula nada más que a dos Estados.

27. También se ha escrito mucho sobre la escasa aplicación de los convenios de la CIDIP vigentes. Sin embargo, poco a poco parece que los mismos van siendo conocidos y tenidos en cuenta dentro de la cantidad relativamente pequeña de casos de D.I.Pr. que se

producen entre Estados partes. Pero hay un dato que compensa con creces esta carencia: la influencia que está ejerciendo la obra de la CIDIP sobre los sistemas estatales de D.I.Pr.. Si hay un denominador común entre las muy heterogéneas reformas producidas en Perú, Paraguay, Uruguay, México y en el remozado proyecto argentino, el mismo consiste en que todos estos textos se nutren con muchos de los criterios establecidos en las Convenciones interamericanas, incluso en aquellas que todavía no han entrado en vigor.

Como a su vez, los convenios de la CIDIP denotan una importante influencia de la producción jurídica de otros foros internacionales, se produce -muy parcialmente- un proceso de modernización indirecta de los sistemas estatales: la CIDIP recoge el "D.I.Pr. standar" de dichos foros, especialmente de la Conferencia de La Haya y, cuando los Estados americanos realizan la reforma de sus sistemas autónomos de D.I.Pr., los criterios recogidos más los que son de elaboración propia de la instancia interamericana impregnan los nuevos textos. Para reforzar este invalorable papel, debería plantearse en la CIDIP la posibilidad de celebrar convenios de alcance general (*erga omnes*). Para los Estados que no quisieran quedar

vinculados de esta manera quedaría siempre la opción de reservar la cláusula que dispone tal alcance.

X

28. La CIDIP, entonces, puede permitir en cierto modo superar la acusada nota de heterogeneidad que presentan los sistemas estatales de D.I.Pr. americanos. Como es sabido, los Códigos civiles americanos que recibieron el impacto de las obras europeas del primer período de la codificación, incorporaron también de este modo sus fragmentarias normas de D.I.Pr.. Cuando las teorías de Savigny, Mancini y Story -pergeñadas cada una de ellas de cara a realidades particulares- son puestas en vigor, se mezclan muchas veces con realidades y tradiciones diversas. La amalgama de elementos provenientes de fuentes muchas veces contradictorias, impide alcanzar sistemas más homogéneos y adaptados a las necesidades particulares de cada Estado. A esto debe agregarse la inevitable lentitud con que estos procesos llegan a desarrollarse

y a alcanzar una sanción positiva medianamente satisfactoria.

Por ello, hablar de un D.I.Pr. iberoamericano aludiendo a una entidad más o menos homogénea, no se compadece con el perfil que presentan los distintos sistemas estatales y convencionales de la región, en lo que refiere a las influencias en la formación de los mismos. Aún cuando se admita que los C.c. de América responden en general a una serie de parámetros comunes, en el campo del D.I.Pr. el efecto de las divergencias de las doctrinas utilizadas para construir los sistemas cobra una dimensión decisiva. En este sentido, la configuración de un panorama donde los principios de domicilio, nacionalidad y territorialidad penetran en las legislaciones estatales de modo desigual y no excluyente, afectó desde el origen mismo de las codificaciones al D.I.Pr. de la región.

La situación señalada es determinante en el sector del Derecho aplicable, pero inunda también los otros sectores del D.I.Pr., mucho más pobres y fragmentarios en su desarrollo dentro de los sistemas estatales. Sobre el "Derecho procesal civil internacional", el territorialismo se expresa en una tendencia hacia el "imperialismo jurisdiccional" y en una correlativa

actitud negativa frente al reconocimiento de las decisiones judiciales extranjeras. El panorama de heterogeneidad no ha cambiado con las modificaciones que se vienen sucediendo en los sistemas de D.I.Pr. iberoamericanos. Sin embargo, paulatinamente, parece ir creándose un ámbito propicio para su modernización. Para ésta se observan algunos condicionantes importantes (el mantenimiento del C.c. como cauce de la codificación y la consecuente dispersión de los sistemas) y un elemento que puede ir actuando como catalizador de la operación: el reflejo en las legislaciones estatales de los nuevos criterios adoptados en los convenios. Unos y otro son, en todo caso, relativos.

El problema de la codificación del D.I.Pr. dentro de los Códigos civiles se plantea en íntima relación con la comprensión del contenido de la disciplina, apuntando a una necesidad de delimitación que permita determinar qué materias deben o pueden incluirse dentro de la codificación. En segundo término, el carácter objetivo del análisis pone de manifiesto una evidente nota de dispersión del sistema, que por el hecho mismo del empleo del C.c. como instrumento principal para la codificación del D.I.Pr., vinculará a ésta con un

particular sector de la disciplina: el sector del Derecho aplicable.

En los sistemas sustentados primordialmente en los Códigos civiles, la nota de dispersión señalada es en general obligada, debido al carácter especial que anima dichos cuerpos; además, como ha quedado dicho, esta realidad determina que la codificación sea entendida muchas veces como inherente al sector del Derecho aplicable. Pero la dispersión sistemática que anotamos debe comprenderse también en otra dimensión, y es que aún dentro de este sector, las normas aparecen diseminadas en distintos cuerpos normativos aunque el principal sea sin lugar a dudas el Código civil. Hasta tal punto es esto cierto que cuesta encontrar una justificación rigurosa de la utilización del vocablo "sistema", cuando ciertamente nos enfrentamos a un conjunto de normas que provienen de momentos históricos diferentes, con la consiguiente variación en el marco de intereses dominantes y de principios informadores. El ejemplo de las últimas codificaciones de Perú y de Quebec, disciplinando los tres sectores del D.I.Pr. dentro del Código civil, es excepcional y en cierta medida incomprensible. Las normas de carácter procesal aparecen allí desubicadas, tal vez como manifestación

de un temor irracional a quitar algo de materia al venerado Código.

30. Las dificultades para concretar la autonomía del D.I.Pr. en el plano legislativo repercuten también en el cuadro de relaciones que se dan dentro de cada sistema. Más exactamente, las complicaciones se expresan, de un lado, en la falta de autosuficiencia del sistema y, de otro, en la compleja interacción entre las normas de D.I.Pr. incluídas en los Códigos y las provenientes de fuentes de carácter no estatal. En el primer aspecto, se hace necesario buscar determinadas respuestas fuera del sistema o extender el ámbito de comprensión del mismo, para poder lograr un funcionamiento acorde con unas exigencias mínimas de regulación completa.

En el segundo, la subsistencia de los límites constituidos por los Códigos se ha revelado tradicionalmente como un obstáculo para el establecimiento de relaciones "maduras" entre normas surgidas de distinto ámbito de producción. Sin embargo, este último problema se mitiga en parte en algunas reformas como la alemana de 1986 la cual, pese a no

emanciparse del C.c., demuestra un considerable interés en el mejoramiento de esas relaciones.

No cabe duda de las posibilidades que la utilización del modelo de la Ley especial concede al perfeccionamiento técnico de la reglamentación de las relaciones de tráfico privado externo. El desarrollo de las normas de aplicación es, en este sentido, un parámetro contundente. Sin embargo, no debe perderse de vista el hecho de que estas leyes son muy diferentes entre sí y que en general no abarcan la totalidad del D.I.Pr.. En todo caso, el momento parece ser propicio para alcanzar el viejo anhelo de plasmar Leyes especiales de D.I.Pr. en el continente americano.

XI

31. La actitud asumida por España frente al fenómeno de la codificación internacional del D.I.Pr. ha estado siempre marcada por una aparente contradicción. De un lado, se presenta la opción "iberoamericana" cargada con los datos históricos y

culturales que brindan los lazos que le vinculan con las antiguas colonias. De otro, aparece la opción "europea", basada sustancialmente en criterios de proximidad geográfica, a los cuales se les ha sumado con el tiempo el hecho integrador comunitario con sus decisivos elementos económicos y políticos. Entre ambas opciones no es fácil identificar una relación antitética que responda linealmente a factores determinados.

La cuestión de fondo no se plantea en términos específicos de D.I.Pr.. En todo caso, no ha existido una afinidad decisiva entre los sistemas de D.I.Pr. europeos, al menos no más allá de la que pudiera encontrarse entre cualquiera de éstos y ^Ucualquiera de los americanos. Por el contrario, en uno y otro ámbito, los sistemas autónomos y las realizaciones internacionales han estado marcadas por un alto grado de heterogeneidad, tanto en la configuración metodológica cuanto en el contenido y alcance de las soluciones concretas. Si la obtención de toda regulación de D.I.Pr. iberoamericana se ha demostrado especialmente complicada, las razones no deben buscarse en factores tales como la preferencia por la nacionalidad o el domicilio para regir el estatuto

personal, por la ley del lugar de celebración o ejecución del contrato para las obligaciones contractuales, por el criterio de unidad o pluralidad en las sucesiones, etc. (factores que obviamente no son privativos de una codificación iberoamericana). Antes bien, debe volverse la mirada hacia los elementos fundamentalmente políticos que actuaron como barrera total o parcial ante todas las iniciativas en este sentido, influenciando las decisiones de política convencional en cuanto ésta ha llegado a existir.

32. No debe olvidarse, tampoco, que la pertenencia de España a la C.E.E. informa a una realidad llena de condicionamientos objetivos, que afecta en cierta medida sus relaciones extra-comunitarias. No obstante ello, la afluencia masiva de capital público y privado español a Iberoamérica, alentada por el fenómeno de la desregulación presente en unos países que han "optado" por la instauración de políticas de corte neoliberal, configura un cuadro en el cual habrá de aumentar inexorablemente el volumen de relaciones bilaterales. Este hecho exigirá una adecuada valoración de parte española, para poder alcanzar los mecanismos de

reglamentación más ajustados a las nuevas características de los intercambios.

No obstante lo señalado, la progresiva integración de España en el espacio europeo no ha impedido a la producción en los últimos años, de un notable aumento de las realizaciones que vinculan a España con los Estados americanos en un considerable espectro de materias. En efecto, las normas cada vez más numerosas e importantes de "Derecho internacional privado europeo" se incorporan al ordenamiento español al mismo tiempo que lo hacen variopintos convenios bilaterales hispano-americanos y multilaterales interamericanos e iberoamericanos.

XII

33. La regulación de las relaciones de D.I.Pr. entre España y los países iberoamericanos reconoce dos vías "propias" de positivación. De un lado, encontramos el recurso a los convenios bilaterales mediante los cuales se tiene la posibilidad, al menos en teoría, de obtener una reglamentación sobre sectores o materias

específicas que presentan un volumen de relaciones cuantitativamente significativo y que carecen de normas especialmente concebidas para este ámbito espacial concreto. Dicha opción debería permitir, además, la consecución de instrumentos razonablemente ajustados tanto a los intereses de política legislativa y al plexo sistemático de los Estados en cuestión, cuanto a la habitual configuración de los supuestos regulados.

La otra vía propia consiste en la incorporación de España a convenios de D.I.Pr. celebrados entre los Estados americanos. Descartada por extemporánea una actitud de este tipo respecto de los Tratados de Montevideo de 1889 y 1939/1940 y del Código Bustamante, la opción se reduce en la práctica a la incorporación a determinadas "convenciones interamericanas" elaboradas en el ámbito de la CIDIP. El carácter propio de esta modalidad es un tanto relativo debido al hecho de que dichas convenciones son pensadas para el ámbito americano.

34. El único ámbito en el que ha cobrado vigencia para España una regulación de verdadera inspiración ibérica y americana -lo cual constituiría una tercera vía propia y la más estricta de todas- es el de la

cooperación en materia penal (Convenio de la Conferencia de Ministros de Justicia hispano-luso-americanos). Aunque el núcleo temático se ha venido a centrar en dicha materia -sobre todo en cuestiones relativas al narcotráfico- y en menor medida en los avances de la informática jurídica y otros medios para mejorar la Administración de justicia en los Estados miembros, no son estos los únicos tópicos que han ocupado la atención de la Conferencia.

Del lado americano, la coincidencia de algunas de las materias reguladas con las de los convenios de la CIDIP, pone freno a una eventual incorporación. La multiplicación de textos sobre la misma materia no suele producir resultados alentadores. Parece interesante intentar que la Conferencia se convierta en un foro donde se discuta la "iberoamericanización" de las Convenciones interamericanas y no sólo de los textos europeos, como ha sucedido hasta ahora. Los fines señalados en el art. 3 b) y c) del Tratado Constitutivo de la Conferencia, firmado en Madrid el 7 de octubre de 1992 -adoptar Tratados de carácter jurídico, resoluciones y recomendaciones a los Estados-, podrían encaminarse, al menos parcialmente, a optimizar las consecuencias negativas de la pluralidad

de convenios sobre la misma materia y a sacar provecho de las regulaciones ya existentes.

35. Junto a estos mecanismos aparece una vía "impropia" de regulación común, que va adquiriendo fuerza en los últimos años para algunas materias determinadas. Consiste en la incorporación común de España y de algunos países americanos a convenios elaborados en foros con una vocación más universal. El recurso a la vía impropia ha ido generando una regulación en el ámbito específico de este estudio que, sin llegar a ser casual, nadie podría entender como deliberado. Lógicamente, cuando en España se decide la incorporación a convenios elaborados en los foros de codificación de alcance más o menos universal, no se piensa que de este modo se está planteando una eventual vinculación con los Estados iberoamericanos. Sin embargo, parece prudente sugerir una toma en consideración de los resultados arrojados mediante este mecanismo a la hora de decidir las líneas de acción en la vía propia. Dicha sugerencia cobra especial relieve a la luz de la producción de problemas que no por conocidos han perdido su condición de tales. Es el caso de la conclusión de convenios sucesivos sobre la misma

materia en el mismo o en distintos foros, de los convenios que poseen alcance general, de las relaciones entre codificación interna e internacional, etc.; problemas todos que se traducen en obstáculos a la normal aplicación de los textos convencionales.

36. Del análisis de los convenios que viene celebrando o negociando España, no puede inferirse una política convencional específica respecto de los países iberoamericanos, ni la presencia de elementos que la caractericen. No es posible determinar cuál es la influencia precisa del volumen de relaciones de tráfico privado externo en la determinación de la política convencional española. Algún observador más agudo o simplemente más escéptico podría preguntarse incluso si tal política existe o ha existido en algún momento. Obviamente, los problemas que se producen en los diferentes estadios de la codificación bi o multilateral del D.I.Pr. no son exclusivos ni característicos de este ámbito de relaciones, pero pueden señalarse algunas cuestiones que generan una trascendencia singular. Entre ellas destaca la situación que suele producirse a partir de (o coincidentemente con) la celebración de los convenios

de cooperación, en el campo específico de regulaciones bilaterales de D.I.Pr..

Los defectos en los momentos de elaboración e incorporación, basados especialmente en la coincidencia de materias con otros convenios, pronto se traducen en problemas de aplicación. Esto significa, en otros términos, que en la atención que se preste a todos los elementos implicados en la primera etapa de la codificación suele estar la clave de la cual depende el éxito de la obra codificadora. Habitualmente se expresa que la incorporación a determinados convenios no tiene por qué ser excluyente con la incorporación a otros bi o multilaterales, que regulen total o parcialmente la misma materia. Sin embargo, es preciso observar con sumo cuidado el juego de las cláusulas de compatibilidad, las cuales deberían ser redactadas respetando escrupulosamente los criterios dictados por los intereses de política legislativa y siempre, como mínimo, las cuestiones elementales de técnica legislativa. La materia sobre la que versa cada intento codificador, finalmente, se revela como la pauta fundamental para determinar el mecanismo a seguir en cada caso y éste nunca debería elegirse según

concepciones apriorísticas y menos aún siguiendo una actuación inercial.

**ESTADO DE INCORPORACIONES
A LOS
CONVENIOS MULTILATERALES
AMERICANOS DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO**

TRATADOS DE MONTEVIDEO

PRIMER CONGRESO SUDAMERICANO (1888/1889)

1. Tratado de Derecho civil internacional, de 12 de febrero de 1889
2. Tratado de Derecho comercial internacional, de 12 de febrero de 1889
3. Tratado de Derecho procesal internacional, de 11 de enero de 1889
4. Tratado de Derecho penal internacional, de 23 de enero de 1889
5. Tratado sobre patentes de invención, de 16 de enero de 1889
6. Tratado sobre propiedad literaria y artística, de 11 de enero de 1889
7. Tratado sobre marcas de comercio y de fábrica, de 16 de enero de 1889
8. Convenio relativo al ejercicio de profesiones liberales, de 4 de febrero de 1889.
9. Protocolo adicional, de 13 de febrero de 1889

Ratificaciones: Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay

Adhesiones: Colombia (1, 2, 3 y 8), Ecuador (8), y Francia, España, Bélgica, Italia, Austria, Alemania y Hungría (6)

SEGUNDO CONGRESO SUDAMERICANO (1939/1940)

1. Tratado sobre asilo y refugio político, de 4 de agosto de 1939
2. Tratado sobre propiedad intelectual, de 4 de agosto de 1939
3. Convención relativa al ejercicio de profesiones liberales, de 4 de agosto de 1939
4. Tratado sobre Derecho civil internacional, de 19 de marzo de 1940
5. Tratado sobre Derecho comercial terrestre internacional, de 19 de marzo de 1940
6. Tratado sobre Derecho de navegación comercial internacional, de 19 de marzo de 1940
7. Tratado de Derecho penal internacional, de 19 de marzo de 1940
8. Tratado de Derecho procesal internacional, de 19 de marzo de 1940
9. Protocolo adicional, de 19 de marzo de 1940

Ratificaciones: Argentina (4, 5, 6, 7, 8 y 9), Paraguay (todos) y Uruguay (todos)

Firmas: Bolivia (todos), Colombia (4, 5, 6, 7, 8, y 9), Brasil (5, 6, 7 y 8), Chile (1 y 5) y Perú (todos)

CODIGO BUSTAMANTE

(hecho en La Habana el 20 de febrero de 1928)

Ratificaciones: Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú

--- Con reservas: Brasil, Haití, República Dominicana y Venezuela

--- Con reservas generales: Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador y El Salvador (16 de noviembre de 1931)

Firmas: Argentina, Colombia, México, Paraguay y Uruguay

**CONVENCIONES INTERAMERICANAS Y PROTOCOLOS APROBADOS
POR LAS CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS INTERAMERICANAS
SOBRE DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO**

CIDIP I (Panamá, 1975)¹

**1. Conflictos de leyes en materia de letras de cambio,
pagarés y facturas**

Ratificaciones: Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela

Firmas: Bolivia, Brasil, Colombia y Nicaragua

2. Conflictos de leyes en materia de cheques

Ratificaciones: Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay

Firmas: Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador,
Nicaragua, República Dominicana y Venezuela

3. Arbitraje comercial internacional

Ratificaciones: Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Firmas: Argentina, Bolivia, Brasil, Nicaragua y
República Dominicana

4. Exhortos o cartas rogatorias

Ratificaciones: Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos (sólo se vincula con los
Estados que también se incorporen al Protocolo),

1. Todos los Convenios fueron concluidos el 31 de
enero de 1975.

Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Firmas: Bolivia, Brasil, Colombia y Nicaragua

Adhesión: España

5. Recepción de pruebas en el extranjero

Ratificaciones: Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela

Firmas: Bolivia, Brasil y Nicaragua

6. Régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero

Ratificaciones: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela

Firmas: Brasil y Colombia

CIDIP II (Montevideo, 1979)²

7. Conflictos de leyes en materia de cheques

Ratificaciones: Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Firmas: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá y República Dominicana

8. Conflictos de leyes en materia de sociedades mercantiles

Ratificaciones: Argentina, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

2. Todos los Convenios fueron concluidos el 8 de mayo de 1979.

Firmas: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá y República Dominicana

9. Eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros

Ratificaciones: Argentina, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Firmas: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá y República Dominicana

10. Cumplimiento de medidas cautelares

Ratificaciones: Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay

Firmas: Bolivia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá, República Dominicana y Venezuela

11. Prueba e información acerca del Derecho extranjero

Ratificaciones: Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Firmas: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá y República Dominicana

Adhesión: España

12. Domicilio de las personas físicas en el Derecho internacional privado

Ratificaciones: Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay

Firmas: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá, República Dominicana y Venezuela

13. Normas generales de Derecho internacional privado

Ratificaciones: Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Firmas: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá y República Dominicana

14. Protocolo adicional a la Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias

Ratificaciones: Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Firmas: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Haití, Honduras y República Dominicana

CIDIP III (La Paz, 1984)³

15. Conflictos de leyes en materia de adopción de menores

Ratificaciones: Colombia y México

Firmas: Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Haití, República Dominicana, Uruguay y Venezuela

16. Personalidad y capacidad de las personas jurídicas en el Derecho internacional privado

Ratificación: México

Firmas: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Uruguay y Venezuela

17. Competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras

Ratificación: México

Firmas: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Haití, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela

3. Todos los Convenios fueron concluidos el 14 de mayo de 1984.

18. Protocolo adicional a la Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero

Ratificación: México

Firmas: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela

CIDIP IV (Montevideo, 1989)⁴

19. Obligaciones alimentarias

Ratificación: México

Firmas: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

20. Contrato de transporte internacional de mercaderías por carretera

Firmas: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

21. Restitución internacional de menores

Ratificación: México

Firmas: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y Uruguay

4. Todos los Convenios fueron concluidos el 15 de julio de 1989.

B I B L I O G R A F I A

**I. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.
OBRAS GENERALES CONSULTADAS**

AGUILAR NAVARRO, M., *Derecho internacional privado*, vol. I, t. I, Madrid, Univ. Complutense, 1976

ALBONICO VALENZUELA, F., *Manual de Derecho internacional privado*, t. I, Santiago (Chile), Uribe, 1950

--- *Derecho internacional privado chileno Leyes y tratados vigentes*, Santiago (Chile), Edit. Jurídica de Chile, 1958

ALFONSIN, Q., *Teoría del Derecho privado internacional*, Montevideo, Idea, 1982

--- *Escritos Jurídicos*, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1975, 3 tomos

ALGARA, J., *Lecciones de Derecho internacional privado. Parte general*, México, Edit. Escalante, 1899

ALVARADO G., L., *Apuntes de Derecho internacional privado*, Lima, Torres Aguirre, 1940

de AMORIM, E.C., *Direito internacional privado*, 4ª ed. Río de Janeiro, Forense, 1988

de ANDRADE, A.P., *Manual de direito internacional privado*, 6ª ed., San Pablo, Sugestoes literarias, 1987

ANDRADE OLIVA, C., *El Derecho internacional privado en Chile (Historia legislativa)*, Santiago, 1951 (tesis de grado)

de A. ARAUJO, L.I., *Introdução ao direito internacional privado*, San Pablo, Revista dos tribunais, 1990

ARCAYA, P.M., *Proyecto de Ley de aplicación del Derecho internacional privado*, Caracas, Cosmos, 1915

ARCE, A.G., *Derecho internacional privado*, 7ª ed., 2ª reimp., Guadalajara, Edit. Universitaria, 1990

ARELLANO GARCIA, C., *Derecho internacional privado*, 9ª ed., México, Porrúa, 1989

ARMINJON, P., "L'objet et la méthode du droit international privé", *R. des C.*, t. 21 (1928-1), pp. 459-512

AUDIT, B., *Droit international privé*, París, Economica, 1991

AVALOS, M.V., *El progreso realizado en el Derecho internacional privado en la República desde la proclamación de la independencia hasta nuestros días*, México, F. Díaz de León, 1911

BAEZ ALLENDE, A., *Derecho internacional privado. Ante la legislación comparada y el Código Bustamante*, t. 1, Asunción, Zamphirodos, 1972

BALESTRA, R., *Manual de Derecho internacional privado*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1988

BALMACEDA CARDOSO, *Ensaio de uma sistematização científica do direito internacional privado*, Río de Janeiro, Freitas Bastos, 1942

BALLARINO, T., *Diritto internazionale privato*, Padua, Cedam, 1982

BATALHA, W. de S.C., *Tratado de direito internacional privado*, vol. I, 2ª ed., San Pablo, Ed. Revista dos Tribunais, 1977

BATIFFOL, H., *Aspects philosophiques du droit international*, París, Dalloz, 1956

--- "Le pluralisme des méthodes en droit international privé", *R. des C.*, t. 139 (1973-II), pp. 75-148

--- y LAGARDE, P., *Droit international privé*, 7ª ed., vol. I, París, L.G.D.J., 1981

von BAR, Ch., *Internationales Privatrecht*, Munich, C.H. Beck, 1991

BAYITICH, S.A. y SIQUEIROS, J.L., *Conflict of Laws: Mexico and the United States. A bilateral study*, Coral Gables (Florida), University of Miami Press, 1968

BEVILAQUA, C., *Princípios elementares de direito internacional privado*, 4ª ed., Río de Janeiro, Freitas Bastos, 1944

BIOCCA, S.M., de CARDENAS, S.F. y BASZ, V., *Lecciones de Derecho internacional privado. Parte general*, Buenos Aires, Universidad, 1990

BIVERO GARCIA, H.A., *Le Vénézuéla et ses sources de droit international privé*, París, 1972 (tesis)

BOGGIANO, A., *Del viejo al nuevo Derecho internacional privado*, Buenos Aires, Depalma, 1981

--- *Derecho internacional privado*, 3ª ed., Buenos Aires, Depalma, 1991

BONNEMAISON WINKEL-JOHAM, J.L., *Derecho internacional privado*, Valencia (Venezuela), Vadell, 1986

BOUTIN I., G., *Principios prácticos de Derecho internacional privado panameño*, Panamá, Impr. Comercial de Ed. Renovación, 1984

BUENO-GUZMAN, C., "El Derecho internacional privado interno en Colombia", *Universitas*, núm. 51, 1976, pp. 159-195

--- "Los principios fundamentales del Derecho internacional privado en la jurisprudencia de Colombia", *Universitas*, núm. 57, 1979, pp. 23-54

de BUSTAMANTE y SIRVÉN, A.S., *Derecho internacional privado*, 3ª ed., La Habana, Carasa y Cia., 1943

CAICEDO CASTILLA, J.J., *Derecho internacional privado*, 6ª ed., Bogotá, Temis, 1967

CALANDRELLI, A., *Cuestiones de Derecho internacional privado*, t. I, Buenos Aires, La Buenos Aires, 1911

CARRILLO SALCEDO, J.A., "Le renouveau du particularisme en droit international privé", *R. des C.*, t. 160 (1978-II), pp. 181-264

--- *Derecho internacional privado*, 3ª ed., Madrid, Tecnos, 1983

de CASTRO, A., *Direito internacional privado*, 4ª ed. actualizada por D. Rocha, Río de Janeiro, Forense, 1987

CONDE y LUQUE, R., *Oficios de Derecho internacional privado*, 2ª ed., Madrid, 1907

--- *Derecho internacional privado*, t. I, 2ª ed., Madrid, Fontanet, 1910

CONTUZZI, F.P., *Diritto internazionale privato*, 2ª ed., Milán, 1911

DA SILVA, A.F.D., *Introdução ao direito internacional privado*, 2ª ed., Río de Janeiro, Freitas Bastos, 1982

DELGADO A., M.J., *Compendio de Derecho internacional privado. Anotado con el nuevo C.c. peruano*, Lima, 1938

DIAZ MARTINEZ, A., *Manual de Derecho internacional público, privado. Derecho de gentes, geopolítica*, 2ª ed., Bogotá, Imprenta Don Quijote, 1986

DOLINGER, J., *Direito internacional privado*, Río de Janeiro, Freitas Bastos, 1986

DROZ, G.A.L., "Regards sur le droit international privé comparé. Cours général de droit international privé", *R. des C.*, t. 229 (1991-IV), pp. 9-424

DUNCKER BIGGS, F., *Derecho Internacional Privado*, 3ª ed., Santiago (Chile), 1967

ESPINAR VICENTE, J.M^a, *Curso de Derecho internacional privado español. Técnicas de reglamentación y normas*, Madrid, Borduria, 1991

ESPINOLA, E. y ESPINOLA, E. (h), *Tratado de direito civil brasileiro*, vol. 7 (do direito internacional privado brasileiro. Parte geral), 1941 y vol. 8 (do direito internacional privado brasileiro. Parte especial), 1942-1943, Río de Janeiro, Freitas Bastos

--- *A lei de introdução ao Código civil brasileiro (decreto-lei n. 4657, de 4 de setembro de 1942)*, vol. 2 y 3, Río de Janeiro, Freitas Bastos, 1944

ESPLUGUES MOTA (Dir.), *Código de Derecho internacional privado español*, Madrid, Civitas, 1989

FABRES, J.C., *Obras completas*, t. I, Santiago (Chile), 1908

FEBRES POBEDA, C., *Apuntes de Derecho internacional privado*, 2^a ed., Mérida (Venezuela), Univ. de los Andes, 1962 (Colección *Justitia et Jus*, núm. 8)

--- *Derecho internacional privado. Jurisprudencia venezolana*, Mérida (Venezuela), Univ. de los Andes, 1967 (Colección *Justitia et Jus*, núm. 17)

FERNANDES, A., *Curso de direito internacional privado*, Río de Janeiro, Ed. Americana, 1971

FERNANDEZ PRIDA, J., *Derecho internacional privado*, Valladolid, Cuesta, 1896

FERNANDEZ ROZAS, J.C. y SANCHEZ LORENZO, S., *Curso de Derecho internacional privado*, Madrid, Civitas, 1991

FERRER CORREIA, A., "Direito internacional privado luso-brasileiro", *Rev. Fac. Dir. Univ. Sao Pablo*, vol. 47, 1952, pp. 80-114

--- *Direito internacional privado*, Coimbra, Bibl. Jur. Atlantida, 1970

FERRER GAMBOA, J., *Derecho internacional privado*, México, Edit. Limusa, 1977

FULGÊNCIO, T., *Direito internacional privado*, 2^a ed., Belo Horizonte, Forense, 1979

GARCIA ALONSO, V.C., "Reformas de 1988 a la legislación civil en materia de Derecho internacional privado", *XII Sem. Nac. D.I.Pr. (Rev. Fac. Der. de México -U.N.A.M.-)*, t. 39, núms., 163-165, pp. 83-96

GARCIA CALDERON K., M., *Derecho internacional privado*, Lima, Univ. Nacional Mayor de San Marcos, 1969

--- *Repertorio de Derecho internacional privado*, Lima, Univ. Nacional Mayor de San Marcos, 1961-1964, 4 tomos y Apéndice bibliográfico

--- *Casos prácticos y legislación de Derecho internacional privado. Material de enseñanza*, Lima, ed. del autor, 1977

GARCIA CHUECOS, H., *Derecho internacional privado venezolano. Notas para exposición de sus principios*, Caracas, Edit. Sur-América, 1932

GARCIA MORENO, V.C., *Derecho conflictual*, México, U.N.A.M. (Instituto de investigaciones jurídicas), 1991

--- "Reformas de 1988 en materia de cooperación procesal internacional", *XII Sem. Nac. D.I.Pr. (Rev. Fac. Der. México -U.N.A.M.-)*, t. 39, núms. 163-165, pp. 345-368

GOLDSCHMIDT, W., *Sistema y filosofía del Derecho internacional privado*, 2ª ed., Buenos Aires, Depalma, 1954

--- *Suma del Derecho internacional privado*, 2ª ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1961

--- *Estudios Iusprivatistas Internacionales*, Rosario (Argentina), Biblioteca de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 1969

--- *Derecho internacional privado*, 6ª ed. al cuidado de M.A. Ciuro Caldani, Buenos Aires, Depalma, 1988

GOMES, O.M., *Leis e normas de direito internacional privado*, 2ª ed., San Pablo, Saraiva, 1969

GONZALEZ CAMPOS, J.D., *Derecho internacional privado. Introducción*, Madrid, U.A.M., 1984

--- y FERNANDEZ ROZAS, J.C., *Derecho internacional privado español. Textos y materiales*, vol. I, 2ª ed., Madrid, 1992

--- y otros, *Derecho internacional privado. Parte especial*, 5ª ed. rev., Madrid, Centro de Estudios Superiores Sociales y Jurídicos Ramón Carande, 1993

GUERRA IÑIGUEZ, D., *Derecho internacional privado*, 2ª ed., Caracas, Grafiunica, t. I, 1978; t. II, 1982

GUZMAN, A., "Derecho internacional privado boliviano. Proceso y formación", *Rev. Der. (Bolivia)*, núms. 48-49, 1965, pp. 66-94

GUZMAN LATORRE, D., *Tratado de Derecho internacional privado*, 2ª ed., Santiago (Chile), Edit. Jurídica de Chile, 1989

--- y MILLAN SIMPFENDÖRFER, M., *Curso de Derecho internacional privado*, Santiago (Chile), Edit. Jurídica de Chile, 1973

HAMILTON, E. y otros, *Solución de conflictos de leyes y jurisdicción en Chile*, Santiago (Chile), 1966

HERRAN MEDINA, A., *Compendio de Derecho internacional privado*, Bogotá, Temis, 1959

HERRERA MENDOZA, L., *Estudios sobre Derecho internacional privado y temas conexos*, Caracas, El Cojo, 1960

KEGEL, G., "The Crisis of Conflict of Laws", *R. des C.*, t. 112, (1964-II), pp. 91-268

--- *Internationales Privatrecht: ein Studienbuch*, 6ª ed., Munich, C.H. Beck, 1987

KELLER, M. y SIEHR, K., *Allgemeine Lehren des internationalen Privatrechts*, Zurich, Schulthess Polygraphischer, 1986

KAHN-FREUND, O., "General Problems of Private International Law", *R. des C.*, t. 143 (1974-III), pp. 139-473

KROPHOLLER, J., *Internationales Privatrecht*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1990

LALIVE, P., "Tendances et méthodes en droit international privé", *R. des C.*, t. 155 (1977-II), pp. 1-424

LARIOS OCHAITA, C., *Manual de Derecho internacional privado*, Guatemala, Ed. Universidad, 1989 (Colección Aula, núm. 26)

LARREA HOLGUIN, J.I., *Manual de Derecho internacional privado ecuatoriano*, 3ª ed., Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 1986

LAURENT, F., *Droit civil international*, t. I, Bruselas, Bruylant, 1880

LAZCANO, C.A., *Derecho internacional privado*, La Plata, Ed. Platense, 1965

LECOMPTE LUNA, A., *Esquema de Derecho internacional privado*, Bogotá, Temis, 1979

LEON STEFFENS, A., *Nuevas normas de Derecho internacional privado. Nociones fundamentales*, Santiago (Chile), Edit. Jurídica de Chile, 1986

LORETO, S., *Curso de direito internacional privado*, Recife, Ed. Universitaria, 1973

LOUSSOUARN, Y., "Cours général de droit international privé", *R. des C.*, t. 139 (1973-II), pp. 269-386

--- y P. BOUREL, *Droit international privé*, 3ª ed., París, Dalloz, 1984

de MAEKELT, T.B., *Material de clase para Derecho internacional privado*, 2ª ed., Caracas, Univ. Central de Venezuela, 1986

MARIN LOPEZ, A., *Derecho internacional privado español. Parte general*, 6ª ed., Granada, 1992

--- *Derecho internacional privado. Parte especial. Derecho civil internacional*, 7ª ed., Granada, 1991

MATOS, J., *Curso de Derecho internacional privado*, 2ª ed., Guatemala, Tip. nacional, 1941

MAURY, J., "Règles générales des conflits de lois", *R. des C.*, t. 57 (1936-III), pp. 329-569

MAYER, P., *Droit international privé*, 4e. ed., París, Montchretien, 1991

MIAJA de la MUELA, A., *Derecho internacional privado*, t. I, 9ª ed. rev., Madrid, Atlas, 1985

MIGUEL ECHEMENDIA, J., *Derecho internacional privado. Parte preliminar, parte general y parte técnica*, La Habana, Universidad, 1983

MÖLLRING, E., *Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile in Südamerika*, Göttingen, 1985

MONROY CABRA, M.G., *Tratado de Derecho internacional privado*, 3ª ed., Bogotá, Temis, 1983

MONROY PAREDES, J.F., *Derecho internacional privado*, vol. 1, Quezaltenango, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1975

MONTIEL ARGÜELLO, A., *Manual de Derecho internacional privado*, Managua, 1974

MONTILLA REY, R., *Apuntes de Derecho internacional privado. Parte General*, Bogotá, Temis, 1982

MUÑOZ MEANY, E., CAMEY HERRERA, J. y HALL LLOREDA, C., *Derecho internacional privado*, Guatemala, Edit. del Ministerio de ed. pública, 1953 (Colección científico-pedagógica, vol. 8)

NEUHAUS, P.H., *Die Grundbegriffe des Internationalen Privatrechts*, 2ª ed., Tubinga, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1976

NOODT TAQUELA, M.B., *Derecho internacional privado. Método de casos. Análisis de fallos. Documentos extranjeros*, Buenos Aires, Astrea, 1992

NUÑEZ VALDIVIA, S., *Derecho internacional privado*, t. I, Arequipa, Univ., 1966

NUSSBAUM, A., *Principios de Derecho internacional privado*, trad., Buenos Aires, 1947

OCTAVIO, R., *Direito internacional privado. Parte geral*, Río de Janeiro, Freitas Bastos, 1942

de ORCHANSKY, B.K., *Manual de Derecho Internacional Privado*, Buenos Aires, Plus Ultra, 1991

ORTIZ MARTIN, G., *El Derecho Internacional Privado en Costa Rica*, San José (Costa Rica), 1969

--- "Derecho internacional privado en Centro América", *Bol. Inst. Centroam. de Der. Comp. (Honduras)*, núm. 9, 1968-1969, pp. 87-95

PARDO, A.J., *Derecho internacional privado. Parte General*, Buenos Aires, Ghersi, 1988

PARRA-ARANGUREN, G., *Monografías selectas de Derecho Internacional Privado*, Caracas, Univ. Central de Venezuela, 1984

--- "General Course of Private International Law: Selected Problems", *R. des C.*, t. 210 (1988-III), pp. 9-244

PEIXOTO, A.S. de S., *Problemas de direito internacional privado*, Manaus, Edições, Governo do Estado do Amazonas, 1966

PEREZ VERA, E. (Dir.), *Derecho internacional privado*, 3ª ed., Madrid, U.N.E.D., 1991

--- *Intereses del tráfico jurídico externo y derecho internacional*, Granada, Univ. de Granada, 1973

PEREZNIETO CASTRO, L., "Consideraciones sobre el Derecho internacional privado en México (durante el siglo pasado a partir de su independencia)", *Bol. Mex. Der. Comp.*, núm. 20, 1974, pp. 113-141

--- *Derecho internacional privado. Notas sobre el principio territorialista y el sistema de conflictos en el Derecho mexicano*, México, U.N.A.M. (Instituto de investigaciones jurídicas), 1977

--- *Derecho Internacional privado*, 5ª ed., México, Harla, 1991

PIOMBO, H.D., *Estructura normativa del Derecho internacional privado*, Buenos Aires, Depalma, 1984 (actualizaciones: a octubre de 1987 y al 1 de febrero de 1991)

PIOTTI, C., *Unidad estructural del Derecho internacional privado*, Buenos Aires, Arayú, 1954

PRUDENCIO COSIO, J., *Curso de Derecho internacional privado*, 3ª ed., La Paz, Juventud, 1985

RABEL, E., *The Conflict of Laws. A Comparative Study*, 2ª ed., Michigan, Ann Arbor, 1958

RAMIREZ NECOCHEA, M., *Curso de Derecho internacional privado chileno*, Santiago (Chile), Conosur, 1990

RAPALLINI, L.E., *Temática de Derecho internacional privado*, La Plata, Lex, 1989

RIGAUX, F., *Derecho internacional privado. Parte general*, trad. de A. Borrás, Madrid, Civitas, 1985

ROCHA, O., *Curso de direito internacional privado*, 4ª ed., Río de Janeiro, Forense, 1986

RODRIGUEZ SERRANO, F., *Introducción al Derecho interncional privado*, San José, Lehmann, 1986

ROMERO del PRADO, V., *Derecho internacional privado*, t. I, Córdoba (Argentina), Assandri, 1961

ROUVIER, J.M., *Derecho internacional privado. Parte general*, 2ª ed., Maracaibo, Universidad de Zulia, 1977

SALAZAR FLOR, C., *Derecho civil internacional*, Quito, Imprenta de la Universidad Central, 1955

SAPENA PASTOR, R., *Derecho internacional privado*, 2ª ed., Montevideo, Ed. de la Plaza, 1980

von SAVIGNY, F.K., *Sistema de Derecho Romano actual*, trad., t. VI (VIII del original), 2ª ed., Madrid, Centro Editorial de Góngora, 1879

von SCHWIND, F., "Aspects et sens du droit internatioanal privé. Cours général de droit international privé", *R. des C.*, t. 187 (1984-IV), pp. 9-144

SILVA ALONSO, R., *Introducción al Derecho internacional privado. Especial referencia al Derecho paraguay y a los Tratados de Montevideo*, Asunción, Emasa, 1966

--- *Derecho Internacional Privado*, t. I, 3ª ed., Asunción, Intercontinental ed., 1989

SIQUEIROS, J.L., "La crisis del Derecho internacional privado en México", *El Foro*, núm. 50, 1965, pp. 41-54

--- "Private International Law in Mexico and the United States: a brief comparative study", *California W.L.R.*, vol. 6, 1969-1970, pp. 257-266

--- *Síntesis del Derecho internacional privado*, 2ª ed., México, U.N.A.M. (Instituto de investigaciones jurídicas), 1971

STORY, J., *Commentaries on the Conflict of Laws, foreign and domestic, in regard to contracts, rights, and remedies*, Boston, Hilliard, Gray & Co., 1834

STRENGER, I., *Curso de direito internacional privado*, Río de Janeiro, Forense, 1977

--- *Direito internacional privado*, vol. I, 2ª ed., San Pablo, Revista dos tribunais, 1991

TENORIO, O., *Lei de introdução ao Código civil brasileiro (decreto-lei n. 4657, de 4 de setembro de 1942)*, 2ª ed., Río de Janeiro, Borsoi, 1955

--- *Direito internacional privado*, 11ª ed., Río de Janeiro, Freitas Bastos, 1976

TOMAS ORTIZ DE LA TORRE, J.A., *Derecho internacional privado*, Madrid, Univ. Complutense (vol. I, 1992 y vol. II, 2ª ed., 1990)

TOVAR GIL, M.C. y TOVAR GIL, J., *Derecho internacional privado*, Lima, Fundación M.J. Bustamante de la Fuente, 1987

TRIGUEROS SARAIVA, E., *Estudios de Derecho internacional privado*, México, U.N.A.M. (Instituto de investigaciones jurídicas), 1980

VALLADÃO, H., *Direito internacional privado*, Río de Janeiro, Freitas Bastos, 1980

--- *Material de Classe de Direito internacional privado*, 13ª ed., Río de Janeiro, Freitas Bastos, 1984

VANDER ELST, R., *Droit international privé belge. Conflits de lois*, Bruselas, Bruylant, 1983

VAZQUEZ PANDO, F.A., *El nuevo Derecho internacional privado mexicano. Introducción y selección de fuentes*, México, Themis, 1990

VERPLAETSE, J., *Derecho internacional privado*, Madrid, Atlas, 1954

VILLAGRAN KRAMER, F., "Síntesis del Derecho internacional privado positivo de Guatemala", *Rev. Univ. San Carlos*, núm. 29, 1954, pp. 7-50

VITTA, E., *Diritto internazionale privato*, Turín, Unione Tipogr., t. I, 1972

--- *Corso de diritto internazionale privato e processuale*, Turín, UTET, 3ª ed., 1987

de YANGÜAS MESSIA, J., *Derecho internacional privado. Parte general*, 3ª ed., Madrid, 1971

ZEBALLOS, E., *Justicia internacional positiva*, Valencia, Sempere, 1911

ZUCHERINO, R.M., *Derecho internacional privado*, La Plata, Lex, 1976

II. PROBLEMAS GENERALES DE LA CODIFICACION DEL DERECHO

ARNAUD, A.-J., *Essai d'analyse structurale du Code civil français, la règle du jeu dans la paix bourgeoise*, París, Pichon & Durand-Auzias, 1973

ASCARELLI, T., "L'idea di codice nel diritto privato e la funzione dell'interpretazione", *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Milán, Giuffrè, 1952

ATIENZA, M., *Introducción al Derecho*, Barcelona, Barcanova, 1985

BADOUIN, J.L., "Réflexions sur la codification comme mode d'expression de la règle du droit", *Unification. Liber Amicorum Jean Georges Sauveplanne*, Deventer, Kluwer, 1984, pp. 17-28

BOBBIO, N., *El problema del positivismo jurídico*, trad., Buenos Aires, Eudeba, 1965

BODENHEIMER, E., *Teoría del Derecho*, trad., 9ª reimp., México, Fondo de Cultura Económica, 1986

--- "Is Codification an Outmoded Form of Legislation?", *A.J.C.L.*, vol. 30 (Supp.), 1982, pp. 15-29

BOULANGER, J., "Sur une controverse allemande suscitée par la codification napoléonienne", *Tul. L. Rev.*, vol. 29, 1954-1955, pp. 180-188

BYDLINSKI, F., "Civil Law Codification and Special Legislation", *Questions of Civil Law Codification*, Budapest, Hungarian Academy of Sciences, 1990, pp. 25-35

CALABRESI, G., "Incentives, Regulation and the Problem of Legal Obsolescence", en M. Cappelletti (ed.), *New Perspectives for a Common Law of Europe*, Florencia, Sijthoff y otras, pp. 291-307

CARRIO, G., "Dworkin y el positivismo jurídico", *Cuadernos de crítica*, núm. 16, 1981

CATTANEO, M., *Iluminismo e legislazione*, Milán, Edizioni di Comunità, 1966

DIEZ-PICAZO, L., *Experiencias jurídicas y teoría del Derecho*, 2ª reimp., Barcelona, Ariel, 1983

--- "Codificación, descodificación y recodificación", *A.D.C.*, t. XLV, 1992, pp. 473-484

de GASPERI, L., "El futuro de la codificación", *Tul. L. Rev.*, vol. 29, 1954-1955, pp. 223-238

HART, H.L.A., *El concepto de Derecho*, trad., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1963

HARTKAMP, A.S., "International Unification and National Codification and Recodification of Civil Law: the Dutch Experience", *Questions of Civil Law Codification*, Budapest, 1990, Institute for Legal and Administrative Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, pp. 67-73

HERNANDEZ GIL, A., *Metodología de la ciencia del derecho*, t. III, Madrid, Gráf. Ugina, 1973

IRTI, N., *L'età della decodificazione*, 3ª ed., Milán, Giuffrè, 1989

--- *La cultura del diritto civile*, Roma, UTET, 1990

--- "I cinquant'anni del codice civile", *Riv. dir. civ.*, vol. XXXVIII, pp. 227-237

ITALIA, V., *Le leggi speciali*, Varese, Giuffrè, 1984

LARENZ, K., *Metodología de la Ciencia del Derecho*, 2ª ed. (trad. de la 4ª ed. alemana), Barcelona-Caracas-México D.F., Ariel, 1980

LUHMANN, N., "L'unité du système juridique", trad., *Arch. ph. dr.*, t. 31, 1986, pp. 163-188

NIBOYET, J.P., "La question d'un nouveau code civil en France", *Tul. L. Rev.*, vol. 29, 1954-1955, pp. 254-268

NOVOA MONREAL, E., *El Derecho como obstáculo al cambio social*, 4ª ed., México D.F., Siglo XXI, 1980

OLIVECRONA, K., *El Derecho como hecho*, trad., Barcelona, Labor, 1980

RIPERT, G., *Le déclin du droit*, París, L.G.D.J., 1949

ROSS, A., *Hacia una ciencia realista del Derecho. Crítica del dualismo en el Derecho*, trad., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1961

SACCO, R., "Codificare: modo superato de legiferare?", *Riv. dir. civ.*, 1983, pp. 117-135

von SAVIGNY, F.K., *De la vocación de nuestra época para la legislación y la ciencia del derecho*, trad., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1977

SÉVE, R., "Système et Code", *Arch. ph. dr.*, t. 31, 1986, pp. 77-84

STONE, F., "A Primer on Codification", *Tul. L. Rev.*, vol. 29, 1954-1955, pp. 302-310

TALLON, D., "Codification et reforme de droit", *Legal Theory. Comparative Law. Studies in Honour of Professor Imre Szabó*, Budapest, Akadémia Kiadó, 1984, pp. 399-418

VARGA, C., *Codification as a Socio-historical Phenomenon*, trad., Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991

VILLEY, M., *La formation de la pensée juridique moderne. Cours d'histoire de la philosophie du droit*, 4^a ed., París, Montchretien, 1975

ZULETA PUCEIRO, E., "Razón y codificación", *A.D.C.*, 1977, pp. 557-590

--- *Teoría del Derecho. Una introducción crítica*, Buenos Aires, Depalma, 1987

ZWEIGERT, K. y PUTTFARKEN, H.-J., "Allgemeines und Besonderes zur Kodifikation", *Mélanges en l'honneur d'Imre Zajtay*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1982, pp. 569-579

III. CODIFICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. Aspectos generales de la codificación internacional y Derecho de los tratados

AGO, R., "La codification du droit international et les problèmes de sa réalisation", *Recueil d'études de droit international en hommage à Paul Guggenheim*, Ginebra, Imprimerie de la Tribune de Genève, 1968, pp. 93-131.

--- "Nouvelles réflexions sur la codification du droit international", *R.G.D.I.P.*, t. 92, 1988, pp. 539-576 (el discurso a partir del cual se elabora este trabajo se reproduce con el título "Riflessioni sulla codificazione del diritto internazionale", en *Comunicazioni e Studi*, vols. 19-20, 1992, pp. 1-28)

BARIATTI, S., *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, Padua, Cedam, 1986

BASDEVANT, J., "La conclusion et la rédaction des traités et des instruments diplomatiques autres que les traités", *R. des C.*, t. 15 (1926-V), pp. 535-643

BASTIDE, S., *Les traités dans la vie internationale. Conclusion et effets*, París, Economica, 1985

BELAUNDE MOREIRA, A., "Las reservas a las convenciones multilaterales", *Rev. Per. Der. Int.*, vol. 14, 1954, pp. 14-57 y 153-221

BONELL, M.J., "International Uniform Law in Practice - Or Where the Real Trouble Begins", *A.J.C.L.*, vol. 38, 1990, pp. 865-888

BOODMAN, M., "The Myth of Harmonization of Laws", *A.J.C.L.*, vol. 39, 1991, pp. 699-715

BRIGGS, H.W., "Reflections on the codification of international law by the International Law Commission and other agencies", *R. des C.*, t. 126 (1969-V), pp. 233-316

CANÇADO TRINIDADE, A.A., "O impacto de tratados e resoluções nas relações internacionais na América Latina", *Rev. Inf. Leg. (Brasília)*, núm. 74, 1982, pp. 159-182

CASTAN TOBEÑAS, J., "Horizontes actuales de la unificación supranacional del Derecho", *R.G.L.J.*, vol. 205, 1958, pp. 389-403

CASTAN VAZQUEZ, J.M^a, "La unificación supranacional del Derecho de familia", *A.D.C.*, 1977, pp. 619-630

CONSTANTINOFF, J., *La codification du droit international et l'unification législative*, París, Duchemin, 1929

DAVID, R., "The International Unification of Private law", *Int. Enc. Comp. L.*, vol. II, cap. 5

--- "La unificación del Derecho privado", *Libro-Homenaje a la Memoria de Roberto Goldschmidt*, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1967, pp. 115-129

DE LA GUARDIA, E. y DELPECH, M., *EL Derecho de los Tratados y la Convención de Viena de 1969*, Buenos Aires, La Ley, 1970

DEMOGUE, R., *L'unification internationale du droit privé*, París, Rousseau, 1927

DHOKALIA, R.P., *The codification of Public International Law*, Manchester, Univ. Press, 1970

DUTOIT, B. y MAJOROS, F., "Le lacis des conflits de conventions en droit privé et leurs solutions possibles", *Rev. crit. dr. int. pr.*, 1984, pp. 565-596

FENWICK, C.G., "Reservations to multilateral treaties", *An. Jur. Interam.*, 1950-1951, pp. 37-47

GONZALEZ CAMPOS, J.D., SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I. y ANDRES SAENZ de SANTAMARIA, M^a P., *Curso de Derecho internacional público*, 5^a ed., Madrid, Univ. Complutense, 1992

GUERRERO, J.G., *La codification du droit international, La Première Conférence (LA HAYE, 13 mars-12 avril 1930)*, París, Pédone, 1930

GUTTERIDGE, H.C., "The Technique of the Unification of Private Law", *B.Y.B.I.L.*, 1939, pp. 37-42

HERRERA MARCANO, L., "Estudio del efecto jurídico de las reservas a los tratados multilaterales", *Rev. Fac. Der. Univ. Central de Venezuela*, núm. 12, 1957, pp. 87-117

KROPHOLLER, J., *Internationales Einheitsrecht. Allgemeine Lehren*, Tubinga, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1975

LAUTERPACHT, H., "Codification and Development of International Law", *A.J.I.L.*, vol. 49, 1955, pp. 16-43

LIMPENS, J., "Les constantes de l'unification du droit privé", *Rev. int. dr. comp.*, 1958, pp. 277-279

LOEWE, R., "Le droit uniforme et son introduction dans les droits nationaux", *International Uniform law in Practice*, Roma - Nueva York, 1988, pp 151-157

MAJOROS, F., "Position moderne des problèmes du droit de traduction international", *Rev. int. dr. comp.*, 1971, pp. 89-112

--- "Le régime de réciprocité de la convention de Vienne et les réserves dans les conventions de La Haye", *Journ. dr. int.*, t. 101, 1974, pp. 73-109

--- "Zur Krize der internationalen Kodifikationspolitik", *Zeitschrift für Rechtspolitik*, vol. 6, 1973, pp. 65-73

--- *Les conventions internationales en an matière de droit privé*, vol. I, París, Pédone, 1976

MARESH, C., *La codification du droit international*, París, Pédone, 1932 (tesis)

MARIN LOPEZ, A., "La unificación del Derecho mercantil internacional", *R.E.D.I.*, vol. XXII, 1969, pp. 131-151

MATTEUCI, M., "Introduction à l'étude systématique du droit uniforme", *R. des C.*, t. 91 (1957-I), pp. 383-443

--- "La evolution en matière d'unification du droit", *Rev. int. dr. comp.*, 1961, pp. 285-291

MOYANO BONILLA, C., *La interpretación de los tratados Internacionales*, Montevideo, 1985

PECOURT GARCIA, E., "La acción normativa de las organizaciones internacionales", *A.D.I.*, 1974, pp. 165-222

QUEL LOPEZ, J., *Las reservas a los tratados internacionales (un examen de la práctica española)*, Bilbao, Univ. del País Vasco, 1991

REMIRO BROTONS, A., *Derecho internacional público*, vol. II (Derecho de los tratados), Madrid, Tecnos, 1987

ROSENNE, S., *Developments in the law of treaties. 1945-1986*, Nueva York, Cambridge University Press, 1989

RUDA, J.M^a, "Reservations to treaties", *R. des C.*, t. 146 (1975-III), pp. 95-218

--- "Efectos jurídicos de las reservas a los tratados multilaterales", *An. Jur. Interam.*, 1982, pp. 1-67

RUDOLF, W., "Posibilidades de la redacción del texto de los tratados internacionales en distintas lenguas", *R.E.D.I.*, vol. 30, 1977, pp. 257-264

SCOTT, J.B., *La Codificación del Derecho Internacional*, La Habana, El Siglo XX, 1924 (conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana el 8 de febrero de 1924)

--- "The gradual and progressive codification of international law", *A.J.I.L.*, vol. 21, 1927, pp. 417-450 = *Rev. Der. Int. (La Habana)*, t. XII, 1927, pp. 19-61.

TALLON, D., "L'harmonisation des règles du droit privé entre pays de droit civil et de common law", *Rev. int. dr. comp.*, núm. 2, 1990, pp. 513-523

TOMUSCHAT, Ch., "Amissibility and legal effects of reservations to multilateral treaties", *ZaöRV*, vol. 27, 1967, pp. 463-482

VARGAS CARREÑO, E., "Aspectos generales, celebración y entrada en vigor de los Tratados. Reservas", *Cuarto Curso C.J.I. -1977-*, Washington, 1977, pp. 151-170

VIEIRA, M.A., "Aproximación de las legislaciones. Aspectos doctrinarios", *Cuadernos de Derecho internacional privado (Montevideo)*, núm. 2, 1979, pp. 119-157

de VISSCHER, C., "La codification du droit international", *R. des C.*, t. 6 (1924-V), pp. 325-455

WEISFLOG, W.E., "Problems of Legal Translation", *Rapports suisses présentés au XIIème Congrès international de droit comparé (Sidney/Melbourne, 18-27 août 1986)*, Zurich, Schulthess Polygraphischer, 1987, pp. 179-218

WERRO, F., "L'harmonisation des règles du droit privé entre pays de droit civil et pays de common law", *Rapports suisses présentés au XIIIème Congrès international de droit comparé (Montreal, 19-24 août 1990)*, Zurich, Schulthess Polygraphischer, 1990, pp. 41-70

2. Aspectos propios del Derecho internacional privado

AGUILAR BENITEZ de LUGO, M., "La cooperación internacional como objetivo del Derecho internacional privado", *Cursos de Derecho internacional de Vitoria -Gasteiz 1991*, pp. 171-225

AGUILAR NAVARRO, M., "Droit international public et droit international privé", *Mélanges offerts à J. Maury*, t. I, París, Dalloz & Sirey, 1960, pp. 3-25

ALVAREZ GONZALEZ, S., *Proyecto docente y de investigación*, inédito, Santiago de Compostela, 1990

ANZILOTTI, D., "La codificazione del diritto internazionale privato", *Opere di Dionisio Anzilotti*, t. III, Padua, Cedam, 1960, pp. 11-71 (discurso leído en el R. Istituto di Scienze Sociali Cesare Alfieri el 12 de noviembre de 1893)

ARMINJON, P. y otros, "Opinions sur la codification du droit international privé", *Bull. Soc. lég. comp.*, 1932, pp. 331-359 y 479-507

ASSER, T.M.C., "De l'effet ou de l'exécution des jugements rendus à l'étranger en matière civil et commerciale", *R.D.I.L.C.*, t. I, 1869, concr. pp. 82-84

--- "Droit international privé et droit uniforme", *R.D.I.L.C.*, t. XII, 1880, pp. 5-22

--- *La codification du droit international privé*, París, Rousseau, 1893

BAAK, J., "La codification doit-elle être universelle? Une distinction nécessaire", *Rev. dr. int. lég. comp.*, 1930, pp. 721 ss.

BALLARINO, T., "Osservazioni sulla codificazione del diritto internazionale privato nell'Europa centro-orientale", *Le droit international à l'heure de sa codification. Etudes en l'honneur de Roberto Ago*, Milán, Giuffrè, 1987, t. IV, pp. 3-24

BARTIN, E., "De l'impossibilité d'arriver a une suppression definitive des conflits de lois", *Journ. dr. int.*, t. 24, 1897, pp. 225-255 y 466-495

BATIFFOL, H., "Codificación y unificación en derecho internacional privado", *Choix d'articles*, París, L.G.D.J., 1976, pp. 125-136

--- "Réflexions sur la coordination des systèmes nationaux", *Choix d'articles*, París, L.G.D.J., 1976, pp. 199-212

BATRES, M.A., "Armonización de las reglas de conflictos de leyes y de jurisdicción de los diferentes grupos regionales de Estados", *Bol. Inst. Centroam. de Der. Comp. (Honduras)*, núms. 1-2, 1962-1963, pp. 19-29

BAUER, H., "Les traités et les règles de droit international privé matériel", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. LV, 1966, pp. 537-574

BOGGIANO, A., "The Continuance of a Legal System in Private International Law", *Conflits et harmonisation. Mélanges en l'honneur d'Alfred E. von Overbeck*, Friburgo, Editions universitaires, 1990, pp. 3-14

BORRAS, A., "La participación de España en la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado", *España y la codificación internacional del Derecho internacional privado*, Madrid, Centro de Estudios Superiores, Sociales y Jurídicos Ramón Carande (en prensa)

BROGGINI, G., "La codification du droit international privé", *Rev. dr. suisse*, núm. 112, 1971, pp. 243-321

BUCHER, A., "La LDIP et les conventions internationales", *Conflits et harmonisation. Mélanges en l'honneur d'Alfred E. von Overbeck*, Friburgo, Editions universitaires, 1990, pp. 265-278

CALVO CARAVACA, A.L., "Las fuentes del Derecho internacional privado", *R.G.D.*, 1986, pp. 5051-5093

CARRILLO SALCEDO, J.A., "Nacionalismo e internacionalismo en Derecho internacional privado español: algunas reflexiones", *Estudios de Derecho internacional público y privado. Homenaje al Profesor Luis Sela Sampil*, t. II, Oviedo, Univ. de Oviedo, 1970, pp. 811-822

--- "Le renouveau du particularisme en droit international privé", *R. des C.*, t. 160 (1978-II), pp.

CASTEL, J.-G., "The Unification of Private International Law Rules in Canada", *Liber Memorialis François Laurent*, Bruselas, E. Story, 1989, pp. 723-734

CIURO CALDANI, M.A., "Derecho Privado de la Integración: Derecho Internacional Privado - Derecho Privado Unificado", *Rev. Der. Int. y Cs. Diplomát. (Rosario-Argentina)*, núms. 43-45, 1973-1976, pp. 95-104

DAVI, A., "La questioni generali del diritto internazionale privato nel progetto di riforma", *Riv. dir. int.*, vol. LXXIII, 1990, pp. 556-638

DE BOER, T.M., "Forty years on: the evolution of postwar private international law in Europe", *Forty years on: the evolution of postwar private international law in Europe: symposium ...*, Deventer, Kluwer, 1990, pp. 1-14

DE NOVA, R., "Recenti sviluppi in diritto internazionale privato", *Diritto internazionale*, XII, 1968, pp. 20-65

DROETTO, A., *Pasquale Stanislao Mancini e la Scuola italiana de diritto internazionale del secolo XIX*, Milán, Giuffrè, 1954

DROZ, G.A.L., "La Conférence de La Haye de droit international privé et les méthodes d'unification du droit: traités internationaux ou lois modèles?", *Rev. int. dr. comp.*, 1961, pp. 507-521

--- "L'harmonisation des règles de conflits de lois et de juridictions dans les groupes régionaux d'Etats", *Rapport généraux au VIe. Congrès de Droit comparé (Hambourg, 1962)*, Bruselas, 1964, pp. 393-433

--- "Les réserves et les facultés dans les Conventions de la Haye de droit international privé", *Rev. cr. dr. int. pr.*, 1969, pp. 381-424

--- "Evolution du rôle des autorités administratives dans les conventions de droit international privé au cours du premier siècle de la Conférence de La Haye", *Etudes offertes à Pierre Bellet*, París, Litec, 1991, pp. 129-147

--- y DYER, A., "International Conventions viewed in terms of the work accomplished by the Hague Conference on Private International Law", *An. Jur. Interam.*, 1984, pp. 223-261

--- PELICHET, M. y DYER, A., "La Conférence de La Haye de droit international privé après la création de son Bureau permanent: Bilan et perspectives", *R. des C.*, t. 168 (1980-III), pp. 123-268

FERRER CORREIA, A., "Les problèmes de codification en droit international privé", *R. des C.*, t. 145 (1975-II), pp. 57-204

FERRER SANCHIS, P.A., "Notas sobre la codificación del Derecho internacional privado y la participación española", *Estudios de Derecho internacional público y privado. Homenaje al profesor Luis Sela Sempil*, vol. II, Oviedo, Univ. de Oviedo, 1970, pp. 823-829

FRANDESCAKIS, Ph., "Droit naturel et droit international privé", *Mélanges offerts à J. Maury*, t. I, París, Dalloz & Sirey, 1960, pp. 113-152

FRANKESTEIN, E., *Projet d'un code européen de droit international privé*, Leyden, E.J. Brill, 1950 (*Bibliotheca Visseriana*, t. XXXIII)

GARCIA VELASCO, I., *Concepción del Derecho internacional privado en el nuevo Código civil portugués*, Salamanca, Univ. de Salamanca, 1971

GIARDINA, A., "Criteri ispiratori e technique di una eventuale riforma", *Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano* (a cura del Consiglio nazionale del notariato), Milán, Giuffrè, 1986, pp. 303-354

GLENN, P., "Unification of Law, Harmonization of Law and Private International Law", *Liber Memorialis François Laurent*, Bruselas, E. Story, 1989, pp. 783-794.

GONZALEZ CAMPOS, J.D., "El Convenio entre España y Francia de 28 de mayo de 1969 sobre reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras", *Estudios de Derecho internacional público y privado. Homenaje al profesor Luis Sela Sempil*, t. II, Oviedo, Univ. de Oviedo, 1970, pp. 933-965

--- "La Revolución de 1868 y la codificación internacional del Derecho internacional privado en Europa", *R.F.D.U.C.M.*, vol. XIII, 1969, pp. 69-112

GRAVESON, R., "Problems of the Hague Conference of Private International Law", *Le droit international privé à l'heure de sa codification. Etudes en l'honneur de Roberto Ago*, t. IV, Milán, Giuffrè, 1987, pp. 125-138

--- "Private International Law: A Century of Unification", *Liber Memorialis François Laurent*, Bruselas, E. Story, 1989, pp. 795-804.

GUTTERIDGE, H.C., *The Codification of Private International Law*, Glasgow, Jackson, 1951

GUTZWILLER, M., "Le développement historique du droit international privé", *R. des C.*, t. 29 (1929-IV), pp. 287-400

--- "Das international privatrecht der Hager Konferenzen: Vorgangenheit und Zukunft", *Ann. suisse de dr. int.*, t. II, 1945, pp. 48-88 (y tres Exkurs, pp. 89-99)

--- "Internationalprivatrecht: Die drei Grossen des 19. Jahrhunderts", *Festschrift Frank Vischer*, Zurich, Schulthess Polygraphischer, 1983, pp. 131-140

HARTKAMP, A.S., "International Unification and National Codification and Recodification of Civil Law: the Dutch Experience", *Questions of Civil Law Codification*, Budapest, 1990, Institute for Legal and Administrative Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, pp. 67-73

HARTWIEG, O. y KORKISCH, F., *Die geheimen Materialien zur Kodifikation des deutschen Internationalen Privatrechts 1881-1896*, Tubinga, Mohr, 1973

van HECKE, G., "Universalisme et particularisme des règles de conflit au XX^e siècle", *Miscellanea Georges van Hecke*, Amberes, Kluwer, 1985

van HOOGSTRAATEN, M.H., "La codification par traités en droit international privé dans le cadre de la Conférence de la Haye", *R. des C.*, t. 122 (1967-III), pp. 337-425.

--- "L'état présent de la Conférence de La Haye", *Libro centenario de I.L.A., The present state of international Law and other essays*, Deventer, Kluwer, 1973, pp. 371 ss.

van HOUTTE, H., "La reciprocité des règles de conflit dans les conventions de La Haye", *Rev. belge dr. int.*, 1991, pp. 491–503

JAYME, E., "Considérations historiques et actuelles sur la codification du droit international privé", *R. des C.*, t. 177 (1982–IV), pp. 9–102

--- "Potere politico e codificazione del diritto internazionale privato da Mancini a Bismarck", *Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi*, Florencia, Olschki, 1982, pp. 1171–1181

JESSURUN d'OLIVEIRA, H.U., "Universalisme ou régionalisme de la Conférence de La Haye", *Rev. cr. dr. int. pr.*, 1966, pp. 347–386

--- "Codification et unification du droit international privé. Problèmes de coexistence", *Unification. Liber Amicorum Jean Georges Sauveplanne*, Deventer, Kluwer, 1984, pp. 117–130

JITTA, J., "L'accession de la Grande-Bretagne, des Etats Unis de l'Amérique du Nord et, en général, des Etats non européens aux traités de La Haye, concernant le droit international privé", *I.L.A. Rep.*, núm. 27, 1912, pp. 322–333

--- "L'accession de la Grande-Bretagne, des Etats du Nord, du Centre et de Sud de l'Amérique et en général des Etats non européens aux traités de La Haye concernant le droit international privé", *I.L.A. Rep.*, núm. 28, 1913, pp. 548–556

KAHN, F., "Gesetzeskollisionen. Ein Beitrag zur Lehre des internationalen Privatrechts", *Iherings Jahrbücher*, vol. 30, 1891, pp. 1–143

KNOEPFLER, F., *Les nouvelles conventions de La Haye de droit international privé. Etude de leurs clauses d'adhésion et de leur rôle de lois-modèles* (tesis), Neuchatel, Imprimerie Centrale, 1970

--- y SCHWEIZER, P., "La nouvelle loi fédérale suisse sur le droit international privé (partie générale)", *Rev. cr. dr. int. pr.*, 1988, pp. 207–236

KOLLEWIJN, R.D., "Degenerazione del principio di nazionalità nel diritto internazionale privato moderno", trad., *Dir. int.*, vol. XIII, 1959, pp. 508–525.

KÖTZ, H., en "Rechtsvereinheitlichung – Nutzen, Kosten, Methoden, Ziele", *RabelsZ*, vol. 50, 1986, pp. 1–17

LAINE, A., "La rédaction du Code civil et le sens de ses dispositions en matière de droit international privé", *Rev. cr. dr. int. pr.*, t. I, 1905, pp. 21–60 y 443–479

van LOON, J.H.A., "Quelques réflexions sur l'unification progressive du droit international privé dans le cadre de la Conférence de La Haye", *Liber Memorialis François Laurent*, Bruselas, Story, 1989, pp. 1133–1149

--- "The Increasing Significance of International Co-operation for the Unification of Private International Law", *Forty Years on: The Evolution of Postwar Private International Law in Europe*, Deventer, Kluwer, 1990, pp. 101-122

LORENZEN, E.G., "Story's Commentaries on the Conflict of Laws - One Hundred Years After", *Harv. L. Rev.*, vol. 48, 1934, pp. 15-38

MAJOROS, F., "A propos du centenaire des résolutions de l'Institut de Droit International sur la codification du droit international privé", *Rev. int. dr. comp.*, t. 26, 1974, pp. 632-638

MAKAROV, A., "Die Haager international privatrechtlichen Abkommen und die Vorbehaltsklausel", *Ius et lex. Festschrift Max Gutzwiller*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1959, pp. 303-324

MALINTOPPI, A., "Les rapports entre droit uniforme et droit international privé", *R. des C.*, t. 166 (1965-III), pp. 5-87

--- "Les relations entre l'unification et l'harmonisation du droit et la technique de l'unification et de l'harmonisation par voie d'accords internationaux", *Ann. UNIDROIT*, 1967-68, t. II, pp. 46 ss.

MANCINI, P.S., "De l'utilité de rendre obligatoires pour tous les Etats, sous la forme d'un ou de plusieurs traités internationaux, un certain nombre de règles générales du droit international privé, pour assurer la décision uniforme des conflits entre les différentes législations civiles et criminelles", *Journ. dr. int.*, t. I, 1874, pp. 221-239 y 285-304

--- "De la nacionalidad como fundamento del Derecho de gentes", trad., en A.E. Pérez Luño (ed.), *Sobre la nacionalidad. Pasquale Stanislao Mancini*, Madrid, Tecnos, 1985

MARIDAKIS, G.S., "Considérations sur l'activité de l'Etat concernant l'énoncé de règles de droit international privé", *Ius et lex. Festschrift Max Gutzwiller*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1959, pp. 253-261

MARIN LOPEZ, A., "Unificación del Derecho privado material y unificación del Derecho internacional privado", *R.D.E.A.*, núm. 18, 1967, pp. 23-41

--- "La Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado y el método de las leyes modelo", *R.D.E.A.*, núm. 24, 1969, pp. 33-48

MATSCHER, F., SIEHR, K. y DELBRÜCK, J., *Multilaterale Staatsverträge erga omnes und deren Inkorporation in nationale IPR-Kodifikationen - Vor- und Nachteile einer solchen Rezeption* (Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, vol. 27), Heidelberg, 1986

MIGLIAZZA, A., "Problemi generali di una nuova codificazione del diritto internazionale privato", *Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano* (a cura del Consiglio nazionale del notariato), Milán, Giuffrè, 1986, pp. 355-401

MOSCONI, F., "La legge regolatrice della capacità delle persone fisiche: dalle proposte di Pasquale Stanislao Mancini alla prassi convenzionale", *Le droit international privé à l'heure de sa codification. Etudes en l'honneur de Roberto Ago*, t. IV, Milán, Giuffrè, 1987, pp. 187-225

MÜLLER-FREIENFELS, W., "Übernationales Ziel und nationale Kodifikation internationalen Privatrechts heute (insbesondere in Österreich und der Schweiz)", *Festschrift Frank Vischer*, Zurich, Schulthess Polygraphischer, 1983, pp. 223-255

NADELMANN, K.H., "The United States and the Hague Conferences on Private International Law", *A.J.C.L.*, vol. 1, 1952, pp. 268-274

--- "Ignored State Interest: The Federal Government and International Efforts to Unify Rules of Private Law", *Univ. of Pennsylvania L.Rev.*, vol. 102, 1953-54, pp. 323-366

--- "Méthodes d'unification du droit international privé. La législation uniforme et les conventions internationales", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. XLVII, 1958, pp. 37-51

--- "Uniform Legislation Versus International Conventions Revisited", *Ann. UNIDROIT*, 1967-68, t. II, pp. 173-195

--- "Mancini's nationality rule and non unified legal systems, Nationality versus domicile", *A.J.C.L.*, vol. 17, 1969, pp. 418-451

--- *Conflict of Laws: International and Interstate, Selected Essays*, La Haya, Martinus Nijhoff, 1972, pp. 49-84

--- "Multilateral Conventions in the conflicts field: An historical Sketch", *N.T.I.R.*, vol. 19, 1972, pp. 107-168

--- "Conflicts between regional and international Work on Unification of rules of choice of law", *Harvard Int. L.J.*, vol. 15, 1974, pp. 213-237

--- "Clouds over international Efforts to unify rules of Conflicts of laws", *Law and Contemporary Problems*, vol. 41, 1977, núm. 2, pp. 54-84

--- y REESE, W.L., "The American Proposal at the Hague Conference on Private International Law to Use the Method of Uniforms Laws", *A.J.C.L.*, vol. 7, 1958, pp. 239-247

NEUHAUS, P.H., "Empfiehl sich eine Kodifizierung des internationalen Privatrechts?", *RabelsZ*, vol. 37, 1973, pp. 453-465

NIBOYET, J.P., "L'universalité des règles de solution des conflits; est-elle réalisable sur la base de la territorialité?", *Rev. cr. dr. int. pr.*, 1950, pp. 509-527

NOLDE, B., "Les étapes historiques de la codification législative du droit international privé", *Rev. cr. dr. int. pr.*, 1927, pp. 361–374

--- "La codification du droit international privé", *R. des C.*, t. 55 (1936), pp. 303–431

NORTH, P.M., "Problems of Codification in a Common Law System", *RabelZ*, vol. 46, 1982, pp. 490–508

NUSSBAUM, A., "Rise and Decline of the Law-of-Nations Doctrine in the Conflict of Laws", *Columbia L. Rev.*, vol. XLII, 1942, pp. 189–206

OFFERHAUS, J., "La Conférence de La Haye de droit international privé: expériences et perspectives", *Ann. suisse dr. int.*, vol. XVI, 1959, pp. 27–52

von OVERBECK, A.E., "Essai sur la délimitation du domaine des conventions de droit international privé", *Ius et lex. Festschrift Max Gutzwiller*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1959, pp. 325–346

--- "Divers aspects de l'unification du droit international privé, spécialement en matière de successions", *R. des C.*, t. 104 (1961–III), pp. 529–633

--- "La coopération internationale dans le domaine de du droit international privé", *Ann. UNIDROIT*, 1965, pp. 45–52

--- "L'application par le juge interne des conventions de droit international privé", *R. des C.*, t. 132 (1971–I), pp. 1–106

--- "Les questions générales du droit international privé à la lumière des codifications et projets récents" (Cours général de droit international privé), *R. des C.*, t. 176 (1982–III), pp. 9–258

--- "Le projet suisse de loi sur le droit international privé – une codification nationale d'inspiration internationale?", *Liber Memorialis François Laurent*, Bruselas, E. Story, 1989, pp. 1181–1197

PARRA-ARANGUREN, G., "La Conferencia de La Haya sobre Derecho internacional privado", *Rev. Fac. Der. Univ. Cat. A. Bello*, núm. 37, 1987, pp. 169–298

PEREZ GIRALDA, A., "La Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado: indicios de una nueva orientación", *R.E.D.I.*, vol. XXXIV, 1982, pp. 139–151

PFUND, P.H., "United States Participation in International Unification of Private Law", *The Int. Lawyer*, vol. 19, 1985, pp. 505–591 (también: *ibid.*, vol. 20, 1986, pp. 623–631; vol. 21, 1987, pp. 1245–1254; y vol. 22, 1988, pp. 1157–1170)

PRADIER FODÉRE, P.L.E., "Des progrès du droit international privé & public", *Journ. dr. int*, t. I, 1874, pp. 112–120.

RIGAUX, F., "L'harmonisation des règles de conflits de lois et de juridiction dans les divers groupes régionaux d'Etats", *Rapports belges au VI^e. Congrès international de droit comparé (Hambourg, 1962)*, Bruxelles, 1962, pp. 153-180

--- "La méthode des conflits de lois dans les codifications et projets de codification de la dernière décennie", *Rev. cr. dr. int. pr.*, 1985, pp. 1-46

--- "Quelques réflexions de nature méthodologique sur la codification du droit international privé en 1984", *Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano* (a cura del Consiglio nazionale del notariato), Milán, Giuffrè, 1986, pp. 403-416

--- "Droit privé matériel et règles de conflit de lois", *Rev. belge dr. int.*, 1991, pp. 385-397

ROGERS, P., "Private International Law", *The Int. Lawyer*, vol. 23, 1989, pp. 207-212

SANTOS ARNAU, L., *Les cláusulas plurilegislativas dels convenis de la Conferència de Dret internacional privat de La Haia*, Barcelona, 1987 (tesis)

SARCEVIC, P., "Global Unification: Problems of Realization", *Liber Memorialis François Laurent*, Bruxelles, E. Story, 1989, pp. 1007-1015

SCHNITZER, A.F. y CHATELAIN, S., "Die Kodifikation des internationalen Privatrechts. Eine rechtsvergleichende Übersicht", *Z.f. Rvgl.*, vol. 25, 1984, pp. 276-307

von SCHWIND, F., "Die Haager Konferenz und die neue Entwicklung des I.P.R. Möglichkeiten und Grenzen", *Liber Amicorum Baron Louis Fredericq*, Gante, Faculté der Rechtsgeleerdheid, 1965, pp. 1113-1123

--- "Problems of Codification of Private International Law", *I.C.L.Q.*, 1968, pp. 428-442

SIEHR, K., "Johann Caspar Bluntschli et le droit conflits dans le Code civil du Canton de Zurich de 1853/55", *Liber Memorialis François Laurent*, Bruxelles, E. Story, 1989, pp. 1017-1038

--- "Codificazione del diritto internazionale privato e convenzioni internazionali", *Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano* (a cura del Consiglio nazionale del notariato), Milán, Giuffrè, 1986, pp. 497-507

SIMON DEPITRE, M., "Codification et règles dans le droit Français des conflits de lois", *Liber Memorialis François Laurent*, Bruxelles, E. Story, 1989, pp. 1039-1051

SILVELA, M., "Codificación del Derecho internacional privado" (discurso), *R.G.L.J.*, t. LV, 1879, pp. 382-395

STRAZNICKY, M., "Les Conférences de droit international privé depuis la fin de la guerre mondiale", *R. des C.*, t. 44 (1933-II), pp. 439-563

STURM, F., "Codification et unification des règles de conflit dans la Suisse du XIXe. siècle", *Liber Memorialis François Laurent*, Bruselas, E. Story, 1989, pp. 1099-1118

TOMAS ORTIZ de la TORRE, J.A., *Las Convenciones de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado (Traducción y reseña histórica)*, Madrid, Univ. Complutense, 1974

VALLADÃO, H., *Lei geral de aplicação das normas jurídicas. Apresentado pelo Haroldo Valladão*, Río de Janeiro, Dep. Imprensa Nacional, 1964

--- "Os Enfoques Universalista e Regionalista no Direito Internacional", *Rev. Fac. Dir. Univ. de Sao Paulo*, vol. 74, 1979, pp. 85-96 y vol. 75, 1980, pp. 29-39 = *Rev. Inf. Leg. (Brasilia)*, núm. 62, 1979, pp. 5-22

VANDER ELST, R., "La loi nationale dans les conventions de La Haye", *Rev. belge dr. int.*, 1991, pp. 398-407

VASSILAKAKIS, E., *Orientations méthodologiques dans les codifications récentes du droit international privé en Europe*, París, L.G.D.J., 1987

VEICOPOULOS, M., "Le problème de l'unification internationale du droit international privé", *Rev. hellén. dr. int.*, vol. 16, 1963, pp. 334-337

VIÑAS FARRÉ, R., *Unificación del Derecho internacional privado (Conferencia de La Haya de D.I.Pr.)*, Barcelona, Bosch, 1978

VISCHER, F., "Das Problem der Kodifikation des schweizerischen internationalen Privatrechts", *Rev. dr. suisse*, núm. 112, 1971, pp. 1-106

VITTA, E., "International Conventions and National Conflicts Systems", *R. des C.*, t. 126 (1969-I), pp. 111-232

--- "Paralelo sviluppo della codificazione interna e internazionale nel diritto internazionale privato", *Diritto Internazionale*, vol. XXIII, 1969, pp.3-32

--- "Per una riforma del diritto internazionale privato", *Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano* (a cura del Consiglio nazionale del notariato), Milán, Giuffrè, 1986, pp. 285-302

VOLKEN, P., *Konventionskonflikte im internationalen Privatrecht*, Zurich, Schulthess Polygraphischer, 1977 (Schweizer Studien zum Internationalen Recht, vol. 7)

VV.AA., *La codification du droit international privé* (opinions de MM. Arminjon, Caloyanni, Cassin, Govare, Grunebaum-Ballin, Le Fur, Lepaulle, Lévy-Ullmann, Niboyet, Ripert), París, L.G.D.J., 1932

WESTENBERG, J.W., "The quest for unification", *Forty Years on: The Evolution of Postwar Private International Law in Europe*, Deventer, Kluwer, 1990, pp. 195-217

ZEBALLOS, E., "La codification du droit international privé aux Conférences de La Haye (1893-1904)", *Bull. arg. dr. int. pr.*, VI, 1903-1905, pp. 377-392 y 473-523

ZWEIGERT, K., "Die dritte Schule im internationalen Privatrecht", *Festschrift für Leo Raape*, Hamburgo, Rechts und Staatswissenschaftlicher, 1948, pp. 35-52

IV. CODIFICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN AMÉRICA. ASPECTOS GENERALES Y TEMAS CONEXOS

ALVAREZ, A., *Le droit international américain*, París, Pédone, 1910

--- *La codification du droit international (ses tendances - ses bases)*, París, Pédone, 1912

--- *Le droit international de l'avenir*, Washington, Instituto americano de Derecho internacional, 1916

--- *La reconstruction du droit international et sa codification en Amérique*, París, Pédone, 1928

--- *Le panaméricanisme et la VI^e Conférence panaméricaine*, París, Pédone, 1928

--- *Le continent américain et la codification du droit international. Une nouvelle 'école' du droit de gens*, París, Les éditions internationales, 1938

--- *Le droit international nouveau dans ses rapports avec la vie actuelle des peuples*, París, Pédone, 1959

BALLARINO, T., "Il progetto brasiliano di diritto internazionale privato", *Dir. int.*, 1964, pp. 348-350

BARCIA TRELLES, C., "La doctrine de Monroe dans son développement historique, particulièrement en ce qui concerne les relations interaméricaines", *R. des C.*, t. 32 (1930-II), pp. 397-603

BARNES, W.S., "Legal issues in inter-american relations", *Texas Int. L.J.*, vol. XI, 1976, pp. 63-74

BARREDA LAOS, F., "Teoría y práctica del panamericanismo", *Rev. Col. Abog. Buenos Aires*, t. XVIII, 1940, pp. 81-93

BARRIGA LEDESMA, A., *Bolívar y el Derecho internacional americano*, Quito, 1983

BASDEVANT, J., "La Conférence de Rio-de-Janeiro de 1906 et l'Union Internationale des Républiques Américaines", *Rev. gén. dr. int. pub.*, t. XV, 1908, pp. 209-270

BAUS, M., "Der neue Código civil von Paraguay und seine Kollisionsnormen", *RechtsZ*, vol. 51, 1987, pp. 440-453 (texto: 454-465)

BELLO, A., *Principios de derecho de gentes*, Santiago, Imprenta de la opinión, 1932

BOGGIANO, A., "The experience of Latin American States", *International Uniform Law in Practice*, Roma-Nueva York, Unidroit-Oceana, 1988, pp. 28-47

--- "The Contribution of the Hague Conference to the Development of Private International Law in Latin America. Universality and *Genius Loci*", *R. des C.* (en prensa)

BOLívar, S., *Obras Escogidas*, vol. II, Nueva York, 1951

BRICEÑO BERRU, E., "Sinopsis histórica de la codificación del Derecho internacional privado civil y procesal civil en América Latina", *A.P.D.V.*, 1981, pp. 177-215

--- *La codificación del Derecho internacional privado en América Latina*, Barcelona, 1986 (tesis)

--- "Reflexiones sobre la codificación del Derecho internacional privado en América Latina", *Studi in memoria di Mario Giuliano*, Padua, Cedam, 1989, pp. 157-192.

BUCHELI MERA, R., "El orden jurídico internacional, el orden jurídico interno y el Derecho internacional privado", *Bol. Inst. Der. Comp. (Ecuador)*, núm. 19, 1972, pp. 120-134

de BUSTAMANTE y SIRVEN, A.S., "Los progresos de la codificación bajo los auspicios de la Unión Panamericana", *Rev. Der. Int. (La Habana)*, t. IX, 1926, pp. 187-203

--- *La Nacionalidad y el Domicilio*, La Habana, El Siglo XX, 1927 (versión francesa en *Rev. cr. dr. int. pr.*, 1927, pp. 375-401)

--- "Los sistemas americanos sobre el conflicto de leyes y su conciliación", *Rev. Der. Int. (La Habana)*, t. XV, 1929, pp. 28-45

CAICEDO CASTILLA, J.J., "La Tercera reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos", *R.E.D.I.*, vol. IX, 1956, pp. 267-280

--- *La obra del Comité Jurídico Interamericano*, Río de Janeiro, C.J.I., 1966

--- *El Derecho Internacional en el Sistema Interamericano*, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1970

--- "Evolución y porvenir del Derecho Internacional Privado en el continente americano", *R.E.D.I.*, vol. XXV, 1972, pp. 93-109

--- "La contribución de América al desarrollo del Derecho Internacional: realizaciones del Comité Jurídico Interamericano", *Tercer Curso C.J.I. -1976-*, pp. 13-42

CANYES, M.S., "La codificación del Derecho internacional en América", *An. Jur. Interam.*, 1948, pp. 40-60

CARL, B.M., "Unification of Private International Law in the Western Hemisphere", *Liber Memorialis François Laurent*, Bruselas, E. Story, 1989, pp. 707-722

CAROZO, E., "En torno a la nueva regulación internacional del Código General del Proceso", *Rev. Urug. Der. Proc.*, t. XV, 1990, pp. 48-59

CIURO CALDANI, M.A., "América Latina en la encrucijada del valor", *Investigación y docencia*, núm. 14, 1989, pp. 3-7

"Conmemoración del Congreso Americano de 1864", *Rev. Per. Der. Int.*, núm. 66, t. XXV, 1965-1966, pp. 3-41 (varios discursos)

COLOMBO, L.A., "La IIª reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos. Temas tratados y resoluciones adoptadas", *La Ley (Argentina)*, t. 70, 1953, pp. 736-746

COLOMBO IMAZ de PUIG, D. y PUIG, J.C., "El fracaso de la iniciativa latinoamericana en el panamericanismo. Ensayo de interpretación socio-política", *An. Inst. Cienc. Pol.*, t. II, 1969-70, pp. 43-47

--- "El movimiento por la unidad interamericana. Ensayo de sistematización en base al método estructural", *R.D.I. y Cs. Dip. (Rosario)*, núm. 37-38, 1970, pp. 5-36

COUTURE, E.J., "El porvenir de la codificación y del 'common law' en el continente americano", *Rev. Jca. (Perú)*, núm. 1, 1950, pp. 20-38

DAHL, E., "Argentina: Draft Code of Private International Law", *I.L.M.*, vol. 24, 1985, pp. 269-272 (texto: 272-291)

DAVALOS FERNANDEZ, R., "Sistemas del Derecho internacional privado", *Rev. Jca. (Cuba)*, núm. 25, 1989, pp. 70-119

DIAZ CISNEROS, C., "La codificación del Derecho internacional en América", *Rev. Col. Abog. Buenos Aires*, t. XIV, 1936, pp. 429-459

Documentos de la organización de los Estados Americanos sobre Derecho internacional privado (Doc. OEA/Ser. Q.II.9. CIJ/15), Washington, D.C., 1971

DREIER, J.C., *The Organization of American States and the Hemisphere Crisis*, Nueva York, Harper & Row, 1962

ESCOBAR, A.C., "Cincuentenario de la Unión Panamericana", *Rev. Col. Abog. Buenos Aires*, t. XVIII, 1940, pp. 67-79

FENWICK, Ch.G., "The Inter-American Juridical Committee", *A.J.I.L.*, vol. 37, 1943, pp. 5-29

--- "Second Meeting of the Inter-American Council of Jurists", *A.J.I.L.*, vol. 47, 1953, pp. 292-296 y 698-701

--- *The Organization of American States. The Inter-American Regional System*, Washington, Kaufmann Printing, 1963

FABRES, J.C., "Le droit international privé dans la législation du Chili", *Journ. dr. int.*, t. XIV, 1887, pp. 133-143

FERME, G. y FERME, E.L., "La ciencia del Derecho internacional privado argentino tras una de sus más caras metas: la codificación", t. 154 - Sec. Doctrina, pp. 1033-1043

FERNANDEZ ARROYO, D.P., "La revisión del 'Proyecto Goldschmidt' de Código de D.I.Pr. para la República Argentina", *R.E.D.I.*, vol. XLII, 1990, pp. 714-717

--- "L'influence des conventions internationales sur l'actualisation du droit international privé: le cas latino-américain", *Perméabilité des ordres juridiques (Rapports présentés à l'occasion du colloque-anniversaire de l'Institut suisse de droit comparé)*, Zurich, Schulthess Polygraphischer, 1992, pp. 217-234

FERNANDEZ-SHAW, F., *La Organización de los Estados Americanos (O.E.A.)*, 2ª ed., Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1963

de GALINDEZ, J., *Principales conflictos de leyes en la América actual*, Buenos Aires, Edit. Vasca Ekin, 1945

GALLARDO, R., *La solution des conflits de lois dans les pays de l'Amérique Latine. Divorce, séparation de corps et nullité du mariage*, París, L.G.D.J., 1956

--- *Las constituciones de la República Federal de Centro-América*, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1958

--- "La ley del domicilio: punto de conexión admirable en el Derecho Internacional Privado Latinoamericano", *Inter-Amer. L. Rev.*, vol. 2, 1960, pp. 15-59

GARAU SOBRINO, F., "El reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales, transacciones, laudos arbitrales y documentos con fuerza ejecutiva através del nuevo convenio bilateral hispano brasileño sobre asistencia judicial", *R.E.D.I.*, vol. XLIII, 1991, pp. 581-584

GARCIA-AMADOR, F.V., "Las doctrinas latinoamericanas y las propuestas actuales para revisar el Derecho internacional", *Temas de Derecho internacional en homenaje a Frida M. Pflirter de Armas Barea*, Buenos Aires, Fundación del Centro de Estudios Internacionales, 1989, pp. 257-269

GARCIA BAUER, C., *Universalismo y panamericanismo*, Guatemala, Edit. Universitaria, 1968

--- "Principios fundamentales del panamericanismo", *An. Jur. Interam.*, 1986, pp. 65-95

GARCIA CALDERON K., M., "El Congreso americano de jurisconsultos de Lima de 1877", *Rev. Per. Der. Int.*, t. 31, núms. 72-73, 1976-79, pp. 32-48

GARCIA VELASCO, I., "EL sistema de Derecho internacional privado de la República de Cuba", *R.E.D.I.*, vol. XLI, 1989, pp. 669-673 (textos: 673-675)

GARRO, A., "Peru: Private International Law in New Civil Code of 1984", *I.L.M.*, vol. 24, 1985, pp. 997-1001 (texto: 1002-1014)

--- "Shaping the Content of a Basic Course on Latin American Legal Systems", *Inter-Amer. L. Rev.*, vol. 19, 1988, pp. 595-616

--- "Unification and Harmonization of Private Law in Latin America: Background, Trends and Perspectives", *Perméabilité des ordres juridiques (Rapports présentés à l'occasion du colloque-anniversaire de l'Institut suisse de droit comparé)*, Zurich, Schulthess Polygraphischer, 1992, pp. 235-264

--- "Armonización y unificación del Derecho Privado en América Latina: esfuerzos, tendencias y realidades", *España y la codificación internacional del Derecho internacional privado*, Madrid, Centro de Estudios Superiores, Sociales y Jurídicos Ramón Carande (en prensa)

GOLDSCHMIDT, W., "Codificación del Derecho internacional privado argentino (Reformas requeridas por la Constitución Nacional y reformas convenientes aconsejadas por la vida y la ciencia)", *R.E.D.I.*, vol. V, 1952, pp. 499-528

--- "El Tercer Congreso nacional de Derecho civil y el Derecho internacional privado", *R.D.I. y Cs. Dip. (Rosario)*, núms. 19-20, 1961, pp. 75-85

--- "Avances de la extraterritorialidad de la ley en el pensamiento jurídico iberoamericano", *R.E.D.I.*, vol. XVII, 1964, pp. 335-343

--- "Derecho internacional privado latinoamericano", *La Ley (Argentina)*, t. 151, 1973, pp. 1087-1113 (versión francesa abreviada en *Journ. dr. int.*, t. 100, 1973, pp. 65-93)

GONZALEZ, F., *La reconnaissance et l'exécution des jugements civils en Amérique Latine: étude et comparaison des systèmes positifs en vue de l'élaboration d'une nouvelle convention multilatérale*, Zurich, 1979 (tesis)

GONZALEZ NIÑO, I., *Simón Bolívar, Precursor del Derecho Internacional Americano*, Bogotá, 1985

GUANI, A., "La solidarité internationale dans l'Amérique latine", *R. des C.*, t. 8 (1925-III), pp. 203-339

HERBERT, R., *Del Congreso de Lima a la CIDIP-III. El Derecho internacional privado en América Latina (1878-1984)*, Saarbrücken, Europa-Institut, 1984

HERRAN MEDINA, A., "Las normas generales de Derecho internacional privado en la legislación colombiana", *Multitudo Legum. Ius Unum. Mélanges e l'honneur de Wilhelm Wengler zu seinen 65. Geburtstag*, t. II, Berlín, *Inter Recht*, 1973, pp. 369-382

HERRERA BAEZ, P., "Nota explicativa", en *Compilación Trujillo de Tratados y Convenciones de la República Dominicana*, vol. VI, Ciudad Trujillo (Santo Domingo), Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, 1958

INSTITUTO INTERAMERICANO de ESTUDIOS JURIDICOS INTERNACIONALES, *El Sistema Interamericano. Estudio sobre su desarrollo y fortalecimiento*, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1966

JARAMILLO VELEZ, L., "El Derecho internacional privado en América", *La Justicia (México)*, t. XXVII, núm. 449, 1967, pp. 60-63

JIMENEZ de ARECHAGA, E., "L'évolution du régionalisme interaméricaine", *Régionalisme et universalisme dans le droit international contemporain*, París, Pédone, pp. 45-60

KELBAUGH, P.R., "Developments in the field of Inter-American organizations", *An. Jur. Interam.*, 1949, pp. 63-71

KOS-RABCEWICZ-ZUBKOWSKI, L., "Les principaux organes de l'unification du droit et leur mission dans l'hémisphère américain", *Problèmes de droit contemporain. Mélanges Louis Baudouin*, Montreal, Les Presses de l'Université, 1974, pp. 319-347

KUHN, A.K., "The scope of private international law in Latin-American countries compared with the conflict of laws in the United States", *Tul. L. Rev.*, vol. 15, 1940-1941, pp. 394-400

--- "Inter-American collaboration in law and legislation", *A.J.I.L.*, vol. 37, 1943, pp. 644-648

KUTZNER, G., *Die Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS)*, Hamburgo, Hansischer Gildenverlag. Hoachim Heitmann & Co., 1970

LARREA HOLGUIN, J.I., "El sistema ecuatoriano de Derecho internacional privado", *Rev. Der. (Ecuador)*, núm. 38, 1975, pp. 17-26

LARSEN, J., "Enforcement of Foreign Judgments in Latin America: Trends and Individual Differences", *Tex. Int. L.J.*, vol. 17, 1982, núm. 2, pp. 213-227

LEGER, A.N., *Le droit international privé en Amérique, Puerto Príncipe, A.A. Heraux, 1929*

LIÉVANO AGUIRRE, I., *Bolívar*, Caracas, 1988

LOCKEY, J.B., "The Meaning on Pan-Americanism", *A.J.I.L.*, vol. 19, 1925, pp. 104-117

--- "Pan-Americanism and Imperialism", *A.J.I.L.*, vol. 32, 1938, pp. 233-243

LORENZEN, E.G., "Uniformity between Latin America and the United States in the rules of private international law relating to commercial contracts", *Tul. L. Rev.*, vol. 15, 1940-1941, pp. 165-176

MACKENZIE, M., *Los ideales de Bolívar en el Derecho internacional americano*, Bogotá, Imprenta Nacional, 1955

de MAEKELT, T.B., "Nacionalidad y domicilio en el Derecho internacional privado", *Rev. Fac. Der. Univ. Central de Venezuela*, núm. 23, 1962, pp. 439-453

--- "Evolución del Derecho internacional privado en el Sistema Interamericano", *Octavo Curso C.J.I. -1981-*, pp. 321-348

--- "El método comparado y el Derecho internacional privado venezolano", Ponencias venezolanas al X Congreso internacional de Derecho comparado (Budapest-Hungría), Caracas, Univ. Central de Venezuela, 1978, pp. 75-102

--- "Tribunales especiales en materia de Derecho internacional privado", en F. Orrego Vicuña y J. Irigoin Barrenne (dirs.), *Perspectivas del Derecho internacional contemporáneo (Experiencias y visión de América Latina)*, vol. 3, Santiago (Chile), Instituto de Estudios Internacionales, 1981, pp. 156-166

--- *Normas Generales de Derecho Internacional Privado en América*, Caracas, Univ. Central de Venezuela, 1984 ("General Rules of Private International Law in the Americas. New Approach", *R. des C.*, t. 177 (1982-IV), pp. 193-379)

MAISCH von HUMBOLDT, L., "Posibilidad de uniformar los sistemas de Derecho internacional privado de la Comunidad hispano-luso-americana", *Rev. Der. y C. Pol. (Lima)*, vol. 34, 1970, pp. 421-425

MARTINEZ, R.A., *De Bolívar a Dulles, México*, 1959

MASUR, G., *Simón Bolívar*, Caracas, 1987

MATOS OCHOA, S., en *El Panamericanismo a luz del Derecho internacional*, Caracas, 1980

MATTEO, V., SOLARI, M. y HERBERT, R., "Dutch Threads in a Uruguayan Tapestry", *N.I.L.R.*, vol. XXXIX, 1992, pp. 209-227

MENICOCCHI, A., "Werner Goldschmidt y la codificación del Derecho internacional privado", *Investigación y docencia*, núm. 15, 1990, pp. 23-33

MIRALLES SANGRO, P.-P., "El reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales y la cooperación jurídica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derecho internacional privado: la perspectiva española", *B.F.D.U.N.E.D.*, 2ª ép., núm. 1, 1992, pp. 145-169

MONTIEL ARGÜELLO, A., "Unificación del Derecho internacional privado en América", *Comp. Jur. Rev.*, vol. 4, 1967, pp. 13-18

MORENO QUINTANA, L. *El sistema internacional americano*, t. I, Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1925

MUCI ABRAHAM, J.M., *Los conflictos de leyes y la codificación colectiva en América*, Caracas, Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Univ. Central de Venezuela, 1955

NAVARRETE B., J., "El Derecho del domicilio como ley personal en el Derecho internacional privado chileno", *Rev. Ch. Der.*, vol. 5, 1978, pp. 216-227

NEUHAUS, P.H., "La actualidad de la codificación del Derecho internacional privado", *Libro homenaje a la memoria de Joaquín Sánchez Covisa*, Caracas, Univ. Central de Venezuela, 1975, pp. 245-251

OCTAVIO, R., "Conflict of Laws in Brazil", *Yale L.J.*, núm. 28, 1919, pp. 463-477

--- "L'Amérique et la codification du droit international privé", *Rev. dr. int. pr.*, t. 25, 1930, pp. 633-655

OPERTTI BADAN, D., "Estado actual del Derecho internacional privado en el Sistema Interamericano", *Noveno Curso C.J.I. -1982-*, pp. 309-341

--- "En el centenario del Sistema Interamericano. Sus principales aportes al desarrollo jurídico regional y universal", *Anales del Foro (Montevideo)*, vol. 8, núms. 98-99, 1991, pp. 9-18

OSPINA FRANCO, A., *El proceso de desarrollo del Derecho internacional privado iberoamericano. Sus rasgos esenciales*, Madrid, 1964 (tesis)

PANEBIANCO, M., "Principi di diritto internazionale privato in Teixeira de Freitas", *Augusto Teixeira de Freitas e il diritto latinoamericano (Atti del Congresso internazionale del centenario di Augusto Teixeira de Freitas -Roma, 12/14 dicembre 1983-)*, Padua, Cedam, 1988, pp. 213-218

PARRA-ARANGUREN, G., "Los antecedentes de la codificación civil y el Derecho internacional privado venezolano (1810-1862)", *Rev. Fac. Der. Univ. Cat. A. Bello*, vol. 2, 1965-1966, pp. 78-143

--- "El tratamiento procesal del Derecho extranjero en los países de la América del Sur", *La Justicia (México)*, t. XXXI, núm. 509, 1972, pp. 55-59

--- *Codificación del Derecho internacional privado en América, Caracas, Univ. Central de Venezuela, 1982*

--- "Recent Developments in Private International Law in the Americas", *N.I.L.R.*, vol. XXXIX, 1992, pp. 229-241

PECOURT, E. y ESPLUGUES, C., "Notas sobre la reforma del sistema mexicano de Derecho internacional privado", *R.E.D.I.*, vol. XLII, 1990, pp. 723-726 (textos: 726-733)

PEREZNIETO CASTRO, L., "La tradition territorialiste en droit international privé dans les pays d'Amérique latine", *R. des C.*, t. 190 (1985-I), pp. 271-400

--- "Some Aspects Concerning the Movement for Development of Private International Law in the Americas Through Multilateral Conventions", *N.I.L.R.*, vol. XXXIX, 1992, pp. 243-266

PESCIO, V., "Les règles de droit international privé dans le code chilien", *R.D.I.D.C.*, 1963, pp. 181-191

PLANAS SUAREZ, S., "L'extension de la doctrine de Monroe", *R. des C.*, t. 5 (1924-IV), pp. 271-365

POCAR, F., "Considerazioni sull'attualità del pensiero internazionalprivatistico di Augusto Teixeira de Freitas", *Augusto Teixeira de Freitas e il diritto latinoamericano (Atti del Congresso internazionale del centenario di Augusto Teixeira de Freitas -Roma, 12/14 dicembre 1983-)*, Padua, Cedam, 1988, pp. 173-177

PORTELA, G., "Fórmulas para conciliar en América el principio del domicilio y el de la nacionalidad", *Rev. Der. Int. (La Habana)*, t. V, 1924, pp. 301-310

POTTER, P.B., "Inhibitions upon the treaty-making power of the United States", *A.J.I.L.*, vol. 28, 1934, pp. 456-474

PRADIER-FODÉRE, P.L.E., "Notice sur les premières conférences du Congrès des Juristes Américains tenu à Lima", *Bull. Soc. Lég. Comp.*, núm. 7, 1878, pp. 524-533

PRINCE, A., *Le congrès des trois Amériques 1889-1890*, París, 1891

PUCEIRO RIPOLL, R., PEIRANO BASSO, J. y OPERTTI BADAN, D., "Las reformas a la Carta de la O.E.A. en el Protocolo de Cartagena de Indias", *Rev. Fac. Der. Cs. Soc. (Montevideo)*, t. XXVIII, 1987, pp. 25-57

PUIG, J.C., *Les principes du Droit international public américain*, París, Pédone, 1954

--- y COLOMBO IMAZ, D., "Panamericanismo 'por inercia': 1889-1910", *Rev. D.I. y Cs. Dipl. (Rosario)*, núms. 41-42, 1972, pp. 155-167

QUINTANA, J.J., "The Latin American Contribution to International Adjudication: The Case of the International Court of Justice", *N.I.L.R.*, vol. XXXIX, 1992, pp. 127-154

RAMIREZ NECOCHEA, M., "La ley personal", *Rev. Der. Jur. Cs. Soc.*, t. 63, 1966, pp. 216-221

RANGEL, V.M., "La procédure de conclusion des accords internationaux au Brésil", *Rev. Fac. Dir. Univ. Sao Paulo*, vol. 55, 1960, pp. 253-271

REEVES, J.S., "The Montevideo Resolution on Codification", *A.J.I.L.*, vol. 28, 1934, pp. 319-321

REMIRO BROTONS, A., *La hegemonía norteamericana, factor de crisis en la O.E.A.*, Bolonia, Studia Albornotiana-Publicaciones del Real Colegio de España, 1972

--- *Ejecución de sentencias extranjeras en España*, Madrid, Tecnos, 1974

RITCH, J., "Codification of the Private International Law of the American countries", *Inter-Amer. L. Rev.*, vol. 7, 1965, pp. 419-442

ROSALES SILVA, M., "Las reformas y adiciones al Código civil para el Distrito Federal ante el Derecho convencional vigente", *XII Seminario Nacional de Derecho internacional privado (1988)* - *Rev. Fac. Der. U.N.A.M.*, t. 39, núms. 163-165, 1989, pp. 239-251

von SACHSEN-GESSAPHE, K.A., "Neues IPR in Mexico", *IPRax*, 1989-2, pp. 111-119

SAMTLEBEN, J., "Der Territorialitätsgrundsatz im Internationalen Privatrecht Lateinamerikas", *RabelsZ*, vol. 30, 1971, pp. 72-106

--- "El territorialismo de leyes en América Latina", *Primer Seminario Nacional de Derecho internacional privado*, México, U.N.A.M., 1979, pp. 171-209

--- "La aplicación de la ley extranjera en América Latina y en la República Federal de Alemania", *Primer Seminario Nacional de Derecho internacional privado*, México, U.N.A.M., 1979, pp. 211-247

--- "La relación entre Derecho internacional público y Derecho internacional privado en Andrés Bello", *R.E.D.I.*, vol. XXXIV, 1982, pp. 399-408

--- *Derecho internacional privado en América Latina. Teoría y práctica del Código Bustamante*, trad., Buenos Aires, Depalma, 1983

--- "Neues Internationales Privatrecht in Peru", *RabelsZ*, vol. 49, 1985, pp. 486-521 (texto: 522-543)

--- "Menschheitsglück und Gesetzgebungsexport. Zu Jeremy Bentham's Wirkung in Lateinamerika", *RabelsZ*, vol. 50, 1986, pp. 451-482

von SCHWIND, F., "Disposiciones generales del proyecto venezolano y recientes tendencias del Derecho internacional privado", *Libro Homenaje a la Memoria de Roberto Goldschmidt*, Caracas, Univ. Central de Venezuela, 1967, pp. 693-702

SCOTT, J.B., "Creación de un Tribunal Permanente Interamericano de Justicia", *Rev. Der. Int. (La Habana)*, t. XXI, 1932, pp. 97-146 (con varios anexos)

SEIJAS, R.F., *El Derecho internacional hispano-americano (público y privado)*, Caracas, 1884

SEPULVEDA, C., *El Sistema Interamericano. Génesis, integración, decadencia*, 2ª ed., México, Porrúa, 1974

SIQUEIROS, J.L., "La codificación del Derecho internacional privado en el continente americano", *Jurídica (México)*, núm. 14, 1982, pp. 235-251

Sistema interamericano a través de tratados, convenciones y otros documentos (compilación anotada por F.V. García-Amador, vol. I, Washington, D.C., Secretaría General O.E.A., 1981

SMITH, J.C., "Anteproyecto de Ley Nacional de Derecho internacional privado", *La Ley (Argentina)*, t. 1976-B, pp. 484-507

SOLER, R. y RODRIGUEZ PATIÑO, R.D., "Proyectos de unificación hispanoamericana durante el siglo XIX", *An. Der. (Panamá)*, núm. 14, 1985, pp. 91-120

SOMERVILLE SENN, H., *Uniformidad del Derecho internacional privado convencional americano*, Santiago (Chile), 1965

STOETZER, O.C., *Panamerika. Idee und Wirklichkeit. Die Organisation der Amerikanischen Staaten*, Hamburgo, 1964

TELLECHEA BERGMAN, E., *Derecho internacional privado y Derecho procesal internacional*, Montevideo, A.M. Fernández, 1982

--- "Libro II, Título X del Código del Proceso, "Normas procesales internacionales". Una nueva regulación del Derecho internacional privado procesal de la República", *Rev. Urug. Der. Proc.*, t. XIII, 1988, pp. 528-550

THOMAS, A.W. y THOMAS Jr., A.J., *La Organización de los Estados Americanos*, trad., México, Uteha, 1968

ULLOA, A., *Congresos Americanos de Lima. Recopilación de Documentos*, t. II, Lima, Archivo Diplomático del Perú, 1938

URIBE, A.J., *La unión interparlamentaria y los progresos del Derecho internacional. El Centenario del Primer Congreso Panamericano*, Bogotá, 1926

URIBE VARGAS, D., *Panamericanismo Democrático. Bases para una transformación del Sistema Continental*, Bogotá, Ed. Nuevo Signo, 1958

URRUTIA, F.J., "La codification du droit international en Amérique", *R. des C.*, t. 22 (1928-II), pp. 81-236

VALLADÃO, H., "Le droit international privé des États Américains", *R. des C.*, t. 81 (1952-II), pp. 1-115

--- "The Influence of Joseph Story on Latin American Rules of Conflict of Laws", *A.J.C.L.*, vol. 3, 1954, pp 27 ss.

--- "Actualisation et spécialisation des normes de droit international privé des États Américains", *G.Y.I.L.*, vol. 21, 1978, pp. 335-350

--- "Contribuição da legislação nacional para a solução dos conflitos de leis na América", *Sexto Curso C.J.I. -1979-*, pp. 79 ss.

VAZQUEZ PANDO, F.A., "Comentarios sobre el nuevo Derecho internacional privado mexicano", *XII Seminario Nacional de Derecho internacional privado (1988) - Rev. Fac. Der. U.N.A.M.*, t. 39, núms. 163-165, 1989, pp. 15-81

--- "New Trends in Mexican Private International Law", *The Int. Lawyer*, vol. 23, 1989, pp. 995-1008

VESCOVI, E. y VESCOVI, E., "Hacia la integración institucional: evolución del derecho internacional privado y comunitario en latinoamérica", *La Ley (Argentina)*, 1987-E, pp. 1087-1093

VIEIRA, M.A., "La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y el derecho privado internacional", *Anuario I.H.L.A.D.I.*, núm. 2, 1963, pp. 176-186

--- "La codificación del Derecho internacional privado en el continente americano, antes y después de Panamá", *ibid.*, núm. 5, 1979, pp. 261-280

--- "Le droit international privé dans le développement de l'intégration latinoaméricaine", *R. des C.*, t. 130 (1970-III), pp. 350-453

--- "La codificación del Derecho internacional privado en América", *Décimosexto Curso C.J.I. -1989-*, pp. 96-102

--- "La codificación del Derecho internacional privado en el continente americano. Evolución histórico-jurídica", *Rev. Fac. (Montevideo)*, vol. 32, núms. 1-2, 1991, pp. 67-81

VILLACRES MOSCOSO, J., "Hacia un nuevo Código de Derecho internacional privado para la comunidad económica latinoamericana", *R.D.I. y Cs. Dip. (Rosario)*, núm. 37/38, 1970, pp. 191-193

--- *Hacia un nuevo Derecho internacional privado latinoamericano*, Guayaquil, 1974

VILLELA, A.M., "L'unification du droit international privé en Amérique Latine", *Rev. crit. dr. int. pr.*, 1984, pp. 233-265 (versión portuguesa: *Rev. Inf. Leg. (Brasilia)*, vol. 21, núm. 83, 1984, pp. 5-26)

--- "O direito internacional privado no Esboço de Teixeira de Freitas", en S. Schipani (dir.), *Augusto Teixeira de Freitas e il Diritto Latinoamericano*, Padua, Cedam, 1988, pp. 179-191

WELLS, H., "The Institutional Framework of Inter-American Relations", *California Western Int. L.J.*, vol. 13, 1983, núm. 2, pp. 223-247

WHITAKER, A., *La Argentina y los Estados Unidos*, trad., Buenos Aires, Proceso, 1956

YEPES, J.M., "Contribution de l'Amérique latine au développement du droit international privé", *R. des C.*, t. 32 (1930-II), pp. 691-799

--- "Les problèmes fondamentaux du droit des gens en Amérique", *R. des C.*, t. 47 (1934-I), pp. 5-143

--- *Philosophie du Panaméricanisme et Organisation de la Paix*, Neuchatel, Baconnière, 1945

--- *Del Congreso de Panamá a la Conferencia de Caracas, 1826-1954*, Caracas, 1955

ZANOTTI, I., "Regional and International Activities", *Law. Am.* (sección anual a partir de vol. 2, 1970)

V. TRATADOS DE MONTEVIDEO DE 1889 y 1939/40

Adhesión de España (firmada ad referendum) a los Tratados de D.I.Pr. que se convinieron en Montevideo, 1888-1889, Madrid, 1893

ALCORTA, C.A., *Los tratados de Montevideo de 1889*, Montevideo, 1931

ARGÜAS, M., "The Montevideo Treaties of 1889 and 1940 and their influence on the unification of Private International Law in South America", *Libro centenario de I.L.A., The present state of international Law and other essays*, Deventer, Kluwer, 1973, pp. 345-360

BALDWIN, J.M., *The comparative results in the advancement of Private International Law of the Montevideo Congress of 1888-1889 and the Hague Conferences of 1893, 1894, 1900, 1904*, Baltimore, 1906

BATIFFOL, H., "L'expérience du Code Bustamante et des traités de Montevideo en Amérique Latine", *Bull. Soc. Lég. Comp.*, vol. 71, 1947-48, pp. 851-890

BRICEÑO BERRU, J.E., "Los tratados sudamericanos de Derecho comercial internacional y el Libro Segundo del Código Bustamante", *Riv. dir. int. pr. proc.*, 1986, pp. 39-66

--- "Los tratados latinoamericanos de Derecho internacional civil y procesal civil. Su valor y vigencia actuales", *Riv. dir. int. pr. proc.*, 1988, pp. 535-553

BUSTAMANTE y RIVERO, J.L., *El Tratado de Derecho Civil Internacional de 1940*, Montevideo, 1942

CONTUZZI, F.P., "I trattati di Montevideo del 1889 e la codificazione del diritto internazionale privato presso gli stati dell'America Meridionale", *Il Filangeri*, 1889, t. I, pp. 521 ss.

COUTURE, E. y ALFONSIN, Q., "L'expérience des traités de Montevideo", *Bull. Soc. Lég. Comp.*, vol. 71, 1947/48, pp. 695-711

GARCIA CALDERON K., M., "Apuntes sobre los Tratados de Derecho civil internacional de Montevideo de 1889 y 1940", *R. Per. D.I.*, t. 35, núm. 88, 1983, pp. 3-22

GILARDO JARAMILLO, G., *Los Tratados de Montevideo de 1940*, Bogotá, Kelly, 1941

GOLDSCHMIDT, W., "Los artículos 11 y 13 en los tratados de Derecho civil internacional de Montevideo de 1889 y 1940", *El Derecho (Argentina)*, t. 89, pp. 602 ss.

--- "En torno al problema intertemporal del tratado de Montevideo de 1940", *Jurisp. Argentina*, t. 1957-II, pp. 341-346

--- "El Tratado de Derecho procesal internacional de Montevideo de 1940", *ibid.*, t. 1956-IV (Doctrina), pp. 148-155

GONZALEZ LAPEYRE, E., "Los tratados de Montevideo de 1939-40 y la República Federativa del Brasil", *Rev. Urug. Der. Int.*, núm. 3, 1974, pp. 101-114

HECK, K., "Der Kongress von Montevideo und das internationale Vertragsrecht der südamerikanischen Staaten", *NiemZ*, núm. 1, 1891, pp. 324-246, 477-483 y 592-600

KRAISELBURD, E., *Los tratados de Montevideo y el Derecho internacional privado*, Buenos Aires, Claridad, 1941

de MATTOS, J.D.B., "L'expérience du Code Bustamante et l'expériences des traités de Montevideo en Amérique latine", *Bull. Soc. Lég. Comp.*, vol. 71, 1947/48, pp. 681-694

MENDILAHARZU, E.F., "La Convención de Montevideo sobre Propiedad Intelectual", *Rev. Col. Abog. Buenos Aires*, t. XVII, núm. 3, 1939, pp. 171-174

de la PLAZA y NAVARRO, M., "La codificación del Derecho internacional privado en las Conferencias de Montevideo. La adhesión de España", *R.L.J.*, t. 113, 1908, pp. 176-192

PRADIER FODÉRE, P.L.E., "Le Congrès de droit international Sudaméricain et les traités de Montevideo", *R.D.I.L.C.*, t. XXI, 1889, pp. 217-237 y 561-577

RABEL, E., "The revision of the treaties of Montevideo on the law of conflicts", *Mich. L. Rev.*, 1940-41, pp. 517-525

RAMIREZ, G., *Proyecto de Código de Derecho internacional privado y su comentario*, Buenos Aires, 1888

--- *El Derecho comercial internacional en el Congreso Jurídico Sudamericano, Montevideo, 1889*

--- *El Derecho procesal internacional en el Congreso Jurídico de Montevideo, Montevideo, 1892*

RAYCES, A., "Un tópico de política jurídica sudamericana", *Rev. Col. Abog. Buenos Aires*, t. XVII, núm. 4, 1939, pp. 331-345

REBORA, J.C., "L'expérience des traités de Montevideo et du Code Bustamante", *Bull. Soc. Lég. Comp.*, vol. 71, 1947/48, pp. 721-724

REY RIOS, R., "Los tratados de Montevideo 1889-1939", *Rev. Univ. San Francisco Xavier*, núm. 21, 1939 (separata)

ROMERO del PRADO, V., "La concepción del Derecho internacional privado en el Congreso de Montevideo (1888-1889)", *Bol. Fac. Der. Cs. Soc. Univ. de Córdoba*, 1939, pp. 59 ss. y 223 ss.

SEGOVIA, L., *El Derecho internacional privado y el Congreso Sud-Americano de Montevideo*, Buenos Aires, 1889

SIENRA, J., "Proyecto de reforma de los Tratados del Congreso Jurídico de Montevideo", *Rev. Der. Púb. y Priv. (Montevideo)*, t. II, núm. 2, 1939, pp. 330 ss.

SILGUEIRA, H., "Cincuentenario del Congreso de Derecho internacional de Montevideo", *Rev. Col. Abog. Buenos Aires*, t. XVII, núm. 4, 1939, pp. 325-329 (discurso)

SOLARI BARRANDEGUY, M., "Ejecución extraterritorial de las sentencias en los tratados de Montevideo", *Rev. Urug. D.I.*, t. I, 1972, pp. 289-301

VIDELA ARANGUREN, J.M^a, "El Derecho procesal y el Congreso de Montevideo", *R.A.D.I.*, t. II, núm. 3, 1939, pp. 301-314

VIEIRA, M.A., "Los Tratados de Montevideo. Sus antecedentes y consecuencias", *Décimoquinto Curso C.J.I. -1988-*, pp. 277-288

--- *Derecho internacional privado. Tratados de Montevideo 1889-1940-1979 ...* (otros textos de D.I.Pr., convencionales y autónomos). *Notas y concordancias*, 4^a ed., Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1987

XIRAU, J.R., "L'expérience des traités de Montevideo", *Bull. Soc. Lég. Comp.*, vol. 71, 1947/48, pp. 725-733

ZUCCHERINO, R., *Los tratados de Montevideo*, Buenos Aires, 1973

VI. CONFERENCIAS PANAMERICANAS Y CODIGO BUSTAMANTE

ALCORTA, C.A., "EL Proyecto de Código de Derecho internacional privado", *Jurisp. Argentina*, t. 24, 1927 (Doctrina), pp. 28-91

--- "Las reglas preliminares del Código Americano de Derecho internacional privado", *Anales Fac. Cs. Jur. Soc.*, núm. 4, 1929, pp. 216-225

ALVARADO GARCIA, E., "Honduras y la adhesión de España al Código Bustamante", *Rev. Der. Int. (La Habana)*, t. XXVII, 1935, pp. 285-293

ALVAREZ, A., "La Conférence des juristes de Rio de Janeiro et la codification du droit international américain", *Rev. gén. dr. int.*, vol. 20, 1913, pp. 24-52

ALVAREZ, E., "El Código de Derecho internacional privado (Código Bustamante) y la adhesión de España", *Rev. Der. Int. (La Habana)*, t. XXVIII, 1935, pp. 176-200

AUDINET, E., "Un projet de Code de droit international privé", *Rev. cr. dr. int. pr.*, t. 22, 1927, pp. 1-17

BARNES, W.S., "Revision of the Bustamante Code", *Cursos monográficos (La Habana)*, 1957, pp. 387-480

BEATO SALA, I., "Sobre la accesión o adhesión de España al Código americano de Derecho internacional privado, denominado Código Bustamante", *R.G.L.J.*, t. 167, 1935, pp. 603-616

BORCHARD, E., "Committee of experts. Pan American codification of international law", *A.J.I.L.*, vol. 31, 1937, pp. 471-473

--- "The 'Committee of Experts' at the Lima Conference", *A.J.I.L.*, vol. 33, 1939, pp. 269-282

de BUSTAMANTE y SIRVEN, A.S., *Proyecto de Código de Derecho internacional privado*, La Habana, El Siglo XX, 1925

--- *El Código de Derecho internacional privado y la Sexta Conferencia Panamericana*, La Habana, Imprenta Avisador Comercial, 1929

CAICEDO CASTILLA, J.J., *Estudio comparativo del Código Bustamante, los Tratados de Montevideo y el "Restatement of the Law of Conflict of Laws"*, Washington D.C., Unión Panamericana, 1954

CALANDRELLI, A., "Proyecto de codificación del derecho internacional privado", *Jurisp. Argentina*, t. 24, 1927 (Doctrina), pp. 1-20

de CASTRO, F., "¿Debe adherirse España al Código Bustamante?", *Rev. Der. Pr.*, vol. XXII, 1935, pp. 1-6

--- "De nuevo sobre la pretendida adhesión de España al Código Bustamante", *Rev. Der. Pr.*, pp. 306-307

COLOMBO, L.A., "La proyectada reforma del Código Bustamante", *La Ley (Argentina)*, t. 72, 1953, pp. 905-908

CORVINGTON, H., "Una opinión de profesor sobre la extensión del campo de aplicación del Código Bustamante y la oportunidad de su adopción por el gobierno de España", *Rev. Der. Int. (La Habana)*, t. XXXI, 1937, pp. 88-99

ESPINOLA, E., "A codificação do Direito Internacional para os Estados Americanos", *Pandectas Brasileiras*, vol. 2, 1927, pp. 5-592

--- "Informe sobre los trabajos de la Comisión III (codificación del Derecho internacional privado y uniformidad legislativa), presentado a la VI Conferencia Internacional Americana", *Rev. Der. Int. (La Habana)*, t. XIII, 1928, pp. 189-195

FARRERA, C., "El Código Bustamante y nuestro derecho positivo", *Rev. Der. Int. (La Habana)*, t. XVII, 1930, pp. 284-309 y núm. 18, 1930, pp. 27-55

FERRER, B., "Definiciones adicionales en la interpretación de la ley personal en el Código de Derecho internacional privado de La Habana, 1928", *Rev. Der. Int. (La Habana)*, t. LV, 1949, pp. 52-60

FREEMAN, A.V., "The First Meeting of the Inter-American Council of Jurists", *A.J.I.L.*, vol. 44, 1950, pp. 374-382

GESCHE MÜLLER, B., "Proyecto de investigación sobre la eficacia del Código Bustamante para el Derecho internacional privado de los Estados americanos", *Rev. Der. (Chile)*, t. XL, núm. 158, 1972, pp. 48-54

--- "El método de Derecho internacional privado de Savigny y el Código Bustamante", *Rev. Cs. Soc. (Chile)*, núm. 14, 1979, pp. 773-796

GONZALEZ MUÑOZ, R.P., "L'expérience du Code Bustamante dans le pays de l'Amérique latine", *Bull Soc. Lég. Comp.*, vol. 71, 1947/48, pp. 713-719

GUERRERO, J.G., "La VII^e Conférence Panaméricaine", *Rev. gén. dr. int. pub.*, t. 41, 1934, pp. 401-408

HELGUERA, E., "El Derecho internacional privado mexicano y el Código Bustamante", *Comunicaciones mexicanas al VI Congreso internacional de Derecho comparado (Hamburgo, 1962)*, México, U.N.A.M., 1962, pp. 29-47

KUHN, A., "Coordination between the League and the Pan American Union in regard to codification", *A.J.I.L.*, vol. 22, 1928, pp. 590-592

--- "Opinion of the Inter-American Juridical Committee on revision of the Bustamnte Code", *A.J.I.L.*, vol. 46, 1952, pp. 317-319

de LASALA LLANAS, M., "Posibilidad de adhesión de España al Código Americano de Derecho internacional privado (Código Bustamante)", *Rev. Der. Pr.*, t. XXI, 1934, pp. 221-228

--- "¿Puede adherirse España al Código Bustamante?", *Rev. Der. Pr.*, t. XXII, 1935, pp. 217-221

LAVALLE, R., "State obligations under treaties embodying unified rules of law, with particular reference to the Bustamante Code", *Law. Am.*, vol. 6, 1974, pp. 699-709

LAVIN, P.F., "La doctrina de La Habana en el Derecho internacional privado", *An. Soc. Cub. Der. Int.*, t. IX, 1926, pp. 171-178

LINARES FLEYTAS, A., "Las soluciones respecto a la revisión del Código Bustamante de Derecho internacional privado", *Anuario I.H.L.A.D.I.*, núm. 2, 1963, p. 172-175

--- *Código Bustamante de Derecho internacional privado. Sus antecedentes, sus propósitos, su texto y su posible revisión*, Caracas, Librería Antigua y Moderna, 1965

LORENZEN, E.G., "The Pan-American Code of Private International Law", *Tulane L. Rev.*, núm. 4, 1929-1930, pp. 499-528

MANGER, W., "The Pan American Union at the Sixth International Conference of American States", *A.J.I.L.*, vol. 22, 1928, pp. 764-775

MARTINEZ FRAGA, P., "Die Kodifikation des internationalen Privatrechts in Amerika", *RabelZ*, vol. 1, 1927, pp. 563-566

MATOS, J., "Los principios de domicilio y de la nacionalidad y la próxima reunión de juriconsultos en Río de Janeiro", *Rev. Der. Int. (La Habana)*, t. VII, 1925, pp. 301-309

MEDINA y SOBRADO, P.G., "La Escuela de La Habana", *An. Soc. Cub. Der. Int.*, t. XIII, 1930, pp. 407-419

MUCI ABRAHAM (h), J., *Código de Derecho internacional privado (Código Bustamante) precedido de un estudio sobre los conflictos de leyes y la codificación colectiva en América*, Caracas, Univ. Central de Venezuela, 1955

NADELMANN, K., "A new report of the Inter-American Juridical Committee on revision of the Bustamante Code", *A.J.I.L.*, vol. 53, 1959, pp. 652-660

--- "The question of revision of the Bustamante Code", *A.J.I.L.*, vol. 57, 1963, pp. 384-391

--- "Need for revision of the Bustamante Code on Private International Law", *A.J.I.L.*, vol. 65, 1971, pp. 782-793

OCTAVIO, R., *A codificação do direito internacional privado*, Oporto-Río de Janeiro, Magalhaes & Moniz-Alves, 1910

PHILIPPI, J., "La Tercera Conferencia Internacional Americana", *Rev. Der. Jur.*, t. 4, 1906/1907, pp. 33-46, 78-88 y 111-144

QUERO MOLARES, J., "La adhesión de España al Código Americano de Derecho internacional privado", *R.G.L.J.*, t. 165, 1934, pp. 695-721

RODRIGUEZ DEMORIZI, A., "Análisis del Código Bustamante", *Rev. Der. Int.*, núm. 31, 1937, pp. 312-332

RUIZ MONCADA, F., "Principios de Derecho civil internacional incorporados en la legislación argentina y en el Código panamericano de Derecho internacional privado", *Bol. Inst. Der. Civ.*, año 10, 1945, pp. 133-188, 295-305, 375-410 y año 11, 1946, pp. 168-201

RUIZ MORENO, J., "Rôle et action de l'Argentine à la sixième conférence panaméricaine", *Rev. gén. dr. int. pub.*, t. 36, 1929, pp. 73-87

SAMTLEBEN, J., "La aplicación del Código Bustamante en Venezuela", *Libro Homenaje a la memoria de Joaquín Sánchez Covisa*, Caracas, Univ. Central de Venezuela, 1975, pp. 319-356

SCOTT, J.B., *La Codificación del Derecho Internacional*, La Habana, El Siglo XX, 1924 (conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana el 8 de febrero de 1924)

--- "La codificación gradual y progresiva del Derecho internacional", *Rev. Der. Int. (La Habana)*, t. XII, 1927, pp. 19-61 (y textos de los proyectos)

--- "The Sixth Pan American Conference", *A.J.I.L.*, vol. 22, 1928, pp. 351-362

VALLADÃO, H., "Epitácio Pessoa, Jurista da Codificação do Direito Internacional", *Cuarto Curso C.J.I. (1977)*, pp. 15-36

VICO, C.M., "El proyectado Código de Derecho internacional privado", *Jurisp. Argentina*, t. 24, 1927 (Doctrina), pp. 20-28

WHITTON, J.B., "La sixième conférence panaméricaine (vue d'ensemble)", *Rev. gén. dr. int.*, núm. 36, 1929, pp. 5-39

VII. CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA

DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. Aspectos generales

ARELLANO GARCIA, C., "Las Normas Generales del Derecho internacional privado", *Rev. Fac. Der. U.N.A.M.*, t. 33, núms. 130-132, 1983, pp. 11-113

BRICEÑO BERRU, J.E., "Las CIDIP y las convenciones interamericanas de Derecho internacional civil y procesal civil", *Riv. dir int. pr. proc.*, 1982, pp. 27-59

--- "Las convenciones interamericanas sobre Derecho comercial internacional", *Riv. dir. int. pr. proc.*, 1986, pp. 799-818

CHALITA, G. y NOODT TAQUELA, M.B., *Unificación del Derecho internacional privado (CIDIP I, II y III)*, Buenos Aires, Universidad, 1988

de EGEA, R.M., "Los observadores ante la Organización de los Estados Americanos", *Quinto Curso C.J.I. -1978-*, pp. 247-277

de KLOR, A.D. y de MARTINOLI, A.U., *Parte General del Derecho internacional privado en las Convenciones interamericanas*, Córdoba (Argentina), Advocatus, 1990

de MAEKELT, T.B., "Convenciones interamericanas sobre Derecho internacional privado ratificadas por Venezuela", *Rev. Der. Priv. (Venezuela)*, núm. 1, 1985, pp. 103-111

--- "Convenciones interamericanas sobre Derecho procesal internacional", *Rev. Der. Priv. (Venezuela)*, núm. 3, 1985, pp. 125-137

MONROY CABRA, M.G., *Conferencias Interamericanas de Panamá (1975) y Montevideo (1979) sobre Derecho internacional privado*, Bogotá, 1979

NEUHAUS, P.H., "Las convenciones interamericanas sobre Derecho internacional privado vistas por un europeo", *An. Jur. Interam.*, 1981, pp. 165-182 (trad. alemana en *Z.f.Rvgl.*, vol. 23, 1982, pp. 287-301)

OPERTTI BADAN, D., "Unification of Laws in the Western Hemisphere. The Contribution of the Organization of American States", *Rev. dr. uniforme*, 1981-I, pp. 60-67

--- "La codificación del Derecho internacional privado: análisis comparativo de la labor realizada por la Conferencia de Derecho internacional privado de La Haya y por la CIDIP", *España y la codificación internacional del Derecho internacional privado*, Madrid, Centro de Estudios Superiores, Sociales y Jurídicos Ramón Carande (en prensa)

PARRA-ARANGUREN, G., "Recent Developments of Conflict of Laws Convention in Latin America", *R. des C.*, t. 164 (1979-III), pp. 55-170

PEREZNIETO CASTRO, L., "Posibilidades de ratificación de las convenciones de las conferencias interamericanas sobre Derecho internacional privado I y II, desde una perspectiva latinoamericana", *An. Jur. Interam.*, 1981, pp. 183-207

POLANCO FERNANDEZ, T., "Algunas convenciones interamericanas sobre Derecho procesal internacional", *Rev. Der. Pr. (Venezuela)*, vol. 3, núm. 1, 1986, pp. 165-173

ROUVIER, J.M., "Problemas de Derecho procesal internacional en América Latina". Convenciones de la CIDIP - I y proyectos para la CIDIP - II. Referencia especial a la legislación venezolana", *Quinto Curso C.J.I. -1978-*, pp. 459-496

SAMTLEBEN, J., "Die interamerikanischen Spezialkonferenzen für Internationales Privatrecht", *RabelZ*, vol. 44, 1980, pp. 257-320

--- "Neue interamerikanische Konventionen zum Internationalen Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 56, 1992, pp. 1-114

--- "Los resultados de la labor codificadora de la CIDIP desde la perspectiva europea", *España y la codificación internacional del D.I.Pr.*, Madrid, Centro de Estudios Superiores Sociales y Jurídicos Ramón Carande (en prensa)

SANTOS BELANDRO, R.B., "Vigencia de los tratados de Montevideo de 1889 y 1940 a la luz de las CIDIP I, II y III", *Rev. Inf. Leg. (Brasilia)*, vol. 26, núm. 103, 1989, pp. 295-310

SIQUEIROS, J.L., "Contribución de las CIDIP-I, II y III al desarrollo del Derecho internacional privado", *Decimotercer Curso C.J.I. -1986-*, pp. 159-183

SOLARI BARRANDEGUY, E., "Cooperación judicial iberoamericana", *Just. Urug.*, núm. 94, 1987, pp. 3-7

VALLADÃO, H., "La importancia de la actualización de las normas de Derecho internacional privado en las relaciones interamericanas", *Primer Curso C.J.I. -1974-*, pp. 183-204

--- "O direito internacional privado interamericano: pionerismo e atualização", *An. Jur. Interam.*, 1979, pp. 131-139

2. La CIDIP I -Panamá, 1975-

ABARCA LANDERO, R., "Convenciones interamericanas en materia procesal, Panamá, 1975", en L. KOS-RABCEWICZ-ZUBKOWSKI (ed.), *Cooperación ... cit.*, pp. 613-678

van den BERG, A.J., "L'arbitrage commercial en Amérique latine", *Rev. arb.*, 1979, pp. 123-203

BOUTIN I., G., *Convenios de Panamá de Derecho internacional privado*, Panamá, Impr. Universitaria, 1990

CAICEDO CASTILLA, J.J., "Introducción general al Derecho internacional privado, con especial referencia a los temas de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho internacional privado (CIDIP) y proyectos del C.J.I.", *Primer Curso C.J.I. -1974-*, pp. 129-155 y 157-182

--- "Exposición acerca de la Primera Conferencia especializada sobre Derecho internacional privado (CIDIP-I)", *Segundo Curso C.J.I. -1975-*, pp. 249-268

de CASTELLO CRUZ, L.D., "A tramitação de cartas rogatorias, a obtenção de provas no exterior em assuntos civis e comerciais e a conferência especializada interamericana sobre direito internacional privado, a reunir-se no Panamá a partir de 15 de janeiro de 1975", *Rev. Inf. Leg. (Brasilia)*, núm. 45, 1975, pp. 47-64

FOUCHARD, P., "La convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial international (Panama, 30 janvier 1975)", *Rev. arb.*, 1977, pp. 203-207

FRISCH PHILIPP, W., "Die Interamerikanischen Abkommen von Panama über Wechsel, Schecks und Fakturen", *Recht der Internationalen Wirtschaft. Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters*, 1979, pp. 520-526

GONZALEZ LAPEYRE, E., "Las Convenciones de Panamá en materia de letras de cambio, pagarés, facturas y cheques", *Cuad. de D.I.Pr.*, núm. 2, 1978, pp. 46-67

ILLUECA AROSEMENA, E., *Las Convenciones de Panamá sobre instrumentos negociables de circulación internacional*, Panamá, 1979 (tesis de grado)

ILLUECA, E.M., "La ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras en Panamá", *An. de Derecho (Panamá)*, núm. 11, 1981, pp. 77-100

KOS-RABCEWICZ-ZUBKOWSKI, L., "Les conventions interaméricaines sur l'arbitrage commercial et la Commission interaméricaine d'arbitrage commercial", *Rev. arb.*, 1983, pp. 411-422

de MAEKELT, T.B., *Conferencia Especializada de Derecho internacional privado*, Caracas, Univ. Central de Venezuela, 1979

NASH LEICH, M., "The Inter-American Convention on International Commercial Arbitration", *A.J.I.L.*, vol. 75, 1981, pp. 982-986

NORBERG, C.R., "Inter-American Commercial Arbitration", *Law. Am.*, vol. 1, 1969, pp. 1-16.

--- "Inter-American Commercial Arbitration Revisited", *Law. Am.*, vol. 7, 1975, pp. 275-290

OPERTTI BADAN, D., "Convenciones aprobadas por la CIDIP-I", *Memoria Eduardo Albanell Mac Coll*, Montevideo, 1975 (separata)

--- "Convenciones aprobadas por la CIDIP: Derecho procesal internacional", *Segundo Curso C.J.I. -1975-*, pp. 281-332

PERUGINI, A.M., *La validez y circulabilidad internacional del poder de representación notarial*, Buenos Aires, Depalma, 1988, pp. 89-92

PIERSON, S.B., "The Five Inter-American Conventions: In Support of Their Ratification", *Law. Am.*, núm. 9, 1977, pp. 509-517

PITTI, U., "Ambito de aplicación del Convenio interamericano sobre arbitraje comercial internacional", *R.C.E.A.*, vol. II, 1985, pp. 121-125

POLANCO FERNANDEZ, T., "Algunas Convenciones Interamericanas sobre Derecho Procesal Internacional", *Rev. Der. Priv. (Venezuela)*, núm. 1, 1986, pp. 165-173

ROUVIER, J.M., "Problemas Derecho Procesal Internacional en América Latina. Convenciones de la CIDIP-I y proyectos para la CIDIP II. Referencia especial a la legislación venezolana", *Quinto Curso C.J.I. -1978-*, pp. 459-496

SILVA ALONSO, R. *Convención interamericana -sobre conflictos de leyes-*, Asunción, 1982

TREVIÑO, J.C., "El arbitraje comercial internacional: un recurso para América Latina", *Rev. Investigaciones Jurídicas (México)*, 1988, pp. 323-349

VALLADÃO, H., "Convenções aprovadas pela CIDIP - I: Direito comercial internacional", *Segundo Curso C.J.I. -1975-*, pp. 269-280

VIEIRA, M.A., "Las convenciones sobre Derecho internacional suscritas en Panamá (1975)", *Cuad. de D.I.Pr.*, núm. 2, 1978, pp. 35-45

--- "Convención interamericana sobre el régimen legal de los poderes para ser utilizados en el extranjero", *ibid.*, pp. 72-76

--- "La convención de Panamá sobre letras de cambio, pagarés y facturas", *Quinto Curso C.J.I. -1978-*, pp. 399-422

--- "La convención sobre cheques de Panamá de 1975 y el Proyecto del Comité Jurídico Interamericano de 1977", *Quinto Curso C.J.I. -1978-*, pp. 441-457

--- "La codificación del Derecho internacional privado en el continente americano, antes y después de Panamá", *Anuario I.H.L.A.D.I.*, núm. 5, 1979, pp. 261-280

--- y OPERTTI BADAN, D., "Convención interamericana sobre arbitraje comercial", *Cuad. de D.I.Pr.*, núm. 2, 1978, pp. 68-71

3. La CIDIP II -Montevideo, 1979-

ARELLANO GARCIA, C., "Las Normas Generales del Derecho Internacional Privado", *Rev. Fac. Der. U.N.A.M.*, t. 33, núms. 130-132, 1989, pp. 11-113

CAICEDO CASTILLA, J.J., "La Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho internacional privado (CIDIP-II)", *Cuarto Curso C.J.I. -1977-*, pp. 371-395

FERME, E., "Convención Interamericana sobre Normas Generales", *Enc. Jur. Omeba (Buenos Aires)*, Ap. V, 1987, pp. 209-217

GOLDSCHMIDT, W., "Normas generales de la CIDIP II: hacia una teoría general del Derecho Internacional Latinoamericano", *An. Jur. Interam.*, 1979, pp. 141-155

--- "Un logro americano en el campo convencional del Derecho internacional privado", *El Derecho*, t. 83, 1979, pp. 833-841

GOMEZ DE LA TORRE, M., *Comentarios y observaciones a los proyectos de convención elaborados por el Comité Jurídico Interamericano para la CIDIP II*, Quito, 1979

de MAEKELT, T.B., "Resultados de la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho internacional privado (CIDIP-II)", *Sexto Curso C.J.I. - 1979-*, pp. 107-128

--- "Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado", *Jurídica*, núm. 14, 1982, pp. 327-357

MAC LEAN UGARTECHE, R., "Nota sobre las convenciones aprobadas durante la Segunda Conferencia Especializada Interamericana de D.I.Pr.", *Rev. Per. Der. Int.*, t. 32, núm. 74, 1980, pp. 69-77

OPERTTI BADAN, D., "Actualización de las normas vigentes en América sobre conflictos de leyes en materia de sociedades mercantiles", *Cuarto Curso C.J.I. -1977-*, pp. 413-430

--- "Cumplimiento de medidas cautelares", *Cuarto Curso C.J.I. -1977-*, pp. 431-444

--- "Prueba del Derecho extranjero", *Cuarto Curso C.J.I. -1977-*, pp. 445-455

--- "Actualización de las normas vigentes en América sobre sociedades mercantiles", *Quinto Curso C.J.I. - 1978-*, pp. 423-439

ORTIZ MARTIN, G., "Los trabajos del Comité Jurídico Interamericano y la CIDIP II", *Rev. Judicial (Costa Rica)*, núm. 26, 1983, pp. 9-15

PEREZNIETO CASTRO, L., "Análisis de algunos principios establecidos por las convenciones aprobadas en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado de Montevideo", *Jurídica*, núm. 14, 1982, pp. 253-264

ROUVIER, J.M., "La ejecución de sentencias extranjeras en Venezuela", *Rev. Fac. Cs. Jcas. Pol. (U.C.V.)*, núm. 66, 1987, pp. 55-76

SIQUEIROS, J.L., "¿Es posible la codificación de principios generales del Derecho internacional privado?", *Primer Seminario Nacional de Derecho internacional privado*, México, U.N.A.M., 1979, pp. 79-169

TELLECHEA BERGMAN, E., *El tratamiento e información del Derecho extranjero y su regulación en las Convenciones de Montevideo de 1979*, Montevideo, 1979

TROBOFF, P.D., "The Second Inter-American Specialized Conference on Private International Law", *A.J.I.L.*, vol. 73, 1979, pp. 704-706

4. La CIDIP III -La Paz, 1984-

BRICEÑO BERRU, J.E., "Las convenciones interamericanas sobre Derecho internacional privado de 1984", *Riv. dir. int. pr. proc.*, 1987, pp. 429-452

de CASTELLO CRUZ, L.D., "O desenvolvimento e a codificação do direito internacional privado na Terceira Conferencia Especializada Interamericana sobre Direito Internacional Privado", *An. Jur. Interam.*, 1985, pp. 57-111

CHALITA, G. y NOODT TAQUELA, M.B., "La jurisdicción indirecta en la Conferencia de La Paz de 1984 (CIDIP-III)", *El Derecho*, t. 119, 1986, pp. 987-995

de KLOR, A.D. y de MARTINOLI, A.U., "Sentencias extranjeras. Consideraciones acerca de la Convención interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial", *La Ley (Córdoba, Argentina)*, núm. 5, mayo de 1987, pp. 315-321

MAC LEAN UGARTECHE, R., "Las personas jurídicas en el Derecho internacional privado", *An. Jur. Interam.*, 1984, pp. 263-295

de MAEKELT, T.B., "Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho internacional privado. CIDIP III", *Rev. Der. Priv. (Venezuela)*, núm. 3, 1984, pp. 223-228

OPERTTI BADAN, D., "La Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho internacional privado (CIDIP III)", *Rev. Urug. Der. Proc.*, núm. 2, 1984, pp. 143-179

--- *Comentarios a la Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores*, Montevideo, I.I.N., 1986

PARRA-ARANGUREN, G., "Los trabajos preparatorios de la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho internacional privado (La Paz, 1984)", *Rev. Fac. Der. Univ. Cat. A. Bello*, núm. 32, 1981-82, pp. 73-112

--- *La Tercera Conferencia Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP III, La Paz 1984)*, *Rev. Fac. Der. Univ. Cat. A. Bello*, núms. 33-34, 1984-1985 (separata)

--- "Codification in America with particular reference to the Third Specialized Inter-American Conference on Private International Law (CIDIP-III) (La Paz, 1984)", *Le droit international privé à l'heure de sa codification. Etudes en l'honneur de Roberto Ago*, t. IV, Milán, Giuffrè, 1987, pp. 227-247

SOLARI BARRANDEGUY, M., "Significado y trascendencia del Protocolo de La Paz sobre recepción de Prueba en el Extranjero", *Rev. Urug. Der. Proc.*, 1984, pp. 487-494

TELLECHEA BERGMANN, E., "Aproximación a la Convención interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras", *Rev. Urug. Der. Proc.*, núm. 1, 1986, pp. 21-32

5. La CIDIP IV -Montevideo, 1989-

ALVAREZ COZZI, C., *restitución internacional de menores. Relato, antecedentes y anteproyecto de la Convención interamericana con vistas a la CIDIP IV-1989*, Montevideo, Edit. Universidad, 1988

BOGGIANO, A., *Contratos internacionales*, Buenos Aires, Depalma, 1990

FERNANDEZ ARROYO, D.P., "Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho internacional privado (CIDIP IV)", *R.E.D.I.*, vol. LII, 1990, pp. 310-312

--- "La Convención interamericana sobre restitución internacional de menores de 15 de julio de 1989", *Rev. Inf. Leg. (Brasilia)*, vol. 28, núm. 111, pp. 139-174

HERBERT, R., "Perspectivas de la IV Conferencia Especializada de Derecho internacional privado", *Decimocuarto Curso C.J.I. -1987-*, pp. 287-323

--- "Perspectivas de la IV Conferencia Especializada de Derecho internacional privado. Su temática de menores", *Rev. Urug. Der. Fam.*, núm. 2, 1988, pp. 87-98

LANDONI SOSA, "Las Convenciones interamericanas sobre obligaciones alimentarias y restitución internacional de menores, aprobadas en la CIDIP IV, celebrada en Montevideo, del 9 al 15 de julio de 1989", *Rev. Urug. Der. Proc.*, núm. 15, 1989, pp. 144-152

LARSEN, J., "1989 Inter-American Convention on International Carriage of Goods by Road", *A.J.C.L.*, VOL. 39, 1991, pp. 121-155

OPERTTI BADAN, D., *Exposición de motivos del proyecto de Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de alimentos para menores*, Montevideo, I.I.N., 1988

--- *Restitución Internacional de Menores (Aspectos Civiles)*, Montevideo, I.I.N., 1989

PARRA-ARANGUREN, G., "La Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho internacional privado (CIDIP-IV, Montevideo, 9-15 de julio, 1989)", *Rev. Fac. Cs. Jur. y Pol.*, núm. 75, 1990, pp. 97-186 (versión inglesa abreviada en *N.I.L.R.*, vol. XXXVI, 1989, pp. 269-284 y en *Conflits et harmonisation. Mélanges en l'honneur d'Alfred E. von Overbeck*, Friburgo, Editions universitaires, 1990, pp. 155-175)

G. PARRA-ARANGUREN, "La Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-IV, Montevideo, 9-15 de julio, 1989)", *Rev. Fac. Cs. Jcas. Pol.*, núm. 75, 1990, pp. 97-186.

SANTOS BELANDRO, R.B., *Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias. Reglas de conflicto materialmente orientadas hacia la protección de las personas*, Montevideo, s. ed., 1991

SIQUEIROS, J.L. y GARCIA MORENO, V.C., "La Convención interamericana sobre restitución internacional de menores", *Rev. Der. Priv. (México)*, núm. 5, 1991, pp. 293-309

SOLARI BARRANDEGUY, M., "El transporte internacional de mercaderías por carretera en la CIDIP IV", *Rev. Der. Com. Empr.*, núms. 49-50, 1989, pp. 35-52

SOSA, G.L., "La CIDIP IV y el centenario de los Tratados de Montevideo de 1889", *Jurisp. Argentina*, 1990-I, pp. 687-693

--- "La Convención interamericana sobre restitución internacional de menores (CIDIP-IV, Montevideo, 1989)", *Jurisp. Argentina*, 1990-I, pp. 779-808

--- "La Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias (CIDIP-IV, Montevideo, 1989)", *Jurisp. Argentina*, 1990-I, pp. 845-863

TELLECHEA BERGMANN, E., *Derecho internacional privado de familia y minoridad (Prestación Internacional de alimentos. Restitución Internacional de menores. Bases para futuras Convenciones Interamericanas)*, Montevideo, I.I.N., 1988

--- *El nuevo Derecho internacional privado interamericano sobre familia y protección de menores*, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1991

TERRA CORBO, D., "Comentario de la IV Conferencia Especializada Interamericana de Derecho internacional privado (CIDIP)", *Rev. Asoc. Escr. Urug.*, vol. 75, 1989, pp. 471-475

VARELA de MOTTA, M., "Una forma eficaz de protección de la familia en Latinoamérica. Convenios sobre restitución de menores y sobre pensiones alimenticias", *Rev. urug. Der. Fam.*, III, núm. 3., 1989, pp. 122-123

VIII. PROCESOS DE INTEGRACION EN AMERICA Y UNIFICACION DEL DERECHO MATERIAL

AGUNDEZ FERNANDEZ, A., FERNANDEZ MARTIN-GRANIZO, M. y RUIZ VADILLO, *Régimen legal básico de los países iberoamericanos*, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1986

ALEMANN, R.T., "Los conceptos jurídico-económicos de preferencia, zona de libre comercio, unión aduanera, asociación económica, comunidad económica y unión económica", *An. urug. Der. int.*, IV, 1965/66, pp. 23-36

"Antecedentes y principales características y mecanismos del Acuerdo Subregional Andino", *Der. Integr.*, núm. 5, 1969, pp. 117-119

Aspectos legales de la Asociación latinoamericana de libre comercio, Montevideo, A.L.A.L.C., 1963

BARROS CHARLIN, R., "El Derecho de la integración ante una nueva década: análisis comparativo de ALALC y ALADI", en F. Orrego Vicuña y J. Irigoin Barrenne (dirs.), *Perspectivas del Derecho internacional contemporáneo (Experiencias y visión de América Latina)*, vol. 3, Santiago (Chile), Instituto de Estudios Internacionales, 1981, pp. 11-35

BRAGA, H., "Comunidade do Caribe - CARICOM", *Rev. Inf. Leg. (Brasilia)*, vol. 21, núm. 81 supl., 1984, pp. 131-146 (textos: 579-618)

BRANDI ALEIXO, J.C., "Mercado Comum Centro-Americano", *Rev. Inf. Leg. (Brasilia)*, vol. 21, núm. 81 supl., 1984, pp. 111-130 (textos: 471-578)

CABANAS RODRIGUEZ, M., "La Ley-Tipo de Arbitraje para Iberoamérica", *R.C.E.A.*, vol. I, 1984, pp. 29-34

CALVENTO SOLARI, U. (dir.), *Legislación atinente a menores en las Américas*, Montevideo, I.I.N., 1989

CARDENAS, E.J., "Hacia un Derecho comunitario latinoamericano", *Der. integr.*, núm. 1, 1967, pp. 32-107

--- y PEÑA, F., "Los acuerdos subregionales y el Tratado de Montevideo", en *La dimensión jurídica de la integración*, Buenos Aires, INTAL, 1973, pp. 124-142

CASTAN VAZQUEZ, J.M^a, "El sistema de Derecho privado iberoamericano", *Estudios de Derecho civil en honor del Prof. Castán Tobeñas*, vol. VI, Pamplona, 1969, pp. 5-30

--- "El Código civil de Andrés Bello y la unidad del sistema jurídico iberoamericano", *A.D.C.*, 1982 (separata)

--- "La Comunidad Iberoamericana en el pensamiento de Federico de Castro", *A.D.C.*, 1983, pp. 1217-1225

CASTEJON, F., *Unificación legislativa iberoamericana*, Madrid, Seminario de Problemas Hispanoamericanos, 1950

de CASTELLO CRUZ, L.D., "Da ALALC à ALADI", *Rev. Inf. Leg. (Brasilia)*, vol. 21, núm. 81 supl., 1984, pp. 47-80 (textos: 233-275)

Congreso jurídico ibero-americano. Reunido en Madrid el año 1982, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1893

CORDEIRO ALVAREZ, E., *La unificación de las obligaciones en América Latina*, Córdoba, Imprenta de la Univ., 1943

--- "Unificación legislativa en Latinoamérica", *Bol. Inst. Der. Comp. (Ecuador)*, núm. 13, 1964, pp. 57-68

--- "Anteproyecto de bases para un código de obligaciones y contratos de América Latina", *Bol. Inst. Centroam. Der. Comp.*, 1966, pp. 323-344

CRUZ MIRAMONTES, R., "Implicaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá en el Acuerdo Latinoamericano de Integración", *Rev. Der. Priv. (México)*, vol. 2, núm. 5, pp. 351-358

--- "La reordenación económica mundial y el TLC de América del Norte", *Rev. Der. Priv. (México)*, núm. 6, 1991, pp. 667-685

DIEZ de VELASCO VALLEJO, M., "Nuevas perspectivas de la justicia internacional: el Tribunal de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena", *Temas de Derecho internacional en homenaje a Frida M. Pflirter de Armas Barea*, Buenos Aires, Fundación del Centro de Estudios Internacionales, 1989, pp. 257-269

DRNAS de CLEMENT, Z., "América latina y los procesos de integración", *Bol. Fac. Der. Cs. Soc.*, t. XLVI-XLVII, 1982-1983, pp. 127-140

EKMEKDJIAN, M.A., "¿Hacia un Derecho Comunitario Latinoamericano? (¿Es viable un Mercado Común Latinoamericano?)", *Rev. del Foro (Col. de Abogados de Lima)*, vol. 75, 1988, pp. 81-104

--- *Hacia la República Latinoamericana*, Buenos Aires, Depalma, 1991

El arbitraje en el Derecho latinoamericano y español. Liber Amicorum en Homenaje a Ludwick Kos-Rabcewicz-Zubkowski, Lima, Cultural Cuzco, 1989

ESTRELLA FARIA, J.A., "Integração econômica na América Latina: sairemos do discurso?", *Rev. Dir. Merc.*, t. 79, 1990, pp. 63-83

FAIREN GUILLEN, V., "Observaciones sobre la sistemática del proyectado Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica", *Rev. Der. Proc.*, núm. 3, 1989, pp. 647-674

--- "Notas sobre el proyectado Código de Proceso Penal-modelo para Iberoamérica", *Bol. Mex. Der. Comp.*, vol. XXIV, núm. 70, 1991, pp. 97-168

FERNANDEZ-SHAW, F., *La integración de Centroamérica*, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1965

FERRERO COSTA, E., "El Derecho de la integración latinoamericana frente a la nueva década, con particular referencia a la integración subregional andina", en F. Orrego Vicuña y J. Irigoin Barrenne (dirs.), *Perspectivas del Derecho internacional contemporáneo (Experiencias y visión de América Latina)*, vol. 3, Santiago (Chile), Instituto de Estudios Internacionales, 1981, pp. 36-56

FIX-ZAMUDIO, H., "Armonización del Derecho de América latina y procedimientos para lograrla. Breves reflexiones sobre los instrumentos de armonización jurídica en América latina", *Rev. Jur. del Perú*, t. 30, 1979, pp. 283-309

--- y CUADRA, H. "Problemas actuales de armonización y unificación de los derechos nacionales en Latinoamérica", *An. Jur. (México)*, núm. 1, 1974, pp. 93-158

FONSECA, G., "Las fuentes del Derecho Común centroamericano", *Der. integr.*, núm. 1, 1967, pp. 51-62

FRANÇA, R.L., "L'integrazione, il Mercato Comune e l'unificazione del diritto dell'America Latina", *Rev. Fac. Dir. Univ. Sao Paulo*, vol. 68, 1973, pp. 279-309

FUEYO LANERI, F., "Proyecto de Código unico de las obligaciones y de los contratos para los países de origen latino", *Rev. Fac. Der. Univ. Central de Venezuela*, vol. 46, 1970, pp. 105-147

GARCIA-AMADOR, F.V., *El ordenamiento jurídico andino. Un nuevo Derecho comunitario*, Buenos Aires, 1977

--- "Nuevas dimensiones institucionales de la integración económica en América latina y el Caribe", en F. Orrego Vicuña y J. Irigoin Barrenne (dirs.), *Perspectivas del Derecho internacional contemporáneo (Experiencias y visión de América Latina)*, vol. 3, Santiago (Chile), Instituto de Estudios Internacionales, 1981, pp. 57-79

GEISER, H.J., "La integración regional entre los países en desarrollo: el caso de la Commonwealth del Caribe", *Der. Integr.*, núm. 21, 1976, pp. 87-107 (documentos: pp. 117 ss.)

GITLI, E. y RYD, G., "Latin American Integration and the Enterprise for the Americas Initiative", *Journ. of World Trade*, vol. 26, núm. 4, 1992, pp. 25-45

GOLDSCHMIDT, W., "Integración jurídica argentino-uruguaya", *El Derecho L.A.*, 1981, pp. 1201-1204

GROS ESPIELL, H., "El Tratado de Asunción y algunas cuestiones jurídicas que plantea", *Rev. Inf. Leg. (Brasilia)*, t. 28, núm. 111, 1991, pp. 203-228

--- *MERCOSUR. El Tratado de Asunción*, Montevideo, Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo, 1991

HALPERIN, I., "El transporte terrestre entre los países de la ALALC –un nuevo convenio multilateral", *Der. integr.*, núm. 28–29, 1978, pp. 119–123 (texto: 148–158)

HAMEL, J., *Les efforts des Etats de l'Amérique latine en vue d'unifier leur droit privé*, París, Centre de documentation universitaire, 1957

HUMMER, W., "Die 'Lateinamerikanische Integrationsassoziation' (ALADI) als Rechtsnachfolger der 'Lateinamerikanischen Freihandelsassoziation' (ALALC)", *Verfassung und Recht in Übersee*, t. 13, 1980, pp. 361–370

JIMENEZ de ARECHAGA, E., "Las normas del Tratado de Montevideo que prevén su evolución hacia un mercado común", *An. urug. Der. int.*, núm. IV, 1965/66, pp. 403–414

KOS-RABCEWICZ-ZUBKOWSKI, L. (dir.), *Cooperación interamericana en los procedimientos civiles y mercantiles*, México, Univ. Nac. Autónoma de México, 1982

LAVOPA, J.H., "Organización institucional y Derecho comunitario en el MERCOSUR", *El Derecho*, 8 de septiembre de 1992, pp. 7–12

LINARES, A., *Aspectos jurídicos de los sistemas de integración económica*, Caracas, Imprenta Universitaria, 1969

--- *La uniformidad de legislaciones referentes a la cooperación internacional en materia de procedimientos judiciales*, La Habana, Editorial Cenit, 1960

MAGARIÑOS, G., "Primer decênio da ALADI. Princípios e instituições", trad., *Rev. Inf. Leg. (Brasília)*, vol. 28, núm. 111, 1991, pp. 175–177

MALPELLI LOPEZ, E., *Códigos y Leyes de Aviación Civil de Iberoamérica*, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1970

MELICH ORSINI, J., "La idea de un código uniforme de las obligaciones para los países latinos y la actual legislación venezolana", *Rev. Fac. Der. Univ. Central de Venezuela*, núm. 46, 1970, pp. 149–210

MIDON, M.A.R., "El mayor desafío del siglo XX: la integración a través del MERCOSUR. Inexorable emprendimiento reservado al Derecho", *El Derecho*, 8 de septiembre de 1992, pp. 4–7

MILLER, M., "El acuerdo de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos: lecciones para América Latina", *Int. Lat.*, núm. 153, 1990, pp. 24–34

MIÑANA y VILLAGRASA, E., *La unificación del Derecho mercantil hispano-americano*, Madrid, Rodríguez-San Pedro, 1925

MONTOYA MANFREDI, U., "El Derecho comercial en la integración económica latinoamericana", *Rev. Der. y C. Pol.*, vol. XXXIII, 1969 (separata)

MOSER, R., "L'ALALC, le marché commun de l'Amérique centrale et les intégrations européennes en droit comparé", *Rev. Fac. Dir. Univ. Sao Paulo*, vol. 65, 1970, pp. 43-53

NOVOA MONREAL, E., "La integración jurídica latinoamericana", *La Justicia (México)*, t. XXVII, núm. 449, 1967, pp. 25-36

OLAVARRIA AVILA, J., *Los códigos de comercio latinoamericanos, con una introducción de Derecho comparado externo*, Santiago, Edit. Jurídica de Chile, 1961

OPERTTI BADAN, D., "Juridical Mutual Cooperation in Criminal Matters", *N.I.L.R.*, vol. XXXIX, 1992, pp. 89-115 (apéndice: 116-125)

PANEBIANCO, M., "O Grupo Sub-Regional Andino", trad., *Rev. Inf. Leg. (Brasilia)*, vol. 21, núm. 81 supl., 1984, pp. 93-110 (textos: 324-460)

PARRA-ARANGUREN, G., "El Acuerdo Boliviano sobre ejecución de actos extranjeros (1911) a la luz de la jurisprudencia venezolana", *Rev. Fac. Der. Univ. Cat. A. Bello*, núm. 22, 1975-1976, pp. 9-132

PISANI RICCI, M.A., "Las perspectivas de la unificación del Derecho mercantil en América Latina", *Ann. UNIDROIT*, 1967-68, t. II, pp. 147-160

PRATS, G.D., *Estudios de Derecho comercial comparado en las Américas. Posibles soluciones a dificultades legales conflictivas en el comercio interamericano*, Buenos Aires, Depalma, 1986

Proyecto de Código procesal civil modelo, Valparaíso, Edeval, 1989 (Colección jornadas académicas, vol. 10)

Proyecto de ley uniforme de títulos valores para América Latina, Buenos Aires, INTAL, 1971

Reforma tributaria para América Latina. Modelo de Código Tributario, Washington, D.C., Unión Panamericana, 1967

Régimen de la transferencia de tecnología en los países de América Latina. Textos legales y procedimientos administrativos, Buenos Aires, BID/INTAL, 1977 (La publicación se ha ido actualizando con el nombre de *Régimen jurídico de la transferencia de tecnología en los países de la ALADI*)

RICUPERO, R., "Tratado de Cooperação Amazônica", *Rev. Inf. Leg. (Brasilia)*, vol. 21, núm. 81 supl., 1984, pp. 197-212 (textos: 661-685)

SALOMAO FILHO, C. y SAMTLEBEN, J., "Der Südamerikanische Gemeinsame Markt - Eine rechtliche Analyse des MERCOSUR-", *WM Zeitschrift für Wirtschafts und Bankrecht*, vol. 46, 1992, pp. 1345-1352 y 1385-1392

SCHIPANI, S. y VACCARELLA, R. (dirs.), *Un 'Codice tipo' di procedura civile per l'America Latina. Atti del Congresso Internazionale (Roma, 26/28 settembre 1988)*, Padua, Cedam, 1990

STERN, D.S., "The Judicial Tribunal of the Cartagena Accord and Legal Unification in South America", *Liber Memorialis François Laurent*, Bruselas, E. Story, 1989, pp. 1073-1082

VELA M., C., *Desarrollo e integración en América Latina*, Madrid, Selecciones Gráficas, 1968

VIEIRA, M.A., "La Asociación latinoamericana de libre comercio y el Derecho privado internacional", *Anuario I.H.L.A.D.I.*, núm. 2, 1963, pp. 176-186

--- "La uniformidad del Derecho en los países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio", *Ann. UNIDROIT 1967-1968 -L'unification du droit*, t. II, pp. 161-171

--- "El Derecho internacional penal, en el Sistema interamericano, con especial referencia a los nuevos desarrollos que cabría esperar en este plazo hacia el futuro", en F. Orrego Vicuña y J. Irigoin Barrenne (dirs.), *Perspectivas del Derecho internacional contemporáneo (Experiencias y visión de América Latina)*, vol. 3, Santiago (Chile), Instituto de Estudios Internacionales, 1981, pp. 146-164

VILLAGRAN KRAMER, F., "Controles de legalidad e impugnación de los actos de los organismos de la integración centroamericana", *Der. integr.*, núm. 4, 1969, pp. 141-155

VILLELA, A.M^a, "O Tratado da Bacia do Prata", *Rev. Inf. Leg. (Brasilia)*, vol. 21, núm. 81 supl., 1984, pp. 147-176 (textos: 619-660)

VV.AA., *El arbitraje comercial en Iberoamérica*, Madrid, Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1982

VV.AA., *La integración latinoamericana*, Buenos Aires, INTAL, 1965

WINIZKY, I., "Le projet de loi uniforme de titres négociables pour l'Amérique latine", *Rev. int. dr. comp.*, 1971, pp. 331-341

WITKER V.J., "Las bases jurídicas del Tratado Trilateral de Comercio", *Rev. Der. Priv. (México)*, vol. 2, núm. 5, 1991, pp. 359-368

IX. METODO COMPARATIVO Y FAMILIAS JURIDICAS

AGOSTINI, E., *Droit comparé*, París, Presses universitaires de France, 1988

ANCEL, M., *Utilité et méthodes du droit comparé. Eléments d'introduction générale à l'étude comparative des droits*, Neuchatel, Éditions Ides et Calendes, 1971

--- "Quelques considérations sur les buts et les méthodes de la recherche juridique comparative", en M. Rotondi (dir.), *Inchieste di diritto comparato*, Milán-Nueva York, Cedam-Oceana, 1973, pp. 1-13

--- "Le problème de la comparabilité et la méthode fonctionnelle en droit comparé", *Mélanges en l'honneur d'Imre Zajtay*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1982, pp. 1-6

ASCARELLI, T., "Función del Derecho comparado en la interpretación del Derecho y metodología del Derecho comparado", *Rev. Inst. Der. Comp.*, núm. 1, 1953, pp. 19-37

BALOGH, E., "Le rôle du droit comparé dans le droit international privé", *R. des C.*, t. 57 (1936-III), pp. 571-728

BARO PAZOS, J., *La codificación del Derecho civil en España (1808-1889)*, Santander, Univ. de Cantabria, 1993

BATIFFOL, H., "Droit comparé, droit international privé et théorie générale du droit", *Rev. int. dr. comp.*, 1970, pp. 661-674

--- "Les apports du droit comparé au droit international privé", *Choix d'articles*, París, L.G.D.J., 1976, pp. 113-123

BEVILAQUA, C., *Resumo das lições de legislação comparada sobre o direito privado*, 2ª ed., Bahía, José Luis de Fonseca Magalhaes, 1897

BLAGOJEVIC, B., "La méthode comparative juridique", en M. Rotondi (dir.), *Inchieste di diritto comparato*, Milán-Nueva York, Cedam-Oceana, 1973, pp. 15-40

CASTAN TOBEÑAS, J., *Reflexiones sobre el Derecho comparado y el método comparativo*, Madrid, Reus, 1957

CASTAN VAZQUEZ, J. Mª, *La influencia de la literatura jurídica española en las codificaciones americanas*, Madrid, Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, 1984 (discurso)

--- "La influencia de García Goyena en las codificaciones americanas", *Homenaje al Profesor Juan Roca Juan*, Murcia, Univ. de Murcia, 1989, pp. 153-161

CATALANO, P., "Derecho romano y países latinoamericanos", *R.G.L.J.*, t. CXXVIII, 1979, pp. 637-640

--- "Sistemas jurídicos. Sistema jurídico latino-americano y Derecho romano", *R.G.L.J.*, t. CXXXI, 1982, pp. 161-178

CONSTANTINESCO, L.-J., *Tratado de Derecho comparado*, vol. I (*Introducción al Derecho comparado*), trad., Madrid, Tecnos, 1981

--- *Traité de droit comparé*, t. II (*La méthode comparative*), trad., París, L.G.D.J., 1974; t. III (*La science des droits comparés*), París, Economica, 1983

DAVID, R., *Tratado elemental de Derecho civil comparado*, trad., Madrid, Edit. Revista de Derecho Privado, 1953

--- "L'originalité des droits de l'Amérique latine", *Le droit comparé. Droits d'hier, droits de demain*, París, Economica, 1982, pp. 161-173

--- y JAUFFRET-SPINOSI, C., *Les grands systèmes de droit contemporains*, 9ª ed., París, Dalloz, 1988

EICHLER, H., "Codificación de Derecho Civil y Teoría de los Sistemas de Derecho (Algunas consideraciones acerca de un futuro sistema del Derecho Civil)", *Rev. Fac. Der. Univ. Sao Paulo*, vol. 68-2, 1973, pp. 229-256

FARNSWORTH, A.E., "Looking in from Outside your Garden: Another View of Comparative Law", *Perméabilité des ordres juridiques. Rapports présentés à l'occasion du colloque-anniversaire de l'Institut suisse de droit comparé*, Zurich, Schulthess Polygraphischer, 1992, pp. 413-427

FERNANDEZ SESSAREGO, C., "Comparación jurídica y unidades del sistema jurídico latinoamericano", *Rev. Der. y Cs. Pol.*, vol. 42, 1978, pp. 43-50

FROMONT, M., *Les grands systèmes de droit contemporains*, París, Dalloz, 1987

GLENDON, M.A., GORDON, M.W. y OSAKWE, Ch., *Comparative Legal Traditions in a Nutshell*, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1982

GROSSFELD, B., *The Strength and Weakness of Comparative Law*, trad., Oxford, Clarendon Press, 1990

GUTTERDIDGE, H.C., *Droit comparé*, trad., París, L.G.D.J., 1953

GUZMAN BRITO, A., "Puntos de orientación para el estudio histórico de la fijación y codificación del Derecho en Iberoamérica", *R.G.L.J.*, 1983, pp. 3-22

IGLESIAS, R. y MORINEAU, M., "La influencia del Derecho romano en el Derecho civil mexicano: los códigos civiles de 1870, 1884 y 1928", *Rev. Der. Priv. (México)*, núm. 7, 1992, pp. 51-63

JAYME, E., "Rechtsvergleichung im internationalen Privatrecht -Eine Skizze-", *Festschrift Fritz Schwind zum 65. Geburtstag*, Viena, Manzsche Verlags und Universitäts buchhandlung, 1978, pp. 103-114

JUSTO, A.M., "El Derecho comparado y la formación de una conciencia jurídica interamericana", *La Ley (Argentina)*, t. 19, 1940, pp. 102-104 (discurso)

KAHN, F., "Rôle, fonction et méthode du droit comparé dans le domaine du droit international privé", *Bull. soc. lég. comp.*, t. 29, 1900, pp. 406-416

KOKKINI-IATRIDOU, D., "Some Methodological Aspects of Comparative Law", *N.I.L.R.*, vol. XXXIII, 1986, pp. 143-194

LIMPENS, J., "L'étude du droit comparé envisagée comme moyen de rechercher les matières susceptibles d'unification sur le plan international", *Rev. dr. int. dr. comp.*, 1958, pp. 88-98

--- y VAN DER GUCHT, J., "Inventaire critique des matières qui ont fait l'objet de tentatives d'unification du droit dans les pays de Benelux", *Rev. dr. int. dr. comp.*, 1962, pp. 81-103

MAEKELT, T.B. de, "Reflexiones sobre Derecho comparado", *Libro homenaje a la memoria de Joaquín Sánchez Covisa*, Caracas, Univ. Central de Venezuela, 1975, pp. 217-244

MALMSTRÖM, A., "The System of Legal Systems. Notes on a Problem of Classification in Comparative Law", *Scandinavian Studies in Law*, vol. 13, 1969, pp. 127-149

MARIN LOPEZ, A., "La función del Derecho comparado y del Derecho uniforme en Derecho internacional privado", *Anuario I.H.L.A.D.I.*, núm. 2, 1963, pp. 161-171

MARKESINIS, B., "Comparative Law - A Subject in Search of an Audience", *Modern L. Rev.*, vol. 53, 1990, pp. 1-21

MARTINEZ PAZ, E., *Introducción al Derecho civil comparado*, reimp., Buenos Aires, Univ. de Buenos Aires - Instituto de Derecho comparado, 1960

von MEHREN, A.T., "L'apport du droit comparé à la théorie et à la pratique du droit international privé", *Rev. int. dr. comp.*, 1977, pp. 493-500

--- "The role of comparative law in the practice of international law", *Festschrift für Karl H. Neumayer zum 65. Geburtstag*, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1985, pp. 479-486

MERRYMAN, J.H., "Fines, objeto y método del Derecho comparado", *Bol. mex. der. comp.*, núms. 25-26, 1976, pp. 65-92

--- "Modernización de la ciencia jurídica comparada", *Bol. Mex. Der. Comp.*, núm. 46, 1983, pp. 67-92

MOISSET de ESPANES, L., "La codificación española y su influencia en el Código civil argentino", *A.D.C.*, t. XLIII, 1990, pp. 713-735

de los MOZOS, J.L., "Perspectivas y método para la comparación jurídica en relación con el Derecho privado iberoamericano", *R.D.P.*, t. LX, 1976, pp. 773-782

--- "Algunos aspectos de la influencia hispánica en el Código civil de Andrés Bello", *R.G.L.J.*, 1978, pp. 437-467

NEUMAYER, K.H., "Fremdes Recht aus Bürcchen, fremde Rechtswirklichkeit und die funktionelle Dimension in den Methoden der Rechtsvergleichung", *RechtsZ.*, vol. 34, 1970, pp. 411-426

PALMERO, J.C., "Unidad del Derecho privado latinoamericano", *Rev. der. com. ob.*, núm. 111, vol. XIX, 1986, pp. 379-403

REYNTJENS, F., "Note sur l'utilité d'introduire un système juridique 'pluraliste' dans la macro-comparaison des droits", *R.D.I.D.C.*, 1991-1, pp. 41-50

RIGAUX, F., "Science comparative et droit positif", *Festschrift für Karl H. Neumayer zum 65. Geburtstag*, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1985, pp. 503-520

RODIÈRE, R., *Introduction au droit comparé*, París, Dalloz, 1979

RODRIGUEZ RAMOS, M., "Visión de conjunto del Derecho de América Latina", *R.G.L.J.*, 1960, pp. 7-27

ROZMARYN, S., "Les grandes controverses du droit comparé", en M. Rotondi (dir.), *Inchieste di diritto comparato*, Milán-Nueva York, Cedam-Oceana, 1973, pp. 577-591

SACCO, R., *Introduzione al diritto comparato*, 4ª ed., 1ª reimp., Turín, G. Giappichelli Editore, 1990

SCHIPANI, S., "Nota introduttiva", *Studi Sassaresi*, vol. V (Diritto romano, codificazioni e unità del sistema giuridico latinoamericano), Milán, Giuffrè, 1981, pp. VII-XXXV

--- "Dal diritto romano alle codificazioni latinoamericane: l'opera di A. Teixeira de Freitas", *Studi Sassaresi*, vol. V (Diritto romano, codificazioni e unità del sistema giuridico latinoamericano), Milán, Giuffrè, 1981, pp. 589-607

SCHMIDT, F., "The Need for a Multi-Axial Method in Comparative Law", *Festschrift für Konrad Zweigert*, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1981, pp. 525-536

SCHNITZER, A.F., *De la diversité et de l'unification du droit. Aspects juridiques et sociologiques*, Basilea, Verlag für Recht und Gesellschaft Ag., 1946

SEGAL, R., PINTO, M. y COLAUTTI, C.E., "Aperçu sur les systèmes juridiques de l'Amérique du Sud", *R.D.I.D.C.*, 1988, pp. 105-133

SMITH, J.C., "El método comparativo en el Derecho internacional privado", *Derecho Comparado*, núm. 4, 1980, pp. 69-83

STANZIONE, P., "Considérations au sujet des méthodes du droit comparé", *Rev. int. dr. comp.*, 1973, pp. 873-885

STRÖMHOLM, S., "Rechtsvergleichung und Rechtsangleichung. Theoretische Möglichkeiten und praktische Grenzen in der Gegenwart", *RechtsZ*, vol. 56, 1992, pp. 611-622

TERCIER, P., "La perméabilité des ordres juridiques. Rapport introductif", *Perméabilité des ordres juridiques. Rapports présentés à l'occasion du colloque-anniversaire de l'Institut suisse de droit comparé*, Zurich, Schulthess Polygraphischer, 1992, pp. 11-30

UJLAKI, N., "International Unification of Law. Reflections on Adolf F. Schnitzer's De la diversité et l'unification du droit", *Liber Amicorum Adolf F. Schnitzer*, Ginebra, Librairie de l'Université, 1979, pp. 483-499

VALLINDAS, P.G., "Droit uniforme international et droit comparé", *Ius et lex. Festschrift Max Gutzwiller*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1959, pp. 189-199

VAN DER GUCHT, J., *Matières susceptibles de faire l'objet d'un mouvement d'unification du droit*, Bruselas, Centre Universitaire de droit comparé, 1962

VAN DER HELM, A.J. y MEYER, V.M., *Comparer en droit. Essai Méthodologique*, Estrasburgo, Cerdic-Publications, 1991

VILLELA, A.M.^a, "Direito romano e sistema jurídico latino-americano", *Rev. Inf. Leg. (Brasília)*, vol. 18, núm. 70, 1981, pp. 115-124

YNTEMA, H.E., "Comparative Research and Unification of Law", *Mich. L. Rev.*, vol. 41, 1942, pp. 261-268

ZAPHIRIOU, G.A., "Use of Comparative Law by the Legislator", *A.J.C.L.*, vol. 30 (Supp.), 1982, pp. 71-95

ZWEIGERT, K., "Méthodologie du droit comparé", *Mélanges offerts à J. Maury*, t. I, París, Dalloz & Sirey, 1960, pp. 579-596

--- "Zur Lehre von den Rechtskreisen", *XXth Century Comparative and Conflicts Law. Legal Essays in honor of Hessel R. Yntema*, Leyden, 1961, pp. 42-55

--- "Des solutions identiques par des voies différentes. Quelques observations en matière de droit comparé", *Rev. int. dr. comp.*, 1966, pp. 5-18

--- y KÖTZ, *Introduction to Comparative Law*, vol. I (*The Framework*), 2^a ed. rev., trad., Oxford, Clarendon Press, 1987

--- y SIEHR, K., "Jhering's Influence on the Development of Comparative Legal Method", *A.J.C.L.*, vol. 19, 1971, pp. 215-231